Jeremy D. Popkin

El nacimiento de un mundo nuevo

Historia de la Revolución francesa



Galaxia Gutenberg


Jeremy D. Popkin
El nacimiento
de un mundo nuevo
Historia de la Revolución francesa
Galaxia Gutenberg



Jeremy D. Popkin ocupa la cátedra William T. Bryan de Historia en el Universidad de Kentucky. Es autor de muchos libros, entre los que destacan *You Are All Free* y *A Short History of the French Revolution*. Vive en Lexington, Kentucky.

Los principios de la Revolución francesa siguen siendo la única base posible para una sociedad justa, incluso si, después de más de doscientos años, son más controvertidos que nunca. En *El nacimiento de un mundo nuevo*, Jeremy D. Popkin ofrece un relato fascinante de la revolución que coloca al lector en el meollo de los debates y la violencia que condujo al derrocamiento de la monarquía y al establecimiento de una nueva sociedad. Conocemos a Mirabeau, Robespierre y Danton, en toda su brillantez y ánimo de venganza; presenciamos la fuga fallida y la ejecución de Luis XVI; vemos mujeres exigiendo igualdad de derechos y esclavos negros arrancando su libertad a revolucionarios que dudaban en actuar según sus propios principios; y asistimos al surgimiento de Napoleón de las cenizas del Reino del Terror.

Basado en décadas de estudios, *El nacimiento de un mundo nuevo* se erigirá como el libro definitivo sobre la Revolución francesa y el inicio del mundo en que vivimos.

Jeremy D. Popkin

El nacimiento de un mundo nuevo

Historia de la Revolución francesa

Traducción de
Ana Bustelo Tortella

Galaxia Gutenberg

Edición al cuidado de María Cifuentes

Título de la edición original: *A New World Begins. The History of the French Revolution*
Traducción del inglés: Ana Bustelo Tortella

Publicado por:
Galaxia Gutenberg, S.L.
Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª
08037-Barcelona
info@galaxiagutenberg.com
www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: septiembre de 2021

Imagen de portada:
El asalto a la bastilla, 14 de julio de 1789,
Anónimo. © Album / akg-images

Conversión a formato digital: Maria Garcia
ISBN: 978-84-18526-85-5

A mis padres, Richard H. Popkin (1923-2005)
y Juliet Popkin (1924-2015), que me transmitieron el amor
por el aprendizaje, y a mi abuela Zelda Popkin (1898-1983),
que hizo que quisiera ser escritor

La fuerza de los acontecimientos nos ha llevado, quizá, a hacer cosas que no habíamos previsto.

LOUIS-ANTOINE DE SAINT-JUST, 1794

Índice

Prefacio

1. Dos vidas francesas en el antiguo régimen
2. La monarquía, los *philosophes* y el público
3. La monarquía a la deriva
4. «Todo debe cambiar»
5. Una nación en armas
6. La Revolución en la sala del Juego de Pelota: de los Estados Generales a la Asamblea Nacional
7. Una revolución del pueblo
8. Del Gran Miedo a la Declaración de Derechos
9. Redacción de una constitución y conflicto
10. Un mundo nuevo dividido
11. Un rey a la fuga y una crisis constitucional
12. Una segunda revolución
13. Una república que nació en una crisis
14. La Revolución al borde del abismo
15. El punto álgido del Terror
16. El nuevo comienzo de la República
17. La República cuestionada
18. De fructidor a brumario
19. La muerte lenta de la República

Epílogo
Agradecimientos
Notas

Prefacio

¿Por qué una nueva historia de la Revolución francesa?

A finales de 1793, un impresor de Lexington, un asentamiento fronterizo americano en Kentucky –tan lejos de la Revolución francesa como cualquier punto del mundo occidental–, publicó *El almanaque de Kentucky, del año del Señor 1794*. Además del calendario y el pronóstico del tiempo para el siguiente año, el texto destacado era un poema, «La plegaria americana por Francia». El poeta anónimo se refería a la deidad como el «Protector de los derechos del hombre» y le suplicaba así: «Haz que la raza elegida se regocije, / y conceda que los REYES no puedan reinar más». Su mensaje era claro: el resultado de la Revolución francesa importaba, no sólo a los «héroes valientes de Francia, a sus gobernantes justos», sino a todos aquellos que en el mundo entero creían que los seres humanos estaban dotados de derechos individuales y que era necesario derrocar a los gobernantes arbitrarios. Sin embargo, al mismo tiempo, las palabras del poeta mostraban lo difícil que era descifrar a distancia la agitación que había comenzado en Francia en 1789. En el momento que el autor de Kentucky pedía la protección de Dios para la Revolución, los revolucionarios estaban suprimiendo el culto religioso en Francia, mientras él alababa la justicia de sus acciones, su Tribunal Revolucionario estaba forzando la definición de justicia hasta sus límites.[1]

Más de doscientos años después de los dramáticos eventos que comenzaron en 1789, la historia de la Revolución francesa sigue siendo relevante para todos los que creen en la libertad y la democracia. Cada vez que se producen movimientos por la libertad en cualquier parte del mundo, sus partidarios afirman estar siguiendo el ejemplo de los parisinos que

asaltaron la Bastilla el 14 de julio de 1789. Cualquiera que lea las palabras de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, publicada en agosto de 1789, reconocerá inmediatamente los principios básicos de libertad individual, igualdad jurídica y gobierno representativo que definen las democracias modernas. Sin embargo, cuando pensamos en la Revolución francesa, también recordamos los violentos conflictos que enfrentaron a los que participaron en ella y las ejecuciones en la guillotina. Asimismo, recordamos el ascenso al poder del carismático general cuya dictadura acabó con el movimiento. Comprender la Revolución francesa hoy, desde mi estudio en Lexington, es tan difícil como lo fue para el autor anónimo de *El almanaque de Kentucky*.

En los años setenta del siglo XX, cuando empezaba mi carrera como académico y profesor, todavía estaba en el ambiente el recuerdo de los actos de protesta estudiantil en los campus universitarios de todo el mundo en la década anterior. Esos movimientos habían despertado el interés por la Revolución francesa, que parecía ser, junto con la Revolución rusa de 1917, uno de los grandes ejemplos de cómo poner fin de forma exitosa a una sociedad opresiva. Es irónico que la interpretación que se hacía de la Revolución francesa en esos años de agitación fuera, en gran medida, inamovible: prácticamente todos los historiadores estaban de acuerdo en que había sido la consecuencia de las frustraciones de una clase «burguesa» que estaba emergiendo y que estaba decidida a desafiar un viejo orden «feudal» que obstaculizaba el progreso político y económico.

En 1989, cuando participé –junto con otros investigadores de todas partes del mundo– en numerosos actos de conmemoración del bicentenario de la Revolución francesa, la situación había cambiado por completo. Los regímenes comunistas de Europa del Este se estaban tambaleando y el hecho de que la Revolución francesa hubiera inspirado a los soviéticos era una razón para preguntarse si la conmoción de Francia había traído consigo más excesos totalitarios que progreso social. Los polémicos ensayos del dinámico historiador francés François Furet desafiaron la ortodoxia que

había dominado el estudio de la Revolución; entre otras cosas, apeló a los estudiosos del mundo angloparlante para que trataran el asunto desde otra perspectiva.

Las décadas transcurridas desde 1989 han suscitado todavía más preguntas sobre la Revolución francesa. En 1789, los franceses proclamaron que «todos los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos», pero ¿qué pasa con las mujeres? Al comienzo de la Revolución americana, la esposa de John Adams, Abigail, le instó en una carta a «recordar a las damas, a ser más generoso y a pensar más en ellas que sus antepasados».[2] En la Francia revolucionaria, las cuestiones sobre los derechos de la mujer y las relaciones entre los sexos que aún hoy nos preocupan se debatieron abiertamente en la prensa, en los clubes políticos e incluso en la legislatura nacional. Mary Wollstonecraft, reconocida como la precursora del feminismo moderno, escribió su novedosa *Vindication of the Rights of Women (Reivindicación de los derechos de la mujer)* en el París revolucionario, pero un crítico francés, al hacer una reseña, comentó que las francesas ya habían demostrado que podían hacer más incluso de lo que Wollstonecraft imaginaba.[3] Algunas de las mujeres de la época –la dramaturga y escritora de panfletos Olympe de Gouges, la novelista y anfitriona de un salón literario Madame de Staël, la política entre bastidores Madame Roland y la infeliz reina María Antonieta– se convirtieron en destacadas figuras públicas y dejaron abundante documentación sobre su forma de pensar. Otras participaron en revueltas o ejercieron su influencia a través de sus quejas diarias sobre el precio del pan. Bajo las nuevas leyes de matrimonio y divorcio, algunas mujeres acogieron con agrado la posibilidad de cambios en la vida familiar; otras desempeñaron un papel clave al obstaculizar los esfuerzos de los hombres revolucionarios por acabar con la Iglesia católica. Una historia de la Revolución francesa que no «recuerda a las damas» es una historia incompleta.

Actualmente, se estudian asuntos como la raza y la esclavitud durante la Revolución francesa, cuestiones a las que no se prestó atención en el pasado. En el mapa, las islas dispersas del imperio de ultramar de Francia en 1789 parecían insignificantes comparadas con las posesiones de los

británicos, los españoles y los portugueses, pero su importancia no estaba en función de su tamaño. En 1787, las colonias suministraban el 37 por ciento de los bienes importados por Francia y se llevaban el 22 por ciento de sus exportaciones. Una sola colonia francesa, Saint-Domingue (también conocida como Santo Domingo francés), la isla que ocupan hoy Haití y la República Dominicana, era la proveedora de la mitad del suministro mundial de azúcar y café. Estas ganancias procedían del trabajo de hombres y mujeres negros esclavizados. En 1789, las islas azucareras francesas del Caribe y el Océano Índico contaban con 800.000 esclavos, algo más que los 670.000 que había en los trece nuevos estados independientes de América; de hecho, el número de africanos transportados a las colonias francesas alcanzó su pico histórico justo cuando los revolucionarios proclamaban que «los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos». Las colonias y sus esclavos estaban lejos de Europa, pero preocupaban a los pensadores de Francia. La *Histoire des deux Indes (Historia de las dos Indias)* del abate Guillaume Raynal, una obra en varios volúmenes con pasajes que condenan el colonialismo y la esclavitud, fue un gran éxito de ventas en los años prerrevolucionarios. En 1788, María Antonieta autorizó la donación de un reloj de oro para «Jean-Pierre, el mulato de la señora de Boisnormand», compañero de juegos de su hijo.[4] La cuestión de cómo reconciliar los principios de la libertad con la importancia económica de las colonias supusieron un quebradero de cabeza para los líderes revolucionarios a lo largo de la década de 1790. Tras mucha polémica, votaron a favor de la abolición de la esclavitud y de la concesión de plenos derechos a personas de todas las razas, pero esto no ocurrió hasta después de enfrentarse a la mayor rebelión de esclavos de la historia, el comienzo de una «Revolución haitiana» que terminó en 1804 con la creación de la primera nación negra independiente de América. Una historia de la Revolución francesa que da a este tema –previamente olvidado– la atención que merece cambia nuestra comprensión del significado del movimiento.

Los acontecimientos de las primeras décadas del siglo XXI, por los que se han puesto en duda las instituciones políticas tradicionales, nos remiten también a la Revolución francesa. Las protestas de la época de la

Revolución contra la globalización económica y las consecuencias del libre comercio a menudo se parecen de una forma inquietante a las reivindicaciones de los movimientos actuales. Como sostenían que el gobierno debía representar la voluntad del pueblo, los revolucionarios franceses fueron los precursores tanto de la democracia política moderna como del populismo antielitista moderno, y al estudiar los acontecimientos del decenio de 1790 en Francia se ven claramente los conflictos que pueden surgir entre ambos. Mientras el mundo de hoy intenta hacer frente al resurgir del nacionalismo militante, es necesario volver a analizar la forma en que la Revolución francesa otorgó a la palabra «nación» una fuerza explosiva. Los violentos debates de la Revolución sobre el lugar que debe ocupar la religión en la sociedad y la poderosa resistencia a sus esfuerzos por imponer valores seculares, también prefiguran los conflictos de nuestro tiempo. Los participantes en la Revolución francesa, igual que la gente de hoy, notaron que estaban viviendo una transformación de los medios de comunicación; la proliferación de periódicos y panfletos, por ejemplo, hizo que pareciera que el tiempo se había acelerado, y las dificultades para distinguir entre la verdad política y los falsos rumores eran una constante. Por último, en una época en que la «disrupción» se ha convertido en un programa político, conocer el experimento de la Revolución francesa de demoler deliberadamente un orden existente nunca ha sido más relevante. Nuestra propia experiencia de disrupción también da nueva relevancia a los esfuerzos de los revolucionarios, en los cinco años que pasaron desde el final del Terror hasta el ascenso de Napoleón, para estabilizar la sociedad sin echar a perder los logros positivos del movimiento.

La Revolución francesa se desarrolló en un momento en que el gusto del público se inclinaba por las obras melodramáticas y las novelas que trataban el duro enfrentamiento entre el bien y el mal. Las historias de la Revolución a menudo repiten este patrón, incluso cuando los autores no están de acuerdo sobre qué figuras y movimientos deben considerarse los héroes y cuáles los villanos. Mi itinerario personal como estudioso de la Revolución

me ha llevado a buscar una visión equilibrada de los hombres y mujeres de la época revolucionaria. Mis primeros proyectos de investigación sobre la historia revolucionaria francesa los dediqué a escritores y periodistas que se oponían a la rebelión. Aunque nunca adopté sus filosofías conservadoras, me pareció un desafío entender por qué personas inteligentes y elocuentes argumentaban con tanto ahínco contra los ideales de libertad e igualdad que yo aceptaba como algo evidente. A medida que ampliaba mis investigaciones sobre el periodismo de la época revolucionaria, tuve que relacionarme con los escritores que estaban a favor del movimiento o que incluso pensaban que no había sido lo suficientemente contundente, y lidiar con la paradoja de que los más ruidosos defensores de la democracia durante la Revolución, como Jean-Paul Marat y el hombre tras el seudónimo Père Duchêne, eran también los más exaltados defensores de la violencia explícita.

A mitad de mi carrera académica, me encontré explorando los dramáticos acontecimientos que llevaron a los revolucionarios franceses a su histórica declaración, en 1794, de que la esclavitud era una violación inaceptable de los derechos humanos, y que las personas negras de sus colonias debían ser ciudadanas francesas de pleno derecho. Descubrí que, aunque desde un punto de vista se podía afirmar que la Revolución era un drama en blanco y negro, no se trataba de una simple confrontación entre héroes y villanos. Los reformadores abolicionistas comprendían que la esclavitud y los prejuicios raciales eran algo injusto y, sin embargo, muchos de ellos estaban tan convencidos de que los negros no estaban preparados para la libertad que dudaron en sacar lo que ahora parecen las conclusiones obvias de sus propios principios. Los negros de las colonias francesas que se rebelaron contra la opresión no siempre vieron a los revolucionarios franceses como aliados. Toussaint Louverture, la principal figura de la insurrección que finalmente llevó a la independencia a la mayor y más valiosa colonia de ultramar de Francia, dijo a los franceses que él estaba luchando por «otra libertad», que no era la que los revolucionarios estaban dispuestos a ofrecer.

Es imposible describir en términos simples a casi ninguno de los cientos de personajes que los lectores encontrarán en estas páginas. Luis XVI y María Antonieta no podían comprender los principios revolucionarios de libertad e igualdad, pero estaban comprometidos de verdad con lo que creían que era su deber de defender las instituciones establecidas de la nación. Destacados líderes revolucionarios, desde Mirabeau a Robespierre, abogaron por principios admirables, pero también aprobaron medidas con un alto costo humano en nombre de la Revolución. Los hombres y mujeres comunes fueron capaces tanto de actos de valor, como el asalto a la Bastilla, como de actos de crueldad inhumana, incluyendo las matanzas de septiembre de 1792. Ciertamente, todos los participantes podrían haber estado de acuerdo al menos en una cosa: la verdad de las palabras de un joven legislador revolucionario, Louis-Antoine de Saint-Just, cuando afirmó que «la fuerza de los acontecimientos nos ha llevado, quizá, a hacer cosas que no habíamos previsto».[5]

El hecho de que la Revolución francesa siga siendo relevante hoy día no significa que los eventos de 1789 sean simples o que puedan ofrecer respuestas claras a las preguntas de nuestros días. La nueva forma de ver algunas cuestiones, como el papel que tuvo la mujer en la Revolución, los debates de los revolucionarios sobre la raza y la esclavitud, y la forma en que la política revolucionaria prefiguró los dilemas actuales de la democracia, pueden darnos una visión diferente del movimiento, pero el mensaje de la Revolución y sus consecuencias siguen siendo ambiguos. La libertad y la igualdad significaban cosas muy distintas para diferentes personas en ese momento, como sigue ocurriendo desde entonces. Una de las lecciones más relevantes de la Revolución, primero impulsada por el crítico conservador Edmund Burke, y articulada con más fuerza por el gran teórico político del siglo XIX Alexis de Tocqueville, es que las acciones tienen, inevitablemente, consecuencias no deseadas. Sin embargo, una lección igual de importante es que a veces es necesario luchar por la libertad y la igualdad, a pesar de los riesgos que conlleve el conflicto. El respeto por los derechos individuales inherentes a los propios principios de la Revolución nos obliga a reconocer la humanidad de quienes se opusieron

a ella, y también a tener en cuenta las opiniones de quienes pagaron un precio por quejarse de que el movimiento no siempre cumplía sus propias promesas. A pesar de sus defectos, la Revolución francesa sigue siendo una parte vital de la herencia de la democracia.

1

Dos vidas francesas en el antiguo régimen

El 21 de enero de 1793, Luis XVI, rey de Francia y Navarra, heredero de catorce siglos de monarquía francesa, subió los escalones del patíbulo de París y murió en la guillotina. Su muerte se convirtió en el símbolo del victorioso movimiento revolucionario que había comenzado con la toma de la Bastilla y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Entre los que vieron pasar el carruaje del rey camino de su ejecución había miles de plebeyos de París: artesanos, trabajadores y comerciantes cuyo ferviente entusiasmo por las promesas de libertad e igualdad había permitido que ese movimiento derribara el viejo orden en Francia. Unos años más tarde, un vidriero que se llamaba Jacques-Louis Ménétra se convertiría en una de las pocas personas corrientes que escribiría el relato de su propia vida antes y durante la Revolución.

Las experiencias que cuenta Ménétra en sus memorias lo sitúan a un lado del abismo que había entre los dos mundos –el de la jerarquía y el privilegio en el que se crio Luis XVI y el de la gente común– que chocaron con tanta violencia durante la Revolución francesa. Lo que vivió Ménétra en su niñez le había preparado, si no para hacer una revolución, sí para entender las posibilidades que habría en un mundo en el que los individuos pudieran tomar decisiones importantes sobre su vida y esperar que se les tratara como iguales. A Luis XVI, en cambio, le habían enseñado desde pequeño que la existencia de la sociedad dependía de que las personas aceptaran el rango que se les asignaba por nacimiento. Luis XVI no siempre disfrutó de la vida estrictamente programada que le había tocado; es posible que soñara con vivir de una forma más libre, más parecida a la de Ménétra.

Sin duda, su esposa, la reina María Antonieta, sí lo había imaginado: se hizo construir un pueblo artificial, el Hameau, en los terrenos de Versalles, donde ella y sus compañeros jugaban a ser campesinos. Sin embargo, ni el rey ni la reina podían imaginar una sociedad en la que los individuos fueran libres de cambiar la situación en la que habían nacido. Lo que les llevó a la muerte en 1793 fue su incapacidad para aceptar los valores que sus antiguos súbditos habían empezado a ver como naturales y justos.

Luis Augusto, el futuro Luis XVI, nació en 1754 y fue el símbolo viviente de los privilegios hereditarios y las desigualdades sociales que los revolucionarios se habían propuesto derribar. Desde el momento de su nacimiento, su vida estuvo marcada por su ascendencia. Su infancia transcurrió en el palacio de Versalles, que su famoso tatarabuelo, Luis XIV, había construido para mostrar la grandeza de la monarquía francesa. Allí aprendió las complejidades que conllevaba su posición desde una edad temprana. Tenía un hermano mayor, el duque de Borgoña, y al pequeño Luis Augusto se le recordaba constantemente que, algún día, este hermano sería el rey, y él, su súbdito, de modo que su deber sería obedecerle. Desde que era niño, Luis aprendió a desempeñar su papel en los rituales de la corte, vestido con ornamentados trajes que enfatizaban su rango. Veía poco a sus padres, como era habitual en los hogares aristocráticos. Las tareas de crianza estaban en manos de un personal bajo el mando de la institutriz real, que tenía predilección por el hermano mayor, el presunto heredero al trono, y por los menores, el conde de Provenza y el conde de Artois, todos más alegres y dicharacheros que él.

En la burbuja de Versalles en la que se crio el futuro Luis XVI, los adultos con los que se relacionaba o bien eran nobles titulados, muy conscientes de cualquier mínima gradación de estatus entre ellos, o eran sirvientes cuya actitud solícita servía para enfatizar el sentido de importancia de sus amos. Siglos antes, los duques y barones habían sido guerreros que gobernaban sus propios feudos locales. A lo largo de los siglos, los antepasados de Luis XVI habían privado a los nobles de su

independencia política, pero los miembros de su casta, con los que el joven príncipe se trataba en Versalles, ejercían su influencia como cortesanos y desde sus puestos bien remunerados en la administración real y en la Iglesia católica. Los cortesanos de Versalles formaban parte de una red cuyos miembros estaban dispersos por todo el reino, unidos por su estatus jurídico y social. Para asegurar la lealtad total de sus servidores más cercanos, los monarcas como Enrique IV y Luis XIV recompensaban a los jueces y a los altos funcionarios otorgándoles un título nobiliario, aunque fueran de origen plebeyo. Esto creaba una división entre la nobleza de espada, cuyos antepasados habían sido guerreros, y la nobleza de toga, que había obtenido su rango a través del servicio al Estado.

Se valoraba mucho el estatus de noble en la sociedad francesa porque traía consigo importantes privilegios. Los nobles estaban exentos de muchos de los impuestos más onerosos, por ejemplo, la *taille*, o talla, el principal impuesto directo que se cobraba a los campesinos. Los puestos más prestigiosos del gobierno y de la Iglesia estaban reservados para los nobles; también lo estaban unas plazas determinadas en las academias reales y casi todos los puestos de oficiales del ejército y la marina. Tenían derecho a llevar la espada al cinto en público y podían dar un toque de distinción a su estatus añadiendo el nombre de sus posesiones a sus apellidos con la partícula noble «de». Contaban con asientos reservados en sus iglesias locales y en ceremonias públicas, y tenían el derecho exclusivo de poner veletas en sus castillos o casas solariegas. Sólo los nobles tenían derecho a cazar en el campo: podían pisotear los cultivos de los campesinos mientras perseguían ciervos y liebres. Si se los condenaba a muerte, tenían el privilegio de morir en la guillotina. Se consideraba un método de ejecución más digno que el ahorcamiento, que se reservaba para los plebeyos.

Los nobles no debían tomar parte en los sucios negocios del comercio ni en cualquier tipo de trabajo manual, para dejar constancia de que a ellos los movía el honor, no el dinero. Existían varios mecanismos por los que las familias plebeyas ricas podían acceder a la nobleza. Era un proceso que normalmente llevaba varias generaciones, pero una vez que se convertían

en *anoblis* (ennoblecidos), abandonaban la ocupación con la que habían amasado su fortuna. En teoría, se suponía que los nobles tenían que vivir de los ingresos que obtenían de sus propiedades. En la práctica, encontraron la forma de obtener beneficios del comercio y la manufactura en expansión en la Francia del siglo XVIII invirtiendo en todo tipo de empresas, desde las fábricas hasta la esclavitud. Alrededor del rey, en Versalles, había un grupo pequeño de aristócratas muy ricos, que peleaban por los puestos más deseables en la corte y por las recompensas reales. En el otro extremo estaban las familias nobles empobrecidas que poseían poco más que sus títulos y unas hectáreas de tierra, y que a menudo estaban resentidas por los favores que recibía la nobleza de la corte, siempre bien relacionada. En cualquier caso, en general, los nobles eran más ricos que los miembros más prósperos de la burguesía. La plebe vigilaba sus gastos cuidadosamente, sabía que podía perder su estatus social si no pagaba sus cuentas. Los nobles no tenían esa preocupación: su posición era inamovible y, como clase, no daban importancia alguna a la acumulación de deudas.

En su niñez, Luis daría por hecho que su vida iba a ser la de un miembro extraordinariamente privilegiado de la nobleza, pero no pensaría que iba desempeñar una posición de poder real. Sin embargo, cuando Luis tenía siete años, murió su hermano mayor y él pasó a estar segundo en la línea de sucesión, después de su padre, el Delfín. Ni siquiera el estatus real ofrecía inmunidad ante las numerosas enfermedades para las que la medicina del siglo XVIII no tenía remedio.

Luis recibió una formación intensiva de numerosos tutores, con vistas a prepararlo para las responsabilidades que iba a heredar. La religión sería un capítulo importante de su educación, en parte como reacción frente a su abuelo, el rey gobernante Luis XV, que se burlaba abiertamente de las normas de la moral católica. La amante oficial del rey cuando Luis XVI era niño, Madame de Pompadour, ejercía una enorme influencia pública en la corte. Al mismo tiempo, una larga lista de mujeres más jóvenes se dedicaba a satisfacer el insaciable apetito sexual del rey. Los padres de Luis se

aseguraron de que su hijo se formara en una atmósfera de devoción religiosa y estrictas reglas morales. Eran raras las ocasiones en que se permitía que los niños de la realeza tuvieran alguna diversión informal. Una de esas ocasiones, como recordaría años más tarde el vidriero Ménétra, fue cuando contrataron a éste, junto con otros artesanos, para reparar unas ventanas en Versalles. Por las noches, «nos subíamos a las mesas para fingir que hacíamos esgrima», recordaba Ménétra. «Nos traían a los niños para que vieran nuestras payasadas».[1]

El futuro rey se convirtió en un joven tímido que nunca se sentiría cómodo hablando en público. Su reticencia a entablar una conversación hacía que muchos subestimaran sus habilidades intelectuales, que eran considerables. A Luis le gustaba especialmente la geografía; un minucioso mapa que realizó de los alrededores de Versalles demuestra que dominaba el tema. Sin embargo, Luis XVI no tenía casi ninguna experiencia real del mundo que representaban sus mapas. Excepto por las visitas protocolarias a París y las estancias anuales de la familia en otros palacios cerca de la capital, no veía nada de lo que iba a ser su reino. Incluso después de convertirse en gobernante, sólo hizo dos breves viajes a provincias, uno para su coronación en Reims en 1775 y otro para la inauguración de nuevas instalaciones en el puerto de la ciudad normanda de Cherburgo en 1786. Nunca viajó al extranjero. Los tutores que prepararon al joven Luis XVI para sus deberes futuros apenas dedicaron tiempo a enseñarle algo sobre la población que se extendía por los territorios que estudiaba en los mapas. En sus propias notas a su hijo, dictadas casi un siglo antes, Luis XIV había observado que «cada profesión contribuye, a su manera, al sostenimiento de la monarquía», pero sólo dedicó una frase a los campesinos y una a los artesanos.[2] Luis XVI no llegó a aprender casi nada sobre esos hombres ricos y cultos –abogados, médicos, comerciantes y fabricantes, funcionarios gubernamentales de menor rango– que quizá los domingos se ponían sus mejores ropas y visitaban Versalles para admirar el esplendor del palacio y sus elegantes cortesanos. Por muy bien que les fuera en sus negocios, estos hombres, igual que los campesinos y los artesanos, seguían formando parte

del Tercer Estado, la categoría que servía de comodín para todos los súbditos, excepto los nobles con título y los miembros del clero.

El joven Luis aprendió latín, como todos los jóvenes educados en la Francia del siglo XVIII, y varios idiomas modernos. De sus padres, el severo y sombrío Delfín y la devota María Josefa, heredó el interés por la historia. A su padre le gustaba especialmente *History of Charles I (Historia de Gran Bretaña. De Carlos I a la Revolución de 1688)* del historiador británico David Hume; la historia del monarca del siglo XVII ejecutado por sus súbditos en 1649. La imagen de un rey llevado al patíbulo por sus propios vasallos se grabó en la mente del futuro Luis XVI; más tarde recomendaría el libro a su esposa, María Antonieta. En 1763, cuando recibieron a Hume en Versalles, Luis, un niño de nueve años, pronunció un breve discurso formal de bienvenida. El extenso resumen de los principios del absolutismo real francés que Luis copió para su gobernador, el duque de La Vauguyon, en su primera adolescencia, demuestra que conocía los principales logros de sus antepasados y las conclusiones que se suponía que había sacado de las numerosas crisis por las que había pasado Francia a lo largo de los siglos.

En casi todos los sentidos, la infancia del futuro Luis XVI no podía haber sido más diferente de la de su futuro súbdito Jacques Ménétra, quien le entretuvo un día con sus payasadas en Versalles. Ménétra nació en 1738 en París. Su padre era vidriero y lo más probable es que naciera en el pequeño apartamento del centro donde vivía la familia. Igual que el futuro rey, el futuro vidriero apenas vio a sus padres durante su infancia. Como era costumbre entre los artesanos de París, le adjudicaron una nodriza para que su madre pudiera volver lo antes posible a ayudar a su marido a llevar el negocio familiar. Ménétra todavía vivía con la familia de la nodriza cuando su madre murió al dar a luz a su siguiente hijo. Las familias plebeyas conocían mejor que la familia del rey los estragos que podían causar las enfermedades para las que la medicina del siglo XVIII no tenía cura. Según sus memorias, la nodriza de Ménétra trató de complementar los magros pagos que recibía por cuidarlo enseñándole «la profesión de mendigo». La

abuela de Ménétra fue a visitar a su nieto un día y se quedó horrorizada al ver que el hijo de un artesano respetable corría el riesgo de caer en una vida de pobreza. Se lo llevó a casa y lo crio hasta que tuvo once años.[3]

La infancia y la educación del futuro Luis XVI estaban estrictamente reguladas, en cambio, los primeros años de Ménétra fueron caóticos. Tenía una voz dulce y durante un tiempo cantó en el coro de la iglesia del barrio, donde podría haber recibido una educación con vistas a una posterior carrera en el clero, pero no fue capaz de adaptarse a la disciplina de la escuela y pronto regresó a casa de su abuela. Aprendió a leer y escribir –a mediados del siglo XVIII, la mayoría de los chicos de París tenían algo de escolarización, aunque sus hermanas a menudo no–, pero en sus memorias le interesaba más destacar cómo se convirtió en «uno de los pillos más conocidos del barrio».[4] Desde una edad temprana, Ménétra se adentró en el mundo laboral adulto. Del mismo modo que a Luis XVI se le preparó para la profesión familiar de rey, a Ménétra se le educó para seguir los pasos de sus antepasados.

Luis XVI estuvo muy poco expuesto a las realidades de la vida de otras personas al contrario que Ménétra, que estuvo en contacto con todos los niveles de la sociedad francesa. El oficio de vidriero le llevó a entrar en las casas de los ricos, y pasó mucho tiempo trabajando en iglesias, cuyas estructuras incorporaban más vidrio que otros edificios de la época. El conocimiento de la religión hizo del futuro rey un católico obediente; gracias a su trabajo, Ménétra conoció la Iglesia entre bastidores y esta perspectiva tuvo en él el efecto contrario. Mientras trabajaba en la abadía de Saint-Denis, donde se enterraba tradicionalmente a los reyes de Francia, descubrió que los propios monjes no sabían qué huesos de santos estaban en el relicario que mostraban a los peregrinos, y perdió la fe en la santidad de la misa católica cuando vio a un sacerdote repartiendo hostias no consagradas entre sus feligreses. «Así que nunca quise mezclarme con estos hipócritas y nunca me ha gustado su compañía», concluyó Ménétra.[5]

En sus estudios de historia, Luis XVI aprendió que él era un eslabón de una cadena de reyes que se prolongaba a lo largo de más de un milenio; Ménétra tomó nota de episodios que afectaron al pueblo llano de París, pero

que jamás aparecerían en los libros de texto del futuro rey. En sus memorias, Ménétra describe una revuelta popular que tuvo lugar en mayo de 1750, cuando él tenía doce años. Al parecer, estalló por un rumor: «Se estaban llevando a los niños pequeños, para desangrarlos; así, desaparecían para siempre y su sangre se utilizaba para bañar a una princesa que sufría una enfermedad que sólo se curaba con sangre humana».[6] La historia era falsa, pero las ganas que tenían los parisinos de creerla demostraba que el pueblo llano albergaba una profunda desconfianza en las élites que gobernaban.

Una multitud furiosa, entre la que se encontraba el padre de Ménétra, respondió al rumor atacando una comisaría de policía y quemando vivo a un presunto informante. Se sofocó la revuelta y se ejecutó a tres de los cabecillas, pero Ménétra se dio cuenta de que los plebeyos podían ejercer el poder si actuaban juntos. En 1757, poco antes de salir de París para hacer el viaje por Francia que completaría su formación como cristalero, fue testigo de un acontecimiento histórico muy diferente, uno destinado a demostrar el poder que tenía la monarquía: la tortura y ejecución de Louis Damiens, un miembro del servicio doméstico que había apuñalado a Luis XV con una navaja. Le arrancaron los brazos y las piernas, lo descuartizaron con caballos de tiro, en un procedimiento prolongado para infligir el mayor dolor posible.

Ménétra tenía dieciocho años cuando presenció esta horrible ejecución; estaba a punto de terminar el aprendizaje que le capacitaría para sus responsabilidades de adulto. En cambio, Luis XVI pasó de la infancia a la edad adulta de forma un poco más abrupta: su padre murió en 1765, convirtiendo a su hijo de once años, el Delfín, en el heredero directo al trono. A pesar de que su abuelo, Luis XV, todavía era un hombre sano, lleno de energía, en la cincuentena, el niño sabía que en cualquier momento podría verse obligado a asumir las responsabilidades del trono. Fue entonces cuando el gobernador real, el duque de La Vauguyon, decidió que el joven Luis debía hacer un resumen de doscientas páginas sobre los

principales rasgos de la monarquía francesa, un ejercicio con el que se pretendía ilustrarle para sus futuras obligaciones.

Cuando murió la madre de Luis XVI en 1767, le tocó al abuelo hacer el papel de padre. Es probable que al joven Luis le alegrara el cambio, sobre todo en algunos aspectos: su padre le tenía prohibido ir de caza; Luis XV, un cazador empedernido, enseñó a su nieto este deporte. Se convirtió en una de las grandes pasiones del futuro rey y sería el tema central del diario que empezó a llevar en 1766, cuando tenía doce años. La costumbre de llevar diarios privados para documentar los eventos de la vida apenas comenzaba a extenderse por Francia en ese momento. Algunos de los contemporáneos de Luis usaban sus diarios para describir pensamientos privados y para desarrollar un sentido de sí mismos como individuos, sin embargo, las entradas frías y poco emotivas del futuro rey dan pocas pistas sobre su personalidad. Lo que registran fielmente son los miles de ciervos, jabalíes y pájaros a los que disparó en los bosques reales que rodeaban Versalles. La caza era un privilegio reservado a la nobleza, diferenciaba a sus miembros de la gente común. La obsesión de Luis por este deporte le situó a un lado de la gran brecha que había entre los privilegiados y el Tercer Estado, al que pertenecía Ménétra.

Probablemente fue durante su adolescencia cuando Luis desarrolló otra afición que, curiosamente, tendría en común con Ménétra. El futuro rey disfrutaba trabajando con las manos. Se había contratado a un maestro artesano, que se llamaba Gamain, para enseñar al joven a hacer cerraduras, del mismo modo que Ménétra aprendió a cortar el vidrio con otros artesanos. Gamain afirmaba: «Cuando enseño el oficio a Luis XVI, le trato con un tono de autoridad», aunque es de suponer que su alumno no recibía las palizas que eran costumbre en la formación de un aprendiz. Con el tiempo, se instaló un taller para Luis en Versalles. Allí se retiraba a menudo para huir de la rutina de palacio. En la corte, su interés por las artes mecánicas se consideraba una excentricidad, no se veía como algo que pudiera acercarlo a sus súbditos.[7]

Rodeado como estaba de cortesanos ávidos por ganarse su favor para ascender en sus propias carreras, el confesor religioso de Luis le insistió en

que no debía «dejar nunca que los demás leyeran sus pensamientos», un consejo que aumentó su tendencia natural a evitar la conversación. Su posición como heredero al trono tras la muerte de su padre hacía esencial que se casara lo antes posible, para que pudiera cumplir con su deber real más importante: tener un heredero varón que asegurara la continuidad de la dinastía borbónica. Se daba por hecho que el matrimonio del rey sería concertado, del mismo modo que se entendía que sólo podía ser con una princesa de otra dinastía real. Su abuelo y su padre se habían casado con mujeres de casas reales de menor rango, que no estaban en posición de exigir mucho a los franceses a cambio de semejante honor. El acuerdo que llevó a María Antonieta –la princesa austriaca de los Habsburgo de quince años– a Versalles en 1770 para unirse a Luis, de dieciséis años, era completamente diferente.

La dinastía Habsburgo era, junto con la de los Borbones, la más ilustre y poderosa de Europa. Durante siglos, estas dos familias habían sido archienemigas. La historia de la realeza que el joven Luis había memorizado era una larga saga de guerras contra los antepasados de María Antonieta. Los generales aristócratas que comandaban las tropas del rey también se habían criado con historias de las victorias sobre los *Kaiserliches* (imperiales). La sorpresa fue mayúscula para ellos y para todo el continente, cuando, en 1756, Luis XV y sus asesores más cercanos maquinaron una «revolución diplomática» que haría que Austria, no Prusia, fuera el principal aliado de Francia. De hecho, Austria y Prusia eran rivales acérrimos. El ambicioso Federico el Grande de Prusia había sumido a Europa en una era de conflictos en 1740 al arrebatar la valiosa provincia de Silesia a Austria, su vecina Habsburgo.

El matrimonio de Luis y María Antonieta tenía como objetivo consolidar la alianza entre la dinastía Borbón y la Habsburgo. Que los dos adolescentes se llevaran bien era irrelevante para los diplomáticos que negociaron el acuerdo. Tampoco les preocupaba cómo podía afectar a la pareja lo mal vista que estaba la alianza con Austria en Francia. El matrimonio fue la última gran victoria del ferviente partidario del pacto, el ministro Étienne-François de Choiseul, a quien se expulsó del poder poco

después y se exilió en su finca. María Antonieta era joven y no sabía nada de política, pero comprendió que el ostracismo al que condenaron a Choiseul la dejaba a ella sin aliados en la corte francesa. No tardaría en labrarse fama de intrigante por los esfuerzos que dedicó a conseguir el favor de la corte para los partidarios de Choiseul y reinstaurarle en un puesto destacado.

La mujer de Luis XVI era joven y guapa, y Luis XV y su corte se encapricharon inmediatamente con ella. «No se hablaba de nada más que de sus encantos, su alegría y lo rápida que era en sus respuestas», escribió su dama de compañía, Madame Campan, en sus memorias. A su nuevo marido no le hacía tanta gracia. Su gobernador, el duque de La Vauguyon, le había advertido de que tenía que estar en guardia para evitar cualquier intento que hiciera ella de influirle a favor de los intereses austriacos. El fastuoso espectáculo de fuegos artificiales que se organizó en honor a su matrimonio en París terminó siendo un desastre cuando el pánico de la multitud provocó una estampida en la que más de cien espectadores murieron pisoteados y asfixiados. La joven pareja real no acudió al evento –para gran decepción de María Antonieta, Luis XV no les permitió visitar París por primera vez hasta tres años después de su boda–, pero que su unión comenzara con semejante catástrofe era un mal augurio. Ménétra nunca olvidó el acontecimiento. En 1770 ya había terminado su gira por Francia, había regresado a París y se había casado; el día de la boda real, él y su mujer se perdieron entre la multitud en la «celebración» que «se había transformado en noche de luto»; él pasó angustia durante horas antes de reencontrarse con su esposa.[8]

Resultó que la joven pareja real era de una ignorancia lamentable en lo que se refiere a cumplir con su deber fundamental, dar un heredero a la corona. Pasaron siete años frustrantes antes de que el hermano de María Antonieta, el emperador austriaco José II, descubriera que Luis «se queda allí unos dos minutos sin moverse, después se retira sin aliviarse jamás y da las buenas noches», y explicara a los «dos incompetentes» lo que tenían que

hacer para consumar su matrimonio. A esas alturas, la incapacidad de Luis para dejar embarazada a su esposa se había convertido en la comidilla de Versalles y París, y había dañado gravemente su reputación. Florimond-Claude, conde de Mercy d'Argenteau, el embajador austriaco en Francia, fue el «cuidador» de María Antonieta. Le daba charlas regularmente sobre cuáles eran sus deberes e informaba de todos los detalles de su vida a su madre, la emperatriz María Teresa I de Austria. En su opinión, «la frialdad que mostraba el heredero al trono, un joven marido de veinte años, con respecto a una mujer bonita era incomprensible», y se preguntaba si tenía algún tipo de deformidad física. A pesar de los esfuerzos que hacía, María Antonieta no era capaz de desviar el interés de Luis de sus dos pasiones, la caza y lo que Mercy describió como «su extraordinaria afición por cualquier cosa que tenga que ver con la construcción, como la albañilería, la carpintería y otras actividades de ese tipo». En una ocasión, los dos adolescentes se pelearon delante de sus cortesanos hasta que las quejas de María Antonieta sobre el comportamiento de Luis hicieron que él terminara llorando.[9]

Por muy distante que pareciera, Luis XVI no estaba totalmente aislado del mundo fuera de Versalles. Una de las primeras compras que hizo cuando Luis XV le dio una asignación personal fue la *Encyclopédie*, una obra de referencia conocida por ser la máxima expresión del espíritu crítico de la Ilustración. Es posible que le llamara la atención su minuciosa explicación de los diversos oficios mecánicos que tanto le interesaban, pero tampoco podría haber pasado por alto los polémicos artículos que contenía sobre política y religión. No le parecía suficiente leer las noticias censuradas de la *Gazette de France*, así que se suscribió a la *Gazette de Leyde*, un periódico no censurado que se publicaba fuera del reino.[10] Sin embargo, cuando el célebre autor Voltaire, símbolo de la Ilustración, hizo una visita triunfal a París en 1778 después de años de exilio en Suiza, Luis vetó con firmeza cualquier sugerencia de invitarle a la corte. No quería que pareciera que la monarquía aprobaba sus críticas a la aristocracia y la religión revelada.

María Antonieta, infeliz y aburrida de la formalidad que conllevaba la rutina de la corte que la obligaba a pasar la mayor parte del tiempo con

mujeres mayores –como las tías solteras de su marido–, se organizó su propia vida social. Una vez que, por fin, tuvo permiso para visitar París, empezó a hacer salidas nocturnas para asistir a obras de teatro y bailes de máscaras, sin contar con Luis, que quería estar en la cama a las once todas las noches. Estas excursiones pronto dieron pie a chismes maliciosos. Lo mismo ocurrió con la atención que prestaban a la reina varios cortesanos, entre ellos el hermano menor del rey, el conde de Artois, y lo amiga que se hizo de dos jóvenes, la princesa de Lamballe y la condesa de Polignac. Incluso cuando se quedaba en Versalles, su conducta era escandalosa. Después de la muerte de Luis XV, sobre todo, su pasión por las apuestas de alto riesgo provocó toda clase de rumores e hizo que las mujeres de la alta sociedad no quisieran frecuentar la corte.

Jacques Ménétra compartía con la joven María Antonieta su gusto por la diversión y las aventuras. Cuando el joven vidriero emprendió su viaje por Francia, que era la forma tradicional de dar por terminada la formación de un artesano, ya dominaba el arte de hacer el amor que tantos problemas daba a su futuro monarca. Después de aprender lo básico con una doncella en una casa donde le contrataron para un trabajo, Ménétra se convirtió en cliente asiduo de las prostitutas de París. «Estos interludios eran tan agradables que cada día intentaba hacer nuevas conquistas», escribió en sus memorias, aunque «al final mi recompensa fue la que bien podéis imaginar y eso me hizo un poco más sabio». Por mucho que aprendiera de su primera enfermedad venérea, eso no le paró los pies. En sus memorias habla de 52 encuentros sexuales antes de casarse a los veintisiete años, una edad estándar para los franceses de a pie de la época, y trece relaciones extramatrimoniales después.[11]

El rey estaba en la cúspide de la pirámide, en una sociedad basada en privilegios, pero sus súbditos tenían sus propias áreas de libertad, como demuestra la intensa vida sexual de Ménétra. Las aventuras de este vidriero reflejan un sentido del derecho masculino que compartía con el celebérrimo abuelo de Luis XVI. Ménétra dejó embarazadas a varias de sus amantes.

Según cuenta, una de ellas se enfrentó a él e intentó apuñalarle, y varios de los encuentros que describe cruzan el límite entre la seducción y la violación. Marie-Jeanne, «Manon», Phlipon era una joven que se crio en una casa de artesanos; después se haría famosa con el nombre de Madame Roland y sería una figura importante en la política revolucionaria. Dejó un testimonio poco conocido del impacto que las agresiones sexuales ocasionales como las de Ménétra podían tener en las mujeres objeto de la agresión. Uno de los aprendices de su padre la atacó agresivamente en varias ocasiones y el recuerdo la preocupó durante años. «Cada vez que intentaba reflexionar sobre lo que había ocurrido, pensamientos perturbadores no me dejaban pensar», recordaba.[12]

En los siete años que Ménétra pasó viajando por Francia adquirió un conocimiento mucho más amplio sobre el reino que el que tenía Luis XVI gracias al estudio de sus queridos mapas. En el curso de sus viajes, Ménétra conoció los extensos campos de trigo de los alrededores de París, que conforman el granero de Francia; siguió el curso del río Loira a su paso por ciudades como Orleans, Tours y Angers; navegó alrededor de la larga península de Bretaña en un barco corsario al comienzo de la Guerra de los Siete Años, y se detuvo en los puertos de Nantes, La Rochelle y Burdeos, ciudades dedicadas al tráfico de esclavos. En los puertos del Atlántico es muy posible que entrara en contacto con negros de las colonias francesas, unos eran esclavos y otros libres, de la «raza intermedia» que resultaba de las uniones entre hombres blancos y mujeres negras. A estos colonos educados se los trasladó a Francia con la idea de que sirvieran a sus amos y aprendieran las mismas habilidades artesanales que éstos; e igual que Ménétra, algunos se unirían más tarde al movimiento revolucionario. Desde Burdeos, Ménétra viajó por las provincias meridionales de Gascuña y Languedoc hasta la costa mediterránea y Marsella, el puerto más importante; subió por el valle del Ródano hasta Lyon, la capital de la producción de seda, y luego continuó hacia el norte pasando por Dijon, la capital de la Borgoña y desde allí regresó a la capital. En general, Ménétra viajó por las carreteras más importantes y mejor mantenidas, que fueron uno de los grandes logros del reinado de Luis XV. Estos caminos, que

admiraban los visitantes del resto de Europa, unían el reino de tal manera que, en las últimas décadas del siglo, sólo se tardaba tres días y medio en hacer el viaje de París a Lyon en carruaje. (Hoy, en tren de alta velocidad se hace en dos horas).

En su periplo, Ménétra pasó por cientos de pueblos donde vivían los campesinos que constituían la gran mayoría de la población en Francia. Éstos apenas aparecen en sus memorias. Ménétra sabía leer y escribir, había adquirido los conocimientos específicos de un oficio, despreciaba la religión y tenía muy poco en común con la gente del campo. Los campesinos no eran clientes potenciales de un vidriero: no era habitual que sus casas tuvieran ventanas de cristal. A Ménétra y a sus compañeros no les causó ningún remordimiento robar las ovejas de un campesino para asarlas para la cena; la dueña de una granja soltó a su perro contra él y explicó que el animal sólo «cumplía con su deber».[13] Le sorprendió gratamente otro campesino que le invitó a compartir la comida, le dejó dormir en su granero y hasta le dio un poco de dinero para que pudiera seguir su camino.

Los viajes de Ménétra le enseñaron poco sobre la realidad de la vida del campo. Ni él ni los propios aldeanos tenían idea de que la población campesina del país había aumentado rápidamente desde la última gran crisis climática, el aterrador invierno de 1709-1710. Al pasar por los campos, es posible que se diera cuenta de que los principales cultivos cambiaban de una región a otra –trigo en Beauce, cerca de París; trigo sarraceno y centeno en las zonas más pobres, como la Bretaña y la Sologne al sur del Loira; viñedos a las afueras de Burdeos; olivos en el clima mediterráneo de la Provenza–, pero no le importaba que el modo de vida de los campesinos que trabajaban esos campos cambiara según los cultivos, la cantidad de tierra en propiedad o arrendada y sus relaciones con el *seigneur* local. Desde luego, no sabía que, con la introducción de nuevos cultivos, como el maíz y las patatas americanas, y de nuevas prácticas agrícolas, se había conseguido aumentar la productividad, lo que, a su vez, había hecho posible un crecimiento de la población.

Para Ménétra, los aristócratas titulados, el clero y los burgueses ricos que tenían derechos legales sobre la tierra eran posibles clientes; para los campesinos, eran presencias poderosas que podían conceder o impedir un arrendamiento, exigir cuotas y pagos que suponían una parte considerable de la cosecha, y tenían capacidad para controlar a los tribunales locales que administraban la justicia en el campo. Ménétra vivía ajeno a esta enmarañada red de relaciones entre el señor y el campesino, que desempeñaría un papel tan importante en el inicio de la Revolución francesa; también ignoraba cómo se organizaban los campesinos en sus asuntos comunitarios y para defender sus intereses. Aunque eran pocos los que sabían leer y escribir, los campesinos tenían un fuerte sentido de sus derechos. Los consejos locales, generalmente al mando de los jefes de las familias más ricas, trataban con el señor local o, más a menudo, con el administrador de la finca del señor, sobre las necesidades de la comunidad; con el sacerdote, sobre el mantenimiento de la iglesia, y con los recaudadores de impuestos, sobre la factura anual de la comunidad, que los miembros del consejo tenían que cobrar a los habitantes. El sacerdote local, los vendedores ambulantes y las visitas a los pueblos cercanos significaban que los campesinos no ignoraban el mundo que había más allá de sus campos.

Luis XVI sabía que la mayoría de sus súbditos eran campesinos y que su bienestar era algo que le concernía, porque los impuestos que pagaban eran una parte esencial de los ingresos de la monarquía. Aunque sus vidas no podían estar más alejadas, el rey y los campesinos compartían la fe católica que Ménétra rechazaba. En el pequeño mundo rural, las familias campesinas más acomodadas también compartían la obsesiva preocupación de los Borbones por acordar matrimonios adecuados para sus hijos. Para el rey, un buen matrimonio era uno con el que se pudiera mantener el reino intacto e incluso ampliarlo; un buen casamiento en un pueblo evitaba que una granja familiar se dividiera y aseguraba que la nueva pareja heredara la posición de sus padres en la comunidad. Las familias campesinas vigilaban de cerca a sus hijos para asegurarse de que fueran aptos para el matrimonio: en un pueblo, ningún joven podría tener una lista de conquistas sexuales

como la de Ménétra. El maestro de escuela Pierre Delahaye, que llevaba un diario, habla de los ruidosos *charivari*, o cencerradas, que se celebraban para castigar los matrimonios con «forasteros» de otras aldeas, y cuenta que las mujeres solteras que quedaban embarazadas tenían que abandonar la ciudad para ocultar su vergüenza.

El mundo que realmente le interesaba a Ménétra en su gira por Francia era el de los pueblos donde se quedaba un tiempo, a veces meses, y buscaba trabajo. En esos pueblos Ménétra tuvo contacto con gente de todo tipo, mucho más variada que la que Luis XVI veía en Versalles, o la que los campesinos conocían en su vida. Al ser miembro de un gremio, o *compagnonnage*, era bien recibido en las ciudades que visitaba, y se podía alojar en la posada local del gremio, que dirigían las llamadas *mère*, o madre de la *compagnonnage*; además, se le incluía en una lista de vidrieros disponibles para realizar trabajos. Mucho antes de 1789, en estos gremios ya se practicaba lo que se convertiría en el ideal revolucionario de la fraternidad. Los miembros se trataban como camaradas, se cuidaban unos a otros en caso de enfermedad o accidente, y se defendían en los conflictos con los empleadores, con las autoridades locales y, sobre todo, con los miembros de gremios rivales. Ni los gremios de artesanos ni las logias masónicas, que atraían a nobles y plebeyos ricos, promovían ideas subversivas, pero los miembros de ambas organizaciones aprendieron a gobernarse a sí mismos según unas reglas que habían jurado obedecer voluntariamente. Como resultado, comenzaron a tener conciencia de sí mismos como parte de unas redes nacionales e internacionales –en el caso de los masones–, que trascendían las preocupaciones locales.

Los clientes de los vidrieros podían ser nobles locales que querían que se repararan las ventanas y los espejos de sus castillos; miembros del clero, que necesitaban nuevas juntas de plomo en los antiguos vitrales de sus iglesias; prósperos comerciantes y abogados locales, cuyas elegantes casas se alineaban en las calles de las ciudades de provincia, y funcionarios municipales, que colocaban faroles de vidrio para iluminar sus calles e

imitar así a París. En el sur de Francia, Ménétra entabló relación con miembros de la minoría protestante de Francia y le gustaron más «que esos fanáticos que me daban dolor de cabeza con sus sacerdotes y sus supersticiones». Asistió a algunos de los servicios religiosos clandestinos de los protestantes y le pareció que las leyes que restringían su libertad religiosa eran injustas. Al principio, no se mostró tan comprensivo con los judíos que conoció en la ciudad de Carpentras, en el valle del Ródano, uno de los pocos lugares donde se les permitía vivir legalmente. Sin embargo, después de ver lo mal que el clero católico trataba a los judíos, reflexionó que «son nuestros hermanos y [...] son iguales a nosotros a los ojos del Eterno».[14]

Por donde pasaba Ménétra hacía honor a su apodo, el «parisino bienvenido»; no le costaba hacer amigos y siempre estaba dispuesto a unirse a una juerga. Si damos crédito a sus memorias, las mujeres de la zona eran las que le recibían con más entusiasmo. Lo que duraba su estancia en cada lugar iba en función de lo que tardaba en decidir que tenía que marcharse para evitar un compromiso permanente con su última conquista. El elevado número de viudas con las que asegura que se encamó hace pensar que prestaba especial atención a las mujeres cuyos maridos artesanos les habían dejado en herencia una empresa en funcionamiento. Casi cuarenta años después, escribió que lamentaba haber rechazado a la más atractiva de ellas, una mujer de la ciudad sureña de Nimes, por cuestiones religiosas. Estas mujeres necesitaban un hombre con conocimientos de cristalería para mantener sus negocios en marcha; a cambio, ofrecían la posibilidad de establecerse como maestro artesano con su propio taller y una socia con experiencia para llevar los libros. Aunque Ménétra veía a la mayoría de las mujeres como «presa» que cazar, era consciente de que estas viudas tenían un poder económico real.

Según la doctrina oficial del absolutismo que aprendió el joven Luis XVI, los reyes de Francia gobernaban y los súbditos, especialmente los de rango inferior, como los artesanos, obedecían. Aunque Ménétra no era un

revolucionario antes de 1789 sabía que la realidad no era exactamente así. Como grupo, los artesanos tenían un poder considerable. Si se oponían a la paga y a las condiciones de trabajo que les ofrecían en una ciudad, podían boicotear a los maestros del gremio local y dejarles sin trabajadores cualificados. En Nantes, no aceptaron las condiciones que ofrecía el representante de los maestros, así que Ménétra y sus camaradas lo arrojaron por una ventana. En Angers, asegura que participó en una batalla entre gremios rivales en la que pelearon más de mil personas y hubo muchos muertos; las autoridades locales, sobrepasadas por el gran número de artesanos y por el temor de enfrentarse a ellos, no intervinieron. En Burdeos, Ménétra representó a varios miles de artesanos que se oponían a que los reclutaran para la milicia, y en las negociaciones se tuvo que enfrentar con los funcionarios encargados de reforzar las defensas del país en la Guerra de los Siete Años. No mostró ningún temor a presentar su caso ante el administrador real de la provincia, ante el altivo magistrado principal de la corte real local, o *parlement*, e incluso ante el duque de Richelieu, gobernador real y miembro de la familia del famoso cardenal Richelieu, el arquitecto de la monarquía absolutista del siglo XVII.

Los enfrentamientos entre gremios sólo eran una más de las innumerables formas de violencia colectiva que marcaron la vida francesa a lo largo del siglo XVIII. Estos eventos demostraban que los miembros de las clases bajas tenían formas de hacer valer sus intereses. En años de malas cosechas, los aldeanos usaban la fuerza para evitar que los intermediarios compraran el grano y lo enviaran a mercados lejanos, y los ciudadanos se amotinaban para obligar a los funcionarios locales a fijar un precio máximo para el pan. Las bandas de contrabandistas a menudo conseguían apoyo local cuando se enfrentaban a los guardias armados de la *ferme générale*, o granja general, la empresa de numerosas ramas, que se encargaba, entre otras cosas, de supervisar que funcionara el impopular monopolio estatal que hacía subir el precio del tabaco.

Mientras tanto, los esclavos de las colonias francesas, sometidos a una disciplina mucho más dura que los artesanos y campesinos en Francia, tenían sus propias estrategias de resistencia. Algunos lograron obtener su

libertad: en la colonia francesa de Saint-Domingue en la década de 1770, el futuro líder negro Toussaint Louverture llegó a poseer durante un tiempo una pequeña plantación y un puñado de esclavos propios.[15] Otros negros esclavizados se convirtieron en cimarrones, huyeron de propietarios y capataces abusivos y a veces negociaron para mejorar las condiciones antes de regresar. Los blancos que dependían de sus sirvientes negros para que les prepararan la comida y cuidaran de sus hijos vivían atemorizados por los venenos que los africanos supuestamente sabían preparar. En 1758, poco después de la espantosa ejecución de Damiens en París, las autoridades de Saint-Domingue llevaron a cabo una ejecución pública similar; quemaron en la hoguera a un hombre acusado de hechicero que se llamaba Macandal. El recuerdo de su martirio ayudaría a motivar una sublevación de esclavos durante la Revolución.

En 1764, después de pasar siete años viviendo en provincias, Ménétra regresó por fin a París, donde pasaría el resto de sus días. Comparada con las otras ciudades francesas que había conocido durante su *tour* por Francia, la capital estaba en otro nivel. Era la segunda ciudad más grande de Europa, con una población que pasó de alrededor de 450.000 habitantes en 1715 a 600.000 en 1789, sólo la superaba Londres. Las élites más ricas del reino vivían entre sus muros y era el mercado más importante para todo tipo de productos de lujo, desde los muebles fabricados por los hábiles artesanos del *faubourg* Saint-Antoine, alrededor de la Bastilla, hasta los elaborados vestidos que María Antonieta y su séquito encargaban a su diseñadora favorita, Rose Bertin. La enorme población de la ciudad la convertía en una voraz consumidora de grano, carne, vino, leña y todas las necesidades básicas de la vida. Al ver el apetito de la capital, un observador escribió que «era difícil imaginar que hay fuentes capaces de satisfacer las necesidades de este pozo sin fondo».[16]

El París de mediados del siglo XVIII era muy diferente de la ciudad que los turistas ven hoy. Los amplios bulevares flanqueados por árboles del París moderno no se construyeron hasta los años 1850 y 1860, y la Torre

Eiffel no se convertiría en el símbolo universalmente reconocido de la ciudad hasta 1889. El centro era un laberinto de calles estrechas de edificios de cuatro o cinco pisos cuyos habitantes vaciaban rutinariamente sus orinales por la ventana, hasta que la siguiente lluvia se llevara los desechos al río Sena. Las calles estaban siempre atestadas de gente que esquivaba los carros tirados por caballos y de vendedores que ofrecían todo tipo de servicios, desde agua hasta las labores de dentista: el Pont-Neuf era conocido como el lugar al que acudir para sacarse un diente.

Este crecimiento tenía como resultado que la ciudad cambiaba constantemente. Nuevos edificios públicos, como la iglesia de Sainte-Geneviève, que se empezó a construir en 1758 y no se había acabado cuando la Revolución la convirtió en el Panteón, alteraron el aspecto de la ciudad y mantuvieron empleados a cientos de artesanos como Ménétra. Mientras los campesinos seguían las mismas rutinas diarias, los parisinos se relacionaban con personas de otras clases sociales y profesiones cuya vida era muy diferente a la suya. Louis-Sébastien Mercier, cuya obra, *Tableau de Paris*, de doce volúmenes, fue un éxito de ventas en la década de 1780, llegó a la conclusión de que la vida de la ciudad obligaría, antes o después, a preguntarse por qué unos eran ricos y otros pobres, por qué unos iban en carruaje y otros a pie, y por qué la población tenía que soportar tantas incomodidades cuando las posibilidades de mejora parecían evidentes.[17]

París era el centro de la vida cultural e intelectual de Francia y Europa. Las reales academias de la ciencia, la literatura y el arte atraían a los hombres más destacados en sus campos. A las mujeres se les asignaba un puñado de plazas en la Academia del Arte, pero se las excluía de casi todas las demás. Las actrices, sin embargo, eran tan importantes, o más, que sus colegas masculinos en las compañías de los teatros de la capital y en la ópera. Con treinta y seis editores autorizados y numerosas librerías, París era el centro de la industria del libro francés, aunque era frecuente imprimir las obras más polémicas en el extranjero para evitar la censura. Habitualmente, las autoridades miraban hacia otro lado cuando semejantes obras entraban de contrabando en la capital: a menudo los lectores más entusiastas eran los propios cortesanos y funcionarios del gobierno, y

muchos de ellos escribieron algunas obras provocativas. Los cientos de cafés y salas de lectura, en los que el cliente podía pagar por el privilegio de echar una ojeada a las últimas publicaciones periódicas, fueron el origen del fenómeno en auge de la *opinion publique* (opinión pública), término que se introdujo en el idioma francés alrededor de 1750 para describir el supuesto consenso entre personas instruidas sobre cuestiones de interés general.

Además de atraer a las élites del país, París también era el hogar de la mayor concentración de pobres de Francia. La mentalidad de las autoridades y las clases altas no distinguía entre las clases trabajadoras de la urbe, como Ménétra y su esposa, y los indigentes y el mundo del crimen y la prostitución. Las instituciones de beneficencia y los *hôpitaux*, u hospicios públicos, acogían a mendigos, huérfanos con edad suficiente para trabajar, a enfermos crónicos o discapacitados, a ancianos que no podían valerse por sí mismos y atraían incluso a los más necesitados de las zonas rurales cercanas a la ciudad. Quienes se hallaban en situación de pobreza extrema se dedicaban a menudo al hurto, y las mujeres caían fácilmente en la prostitución, especialmente en la capital, donde el comercio sexual abarcaba desde las cortesanas elegantes, que en ocasiones tenían contratos formales con sus amantes, hasta las menos afortunadas que vendían sexo por unas monedas en la calle. Sin embargo, según los estándares de nuestros días, los crímenes violentos, particularmente el asesinato, eran relativamente escasos. Los barrios urbanos de clase baja eran comunidades muy unidas en las que todos conocían los asuntos de los demás y ayudaban a hacer cumplir las normas sociales. A pesar de que a las esposas se las trataba a menudo con brutalidad, se mantenía dentro de ciertos límites por la presión social de otras mujeres, que intervenían en grupo para regañar a los maridos maltratadores. Se sobreentendía que los pobres de la ciudad iban a misa de forma regular, pero supervisar al rebaño era mucho más difícil para los *curés*, o párrocos de la ciudad, que para sus homólogos del campo. Como señala Ménétra en sus memorias, para mantener el orden era más eficaz la policía, cuyos agentes vigilaban de cerca los lugares en los que había reuniones públicas, como los cabarets, donde los trabajadores iban a beber.

Ménétra no tardó en volver a sentirse como en casa cuando regresó de su viaje. Podía haber tomado parte en el negocio familiar, pero las relaciones con su irascible padre eran tan malas que prefirió establecerse por su cuenta. Después de una breve etapa en la que siguió siendo el mujeriego, bebedor y camorrista de siempre, un amigo le presentó a «una buena chica que tenía una pequeña propiedad» y llegaron pronto a un acuerdo. Como era habitual en las parejas de las clases populares, la novia trajo consigo los ahorros que permitirían a su marido comprar el taller que se convertiría en el negocio familiar. Como tenía más de veinticinco años, Ménétra no necesitaba el permiso de su padre para casarse. Sin embargo, como el matrimonio era un sacramento religioso, tenía que obtener un certificado de confesión de un sacerdote católico, lo cual no era fácil, dada la vida que había llevado. Encontró a un párroco complaciente que le dio lo que necesitaba a cambio de «unas cuantas botellas y tres libros», transacción que no ayudó nada a cambiar su opinión sobre la Iglesia.[18]

La unión no fue más feliz que la de Luis XVI con María Antonieta. «Ir mejorando era su principal ambición y la mía era divertirme era imposible compaginarlas», escribió Ménétra en su prosa sin puntuación alguna. Aunque la ley le convertía en el cabeza de familia indiscutible, como era costumbre en las familias de clase baja, la realidad era más complicada. La esposa de Ménétra se ocupaba de las finanzas, era la que pagaba los suministros y cobraba a los clientes; además, invertía los ahorros de la familia sin consultar a su marido. Por su parte, Ménétra no tuvo reparos en dar «unas cuantas puñaladas sanas y en secreto al viejo contrato de matrimonio» en cuanto vio la oportunidad.[19] Algunas de sus relaciones extramaritales eran con prostitutas, pero otras eran con mujeres que, a juzgar por sus descripciones, tenían la misma independencia de espíritu que dificultaba la convivencia con su esposa.

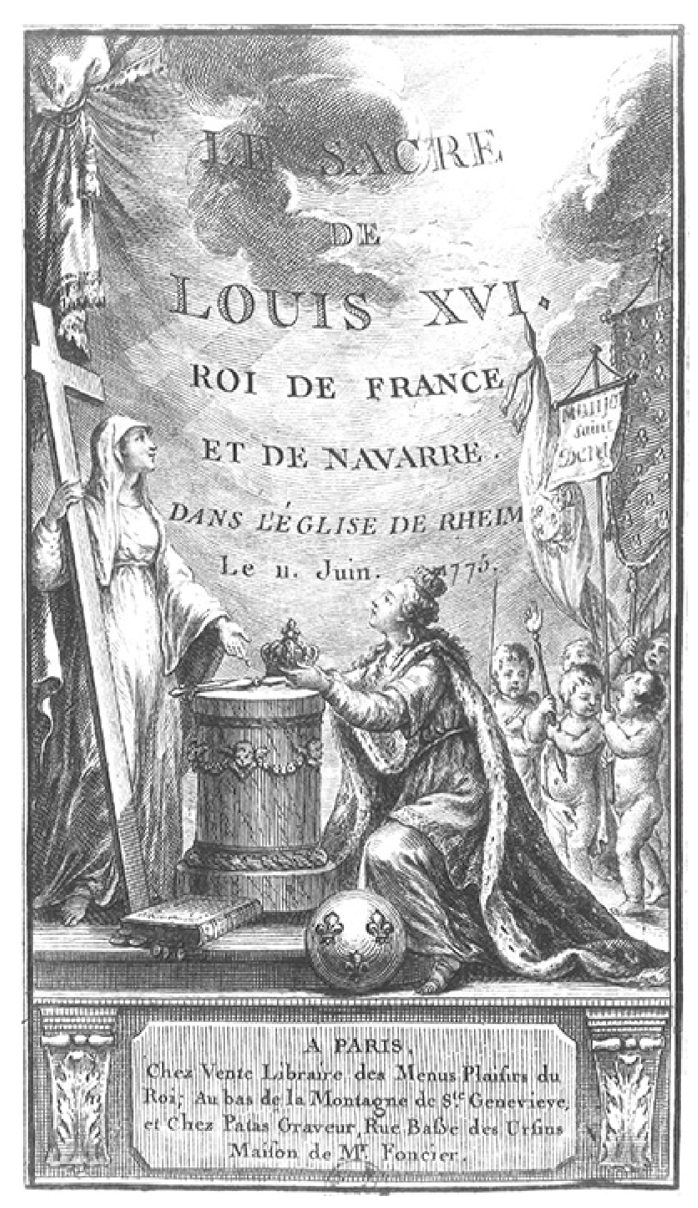
Ménétra siguió conociendo a gente de todas las clases sociales, igual que había hecho en su viaje por Francia. Incluso trabó amistad con el escritor francés más célebre de la época, Jean-Jacques Rousseau, a quien se le había

permitido regresar a la capital francesa en 1770, después de enviarle al exilio en 1762 por sus polémicas obras. Ménétra conoció a Rousseau cuando le encargaron hacer unas reparaciones para el propietario de la casa donde vivía el autor. Rousseau, que a su vez era hijo de un artesano, disfrutaba de las historias que contaba Ménétra sobre sus aventuras y, durante un tiempo, se vieron asiduamente. Daban paseos o se iban a beber, y jugaban a las damas en un café, un lugar igualitario donde podía entrar cualquiera que pagara el precio de una bebida. Ménétra se enteró del complicado matrimonio de Rousseau, escuchó al escritor contar la historia de su infeliz vida. Aunque es evidente que Ménétra disfrutaba de la amistad, era muy consciente de que no eran iguales. «Poseíamos la misma ropa pero no el mismo conocimiento», escribió. Otro de sus amigos cercanos fue Henri Sanson, el verdugo oficial de la ciudad de París, que sería el encargado de guillotinar a Luis XVI en 1793. «Si no tenemos en cuenta su profesión era un hombre amable y cordial», recordaba Ménétra.[20]

Si Luis XVI hubiera salido más airoso de la gestión de los asuntos del país, Ménétra podría haber vivido sus días en el anonimato, disfrutando de sus amigos, sus amantes y su trabajo. No hay nada en sus memorias que sugiera que se sentía oprimido por las instituciones de la Francia prerrevolucionaria. Lo detuvieron más de una vez, una de ellas estuvo encarcelado, debido a los altercados y peleas en los que se metía, pero lo tomó con calma, en lugar de cultivar un sentido de injusticia. Aun así, la historia de Ménétra nos deja ver que, mucho antes de la Revolución, incluso los miembros de las clases bajas de Francia habían llegado a valorar la libertad individual y se veían a sí mismos como iguales a quienes ocupaban el siguiente escalafón de la jerarquía social. Ménétra nunca dejó de pelear por lo que era suyo y sabía colaborar con los demás para defender sus intereses comunes. Es poco probable que leyera el famoso tratado político de su amigo Rousseau, titulado *El contrato social*, o *Emilio*, su novela superventas a cuyo héroe educaron para ser un artesano autosuficiente. Pero en muchos sentidos, Ménétra representa el ideal del individuo autónomo que ensalzaban las obras de Rousseau. Cuando estalló la Revolución,

hombres como Ménétra –y algunas de las mujeres independientes con las que se encontró– se reconocieron en su lenguaje de libertad e igualdad.

Por el contrario, la vida personal de Luis XVI, tras su ascensión al trono en 1774, hizo poco para prepararlo para la crisis a la que se enfrentaría en 1789. A los veinte años, cuando la viruela se llevó por delante a su abuelo, el nuevo rey estaba abrumado por las responsabilidades que cayeron instantáneamente sobre él; a diferencia de Ménétra, no tuvo la oportunidad de hacer un aprendizaje que le ayudara a convertirse en adulto. Al verse acorralado por cortesanos ambiciosos, llamó a un personaje político algo mayor, Jean-Frédéric Phélypeaux, conde de Maurepas, para que le sirviera de mentor, pero incluso con su ayuda, le resultó difícil mantener un rumbo político estable. La mayoría de sus ministros estuvieron en el cargo durante periodos muy cortos y estaban poco coordinados. Luis se hizo famoso por la desafortunada costumbre de nombrar hombres que trataban de impulsar importantes reformas y despedirlos en cuanto sus acciones se encontraban con una oposición.



Coronación de Luis XVI. En este grabado de la ceremonia oficial de coronación de Luis XVI se destaca el origen divino de su autoridad y no se intuyen siquiera los desafíos a la Iglesia y la monarquía que darían como resultado la Revolución francesa. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

Durante los tres primeros años de su reinado, el matrimonio de Luis XVI con María Antonieta estuvo sometido a una enorme presión debido a su incapacidad para dejarla embarazada. Por fin, el 19 de diciembre de 1778, la reina dio a luz. Las circunstancias recordaron a la pareja real lo mucho que su posición privilegiada pesaba en todos los aspectos de su vida. La tradición dictaba que el nacimiento de un bebé de la realeza tenía que ser un evento público, para que no hubiera ninguna duda sobre la paternidad. «La norma de dejar entrar a todos [...] se cumplía de una manera excesiva»;

recordaba Madame Campan, que «la avalancha de espectadores [...] casi hizo perecer a la reina». Cuando se le informó de que el bebé era una niña en lugar del anhelado heredero masculino, María Antonieta se desmayó, lo que provocó un momento de pánico en el que se temió que hubiera muerto.[21] La experiencia fue tan traumática que se rompió con el ritual y se limitó la asistencia en sus partos posteriores.

El nacimiento de un varón en 1781 aseguró finalmente el futuro de la dinastía borbónica, pero la pareja real seguía llevándose mal. La reina nunca se terminó de acostumbrar al rigor de la etiqueta de la corte francesa, que era mucho más formal que la de los Habsburgo en Viena. Luis XVI le dio un capricho, le concedió el palacio Petit Trianon, en los jardines de Versalles, como su retiro privado y le dio permiso para construir la aldea campesina, donde ella y sus amigas jugaban a ser lecheras. Parece que hizo la vista gorda cuando el joven y apuesto noble sueco, Axel von Fersen, se convirtió en su amante; hay pruebas que sugieren que Fersen fue el padre de los dos últimos hijos que tuvo.[22] Sin embargo, al igual que Ménétra y su esposa, Luis y María Antonieta discutían a menudo por dinero. María Antonieta jugaba mucho en los años anteriores al nacimiento de su primer hijo, convencida de que el rey cubriría sus deudas. Además, pedía favores extravagantes para las familias de sus favoritos, especialmente la condesa Jules de Polignac. Las cantidades que pagaba a su modista, Rose Bertin, fueron objeto de críticas desagradables en la corte, al igual que los diseños que elegía, que a menudo estaban hechos de algodón importado, en lugar de las pesadas sedas que fabricaban los tejedores de Lyon. Era tradición que la corte apoyara estas industrias con su patrocinio. El gusto poco convencional de María Antonieta a la hora de vestir se refleja en los retratos que encargó a su artista favorita, Élisabeth Vigée-Lebrun, otra mujer fuerte e independiente.

La vida de Ménétra se empezó a asentar cuando él estaba cerca de cumplir los treinta. Mientras tanto, Luis XVI parecía estar acostumbrándose a su rutina como rey. Mercy d’Argenteau observó que, a pesar de las muchas horas que dedicaba diariamente a la caza, se tomaba en serio sus obligaciones; se veía durante tres o cuatro horas cada mañana con sus

ministros y minimizaba el tiempo que pasaba en ceremonias formales, como la preparación diaria del rey o *lever*, el elaborado ritual que había heredado de Luis XIV, en el que los cortesanos tenían el privilegio de entregarle los distintos artículos de su vestimenta. Puede que fuera impaciente con los hábitos de palacio, pero no dudaba de la necesidad de mantenerlos. El rey esperaba que la monarquía que él representaba y el país que gobernaba siguieran funcionando como lo habían hecho bajo el reinado de sus predecesores. No se le pasó por la imaginación que algo pudiera sacudir los cimientos del palacio de Versalles y se trasladara el poder a hombres como el vidriero que una vez le entretuvo cuando era niño. Tampoco se le ocurrió a Ménétra. Y, sin embargo, se avecinaban cambios en Francia que pondrían patas arriba el mundo del rey y de sus súbditos.

2

La monarquía, los *philosophes* y el público

Luis era joven e inexperto cuando la muerte de su abuelo le convirtió en rey el 10 de mayo de 1774, pero la monarquía que había heredado tenía una larga historia detrás. Durante la educación cuidadosamente programada que recibió para que pudiera afrontar sus obligaciones, Luis XVI se imbuyó de esa gloria centenaria y de los principios del absolutismo real que habían articulado importantes figuras del siglo XVII. Entre ellos se encontraban el ministro Richelieu y el obispo Bossuet, predicador de la corte de Luis XIV, cuya obra *La politique tirée de l'Écriture sainte (Política según las Sagradas Escrituras)* ofrecía una detallada justificación de la monarquía francesa. En el largo resumen de la historia francesa y de los principios absolutistas que copió el joven adolescente, cuando todavía no reinaba, indicaba que los reyes franceses «han recibido, del propio Dios, el mayor y más absoluto poder sobre otros hombres que jamás se haya confiado a un solo hombre: el poder de hacer leyes para mejorar, la administración para controlarlas, la autoridad judicial para castigar y compensar». En 1766, después de que la muerte del padre de Luis XVI hiciera al joven heredero del trono, su abuelo Luis XV había reafirmado rotundamente los principios de la autoridad real francesa, recordando a sus súbditos: «Sólo yo ejerzo el poder de dictar leyes, de forma independiente e indivisible». En su escritorio, el joven se hizo eco de esas palabras: «Una característica definitoria de la monarquía francesa es que todo el poder reside sólo en el rey, y que ningún grupo o persona puede independizarse de su autoridad».[1]

El joven Luis sabía que, según los teóricos del absolutismo, su poder no era arbitrario: no podía gobernar a su antojo, como imaginaban los

escritores políticos franceses que hacían los «déspotas» de los reinos e imperios no europeos. El rey francés estaba obligado a seguir los dictados de la razón con la que Dios había imbuido a los seres humanos, y a respetar los derechos de sus súbditos, que Luis enumeró en sus tareas como sigue: «La vida, el honor, la libertad y la propiedad de los bienes que cada individuo posee».[2] Esta lista no estaba tan alejada de «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad» de las que hablaría el revolucionario americano Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, y de los derechos que los legisladores revolucionarios franceses definirían en 1789; las similitudes eran un recordatorio de que el absolutismo francés y el liberalismo revolucionario americano y francés compartían raíces en la tradición filosófica de la ley natural. La diferencia más significativa entre la noción de derechos del futuro rey y la de los revolucionarios era la referencia del joven Luis al *honneur* (honor), una promesa de mantener las elaboradas diferencias de rango y estatus en las que se basaba la sociedad jerárquica de Francia. El respeto por el honor significaba el rechazo de la igualdad, lo que habría colocado a nobles y plebeyos en las mismas condiciones.

En teoría, el absolutismo francés era un sistema de gobierno sorprendentemente simple en el que el gobernante era libre de tomar cualquier medida que exigiera el bienestar del Estado. En la práctica, el gobierno francés era un conjunto abrumadoramente complicado de instituciones mal coordinadas que nadie, ni siquiera el rey, entendía del todo. A finales del decenio de 1750, Luis XV encargó al historiador real Jacques-Nicolas Moreau la tarea de recopilar los documentos jurídicos que establecerían, de una vez por todas, las líneas básicas de la «Constitución» francesa, las leyes fundamentales que regían el reino. Las investigaciones de Moreau lo llevaron por todo el país en busca de cartas medievales enmohecidas y copias dispersas de oscuros edictos reales, pero nunca logró completar la misión. En 1789, los revolucionarios decidieron que redescubrir los verdaderos principios de la Constitución francesa era imposible; en su lugar, se propusieron dar al país un conjunto completamente nuevo de instituciones fundamentales.

Luis XVI no era nada revolucionario: no podía aceptar la idea de descartar sin más el legado del pasado francés, del cual la propia monarquía era la parte más importante. Los historiadores franceses alardeaban de que la dinastía real francesa era la más antigua de Europa. Rastrearon sus orígenes hasta Clodoveo, que en el 486 se proclamó rey de los francos, la tribu germánica que gobernó lo que había sido la provincia romana de la Galia. A principios de la Edad Media, una segunda dinastía, los carolingios, cuyo miembro más ilustre fue Carlomagno, arrebató el reinado a los descendientes merovingios de Clodoveo. En su apogeo, el imperio de Carlomagno abarcó la mayor parte del reino que Luis XVI heredaría en 1774, así como gran parte de Alemania y el norte de Italia. Los territorios situados al este del Rin y al sur de los Alpes se separaron pronto de la corona francesa, y la dinastía carolingia perdió su posición frente a la familia rival de Hugo Capeto, que se proclamó rey en el 987. A partir de ese momento, todos los monarcas franceses reivindicarían su consanguinidad con un antepasado real de los Capetos.

La ley sálica, un invento medieval supuestamente basado en precedentes romanos, convirtió a Francia en una de las varias monarquías europeas que prohibían a las mujeres ocupar el trono o pasarlo a sus descendientes: la realeza francesa sólo podía ser heredada por línea masculina. Sin embargo, las mujeres habían ejercido a menudo una influencia decisiva en Francia: en sus lecciones de historia, Luis XVI habría estudiado las vidas de las dos princesas italianas de los Médicis, Catalina y María, poderosas reinas madres que habían servido como regentes en los siglos XVI y XVII tras la muerte de sus maridos, y Ana de Austria, que había conservado el trono para su hijo de cinco años, Luis XIV, cuando su padre murió en 1643. Sin embargo, para los teóricos jurídicos franceses, la ley sálica hizo de Francia el reino europeo donde la autoridad masculina estaba más firmemente establecida y sentó un precedente para excluir a las mujeres de la vida política. En el resumen de sus lecciones, el futuro Luis XVI repitió las advertencias que había recibido de que «las mujeres se meten en todo en Francia» y que «están detrás de todas las intrigas», aunque algunas «tienen mérito más allá de su género».[3]

Durante siglos, los reyes de Francia habían pasado de ser señores feudales dependientes de la incierta lealtad de sus vasallos a ejercer una amplia gama de poderes. Por encima de todo, eran el origen de las leyes del reino, que cada monarca, en su ceremonia de coronación, juraba mantener y defender. Los decretos reales cubrían todos los aspectos de la vida de sus súbditos, desde los derechos de propiedad y herencia hasta la definición de los crímenes y los castigos para ellos. El rey nombraba a los jueces de los tribunales reales y ejercía como el último tribunal de apelación de sus decisiones. En 1539, Francisco I emitió el edicto de Villers-Cotterets, haciendo del francés que hablaba el rey el idioma de la ley en todo el reino. Aunque gran parte de la población seguía hablando dialectos regionales o lenguas como el bretón, el vasco o el flamenco, que no tenían relación con el francés, esta decisión real aseguró que hubiera al menos algunas personas en cada parte del país que entendieran el francés, lo que contribuía al desarrollo de un sentido común de nación.

Aunque el rey era el juez supremo en todo su reino, las leyes de la monarquía eran todo menos uniformes. Las diferencias que había entre las leyes de las provincias reflejaban el largo proceso que había sido la construcción del reino. El crecimiento de Francia había sido un proceso no planificado, las fronteras se habían reducido y ampliado muchas veces a lo largo de los siglos. El núcleo del reino era la Île de France, la «Isla de Francia», región que rodeaba a París y que se estableció como capital a principios de la Edad Media. Las ricas tierras de cultivo del norte de Francia proporcionaban el alimento para su población, y la proximidad del Sena facilitaba la llegada de materias primas de gran volumen como la leña. La ubicación de París la hacía vulnerable a los invasores que cruzaban las vastas llanuras hacia el norte y el este, como hicieron los ejércitos de los Habsburgo numerosas veces después de 1500, y obligaba a los reyes franceses a estar siempre preparados para la guerra.

Después del desmembramiento del vasto imperio de Carlomagno en el siglo IX, el reino francés se amplió mediante conquistas de territorios por el sur. Entre otras cosas, estos territorios habían conservado el patrimonio del derecho romano, mientras que las partes septentrionales del reino vivían

bajo leyes consuetudinarias arraigadas en las tradiciones de las tribus germánicas, incluidos los francos, que se habían establecido en esas regiones. Las sangrientas cruzadas albigenses de los siglos XII y XIII lograron establecer el control real de las provincias de Languedoc y Provenza, con lo que el reino se extendió hasta el Mediterráneo. Estas guerras contra los herejes que estaban en desacuerdo con las enseñanzas del catolicismo ortodoxo pusieron de relieve el papel que ejercían los reyes franceses como defensores de la Iglesia. Para 1375, el papado confirmó que los gobernantes de Francia, y sólo ellos, podían reclamar el título de los reyes «más cristianos». Como signo de su estatus sagrado, se pensaba que poseían la capacidad de curar la dolorosa enfermedad de la escrófula, el «mal del rey», tocando a los enfermos, una ceremonia con la que Luis XVI cumplió escrupulosamente el día de su coronación en 1775.

En sus clases de historia, Luis XVI habría estudiado la Guerra de los Cien Años, la lucha desesperada contra los reyes ingleses que reclamaban la provincia de Aquitania en el sudoeste de Francia y las principales ciudades portuarias de la costa del mar del Norte. Durante todo el conflicto, que se prolongó a lo largo de los siglos XIV y XV, la supervivencia del reino estuvo en la cuerda floja, hasta que Juana de Arco, la «Doncella de Orleans», dio un impulso radical al esfuerzo bélico francés. El rey también conocería la rivalidad de sus antepasados con los duques de Borgoña, a la que Luis XI puso fin con la anexión de esa provincia oriental en 1477, y los matrimonios de Carlos VIII y Luis XII con la duquesa Ana de Bretaña, con los que, en 1532, se incorporó al reino la península occidental que se adentra en el Atlántico.

La reforma protestante del siglo XVI interrumpió la expansión de Francia y supuso una amenaza aún más grave para su unidad que todos los conflictos anteriores. En nombre de la religión, tanto los nobles protestantes como los católicos formaron facciones armadas que luchaban entre sí e intrigaban para someter a la monarquía a su control. Aunque no fueron momentos gloriosos en la historia de la realeza, en los estudios del joven se habría incluido la historia de la matanza del día de San Bartolomé de 1572, en la que los católicos de París asesinaron a miles de protestantes, y el

sombrío relato de la complicidad del rey Enrique III en el asesinato del duque de Guise –un católico– en 1588, que desembocaría en el asesinato del propio rey unos meses después. Los tutores de Luis XVI se habrían asegurado de explicarle que, Enrique IV, un pariente lejano de la rama Valois de la familia real de la que Enrique III era el último miembro masculino, había fundado la dinastía Borbón. Habría aprendido que Enrique IV había declarado que París bien valía «una misa», y había abandonado su fe protestante para hacerse con el trono y traer la paz a un país que llevaba cuatro décadas destruyéndose por una violenta guerra religiosa. Enrique IV, al que se recordaría con cariño por su personalidad extrovertida y su promesa de que, bajo su reinado, habría «un pollo en cada olla», también lanzó la primera empresa imperial exitosa de Francia en ultramar, las colonias de Quebec.

El joven Luis probablemente se estremeció cuando oyó contar por primera vez que un fanático católico había apuñalado a Enrique IV hasta matarlo en las calles de París en 1610. Subió al trono Luis XIII siendo un niño, igual que su sucesor, Luis XIV, y también Luis XV, el abuelo de Luis XVI, inmaduro como era cuando tuvo que ejercer de rey a la edad de veinte años. En realidad, Luis XVI era mayor de lo que habían sido sus tres antecesores cuando llegaron al trono. Luis XIII se había apoyado en el astuto ministro Richelieu, que aprovechó los logros de Enrique IV para aumentar el poder de la monarquía imponiendo una carga fiscal mucho mayor a la población e incorporando algunas islas del Caribe al imperio. En su afán por buscar mayores réditos en Europa, Richelieu sumergió a Francia en la Guerra de los Treinta Años en Europa central. El resultado de esa gran lucha todavía era incierto cuando él y el rey al que había servido lealmente murieron uno tras otro en 1642 y 1643. El trono pasó a Luis XIV, que entonces tenía cinco años, con el sucesor que Richelieu había elegido, el cardenal italiano Mazarino, como primer ministro.

Sin duda, al joven Luis XVI también le enseñaron a temblar ante la mención de la Fronda, una espesa maraña difícil de desentrañar de rebeliones que casi habían logrado derrocar a la monarquía en 1648, cuando su célebre ancestro, Luis XIV, no era más que un niño. Mazarino y Ana de

Austria habían logrado acabar con los rebeldes de la Fronda, y Luis XIV reaccionó al trauma de ese evento concentrando todos sus esfuerzos en que no se volviera a producir una revuelta semejante. Para ello, centralizó aún más la autoridad en sus propias manos que cualquiera de sus predecesores. A ningún ministro se le permitiría hacerse indispensable, como habían hecho Richelieu y Mazarino. El Rey Sol empleó colaboradores capaces, como Jean-Baptiste Colbert, quien impuso regulaciones en la economía del reino, con el fin de aumentar los ingresos del monarca. Colbert también creó un sistema de registro administrativo que seguiría funcionando hasta la Revolución. Sin embargo, el rey se reservaba todas las decisiones importantes y fomentaba la rivalidad entre sus ministros, para asegurarse así de que no formaran un frente unido para ejercer su influencia en él. El palacio que Luis XIV se construyó en Versalles, a veinte kilómetros de París, era parte de su programa para fortalecer la autoridad real. El imponente edificio y sus elaborados jardines irradiaban una imagen del poder del rey; también se encontraban a salvo de la turbulenta ciudad de París, cuya población se había enfrentado a Enrique IV durante las guerras de religión y había obligado al joven Luis XIV y a su madre a huir durante la Fronda. Luis XVI no conoció a su poderoso antepasado, pero vivió los últimos años tumultuosos de su vida en la casa que había construido Luis XIV.

Decidido a reanudar la búsqueda de nuevos territorios en Europa, interrumpida durante casi un siglo, Luis XIV empujó las fronteras de Francia hacia Flandes, por el norte; con el enclave Habsburgo del Franco Condado, por el este, y aseguró la provincia germanoparlante de Alsacia a lo largo del Rin. Además, se anexionó algunas islas en el Océano Índico y asentamientos comerciales en África y el sur de Asia. Aunque las lecciones de historia de Luis XVI destacaron la grandeza de su antepasado, también habría oído hablar de cómo la ambición de Luis XIV hizo que sus enemigos europeos se unieran en una coalición a la que tuvo que enfrentarse. La necesidad de saldar las inmensas deudas contraídas por esas guerras allanó el terreno para el mecanismo de especulación salvaje del financiero escocés John Law –que produjo la «burbuja del Mississippi» durante la regencia

que se instauró a la muerte del Rey Sol–, y para su sonoro fracaso en 1720. El colapso del sistema de comercio exterior y de la financiación de Law llevó a los gobernantes franceses y a sus súbditos a desconfiar durante muchos años de los bancos, las sociedades anónimas y el papel moneda, y a vivir con el temor permanente a la bancarrota real.

Los tutores de Luis XVI, que había elegido para él Luis XV, sin duda pusieron especial énfasis en los éxitos del reinado de éste. Conocido con optimismo como el *Bien Aimé*, el «Bien Amado», Luis XV había dejado que su cauteloso primer ministro, André-Hercule de Fleury, mantuviera a Francia fuera de las grandes guerras durante varios decenios, un periodo de paz que llevó al país a una situación financiera más sólida. Francia entró en el primer conflicto importante de su reinado, la Guerra de la Sucesión Austriaca, en 1743, y acabó de forma favorable en 1748. Sin embargo, los años de la infancia de Luis XVI se vieron oscurecidos por la desastrosa Guerra de los Siete Años, en la que Francia perdió sus colonias de ultramar en Canadá y en la India, y sufrió humillantes derrotas en los campos de batalla europeos. Aun así, como la mayoría de sus antepasados, Luis XV dejó un reino más grande de lo que era cuando lo heredó. En 1766, Francia terminó de incorporar la provincia de Lorena al noreste, y en 1768 tomó la isla de Córcega frente a la costa del Mediterráneo. La ocupación de Córcega significaba que, cuando una mujer local diera a luz a un hijo llamado Napoleone Buonaparte en 1769, su hijo sería un súbdito francés.

El reino que Luis XVI heredó de su larga línea de ancestros era el más grande de Europa. A lo largo del siglo XVIII, los funcionarios reales franceses se interesaron cada vez más por calcular el número de habitantes, aunque todavía no disponían de los recursos adecuados para llevar a cabo un censo nacional. Los historiadores modernos estiman que el imperio tenía una población de entre veintiséis y veintiocho millones en el momento de la Revolución de 1789, frente a los veinte millones de principios del siglo XVIII. En 1789, cerca de un millón más de personas vivían en las colonias francesas de ultramar, la mayoría de ellos negros esclavizados. Francia

estaba más poblada que todas las docenas de pequeños estados alemanes juntos, y tenía más del doble de personas que su principal competidor, Inglaterra. Aunque Luis XVI nunca supo exactamente cuántos súbditos tenía, sabía que eran la fuente de riqueza y el poder de su reino. Más gente significaba más contribuyentes y, por lo tanto, mayores ingresos para la realeza. Significaba más reclutas potenciales para el ejército real en tiempos de guerra. Más negros esclavizados en las colonias significaban más cultivos tropicales valiosos, como el azúcar y el café, exportaciones lucrativas que los comerciantes franceses vendían al resto de Europa.

La extensión de los territorios de Francia y su numerosa población ponían en tela de juicio la capacidad de la monarquía para administrarlos eficazmente. En una época en la que los correos a caballo podían tardar más de una semana en llegar a los rincones más distantes del reino, y los barcos de vela más de cuatro meses en ir desde las ciudades portuarias de Burdeos o Marsella a la Isla de Francia o la Isla Borbón en el Océano Índico, era una lucha constante para hacer cumplir las leyes, recaudar ingresos y mantener el orden. Pero, como atestiguan los miles de documentos manuscritos en los Archivos Nacionales Franceses, la monarquía del siglo XVIII se enfrentó a este desafío con un éxito sorprendente. Los súbditos del rey de Francia esperaban que la monarquía resolviera sus disputas locales y protegiera sus vidas y propiedades. En 1764 y 1765, por ejemplo, cuando unos lobos merodeadores mataron a varias docenas de campesinos en una remota región central, las autoridades locales apelaron a Versalles, que envió a un cazador real para perseguir a «la bestia de Gévaudan». Cuando estalló la Revolución francesa en 1789, los habitantes del reino no exigieron un gobierno que los dejara en paz, sino que querían un gobierno que se involucrara todavía más en sus vidas.

La creación de una estructura gubernamental que pudiera controlar realmente un territorio tan extenso y a toda su población fue el mayor logro colectivo de los Borbones. Este esfuerzo comenzó con Enrique IV y su ministro principal, Maximilien de Béthune, duque de Sully, y lo terminaron de desarrollar Richelieu, Mazarino y Luis XIV. Luis XIV nombró *intendants* (intendentes), que eran funcionarios cuya autoridad provenía

directamente del rey, para llevar a cabo sus órdenes y gobernar las más de treinta provincias del reino. A diferencia de los grandes nobles que habían dirigido facciones durante las guerras de religión o que habían organizado revueltas durante la Fronda, y de los gobernadores reales a los que se otorgaba poderes militares en las provincias, los intendentes, generalmente de origen menos noble, no tenían bases de poder independientes propias, y estaban obligados a rotar de forma periódica de un lugar a otro para evitar que arraigaran en una localidad. Fueron los primeros cargos de un servicio civil profesional, reclutados para servir al Estado. En ese momento, ningún otro gobierno europeo tenía una burocracia semejante y otros monarcas tenían gran admiración por el sistema de intendencia. Los intendentes de Luis XIV tuvieron que enfrentarse a poderosos nobles locales, a jueces de mentalidad independiente, a funcionarios municipales y a clérigos de alto rango, todos los cuales solían tener fuertes redes de apoyo y poderosos protectores en la corte del rey. La intención de Luis XIV nunca fue acabar con estos agentes del poder local cuando creó la figura del intendente; es más, su sistema dependía tanto de animarlos a competir por su favor como de la burocracia que estaba empezando a crear. Pero con el sistema de intendentes consiguió tener representantes en los que podía confiar para proteger sus intereses en los interminables conflictos que conformaban la vida política en las provincias.

Cuando Luis XVI subió al trono en 1774, la red de intendentes desplegados por las capitales de provincia y sus *subdélégués* (representantes o subdelegados), en ciudades más pequeñas se había convertido en algo habitual de la vida francesa. Entre sus funciones estaban mantener el orden público, vigilar la conservación de las carreteras y los puentes, nombrar y supervisar a los alcaldes locales y otros funcionarios, aprobar los presupuestos de las comunidades, desde las aldeas más pequeñas hasta los grandes gobiernos provinciales, y aplicar las nuevas leyes y edictos de Versalles. Los intendentes también cooperaban con la Iglesia para organizar el mantenimiento o nueva localización de sus edificios. Eran los ojos y oídos del gobierno en todo el país; enviaban informes regularmente sobre la situación en su región. Cuando se perdían las cosechas, o tenían lugar

desastres naturales o epidemias, los intendentes se encargaban de buscar y poner en marcha una solución. Los más enérgicos promovían con entusiasmo la actividad económica; alentaban a los habitantes de los pueblos a unirse para construir instituciones cívicas, como los teatros que eran el orgullo de las ciudades francesas, y apoyaban la creación de periódicos provinciales que podían ser una salida para autores y anunciantes locales. Arthur Young, un experto agrícola inglés que llevó a cabo una encuesta sobre la agricultura francesa, se quedó asombrado ante el «enorme poder» que tenían estos funcionarios que, según dijo, «intervenían en todo y de los que no se libraba nadie».[4] Él estaba acostumbrado a un sistema mucho más descentralizado, en el que los terratenientes locales dominaban el gobierno rural.

A través de la red de intendentes, la monarquía francesa parecía haberse dotado de un mecanismo moderno para gobernar a su población. Pero al joven Luis XVI le habrían enseñado que esta *bureaucratie* (burocracia) –la palabra se empezó a usar en la lengua francesa en 1759, cuando él tenía cinco años– tenía que coexistir con otras instituciones que a menudo complicaban su funcionamiento. Algunas de las provincias más importantes del país, como el extenso territorio de Languedoc en el sudoeste, y la península occidental de Bretaña, tenían estados provinciales. Se trataba de organismos compuestos por representantes de la nobleza local, el alto clero y las ciudades más importantes, que reivindicaban el derecho a compartir la administración de su región con el intendente. La historia de estos organismos se remonta a los días anteriores a la plena integración de sus regiones en el reino, y defendían celosamente los privilegios históricos de que habían gozado antes de formar parte de Francia. Cuando Bretaña se unió al reino en 1532, por ejemplo, se prometió a la población que no estaría sujeta a la *gabelle* (gabela), el impopular impuesto real sobre la sal que se recaudaba en el resto de Francia. Desde comienzos del siglo XVII, los funcionarios reales trataron de debilitar o incluso abolir los estados provinciales; en muchas provincias, estos consejos habían dejado de

reunirse durante un siglo o más. Sin embargo, en las que continuaron funcionando, los intendentes tuvieron que negociar con ellos la recaudación de impuestos y otras cuestiones.

Para el funcionamiento del gobierno francés, algo más importante todavía que los estados provinciales eran los tribunales soberanos, de los cuales los más significativos eran los trece *parlements* que se reunían en París y en las principales capitales de provincia. Tienen su origen en el siglo XIII –el Parlamento de París se había instaurado en 1278–, y recibían las apelaciones de los tribunales inferiores de todo el reino. Más aún, insistían en que era su deber verificar que las leyes y edictos reales no violaran los derechos fundamentales de los súbditos del rey, que cada monarca francés juraba solemnemente defender cuando se le coronaba. Los *parlements* sostenían que poseían el derecho de enviar *remontrances* (protestas) al rey, con críticas y objeciones a las nuevas leyes, y el derecho de retrasar la sanción de las leyes hasta que se atendieran sus quejas. En última instancia, los parlamentos reconocían que el rey tenía el poder de obligarlos a acatar las leyes a las que se oponían, pero sólo después de haber pasado por un complicado ritual, que se llamaba curiosamente *lit de justice* («cama de justicia»). Este procedimiento requería que el rey se presentara personalmente en el tribunal, o, en el caso de los parlamentos provinciales, que enviara a su representante para dar la orden a los jueces de que cumplieran. La puesta en escena de un *lit de justice* era un asunto que llevaba mucho tiempo, provocaba siempre agitación, y los ministros reales trataban de evitarlo.

La capacidad de los parlamentos para resistirse a las demandas reales estaba anclada en la profunda convicción, que compartían el rey y sus súbditos, de que la legitimidad de la monarquía absoluta dependía de que acatara las leyes. Los parlamentos también gozaban de una independencia considerable, ya que el rey no podía nombrar jueces que estuvieran de acuerdo con sus deseos, sin más. Desde finales del siglo XVI, la monarquía francesa había adoptado la costumbre de vender los cargos de los tribunales, y de otras instituciones, y permitir que sus compradores los legaran a sus herederos. Dichos cargos se conocían como oficios venales, y la práctica se

extendió y arraigó más en Francia que en cualquier otro país de Europa. La venta de oficios venales aumentaba los ingresos de la corona y reducía los gastos, ya que los titulares de dichos cargos no recibían más que un salario mínimo, que complementaban con el cobro de honorarios a los litigantes por la tramitación de sus casos. Para hacer más atractiva la compra de cargos judiciales, la monarquía concedió a sus representantes títulos hereditarios de nobleza. Al principio, los descendientes de los nobles guerreros de los siglos anteriores despreciaban a estos *nobles de robe* (nobles de toga) recién creados, cuyos títulos hacían referencia a la toga que llevaban en el tribunal. Pero a medida que la administración interna del reino se fue ampliando, y la noción de un Estado gobernado por leyes se hizo fundamental para la monarquía, los jueces de los parlamentos ganaron estatus social.

Para cuando Luis XVI llegó al trono, los jueces se habían convertido en los miembros más prestigiosos de la nobleza francesa, con la excepción de los llamados príncipes de sangre, que podían demostrar una ascendencia real directa. El de París era el más importante, pero los otros doce parlamentos ubicados en las provincias a menudo se expresaban más abiertamente que sus colegas de la capital. El obstinado Luis XIV había logrado prohibir que los parlamentos emitieran protesta alguna hasta que se hubieran aprobado los decretos del propio rey; así impedía que se retrasara la aplicación de las nuevas leyes. Sin embargo, cuando Luis XIV murió en 1715, dejando el trono a su bisnieto de cinco años, Luis XV, los jueces aprovecharon la debilidad de la monarquía para recuperar ese derecho a retrasar las nuevas leyes mientras discutían sobre sus disposiciones.

Un defensor de los parlamentos fue el barón de Montesquieu, un magistrado en el Parlamento de Burdeos y el pensador político más influyente de la Francia del siglo XVIII. En *El espíritu de las leyes*, su ensayo crítico sobre las instituciones políticas, Montesquieu ofrecía argumentos de peso a favor de la división de poderes como una forma de evitar que los gobernantes actuaran como tiranos. Montesquieu era un gran admirador de la monarquía constitucional de Gran Bretaña, en la que el Parlamento limitaba el poder del rey, y sus ideas tuvieron una poderosa

influencia en los colonos americanos cuando redactaron su propia Constitución revolucionaria. En Francia, decía Montesquieu, los tribunales, con sus jueces que no podían ser expulsados de los cargos que habían comprado o heredado, hacían de freno al poder del rey. Aunque no se les había elegido, los jueces convirtieron los parlamentos en lo que Montesquieu llamó «organismos intermediarios» entre el monarca y sus súbditos.

Montesquieu fue más que un defensor de los parlamentos aristocráticos: fue uno de los muchos escritores que empezaron a hacer preguntas sobre las características fundamentales de la sociedad francesa. En los mismos años en que el joven Luis XVI copiaba diligentemente las reglas del absolutismo, estos *philosophes*, como se llamaban a sí mismos, colaboraban en un proyecto que, según afirmó su editor principal, Denis Diderot, estaba destinado, a provocar «una revolución en la mente de los hombres». Prometió que «no sería en beneficio de tiranos, opresores, intolerantes y fanáticos».[5] El éxito de su proyecto, la *Encyclopédie*, fue tan grande que incluso Luis XVI, como hemos visto, utilizó parte de su propio dinero para comprar una. Sus editores, Diderot y el matemático Jean Rond d'Alembert, eran representantes de una generación cuyos pensadores no aceptaban dogmas religiosos o políticos sin examinar sus fundamentos. Se dedicarían a hacer del mundo un lugar mejor, aunque eso significara reformar o abolir las instituciones tradicionales.

D'Alembert y Diderot concibieron su proyecto no sólo como una recopilación de información, sino como una oportunidad para aplicar los principios de la razón y la observación empírica a todos los temas, desde los procesos de fabricación hasta las doctrinas religiosas. Las enciclopedias eran uno de los nuevos medios por los que la información y las ideas se hacían accesibles a un público cada vez más grande en el siglo XVIII. La larga y tortuosa historia de la publicación de la obra, que se prolongó durante más de veinte años, desde 1751 hasta 1772 –año en que salió el último volumen de ilustraciones–, era la prueba del delicado equilibrio que

había entre los partidarios del cambio y sus oponentes en la Francia de mediados del siglo XVIII. Los funcionarios del gobierno intervinieron en ocasiones para apoyar la publicación de la *Enciclopedia* y en otras para poner obstáculos a su aparición. Al final, dejaron que siguiera adelante, pero sin reconocer su legalidad. Desde el inicio del proceso hasta su finalización, la *Enciclopedia* fue objeto de intensos debates en todos los medios de comunicación de la época. Se hablaba del tema en los salones de París; se denunciaba y se defendía en panfletos, periódicos y boletines manuscritos; se ensalzaba o se ridiculizaba en el teatro. Fue un proyecto que puso de relieve tanto el creciente poder de la opinión pública como la profundidad de las divisiones en Francia sobre temas como la religión y la política. Sin embargo, al final, la respuesta a la obra fue tan entusiasta que no se pudo detener su difusión. En 1789, la existencia de ediciones baratas de pequeño formato permitía que casi cualquier persona que supiera leer en Francia tuviera acceso a ella.

Las ideas que se transmitían en los artículos más polémicos de la *Enciclopedia* eran las de la Ilustración europea. En su «Discurso preliminar», D'Alembert alababa a una serie de pensadores que, en su opinión, habían mostrado el poder de la razón para escapar del dogma religioso y otras cuestiones erróneas, y destacaba especialmente a los filósofos y científicos del siglo XVII, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton y John Locke. No mencionaba a figuras más radicales que habían cuestionado explícitamente las bases de la religión, como el judío holandés Baruch Spinoza, pero muchos de los colaboradores de la *Enciclopedia* conocían sus ideas y las simplificaciones de las mismas que habían circulado clandestinamente por toda Europa durante medio siglo, como el radical *Tratado de los tres impostores*, en el que se afirmaba que Moisés, Jesús y Mahoma eran unos charlatanes que se habían propuesto engañar deliberadamente a sus seguidores.

Cuando se lanzó la *Enciclopedia*, las ideas que popularizaría ya habían sido articuladas por varios autores franceses importantes. El más famoso

fue Voltaire, el hijo ilegítimo de un noble, que había suplido su baja posición social con sus escritos. Su mayor talento era la capacidad que tenía para presentar ideas serias con palabras ingeniosas; la historia lo recuerda sobre todo como un maestro de la ironía y la sátira. Para el propio Voltaire, la gran causa de su vida fue la campaña contra la religión revelada, y especialmente contra la intolerancia religiosa. Voltaire insistía en que creía en la existencia de Dios, pero su deidad abstracta e impersonal era un relojero que creó el universo y luego lo dejó funcionar por sí mismo. «Cuando Su Alteza envía un barco a Egipto, ¿se preocupa de que los ratones que hay en el barco estén cómodos?», pregunta un personaje de *Cándido*, la novela de Voltaire. Así expresaba su convicción de que los humanos no tienen otra opción que «cultivar sus jardines» sin la guía divina.[6] Voltaire era menos radical en la política que en la religión; de hecho, tenía más fe en la posibilidad de inculcar ideas racionales a los gobernantes que de educar a la gente común. Voltaire escribió numerosos artículos para la *Enciclopedia*, aunque también criticó a sus editores por ser demasiado timoratos. Usó su propio *Dictionnaire philosophique* para hacer declaraciones más radicales sobre muchos temas.

El nombre de Voltaire se unió a menudo al de Montesquieu, cuya obra maestra, *El espíritu de las leyes*, apareció mientras la *Enciclopedia* estaba en marcha. En ella, Montesquieu sugería que no había un modelo único de legislación, o «constitución», que fuera apropiado para todas las sociedades, y que las instituciones diferían necesariamente según las costumbres nacionales, el clima y otras variables. Daba una imagen favorable de la monarquía británica, de la que admiraba la división de poderes entre el rey y el Parlamento como protección de la libertad. Los comentarios de Montesquieu sobre Francia eran más críticos. A falta de un verdadero equivalente del Parlamento británico, en su opinión, Francia dependía del sentido del honor de su aristocracia, lo que le impedía someterse servilmente a un gobierno arbitrario, y de «organismos intermediarios», como los tribunales de los parlamentos –Montesquieu era miembro del Parlamento de Burdeos–, que imponían ciertas restricciones al rey. La pregunta que se hacía Montesquieu era si estas restricciones serían siempre

suficientes para evitar que Francia pasara de la monarquía al despotismo, que era el tipo de gobierno que Montesquieu identificaba con los estados no europeos como Turquía y China. Los colaboradores de la *Enciclopedia* se inspiraron libremente en *El espíritu de las leyes*, a veces copiando pasajes enteros de la obra de Montesquieu.

La relación que tenía el tercer miembro de la trinidad de celebridades de la Ilustración francesa, Jean-Jacques Rousseau, con la *Enciclopedia* era bastante diferente a la de Voltaire o Montesquieu. Cuando se estaba organizando el proyecto a finales de los años 1740, Rousseau era un amigo cercano de Diderot. Diderot le reclutó para escribir la mayoría de los artículos de la *Enciclopedia* sobre música. Un día que Rousseau iba a visitar a Diderot a la cárcel durante su encarcelamiento en 1749, tuvo una inspiración y se le ocurrió el argumento sobre el efecto moralmente corruptor de la civilización que convertiría su *Discurso sobre las ciencias y las artes* –publicado en 1750– en un éxito. Para Diderot, el argumento de Rousseau era un *jeu d'esprit*, una paradoja que difícilmente podía tomar en serio alguien comprometido con la *Enciclopedia*, que era una publicación que celebraba el avance de la ciencia y la tecnología. Para Rousseau, sin embargo, la crítica de la civilización que presentó en su premiado ensayo se convirtió en una pasión desenfrenada. Trató de estructurar no sólo su pensamiento, sino su vida, alrededor de las ideas que había avanzado en este trabajo.

Cuando la *Enciclopedia* estaba por la mitad, Rousseau había pasado a ser uno de sus más vehementes detractores, lo que llevó a la ruptura con D'Alembert y Diderot. Las opiniones religiosas de Rousseau hicieron que este enfrentamiento fuera todavía más grave. Igual que Voltaire y Montesquieu, Rousseau se oponía a la religión organizada, pero no podía aceptar la idea de una deidad abstracta indiferente al destino humano. «He sufrido demasiado en esta vida para no esperar que haya otra», escribió en una carta a Voltaire, que ponía en duda la idea de un Dios benefactor.[7] Sus críticos racionalistas lo denunciaron por abrir la puerta a una vuelta a la fe

religiosa y a la intolerancia. Mientras tanto, los críticos conservadores de la *Enciclopedia* seguían situándolo en el mismo montón que sus antiguos socios como un peligroso enemigo de la ortodoxia establecida.

La originalidad subversiva de la *Enciclopedia* fue presentar las ideas de sus predecesores del siglo XVII y de las grandes mentes de las letras francesas del XVIII como si no fueran otra cosa que sentido común, verdades tan evidentes que se podían exponer sin temor a la contradicción. La premisa fundamental de todo el contenido de la *Enciclopedia* era que la razón humana, característica compartida por todos, era suficiente para explicar el mundo y mejorar la vida de las personas. Un diagrama del «árbol del conocimiento» clasificaba todas las ramas del conocimiento como fruto de tres facultades mentales básicas: la memoria, la razón y la imaginación. En el diagrama, el «conocimiento de Dios» se agrupaba con el «conocimiento de los espíritus buenos y malos», la «adivinación» y la «magia negra», sugiriendo que había poca diferencia entre religión y superstición. La categoría de «ética», una rama que salía de la del «conocimiento del hombre», era suficiente, según el diagrama, para proporcionar «conocimiento del bien y del mal» y para demostrar «la necesidad de ser virtuoso».[8]

Para burlar a los censores reales y eclesiásticos, cuya aprobación era necesaria para que la *Enciclopedia* se publicara en París y se vendiera sin interferencias, Diderot desarrolló una astuta estrategia. Las entradas sobre temas claramente sensibles, como «cristianismo», se redactaron con sumo cuidado para no herir susceptibilidades. Pero las referencias cruzadas que podía haber en esa entrada llevaban a los lectores a otros artículos menos ortodoxos. La entrada sobre «milagros», por ejemplo, resumía el argumento de Spinoza de que Dios no podía hacer que ocurriera algo contrario a las leyes de la naturaleza. El ensayo sobre «tolerancia», que también aparecía bajo «cristianismo», ponía en duda la capacidad de los seres humanos para llegar a una completa certeza sobre cualquier cosa, incluida la verdad religiosa, y sugería que, teniendo en cuenta la naturaleza intolerante del

cristianismo, nadie podía culpar a «un príncipe de Asia o del Nuevo Mundo por ahorcar al primer misionero que enviamos para convertirlo», para evitar que causara conflictos entre su pueblo.

En su artículo sobre «autoridad política», Diderot socavó las bases del absolutismo real insistiendo en que «ningún hombre ha recibido de la naturaleza el derecho a mandar sobre otros». Otro colaborador, Paul-Henri Thiry, barón de Holbach, insistió en que el gobierno legítimo requería que la nación hubiera elegido libremente representantes para defender sus intereses. Además de la entrada «nación», su artículo sobre «representantes» utilizaba palabras como «ciudadanos» y «Asamblea Nacional», que se convertirían en conceptos clave en la era revolucionaria. Su insistencia en que la representación debía limitarse a «los individuos que son ciudadanos en virtud de sus posesiones y cuyo estatus e ilustración les permite conocer los intereses de la nación y las necesidades del pueblo» mostraba, sin embargo, que ni siquiera los *philosophes* más radicales estaban preparados para acoger la democracia política.[9] La desconfianza de Holbach hacia los pobres –la mayoría de la población– era algo que compartían muchos legisladores revolucionarios.

Aunque Holbach trazaba una clara distinción entre los propietarios y los pobres, quería romper las barreras entre nobles, clero y plebeyos: cualquiera que poseyera una propiedad significativa, especialmente tierra, debería poder votar y servir como representante. Otro colaborador fue François Quesnay, que había inventado el eslogan *laissez faire, laissez passer*, para resumir su enseñanza de que se debe permitir que los individuos hagan lo que quieran con sus recursos económicos. Sus artículos sobre «agricultores» y «grano» expresaban las ideas de la peculiar escuela francesa de pensamiento económico conocida como fisiocracia (o «gobierno de la naturaleza», desde sus raíces griegas) que él había ayudado a fundar y que favorecía el comercio sin restricciones. Las contribuciones de Quesnay instaron a que las políticas gubernamentales favorecieran «que las grandes granjas fueran extensamente desarrolladas por los agricultores ricos», con los que contaba para adoptar nuevos métodos productivos. Al igual que Holbach, Quesnay tenía poco respeto por los pobres. «Es [...] muy

negativo acostumbrar a la gente a comprar trigo a un precio demasiado bajo», escribió. «No trabajan tanto, viven de pan barato y se vuelven perezosos y arrogantes». Sin embargo, como ocurrió a menudo con la *Enciclopedia*, sus colaboradores discrepaban enérgicamente entre ellos sobre este asunto. «¿Quién creería que, en nuestros días, alguien se atrevería a proponer esta máxima [...] de que tales hombres no deben vivir cómodamente, para hacerlos trabajadores y obedientes?», exigió el caballero Louis de Jaucourt en su artículo «pueblo».[10]

Junto con la libertad política y económica, los colaboradores de la *Enciclopedia* plantearon importantes cuestiones sobre la igualdad. Jaucourt, un trabajador incansable que escribió más artículos que cualquier otro colaborador, argumentaba que «la igualdad natural es la que existe entre los hombres únicamente por la constitución de su naturaleza. Esta *igualdad* es el principio y fundamento de la libertad». Donde la igualdad estaba en riesgo, «los príncipes, los cortesanos, los principales ministros, los que controlan las finanzas, poseen todas las riquezas de la nación», decía, «mientras que el resto de los ciudadanos sólo tiene las necesidades de la vida, y la gran mayoría de la gente gime en la pobreza». Sin embargo, para que nadie pensara que estaba llamando a una agitación social, Jaucourt se apresuró a añadir: «Únicamente hablo aquí de la *igualdad natural* de los hombres. Conozco demasiado bien la necesidad de diferentes rangos, grados, honores, distinciones, prerrogativas, subordinaciones que deben prevalecer en todos los gobiernos». Sin embargo, había sacado a la luz una crítica de la desigualdad que se repetiría muchas veces después de 1789. En su entrada sobre la «mujer», Jaucourt incluso abordó la idea de que «sería difícil demostrar que la autoridad del marido proviene de la naturaleza, porque este principio es contrario a la igualdad natural de la humanidad».[11]

El tema de la mujer puso de manifiesto la diversidad de opiniones entre los *philosophes*. «La mujer, debido a la fragilidad de su sexo y a su delicadeza natural, está excluida de muchas funciones e incapacitada para ciertas actividades», afirmaba el principal jurista de la redacción, Boucher

d'Argis, mientras que otro colaborador deploraba la habilidad que tenía la mujer para el disimulo y su inclinación al coqueteo, y la instaba a encontrar la felicidad en «los deberes de esposa y madre». El artículo de Diderot sobre el «disfrute» era un elogio del placer sexual, el cual «exigen imperiosamente ambos sexos tan pronto como se les concede su cuota de fuerza y belleza». Sin embargo, aceptó la idea de que «la perpetuación de la especie es el mayor objeto de la naturaleza», lo que implica que el coito heterosexual sea la única expresión aceptable de este instinto, y que la maternidad resulte una obligación femenina.[12]

Los colaboradores de la *Enciclopedia* estaban tan poco de acuerdo en lo que se refería a la igualdad racial y la esclavitud como en todo lo relacionado con la condición de la mujer. El artículo de Jaucourt sobre la trata de esclavos era bastante franco: «Esta compra de negros, para reducirlos a la esclavitud, es un negocio que viola la religión, la moral, las leyes naturales y los derechos de la naturaleza humana», escribió. «Es mejor destruir las colonias europeas antes que hacer desgraciadas a tantas personas». Sin embargo, el artículo de Samuel Formey sobre el «negro» ponía en duda que los blancos y los negros fueran miembros de la misma especie y hablaba de la «fealdad» de estos últimos. Un artículo anónimo sobre el «comercio de negros» justificaba la venta de esclavos y advertía a los posibles compradores de africanos esclavizados que «su naturaleza ruda requiere que uno no los trate con demasiada indulgencia».[13]

La igualdad, en un sentido más abstracto, también era el asunto central en el artículo ampliamente comentado sobre «economía política», que escribió Jean-Jacques Rousseau. Muchas de las ideas clave de *El contrato social*, el conocido ensayo político de Rousseau, aparecían ya en este artículo, en particular su doctrina de la «voluntad general», la percepción de qué era lo que mejor servía a los propósitos de una comunidad. La voluntad general, expresada en forma de ley, decía, prevalece sobre todos los intereses particulares de los individuos y de los subgrupos sociales. «La primera y más importante máxima del gobierno legítimo o popular, es decir, del gobierno cuyo objeto es el bien del pueblo, es, por lo tanto, como he dicho, seguir en todo la voluntad general», escribió Rousseau. Dado que

todos los miembros de un Estado deben, en última instancia, anteponer el interés de éste a sus preocupaciones privadas, podrían encontrarse en la situación de que el Estado «hiciera valer su consentimiento sobre su propia negativa», pero seguirían siendo libres. Para ser legítimo, el Estado debe tratar a todos los ciudadanos por igual. Dicho Estado sólo podría prosperar si sus ciudadanos estuvieran imbuidos de virtud, la voluntad de poner el interés general por encima de sus propios deseos egoístas. La igualdad abstracta de los ciudadanos requería tanta igualdad social genuina como fuera posible: «Por lo tanto, una de las preocupaciones más importantes del gobierno es evitar la extrema desigualdad de las fortunas», escribió Rousseau.[14]

Preocupados por las tendencias librepensadoras de muchos de los enciclopedistas, los funcionarios conservadores y los católicos devotos no se dejaron engañar por las precauciones retóricas de Diderot. Pero D'Alembert y Diderot también encontraron importantes aliados en los más altos círculos del gobierno. Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes, el jefe de la oficina real de censura, trabajó incansablemente entre bastidores para llevar el proyecto adelante y proteger a sus participantes. Madame de Pompadour, cuya relación adúltera con Luis XV la involucró en el conflicto con la Iglesia, también ofreció un discreto apoyo. Los contactos que tenían D'Alembert y Diderot en los distintos salones de la capital, adonde acudían regularmente, ayudaron a crear una red de simpatizantes influyentes. Los debates sobre la *Enciclopedia*, que tenían lugar no sólo en los salones aristocráticos, sino también en los cafés, cada vez más numerosos, y en salas de lectura de las ciudades francesas, eran un tema jugoso para el fenómeno invisible pero muy real de la opinión pública, que cada vez tenía más importancia como fuerza de configuración de la cultura.

A pesar de lo importante que eran la *Enciclopedia* y otras publicaciones impresas a la hora de influir en las ideas de la ciudadanía, otros medios, especialmente el teatro, también lo eran. Quedó claro que las obras podían

tener un impacto político con el éxito arrollador que tuvo el drama histórico, *Le Siège de Calais (El sitio de Calais)*. El texto convertía un episodio de la Guerra de los Cien Años en una declaración contra Inglaterra. La obra de Pierre-Laurent de Belloy se representó por primera vez en 1765 y tuvo una poderosa acogida por la humillación que había sufrido Francia en la reciente Guerra de los Siete Años. «Las representaciones de *El sitio de Calais* fueron todo un acontecimiento, y parecieron causar una revolución. [...] Revelaron a los franceses el secreto de su amor por el Estado», escribió un comentarista del siglo XVIII. Además de editar la *Enciclopedia*, Diderot era dramaturgo y creía firmemente en el poder del escenario para transformar a la audiencia. Sus «dramas burgueses» presentaban personajes cuya vida y discurso se asemejaban a los de su público en lugar de los reyes y reinas del drama clásico francés. Diderot prometía a sus espectadores «¡situaciones habituales!»; juraba que pondría en escena «al hombre de letras, al filósofo, al comerciante, al juez, al abogado, al político, al ciudadano, al financiero, al gran señor, [y] al intendente», y haría un drama de las relaciones familiares ordinarias.[15]

Fue el teatro lo que provocó la ruptura definitiva entre Rousseau y los otros *philosophes*. Se escandalizó por un artículo del coeditor del proyecto, D'Alembert, sobre Ginebra, donde había nacido Rousseau, en el que sugería que la vida de la ciudad mejoraría si tuviera un teatro como el de París. En su *Carta a D'Alembert sobre los espectáculos*, Rousseau presentaba como modélicos a los sencillos campesinos suizos y a la antigua República griega de Esparta, donde todos los ciudadanos se habían dedicado por completo al bien público y no a sus propios intereses y placeres privados. Además, en Esparta se habían mantenido rigurosamente los diferentes papeles que desempeñaban hombres y mujeres, una distinción que se rompió en el teatro, donde los sexos se mezclaban. Un pueblo libre, sostenía Rousseau, reemplazaría el teatro por fiestas públicas en las que todos pudieran participar, una idea que los revolucionarios pondrían en el centro de su proyecto. Esta polémica de Rousseau era una crítica mordaz tanto a la *Enciclopedia* como a la sociedad de la que había surgido. Durante la Revolución, los devotos de Rousseau, como Maximilien Robespierre, se

harían eco de su denuncia de los intelectuales racionalistas y de la sociedad comercial, y de su glorificación de la vida sencilla de los pobres.

Otro filósofo, Gabriel Bonnot de Mably, llevó aún más lejos la idealización de Rousseau de los gobiernos republicanos. La visión de Mably de una buena sociedad era una en la que todos ponían el interés público por delante de sus preocupaciones privadas. «Que cada ciudadano se dedique a la defensa de su país, que pase algún tiempo cada día practicando con sus armas y que toda la ciudad adquiera la disciplina de un campo armado», escribió Mably en su exitoso *Entretiens de Phocion (Entrevistas con Foción)*, publicado en 1763. «Esta política no sólo le proporcionará soldados invencibles, sino que también dará una nueva fuerza a las virtudes cívicas».[16]

A Rousseau le daba miedo la influencia que ejercía el teatro sobre la sociedad, y no le faltaba razón. Las representaciones teatrales unían a la gente, promoviendo el intercambio social y la discusión. En el escenario, las actrices eran iguales a sus colegas masculinos y, de hecho, las mujeres intérpretes más famosas a menudo recibían una remuneración mayor que los hombres protagonistas. En el público se mezclaban las clases sociales. Los nobles y los burgueses ricos reservaban asientos de palco, pero la gente del mundo de Jacques Ménétra podía pagar para estar de pie o sentarse en los bancos del *parterre*, la parte del auditorio directamente frente al escenario. Durante el reinado de Luis XV, la pasión por el teatro se extendió por todo el reino y los lugareños ayudaban a financiar la construcción de los palcos. En las ciudades coloniales, se crearon secciones especiales de asientos para las personas de color, pero que eran libres, e incluso para los negros esclavizados. Independientemente de su estatus social, los espectadores asumían el derecho a expresar su opinión sobre la representación que estaban viendo; abucheaban fervientemente o interrumpían para exigir que se repitieran las partes que más les habían gustado. El público del teatro era como una encarnación viva de la noción abstracta de opinión pública.

Además de los teatros, las autoridades vigilaban otros lugares donde se reunía la gente común y tomaban nota de lo que decían. En una época en la

que todavía no existían las encuestas, la vigilancia policial era una forma de evaluar el estado de ánimo de la gente y anticiparse a los problemas antes de que éstos comenzaran. En París especialmente, una red de agentes remunerados informaba regularmente de cualquier «comentario negativo» que oyeran en las calles, mercados y lugares populares donde se reunían los trabajadores a beber. La policía sabía que los espacios públicos, como los jardines de las Tullerías cerca del Louvre y los jardines de Luxemburgo en la orilla izquierda del Sena, eran lugares donde se reunía la gente que quería intercambiar chismes sobre los últimos acontecimientos políticos. En las esquinas y los puentes de la ciudad, los artistas cantaban baladas improvisadas sobre los acontecimientos recientes; a veces ofrecían a los transeúntes folletos ilustrados que combinaban reportajes, ilustraciones y letras de canciones para que los compradores pudieran hacer su propia música. Al otro lado de las puertas de registro, donde se revisaban los alimentos y el vino destinados a la ciudad, para cobrar el portazgo correspondiente, los empresarios establecían cabarets que vendían vino libre de impuestos a precios de ganga. Las multitudes que acudían al más famoso, el de Ramponeau, procedían de un amplio espectro de la sociedad; aquí, los aristócratas podían encontrarse compartiendo experiencias con el exótico mundo de la gente corriente, ya fueran burgueses o las clases bajas. Una popular canción para beber honraba «al ilustre Ramponeau, apreciado por todo París, / que ofrece buen vino y chicas que no ponen pegas».[17] La burda «cultura de la risa» que emanaba de Ramponeau también caracterizaba a los informales «teatros de bulevar» de las avenidas recién construidas en la creciente ciudad. Un personaje que se hizo conocido en las representaciones de los teatros de bulevar, el malhablado Père Duchêne, inspiraría al periódico popular más exitoso de los años de la Revolución francesa.

Aunque los debates en torno a las ideas radicales eran acalorados, no tuvieron un impacto tan inmediato durante los años de la adolescencia de Luis XVI como los enfrentamientos entre los ministros del rey y los

parlamentarios. A lo largo de estos años, los jueces se volvieron cada vez más críticos con la monarquía. Más concretamente, se presentaron como defensores de una secta purista dentro de la Iglesia católica francesa conocida como los jansenistas. También afirmaban ser los protectores de los contribuyentes contra los intentos de los ministros del rey para aumentar los ingresos del gobierno. Aunque se suponía que las protestas de los jueces, su principal arma en estos conflictos, eran comunicaciones secretas con el rey, los parlamentarios se volvieron cada vez más descarados al publicar sus denuncias de la arbitrariedad del poder real. Como resultado, cada vez más ciudadanos pudieron leer estos textos, en los que los jueces advertían que las acciones del gobierno amenazaban las leyes básicas del reino y los derechos de los súbditos.

La controversia jansenista fue una larga batalla que se remontaba al siglo XVII, cuando algunos católicos franceses se sintieron atraídos por las austeras enseñanzas de un teólogo belga, Cornelius Jansen, que criticaba al papado por respaldar doctrinas religiosas que dejaban demasiado margen para el laxismo moral. Tanto Luis XIV como el papado consideraban que los jansenistas eran un peligro. Su doctrina de la predestinación socavaba la autoridad de los sacerdotes para guiar el comportamiento de sus feligreses, ya que, según los jansenistas, la forma en que la gente se comportaba no tenía ninguna relación con sus posibilidades de salvación. Desde el punto de vista del rey, los jansenistas animaban a la gente a pensar por sí mismos en cuestiones religiosas, una práctica que podía tener consecuencias políticas indeseables.

Durante gran parte del siglo XVIII, los intentos que hacía la jerarquía eclesiástica para obligar a los jansenistas del país a renunciar a sus convicciones fue el tema que más dividió a la gente en la vida francesa. La disputa se entremezcló con los derechos de los parlamentarios para desafiar al poder real, ya que los jueces se presentaron repetidamente como defensores de los jansenistas. Abogados simpatizantes argumentaron que los súbditos católicos del rey tenían derecho a apelar a los tribunales reales contra el clero antijansenista y contra la injerencia de un poder «extranjero» –el papado– en Francia. A diferencia de lo que sucedía en las colonias

británicas de América del Norte, donde la libertad religiosa se identificaba con la separación entre Iglesia y Estado, en Francia la libertad religiosa se definía como un valor que debía defenderse a través del Estado, si era necesario contra la propia Iglesia.

Las pasiones que despertó la disputa jansenista alcanzaron su punto álgido en el último cuarto de siglo del reinado de Luis XV, en 1749, cuando el arzobispo de París dio orden a los sacerdotes de que negaran los sacramentos católicos a todo aquel que no renunciara a los principios de la secta. En 1761, un caso de bancarrota relacionado con los negocios de la orden jesuita dio a los jansenistas más munición. El proceso judicial sacó a la luz una copia de la «constitución», o reglas, de los jesuitas, enemigos acérrimos de los jansenistas. El Vaticano había mantenido este documento jesuita en secreto desde la fundación de la orden. La revelación de que los sacerdotes jesuitas tenían que hacer un juramento de obediencia incondicional al Papa permitió a sus oponentes retratarlos como subversivos potenciales, cuya primera lealtad no era al rey ni a las leyes de Francia, sino a la Iglesia. Un renuente Luis XV se encontró incapaz de defender a los jesuitas sin parecer que socavaba los principios mismos del absolutismo que justificaban su autoridad. En 1764, firmó un decreto para expulsar a los jesuitas de Francia.

Los parlamentos de Luis XV se presentaban como defensores de la libertad religiosa de los súbditos del rey, y se oponían cada vez más a la tributación arbitraria y a los préstamos excesivos del gobierno. El coste inmenso que tuvo la Guerra de los Siete Años a finales de los años 1750 y principios de los 1760, obligó al gobierno a hacer lo que fuera para obtener nuevos ingresos y esto trajo consigo una serie de enfrentamientos con los tribunales. En 1760, el Parlamento de Ruan en Normandía instó a Luis XV a «ayudar [...] a los pueblos que sucumben bajo el peso insoportable de los impuestos; son sus lágrimas las que les presentamos».[18] La retórica que los jueces parlamentarios utilizaron en este caso se asemejaba al tipo de argumentación que se estaba perfeccionando en las colonias británicas de América del Norte en estos mismos años. Los magistrados insistían en que los ciudadanos franceses tenían derechos y estaban legitimados para

defenderlos, no eran simples súbditos que tenían que doblegarse a la voluntad de su monarca. Los parlamentarios comenzaron a utilizar la palabra «nación» para describir a la colectividad de los ciudadanos, e insistían en que la «nación» tenía derechos, incluido el derecho a que se la escuchara en materia de impuestos.

Evidentemente, ninguno de los parlamentos convocó elecciones ni ningún otro mecanismo por el que la población pudiera expresar realmente sus deseos. Los jueces insistían en que ellos eran los representantes de la nación; durante el decenio de 1750, los jueces de los distintos tribunales habían empezado a afirmar que no eran más que partes geográficamente separadas de un único cuerpo que constituía una especie de Asamblea Nacional. El hecho de que también fueran ricos y privilegiados y tuvieran un gran interés personal en evitar la subida de impuestos hizo que los ministros reales los vieran con escepticismo. Un memorando los denunciaba como una élite egoísta, hombres que intentaban proteger su propia fortuna estableciéndose como «un tribunal nacional que mantiene el equilibrio entre el rey y la nación». No obstante, las proclamaciones de los jueces, que se imprimían y se difundían de forma sistemática, a pesar de las prohibiciones reales, hicieron que el público conociera la afirmación de que la tributación debe implicar el consentimiento y la representación. Luis XVI era muy consciente del peligro que tenían las reivindicaciones de los parlamentarios, que se expresaban con más fuerza que nunca durante los años de su infancia. «Son tribunales de justicia creados por nuestros reyes», escribió en su cuaderno, enfatizando su subordinación al poder real. «No son en absoluto representantes de la nación».[19]

Cuando Luis era adolescente y se estaba adaptando a su matrimonio con María Antonieta, las lecciones que le habían enseñado sobre las peligrosas pretensiones de los parlamentos adquirieron de repente una gran relevancia. Cuando a Luis XV se le acabó la paciencia con el desafío de los jueces, lanzó un asalto tan drástico a los parlamentos que los contemporáneos lo llamaron «revolución». Los tribunales se negaron a registrar los edictos

fiscales reales precisos para producir los ingresos que se necesitaban para pagar las deudas de la Guerra de los Siete Años. Una amarga disputa con el Parlamento de Bretaña llegó hasta el punto de que el Parlamento de París llevó a juicio al comisario del rey, el duque d'Aiguillon, por violar los derechos de la provincia. Luis XV y sus consejeros recordaron que la Revolución inglesa que le había costado la cabeza a Carlos I había comenzado con el juicio político y el proceso de uno de los ministros de Carlos por el Parlamento; el propio D'Aiguillon advirtió al rey de que, si le declaraban culpable, el Parlamento habría sentado un precedente que le permitiría condenar «a todos aquellos que hayan actuado bajo órdenes, ministros, comandantes, intendentes, comisarios».[20] Los jueces se indignaron cuando el rey invocó sus poderes absolutos para poner fin al juicio de D'Aiguillon y declararlo inocente.

Cuando los jueces de París denunciaron la intervención del rey, el gobierno contraatacó con un «edicto de disciplina» que daba la orden de que pusieran fin a sus protestas. Como habían hecho en varias ocasiones anteriores, la respuesta de los parlamentarios fue ponerse en huelga y negarse a cumplir sus funciones judiciales. El canciller René Maupeou, ministro real que supervisaba el sistema judicial, se comprometió a acabar con esta resistencia. Su plan, a menudo llamado el «golpe Maupeou», era sencillo. En la noche del 20 al 21 de enero de 1771, soldados armados llamaron a las puertas de los jueces del Parlamento de París y les ofrecieron dos opciones: prometer por escrito que obedecerían las órdenes del rey o enfrentarse al exilio en remotas ciudades de provincia y a la confiscación de sus valiosos cargos judiciales. Si decidían no cumplir, se nombrarían nuevos jueces para sustituirlos. Los nuevos jueces tendrían que someterse a las políticas reales y tendrían que aceptar dejar de insistir en su derecho a emitir protestas o a obstruir las acciones ministeriales.

Para los partidarios de los parlamentos, el golpe de Maupeou amenazó la base misma de la libertad francesa. Si los ministros del rey pudieran simplemente reemplazar las instituciones establecidas desde hace mucho tiempo, como los parlamentos, por otras diseñadas para seguir las políticas que el gobierno quisiera llevar a cabo, afirmaban, no habría control sobre el

arbitrario poder real. «No hay nada sagrado en el Estado que no se pueda anular por este medio», escribió un panfletario. Incapaces de impedir la detención de los jueces, los defensores de los parlamentos inundaron el país con folletos que denunciaban a Maupeou. Estos panfletos introdujeron nuevos términos en el vocabulario político francés que estaban destinados a desempeñar un papel importante en la Revolución francesa: bautizaron el movimiento proparlamentario como «el partido del patriotismo» y dijeron que sus defensores estaban decididos a combatir el «despotismo político». Los abogados y secretarios de los tribunales, que dependían de la buena voluntad de los jueces, apoyaron a los parlamentarios exiliados negándose a participar en los procedimientos de los nuevos tribunales. Ningún abogado se presentó en la primera sesión del Parlamento sustitutorio de Maupeou. Según una anécdota que se repitió a menudo, cuando se oyó ladrar a un perro, «alguien gritó: "Hay un abogado dispuesto a hacer alegaciones"».[21]

Al asalto de Maupeou a los parlamentos se añadió un esfuerzo descomunal para ocuparse de las finanzas del gobierno. Un nuevo ministro de Finanzas, el abate Terray, rechazó parcialmente la deuda real y reimpuso las tradicionales restricciones al comercio de cereales que se habían levantado durante la década de 1760. En los primeros años, Luis XV había mostrado una reticencia a impulsar políticas controvertidas. Sin embargo, en este caso, con la columna vertebral endurecida por la última y más controvertida de sus amantes, Madame du Barry –cuyo ascenso, a pesar de sus orígenes humildes y del rumor generalizado de que había sido una prostituta profesional, ofendió profundamente a muchos cortesanos tradicionales–, el rey se mantuvo firme en su apoyo a sus ministros.

A principios de 1774, tres años después del inicio del golpe de Maupeou, la resistencia comenzaba a debilitarse. La mayoría de los abogados aceptaron finalmente aparecer en los nuevos tribunales y algunos de los antiguos jueces parlamentarios finalmente cedieron su puesto o incluso aceptaron un nombramiento en los nuevos tribunales. Maupeou había demostrado que, ante una acción decidida, los parlamentos no podían mantener su papel de

«organismos intermediarios» que limitaban los poderes del rey que sus defensores habían reivindicado para ellos. Las medidas de Terray habían logrado que el gobierno superara lo peor de la crisis financiera y D'Aiguillon, nombrado ministro de Asuntos Exteriores, había dado una dimensión internacional al golpe, al apoyar al rey sueco, Gustavo III, cuando éste tomó medidas similares para limitar los poderes del Parlamento de su país en 1772. Quienes temían las consecuencias del absolutismo desenfrenado se dieron cuenta de que se necesitarían instituciones más poderosas que los parlamentos, y con una conexión más directa con la población, para equilibrar el poder de la monarquía.

Si Luis XV hubiera vivido unos años más, sus ministros habrían logrado dar a la monarquía francesa poderes que le habrían permitido hacer frente a las crisis que llevarían a la Revolución de 1789. Un gobierno real más fuerte y más autoritario podría haber reaccionado más eficazmente a los renovados problemas fiscales que se desarrollaron en el decenio de 1780, y los esfuerzos por hacer realidad los ideales de libertad e igualdad se habrían enfrentado a una oposición más decidida. Sin embargo, en mayo de 1774, Luis XV enfermó de viruela y pronto se hizo evidente que no sobreviviría. A Madame du Barry se la envió apresuradamente a un convento para que el rey se reconciliara con la Iglesia y recibiera los sacramentos. El futuro del polémico programa en el que se había embarcado en 1770 quedó en manos de su heredero, el veinteañero Luis XVI. Los tutores designados por el viejo rey habían hecho todo lo posible para inculcar a su alumno la convicción de que necesitaba irradiar autoridad. Ahora verían cómo aplicaba esas lecciones.

3

La monarquía a la deriva

1774-1787

La muerte de Luis XV el 10 de mayo de 1774, que llevó a su nieto de veinte años al trono, fue una sorpresa, pero las instituciones de la monarquía francesa estaban preparadas para lidiar con ella. Desde la muerte del padre de Luis XVI en 1765, todo el mundo sabía que el joven sería el próximo rey. Lo único que podría evitarlo era su propia muerte. Su precoz matrimonio con María Antonieta podía ser infeliz y, en 1774, todavía no había dado los resultados que se esperaban en lo referente a dar un heredero, pero había resuelto una importante cuestión sobre el futuro de la dinastía y prometía continuidad en la política exterior de Francia. El enlace del viejo rey con la desacreditada Madame du Barry y su respaldo al golpe de Maupeou contra los parlamentarios había desacreditado tanto a Luis XV en París que la corte decidió enterrarlo por la noche y casi en secreto. Su impopularidad, sin embargo, no alcanzó a la monarquía como institución. «Cada día trae nuevas esperanzas ante la perspectiva de una mejora inminente. El sentido de la economía del nuevo monarca, su desprecio por el lujo y las apariencias, parecen garantizarlo», escribió un periodista que había encabezado la oposición a Maupeou.[1]

Era cierto que Luis XVI quería hacer algunos cambios. Los chismes sobre las amantes reales ya no corrían por la corte y el anciano conde de Maurepas convenció al joven rey para que destituyera al polémico equipo de ministros de línea dura de Luis XV y para que recuperara los parlamentos. En la ceremonia en la que reinstituyó el Parlamento de París, los jueces recibieron unas instrucciones muy severas; no volverían a recurrir a las tácticas obstruccionistas que habían usado contra Luis XV. No

les afectó demasiado ya que no tardarían en demostrar que aún consideraban que tenían derecho a resistir al rey y a sus ministros. Cuando alguien advirtió al rey de que la restauración del Parlamento podría debilitar su autoridad, se cuenta que Luis XVI respondió: «Puede entenderse que es políticamente imprudente, pero me parece que es la voluntad general y deseo ser amado».[2]

Mientras que el restablecimiento de los parlamentos era una vuelta a la tradición, el rey rompió con el pasado al nombrar ministro de Finanzas a Anne-Robert-Jacques Turgot. Esto daba esperanzas a quienes deseaban que el nuevo rey pusiera en práctica las ideas ilustradas de los enciclopedistas y especialmente de los fisiócratas, los teóricos económicos cuya defensa de la desregulación ya había inspirado varios esfuerzos anteriores de reforma con Luis XV. Como intendente de la provincia del Lemosín en el decenio de 1760, Turgot había promovido enérgicamente políticas de modernización de los métodos agrícolas y había demostrado su voluntad de suprimir instituciones como la *corvée* (corvea real), que era un sistema en virtud del cual los campesinos debían trabajar varios días al año en la reparación de carreteras y otros proyectos, práctica que los fisiócratas condenaban como una ineficaz injerencia en la libertad personal. En un artículo sobre las fundaciones benéficas que escribió para la *Enciclopedia*, Turgot sostenía que las instituciones arraigadas en el pasado se podían abolir si no satisfacían las necesidades del presente o limitaban los derechos de los individuos. Esto lanzaba la idea de que todos los aspectos de la vida francesa estaban abiertos a la reforma. Cuando llegó a ministro, Turgot apuntó al sistema de leyes que limitaban la libre venta de grano dentro del reino. Con el fin de asegurar que la especulación no condujera a fuertes subidas del precio del pan en años de malas cosechas, estas reglas restringían el traslado del grano de una región a otra y permitían a las autoridades locales controlar su precio.

Los teóricos de la fisiocracia argumentaban que la regulación de la venta de grano era una restricción injusta del derecho a la propiedad individual. Esas reglamentaciones desalentaban a los terratenientes a invertir en mejoras de la agricultura, porque no podían estar seguros de que

se les fuera a permitir obtener beneficios si había mayor producción. Los consumidores –un grupo que incluía tanto a las poblaciones urbanas como a gran parte del campesinado, ya que pocos agricultores cultivaban grano para hacer su propio pan– no estaban convencidos. Como dijo abiertamente Quesnay, también un fisiócrata, en sus artículos para la *Enciclopedia*, la abolición de las regulaciones elevaría los precios y obligaría a los pobres a trabajar más duro para ganarse el pan, lo que no puede ser buena receta para ganar el apoyo popular. Sin embargo, una economía en crecimiento, en su opinión, y en la de Turgot, beneficiaría a la monarquía al ampliar su base de ingresos sin necesidad de aumentar los impuestos.

Al igual que los esfuerzos anteriores por acabar con las restricciones al comercio del cereal en la década de 1760, las reformas de Turgot no llegaban en el mejor momento. La cosecha de 1774 fue peor de lo habitual, especialmente en el norte de Francia, la región que más dependía del cereal, y el resultado fue la mayor explosión de disturbios sociales que el reino había experimentado en muchos decenios. Durante casi un mes, en la primavera de 1775, a medida que los precios de los cereales subían y los suministros escaseaban, estalló en toda la región una protesta conocida como *la Guerre des farines*, la «Guerra de las Harinas». En las ciudades, las multitudes asaltaban las panaderías y exigían que se bajaran los precios del pan. En el campo, los campesinos impidieron que los mercaderes sacaran el grano de sus distritos para distribuirlo; también se enfrentaron a los ricos terratenientes, de quienes sospechaban que retenían las cosechas fuera del mercado para esperar a que subieran los precios. Los disturbios afectaron a la residencia real de Versalles y a la capital, donde se produjo un importante brote el 3 de mayo de 1775. Un periodista mencionó ciertos rumores de que «los rebeldes quieren apoderarse de la Bastilla», para descartarlos más tarde porque era «físicamente imposible».[3] Las mujeres fueron a menudo las protagonistas de estos disturbios: una de sus principales preocupaciones era asegurarse de que sus familias pudieran permitirse el pan para sus necesidades básicas. En Brie-Comte-Robert, Madelaine Pochet, a la que

describieron en los informes policiales como «la mujer del pañuelo rojo en la cabeza», insultó a los agricultores locales y les exigió que vendieran sus reservas a un precio aprobado por la muchedumbre.[4] El gobierno reaccionó enérgicamente: movilizó a veinticinco mil soldados en torno a París e hizo especial hincapié en la necesidad de proteger los derechos de los propietarios, aunque Turgot también abrió «talleres de beneficencia» para permitir que los desempleados ganaran lo necesario para mantenerse.

Se consiguió poner fin a la Guerra de las Harinas en unas semanas, pero los levantamientos mostraron la fuerza que podía llegar a tener una protesta popular y lo rápido que podía extenderse. Las conmociones desencadenaron el primer gran debate político del reinado de Luis XVI y sacaron a la luz cuestiones que serían fundamentales en la Revolución francesa quince años más tarde. Turgot, igual que los economistas neoliberales de hoy, sostenía que poner fin a la regulación reportaría beneficios a largo plazo, para el reino en su conjunto, porque fomentaría métodos de cultivo más eficientes y una mayor producción. Sin embargo, los tribunales de derecho parlamentario recientemente reinstaurados aprovecharon la oportunidad para hacerse pasar por protectores de la población criticando estas medidas. El distinguido magistrado Malesherbes, que había defendido la *Enciclopedia* en la década de 1750 y ahora era el portavoz del Tribunal Fiscal del gobierno, el Cour des Aides, quería demostrar que objeciones como las de los parlamentos no eran sólo la expresión de intereses especiales. Para hacerlo introdujo un giro radical en el conocido argumento sobre la necesidad de que hubiera organismos intermedios para controlar las acciones arbitrarias de los ministros. Pidió que se restablecieran los Estados Generales, una asamblea elegida que se había reunido a intervalos durante la Edad Media y el Renacimiento, pero a la que los reyes absolutistas de Francia habían puesto fin después de 1615. Malesherbes argumentaba que «en Francia, la nación siempre ha sido profundamente consciente de sus derechos y su libertad», mostrando que los recuerdos del pasado lejano de Francia podrían tener implicaciones potencialmente revolucionarias en el presente. Su queja de que los principios que protegían la libertad francesa «nunca han tenido una redacción adecuada», en forma de un documento

constitucional, también era una anticipación a las reivindicaciones que se harían al comienzo de la Revolución.[5]

Mientras los parlamentarios y Malesherbes reavivaban los argumentos históricos contra las reformas, el ambicioso rival de Turgot, el banquero Jacques Necker, atacaba desde otro lado. Necker empezaba la carrera que lo mantendría en el centro de la política francesa hasta la Revolución; publicó su ensayo *Sur la legislation et le commerce des grains (Sobre la legislación y el comercio de granos)* que denunciaba las medidas de Turgot como inoportunas y poco prácticas. Era la primera vez que un aspirante a un cargo ministerial intentaba ganar poder apelando abiertamente a la opinión pública y ofreciendo un programa opuesto. Indignados, Turgot y sus amigos culparon a Necker de incitar los disturbios por el precio de los cereales. Un periodista anónimo planteó una pregunta que se discutiría con más vehemencia aún durante la Revolución francesa: ¿debería el derecho a la propiedad tener prioridad sobre las necesidades de los pobres? «Negar al prójimo el alimento que necesita, si no puede pagar el precio que uno quiere por él, es una acción tan arrogante como la de un ladrón en el bosque, que usa su pistola para exigir que un viajero entregue su bolso o su vida», escribió.[6]

Una vez que se controló la Guerra de las Harinas, Turgot, que confiaba todavía en el respaldo de Luis XVI, impulsó otras reformas. En abril de 1776, convenció al rey de que emitiera un conjunto de seis edictos, que reflejaban su convicción de que los individuos deberían quedar liberados, en la medida de lo posible, para poder perseguir sus intereses económicos y deberían eliminarse los privilegios especiales. Turgot –como había intentado hacer en el Lemosín cuando era intendente–, propuso suprimir la *corvée*, el sistema de trabajos forzados para el mantenimiento de las carreteras y las obras públicas. En su lugar, quería establecer un impuesto que tendrían que pagar todos los propietarios de tierras, sin tener en cuenta su estatus social. La medida provocó una feroz resistencia entre los nobles, que se oponían a que se les tratara igual que a los plebeyos. La misma

polémica generó su propuesta para abolir los gremios a los que pertenecían los artesanos cualificados como Jacques Ménétra y abrir los oficios a quien quisiera practicarlos. Por toda Francia, los empresarios más beligerantes ya estaban encontrando formas de evitar las restricciones de los gremios trasladando la producción a las zonas rurales donde no se aplicaban esas normas. A veces incluso contrataban jornaleros o mujeres trabajadoras de forma ilegal.

El edicto de Turgot legalizaba estas prácticas y eliminaba las normas sobre procedimientos de fabricación que se habían justificado como una forma de proteger a los consumidores de los productos de mala calidad. Turgot estaba convencido de que la eliminación de los privilegios gremiales beneficiaría no sólo a los propietarios de empresas, sino también a «esa clase de hombres que, al no poseer nada excepto su capacidad de trabajo, tienen más que otros la necesidad y el derecho a utilizar en toda su extensión los únicos recursos de que disponen para ganarse la vida».[7]

La población se opuso frontalmente a los edictos de Turgot, igual que había ocurrido con su anterior intento de desregular el comercio del grano. Los maestros gremiales y los artesanos cualificados se quejaban de que se les privaba de los derechos que habían tardado años en conseguir y argumentaban que los consumidores sufrirían por el descenso de la calidad de la mano de obra. Las reformas de Turgot también amenazaban las finanzas del gobierno: los pagos por las licencias de los gremios y otros privilegios eran una fuente importante de ingresos reales y municipales. La monarquía había alentado con frecuencia a los grupos empresariales, como los gremios, a pedir préstamos en su propio nombre para pagar sus impuestos, ya que estos grupos a menudo podían obtener préstamos a mejores tasas que el propio rey. En el Parlamento de París, un joven magistrado, Jean-Jacques Duval d’Eprémesnil, comenzó a hacerse un nombre con su vehemente oposición a las doctrinas radicales que detectó tras las acciones de Turgot. Duval d’Eprémesnil terminaría por desempeñar un papel importante en la crisis que desembocaría en la Revolución de 1789. Casi en el mismo momento en que, al otro lado del Atlántico, Thomas Jefferson redactaba las palabras de la Declaración de Independencia

Americana sobre la libertad y la igualdad, Duval d'Eprémesnil redactaba unas protestas en las que advertía que «cualquier sistema que, simulando humanidad y benevolencia, pretenda establecer una igualdad de deberes entre los hombres y destruir estas distinciones, necesarias en una monarquía bien ordenada, no tardará en provocar desórdenes». La libertad sin restricciones, concluyó, «pronto se transformará en licencia, abriendo la puerta a todo tipo de abusos».[8]

Al principio, parecía que Luis XVI ofrecería su apoyo a Turgot, y organizó una *lit de justice* a principios de mayo de 1776 para obligar al Parlamento de París a aceptar los seis edictos. Si hubiera permanecido firme, le podríamos recordar como un enérgico monarca reformador. Sin embargo, a las pocas semanas, el joven rey cambió de opinión y se ganó la reputación –duradera– de ser un indeciso que no era capaz de mantener una política coherente. El cambio de opinión de Luis era el reflejo de varios factores. Turgot había insistido en que sus reformas debían ir acompañadas de una reducción de los derrochadores gastos gubernamentales, lo que le había llevado a un conflicto con María Antonieta y con otras figuras influyentes de la corte. En consonancia con el pensamiento de los fisiócratas, Turgot también había previsto un sistema de asambleas locales y regionales, elegidas por los contribuyentes sin tener en cuenta la condición social, que cooperaría con los intendentes en la recaudación de impuestos y la supervisión de los gastos. Sus ideas se debatieron abiertamente en publicaciones como la *Gazette de Leyde*, que Luis XVI leía de manera asidua. En la *Gazette*, es probable que el rey viera un editorial en el que se afirmaba que «no sería una de las singularidades menos destacadas de nuestro siglo que Francia devolviera a la nación el derecho de gravarse a sí misma [...] mientras Inglaterra se esfuerza por quitárselo a sus súbditos americanos». Uno de los colaboradores más cercanos de Turgot, Pierre Samuel Dupont de Nemours, preparó un «memorando sobre las asambleas municipales» en el que se esbozaba un plan que habría eliminado las instituciones provinciales tradicionales, como las haciendas y los parlamentos. Cuando Luis XVI leyó el artículo, concluyó que su ministro quería «establecer una nueva forma de gobierno en Francia y denigrar las

antiguas instituciones, que el autor considera producto de siglos de ignorancia y barbarie».[9] A Luis no le habían educado para llevar a cabo una revolución tan radical en su reino.

Es irónico, sin embargo, que una de las razones por las que cayó Turgot fue porque se resistía a que el país participara en otra revolución, la de las colonias británicas de América del Norte que había comenzado en 1775, casi al mismo tiempo que la Guerra de las Harinas de Francia. Algunos franceses vieron la ayuda a los americanos como una oportunidad para devolver el golpe a la potencia rival que había infligido una dura derrota a su país en la Guerra de los Siete Años. Otros, como el joven Gilbert du Motier, marqués de Lafayette, se inspiraron en los ideales de libertad articulados en los manifiestos de los rebeldes, como *El sentido común* de Thomas Paine. En la corte, el ministro de Asuntos Exteriores de Luis XVI, Charles Vergennes, un diplomático habitualmente cauteloso, y el ministro de la Marina, Antoine de Sartine, instaron al rey a que aprobara la ayuda clandestina a los americanos, a pesar del peligroso precedente de apoyar una revuelta popular contra una monarquía. Turgot, muy consciente de la carga que suponía la deuda de la Guerra de los Siete Años, se opuso firmemente a que el país se involucrara en otro costoso conflicto. Aunque tenía poco de guerrero, Luis XVI no pudo resistirse a la emoción de humillar a los británicos y devolver a Francia su posición como potencia dominante de Europa.

El 12 de mayo de 1776, se destituyó a Turgot abruptamente y se desecharon la mayoría de sus ambiciosos planes de reforma. Luis XVI no pasaría a la historia como un déspota ilustrado, con poderes reales para imponer cambios radicales. Sin embargo, la caída de Turgot no resultó en un regreso total al *statu quo* anterior. Al nombrar a un crítico de Turgot, Necker, para supervisar las finanzas de la monarquía, Luis XVI eligió a un hombre cuyas políticas eran más pragmáticas que las de su rival, pero cuyo ascenso también era una novedad. Necker era un banquero ginebrino; era plebeyo, extranjero y, lo más sorprendente, era protestante.

Mientras que Turgot había soñado con recuperar los rasgos fundamentales de la economía y la estructura social de Francia, Necker creía que podía controlar los problemas financieros del reino reduciendo los excesos en el gasto público y suprimiendo oficinas innecesarias. Esperaba evitar enfrentamientos abiertos con los parlamentos y aumentos impopulares de impuestos. Su problema inmediato, sin embargo, era financiar la participación francesa en la guerra americana. Las noticias de la importante victoria americana sobre los británicos en la batalla de Saratoga, que llegaron a Francia a finales de 1777, convencieron a Luis XVI de que aceptara la recomendación de Vergennes de que Francia cambiara su política de dar apoyo encubierto, por una alianza abierta con los americanos y una guerra contra los británicos. Aunque el conflicto se libró en ultramar y contó con la participación de un número relativamente pequeño de tropas francesas, requirió una enorme inversión en la marina francesa. Se talaron árboles por toda Francia para construir navíos de línea, que eran las armas más costosas del siglo XVIII. Se reclutaron multitudes de marineros de las regiones costeras del país y hubo que encontrar dinero para pagar los suministros que necesitaban en sus viajes de varios meses por el Atlántico. Necker demostró que él era indispensable a la hora de conseguir préstamos que hicieran posible la guerra, al coste de añadir sumas enormes a la ya desorbitada deuda de la monarquía.

El esfuerzo francés dio sus frutos cuando los barcos del almirante François Joseph Paul de Grasse bloquearon con éxito las tropas del general George Cornwallis en Yorktown, y esto permitió que George Washington obligara a los británicos a rendirse. La derrota llevó a los británicos a aceptar la independencia de Estados Unidos. Sin embargo, Francia había deseado un resultado que modificara de forma decisiva el equilibrio mundial del poder imperial, cosa que no ocurrió ya que una victoria naval británica en el Caribe, en abril de 1782, hizo fracasar un ataque planeado contra la principal isla azucarera de Jamaica. El Tratado de París, firmado el 20 de enero de 1783 –irónicamente, casi diez años exactos antes de la ejecución de Luis XVI, que sería en 1793– fue una humillación para los británicos, pero a los franceses les trajo pocos beneficios tangibles.

El apoyo de Francia a los rebeldes americanos tuvo importantes repercusiones internas. En la colonia caribeña de Saint-Domingue, se reclutaron hombres libres de color para servir en un ataque a la ciudad de Savannah, Georgia. El asalto fracasó, pero servir en el ejército proporcionó experiencia militar a los participantes y salieron convencidos de que merecían los mismos derechos que los blancos. Los soldados y oficiales franceses que sirvieron en América del Norte no regresaron necesariamente a Europa como defensores convencidos de la revolución y el republicanismo –muchos de ellos se desanimaron por las rudas maneras de los estadounidenses y la naturaleza indisciplinada de su esfuerzo militar–, pero las publicaciones sobre el asunto y los propagandistas estadounidenses inspiraron una ola de entusiasmo por las supuestas virtudes de los sencillos agricultores estadounidenses que habían derrotado a los altivos británicos. Entre los propagandistas destacaba el anciano Benjamin Franklin, que llegó a París en 1776 como portavoz oficial del movimiento. Franklin ocultó astutamente sus conocimientos adquiridos a lo largo de sus largos años como figura pública en América y Gran Bretaña. Ataviado con un sombrero de piel que no se había visto jamás en Versalles, representó el papel de un sabio de pueblo con gran éxito. Las mujeres se desmayaban por él, y los futuros revolucionarios, como el conde de Mirabeau, escuchaban entusiasmados sus ideas políticas. La imagen de América como una tierra de «hombres nuevos» que viven en armonía con la naturaleza era el tema principal de la exitosa obra titulada *Lettres d'un cultivateur Américain (Cartas de un granjero americano)*, escritas por el francés Héctor St. John de Crèvecoeur. No es que Crèvecoeur no fuera crítico con América, ya que dedicó parte de un capítulo a denunciar los males de la esclavitud, pero describía el país como una alternativa radical a las sociedades aristocráticas e injustas del Viejo Continente.

Las ideas políticas de Estados Unidos también se difundieron en otras publicaciones. Durante los años que vivió en Francia, Franklin supervisó las traducciones de documentos revolucionarios clave, entre los que estaban la Declaración de Independencia y las constituciones republicanas adoptadas por los distintos estados americanos. Algunas figuras francesas influyentes

quedaron profundamente impresionadas por estos experimentos de libertad republicana. La idea de definir los rasgos fundamentales de un sistema político en una constitución escrita y de limitar los poderes gubernamentales mediante una declaración de derechos tuvo una influencia indudable en la Revolución francesa. En cambio, otros pensadores franceses, como Turgot y el teórico republicano Mably, fueron más críticos. Turgot culpó a los estadounidenses de reproducir, en sus nuevos gobiernos, demasiadas facetas poco razonables de la monarquía británica, como las legislaturas bicamerales, y Mably advirtió de que la libertad de expresión sin restricciones que se prometía en la Constitución podría permitir que los oponentes de la libertad la desautorizaran. Estas críticas eran un presagio de la forma en que la Revolución francesa se diferenciaría de la americana.

Para cuando terminó la guerra en América, el tiempo de Necker en el cargo también había concluido. Aunque eran modestos comparados con los proyectos de Turgot, sus esfuerzos por llevar a cabo una reforma habían provocado una fuerte oposición. Igual que Turgot, Necker estaba convencido de que la monarquía se beneficiaría de la introducción de alguna forma de representación y había intentado crear asambleas elegidas en dos provincias francesas, lo que llevó a su ministro rival, Vergennes, a quejarse a Luis XVI de que «se estaban introduciendo los principios ingleses y ginebrinos en la administración».[10] Los intentos de Necker por eliminar puestos gubernamentales innecesarios y poner la recaudación de impuestos bajo control gubernamental, a expensas de los financieros privados que tradicionalmente se habían beneficiado del proceso, le crearon más enemigos. Lo más polémico fue que, a principios de 1781, Necker decidió dar el paso sin precedentes de publicar un resumen de los ingresos y gastos anuales de la monarquía. Su *Compte rendu au roi (Informe para el rey)* se convirtió en un éxito sin precedentes. Por primera vez, se ofreció a los súbditos reales una visión general completa de las fuentes de los ingresos del rey y de cómo se gastaban. El objetivo de la iniciativa de Necker era convencer al público de que el gobierno francés era digno de

crédito: con estas cifras quería demostrar que los ingresos regulares superaban los gastos «ordinarios» por un saludable margen. Sin embargo, los críticos se apresuraron a señalar que Necker no había incluido el coste de la guerra en curso, ni los pagos que serían necesarios para devolver los préstamos que había pedido para financiarla. A los conservadores les horrorizaba la idea de provocar una discusión pública sobre los secretos del gobierno.

Al darse cuenta de que iba perdiendo apoyos, Necker forzó a Luis XVI a tomar una decisión: o le respaldaba por completo con un nombramiento oficial en el consejo real, a pesar de su protestantismo, o lo dejaba ir. El rey aceptó la dimisión de Necker, lo que aumentó la fama que tenía de abandonar a los ministros reformistas cuando la situación se ponía complicada. Tras el debate frenético que trajo consigo la publicación del *Compte rendu* de Necker, se dejó de hablar de las finanzas reales durante años. Todavía había que financiar las grandes deudas en las que había incurrido Necker para financiar la guerra, pero los impuestos temporales de la guerra seguían en vigor, lo cual daba un respiro al gobierno. La atención del público se centró en otros asuntos, como las pioneras ascensiones en globo de aeronautas audaces como Jean-François Pilâtre de Rozier, que realizó el primer vuelo tripulado, alcanzando una altitud de tres mil pies, el 21 de noviembre de 1783. «Fue un momento que no se puede repetir, el logro más asombroso que la física ha dado al mundo», escribió el conocido autor Louis-Sébastien Mercier. El rey asistió al momento de la ascensión; parecía que Francia estaba a la cabeza de Europa, tanto en ciencia como en política.[11]

El rey encontró un nuevo ministro de Finanzas en el que confiar, Charles-Alexandre Calonne, quien prometió que se podía hacer frente a los gastos de la monarquía si se daba un buen impulso al crecimiento económico, sin necesidad de las polémicas reformas que habían querido instaurar sus antecesores. Durante los tres primeros años de su mandato se produjo un rápido aumento de la especulación bursátil, a veces directamente alentada por el gobierno con la esperanza de que las nuevas empresas estimularan el gasto y la inversión. Calonne también esperaba aumentar el

comercio exterior francés. Un edicto de agosto de 1784 permitió a los colonos franceses negociar directamente con comerciantes de otros países, especialmente de los Estados Unidos recién independizados. Esta ruptura con el tradicional *exclusif* –el sistema que reservaba el comercio colonial a los comerciantes franceses metropolitanos– no fue bien recibida en ciudades portuarias como Burdeos y Le Havre, pero sí tuvo un fuerte apoyo entre los propietarios de plantaciones del Caribe. Sin embargo, esta alegría por la reforma del comercio no fue suficiente para compensar su indignación cuando el colega de Calonne, Charles de Castries, ministro de la Marina, emitió un edicto en diciembre de 1784 con el que pretendía frenar los excesos del sistema esclavista en las islas. Un colono escribió lo que opinaba sobre los límites que se habían impuesto a los castigos que los dueños podían infligir: «Este edicto viola los derechos sagrados de propiedad y pone un puñal en manos de los esclavos, al dar el control de la disciplina y el régimen a quienes no son sus amos».[12]

En 1786, Calonne dio un paso aún más radical hacia la apertura de la economía francesa: negoció un tratado de libre comercio con los británicos. Consciente de que los fabricantes británicos, especialmente los de textiles, estaban introduciendo nuevos métodos de producción mecanizada que les permitían vender sus productos más baratos que sus rivales franceses, Calonne esperaba que la presión de la competencia obligara a sus propios compatriotas a modernizarse y a ser más eficientes. Mientras tanto, calculó que el aumento de las exportaciones de productos agrícolas franceses, como el vino, compensaría el impacto sobre los productos manufacturados. Al igual que el edicto de Castries indignó a los propietarios de esclavos, el Tratado del Edén, llamado así en honor al diplomático británico que lo negoció, provocó una reacción furiosa de los fabricantes franceses –que temían verse sobrepasados por la competencia británica– y de los trabajadores –que temían perder sus empleos–. Jean-Marie Roland, esposo de Madame Roland y futuro político revolucionario, escribió: «Acabamos de concluir un tratado comercial con los ingleses que quizá llegue a enriquecer a nuestros bisnietos, pero que ha privado de pan a quinientos mil trabajadores y ha arruinado a diez mil comercios».[13] En Lyon, la mayor

ciudad manufacturera de Francia, los trabajadores de la seda, temerosos ante la competencia que suponían las telas baratas de fabricación inglesa, protagonizaron en agosto de 1786 la mayor rebelión urbana de los últimos decenios, hasta el punto de que el gobierno se vio obligado a enviar tropas para restablecer el orden.

Mientras sus ministros adoptaban políticas que enfurecían a sectores clave de la opinión pública, el respaldo que les ofrecía Luis XVI perdió credibilidad por un escándalo que dañó gravemente la reputación de la reina. El 15 de agosto de 1785 detuvieron públicamente a un gran noble, el cardenal Rohan, en el palacio de Versalles. Le acusaba el propio rey en persona de haber mentido cuando aseguró que María Antonieta le había pedido que comprara un fabuloso y carísimo collar de diamantes en su nombre. Rohan se había dejado enredar en un elaborado plan urdido por una aventurera llamada Madame de la Motte y su marido. Madame de la Motte se hizo pasar por confidente de la reina y aseguró al cardenal que, si organizaba la compra del collar, se ganaría su favor. Rohan consiguió el collar, mostrando a los joyeros cartas falsificadas por los conspiradores con la promesa de que la reina pagaría por él, y entregó las joyas a De la Motte para que, a su vez, las entregara a la reina. En lugar de hacer eso, De la Motte y sus cómplices desmontaron el collar y vendieron los diamantes por separado, con lo que obtuvieron un beneficio considerable.

El plan se desveló cuando los joyeros, impacientes por el pago, presentaron la carta falsificada con la firma de María Antonieta en Versalles. María Antonieta, consciente de que su fama de extravagante le había hecho perder popularidad, se horrorizó y exigió que se impusiera un duro castigo al cardenal. Luis XVI accedió a la petición de la reina y dispuso que se hiciera una detención pública frente al resto de la corte. La información que salió a la luz exponía las relaciones del cardenal con un elenco de personajes de dudosa reputación, entre los que estaba el conde Alessandro di Cagliostro, un estafador italiano que afirmaba tener más de mil años. El espectáculo de un gran noble y dignatario de la Iglesia

colaborando con semejantes compañías no ayudó nada a mejorar la imagen de la aristocracia francesa. Pero Rohan también contaba con poderosos partidarios, entre ellos algunos miembros destacados del Parlamento de París, donde se atendió su caso. Sus defensores insistían en que había caído inocentemente en la trampa de De la Motte. Esta línea de defensa daba a entender que era razonable que Rohan pensara que la pasión de la reina por el lujo la llevara a acudir a él para comprar un collar como ése. Esto dejó a Luis XVI sin autoridad, daba la impresión de que era incapaz de controlar el comportamiento de su esposa. Fue un golpe catastrófico para un gobernante que se suponía que era el «padre del pueblo».

Después de doce años en el trono, el aún joven Luis XVI –sólo tenía treinta y dos años en 1786–, se encontró con frentes abiertos por todas partes. Estaba atado a una esposa que se había convertido en un símbolo tanto de los excesos femeninos como de la impopular alianza austriaca; su aparente debilidad como marido hacía que se le viera débil como gobernante, quizá de forma irreparable; y las políticas de sus ministros dejaban al margen a buena parte de la población. Además, en agosto de 1786, después de tres años de asegurar al rey que las cuentas de la monarquía estaban bajo control, el ministro de Finanzas, Calonne, informó repentinamente a su señor de que a menos que se hiciera algo drástico, se enfrentaría a otro desastre: la bancarrota del gobierno. Luis XVI, que estaba convencido de que le correspondía a él decidir cómo hacer frente a esta crisis, no tardaría en descubrir que sus súbditos ya no estaban dispuestos a dejarle marcar el rumbo del país.

4

«Todo debe cambiar»

La Asamblea de Notables y la crisis de 1787-1788

No puede haber sido fácil para Calonne, ministro de Finanzas de Luis XVI, informar a éste de que la monarquía francesa estaba al borde del colapso financiero. Calonne se había hecho un nombre como defensor inquebrantable de los principios absolutistas: según los rumores, había ayudado a redactar el belicoso discurso, que luego se llamaría «de la flagelación», en el que Luis XV había denunciado los parlamentos en 1766. Había peleado para llegar a la presidencia en 1783 con la promesa de que podría resolver los problemas financieros de la monarquía sin imponer reformas drásticas. Cuando en el verano de 1786 se dio cuenta de que su política había aumentado el déficit real sin producir el crecimiento económico que había esperado –y que cada vez tenía más oposición–, Calonne reaccionó arriesgando un poco más. Había que hacer algo: el impuesto especial que se había instaurado durante la guerra americana expiraba en 1787, lo cual privaría al gobierno de unos ingresos vitales, justo cuando el coste de los préstamos utilizados para sufragar la guerra alcanzaba su punto máximo. La mitad de los ingresos anuales del rey estaban bloqueados para pagar los intereses de la deuda; la situación financiera era insostenible. Los prestamistas, cada vez más nerviosos ante la posibilidad de una bancarrota real, exigían tasas de interés más y más altas. Era imperativo un cambio drástico de rumbo.

En un largo memorando para el rey, Calonne anunció que «la única manera de poner orden en las finanzas era revitalizar el Estado en su conjunto, reformando todo lo que es defectuoso en su constitución». El plan que sugería estaba tomado, en gran parte, de las propuestas originalmente

presentadas por sus predecesores, Turgot y Necker. Calonne pedía la abolición de los privilegios fiscales especiales que separaban a la nobleza y a la Iglesia del resto de la población. Como habían defendido durante mucho tiempo los reformadores económicos fisiocráticos, se sustituirían los innumerables impuestos especiales por uno sobre la propiedad inmobiliaria, que se cobraría a los propietarios independientemente de su estatus social. Los críticos se dieron cuenta inmediatamente de que este impuesto sobre la tierra que proponía Calonne traería a la corona unos ingresos fijos que aumentarían de forma automática a medida que creciera la economía, sin permitir que los parlamentarios se opusieran, como venían haciendo tradicionalmente cuando los ministros planteaban nuevos impuestos. Para evitar que le acusaran de intentar otorgar más poder al gobierno, Calonne daba voz a los propietarios contribuyentes en la toma de decisiones: se les permitiría elegir asambleas provinciales, que tendrían la facultad de revisar los gastos y ofrecer asesoramiento sobre políticas. A diferencia de los estamentos o estados tradicionales que existían en algunas provincias, las asambleas provinciales representarían a todos los propietarios y no tendrían escaños reservados para los nobles y el alto clero. El exasesor de Turgot, André Morellet, entusiasmado con el plan, afirmó que era «un anuncio de libertad e igualdad».[1]

Tras una carrera al servicio de la realeza luchando contra los parlamentos aristocráticos, para los cuales la igualdad social era un anatema y la libertad significaba oponerse a la autoridad real, Calonne sabía que sería imposible promulgar su programa radical mediante leyes ordinarias. En cambio, propuso revivir una institución largamente olvidada, a la que se había recurrido por última vez en 1626, convocando una «Asamblea de Notables» compuesta por diputados elegidos por el gobierno. Su esperanza era que el apoyo a su programa por parte de un grupo de figuras prominentes, incluyendo representantes de los propios parlamentos, sofocara la oposición.

El primer desafío de Calonne era ganarse el favor del rey. Luis XVI no era un conservador retrógrado: desde su llegada al trono en 1774, había aprobado varias reformas, incluyendo la abolición de la servidumbre en las

fincas reales y el fin de la tortura en los procedimientos judiciales. Sin embargo, era cauteloso por naturaleza, no tenía ninguna intención de desempeñar el papel de déspota ilustrado, como su cuñado Habsburgo, el emperador austriaco José II. Éste había provocado un gran revuelo en todas sus tierras a principios del decenio de 1780 al limitar los poderes de la Iglesia católica, conceder tolerancia a los protestantes y los judíos, e intentar imponer un único esquema de administración racional en territorios dispares dispersos desde Bélgica hasta Hungría.

En la segunda mitad del año 1786, Calonne trabajó para que el rey perdiera el miedo: «El plan propuesto es demasiado amplio e implica cambios demasiado grandes». Anticipándose al lenguaje que utilizarían los revolucionarios que pronto le tomarían el relevo, Calonne instó a Luis a reconocer que «no se pueden hacer grandes cosas si uno se queda quieto por temor a las dificultades». La crisis financiera era una oportunidad para que el rey se «inmortalizara»; sería él quien liberara a la monarquía de una vez por todas de su falta crónica de ingresos.[2] Así pues, Luis XVI, que ya se había dejado convencer a regañadientes para embarcarse en una aventura que alteraría la historia cuando aprobó la intervención francesa en favor de los colonos americanos, permitió que Calonne pusiera en marcha la serie de acontecimientos que desembocarían en el derrocamiento completo de su monarquía.

Aunque la convocatoria de una Asamblea de Notables tenía un respetable precedente en el derecho francés, la repentina decisión de resucitar una institución olvidada durante tanto tiempo asombró al público casi tanto como el contenido de las propuestas de reforma de Calonne. Un cronista escribió que un acontecimiento como ése «difícilmente podría ocurrir con un monarca absoluto y unos ministros despóticos, excepto en una situación de crisis desastrosa para la que no tienen ningún remedio».[3] Aunque el mismo periodista advirtió de que los notables actuarían como simples «pagodas chinas» de juguete –la versión del siglo XVIII de los perros que mueven la cabeza–, porque no harían más que asentir para aprobar las

propuestas de Calonne, cortesanos ambiciosos, prelados de la Iglesia y magistrados se afanaron por conseguir un asiento en la Asamblea.

Si bien esta convocatoria alarmó a algunos y disparó las ambiciones de otros, también alentó esperanzas utópicas que iban mucho más allá de la solución de los problemas financieros de Francia. A principios de enero de 1787, mientras Calonne reunía a los notables, un hombre con otras ambiciones, que se llamaba Jacques-Pierre Brissot, convocó a un grupo muy diferente: un club de intelectuales reformistas. Brissot había nacido en 1754, el mismo año que Luis XVI, era hijo de un posadero de la ciudad catedralicia de Chartres, y era el paradigma de una generación joven que soñaba con seguir los pasos de los *philosophes* que habían compilado la *Enciclopedia*. En los años 1740 y 1750 Diderot, D'Alembert y sus colegas habían ido contra arraigadas instituciones conservadoras; la generación de Brissot entró en escena en un momento en que los principios de la Ilustración se habían convertido en algo habitual entre las clases educadas de Francia. Los discípulos de mediana edad de los *philosophes* monopolizaron las posiciones en la prestigiosa Academia Francesa y las redacciones de las principales publicaciones periódicas de Francia, pero ninguno de ellos parecía tener demasiadas ideas novedosas. Los que eran todavía más jóvenes, entre ellos el propio Brissot, se imaginaban a sí mismos haciendo grandes cosas, pero tuvieron que luchar para encontrar su sitio.

A pesar de décadas de críticas por parte de los *philosophes*, las instituciones francesas permanecieron, en gran medida, inalteradas. Un monarca absoluto aún gobernaba desde Versalles, una aristocracia hereditaria aún copaba todas las posiciones de prestigio, y la Iglesia católica todavía imponía sus reglas a una población cada vez más alejada de sus enseñanzas. Brissot retomó las causas que los *philosophes* anteriores habían propugnado, atacando el dogma religioso, los privilegios inamovibles y las leyes opresivas. Igual que hizo Voltaire, visitó Inglaterra, donde colaboraba para un periódico en francés e intentó –sin éxito– fundar una sociedad cosmopolita que reuniera a pensadores progresistas de muchos países. Cuando regresó a Francia en 1784, le acusaron de escribir panfletos

escandalosos y se convirtió, como tantos otros escritores franceses antes que él, en un huésped involuntario en la Bastilla. Cuando pudo salir de prisión, encontró la forma de canalizar su talento literario y tener una fuente de ingresos muy necesaria ayudando a componer publicaciones que querían promover o denigrar las nuevas sociedades anónimas alentadas por las políticas de Calonne.

La Revolución americana inspiró a Brissot: su éxito demostró que podían producirse cambios reales en el mundo. En 1787, Brissot y su amigo Étienne Clavière, un banquero de Ginebra, colaboraron en un breve libro que defendía la nueva república americana contra sus críticos. A Clavière lo habían obligado a exiliarse de Suiza por su participación en una infructuosa rebelión revolucionaria que surgió allí en 1782. Brissot también conocía el movimiento patriota holandés, que utilizaba la retórica republicana sobre el patriotismo para desafiar al gobernante del país, el estatúder, a mediados del decenio de 1780. A través de sus conexiones británicas, Brissot se mantuvo al día con las primeras etapas del alzamiento para la abolición del comercio de esclavos. A Brissot le interesaba todo y se hizo conocido por su habilidad para escribir rápida y fluidamente; formó un círculo de conocidos en el que había un poco de todo: desde escritores subempleados con ideas avanzadas hasta grandes nobles. A través de su esposa, Félicité, que había sido institutriz de los hijos del duque de Orleans, primo del rey, Brissot entró en el círculo del hombre más rico del reino.

Para Brissot y sus amigos, la convocatoria de la Asamblea de Notables abrió de repente la perspectiva de reformas inimaginables hasta entonces en Francia. Brissot se apresuró a invitar a amigos de ideas afines y aprovechar la oportunidad de unirse a su «Sociedad Galo-Americana» para trabajar «por el bien de todos los hombres». Él y sus amigos no ocupaban posiciones de poder, pero sabían cómo poner en circulación las ideas, un talento que sería cada vez más valioso en los años venideros. Entre las propuestas que impulsaron el siempre imaginativo Brissot y sus colegas se encontraban las siguientes: una campaña para fomentar la plantación de patatas en Francia, a fin de aumentar el suministro de alimentos y aliviar la miseria de los pobres; la posibilidad de ampliar el tratado de libre comercio

de Calonne con Gran Bretaña para incluir a otras naciones, como forma de asegurar la paz mundial, y «la destrucción de la esclavitud de los negros».[4]

Brissot y sus amigos fueron sólo algunas de las muchas personalidades que vieron la convocatoria de la Asamblea de Notables como una señal de que, de pronto, era posible que se dieran cambios verdaderamente radicales en el gobierno y en la sociedad francesa. Muchos de ellos, incluido el propio Brissot, tendrían un papel destacado en la Revolución. Algunos de los futuros revolucionarios, como el marqués de Lafayette y el marqués de Condorcet, eran políticos. Lafayette, que era de una familia rica de la corte y se había casado con una mujer de un clan todavía más rico, se había convertido en una celebridad por su compromiso en la Guerra de Independencia americana. Condorcet, que provenía de una familia noble más modesta, era un matemático brillante, un antiguo colaborador del ministro reformador Turgot y miembro de las principales academias reales. Fue un activo escritor de panfletos que, entre otras cosas, presentó una propuesta para la abolición gradual de la esclavitud ya en 1781. Otras personas que se sintieron atraídas hacia el activismo en 1787 eran conocidas sólo localmente. Un ejemplo es Henri Grégoire, el sacerdote de la pequeña ciudad de Emberménil, en la región de Lorena, que había defendido la reforma de la Iglesia y llamó la atención en 1787 con un ensayo que defendía la igualdad civil para los judíos, una posición poco corriente para un sacerdote católico. Algunos de los futuros revolucionarios más jóvenes, como el estudiante de Derecho Jean-Marie Goujon, estaban empezando a convertir sus pasiones juveniles en ideas políticas. La familia de Goujon lo había enviado a un largo viaje a una de las colonias francesas del Océano Índico, donde había podido comprobar el «desprecio antisocial que tienen los blancos por los negros», como recordaría más tarde su amigo y biógrafo Pierre-François Tissot. Allí, recibió sus «primeras lecciones de humanidad» cuando tenía sólo diecisiete años.[5]

El más prominente de estos futuros revolucionarios podía afirmar que era tanto de los de dentro como de los de fuera. Honoré Gabriel Riquetti,

conde de Mirabeau, provenía de una distinguida familia noble. Su padre, Victor Riquetti de Mirabeau, se había convertido a las doctrinas económicas fisiocráticas y había escrito una de las obras de economía más leídas a mediados del siglo XVIII, *L'ami des hommes (El amigo de los hombres)*, publicada en 1760. A pesar de su fama de filántropo preocupado por el mejoramiento de la humanidad, el anciano Mirabeau mantuvo enfrentamientos constantes con su hijo desde la infancia. El conde de Mirabeau –con la cara tan desfigurada por la viruela que padeció de niño, que se le llegó a llamar «el hombre más feo de Francia»–, se hizo famoso por su comportamiento escandaloso. A pesar de tener la cara llena de cicatrices, el futuro revolucionario resultaba irresistible para las mujeres; gastaba dinero de forma inaudita, hasta el punto de amenazar con dilapidar la fortuna familiar. Cortejó y logró atraer a una rica heredera local, pero la unión no hizo que sentara la cabeza. Cuando su padre lo castigó mediante una *lettre de cachet*, una orden real que exigía que lo detuvieran en una ciudad de provincias, acabó condenado a muerte por huir a los Países Bajos con una mujer casada. La sentencia no se cumplió, pero se le extraditó a Francia y Mirabeau se encontró con un encarcelamiento más estricto; de nuevo, a petición de su padre.

Mirabeau utilizó el tiempo que pasó en prisión para escribir varias explosivas obras pornográficas, pero también desarrolló un talento como polemista político. Cuando salió de la cárcel, hizo una larga denuncia de la arbitrariedad de la justicia que le había llevado hasta allí. «¡Ay, mis ciegos compatriotas! No será más difícil borrar sus nombres de la lista de ciudadanos que el mío», advirtió.[6] Pidió un gobierno en el que fueran los representantes elegidos quienes dictaran las leyes para proteger la libertad individual. El hecho de que Mirabeau se erigiera como figura pública no hizo que moderara su comportamiento privado. Continuó acumulando deudas y manteniendo nuevas relaciones amorosas, incluso mientras presentaba una demanda muy publicitada contra su propia esposa. Cuando hizo de abogado en su propio caso, Mirabeau dejó ver el extraordinario talento oratorio que le convertiría en la figura más destacada de los primeros años de la Revolución francesa.

Las polémicas de mediados de la década de 1780 le dieron a Mirabeau la oportunidad de forjar su reputación. Benjamin Franklin le animó a tomar parte en el debate suscitado por la participación francesa en la Revolución americana. Había habido una propuesta de crear un estatus especial para los veteranos de guerra; se les nombraría –a ellos y a sus descendientes– miembros de una exclusiva «Sociedad de los Cincinnati», idea a la que Franklin se oponía. Mirabeau aprovechó la disputa americana para hacer una crítica mordaz de los privilegios hereditarios en general. Ver a un noble con título denunciar a los antepasados de la *noblesse d'epée* (nobleza de espada), a los que llamó «treinta mil opresores acorazados», y a los antepasados de la *noblesse de robe*, de quienes dijo que eran «vampiros calculadores que han [...] chupado la sangre de veinte millones de franceses», fue un espectáculo que no hizo sino contribuir un poco más a su fama.[7] Mirabeau se unió a Brissot para vender su talento como escritor a los inversores que querían promover los planes del mercado de valores. Para detener la impresión de los numerosos panfletos de Mirabeau, Calonne le envió a la capital prusiana de Berlín en 1786, donde redactó una denuncia contra los prejuicios antijudíos, que vino a sumarse a su reputación de defensor de la libertad y de la igualdad. Cuando se anunció que se reunía la Asamblea de Notables regresó rápidamente a París: se dio cuenta de que Calonne necesitaría portavoces públicos y esperaba que lo nombraran secretario oficial de la Asamblea. Sin embargo, cuando vio que no le tenían en cuenta y, en su lugar, elegían a Dupont de Nemours, un economista mucho menos polémico, se preparó para atacar a Calonne y a su programa. La capacidad de hombres como Mirabeau y Brissot para influir en la opinión pública pronto los convertiría en una verdadera fuerza.

Los notables seleccionados por Calonne y el rey no eran soñadores utópicos como Brissot, ni «traidores a su clase» como Mirabeau. Había entre ellos siete «príncipes de sangre», que estaban en la línea de sucesión real; catorce arzobispos y obispos; un impresionante contingente de «duques y pares», incluidos «mariscales de Francia» que representaban a la aristocracia

militar; un marqués, el joven Lafayette, héroe de la guerra americana, y un humilde barón. La administración real estaba representada por una selección de consejeros de Estado e intendentes, superados casi tres a uno por los jueces de los distintos parlamentos. Veinticinco alcaldes, casi todos ellos nobles, debían hablar por los intereses de las ciudades de Francia. Quedaban completamente excluidos los artesanos urbanos, como Jacques Ménétra, y los campesinos, así como los párrocos que constituían la mayoría del clero. Todos los notables eran, por supuesto, varones; cualquier influencia que las mujeres ejercieran en sus deliberaciones era indirecta, a través de la habilidad que tuvieran esposas, amantes y anfitrionas de salones de moda para meterles ideas en la cabeza.

Sin embargo, los notables no estaban totalmente aislados de las corrientes de cambio que afectaban a la sociedad francesa. El ambicioso arzobispo de Toulouse, Étienne-Charles de Loménie de Brienne, estaba tan imbuido de las ideas de la Ilustración que Luis XVI se negó a nombrarlo arzobispo de París en 1781. «Un arzobispo», dijo Luis, «por lo menos debería creer en Dios».[8] Lafayette trajo consigo el espíritu de libertad republicana que había presenciado durante su estancia en América. Muchos de los notables tenían experiencia en la administración pública y eran muy conscientes de las dificultades a las que se enfrentaba la monarquía. Muchos de ellos también llevaban las cicatrices de las amargas luchas políticas entre la corona y los parlamentos durante la última década del reinado de Luis XV, y en particular, el intento del canciller Maupeou de reemplazar esos tribunales refractarios por un poder judicial más flexible. Aunque Calonne había sido uno de los secuaces de Maupeou, no excluyó sistemáticamente a los opositores al golpe de Maupeou de la Asamblea de Notables. También nombró a varios prominentes «neckeristas» leales a su amargo rival.

En principio, Calonne creía que podría moverse rápidamente, pero su agenda se desbarató cuando, el 13 de febrero de 1787, murió Vergennes, el ministro de Asuntos Exteriores. Luis XVI había confiado plenamente en Vergennes y lo expresó al hablar de su pérdida: «He perdido al único amigo con el que podía contar, el único ministro que nunca me ha engañado».[9]

Aunque con un temperamento más conservador que el de Calonne, Vergennes había reconocido que los males financieros estaban privando a la monarquía de los recursos necesarios para desempeñar el papel de gran potencia en el extranjero y, por ese motivo, había dado su apoyo al proyecto de Calonne. El 22 de febrero, los notables se reunieron finalmente para su sesión de apertura. Sin embargo, en su intervención, Luis XVI, que no estaba acostumbrado a hablar en público, sólo leyó unas breves líneas, que no fueron suficientes para impresionar a los notables. Presentar el programa e intentar convencer a la audiencia de que representaba los puntos de vista del rey quedó en manos de Calonne, un orador con mucha más labia.

Las propuestas de Calonne amenazaban los intereses especiales de los grupos privilegiados a los que pertenecían los notables, pero también planteaban serias dudas que afectaban a todos los súbditos del rey. Calonne abrumó a los notables con cifras para argumentar que el nuevo impuesto sobre la tierra aumentaría los ingresos sin afectar a los súbditos más pobres. Los notables señalaron, sin embargo, que el propio Calonne mencionaba un déficit del presupuesto real de más de cien millones de libras francesas al año, y que el nuevo impuesto, según sus propias estimaciones, sólo produciría alrededor de un tercio de esa suma. Se oponían a los ingresos ilimitados que los nuevos impuestos traerían, así como a los detalles de cómo se suponía que se recaudarían. Pero más importante que todo esto era que los notables constataron que carecían de autoridad para aprobar los nuevos impuestos. «Se requeriría que los Estados Generales dieran el consentimiento adecuado a un impuesto de esta naturaleza», insistió uno de ellos, reviviendo la demanda expresada por primera vez doce años antes por el ministro reformador Malesherbes después del golpe de Maupeou.[10]

Otras partes del programa de Calonne también despertaron la oposición de los notables. Muchos de los notables vieron las asambleas provinciales que pretendía crear, en las que la mitad de los escaños se reservarían para los representantes del Tercer Estado, mientras que la otra mitad sería para el clero y la nobleza, como una amenaza a la jerarquía social tradicional del reino. «A cada paso el plebeyo se encuentra a la altura del ministro del Altar, del noble o del magistrado», se quejaba el duque d’Harcourt.[11] En un

anticipo de las amargas rivalidades personales que envenenarían la política revolucionaria, Calonne también se encontró librando un duelo por el poder con Necker. Al insistir en que el presupuesto había estado equilibrado cuando Necker estaba en el cargo, los «neckeristas» echaron la culpa de la crisis financiera sobre los hombros de Calonne e insinuaron que no se podía confiar en él para resolverla.

Frustrado por la inesperada y obstinada oposición de los notables, Calonne también se vio debilitado por el ataque de un grupo de panfletarios liderado por Mirabeau. Su «Denuncia de la especulación», un panfleto que escribieron de forma colectiva, desveló el uso que había hecho Calonne, unos años antes, de fondos gubernamentales para comprar a los especuladores que habían amenazado el lanzamiento de la nueva Compañía de las Indias. Pero Mirabeau, Brissot y sus colaboradores plantearon cuestiones más fundamentales que irían tomando cuerpo a medida que se profundizaba la crisis de la monarquía. Los problemas de Francia sólo podían empeorar, advirtieron, «mientras no tengamos una constitución», un conjunto de reglas que hicieran imposible que alguien tan poco fiable como Calonne ejerciera el poder. Tener una constitución, escribieron, significaría reemplazar el desigual mosaico de leyes existentes con las instituciones nacionales «guiadas por las mismas ideas [...] de acuerdo con principios uniformes», y una sociedad en la que los ciudadanos, a partir de ese momento, se clasificarían «según las contribuciones útiles que hicieran a la sociedad».[12] El lenguaje del folleto sugería una remodelación revolucionaria del país que eliminaría rasgos tan básicos de la vida francesa como las diferencias entre provincias y la existencia de clases privilegiadas.

Ya iba muy retrasado con respecto al calendario que había previsto, así que Calonne decidió hacer otra apuesta arriesgada. En principio, sus propuestas y los procedimientos de la Asamblea de Notables se suponía que eran secretos. El 30 de marzo de 1787, sin embargo, Calonne metió abruptamente a toda la población francesa en el debate cuando encargó al impresor real de Versalles que publicara sus propuestas, junto con una carta

de presentación denunciando los motivos egoístas de sus oponentes. Se distribuyeron copias gratuitas de la carta de presentación de Calonne –o *Avertissement*– por la calle, y se dio orden a los párrocos para que la leyeran en voz alta a sus congregaciones. Según un cronista, a las dos semanas, «la gente que llegaba a París decía que la había visto distribuida en los mercados de las ciudades más pequeñas». Algunos lectores respondieron positivamente: Jérôme Pétion, futuro alcalde revolucionario de París, por ejemplo, escribió a su amigo Brissot diciendo «en los proyectos de Calonne hay puntos de vista muy interesantes, ideas muy favorables para el pueblo». Los notables, sin embargo, reaccionaron con indignación. Según ellos, el ministro estaba tratando de poner a la población en su contra. Lafayette, a pesar de su entusiasmo por la Revolución americana, tuvo que reconocer que «este llamamiento se habría considerado un acto de sedición incluso en Boston».[13] Los oponentes de Calonne convencieron al rey de que se tenía que deshacer del ministro, si es que quedaba alguna esperanza de que los notables aprobaran reformas significativas. Una semana después de la publicación del *Avertissement*, Calonne se había quedado sin su puesto en la corte.

La destitución de Calonne no resolvió los problemas financieros que habían desembocado en la celebración de la Asamblea de Notables. Durante unas semanas, Luis XVI, en un despliegue de energía poco habitual en él, intentó convencer a los notables para que aceptaran una versión modificada del plan de Calonne. Pero incluso las reuniones personales del rey con los líderes de los notables resultaron infructuosas. Las estimaciones del déficit aumentaban, lo que hacía que el público y el mercado de valores estuvieran cada vez más nerviosos. El rey no estaba dispuesto a ceder a la presión de muchos de los notables para convocar a Necker, pero finalmente accedió a entregar la gestión de las finanzas reales a Brienne, el crítico más destacado de Calonne entre los notables. El rey esperaba que Brienne fuera capaz de conseguir apoyo por lo menos en algunas medidas importantes.

Inicialmente, Brienne impulsó unas versiones enmendadas de las propuestas de Calonne: por ejemplo, modificó el impuesto sobre la tierra para que se recaudara en efectivo en lugar de en productos agrícolas, y puso

un límite a la cantidad de ingresos que produciría, pensando que esto aplacaría a los que se oponían a la idea. El secretario de la Asamblea, Dupont de Nemours, concluyó con optimismo que Brienne había reconocido el principio de que no podía haber tributación sin el consentimiento de los gobernados, y que, como resultado, Francia sería ahora «una *república*, donde queda un magistrado, condecorado con el título y los honores de la realeza, pero perpetuamente obligado a reunir a su pueblo y pedirle que sea el proveedor de sus necesidades». Brienne aprendió rápidamente, como descubrirían muchos otros durante la Revolución, que aceptar un puesto en el gobierno significaba alterar drásticamente su postura con sus antiguos aliados. Los notables se mantuvieron firmes en su oposición a cualquier subida de impuestos y cualquier alteración de sus privilegios. Encubrieron sus objeciones con un lenguaje sobre la defensa del bien público y la protección de las libertades, lo cual hacía difícil denunciarlos como defensores egoístas de intereses especiales. La Asamblea estaba dispuesta a aprobar la creación de asambleas provinciales y a aprobar un nuevo préstamo para que el gobierno pudiera pagar sus cuentas más urgentes, pero querían restringir considerablemente el poder real de recaudar y gastar los ingresos, una idea que un periodista comparó con el tratamiento del rey como un «hijo pródigo» al que había que enseñar a no «repetir los mismos errores».[14]

En pocas semanas, Brienne y el rey concluyeron que no tenía sentido prolongar las sesiones de los notables y los enviaron a casa. El fracaso de la Asamblea desmoralizó al rey; según el embajador austriaco, perdió interés por sus deberes oficiales, y empezó a pasar el tiempo cazando, comiendo y bebiendo hasta el punto de que a veces «perdía la razón». Los notables estaban tan frustrados como el rey y su ministro: en una de las últimas reuniones del gabinete al que le habían asignado, Lafayette dejó atónito al jefe del mismo, el hermano menor del rey, el conde de Artois, cuando exigió abiertamente que se convocaran los Estados Generales. La idea de Calonne de que las reformas radicales podrían llevarse a cabo mediante un consenso voluntario entre las élites del reino había fracasado, y su intento había socavado gravemente la credibilidad de las instituciones. Como diría

el gran pensador político francés del siglo XIX Alexis de Tocqueville, Calonne había demostrado que «el momento más peligroso de un mal gobierno es cuando intenta enmendar su forma de hacer las cosas».[15]

A Brienne no le quedaba más remedio que proceder con la escasa aportación del rey, de modo que comenzó a instaurar los cambios que habían aprobado los notables en el gobierno local y provincial; apoyó reformas significativas en el ejército y siguió adelante con una propuesta para conceder derechos civiles limitados a la minoría protestante del reino, un cambio importante en la política que gustó a la opinión ilustrada, pero que alarmó a muchos entre el clero católico. Si hubiera tenido éxito, a Brienne se le hubiera recordado como un gran ministro reformador. Sin embargo, los problemas financieros del gobierno no le permitieron disponer del tiempo que hubiera necesitado, y en el debate público sobre los problemas subyacentes que las reformas propuestas habían desvelado, quedó claro que muchos grupos ya no aceptarían cambios radicales sin una verdadera voz en su configuración.

Durante su primer año en el poder, Brienne intentó todas las tácticas habituales para lidiar con los parlamentos que se habían desarrollado durante el reinado de Luis XV. Los viejos magistrados que habían participado en las ruidosas luchas de la era Maupeou estaban familiarizados con este manual de estrategias. Los más jóvenes, como el talentoso orador Duval d'Eprémesnil y el ambicioso radical Adrien Duport, proponían una mezcla estimulante, aunque confusa, en la que se combinaban argumentos tradicionales con ideas nuevas. Por el lado tradicional, hablaban de que los parlamentos hacían de control sobre el poder real; lo radical eran los elogios al gobierno representativo para los que ponían de ejemplo los de Inglaterra y Estados Unidos. Los asediados defensores del ministerio se quejaban de que los jóvenes fanáticos del Parlamento de París se habían hecho adictos a la oposición demagógica, por el simple placer de estar en contra. «Cuanto más peligrosa y violenta es [una opinión], y más los expone al oprobio de la corte, más glorioso es profesarla», escribió un crítico.[16]

Después de aprobar un préstamo de emergencia para mantener al gobierno a flote en mayo de 1787, el Parlamento de París aceptó varias de las reformas de Brienne que no implicaban nuevas tributaciones. Sin embargo, cuando a principios de julio se presentó la propuesta de nuevos impuestos de timbre y de tierras para su registro, los magistrados se opusieron. Adoptando las tácticas de los notables a principios de año, pidieron al rey que les presentara un informe completo de los ingresos y gastos reales, y una lista detallada de los recortes de gastos que haría. El representante del rey, que era su hermano menor, el conde de Artois, rechazó estas demandas indignado, aduciendo que eran una violación del derecho del rey a gobernar sin interferencias. El 16 de julio, el Parlamento emitió otra protesta, esta vez afirmando su «deseo de ver a la nación reunida antes de cualquier nuevo impuesto. Sólo ella, conociendo el verdadero estado de las finanzas, puede acabar con los grandes abusos y ofrecer grandes recursos».[17] Los jueces aprobaron así el llamamiento a la convocatoria de los Estados Generales que Lafayette había hecho al final de la Asamblea de Notables.

En una ceremonia formal en Versalles el 6 de agosto, el rey obligó al Parlamento a registrar los decretos de impuestos, pero tan pronto como volvieron a sus cámaras parisinas, los magistrados los anularon. Días después, desafiaron al rey al hacer una votación para acusar a Calonne de malversación financiera y rechazar cualquier impuesto que tratara igual a nobles y plebeyos. El gobierno contraatacó con una contramedida que se había empleado frecuentemente bajo Luis XV: exiliar a los magistrados a la ciudad provincial de Troyes. Los secretarios judiciales y otras personas cuyo trabajo dependía de la presencia de los jueces organizaron ruidosas manifestaciones públicas en la capital, algo que también era tradición. Mientras tanto, los magistrados exiliados emitieron proclamas que incitaban a los jueces de los tribunales inferiores a negarse a reconocer los edictos fiscales. Brienne trató de evitar un enfrentamiento brutal con los parlamentarios sugiriendo un compromiso: renunciaría a los impuestos de timbre y de tierras y, en su lugar, continuaría recaudando los de guerra que se habían establecido años antes y que estaban a punto de expirar. En su

opinión, esta medida no requeriría que los jueces aprobaran ningún impuesto nuevo. Reduciría el déficit mediante la aplicación de rigurosos recortes en los gastos del gobierno y, mientras tanto, obtendría nuevos préstamos que serían más fáciles de devolver una vez que se saneara el crédito del gobierno. En cuanto pudiera demostrar que su programa de recuperación financiera estaba teniendo éxito, satisfaría el clamor popular convocando una reunión de los Estados Generales en cinco años. A pesar de la retórica incendiaria de sus declaraciones públicas, los jueces del Parlamento se cansaron rápidamente de sus vacaciones forzadas en Troyes. Cuando estuvo seguro de que el Parlamento ratificaría sus medidas, Brienne les permitió que regresaran a París.

El afán del gobierno por resolver el enfrentamiento con el Parlamento se intensificó por una humillante crisis exterior que alcanzó su punto álgido en septiembre de 1787, cuando Prusia envió tropas para ocupar los Países Bajos, uno de los aliados tradicionales de Francia. Su objetivo era anular el movimiento «patriota» contra el gobernante del país, el *stadhouder* o estatúder, que se venía desarrollando allí desde hacía varios años. En Versalles, el gobierno reconoció que simplemente no tenía dinero para oponerse a los prusianos. El movimiento patriota holandés prefiguró la Revolución que estaba a punto de estallar en Francia. Al exigir un gobierno elegido por todos los ciudadanos, los propagandistas patriotas fueron los primeros en usar la palabra «democracia» en su sentido moderno. En 1785, distribuyeron una propuesta de declaración de derechos cuyo lenguaje se adelantó al de la declaración francesa de 1789. La intervención prusiana hizo que muchos de los patriotas holandeses huyeran a Francia, donde denunciaron a la corte francesa por haberlos abandonado. Lafayette, que veía en el movimiento holandés un eco de la lucha americana por la independencia, dijo que el hecho de que Francia no apoyara a los patriotas era «una mancha que será difícil de lavar».[18] Incluso diplomáticos y militares franceses conservadores culparon al gobierno de terminar en una

situación en la que no podían hacer frente a rivales extranjeros y proteger el interés nacional.

Brienne y su colega Chrétien-François Lamoignon, marqués de Basville, ministro de Justicia, se prepararon cuidadosamente para una ceremonia formal en el Parlamento de París el 19 de noviembre de 1787. A los jueces se les había prometido que se les permitiría hablar libremente y votar sobre las propuestas del gobierno. Después de más de ocho horas de debate, estaban finalmente listos para votar cuando Luis XVI intervino repentinamente y dijo: «Ordeno que se registre mi edicto». Era la fórmula que se empleaba tradicionalmente en la ceremonia *lit de justice*, descrita anteriormente. Una conmoción recorrió la sala al ver que se revertía a los procedimientos de la monarquía absoluta. El primo del rey, el duque de Orleans, la persona más cercana en la línea de sucesión después de los hijos y hermanos del rey, declaró la acción del rey ilegal. Luis XVI respondió con palabras que su antepasado Luis XIV habría refrendado: «Es legal porque es mi voluntad».

A corto plazo prevaleció la voluntad del rey. La protesta del duque de Orleans le valió una *lettre de cachet* por la que se le exilió a una de sus fincas fuera de la ciudad, y se detuvo y se encarceló a varios de los magistrados que lo habían apoyado. Los inversores suscribieron con entusiasmo el primero de los préstamos previstos por Brienne, que ofrecía condiciones favorables. El gobierno se dedicó a instalar las asambleas provinciales recién aprobadas, que Brienne esperaba que se convirtieran en un mecanismo de aplicación de las características del impuesto sobre la tierra que los parlamentarios habían rechazado, en particular, la extensión de la recaudación de impuestos a los bienes de los estamentos privilegiados. Entre otras cosas, esta reforma trajo cambios en las aldeas campesinas. Acostumbrados a gestionar muchos de sus asuntos locales a través de diversos acuerdos tradicionales con sus señores, los aldeanos descubrieron que ahora debían adoptar un sistema uniforme de gobierno municipal. En el diminuto pueblo de Silly-en-Multien, el maestro de escuela, Pierre Delahaye, llevaba un diario en el que anotó los detalles del desconocido procedimiento de votación. Allí, como en muchas comunidades rurales, la

reforma provocó un cambio sustancial en el equilibrio de poder local. Los campesinos ricos dominaban los nuevos consejos de aldea elegidos a expensas tanto del señor como de sus vecinos más pobres.

Mientras el gobierno seguía adelante con sus esfuerzos reformadores, la red informal de radicales que había empezado a unirse en torno a Brissot, Mirabeau y sus amigos también siguió creciendo. En febrero de 1788, Brissot fundó la Société des amis des noirs (Sociedad de Amigos de los Negros). Inspirada en el movimiento abolicionista de Inglaterra, los Amigos de los Negros atrajeron rápidamente a una lista de miembros que era casi como una guía *Quién es quién* de los futuros revolucionarios. Incluía a Mirabeau, Lafayette, Condorcet, Clavière y al abad Emmanuel Sieyès. Abierta a nobles y plebeyos por igual e incluso a mujeres, que desempeñaron un papel importante en el movimiento antiesclavista británico, esta asociación fue el primer ejemplo del tipo de instituciones que desempeñarían un papel importante después de 1789: el club político revolucionario. Brissot se dio cuenta de que la causa de la abolición ofrecía una manera de poner el tema de la libertad sobre la mesa sin desafiar abiertamente al gobierno. Clavière se reunió con Brienne en marzo de 1788 e informó al club de que el ministro había dicho que «le dolía ver que la trata de esclavos y la esclavitud de los negros continuaban, [y] que sería deseable encontrar una manera de abolirlas», aunque advirtió que cualquier reforma tendría que tener en cuenta los «intereses de los plantadores y del tesoro».[19] Brissot, Mirabeau y un número creciente de panfletarios también continuaron desarrollando su talento para utilizar la prensa con el fin de suscitar el debate público. Mirabeau obtuvo permiso para publicar una revista que se convirtió en un vehículo de propaganda abolicionista. También publicó documentos como la propuesta de declaración de derechos redactada por los republicanos patriotas holandeses en 1785.

A pesar del éxito inicial de las medidas forzadas por el Parlamento en noviembre, Brienne sabía que todavía se enfrentaba a una situación inestable. Esperaba que el edicto que concedería tolerancia civil a la minoría protestante de Francia, que se había presentado en el Parlamento el 19 de noviembre junto con sus polémicas medidas financieras, le ayudara

en la batalla por la opinión pública. Lo que ocurrió fue que dividió a los agitadores del Parlamento: Duval d'Eprémesnil se opuso, poniéndose del lado de los católicos conservadores, mientras que Adrien Duport lo apoyó. El principal portavoz de la comunidad protestante francesa, el pastor Jean-Paul Rabaut Saint-Étienne, estaba decepcionado de que no se permitiera el culto público protestante; se convirtió en uno de los panfletarios que exigían una versión más amplia de la libertad política. Mientras tanto, el obispo católico de Dol, portavoz de los estados provinciales de Bretaña, advirtió al rey de que la concesión de derechos a la minoría protestante «violaría su juramento de coronación, y que tal medida sería indudablemente una fuente de disensiones civiles y conmociones en su reino».[20] Los debates sobre la medida fueron un anticipo de las violentas polémicas sobre religión que tendrían lugar durante la Revolución.

A principios de la primavera de 1788, Brienne y Lamoignon decidieron ampliar sus esfuerzos con un conjunto de reformas del sistema judicial francés aún más amplias que el golpe de Maupeou en 1771. Querían crear una nueva *Cour plenière* central, un tribunal plenario, para sustituir a los diversos parlamentos para el registro de los edictos reales. Los propios parlamentos se limitarían a conocer las apelaciones de las sentencias dictadas en los tribunales inferiores, cuyas jurisdicciones se ampliarían. Brienne y Lamoignon esperaban que la ampliación de las responsabilidades otorgadas a los tribunales inferiores a expensas de los parlamentos les daría el apoyo de los jueces provinciales y les permitiría capear el temporal que sabían que iba a estallar en cuanto anunciaran su plan. Para ampliar el atractivo de su reforma, Brienne y Lamoignon también decretaron que los litigantes ya no tendrían que pagar a los jueces para atender sus casos; además, los procedimientos judiciales se simplificarían.

Prevenidos de lo que se avecinaba, los miembros del Parlamento de París se prepararon para resistir. El 29 de abril de 1788, los jueces emitieron un decreto en el que se denunciaba cualquier intento de cambiar los procedimientos para la recaudación de impuestos, y el 3 de mayo fueron

más allá: establecieron por escrito lo que proclamaron como los principios constitucionales fundamentales del reino. Su declaración reconocía que «Francia es una monarquía», pero afirmaba que el rey debía gobernar «de acuerdo con las leyes». Según ellos, esas leyes incluían «el derecho de la Nación a aprobar libremente los impuestos mediante reuniones convocadas y organizadas regularmente por los Estados Generales». Otras leyes fundamentales que, según afirmaban, el rey no podía alterar incluían la permanencia de los nombramientos judiciales y las garantías contra la detención y el encarcelamiento arbitrarios.[21] En lugar de hablar de súbditos reales, la declaración utilizaba el término «ciudadanos». Los privilegiados jueces del Parlamento fueron así los primeros en insistir en que la libertad dependía del reconocimiento de las leyes constitucionales fundamentales que estaban por encima del poder del rey y en exigir una verdadera asamblea representativa que hablara en nombre de la nación.

Con su desafiante declaración, el Parlamento de París elevó las apuestas políticas más allá de lo que había ocurrido en cualquiera de sus anteriores enfrentamientos con la monarquía en el curso del siglo XVIII. Los jueces y sus partidarios se prepararon para la inevitable reacción del gobierno. Animados por una multitud rebelde de seguidores, los magistrados esperaron mientras las tropas reales, las Gardes françaises o Guardias francesas, rodeaban el edificio, y luego, entre la una y las dos de la mañana del 6 de mayo de 1788, entraron finalmente en su cámara para arrestar a Duval d’Eprémesnil y a uno de sus aliados. Después de un largo enfrentamiento, los dos magistrados finalmente se entregaron. Con su sentido del teatro, Duval d’Eprémesnil anunció: «Soy la víctima que está siendo sacrificada en el altar; mi crimen es haber defendido la libertad pública contra los innumerables ataques que recibe». Sus palabras resonaron en el corazón del joven aprendiz de abogado Goujon, que escribió a sus padres: «La gente sensata no dice nada, pero lamenta en el alma todos estos cambios que atacan la esencia de nuestra Constitución y nuestra libertad». Goujon, cuya evolución en los siguientes años lo convertiría en el modelo de un revolucionario perfecto, fue uno más de los muchos que se sintieron llamados por la resistencia de los jueces. El

abogado Charles Lacretelle, que más tarde se convertiría en uno de los primeros historiadores de la Revolución, nunca olvidó «la impresión que me causó ver a esos jueces que vinieron a ofrecerse y tal vez a sacrificarse para salvar la libertad, que en ese momento parecía no tener otro refugio que sus togas».[22]

5

Una nación en armas

Junio de 1788-mayo de 1789

Por muy dramática que pareciera la resistencia de los jueces de París, el indicio más claro de los acontecimientos que estaban por llegar fue la reacción del resto de la población contra el plan de reforma de los tribunales. La respuesta más drástica no se hizo esperar. El 7 de junio de 1788, según escribió un historiador, en la ciudad montañosa de Grenoble, capital de la provincia sudoriental del Delfinado y sede del Parlamento regional, «sonaron las campanas de alarma por doquier, y se sellaron las puertas de la ciudad». Los soldados «abrieron fuego y cargaron contra la gente con bayonetas y sables [...] La gente destrozó algunas calles y se armó con piedras. Subieron a los tejados y usaron tejas y adoquines para alejar a las tropas».[1]

La «Jornada de las Tejas» de Grenoble fue el primer estallido de violencia política revolucionaria en Francia, el primer momento en el que la población se levantó y abrumó a las autoridades. El informe del comandante real no dejó dudas sobre la gravedad de la situación. «La población [...] estaba fuera de control [...] El campo se unió, vinieron campesinos de todas partes, armados con hachas, tridentes y pistolas», escribió. Habían entrado y saqueado su propia residencia y su oficina, y decidió que no le quedaba más remedio que liberar a los jueces parlamentarios que se le había ordenado que arrestara. Les permitió que volvieran a su palacio.[2]

En otras partes del país, la Jornada de las Tejas y las protestas contra la reforma de los tribunales de Brienne y Lamoignon mostraron una determinación mucho mayor para impugnar la autoridad real que las

campañas de panfletos y las huelgas de abogados que había recibido el golpe de Maupeou en 1771. Sin embargo, para el rey y sus ministros serían todavía más preocupantes los acontecimientos que se desencadenarían en el Delfinado las semanas y meses posteriores al levantamiento de Grenoble. Mientras el gobierno central intentaba llevar a cabo su programa, la resistencia en esa provincia preparó el camino para una verdadera revolución en las instituciones políticas de Francia, cuyos principios encontraron eco en muchas otras partes del país.

Brienne y Lamoignon esperaban encontrar una fuerte resistencia a su reforma en las capitales regionales como Grenoble, que eran las sedes de los parlamentos, pero daban por hecho que contarían con el apoyo de la población en general, a la que prometieron procedimientos judiciales más rápidos y menos costosos. Los acontecimientos del Delfinado demostraron rápidamente que la retórica parlamentaria contra el «despotismo ministerial», las ideas liberales de la Ilustración, el ejemplo de la Revolución americana y las críticas de los propios ministros del gobierno a las deficiencias de la monarquía no eran algo aislado, sino que empezaban a ser un clamor entre gente de todas las clases. Más concretamente, la Jornada de las Tejas demostró que las clases bajas –o sea, la abrumadora mayoría de la población–, podían movilizarse por una causa política, aunque no estuviera directamente relacionada con el precio del pan y otras preocupaciones más inmediatas. Brienne y Lamoignon no habían imaginado que los campesinos pudieran tomar sus horquetas para apoyar a jueces privilegiados y abogados instruidos.

Del mismo modo que no habían previsto que los campesinos intervinieran en una disputa constitucional, los ministros no previeron que los plebeyos pudieran desplazar a los miembros de las clases privilegiadas como líderes de un movimiento político. Eso ocurrió por primera vez en el Delfinado, donde incluso los nobles locales aceptaron el programa articulado por el juez local Jean-Joseph Mounier, un ejemplo clásico de miembro exitoso del Tercer Estado de Francia. Hijo de un comerciante de telas, Mounier tenía

apenas veintinueve años en el momento de la Jornada de las Tejas. Igual que muchos otros abogados, admiraba al gobierno británico, con su equilibrio de poderes y su estructura que promovía la cooperación entre los aristócratas y los miembros más acomodados de la población. La habilidad especial de Mounier, en el verano de 1788, fue su capacidad para descubrir cómo convertir la ira contra el absolutismo que se había desbordado en Grenoble en una acción organizada para hacer de Francia una monarquía constitucional.

Sólo una semana después de la Jornada de las Tejas, Mounier ayudó a convocar una reunión de funcionarios locales en Grenoble que puso en marcha una verdadera revolución local. Los que tomaron parte en la reunión condensaron las ideas políticas, que llevaban varias décadas germinando, en un manifiesto en el que se anunciaba que «los impuestos sólo pueden aplicarse legalmente con el consentimiento de la población, unida en una asamblea nacional de representantes libremente elegidos». Para hacer realidad este principio abstracto, convocaron una Asamblea de Representantes de toda la provincia del Delfinado. La propuesta desafiaba abiertamente al gobierno del rey, que no había autorizado ninguna iniciativa de este tipo. Mounier y sus aliados presagiaron las pasiones de la Revolución cuando describieron a sus oponentes como «traidores al país» y se adjudicaron a sí mismos la etiqueta de «patriotas».[3]

La asamblea provincial que Mounier y sus partidarios defendían se reunió un mes más tarde en la pequeña ciudad montañosa de Vizille, a las afueras de Grenoble, hoy día sede del museo nacional dedicado a la Revolución. Mounier había sido cuidadoso y había hecho todo lo posible para que los representantes de los estamentos privilegiados, el clero y la nobleza, cooperaran con representantes del Tercer Estado como hacían él y su aún más joven colega Antoine Barnave, otro futuro líder revolucionario. En la asamblea de Vizille se proclamaron resoluciones que afirmaban que «la ley debe ser la expresión de la voluntad general», palabras que evocaban *El contrato social* de Rousseau y que un año más tarde se plasmarían en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.[4] El aspecto más influyente de las resoluciones de la asamblea fue su propuesta de

reconstituir los estados provinciales del Delfinado. Los delegados de Vizille propusieron que los tres estamentos de la provincia –clero, nobleza y plebe– siguieran eligiendo diputados por separado, pero pidieron que se «duplicara» la asignación del Tercer Estado: éste tendría el doble de diputados que los otros, de modo que la asamblea en su conjunto se dividiera por igual entre privilegiados y plebeyos. En lugar de reunirse como tres cuerpos separados, todos los miembros de los estados formarían una sola asamblea y votarían «por cabeza», de modo que prevalecería la regla de la mayoría.

Este plan de los estamentos del Delfinado fue un ingenioso intento de trazar un camino por el que Francia pudiera pasar de una monarquía absoluta a un sistema constitucional sin provocar una peligrosa agitación social. La propuesta de «duplicar el Tercer Estado» en los estados provinciales se presentó con el fin de satisfacer las demandas de un mayor papel público para los miembros más educados y ricos de la burguesía, aunque el clero y la nobleza seguirían teniendo una influencia desproporcionada en relación con su número. Se presuponía que los asuntos que unían a los miembros de los tres estamentos, en particular su oposición a un poder real arbitrario, neutralizarían otros asuntos en los que pudieran estar en desacuerdo. Mientras que las resoluciones de Vizille subrayaban los derechos históricos de la provincia, los delegados no tenían intención de dividir el reino. En respuesta a las cartas de los reformadores del sudoeste, de la provincia de Bearne, que también intentaban revivir sus estamentos locales, los del Delfinado insistieron en que «deberíamos ver nuestra patria en toda Francia».[5]

La resistencia al plan de reforma de los tribunales no se limitó al Delfinado. Cuando se reunieron para votar su «regalo» anual al gobierno, los representantes del clero católico denunciaron los cambios propuestos en la «antigua Constitución» aduciendo que el problema estaba en «los errores de esa precipitada filosofía que lleva tanto tiempo queriendo instaurar nuevas leyes en el mundo». En Bretaña, los nobles organizaron una red que inundó la provincia de panfletos contra las reformas. Desde la lejana colonia caribeña de Saint-Domingue, donde el gobierno había impuesto su

mando en el equivalente al Parlamento de la isla al abolir el Consejo Superior de la principal ciudad portuaria, Cap Français, en 1787, las denuncias de «despotismo ministerial» engrosaron el coro de quejas. Las polémicas inspiradas por la crisis tuvieron un profundo impacto en quienes leyeron los tratados publicados. Cuando Madame Roland, la brillante hija de un artesano parisino, ahora casada con un hombre mayor dedicado a la causa de la reforma, leyó un tratado en voz alta, le pareció que «sonaba como alguien que está poseído», escribió. Después añadió: «Hay material para llenar el pecho de un heraldo y derribar barreras».[6]

Brienne creía que los elementos de «filosofía» que se habían incorporado en las reformas tendrían apoyo y llevarían al rey a aliarse con los miembros del Tercer Estado. «Si la nobleza y el clero abandonan al rey, que es su protector natural», le dijo a un confidente, «debería arrojarse en brazos de los comunes y utilizarlos para aplastar a los otros dos». Sin embargo, incluso muchos de los que simpatizaban con el espíritu de las medidas de Brienne se oponían al uso del poder absoluto del rey para forzar las reformas. Como escribió un abogado, «ahora hay tres partes en el reino y en París: realistas (monárquicos), parlamentarios y nacionales». Y «los dos últimos [estaban] haciendo causa común», a pesar de que los «nacionales» no tenían un verdadero amor por los jueces.[7]

La crisis financiera en la que estaba sumido el gobierno se cernía sobre el debate para el plan de reforma de los tribunales. El fracaso de la Asamblea de Notables y la resistencia de los parlamentos había dejado claro que nadie quería asumir la responsabilidad de ayudar al gobierno a subir los impuestos. La única solución, según reconocían tanto Brienne como sus oponentes, era obtener el consentimiento de una asamblea genuinamente representativa, cuya autoridad para hacer leyes y aplicar impuestos no se pudiera impugnar. En el marco de la monarquía francesa, esto significaba convocar los Estados Generales e invitar a todos los súbditos del rey, o al menos a los hombres, a expresar sus «quejas» y elegir representantes que debatieran la política gubernamental. Cuando Brienne insistió en que el rey

aprobara la convocatoria de los Estados Generales, Luis XVI exclamó: «Pero, arzobispo, ¡debe usted pensar que estamos perdidos! [...] Podrían derrocar al gobierno y a la monarquía».[8]

A pesar de los temores del rey, el 5 de julio de 1788, Brienne anunció el drástico paso de reunir inmediatamente los Estados Generales. Una proclamación emitida al día siguiente hizo que el rey anunciara: «Deseo, en el ámbito de los Estados Generales y con el fin de asegurar para siempre la libertad y la felicidad de mi pueblo, consumar la gran obra de regeneración del reino que he comenzado». Desde que se había celebrado la última reunión de los Estados Generales en 1614-1615, no existía una memoria institucional sobre cómo deberían elegirse los diputados y qué procedimientos deberían seguir. Brienne suspendió la censura política e invitó a todo el que quisiera a opinar sobre estas cuestiones, una medida que trajo consigo un torrente de nuevos panfletos. Es posible que quisiera retrasar la reunión todo lo posible o, incluso, que quisiera demostrar que no se podía alcanzar un consenso sobre estas cuestiones. Un testigo de la época se quejó de que «planteaba interminables preguntas destinadas a dividir a la gente, a convencernos de que celebrar los Estados se había vuelto casi imposible».[9] Mientras tanto, también siguió intentando hacer frente a la crisis financiera mediante nuevos préstamos, con la esperanza de ganar tiempo y tal vez hacer innecesaria la convocatoria de los Estados Generales.

Para desgracia de Brienne, el crédito de la monarquía ya no era suficiente para darle el tiempo que esperaba. A principios de agosto de 1788, las arcas de la tesorería real estaban completamente vacías y ningún banquero estaba dispuesto a prestar más dinero al gobierno. El 16 de agosto, Brienne anunció que, para pagar sus obligaciones, el gobierno tendría que imprimir billetes de papel del tesoro que se reembolsarían más adelante. La medida era, de hecho, una declaración de bancarrota. «El pavor fue mundial», escribió el periodista Jacques Mallet du Pan. «Los fondos públicos cayeron en picado; mucha gente renunció a tener carro y a algunos empleados domésticos. [...] Las dificultades financieras habían alcanzado un punto álgido; sólo cuatrocientas mil libras en el tesoro real».[10] No quedó más remedio que llamar al único hombre que siempre parecía capaz de

conseguir que los banqueros hicieran préstamos: Jacques Necker, el ministro de Finanzas de Luis XVI, al que habían despedido siete años antes.

Camino de París, el día después del comunicado del gobierno, un viajero «oyó los gritos de felicidad de los habitantes de todas las pequeñas ciudades y pueblos» cuando se difundió la noticia del nombramiento de Necker.[11] Gracias a sus contactos en el mundo de las finanzas, Necker consiguió los préstamos a corto plazo que Brienne no había logrado arreglar. Al ministro de Justicia Lamoignon le despidieron poco después y Necker restableció los parlamentos, dejando a los Estados Generales la decisión de reformar el sistema judicial. Al principio, Necker quería convocar esa asamblea lo antes posible, pero no tardó en darse cuenta de que el esfuerzo llevaría tiempo. Había demasiadas complicaciones en la organización de las elecciones para que fuera posible una fecha anterior a mayo. En lugares donde turbulencias como la del Delfinado, para restaurar o revitalizar los estados provinciales, habían bloqueado los planes de los notables de crear asambleas provinciales, Necker cedió a las demandas locales, lo que erosionó aún más la autoridad del gobierno real.

Además de ocuparse de cuestiones financieras y políticas, Necker tuvo que hacer frente a la crisis social y económica más grave que Francia había sufrido desde los últimos años del reinado de Luis XIV; una crisis incluso peor que la de 1775, año de la Guerra de las Harinas. Los años ochenta del siglo XVIII fueron duros para la población francesa. Tras muchos años en alza, los precios de las cosechas empezaron a caer a principios de la década, al tiempo que los propietarios empezaban a presionar para subir los alquileres de los contratos que se habían fijado años antes en condiciones favorables para los arrendatarios. Los terratenientes tenían la sartén por el mango en la negociación debido al continuo crecimiento de la población, que había dejado a más campesinos pobres compitiendo por la oportunidad de alquilar tierras. Este aumento de la población también causó la subdivisión de las tierras de los campesinos, dejando parcelas demasiado pequeñas para mantener a una familia. A estas tendencias negativas se vino a sumar un ciclo de mal tiempo. En un país cuya economía dependía tanto de la agricultura, las consecuencias de varios años malos seguidos no eran

fáciles de superar. A medida que sus ingresos disminuían, los campesinos, que constituían la inmensa mayoría de la población, recortaron sus gastos, perjudicando al comercio y a la industria manufacturera incluso antes de que el tratado de libre comercio de Calonne de 1786 con Gran Bretaña inundara el país con productos importados baratos.

En el año 1787 hubo una cosecha excelente, lo cual permitió a los terratenientes rellenar los graneros que se habían agotado. También aprovecharon la oportunidad de exportar sus cosechas, cosa que fue posible gracias a una de las reformas que Calonne había propuesto y que Brienne había instaurado en junio de ese año. Lamentablemente, en cambio, 1788 fue un desastre para gran parte del campo a partir de la primavera. Durante la temporada de siembra, prevaleció la sequía. El verano trajo tormentas devastadoras que arruinaron las cosechas en extensas zonas. La peor de ellas golpeó el 13 de julio de 1788; cayó una violenta granizada que destrozó los campos de trigo en el norte de Francia. Esto tenía lugar en medio de la crisis por las reformas de los tribunales, una semana después de que Brienne anunciara las elecciones para los Estados Generales. El arzobispo de París escribió que las pérdidas de los agricultores «son tan grandes y su situación tan deplorable que no ha sido posible exagerar al hablar de ellas».[12] No era necesario ser un experto en economía para prever las consecuencias que se producirían en los doce meses siguientes. El grano escasearía, especialmente en el norte de Francia, donde había que alimentar tanto a las muy pobladas zonas rurales como a la capital insaciablemente hambrienta. Sería inevitable que subiera el precio del pan y esto provocaría protestas y brotes de violencia contra los comerciantes de grano y los panaderos. Como los consumidores se verían obligados a utilizar la mayor parte de sus ingresos para la alimentación, la demanda de otros bienes disminuiría, lo que haría crecer la tasa de desempleo y llevaría a las empresas a la quiebra.

Las autoridades locales, de las que normalmente se esperaba que mantuvieran el orden y garantizaran un suministro adecuado, estaban desorganizadas. El 17 de agosto de 1788, el intendente de la provincia de Champagne, en el noreste de Francia, escribió a Brienne describiendo la

crítica situación del centro textil de Troyes: «Los obreros y jornaleros empiezan a quejarse, incluso están distribuyendo carteles en los que amenazan con quemar a los comerciantes que se nieguen a comprar». Pero el intendente dudó en actuar hasta que recibió instrucciones del gobierno, cuya atención fue completamente absorbida por la crisis financiera. Mientras tanto, la tensión en Troyes llegó a tal punto que los funcionarios locales «creyeron necesario establecer patrullas diurnas y nocturnas para amedrentar a los malvados».[13] Cuando la carta del intendente llegó a Versalles, Brienne, el ministro al que iba dirigida, ya no estaba y los funcionarios locales tenían poca idea de lo que se suponía que debían hacer.

En estas circunstancias convulsas se llevaron a cabo los preparativos para los Estados Generales. Brienne levantó las restricciones de la censura a principios de julio lo cual desató una disonancia de opiniones acerca de cómo habría que estructurar los Estados y qué poderes debían tener. Tan pronto como los jueces del Parlamento de París pudieron reanudar sus funciones, se pronunciaron para resolver el debate. El 25 de septiembre de 1788, el Parlamento decretó que la siguiente asamblea tendría que seguir las «formas de 1614», que eran los procedimientos que se habían seguido en la última reunión de los Estados Generales. Esto significaba que cada uno de los tres estamentos –clero, nobleza y Tercer Estado– tendría el mismo número de diputados y se reuniría y votaría por separado. Se necesitaría el apoyo unánime de los tres para aprobar cualquier ley o nuevos impuestos.

Los jueces no dieron ninguna explicación acerca de su decisión; lo más probable es que quisieran evitar que el rey y los ministros establecieran sus propias reglas para la reunión. Pero su intervención fue contraproducente. Todo el mundo se percató de que el decreto del Parlamento daría a los estamentos privilegiados un veto férreo contra cualquier reforma significativa. Las esperanzas de una mayor voz política para el Tercer Estado quedarían en nada, aunque el clero y la nobleza parecían dispuestos a reconocer que pagarían los mismos impuestos que los plebeyos. Como escribió Mallet du Pan, «el debate público se ha transformado. Ahora el rey,

el despotismo, la Constitución, se han vuelto secundarios: es una guerra entre el Tercer Estado y los otros dos estamentos». Madame Roland le dijo a un amigo que el Parlamento había dado al país la opción de «vegetar tristemente bajo la vara de un déspota o sufrir bajo el yugo de hierro de varios déspotas».[14] Reacios a enfrentarse abiertamente con el Parlamento, Necker y el rey decidieron volver a convocar la Asamblea de Notables y pedir su consejo sobre los procedimientos a seguir en los Estados Generales.

Inquietos por el desorden y las ideas radicales que se estaban extendiendo por todo el país, los miembros de la Segunda Asamblea de Notables, que se reunió del 6 de noviembre al 12 de diciembre de 1788, adoptaron una posición mucho más conservadora que sus predecesores sobre las cuestiones que se les presentaron. Nobles liberales como Lafayette y el duque de Orleans perdieron ante una abrumadora mayoría que apoyaba firmemente al Parlamento de París. Aunque los notables se resistieron a la supresión del cambio, los miembros del Tercer Estado se hicieron más fuertes al exigirlo. En las asambleas de las ciudades e incluso en algunas aldeas, se aprobaron resoluciones instando a la «duplicación del Tercer Estado» y a la igualdad de impuestos. Los miembros de grupos sociales que antes se contentaban con dejar la política a las élites tradicionales ahora exigían que se los escuchara. En la pequeña ciudad de Limoges, de los 72 miembros que firmaron una resolución, 22 eran comerciantes, 16 abogados y funcionarios locales, 27 representantes de los oficios artesanales y 4 campesinos. En la ciudad meridional más grande de Nimes, 1.100 personas participaron en una reunión pública.[15]

La provincia de Bretaña que, al igual que el Delfinado, había mantenido sus estados tradicionales, se convirtió en un campo de batalla que demostró lo violento que podía llegar a ser el conflicto entre los grupos privilegiados y sus oponentes. En la provincia había una gran población de nobles pobres que se sentían especialmente amenazados por los comerciantes y los abogados de sus ciudades que se estaban haciendo cada vez más ricos, muchos de ellos gracias a la floreciente trata de esclavos y el comercio de ultramar. Los estados de Bretaña debían celebrar su reunión anual en

diciembre de 1788. A principios de octubre, el consejo municipal de Rennes, la capital de la provincia, se pronunció enérgicamente para llevar a cabo reformas en favor del Tercer Estado, similares a las adoptadas en el Delfinado. El movimiento se extendió a gran velocidad a las demás ciudades de la provincia; los nobles contraatacaron con su propia resolución que se oponía a cualquier cambio en la Constitución provincial. Mientras los dos bandos se lanzaban panfletos el uno al otro, las autoridades locales tuvieron que enfrentarse a una serie de disturbios por el pan que afectaron a la mayoría de los pueblos de la región.

Obligados a elegir entre los notables intransigentes y una opinión pública cada vez más poderosa, Necker y el rey trataron de llegar a un compromiso. El 27 de diciembre, emitieron una decisión. El Tercer Estado obtuvo su demanda clave: se le permitiría elegir a unos seiscientos diputados, el doble que los otros dos. Necker insistió en que se permitiera al Tercer Estado elegir diputados que fueran miembros del clero o de la nobleza. Esta disposición abrió el camino para que algunos nobles y clérigos liberales obtuvieran escaños que de otro modo les habrían sido negados por los miembros de su propio estamento. Sabiendo que estas decisiones enojarían a los miembros de los estamentos privilegiados, Necker les aseguró con optimismo que «nunca cabrá en la mente del Tercer Estado disminuir las prerrogativas [...] de los dos primeros estamentos».[16] Esquivando la cuestión más controvertida, el anuncio real no decía nada acerca de si los Estados Generales se reunirían como una sola asamblea con un voto por persona, o como tres cámaras separadas, en cuyo caso la duplicación del Tercer Estado no les permitiría superar a los otros dos.

Reducir las prerrogativas de los estamentos privilegiados era precisamente el objetivo del propagandista más eficaz del Tercer Estado, Emmanuel Sieyès, conocido como el «abate Sieyès». Como muchos hijos de modestas familias de plebeyos, Sieyès había estudiado para el sacerdocio más porque ofrecía una carrera segura que por una verdadera vocación religiosa. Durante una década antes de la Revolución, Sieyès fue canónigo y administrador de la diócesis de Chartres, ciudad donde se encuentra la catedral medieval más famosa de Francia. En su tiempo libre, se dedicaba a

estudiar teoría política. Igual que otros que se convertirían en revolucionarios, le parecía muy injusto que se ascendiera a hombres menos inteligentes que él por su condición de nobles. En 1788 estaba listo para unirse al coro de críticos que denunciaban el privilegio aristocrático.

El polémico tratado de Sieyès *¿Qué es el Tercer Estado?* elevó una protesta contra las clases privilegiadas con más vehemencia que cualquier otro panfleto prerrevolucionario. «El plan de esta obra es muy simple», anunció. «Tenemos que hacernos tres preguntas. La primera: ¿qué es el Tercer Estado? Todo. La segunda: ¿qué función ha tenido en el orden político hasta ahora? Ninguna. La tercera: ¿qué es lo que reivindica? Convertirse en algo». Aseguraba que eran los miembros del Tercer Estado quienes realizaban todo el trabajo útil y necesario para que la sociedad funcionara. Cultivaban las cosechas, fabricaban todo lo necesario para la vida y, como el propio Sieyès en su puesto en la Iglesia, hacían el trabajo por el que los nobles y los dignatarios eclesiásticos reclamaban credibilidad. El Tercer Estado, escribió Sieyès, «contiene [...] en sí mismo todo lo necesario para constituir una nación completa». Llamó la atención sobre la disparidad numérica entre los veinticinco millones de miembros del Tercer Estado y «unos doscientos mil nobles o sacerdotes». A pesar de sus impresionantes títulos, los nobles no eran más que parásitos que vivían del sudor de los plebeyos. «Si se aboliera el estamento privilegiado», escribió Sieyès, «la nación no sería algo menos, sino algo más». Explicó que la nación era «un grupo de asociados que vivían bajo una ley *común* y estaban representados por la misma *legislatura*». Si los estamentos privilegiados no aceptaban estas leyes comunes, se excluían a sí mismos de formar parte de la nación.[17]

Siguiendo la lógica de su argumento de que el Tercer Estado constituía la verdadera nación, Sieyès también insistió en que tenía el poder de ignorar a todas las instituciones existentes. «Si carecemos de constitución debemos redactar una; sólo la nación tiene ese derecho», anunció. Sí ofreció a los privilegiados la forma de llegar a ser ciudadanos: si estaban dispuestos a renunciar a todas sus reivindicaciones de un estatus especial y a vivir bajo las mismas leyes que los demás, podrían, como individuos, convertirse en

miembros de la comunidad nacional. Al ser propietarios, seguirían estando en una situación mejor que una gran parte de la población. Pero Sieyès insistió en que cualquier legislatura verdaderamente nacional tenía que consistir en una sola cámara en la que todos los votos se contaran por igual. A diferencia de los portavoces más moderados del Tercer Estado, como Jean-Joseph Mounier, Sieyès pretendía derrotar a la nobleza, no llegar a un compromiso con ella. En cuanto al clero, el grupo al que él pertenecía, Sieyès era menos vehemente. Incluyó al clero parroquial trabajador como parte del Tercer Estado, aunque se opuso a dar a la Iglesia una representación política especial.

Sieyès fue uno de los activistas que pertenecían a la «Sociedad de los Treinta», una red informal de reformistas radicales que se unieron en un intento de asegurar que las elecciones a los Estados Generales favorecieran sus ideas. Los miembros eran una mezcla de dos grupos principales: por un lado, nobles liberales y clérigos dispuestos a sacrificar las prerrogativas de su orden por lo que consideraban un bien mayor, y por otro, figuras del Tercer Estado deseosas de aprovechar la oportunidad de crear una nueva sociedad en la que sus talentos les dieran papeles protagonistas. Muchos miembros de la Sociedad de los Treinta también pertenecían a los Amigos de los Negros, el grupo antiesclavista de Brissot, y habían desarrollado sus ideas sobre la libertad y la igualdad en sus debates.

Aunque los propagandistas de la Sociedad de los Treinta compartían ciertos objetivos, diferían en los detalles. Lo que compartían era una hostilidad hacia el privilegio hereditario, así como la convicción de que el poder real debía ponerse bajo control constitucional mediante el establecimiento de una legislatura representativa. Sieyès veía poco papel para el rey, no sería más que el jefe del gobierno que se instauraría a través de la «constituyente», o asamblea constituyente, que él esperaba ver en marcha muy pronto. Otros patriotas panfletarios estaban dispuestos a conceder al rey un cometido más importante, siempre que se comprometiera a una nueva función como monarca constitucional y se aliara con el Tercer

Estado. Mirabeau, muy consciente de que la nobleza y la Iglesia se habían opuesto muy a menudo a las iniciativas de la Corona, prometió que, si salía elegido para los Estados Generales, sería «un ferviente monárquico» que trabajaría para «restaurar la autoridad real» a expensas de los ministros y los grupos privilegiados. Sólo unos cuantos individuos aislados rechazaron la idea de rehacer la Constitución francesa. En su diario privado, el marqués de Bombelles, un cortesano bien relacionado, se quejó: «Muchos de nuestros amigos se están volviendo locos; a cualquiera que levante la voz a favor de las viejas formas se le despide de inmediato».[18]

Las cuestiones que dividirían al país se fueron aclarando a medida que las asambleas que debían elegir a los diputados de los Estados Generales comenzaron a reunirse a principios de 1789. Bretaña seguía siendo un punto caliente. En enero se reunieron los Estados bretones y estallaron los enfrentamientos en las calles de Rennes cuando los sirvientes de los nobles locales atacaron a los estudiantes burgueses de Derecho. Los testimonios de los partidarios del Tercer Estado denunciaron «la odiosa conspiración de la nobleza, esa raza abominable» y se quejaron de que «el Tercer Estado no es nada, no recibe nada, se le excluye, se le humilla y se le carga con impuestos».[19] Grupos del Tercer Estado procedentes de Nantes y otras ciudades de la región corrieron a la capital para ofrecer apoyo a sus colegas, y la provincia estuvo a punto de terminar en una guerra civil. Al final, los nobles bretones no llegaron a elegir diputados a los Estados Generales, y la delegación del Tercer Estado de la provincia fue una de las más radicales, que aportaría su experiencia de polarización al conflicto en Versalles.

En otras regiones de Francia, el proceso de elección se llevó a cabo con más tranquilidad. Las normas que había impuesto el gobierno permitían que casi todos los varones adultos participaran en una asamblea, pero los reglamentos también subrayaban las distinciones de estatus que alimentaban los debates sobre la igualdad en todo el país. Los nobles que tenían feudos –propiedades con derechos señoriales– podían participar personalmente en la asamblea de su bailía, aunque a los *anoblis* –individuos que no habían heredado su estatus– se los asignó al Tercer Estado. Mientras que las reglas para la nobleza favorecían a los miembros más privilegiados,

las del clero tenían el efecto contrario. Todo el clero parroquial –los sacerdotes, casi todos de origen plebeyo, que eran quienes realizaban los servicios en las iglesias– tenían derecho a votar personalmente en las asambleas. Superaban en número a los obispos y a otros miembros de la jerarquía eclesiástica, que eran normalmente nobles. Los funcionarios del gobierno favorecían deliberadamente al clero inferior porque, como dijo un intendente, su situación les permitía dar «una imagen más exacta de las necesidades y la miseria del pueblo». También asumieron correctamente que los párrocos, a menudo mal pagados, estarían más dispuestos que sus ricos superiores a renunciar a la inmunidad fiscal de la Iglesia.[20] Los monjes y monjas, que a menudo provenían de familias nobles, eran blancos habituales de las críticas de la Ilustración y, por lo tanto, se limitaron a un representante por comunidad.

Los procedimientos electorales eran más complejos para el Tercer Estado que para los otros dos estamentos. Una de las razones era que las jerarquías del Tercer Estado eran mucho más numerosas. En el campo, se celebraban asambleas en todas las parroquias. Aunque podían asistir todos los varones que fueran residentes, la necesidad de redactar *cahiers de doléances* o declaraciones de quejas, significaba que en las asambleas generalmente dominaban los más instruidos. Las asambleas parroquiales recopilaban los *cahiers* y elegían delegados para una asamblea de distrito; ésta luego enviaba delegados a las asambleas de bailía. Allí, se redactaban los llamados *cahiers générales* y, por último, se elegían los delegados de los Estados Generales. En los pueblos y ciudades, las organizaciones gremiales celebraban sus propias asambleas, en las que a veces tenían lugar peleas entre los maestros gremiales y los oficiales. Después, una asamblea general elegía a los representantes de la ciudad para la asamblea de bailía. Aunque casi todos los miembros del Tercer Estado (que eran hombres) tenían la oportunidad de participar en algún punto, este proceso de numerosos niveles hacía de filtro y favorecía la elección de los más elocuentes y con más formación, sobre todo los que se dedicaban a las leyes. Entre los que se

elegían finalmente para los Estados Generales no había ningún artesano y sólo había un campesino, aunque la población estaba formada fundamentalmente por campesinos.

Estos millares de *cahiers* que redactaron las asambleas electorales son en sí mismos una extraordinaria encuesta de la opinión pública, un fenómeno que se había ido gestando en el pensamiento político del siglo XVIII. Había una clara diferencia entre las declaraciones parroquiales reunidas en asambleas de pueblos y gremios, que a menudo ponían de relieve cuestiones locales concretas, y las más generales de las bailías, que a veces resultaban ser verdaderos tratados de teoría política. Los abogados más ilustrados, y los que fueron adquiriendo influencia a medida que el proceso electoral pasaba de sus etapas iniciales a las asambleas generales de las bailías, cambiaron el tono de los *cahiers* del Tercer Estado. Pero no se limitaron a ignorar las preocupaciones de los pobres y los que tenían menos formación. Un análisis estadístico de los *cahiers* que se hizo a finales del siglo XX, demostró de manera convincente que los de nivel inferior reflejaban las auténticas preocupaciones de los campesinos, se veía especialmente su hostilidad hacia los privilegios señoriales que afectaban a su vida cotidiana. El *cahier* torpemente escrito de la parroquia de Longnes, en la provincia occidental de Maine, pedía la supresión de los impuestos sobre la sal y los productos alimenticios, el fin de las exenciones de impuestos para los nobles y la prohibición de los abusos que beneficiaban a éstos, como los costosos proyectos para hacer carreteras. También incluía peticiones para una regulación más estricta de los molineros y castigos más severos para los ladrones de caballos. En el pueblo de Silly-le-Multien, en el norte de Francia, el maestro de escuela Pierre Delahaye se entusiasmó al descubrir que los campesinos no habían dudado en denunciar el daño que su señor, el poderoso príncipe de Conti, había causado a las cosechas durante sus cacerías.[21]

Los *cahiers générales* del Tercer Estado añadieron cuestiones políticas y constitucionales que rara vez se mencionaban en los de los pueblos: la exigencia de que se votara para elegir a los estados provinciales, reuniones periódicas de los Estados Generales, protecciones jurídicas de las libertades

individuales, la abolición de las *lettres de cachet* que había denunciado Mirabeau y el fin de diversas formas de privilegios nobiliarios. En cuanto a cuestiones constitucionales, los *cahiers* de la nobleza estaban a menudo en sintonía con los del Tercer Estado: cuatro de las seis reivindicaciones más frecuentes en ambos conjuntos de *cahiers* eran las mismas, entre las que se encontraban asuntos relativos a la fiscalidad en general, la creación o la reactivación de los estados provinciales, las reuniones periódicas de los Estados Generales y el veto a la fiscalidad para ese organismo. Ambos grupos denunciaron la censura y las violaciones de la libertad individual (como las *lettres de cachet*).[22] El clero también se sumó a esta crítica de los principios y prácticas del absolutismo real: como se venía temiendo Luis XVI, la convocatoria de los Estados Generales desveló que había un deseo generalizado de un gobierno representativo.

En lo que el Tercer Estado y la nobleza diferían con más encono era en la cuestión de los privilegios nobiliarios: tanto los campesinos como las élites burguesas urbanas se oponían, mientras que los nobles, generalmente dispuestos a aceptar la igualdad de impuestos, defendían sus otros privilegios, como la «propiedad», que merecía estar protegida por la ley. A diferencia de los nobles liberales del Delfinado, que habían acordado que se eligieran todos los diputados de su provincia en una sola asamblea de los tres estamentos, los del resto del reino no estaban dispuestos a apoyar un voto por cabeza en los siguientes Estados Generales, que consideraban una amenaza peligrosa para su posición. La intransigencia de la nobleza reflejaba la fuerte influencia de los miembros provinciales más conservadores del grupo. Cuestiones como la reserva de puestos de oficiales militares para sus hijos y los derechos de caza les importaban más que a los grandes ricos de Versalles.

Los *cahiers* del clero se diferenciaban de los de los otros dos estamentos en varios aspectos. El secretario del clero de la diócesis de Digne, en Provenza, quería que cualquier asunto relacionado con la religión que surgiera en los Estados Generales se remitiera a un consejo general de la Iglesia. Los sacerdotes de Digne también querían una vigilancia más estricta de los establecimientos que vendían bebida; «la visita continuada» a

estos lugares, afirmaban, «es perniciosa para la religión». Querían prohibir los juegos de azar y las ferias en días de fiestas religiosas, ya que a menudo terminaban siendo ruidosas fiestas populares. En lugar de la libertad de prensa que buscaban los otros estamentos, los sacerdotes de Digne querían poner fin a «la circulación de obras contra la religión y la buena moral». También querían la confirmación de que los derechos de los protestantes seguirían estando limitados. Sin embargo, su *cahier* reclamaba la igualdad social dentro de la Iglesia, donde «los beneficios, las dignidades y los nombramientos eclesiásticos deben obtenerse exclusivamente por mérito». Fueron pocos los *cahiers* de cualquiera de los tres estamentos en los que se mencionara la esclavitud, pero en algunos de los del clero se utilizaron argumentos religiosos de forma explícita para denunciarla. «A los ojos de la religión, la diferencia en el color de la piel no puede suponer distinción alguna entre sus hijos», escribió el clero de Melun.[23]

Además de redactar los *cahiers*, las asambleas tenían que elegir a los diputados. Los diputados nobles procedían de las altas esferas de la aristocracia, empezando por el duque de Orleans, que era primo del rey. Entre ellos había varios liberales prominentes, como Lafayette y el duque de la Rochefoucauld-Liancourt, que habían sido miembros de los Amigos de los Negros y de la Sociedad de los Treinta. Sin embargo, había un número mayor de conservadores que de nobles reformistas, y tenían la intención de defender sus privilegios hereditarios. Más de cuatro quintas partes de los diputados nobles habían sido oficiales militares en algún momento de su vida y, por lo tanto, habían asimilado el respeto por la jerarquía y el concepto de lo que era el honor. Esto los diferenciaba de sus colegas de los otros estamentos.[24] El reglamento electoral garantizaba que los diputados que representaban al clero fueran menos aristocráticos. Al ver la posibilidad de reunir más votos que sus superiores jerárquicos en el proceso de elección, los curas ordinarios aprovecharon que eran muchos más; tres cuartas partes de los diputados del clero procedían de sus filas. Los párrocos formaban el grupo más grande de diputados de origen social

genuinamente humilde, entre los que se encontraban algunos hijos de artesanos y campesinos.

De los 600 diputados del Tercer Estado, los grupos dominantes eran los que tenían formación jurídica: 218 de ellos habían ocupado cargos de jueces o magistrados, y otros 181 se identificaban como abogados. Por definición, los miembros de estos dos grupos habían recibido una educación y tenían la convicción de que la ley era el principal instrumento de estructuración de la sociedad. Este bagaje educativo lo compartían con varias docenas de médicos, profesores y hombres de letras. Algunos de ellos se habían distinguido como panfletarios durante los años anteriores, pero en general, los hombres de letras estaban poco representados en la asamblea; Brissot, por ejemplo, no consiguió un puesto. Lo mismo ocurría con los productores y comerciantes, lo que va en contra de la idea que se ha mantenido a lo largo de los años de que la Revolución francesa fue una revolución «burguesa» que se llevó a cabo para instaurar una economía capitalista basada en el libre mercado. Sólo un centenar de diputados del Tercer Estado procedían de estas profesiones. En general, tenían una situación económica acomodada y, sin duda, eran más ricos que los campesinos, artesanos y obreros que constituían la abrumadora mayoría de la población desfavorecida, y bastantes de ellos habían llegado a un paso de la nobleza y tenían estrechas relaciones con miembros de la aristocracia. Eran hombres que habían triunfado bajo las reglas de la sociedad existente, pero muchos también se sentían frustrados porque su condición significaba que «todos los caminos hacia el progreso [estaban] vedados», como lamentaba Antoine Barnave, uno de los líderes de la delegación del Delfinado, en su diario.[25]

El arte de hacer campaña política era nuevo en Francia en 1789 y se consideraba indecoroso que los individuos se presentaran con demasiado descaro. Nadie violó ese precepto de manera más flagrante que Mirabeau. Seguro de que su talento y su voz pujante le convertirían en una figura importante, estaba dispuesto a hacer lo que fuera para asegurarse un puesto en los Estados Generales. Intentó ser candidato por varias provincias diferentes e incluso negoció con los colonos ricos de Saint-Domingue, opción que no se concretó cuando se enteró de que tenía que ser dueño de

una plantación con al menos cincuenta esclavos para poder representarlos. Al ver que sus esfuerzos por conseguir un puesto entre los nobles no daban los frutos esperados, Mirabeau se dirigió al Tercer Estado de su Provenza natal; hizo alarde de que le había rechazado su propio estamento para convencer a los electores de que, a pesar de su título aristocrático, sería «el hombre de la libertad pública, el hombre de la Constitución».[26] Logró salir elegido triunfalmente para representar a la ciudad de Aix.

Mirabeau no fue el único que hizo todo lo posible por conseguir un puesto de diputado. En la ciudad de Arras, en el norte de Francia, un joven abogado que se llamaba Maximilien Robespierre se presentó como portavoz del pueblo. Esto era un desafío en toda regla a los funcionarios municipales locales, que esperaban salir elegidos sin ningún problema. Para tener más votos que ellos, Robespierre y sus aliados tuvieron que imponerse en cuatro reuniones locales diferentes, empezando por el comité de los abogados locales y culminando con la asamblea electoral municipal. En cambio, el marqués de Ferrières, que representaría a su estamento en Saumur, afirmó que le habían elegido, pero que él «no lo había buscado, ni previsto», aunque «varias personas más ricas e importantes habían trabajado con ahínco para que las eligieran». Esto no era porque los procesos en los estamentos privilegiados fueran menos acalorados que los del Tercer Estado: el matemático y escritor nacional Condorcet se quejaba de que la nobleza de Mantes le tenía bloqueado por la oposición de «los aristócratas, los jueces parlamentarios, los propietarios de plantaciones, los fervientes católicos y la mitad de los traficantes de esclavos».[27]

Mientras se iban celebrando las elecciones, la agitación social seguía creciendo por todo el país. A finales de abril, la violencia estalló en Saint-Antoine, el *faubourg*, o suburbio, de clase obrera de París, cuando se extendió el rumor de que Jean-Baptiste Réveillon, un elector rico, fabricante de papel pintado, había dicho que los salarios de los trabajadores eran demasiado altos. Una multitud atacó su casa en Saint-Antoine, en el lado este de la ciudad. «Se han llevado todo lo que han encontrado, han

quemado los papeles, los diseños de papel pintado e incluso dinero; han destrozado los jardines, han cortado los árboles», escribió el diputado noble, Ferrières, a su esposa. En otras partes de la ciudad, la muchedumbre «paraba a todo el mundo, preguntaba si eran del Tercer Estado, e insultaba o maltrataba a los nobles».[28] Al menos sesenta alborotadores fueron asesinados; los rumores de la época daban un número mucho más elevado de muertos. Este brote de violencia era una advertencia para los que ansiaban verse en Versalles en la reunión de los Estados Generales: los presionarían no sólo para que aprobaran reformas constitucionales, sino para que convencieran a la masa de la población de que tomarían medidas para satisfacer sus necesidades inmediatas.

La cólera que alimentó los disturbios de Réveillon se reflejó políticamente en una serie de panfletos cuyos autores decían hablar en favor de un «cuarto poder» compuesto por todos los que eran demasiado pobres para tener voz en las asambleas electorales. Un panfleto radical se presentaba como una «petición de 150.000 trabajadores y artesanos de París». Añadía la queja de que «entre los cuatrocientos electores apenas hay cuatro o cinco que conocen nuestra situación, nuestros sufrimientos y nuestras necesidades, para poder interesarse con conocimiento de causa». Esta corriente populista encontró un portavoz particularmente elocuente: el personaje ficticio del Père Duchêne, un hombre tosco del pueblo que estaba destinado a desempeñar un papel importante en la vida francesa durante los diez años siguientes. Este «rudo, maleducado y cariñoso instalador de hornos» se había creado como personaje de una obra de teatro popular, pero un público más amplio lo había hecho suyo. Los panfletarios le dieron voz y estaba listo para denunciar «los atroces y criminales abusos ¡que nos han esclavizado y carcomido durante siglos!». Duchêne era un exmarinero que decía *foutre* (joder) o *bougre* (moco) cada cinco minutos, y no temía hablar directamente con los de clase alta. «Si está presente el rey», proclamó, «me explicaré con más seguridad». Exigía que las élites poderosas respetaran «al pobre que trabaja incansablemente para alimentarlos y al que tienen la bárbara vanidad de tratar con desdén», y trazó un programa para los Estados Generales que incluía el fin del lujo del alto clero, un sistema impositivo

reformado que golpeara a los ricos «sin piedad», y leyes que «castigaran a los egoístas dueños de monopolios, los insaciables acaparadores que se atiborran de riquezas a expensas de la multitud indigente». Ante los diputados, gritó: «Que el trigo sea más barato y que el trabajador pueda vivir [...]. Haced algo por la subsistencia de los pobres [...]. Es vuestra primera obligación».[29]

La figura del Père Duchêne que, en este caso, recibía su voz de un oscuro escritor llamado Antoine-François Lemaire, la utilizarían muchos periodistas en los años siguientes para mostrar que el pueblo común ya no pedía piedad, sino que tenía exigencias muy reales. En este caso, reclamaba la derogación del tratado de libre comercio de Calonne con Gran Bretaña y la institución de un método único de pena capital para todos, independientemente de su posición social. Tales peticiones serían un desafío constante para las élites que dominaban las elecciones de los Estados Generales. Otros panfletos eran igualmente desafiantes. Uno, titulado *Remonstrances, plaintes et doléance des dames françaises (Protestas, quejas y reivindicaciones de las mujeres francesas)* desafiaba la pretensión de los Estados Generales de representar «a toda la nación, cuando la mitad y más de la nación no tendrá un asiento allí». El autor demandaba que las mujeres francesas formaran sus propios Estados Generales para presentar sus demandas.[30]

En el transcurso de las elecciones, millones de personas tuvieron la experiencia sin precedentes de participar en debates abiertos sobre los aspectos más fundamentales de su sociedad. Incluso después de que las asambleas electorales terminaran su trabajo, los que habían participado en ellas siguieron movilizados. En muchas ciudades, las comisiones electorales siguieron reuniéndose, esperando recibir informes periódicos de los diputados que habían elegido y dispuestos a recordarles las promesas que habían hecho de impulsar reformas concretas. Tenían grandes esperanzas, pero también muchos temores. ¿El rey estaría dispuesto a aceptar que se pusieran límites a su poder? Los nobles estaban preocupados por el futuro

de sus privilegios y al clero le daba pánico una reacción contra la Iglesia alimentada por las ideas de la Ilustración. Pero lo más importante era que los miembros del Tercer Estado temían que los estamentos privilegiados encontraran la forma de detener el movimiento en favor de la igualdad e ignorar sus necesidades más apremiantes, a pesar del impulso que habían ganado en los meses previos a la apertura de los Estados Generales. A las clases privilegiadas las aterrorizaba la cólera del pueblo, expresada en explosiones como los disturbios de Revéillon y las demás sublevaciones que asolaban el país. Satisfacer tantas expectativas contradictorias y calmar tantos miedos conflictivos era un desafío descomunal.

6

La Revolución en la sala del Juego de Pelota: de los Estados Generales a la Asamblea Nacional

Mayo-julio de 1789

El 4 de mayo de 1789, los diputados de los Estados Generales marcharon solemnemente a la iglesia de San Luis en Versalles para asistir a una misa de inauguración de la asamblea. «Si hubierais visto al rey, habríais dicho: "¡Qué bueno es! ¡Qué alegre es!"», escribió Jean-François Gaultier de Biauzat, miembro del Tercer Estado.[1] El 20 de junio, sólo seis semanas después, los oficiales del rey prohibieron la entrada a la sala de reuniones a él y a los otros diputados. Entonces respondieron con un dramático juramento: no permitirían que ninguna oposición, ni siquiera la del rey, les impidiera redactar una nueva constitución basada en los principios de libertad e igualdad para Francia. A comienzos de julio, los diputados habían llevado a cabo una verdadera revolución al reclamar el poder para sí mismos en nombre de la nación que representaban. La única posibilidad que le quedaba al rey para poner fin a esta insubordinación era recurrir a la fuerza, y el asalto a la Bastilla el 14 de julio demostraría que ya no tenía los medios para mantener el sistema absolutista en el que había nacido.

Aunque la crisis financiera había obligado al rey a convocar los Estados Generales contra su voluntad, la pompa que rodeaba su apertura pretendía destacar no sólo la autoridad de la monarquía, sino también la de las otras instituciones a las que estaba tan ligada, la Iglesia y la nobleza. El maestro de ceremonias real notificó al alto clero que debían aparecer con sus más espléndidas ropas eclesiásticas. Los nobles debían llevar capas con ribetes dorados y «sombreros con plumas blancas al estilo de Enrique IV»; un diputado noble gastó 1.300 libras francesas en su traje. A los diputados del Tercer Estado, sin embargo, se les prohibió presumir y se les dijo que

compraran sombrías capas negras. «La distinción en la vestimenta podría llevar a pensar que se harían otras distinciones, ya fuera en el método de recibir los *cahiers* o en el conteo de votos», escribió un diputado del Tercer Estado disgustado.[2]

Los plebeyos desafiaron las instrucciones que habían recibido de agruparse según sus provincias de origen y se mezclaron con sus nuevos colegas de otras partes del reino, un gesto que destacaba su reivindicación de hablar en nombre de un pueblo francés unido. La enorme multitud que se congregó en las calles de Versalles para ver el elaborado desfile aprovechó la ocasión para hacer sus propias declaraciones. Los espectadores reservaron sus ovaciones más entusiastas para los diputados que vestían con mayor sencillez, que eran los que de verdad «representaban a la nación», como dijo el pastor protestante Rabaut Saint-Étienne, diputado del Tercer Estado. Hubo una bienvenida especialmente cálida para «Père Gérard», el único diputado campesino, un granjero bretón que iba con su deslavazado traje de los domingos. Entre los diputados, la hija de Necker, la joven y brillante Madame de Staël, se fijó en un hombre en particular: Mirabeau, que llamaba la atención por su «gran mata de pelo». Le daba aire de tener el «poder que uno se imagina en una tribuna del pueblo», escribió.[3]

La inauguración formal, que se celebró el 5 de mayo de 1789, puso de manifiesto la jerarquía política y social de la monarquía. Mientras los diputados ocupaban sus asientos en uno de los grandes salones del palacio, la Salle des Menus Plaisirs, Luis XVI los observaba desde lo alto de su trono, con María Antonieta sentada a su izquierda. Más abajo, a ambos lados de una mesa reservada a los ministros principales, los diputados de los estamentos privilegiados se sentaban uno frente al otro. Al fondo de la sala, frente al rey, estaban los bancos reservados para los representantes del Tercer Estado. Alrededor de tres lados de la sala, unas galerías permitían que hasta dos mil espectadores presenciaran los procedimientos.

La puesta en escena de la sesión impresionó a los diputados, pero el contenido no. El rey sólo hizo breves comentarios. Necker, el ministro de Finanzas, pronunció el discurso principal; tardó tres horas en leer una explicación de la grave situación financiera del gobierno. El marqués de

Ferrières, en una carta a su esposa, escribió que la perorata había estado «muy por debajo de lo que uno tenía derecho a esperar de un hombre de reputación tan elevada». Sin embargo, tuvo cuidado de no decírselo a Madame de Staël, que tenía la intención de usar su salón para ejercer influencia política. Necker quería evitar caer en la trampa que había llevado al fracaso de Calonne en la Asamblea de Notables: dar la impresión de que ocultaba información vital a los diputados. Donde veía una oportunidad, Necker intentaba demostrar su simpatía y la del rey por las buenas causas. Hacia el final de su discurso, denunció el sufrimiento infligido a las víctimas de la trata de esclavos, a quienes «metemos en la bodega de un barco para proceder a toda marcha a entregarlos a las cadenas que los esperan» y habló de la esperanza de que Francia y Gran Bretaña pudieran colaborar para poner fin a este «comercio bárbaro».[4] Sin embargo, la ausencia más notable del discurso de Necker era un plan de acción para que los diputados debatieran, ya fuera sobre la trata de esclavos o sobre cualquier otro tema. Lo más llamativo de todo fue que no trató el tema más urgente que tenían los diputados entre manos: decidir si se reunían y votaban por cabeza o por estamento.

El 6 de mayo por la mañana, cuando llegaron a la sala de reuniones, los diputados del Tercer Estado se encontraron inmediatamente frente a una decisión trascendental. Se ordenó al clero y a los nobles que se separaran para empezar a verificar sus credenciales. Si el Tercer Estado aceptaba hacer lo mismo, estaría validando la idea de que los Estados Generales estaban compuestos por tres cámaras distintas. Inmediatamente, Mirabeau hizo su primera intervención decisiva: convenció a sus colegas de que la única manera de obligar al clero y a la nobleza a aceptar el voto por cabeza en una sola asamblea era que el Tercer Estado se negara a tomar ninguna medida en ausencia de los diputados de los otros estamentos.

Esta estrategia no estaba exenta de riesgos. Mientras la reunión continuaba en punto muerto, se extendieron los rumores de que el rey podía declarar nulos los Estados Generales e imponer sus propios decretos para

hacer frente a la crisis financiera. Pocos diputados del Tercer Estado deseaban realmente una confrontación directa con el clero y la nobleza, y muchos respondieron positivamente a los esfuerzos por negociar algún tipo de compromiso. La delegación del Tercer Estado de Bretaña, la provincia donde las hostilidades entre los plebeyos y los nobles habían sido más violentas, dirigía la oposición a tales propuestas. Desde que dio comienzo la reunión, los diputados bretones tuvieron reuniones constantes para acordar una postura común en los debates. Su «Club Bretón» no tardó en atraer a miembros de otras provincias, sobre todo de aquellas en las que se habían producido conflictos durante las elecciones, y comenzó a tomar la apariencia de una facción organizada.

A medida que se prolongaba el parón, los seiscientos diputados del Tercer Estado, que en su mayoría apenas conocían a algunos colegas de su distrito local cuando llegaron, empezaron a descubrir los puntos fuertes y débiles de cada uno. El 19 de mayo, cuando el Tercer Estado acordó nombrar representantes para reunirse con los otros estamentos y buscar una solución al estancamiento, Adrien Duquesnoy pudo describir detalladamente a casi todos: «Rabaut de Saint-Étienne, ambicioso, escritor de libros, pero dicen que es moderado y sabio [...]. Le Chapelier, un loco muy violento, un bretón extremista [...]. Barnave, bruñidor de palabras, sin grandes ideas, bastante peligroso». Destacaba Mirabeau entre ellos: «Este hombre es una bestia iracunda, un *enragé*», escribió Duquesnoy. «Se convulsiona cuando habla, retuerce el rostro, escupe las palabras con furia». Durante todo el mes de mayo, una clara mayoría de los diputados del Tercer Estado siguieron apoyando a los moderados. No todos los diputados de los estamentos privilegiados estaban empeñados en la confrontación. A principios de junio, Ferrières dijo a su esposa: «A mí no me importa, en última instancia, si votamos juntos o por separado». Entre el clero, muchos de los párrocos se rebelaron contra la línea dura que predicaban sus superiores aristocráticos. Mientras tanto, algunos diputados del Tercer Estado ya hablaban abiertamente de un movimiento unilateral para salir del callejón sin salida. A pesar de sus dudas personales, ya el 15 de mayo

Duquesnoy había escrito: «No tengo ninguna duda de que, antes de fin de mes, el Tercer Estado habrá decidido declarar que él solo es la nación».[5]

Desde que se abrió la reunión de los Estados Generales, algunos diputados recurrieron a los medios de comunicación para conseguir el apoyo del público. Mirabeau era uno de los que dirigía este esfuerzo. Daba la casualidad de que su amante del momento, Madame Lejay, tenía una imprenta en París y estaba deseando ayudarle a lanzar un periódico que prometía ayudar a pagar sus exorbitantes gastos. Brissot, el colaborador de Mirabeau, el activista de la asociación Amigos de los Negros, consideraba que los periódicos eran esenciales si el país quería hacer reformas. Los periódicos, decía, permiten «mostrar la misma verdad a millones de hombres al mismo tiempo; a través de la prensa, pueden discutir sin tumultos, decidir con calma y dar su opinión». Cuando el gobierno prohibió las iniciativas de los dos publicistas, Mirabeau insistió en que tenía derecho a publicar lo que llamó *Lettres à mes commettants* (Cartas a mis electores). Otros diputados también enviaron regularmente informes a sus comunidades de origen; allí se imprimieron y se vendieron algunos de ellos. La innovación de Mirabeau fue publicar sus cartas en París y ofrecerlas al público de la ciudad, así como a sus votantes en Provenza. Las versiones más o menos fieles de las mociones presentadas en las sesiones de los tres estados se imprimieron rápidamente en París y, a finales de mayo, Gaultier de Biauzat se quejaba de que los periodistas estaban menos preocupados por la veracidad de los datos que por llenar sus páginas.[6]

Estos primeros periódicos apoyaban abrumadoramente al Tercer Estado. Étienne Le Hodey de Saultchevreuil, uno de los primeros periodistas independientes, denunció que el «muro de orgullo de los nobles intentaba detener el torrente de la opinión general». Advirtió contra una maniobra de los diputados del clero para atraer al Tercer Estado a aceptar la existencia separada de su estamento: «Es un truco furtivo, típico del clero. Durante más de ochocientos años, siempre se ha comportado de la misma manera». Esos comentarios editoriales hicieron que los periodistas participaran

activamente en la conformación de las reacciones del público y la población respondió con entusiasmo a sus esfuerzos. El viajero inglés Arthur Young, que se encontraba en París en junio de 1789, observó el enorme interés que tenía el público por las actas y por todo lo que se publicaba sobre ellas. «El negocio que hay actualmente en las tiendas de panfletos de París es increíble», escribió a principios de junio. «Cada hora se produce algo nuevo. Hoy han salido 13, ayer 16 y la semana pasada 92».[7]

Para los más comprometidos con la lucha política en curso, no bastaba con la lectura de los informes impresos. Querían expresarse directamente. En el Palais-Royal, el principal lugar de reunión en París para los cazanoticias, Young vio «multitudes expectantes [...] en las puertas y ventanas» de los cafés, «oyendo con la boca abierta a ciertos oradores, que desde sillas o mesas arengaban a su pequeña audiencia». Añadió: «El afán con el que se les escucha y los aplausos atronadores que reciben cada vez que muestran algo más allá de la dureza o la violencia común contra el gobierno actual, son difíciles de imaginar». Los que sí lo imaginaban –como el joven abogado parisino Camille Desmoulins, cuyo compañero de escuela Maximilien Robespierre estaba entre los diputados– tomaron carruajes públicos hasta Versalles y se agolparon en la tribuna pública para oír a los diputados del Tercer Estado. Young se unió a ellos. «La sala es demasiado grande», refunfuñó. «Sólo se oye a los que tienen pulmones estentóreos o la voz más clara y fina; sin embargo, el tamaño del espacio, en el que cabían dos mil personas, da dignidad a la escena». El día que él asistió, oyó hablar a una alineación de estrellas entre las que estuvo Mirabeau, con una charla improvisada de una hora, pronunciada con «calidez, animación y elocuencia», así como discursos de Sieyès, Mounier, Rabaut Saint-Étienne y Barnave. Sin embargo, a Young le desagradó descubrir que «a los espectadores de las galerías se les permite interrumpir los debates con aplausos y otras ruidosas expresiones de aprobación». Temía que semejantes manifestaciones de la opinión pública pudieran «quitar valor al debate e influir en las deliberaciones».[8] Lo que Young sospechaba era exactamente lo que muchos partidarios del Tercer Estado querían: que, al llevar el comportamiento familiar de los teatros públicos a

la política, la gente común pudiera influir en el curso de los acontecimientos.

La visita de Young a los Estados Generales cayó casualmente en una fecha crucial, el 15 de junio de 1789, el día que los diputados del Tercer Estado estaban a punto de pasar de una huelga a una verdadera revolución. Los representantes de los otros dos estamentos estaban dispuestos a ceder sus privilegios fiscales, pero la mayoría del clero y de la nobleza se negó rotundamente a ceder en la cuestión de continuar siendo estamentos separados. En sus dos cámaras, sin embargo, una minoría estaba dispuesta a aceptar la unión con el Tercer Estado, lo que dio a los líderes de este estamento la esperanza de que, si presionaban el tiempo suficiente, acabarían prevaleciendo. La oposición conservadora contaba con el apoyo de la corte real, donde el hermano menor del rey, el conde de Artois, y la reina se oponían activamente a cualquier concesión y se afanaban en socavar la posición de Necker, quien, por su parte, seguía esperando llegar a un compromiso que desembocara en la promulgación de una constitución de estilo británico. Pero la familia real estaba distraída por una tragedia doméstica: el 4 de junio había muerto el hijo mayor de Luis y María Antonieta, lo que hacía difícil que el rey prestara toda su atención a los asuntos públicos.

Para la segunda semana de junio, incluso los moderados se habían convencido de que era necesario tomar alguna medida radical para salir del callejón sin salida en el que estaban con los estamentos privilegiados. En una reunión del club formado por los diputados bretones, Sieyès propuso un plan: el Tercer Estado haría una lista de todos los diputados de los tres estamentos y declararía que, una vez completado este procedimiento, la asamblea resultante sería la única representante de la nación. El Tercer Estado, según Sieyès, «no puede esperar más a los diputados de las clases privilegiadas sin hacerse culpable a los ojos de una nación, que tiene un derecho indudable a exigirle un mejor uso de su tiempo».[9] La urgencia que reflejaba la iniciativa de Sieyès se acentuó por los informes que los

diputados recibían diariamente sobre los desórdenes en las provincias, donde continuaban los disturbios por el precio del pan. Los nervios de los campesinos estaban al límite debido a rumores sobre «bandidos» que supuestamente se estaban organizando para destrozar las cosechas antes de que se pudieran recoger.

La moción de Sieyès tenía implicaciones revolucionarias. Los diputados del Tercer Estado reclamaban ahora poder actuar sin el consentimiento de los representantes de los otros estamentos ni la aprobación del rey. Si su reivindicación tenía éxito, acabarían con la monarquía absoluta y la centenaria jerarquía social francesa. Pero por el momento, los diputados no eran más que seiscientos hombres que, como bien sabían, estaban queriendo ir mucho más allá de lo que autorizaban las asambleas que los habían elegido. Los diputados de la nobleza no se alteraron: el marqués de Ferrières describió la moción como «un acto insolente». Aun así, la primera señal de que el Tercer Estado podría ganar llegó el 13 de junio. Acababan de leer los nombres de los diputados del Tercer Estado de la provincia de Poitou cuando tres párrocos de esa provincia, diputados del clero, entraron en la sala. «Venimos [...] guiados por el estandarte de la razón, por el amor al bien público y por la voz de nuestra conciencia, para colocarnos al lado de nuestros conciudadanos y hermanos», anunció el cura Jacques Jallet. El *Journal des États Généraux* ayudó a los lectores a compartir las emociones del momento, con sus descripciones: «En la sala retumbaban los aplausos; todo el mundo se agolpaba alrededor de los curas; los abrazaban con lágrimas de alegría».[10]

El debate que Arthur Young presenció dos días después marcó una nueva etapa en el desarrollo de la revolución parlamentaria que Sieyès había lanzado: se trataba del nombre que los diputados se darían a sí mismos ahora que ya no eran sólo los representantes de un estado sino de toda la población. La asamblea rechazó la cautelosa propuesta de Mounier de llamarse a sí mismos «la asamblea legítima de los representantes de la mayor parte de la nación, actuando en ausencia de la parte más pequeña». Cuando Mirabeau sugirió «representantes del pueblo francés», se puso la objeción de que la palabra «pueblo» conferiría demasiada influencia a las

clases bajas, que incluso él reconocía que «no estaban preparadas para comprender el sistema de sus derechos y la sagrada teoría de la libertad». Los diputados finalmente se decidieron por dos simples palabras: «Asamblea Nacional».[11] El significado estaba claro: los diputados afirmaron que eran los únicos representantes de toda la comunidad francesa, sin dejar lugar a grupos particulares como la nobleza, el clero o, incluso, el rey. Para dar mayor énfasis a esta afirmación, el 17 de junio la Asamblea declaró que era «una e indivisible».

Lo que la Asamblea pretendía hacer con los poderes que reclamaba para sí quedó patente el 17 de junio, día en el que, como dijo Sieyès, la Asamblea «cortó definitivamente el cordón» que la unía a las instituciones existentes. Los diputados, con sus filas reforzadas por otros clérigos que habían seguido el ejemplo de los tres sacerdotes de Poitou, dieron en la diana de la autoridad real al declarar que los impuestos existentes, que «no habían sido autorizados por la nación, son todos ilegales». Pero reconocían que era necesario tener ingresos, de modo que la Asamblea se apresuró a añadir que se seguirían recaudando hasta que se pudieran sustituir por un nuevo sistema. En cualquier caso, no quedaba ninguna duda de que esto significaba despojar a Luis XVI del poder de recaudar dinero por su propia autoridad. Además, los diputados «ponen a los acreedores del Estado bajo la protección del honor y la lealtad de la nación francesa», objetando de antemano cualquier medida del rey para declararse en quiebra y liberarse así de la autoridad de la Asamblea.[12]

Un monarca absoluto no debía dejar sin respuesta un desafío tan directo, pero el rey tardó en reaccionar. Mientras tanto, su primo, el duque de Orleans, hizo lo que pudo por convencer a los diputados nobles de que se unieran al Tercer Estado. Aunque sólo 88 lo apoyaron, había entre ellos algunos de los miembros más prominentes de su orden. El 19 de junio, la mayoría del clero votó para unirse a la Asamblea Nacional. Sin embargo, cuando la Asamblea se reunió la mañana del 20 de junio, encontraron las puertas de la Salle des Menus Plaisirs cerradas. El rey había ordenado que

se hicieran los preparativos para una «sesión real» en la que anunciaría sus intenciones. Temiendo que el rey estuviera a punto de destituir a los Estados Generales o incluso de ponerlos bajo arresto, los diputados buscaron un lugar lo suficientemente grande para reunirse. Finalmente encontraron la sala cubierta del rey, el Jeu de Paume. Allí, su presidente, Sylvain Bailly, les llevó a hacer el Juramento del Juego de Pelota, por el que prometían que no permitirían que los dispersaran hasta que dieran una constitución a Francia. Anunciaron en tono desafiante que «la Asamblea Nacional existe dondequiera que se reúnan sus miembros»: aunque el rey los obligara a abandonar Versalles, seguirían afirmando su derecho a reunirse en otro lugar y continuar su trabajo. Una delegación de ricos propietarios de plantaciones que decían representar a la colonia de Saint-Domingue, que había solicitado la admisión en la Asamblea, aprovechó la oportunidad para identificarse con la causa patriótica ofreciendo prestar juramento junto con los diputados; en el calor del momento, se aceptó su oferta. No se planteó si su inclusión significaba poner la esclavitud bajo la protección de la nación. Esta contradicción nada desdeñable perseguiría los esfuerzos de la Asamblea por garantizar el ideal de libertad.

En palacio, el rey, sus ministros y los miembros de la familia real trabajaban frenéticamente para elaborar una respuesta a lo que el hermano menor del rey, el conde de Artois, llamó «la ilegalidad de la deliberación del 17 de junio y el desafío de la sesión en la sala del Juego de Pelota». Necker y sus ministros más cercanos instaron al rey a evitar una confrontación. Si el rey adoptaba una línea dura, advirtió el conde de Montmorin, ministro de Asuntos Exteriores, «el Tercer Estado no podrá disolverse, y entonces los problemas alcanzarán su punto álgido»; esta crisis, además, se produciría en un momento en que el gobierno no tenía recursos para enfrentarse al grupo rebelde.[13] Pero hacer un pacto con la plebe era psicológicamente imposible para los monarcas, que habían pasado toda su vida entre aristócratas. Toda la educación y la experiencia de Luis XVI iba en contra de una idea semejante, y María Antonieta, a la que habían incluido en las reuniones del consejo real desde finales de 1788, se oponía con más vehemencia aún a aceptar dichas concesiones. Necker, consternado por la intransigencia del

rey, presentó su dimisión; no acompañó al monarca cuando se celebró la sesión real del 23 de junio.

En la sesión real, el rey prometió llevar a cabo algunas reformas sustanciales. Aseguró a los diputados que todos los impuestos requerirían en adelante el «consentimiento de los representantes de la nación» y dio a entender que se celebrarían reuniones de los Estados Generales de forma regular, aunque no especificó con qué frecuencia. En todo el reino, habría estados provinciales, estructurados más o menos según el modelo propuesto en el Delfinado en 1788. Se invitó a los Estados Generales a reformar el sistema de las *lettres de cachet* y a «investigar y dar a conocer a Su Majestad los medios más adecuados para conciliar la libertad de prensa con el respeto debido a la religión, la moral y el honor de los ciudadanos».

Sin embargo, aunque se ofreció a hacer reformas que iban más allá de cualquier cambio que hubiera realizado antes, el rey dejó claro que no aceptaría ni la revolución política ni la revolución social de las que se hablaba en las declaraciones de la Asamblea Nacional. Declaró «nulas las resoluciones que habían tomado los diputados del Tercer Estado el 17 de este mes y todas las posteriores» y afirmó enfáticamente que la «distinción de los tres estamentos del Estado» seguía siendo «inherente a la Constitución de su reino». Decretó que los diputados de los tres estados podrían deliberar conjuntamente «sobre asuntos del bienestar general», pero insistió en que se reunirían y votarían por separado sobre cualquier asunto relacionado con los privilegios de la nobleza o del clero. Vio claramente el poder que conseguía la nueva Asamblea Nacional al publicitar sus procedimientos, por lo que prohibió que hubiera espectadores en las reuniones. Reafirmó su mando exclusivo de las fuerzas armadas, y terminó con una amenaza inequívoca, diciendo a los diputados que «si, por alguna catástrofe que no alcanzo a imaginar, me abandonan en tan digna empresa, sólo yo efectuaré la felicidad de mi pueblo, sólo yo me consideraré su verdadero representante».[14]

Como reconocieron muchos diputados, Luis XVI recurría a los procedimientos de una *lit de justice* para anular a la oposición. Una vez que hubo terminado de leer su arenga, abandonó la sala, y el maestro de

ceremonias, el marqués de Dreux-Brézé, ordenó a los diputados que se marcharan. Los nobles y el alto clero obedecieron, pero el resto de los diputados permanecieron en su sitio. Sieyès y Bailly, el presidente de la Asamblea, se dirigieron a sus colegas, tratando de convencerlos de que, como dijo Sieyès, «sois hoy lo que erais ayer», pero fue necesario que Mirabeau, con su facilidad para la improvisación dramática, encontrara palabras para devolver el valor a sus colegas. Se dirigió directamente a Dreux-Brézé para lanzar su diatriba: «Les digo que, si tienen órdenes de hacernos salir de aquí, deben pedir que se les dé la orden de emplear la fuerza, porque sólo nos echarán de nuestros asientos con bayonetas».[15] Envalentonados por la oratoria de Mirabeau, los diputados reafirmaron su postura y declararon a los miembros de la Asamblea inmunes a la detención.

Cuando el rey ordenó a las tropas que despejaran la sala, la Asamblea había dado por terminada la sesión en sus propios términos y la noticia de sus acciones recorría las calles de Versalles y París. «La efervescencia de París va más allá de lo imaginable», escribió Arthur Young. «El lenguaje que se utilizaba, en todas las filas, era de revolución en el gobierno y de instauración de una constitución libre». En Versalles, una multitud rodeó el palacio, exigiendo el regreso de Necker. Al no poder intimidar a los diputados, el rey se vio obligado a ceder. «La sesión real sólo sirvió para hacer triunfar al Tercer Estamento», escribió el noble diputado Ferrières. El 24, la mayoría de los diputados del clero se unieron a las filas de la Asamblea. Cuando la multitud de fuera vio al arzobispo de París, que seguía negándose a hacerlo, tiraron piedras a su carruaje y le rompieron las ventanas. Ferrières informó de rumores de que cuarenta mil parisinos venían a atacar a los nobles recalcitrantes; se decía que la disciplina entre las Gardes françaises, la guarnición militar de la capital, se estaba desintegrando.[16] Un día después, con el duque de Orleans a la cabeza, unos cincuenta nobles diputados abandonaron su estamento y se unieron a la Asamblea.

Algunos miembros de la corte todavía intentaron convencer al rey de que se mantuviera firme, pero el día 26 él había decidido que era imposible oponer más resistencia, al menos por el momento. El 27 de junio, la Asamblea Nacional estaba debatiendo otro acto de desafío a la autoridad real –la admisión de diputados que representaban a la colonia de Saint-Domingue, a quienes el rey había excluido explícitamente de los Estados Generales–, cuando llegó la noticia de un nuevo acontecimiento. El monarca había dado instrucciones a los restantes miembros del clero y de la nobleza para que entraran en la Asamblea, incluso si los mandatos de sus electores les prohibían explícitamente aceptar el voto por cabeza en una sola cámara. Se propuso la cuestión de si las colonias de esclavos de ultramar de Francia formaban parte integral de la nación y el presidente Bailly pidió a los diputados que «se abandonaran a la alegría que una reunión deseada tan ardientemente [...] debe producir en el corazón de todos los franceses». En París, Arthur Young, llegaba a la conclusión de que «parece que el asunto se ha solucionado y la Revolución está completa», de modo que hizo sus maletas para reanudar su viaje por el campo.[17]

Lo cierto era, como descubrirían Young y el resto del mundo muy pronto, que la Revolución no había hecho más que empezar. Muchos de los nobles se sentían profundamente ofendidos por la orden de unirse a la Asamblea Nacional y sólo la obedecieron cuando el conde de Artois les advirtió de que la vida del rey podría estar en peligro si continuaban resistiendo. Aun así, lo hicieron con «lágrimas en los ojos; con rabia y desesperación en el corazón», según un diputado. Muchos diputados nobles insistieron en que debían volver a casa a obtener el permiso de sus electores para ignorar sus mandatos de no aceptar una asamblea común. La Asamblea respondió el 7 de julio declarando nulos dichos mandatos y anunciando que continuaría su trabajo a pesar de la ausencia de los diputados nobles. Y, una vez resuelta la gran cuestión del voto por cabeza, la Asamblea Nacional comenzó a trabajar para cumplir su promesa de dotar a Francia de una constitución libre. Los días 3 y 4 de julio, los diputados volvieron a la cuestión que habían estado debatiendo el 27 de junio, cuando los interrumpió la llegada de los nobles: ¿Las colonias esclavistas de Francia en

ultramar estarían completamente incluidas en la nación? Los diputados, algunos de los cuales tenían propiedades en las colonias o representaban a ciudades dependientes del comercio colonial, reconocieron que se enfrentaban a una de las cuestiones que habían desencadenado la Revolución americana. «Si el Parlamento británico hubiera admitido a los diputados coloniales, América seguiría siendo inglesa», dijo el marqués de Sillery. El diputado Dominique-Joseph Garat estuvo de acuerdo en que los representantes de los colonos esclavistas debían ocupar un escaño en la Asamblea, aunque le hubiera gustado que prometieran «que nunca se opondrán a cualquier esfuerzo que haga la Asamblea para encontrar maneras de poner fin a este crimen lo antes posible».[18] El 4 de julio, en la primera votación nominal registrada en la Asamblea, se aprobó una moción para sentar a seis diputados de Saint-Domingue. Francia se convirtió así en el primer país europeo que hizo de sus territorios de ultramar partes integrantes de la nación. Sin embargo, fue al precio de crear una evidente contradicción entre los principios de libertad e igualdad, por un lado, y la realidad de la esclavitud, por otro.

Tras debatir la cuestión colonial y de la esclavitud, los diputados dirigieron su atención a sentar las bases de la Constitución. El 6 de julio, se nombró un comité de treinta hombres para proponer las líneas básicas de una nueva constitución, y el 9 de julio, el diputado Mounier de Dauphinois expuso las principales cuestiones que había que decidir. Como en su provincia natal, el moderado Mounier esperaba incorporar algunos elementos de las instituciones existentes en el nuevo orden, aunque reconocía que también habría que hacer cambios fundamentales. «Nunca abandonaremos nuestros derechos, pero sabremos no exagerarlos», proclamó. «No olvidaremos que los franceses no son un pueblo nuevo, que acaba de salir del corazón del bosque para formar una asociación, sino una gran sociedad de 24 millones de personas [...] para la que los principios de la verdadera monarquía serán siempre sagrados».[19]

Justo antes de escuchar la cuidadosa ponderación de Mounier de las cuestiones relacionadas con la redacción de una constitución, a los diputados les llegó un recordatorio de que su capacidad para llevar a cabo ese proyecto todavía no estaba asegurada. Durante más de una semana, habían estado llegando informes sobre las unidades militares que salían desde sus guarniciones fronterizas rumbo a París. Los diputados estaban especialmente preocupados porque los regimientos que se estaban reuniendo eran los compuestos principalmente por tropas extranjeras, temían que no compartieran el entusiasmo por el movimiento revolucionario que habían demostrado los soldados de las Gardes françaises (Guardias francesas) en París. Mirabeau describió las inquietudes de los diputados con palabras afiladas, como lo había hecho tantas veces antes: «Mientras las tropas avanzan desde todas las direcciones, mientras se forman campamentos a nuestro alrededor, mientras la capital está rodeada, nos preguntamos con asombro: ¿duda el rey de la lealtad de sus pueblos?». Los diputados no eran los únicos que recelaban de la concentración de las tropas. Se publicó una «Carta de las Damas de París a los oficiales de campo», que preguntaba: «¿Perforarías un bonito pecho, acariciado por las manos inocentes de un pequeño ciudadano? ¿Harías caer a nuestros queridos hijos, nuestros maridos, nuestros hermanos, a nuestros pies?».[20]

El discurso de Mirabeau respondía a una declaración del monarca que justificaba la presencia de tropas en la zona: estaba preocupado, dijo el rey, por los continuos disturbios populares y la creciente falta de fiabilidad de la principal fuerza encargada de mantener el orden en París, las Guardias francesas. «Hay un espíritu de insubordinación e independencia entre las tropas que es realmente difícil de controlar», escribió el diputado Duquesnoy el 30 de junio.[21] Se había detenido a dos soldados de las Guardias francesas por desobediencia; el 29 de junio, una multitud los había liberado y los había llevado de vuelta triunfalmente al Palais-Royal. Desde el punto de vista del gobierno, esta alianza entre la población rebelde de París y los soldados amotinados era una señal de que existía el riesgo de perder por completo el control de la capital.

Entre bastidores, los cortesanos conservadores presionaban a Luis XVI para que tomara medidas drásticas. La decidida resistencia de la Asamblea al rey el 23 de junio les había pillado desprevenidos a él y a sus asesores más conservadores, pero a principios de julio, había un plan preparado. El barón de Breteuil, uno de los ministros reales, accedió a ocupar el lugar de Necker, y el barón de Batz, un especulador financiero, elaboró un proyecto para emitir papel moneda y conseguir un préstamo de urgencia para obtener los fondos necesarios. El 4 de julio, el confidente de Breteuil, el marqués de Bombelles, escribió en su diario privado: «Tenemos la esperanza de ver restablecida la autoridad real por el bien de este país, para el que ningún gobierno es apropiado, excepto la monarquía pura».[22]

La pregunta clave era si el ejército obedecería las órdenes frente a la resistencia popular. El comandante militar real, Victor-François, duque de Broglie, advirtió: «Si hay un levantamiento, no será posible para nosotros defender todo París». Tampoco estaba claro lo que Luis XVI planeaba hacer si la Asamblea Nacional se mantenía firme y él perdía el control de la capital. Una propuesta era que la familia real se trasladara a la fortaleza de Metz, en Alsacia, cerca de la frontera, donde podría esperar a obtener apoyo extranjero. A Broglie no le convencía la idea. «Sí, podemos ir a Metz, pero ¿qué haremos una vez que lleguemos allí?», preguntó. Dudaba mucho de que fuera posible volver a controlar el país si el rey abandonaba París. Sin embargo, a pesar de la reticencia de Broglie, en la noche del 11 de julio, el plan se puso en marcha. Despidieron abruptamente a Necker y le dieron la orden de que abandonara el reino sin pasar por París ni comunicarse con nadie. Se ordenó a los comandantes de las tropas estacionadas en la capital que estuvieran preparados para hacer frente a cualquier protesta que se produjera allí. Gaston de Lévis, un diputado noble vinculado al hermano del rey, el conde de Provenza, le hizo una advertencia a su esposa en París: «No salgas mañana, es más que probable que haya una terrible revuelta, no se puede saber cómo irán las cosas».[23] Francia se enteraría ahora de qué era más poderoso: las sonoras palabras de las resoluciones de la Asamblea Nacional del mes anterior o las bayonetas de los soldados del rey.

7

Una revolución del pueblo

Julio-agosto de 1789

El 17 de junio de 1789, cuando los diputados del Tercer Estado en Versalles proclamaron que ellos eran la Asamblea Nacional, pusieron en marcha una revolución. A pesar de lo radical que era este comportamiento, esperaban que su actuación tuviera éxito sin violencia. Cuando el rey exigió a los diputados de los estamentos privilegiados que se unieran a la Asamblea el 27 de junio, esa esperanza parecía haberse cumplido. Dos amenazas se cernían sobre sus deseos de un resultado pacífico. Una era la posibilidad de que el rey recurriera a la fuerza militar para destituirlos y restaurar el régimen absolutista; la otra era que la agitación popular, estimulada por el alto precio del pan combinado con el temor a la libertad, se convirtiera en una violencia incontrolable que amenazaría los propios fundamentos de la sociedad.

El 11 de julio por la noche, ambos temores de los diputados se hicieron realidad. En Versalles, Luis XVI despidió a su primer ministro. Al mismo tiempo, incluso antes de que se conociera la destitución de Necker, la población de París recurría a la violencia; atacaron e incendiaron varios puestos de portazgo alrededor de la ciudad, donde se cobraban los impuestos sobre la comida y la bebida que la población compraba cada día. Igual que el rey, el pueblo de París estaba listo para un enfrentamiento. Usando la fuerza que les daba ser una pequeña multitud, obligarían al gobierno a tomar medidas para satisfacer sus demandas o recurrirían a la violencia. La noche del 14 de julio, sólo tres días después, el pronunciamiento que había comenzado cuando los diputados del Tercer Estado se dieron a sí mismos el nombre de Asamblea Nacional pasó de ser

una revolución de palabras a ser una revolución de hechos; pasó de ser un movimiento dirigido por una pequeña élite a ser un movimiento de la gente corriente.

Aunque eran revolucionarios y tenían la vista puesta en el peligro que representaban el rey y sus tropas, los diputados también estaban tremendamente preocupados por el peligro que suponía la violencia popular que se estaba viendo en los asaltos a los puestos de portazgo en las entradas a París. Ellos mismos eran propietarios en una sociedad en la que la mayoría de la población vivía en la pobreza, sabían que este temor estaba justificado: el pueblo podría socavar la estabilidad de las «leyes comunes» que Sieyès había llamado la base misma de la nación. Incluso antes de la crisis que estalló el 11 de julio, los diputados eran conscientes de la posible contradicción que había entre su deseo de un orden social basado en las leyes y la exigencia del pueblo que quería acciones inmediatas para mejorar su vida. Las cartas que muchos de ellos recibieron de sus distritos de origen, en las que se les informaba de los violentos disturbios provocados por el precio del pan y el desempleo, eran un recordatorio constante de que la población se enfrentaba a problemas más inmediatos que la elaboración de una nueva constitución nacional. Mirabeau advirtió que «es demasiado fácil conseguir que [el pueblo] abandone la Constitución por el pan».[1]

La contradicción entre el respeto a la ley y la reivindicación de algún tipo de acción ya había surgido en el primer discurso importante pronunciado por el diputado Bertrand Barère, futuro miembro del Comité de Seguridad Pública que gobernaría Francia durante la fase más radical de la Revolución. El discurso fue el 19 de junio, sólo dos días después de que se proclamara la Asamblea Nacional. Por una parte, Barère reconoció que el elevado precio del pan estaba llevando a la población a comer «alimentos no aptos para el consumo, insalubres e insuficientes»; por otra parte, la prohibición de urgencia que se había impuesto a la circulación de cereales, destinada a impedir que se exportaran suministros desde las zonas más necesitadas, violaba el «derecho [legal] de los ciudadanos y los propietarios de tierras» a hacer lo que quisieran con sus propiedades. Como buen discípulo de los teóricos económicos del siglo XVIII, Barère estaba

convencido de que el suelo fértil de Francia debía producir alimentos suficientes para toda la población. Por eso llegó a la conclusión de que la escasez de alimentos sólo podía ser consecuencia de «los desastrosos proyectos de los enemigos del pueblo, enemigos de la humanidad», a quienes había que «descubrir, intimidar y castigar».[2] Discursos como el de Barère contribuían a que se temiera la existencia de conspiraciones que incitaban a la población a la acción directa.

La reacción al repentino derrocamiento de Necker y los disturbios por los impuestos unieron dos poderosas corrientes de inquietud popular: el temor a un golpe de Estado real contra la Asamblea Nacional y la demanda de un alivio inmediato del hambre. Al mediodía del 12 de julio, las noticias habían circulado por todo París. Una multitud se reunió en el Palais-Royal, cuyas galerías, cafés y tiendas lo convirtieron en un foro para la opinión pública. A medida que llegaba la información sobre el despido de Necker y la violencia en los puestos de peaje, la opinión pública se iba convirtiendo en acción pública. En el jardín central, se reunía la gente alrededor de oradores espontáneos. El joven abogado Camille Desmoulins, que había pasado las semanas anteriores corriendo febrilmente entre París y Versalles para estar al tanto de los acontecimientos, se subió a una mesa para hacerse oír. Gritó: «Ciudadanos, sabéis que la nación quería que Necker se quedara en el cargo, pero ¡lo han expulsado! ¿Podría alguien insultarle con más insolencia? Después de esto, es difícil saber hasta dónde pueden llegar». Terminó su discurso con una llamada: «¡A las armas! ¡A las armas!».[3]

Alrededor del mediodía, una multitud de varios miles se dirigió a las calles alrededor del Palais-Royal. Para mostrar unidad, los manifestantes arrancaron hojas de los árboles del jardín del Palais-Royal y se las pusieron en el sombrero. La primera acción que llevaron a cabo fue exigir a los teatros del barrio que cancelaran las representaciones. Al pasar por la puerta de otra de las atracciones de París, el museo de cera de Philippe Curtius, donde se exhibían figuras realistas de destacadas personalidades públicas, se detuvieron a coger los bustos de Necker y el duque de Orleans. Algunos

veían a éste como un posible reemplazo de su obstinado primo Luis XVI. Las efigies de los dos hombres anunciaban un programa político: un gobierno encabezado por hombres apoyados por el pueblo.

A las cinco de la tarde, la agitada multitud había llegado a la Place Luis XV, la gran plaza en el extremo oeste de los jardines de las Tullerías, que hoy se llama Place de la Concorde (plaza de la Concordia). Los jardines estaban llenos de parisinos, muchos de ellos miembros de las clases más prósperas de la ciudad: a diferencia del Palais-Royal, con sus prostitutas, las Tullerías se consideraban un terreno seguro para las familias y las mujeres preocupadas por su reputación. En este día, sin embargo, se reunieron en la plaza soldados y caballeros de los regimientos recientemente trasladados a París por orden del rey. Se les ordenó que se mantuvieran firmes mientras la multitud furiosa se mofaba y les tiraba piedras. Entre los que pasaron durante este enfrentamiento estaba Thomas Jefferson, el embajador americano en Francia. Había ayudado a poner en marcha una revolución; ahora se convertía en testigo del inicio de otra.

Después de varias horas, el comandante de la tropa, el barón de Besenval, intentó detener el tumulto dando orden a sus hombres de caballería de que obligaran a la multitud a volver a las Tullerías. Fue un error desastroso: la acción de las tropas dio credibilidad a los rumores de que el ejército iba a atacar a los parisinos, incluso los de clase media. Cuando entró la caballería en las Tullerías, la multitud les arrojó piedras pesadas que habían encontrado en una obra cercana y consiguió que se echaran atrás. Besenval informó a su superior, el duque de Broglie, de que –como se temía el propio Broglie incluso antes de que estallara la crisis– sería imposible restaurar el orden en París por la fuerza militar. Besenval retiró a sus soldados: no tendrían ningún papel en los acontecimientos de los dos días siguientes. Sin embargo, a medida que la amenaza real por parte del ejército disminuía, el temor de la población a un ataque aumentaba. Por toda la ciudad se rumoreaba que había columnas imaginarias uniformadas, listas para acabar con todos los civiles.

Con las fuerzas del orden paralizadas, los disturbios continuaron extendiéndose por París durante la noche del día 12; el día siguiente, por la mañana, se habían destruido 40 de los 54 puestos de peaje que había alrededor de la ciudad. En el centro, grupos improvisados se organizaron para mantener el orden. En el barrio del Palais-Royal, el panfletero Brissot ayudó a organizar a los voluntarios para vigilar el tesoro real y la bolsa.[4] Abandonados por el gobierno y el ejército, una insegura coalición de funcionarios reales (dirigidos por Jacques de Flesselles, el *prévôt de marchands*, cargo equivalente al de alcalde de París) y miembros de la Asamblea de Electores (los habían elegido el abril anterior para nombrar a los diputados de los Estados Generales) trató de mantener el control de la ciudad. Al amanecer, dieron instrucciones a las iglesias de la ciudad para que hicieran sonar el *tocsin*, un monótono tañido de las campanas que servía de advertencia en casos de emergencia. El objetivo era convocar a los miembros de la asamblea electoral a una reunión en el Hôtel de Ville, la alcaldía de la ciudad, pero el sonido de las campanas hizo salir a toda la población a las calles. Temprano por la mañana, los alborotadores irrumpieron y saquearon el convento de Saint-Lazare. Las grandes cantidades de harina y vino que encontraron –existencias que los monjes habían acumulado para poder llevar a cabo su misión de proporcionar caridad a los pobres– dieron pie a acusaciones de que grupos privilegiados estaban acaparando alimentos para hacer subir los precios.

La multitud estaba convencida de que habría un ataque militar en cualquier momento y exigió tener armas. Durante todo el día 13 se reunieron grandes multitudes en torno al Hôtel de Ville e incluso entraron por la fuerza en el edificio en busca de armas y pólvora. Se hicieron con algunas piezas de museo obsoletas, incluyendo alabarderas y ballestas, de un almacén real, pero no eran muy adecuadas para hacer frente a un ejército moderno. Por la tarde, había una muchedumbre en los Inválidos, el complejo construido por el rey más célebre de Francia, Luis XIV, para los veteranos retirados. Pero su líder logró mantenerlos alejados de sus reservas de armas. (En el complejo se encuentra ahora la tumba de Napoleón Bonaparte, el hombre que pondría fin a la Revolución más adelante). Desde

el Hôtel de Ville, Flesselles envió a varios grupos a lo que resultó ser una búsqueda infructuosa de armas en otras partes de la ciudad. Corrían rumores de que lo hacía para engañar a la gente y así ganar tiempo hasta que llegara el ejército.

Mientras Flesselles intentaba contener a las masas a las puertas del Hôtel de Ville, un comité de emergencia de miembros de la asamblea electoral se estaba haciendo rápidamente con sus poderes. A lo largo del día, «las noticias de los desastres seguían llegando con gran rapidez», según el acta oficial de la asamblea.[5] Grupos de diferentes partes de la capital, que actuaban por su cuenta, detuvieron y a veces colgaron a sospechosos que consideraban alborotadores. La Place de Grève, la gran plaza donde se encuentra el Hôtel de Ville, se llenó de carros y carruajes confiscados por los vigilantes, que insistían en que pertenecían a conspiradores que intentaban sacar armas y objetos de valor de la ciudad.

Muchos de los electores y funcionarios de la ciudad seguramente recordaron que sólo unos años antes, en 1780, las multitudes que se amotinaban en Londres, la capital británica, habían quemado y saqueado gran parte de la ciudad durante los llamados disturbios de Gordon, causando inmensos daños a la propiedad. ¿Cómo iban a defender la causa de la libertad sin desatar las fuerzas de la anarquía? El comité de emergencia decidió formar una «guardia burguesa» compuesta por ciudadanos respetables para reemplazar a las tropas reales, en las que la población ya no confiaba, y a los grupos espontáneos que surgían en las calles. Como dijo el diputado radical bretón Jean Le Chapelier para apoyar la decisión, «es el pueblo el que debe proteger al pueblo».[6] Para que se pudiera identificar a los guardias, se les dijo que se prendieran una escarapela roja y azul –una cinta con los colores del escudo de la ciudad de París–, a sus sombreros o chaquetas. Esta escarapela rápidamente reemplazó las hojas verdes que la multitud había adoptado el día anterior como símbolo del movimiento patriótico. Aunque la formación de la Guardia Nacional fue menos dramática que el asalto a la Bastilla que tendría lugar el día siguiente, fue igual de significativa. El movimiento revolucionario tenía ahora su propia fuerza armada, a la que se unirían

miles de ciudadanos en los años venideros. El control de la Guardia Nacional sería crucial en las luchas de poder que determinaron el curso de la Revolución.

El martes 14 de julio al amanecer, las mujeres de París salieron a realizar la tarea diaria de comprar pan para sus familias en las panaderías locales. Volvieron a casa furiosas: el precio de la barra que era la base de la dieta del parisino medio se había disparado más que nunca en décadas. No es de extrañar que uno de los primeros cronistas de los eventos del día informara de que «las mujeres obligaron a sus maridos a salir y los animaron a seguir adelante, diciendo: "Id, cobardes, id; es por el rey y por el país"».[7] Por la mañana, temprano, se congregó una multitud más grande que cualquiera de las de los días anteriores alrededor de los Inválidos en la orilla izquierda de París. Esta vez, estaban decididos a apoderarse de los miles de mosquetes que su comandante se había negado a distribuir el día anterior. Los cinco mil soldados de Besenval, que estaban acampados a unos cientos de metros en el Campo de Marte, podrían haber dispersado a la turba, pero no se movieron. Los oficiales temían que sus hombres no dispararan a la gente y que, incluso, se unieran a ellos.

Finalmente, la multitud se abrió paso para llegar hasta los Inválidos. Los soldados veteranos se negaron a disparar contra los intrusos; el enjambre de gente que se organizó en el sótano del edificio, donde se almacenaban las armas, fue tal caos, que hubo gente que acabó pisoteada y casi asfixiada. El relojero Jean-Baptiste Humbert, uno de los que pronto se destacaría en los combates de la Bastilla, se dio cuenta de que la única manera de salir del edificio era «abrir paso a la fuerza entre la muchedumbre desarmada... amenazando con clavarles una bayoneta en las tripas».[8] Los fusiles que tomaron se distribuyeron libremente, sin intentar restringirlos a los respetables ciudadanos burgueses que se suponía que formarían la nueva guardia cívica. Sin embargo, no encontraron cartuchos ni pólvora. Si los parisinos iban a estar preparados para montar una defensa efectiva contra un

posible ataque del ejército, necesitaban echar mano de los barriles de pólvora almacenados en la Bastilla.

Situada en el *faubourg* Saint-Antoine, el barrio obrero del lado este de la ciudad, la Bastilla, con sus torres almenadas, era una auténtica reliquia de la Edad Media y un poderoso símbolo de la autoridad real. En 1782, cuando el escritor disidente Simon-Henri-Nicolas Linguet publicó un espeluznante relato sobre su cautiverio en la Bastilla, ilustró la historia con un grabado impactante: mostraba un rayo que derribaba las torres de la Bastilla mientras sujetos agradecidos se arrodillaban ante una estatua de Luis XVI frente a la fortaleza. El mensaje era claro y profético: para que los franceses fueran libres, había que destruir la Bastilla. Ahora había llegado el momento de llevar la imagen de Linguet a la acción.

El comandante de la Bastilla, el marqués Bernard-René Jourdan Delaunay, era consciente de los peligros que le rodeaban y se preparó durante más de una semana. Los habitantes del barrio habían ido viendo cómo se agrandaban las aspilleras de las torres de la fortaleza para que sus cañones tuvieran el campo de tiro despejado, cómo se llevaban carros cargados de pesados adoquines hasta lo alto de las fortificaciones para poder arrojarlos a los asaltantes. Al principio, cuando la gente comenzó a reunirse alrededor de la Bastilla a media mañana del 14 de julio, Delaunay parecía dispuesto a negociar. Se reunió con varios delegados del comité municipal en el Hôtel de Ville e incluso invitó a algunos a desayunar con él. Aseguró que no tenía intención de abrir fuego, pero prohibió que los miembros de la recién formada guardia cívica se unieran a sus tropas dentro de los muros de la fortaleza y se negó a abrir las puertas a la furiosa multitud.

La muchedumbre que pululaba por la Bastilla procedía de un universo social muy diferente al de los prósperos y educados electores que trataban de mantener algo de orden en el Hôtel de Ville. Los que se oponían a la Revolución los describían como la «chusma» proveniente de los órdenes más bajos de la población de la ciudad, pero en realidad la mayoría eran residentes del barrio de Saint-Antoine y tenían trabajos estables. En junio de 1790, se reconoció oficialmente a los «conquistadores de la Bastilla»:

fueron un total de 954 personas, 953 hombres y una mujer, la lavandera Marie Charpentier. De las 661 profesiones que aparecían en la lista, la mayoría eran artesanos cualificados, como el vidriero Jacques Ménétra, seguros de sí mismos y con experiencia en la organización de acciones colectivas para hacer valer sus intereses. El 14 de julio, junto con los habitantes del *faubourg*, lucharon soldados de las Guardias francesas y desertores de algunos de los otros regimientos que habían llegado a la ciudad. Quizá una sexta parte de los «conquistadores» procedían de la clase media o de la burguesía, como el propietario de una cervecería Antoine-Joseph Santerre, que se convertiría en una figura importante de la política revolucionaria parisina. El mayor de ellos era un hombre de setenta y dos años, el más joven un niño de ocho.

Hacia la una y media de la tarde, una fuerte explosión en la Bastilla anunció la catástrofe que toda la ciudad temía desde hacía tres días: las tropas de la fortaleza habían abierto fuego contra la multitud. En la confusión del momento, fue imposible saber quién disparó el primer tiro. La multitud había conseguido entrar por la puerta exterior de la Bastilla y había bajado un puente levadizo que daba acceso al patio interior. Allí, la turba se enfrentó a la potente defensa que había en torno a la entrada de las fortificaciones centrales y la gente se convirtió en un blanco fácil para los soldados apostados en ellas. Tal como ocurrieron los acontecimientos, los atacantes estaban convencidos de que Delaunay los había atraído deliberadamente al patio para poder atacar desde las torres. Al grito repetido de «¡traición!», la lucha se fue intensificando por momentos. Sin artillería, los asaltantes no podían pasar por la puerta principal de la fortaleza y los soldados se protegían del fuego de los rifles tras los parapetos de las torres. Sólo uno de los soldados murió en este combate.

En el Hôtel de Ville, al comité municipal no se le ocurría solución alguna. Enviaron dos electores a Versalles para alertar a los diputados de la Asamblea Nacional y rogarles que tomaran medidas para «evitar a la ciudad de París los horrores de la guerra civil». El comité sabía, sin embargo, que cualquier ayuda de ese lado llegaría demasiado tarde para afectar el curso de los acontecimientos. Mientras los miembros del comité vacilaban,

Pierre-Augustin Hulin entró en acción. Hulin, uno de los oradores que había lanzado la revuelta popular en el Palais-Royal el 12 de julio, se encontró con dos compañías de soldados de las Guardias francesas frente al Hôtel de Ville y comenzó a dar una arenga. «¿No oís el cañón [...] con el que el criminal Delaunay está asesinando a nuestros padres, nuestras esposas, nuestros hijos?», inquirió. «¿Vais a dejar que los maten?».[9]

Con Hulin a la cabeza, los soldados se dirigieron a la Bastilla, llevando consigo dos pequeños cañones que habían tomado de los Inválidos más temprano ese mismo día. Llegaron a la fortaleza alrededor de las tres y media de la tarde, unas dos horas después de que diera comienzo el enfrentamiento. Allí se unieron a otro grupo de soldados, dirigidos por un teniente del ejército llamado Élie, y pusieron sus cañones en posición para un asalto sistemático a la puerta fortificada de la Bastilla. Dentro de la fortaleza, Delaunay se dio cuenta de que no podría resistir mucho tiempo. Por un momento, amenazó con hacer estallar los 250 barriles de pólvora que había almacenados en la fortaleza en lugar de rendirse. Una explosión tan gigantesca habría destruido no sólo la Bastilla, sino también todo el vecindario. Sus propios soldados le impidieron llevar a cabo esta acción impulsiva y se negaron a seguir disparando. Cuando la multitud rechazó cualquier oferta que no fuera la rendición incondicional, Delaunay y sus soldados se rindieron y bajaron un pequeño puente levadizo junto a la puerta principal. «La gente reaccionó entonces de forma inaudita», informó un testigo ocular. «Se arrojaron al foso de la Bastilla, usaron los hombros de los más fuertes como escalera, unos se subieron a las espaldas de los otros. Una docena de los más fuertes, armados con hachas, rompieron la puerta [...] dos mil personas entraron corriendo y pronto una bandera blanca anunció que la Bastilla era nuestra».[10]

La muchedumbre victoriosa entró en tromba en el edificio. Por el camino se hicieron con las armas que los defensores habían abandonado y arrojaron los documentos de los archivos por las ventanas. Los atacantes creían que iban a encontrar numerosos prisioneros y se sorprendieron al ver que sólo había siete, casi todos detenidos a instancias de sus familias, porque eran víctimas de enfermedades mentales. Los pusieron en libertad y

desfilaron triunfalmente por las calles, aunque al día siguiente hubo que encerrar al menos a uno de los dementes en otra institución. Pasaron varios días antes de que los vencedores se convencieran de que no había otros reos escondidos en celdas secretas.



Despertar del Tercer Estado. Dos personajes que representan a la nobleza y al clero retroceden atemorizados cuando un plebeyo del Tercer Estado rompe sus cadenas y se prepara para tomar las armas. En el fondo, una multitud lleva las cabezas del comandante de la Bastilla, el marqués Delaunay, y de Jacques de Flesselles, que estaba al mando del gobierno de la ciudad. Con imágenes fáciles de comprender como ésta se explicaban los eventos de 1789 incluso a quienes no sabían leer. Fuente: Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Las pasiones desatadas durante las hostilidades condenaron al comandante de la Bastilla y a varios de sus oficiales. Los revolucionarios no tenían duda de que Delaunay los había atraído deliberadamente al patio exterior de la Bastilla para acabar con ellos; la muchedumbre los arrastró a él y a los

demás oficiales capturados por las calles hasta el Hôtel de Ville. Hulin, que había dirigido a los soldados de las Guardias francesas, quiso proteger a Delaunay para entregarlo después a las autoridades municipales, pero al llegar al edificio, se vio sobrepasado. Cuando luchaba por protegerse a sí mismo, Delaunay dio una patada a uno de los hombres que lo rodeaban. Se llamaba Desnot y era un cocinero desempleado que después diría que le había dado en «las partes». Mientras el cocinero gritaba de dolor, otros manifestantes apuñalaron a Delaunay con sus bayonetas. Una vez muerto, los atacantes le dieron a Desnot el honor de decapitarlo y poner su cabeza en una pica, gritando que «la Nación exige su cabeza para mostrarla al público».[11]

El desafortunado Delaunay pronto tuvo compañía. En el Hôtel de Ville, los centenares de ciudadanos que habían invadido el edificio exigieron el castigo para Flesselles, a quien acusaron de haberlos enviado a inútiles expediciones en busca de la pólvora para ganar tiempo y que las tropas vinieran a rescatar a los defensores de la Bastilla. Flesselles consintió en ir al Palais-Royal para un juicio improvisado, pero nunca llegó. Un joven le disparó en la cabeza en la Place de Grève, delante del Hôtel de Ville. La cabeza de Flesselles también se clavó en una pica y la multitud desfiló por las calles con sus dos sangrientos trofeos. Los asesinatos de Delaunay y Flesselles, y el espectáculo de las cabezas en las picas se describen en casi todos los relatos de las docenas de eventos del día: no se podía ignorar la violencia intrínseca de la Revolución desde su inicio.

Mientras algunos manifestantes se vengaban de Delaunay y Flesselles, otros convertían los eventos del día en un relato sobre el triunfo de la libertad. El dramaturgo Louis-Abel Beffroy de Reigny corrió a la escena para recoger el testimonio de Hulin y de varios miembros de las Guardias francesas. Luego compuso un panfleto con un título largo: «Resumen riguroso de la toma de la Bastilla, escrito en presencia de los principales participantes que desempeñaron un papel en la expedición, y que se leyó ese mismo día en el Hôtel de Ville». En el lugar de la fortaleza, Pierre-François Palloy, un rico contratista de la construcción que se había unido a sus trabajadores en el asalto, comenzó inmediatamente a organizar su

demolición. En los días siguientes, organizó visitas a las celdas; más adelante hizo tallar la Bastilla en miniatura sobre las piedras de sus paredes y las llamó «reliquias de la libertad». Envió las tallas a ciudades de provincia, donde las recibieron con gran ceremonia y las pusieron a la vista, para que todos los ciudadanos franceses pudieran sentir que habían participado en la épica lucha por la libertad.[12]

Al caer la noche, las nubes que habían cubierto el cielo durante la mayor parte del largo y veraniego día del 14 de julio se transformaron en fuertes lluvias. Agotados después de 72 horas de ansiedad y agitación, muchos parisinos sin duda se sintieron aliviados por el descanso. El rayo de la acción revolucionaria que Linguet había predicho en 1782 había golpeado la Bastilla. Únicamente «los legisladores y los espíritus ilustrados» habían comprendido el profundo significado de la creación de la Asamblea Nacional un mes antes, escribió Bailly, que ahora ocupaba el lugar de Flesselles como alcalde de París, pero «la Bastilla, tomada y demolida, era un mensaje para el mundo entero».[13]

Al principio, los diputados de la Asamblea Nacional en Versalles no vieron claro lo que presagiaba esta violencia que había arrasado París los días 13 y 14 de julio. El día 13 por la mañana, mientras las campanas del *tocsin* sonaban por todo París, los diputados trataban de lidiar con las consecuencias de la destitución de Necker, y con el nombramiento de un ministerio empeñado en restaurar el poder del rey, que se había anunciado el día anterior. La Asamblea declaró que se hallaba en permanente sesión de emergencia, pero Mounier abrió el debate el día 13 instando a sus colegas a continuar su trabajo sobre la Constitución. Cualquier posibilidad de que la Asamblea se pudiera concentrar en ese tema desapareció cuando un diputado que había estado en París llegó e informó que la ciudad estaba «en un estado de ebullición aterrador». A medida que llegaban más despachos, aumentaba la ansiedad de los diputados. Varios nobles que antes se habían mostrado reacios a aceptar su nuevo papel en la asamblea mixta se levantaron para exclamar que era hora de dejar de lado todas las divisiones

y «unirse para salvar el país». La Asamblea mandó a una delegación para reunirse con el rey e instarle a retirar las tropas que había enviado a la capital. La respuesta de Luis no fue nada tranquilizadora. Se mantuvo fiel a «las medidas que me he visto obligado a tomar debido a los desórdenes de París» e insistió en que él era «el único que podía juzgar lo que es necesario».[14]

El día 14 de julio fue todavía más angustioso. Los diputados intentaron centrarse, una vez más, en la elaboración de la Constitución. Consiguieron nombrar un comité de ocho personas para redactar una declaración de derechos, y el abate Grégoire, el párroco de la Lorena que ya se perfilaba como uno de los más enérgicos defensores del cambio radical, insistía a sus colegas: «Tanto da si fluyen ríos de sangre, la Revolución seguirá siendo un éxito». Sin embargo, al caer la tarde, el vizconde de Noailles se apresuró a informar a los diputados sobre la insurrección de la ciudad, la toma de armas en los Inválidos, la captura de la Bastilla y la muerte de Delaunay. «Esta noticia provocó una gran tristeza a todos los de la Asamblea», escribió un periodista.[15] La Asamblea envió una delegación para rogar al rey que retirara las tropas cuya presencia había incitado a los parisinos a la resistencia, pero el rey, que aún no estaba dispuesto a ceder, les dio una respuesta equívoca.

Los diputados, nerviosos, permanecieron en su sala de reuniones toda la noche, por si se hacía necesaria alguna medida de urgencia. Durante toda la mañana siguiente, el 15 de julio, los diputados esperaron recibir informes de París y una señal de las intenciones del rey. Mientras tanto, el monarca, que había escrito una sola palabra, «*rien*» (nada), en la entrada de su diario privado correspondiente al día 14, para señalar que no había ido de caza, asimiló el significado del hecho de que sus soldados «no lucharían contra sus conciudadanos», como dijo el duque de Broglie. Finalmente, Luis XVI decidió dirigirse a la Asamblea Nacional personalmente. Acompañado por sus hermanos, el conde de Provenza y el de Artois, anunció que había ordenado la retirada de las tropas de París. Por primera vez, se refirió al cuerpo con el título que se habían dado a sí mismos, «Asamblea Nacional»,

en lugar de llamarlo Estados Generales, y pidió a los diputados que enviaran una delegación a París para calmar los temores de la población.[16]

Los diputados se sintieron abrumados al oír que el rey les prometía que trabajarían de forma conjunta para acabar con la crisis sin que hubiera un excesivo derramamiento de sangre. El marqués de Ferrières abrió una carta a su esposa, que ya había sellado, para añadir la descripción de la multitud «ebria de alegría» que había rodeado al monarca y a sus dos hermanos cuando volvían al palacio después del discurso del rey y que había aplaudido cuando apareció la familia real en el balcón. En París recibieron a la delegación de diputados con festejos desenfrenados. En sus memorias, Bailly recordaba «un clamor y expresiones de alegría, [...] lágrimas, gritos de "¡Viva la nación! ¡Viva el rey! ¡Vivan los diputados!". Les dieron una escarapela roja, azul y blanca; la gente los rodeaba y los abrazaba».[17] Añadir la raya blanca a las escarapelas rojas y azules improvisadas el día anterior había sido un gesto de reconciliación entre el monarca y el pueblo: el blanco era el color simbólico de la dinastía borbónica, que ahora se combinaba con los colores de París. Las escarapelas, fabricadas en seda para los ricos y en lana más barata para los pobres, se convirtieron en el primero de incontables objetos simbólicos, como cerámicas decoradas con motivos patrióticos, que anunciaban el apoyo de sus compradores a la causa revolucionaria.

La bulliciosa acogida que les dieron en París el día 15 convenció a los diputados de que, en lugar de amenazar el orden social, los ciudadanos de la capital apoyaban sus esfuerzos por rehacer el país. Su confianza en este apoyo endureció la resolución de los diputados de acudir al rey para destituir a Breteuil y traer de nuevo a Necker. «Las plegarias del pueblo son órdenes», dijo el marqués de Lally-Tollendal, un noble liberal, durante los debates del día 16. En una reunión del consejo real de esa mañana, Luis XVI estuvo de acuerdo no sólo en que ya no había posibilidad de usar la fuerza militar para restaurar su autoridad, sino que no podía resistirse a la exigencia de que regresara Necker, aunque eso suponía aceptar el principio de que las políticas gubernamentales ahora las fijaría la Asamblea y no el monarca. El conde de Artois y varias personas de la corte vinculadas a

María Antonieta, entre las que estaba su favorita, la duquesa de Polignac, hicieron rápidamente las maletas y huyeron del país. Fueron los primeros de lo que se convertiría en una oleada de emigrantes contrarrevolucionarios que buscaron refugio en el extranjero.

Si quería conservar algo de su poder, Luis XVI tendría que convencer a los diputados y a los habitantes de París de que estaba dispuesto a aceptar su nuevo estatus de monarca constitucional con poderes limitados. Con un mal presentimiento, el rey se preparó el 17 de julio para adentrarse en el centro de la ciudad que había expulsado a sus soldados apenas tres días antes. Escoltado por una delegación de miembros de la Asamblea y una gran multitud, llegó a las puertas de la ciudad, donde lo recibió Bailly, el alcalde recién instalado, quien anunció que «el pueblo ha reconquistado a su rey». Mientras desfilaban por la ciudad hasta el Hôtel de Ville, el embajador austriaco, Mercy d’Argenteau, observó que se oía a pocos gritar «¡Viva el rey!», pero muchos gritaban «¡Viva la nación!». En el Hôtel de Ville, Bailly le entregó al rey una escarapela tricolor y el rey se la puso en el sombrero. Incómodo, como siempre que tenía que hablar en público, Luis XVI consiguió asegurar a las masas que «siempre podían contar con su amor», y le jalearon cuando apareció en el balcón del Hôtel de Ville con su escarapela. El embajador portugués apenas podía creer que hubiera visto «a un rey de Francia, al que habían obligado a llevar la escarapela de la libertad en el sombrero, en un carruaje rústico, rodeado de las bayonetas y los mosquetes de una inmensa multitud». Con más entusiasmo, Thomas Jefferson lo describió como «la disculpa que nunca antes había ofrecido un soberano, ni había recibido ningún pueblo».[18]

Por fin, a las diez de la noche Luis XVI regresó al palacio de Versalles, donde María Antonieta lo esperaba ansiosamente, preocupada por su seguridad. No conocemos sus pensamientos más íntimos sobre los extraordinarios acontecimientos que el país acababa de vivir: siete días que habían comenzado con su intento de reafirmar su autoridad despidiendo a Necker y que habían terminado con la emotiva escena de la reconciliación

en el Hôtel de Ville. Como le habían enseñado desde pequeño, el rey no compartió sus secretos.

Los diputados eran más volubles. Al darse cuenta de que se retiraban las tropas que los habían estado amenazando y que se volvía a llamar a Necker, el ministro conciliador, se apresuraron a poner la historia de la crisis en términos tranquilizadores e incluso inspiradores para sus corresponsales. Un diputado del Tercer Estado, Jean-Antoine Huguet, lo expresó como sigue:

> Es único, en los anales del universo, ver a un pueblo que, en sólo cinco días, se arma en perfecto orden, usa la fuerza para conseguir las armas necesarias, toma y destruye una fortaleza, el baluarte del despotismo; ver, en el quinto día de la Revolución, al gobernante a quien estas acciones hostiles parecían amenazar, ponerse, en medio de este pueblo en plena revuelta, la escarapela que han elegido para conseguir la libertad; ver a este mismo gobernante recibir de ese pueblo las más conmovedoras señales de amor y fidelidad. Estaba reservado a la nación francesa dar este ejemplo al universo.[19]

Como la mayoría de los diputados, Huguet decidió enfatizar la magnitud de la amenaza a la que el pueblo se había enfrentado, el coraje con el que había respondido, y la reconciliación entre el rey y el pueblo con la que la crisis había terminado. En París y Versalles, pocos se atrevieron a describir lo sucedido en otros términos. Desde la seguridad de la ciudad holandesa de Leiden, el editor del periódico más respetado del continente usó un lenguaje más crítico. En la *Gazette de Leyde*, se describía a la turba parisina como «el vil populacho que, al entregarse al pillaje y a los excesos más terribles, sembró el terror y el pánico por todas partes» hasta que la burguesía armada pudo contenerlo con éxito. El asalto a la Bastilla mereció no más de media frase en este reportaje y quedaba oscurecido por los asesinatos de Delaunay y Flesselles. Sin embargo, el periódico no podía dejar de aplaudir el triunfo final de la Asamblea Nacional y el fin de la última resistencia de los estamentos privilegiados. «Es así como algo bueno surge hasta del mal más extremo», concluía el relato.[20]

Tanto si lo consideraban un triunfo de la libertad como una ruptura del orden, todos los que vivieron la crisis reconocieron que acababan de vivir un acontecimiento excepcional. El monarca más poderoso de Europa se

había visto obligado a inclinarse ante el pueblo y ante la autoridad de una asamblea elegida. Los representantes de la nobleza francesa y de la Iglesia católica establecida habían abandonado la exigencia de sus privilegios políticos y habían estado de acuerdo en la creación de una nueva sociedad basada en los principios de igualdad y libertad individual. La Revolución americana la había llevado a cabo un «nuevo» pueblo que vivía al margen del mundo occidental, lejos del centro de la civilización europea. Con la toma de la Bastilla, se estaba fraguando una revolución en el corazón de esa civilización. Sus consecuencias afectarían no sólo a los veintiocho millones de habitantes de Francia y sus colonias, sino al mundo entero.

8

Del Gran Miedo a la Declaración de Derechos

Agosto de 1789

La escarapela tricolor, que resultó de incluir el color blanco de la Casa de Borbón entre los círculos concéntricos rojo y azul del emblema de París, se convirtió en el símbolo del movimiento revolucionario. Consagraba la centralidad de la capital en la victoria de la Revolución. Sin embargo, la Revolución francesa no habría tenido éxito si hubiera tenido lugar solamente en París. La respuesta del resto del país a la impresionante noticia de la toma de la Bastilla no sólo consolidó el triunfo de los parisinos, sino que también aceleró el movimiento revolucionario, dio impulso a la Asamblea Nacional para tomar medidas que lanzaron a Francia a un nuevo mundo que pocos podían haber previsto cuando los Estados Generales se reunieron por primera vez.

Los disturbios alcanzaron niveles extraordinarios en muchas partes del país incluso antes de la crisis que desencadenó el despido de Necker por parte de Luis XVI y los disturbios en los puestos de portazgo de París el 11 de julio de 1789. El número de estallidos de violencia colectiva, generalmente menos de diez por mes en épocas más tranquilas, se había disparado a más de un centenar en marzo y abril. Después de disminuir ligeramente en mayo y junio, mientras el público esperaba ansiosamente que los Estados Generales tomaran alguna medida, el número de incidentes alcanzó su máximo histórico de más de mil incidentes en julio; el 27 de julio, el día más agitado de todo el periodo revolucionario, se produjeron 145 episodios de este tipo.[1] Los informes que llegaban a los funcionarios reales y a los diputados de la Asamblea Nacional les hacían temer que la base misma del orden social se estuviera desintegrando.

La autoridad gubernamental ya se había erosionado gravemente antes de la expulsión de Necker. La transformación del gobierno municipal que fue de la mano del asalto de la Bastilla, con la destitución de los funcionarios locales nombrados a dedo por la corte real, la instalación de consejos municipales apoyados por la población y la formación de milicias ciudadanas para mantener el orden, se reprodujo en todo el país. En Rennes, capital de Bretaña, la noticia de los desórdenes en París el 13 de julio, la víspera del asalto a la Bastilla, desencadenó una revolución local el día 15. En cuatro días, cuatro mil hombres se habían alistado en el «ejército nacional» local. «Bajo el mando de simples ciudadanos, cumple con su deber con la misma profesionalidad que si estuviera a las órdenes de los oficiales más experimentados», se jactaba un panfletario local. Al reconocer la fuerza de la rebelión popular, añadía, los nobles habían renunciado públicamente a sus privilegios y habían acordado aceptar la condición de ciudadanos comunes. Mientras tanto, en la gran ciudad bretona de Nantes, los rumores de envío de tropas extranjeras a la región provocaron una movilización masiva: se informó de que treinta mil hombres habían tomado las armas para proteger la ciudad.[2]

Los detalles sobre el desarrollo de las revoluciones locales en las ciudades francesas variaban de un lugar a otro según la oposición que mostraran las antiguas élites gobernantes a compartir su poder y la forma en que se enfrentaban a ellos los forasteros militantes. En la ciudad de Troyes, en Champagne, por ejemplo, los magistrados locales, enfrentados el 20 de julio con una multitud –según las estimaciones, entre siete mil y ocho mil personas–, que exigía una bajada del precio del pan, formaron un comité de emergencia compuesto casi exclusivamente por jueces y oficiales militares que ya ocupaban cargos gubernamentales. En el transcurso de los dos meses siguientes, la presión popular, que culminó en una verdadera insurrección el 28 de agosto, los obligó a ceder el poder a un comité general elegido por los ciudadanos y dominado por comerciantes, tenderos y artesanos, a los que antes se había impedido acceder al poder. En Estrasburgo, la capital de Alsacia, la revolución municipal tomó una forma violenta. Arthur Young, el experto agrícola inglés, vio cómo una multitud invadía el Ayuntamiento

local y arrojaba «una avalancha de estanterías, marcos, persianas, sillas, mesas, sofás, libros y papeles» desde las ventanas del edificio mientras las tropas se mantenían cerca, pero se negaban a intervenir.[3]

Young, decidido a completar la encuesta sobre la agricultura francesa que había comenzado unos años antes, siguió haciendo su recorrido por zonas de cultivo, donde fue testigo del dramático aumento del activismo popular que estaba transformando al campesinado. Mientras que los habitantes de las ciudades se volvían contra las élites tradicionales que habían gobernado los asuntos municipales, la población del campo se levantaba contra los señores, los privilegiados terratenientes que siempre habían dominado la vida rural. «El condado entero está tremendamente agitado», señaló Young el 26 de julio. «En uno de los pueblitos por los que he pasado, me han interrogado por no tener la escarapela del Tercer Estado. Han dicho que era una orden del Tercero y que, si no era un señor, debía obedecer». El 27 de julio, día en que el número de conflictos violentos en todo el país alcanzó su punto álgido, Young añadió que «se han quemado numerosos *chateaux*, otros los han saqueado, a los *seigneurs* se les da caza, como si fueran bestias salvajes». Uno de los nobles con los que habló le resumió la situación: «Considera que, en Francia, ha quedado abolido todo rango y todos los derechos inherentes al rango».[4]

Esta ola de violencia fue parte de lo que los historiadores han llegado a llamar el «Gran Miedo»; una serie de momentos de pánico que se extendieron por el campo cuando los campesinos oyeron rumores de que unos bandidos a sueldo de aristócratas hostiles a la Revolución venían a arrasar o a quemar las cosechas, lo que empeoraría todavía más la hambruna que estaba sufriendo el país. Los rumores comenzaron cerca de París y otras ciudades importantes en los días siguientes a la toma de la Bastilla y acabaron por llegar a prácticamente todo el país. Los funcionarios locales de las ciudades ayudaban a difundir estas noticias. En Mamers, en la región del Loira, las autoridades habían oído que en las «provincias vecinas» había «vagabundos, hombres sin trabajo estable que, con el fin de

perturbar la seguridad y la tranquilidad pública, amenazaban los almacenes públicos, la recaudación de impuestos y tal vez incluso la propiedad privada». Los disturbios cerca de Grenoble se intensificaron cuando los campesinos oyeron decir que «el rey había dado permiso para quemar los castillos de los nobles, pero sólo durante tres días». En realidad, no había bandidos. Lo que ocurrió fue que los aterradores rumores llevaron a los campesinos de una pequeña región a unirse y sus propias asambleas fueron el centro del que salieron las noticias que llegaron distorsionadas a otras regiones cercanas, y se extendió así una oleada de pánico. Cuando los rumores llegaron al pueblo del maestro de escuela Delahaye, éste escribió que «el *tocsin* sonó dos veces y el cura corrió por el pueblo para reunir a los hombres y niños, todos pertrechados, unos con armas, los otros con horquetas, picas, hachas, cada uno con lo que pudiera encontrar». Dirigidos por el cura, salieron a advertir a los pueblos vecinos mientras el resto de la población llevaba sus objetos de valor a la iglesia para ponerlos a salvo.[5]

Aunque los campesinos tenían, en el mejor de los casos, una idea borrosa de lo que había sucedido desde la apertura de los Estados Generales a principios de mayo, esperaban conseguir por lo menos una reducción de las diversas cuotas feudales que debían a sus señores. Al ver que no se anunciaba ningún cambio en su situación después de varios meses, era normal que dieran por hecho que los nobles estaban bloqueando las reformas. La gran sorpresa que supuso la noticia de la violencia en París, llegara deformada o no, llevó a los campesinos a actuar directamente marchando sobre las casas solariegas de los nobles terratenientes locales. En la región occidental del Bajo Maine, un administrador de fincas se las tuvo que ver con «un número infinito de individuos [...] armados con pistolas, horquetas, picas y otras armas», que le exigían dinero y «los papeles y títulos de la señoría». Abrumado al «ver que estaba amenazado por todos lados y que su vida corría peligro [...] rogó que se le permitiera ir al jardín para hacer sus necesidades». Se lo concedieron y aprovechó la oportunidad para huir, dejando que la multitud destruyera los documentos legales que había incautado.[6]

En realidad, el número de nobles propietarios de tierras asesinados durante el Gran Miedo fue pequeño y el de castillos quemados también fue relativamente modesto. Pero el impacto que tuvieron las revueltas campesinas fue enorme. La destrucción de los documentos legales de los señores les dejó sin prueba alguna en la que basar sus reclamaciones de cuotas y privilegios. Los asaltos a las casas de los nobles también tuvieron un impacto psicológico; quedaba patente que las costumbres tradicionales de deferencia hacia los superiores, que habían sostenido el orden social jerárquico, ya no existían. Superados en número y conscientes de que el rey y sus consejeros ya no tenían el poder de intervenir en su nombre, los aristócratas reconocieron la verdad de lo que Sieyès había dicho en su panfleto: una minoría privilegiada de doscientas mil personas no podía enfrentarse sola a veintiséis millones de plebeyos.

Los informes de los disturbios que habían tenido lugar en el campo llegaron a los diputados, que a su vez se habían quedado traumatizados por el impactante episodio de violencia que había sufrido el propio París. El 21 de julio, una semana después de la caída de la Bastilla, campesinos furiosos asaltaron a un alto funcionario real, Joseph Foulon de Doué, que se había refugiado en un pueblo a las afueras de la ciudad. Le acusaron de haber participado en la especulación que provocó la subida del precio del grano. Lo llevaron a París y lo encerraron en el Hôtel de Ville. Allí se encontraba cuando el 22 de julio un grupo de gente se reunió y exigió su castigo inmediato. Los nuevos dirigentes de la ciudad instalados una semana antes, el alcalde Bailly y el comandante de la Guardia Nacional Lafayette, no pudieron protegerlo. Lo sacaron a rastras del Ayuntamiento, lo colgaron de un poste de la luz y después lo decapitaron; le sacaron el corazón y lo pusieron en la punta de una pica. A su yerno, Louis Bénigne François Bertier de Sauvigny, el intendente de París, le lincharon; antes de su muerte, le pusieron delante la cabeza de su suegro y le obligaron a «besar a papá».

Entre los testigos de estos asesinatos se encontraba el futuro radical Gracchus Babeuf, al que ejecutarían en 1797 por conspirar para establecer

un régimen comunista en Francia. Babeuf dejó constancia de sus sentimientos confusos en una carta a su esposa: «Estaba contento e infeliz al mismo tiempo; dije que estaba de acuerdo y que era una lástima. Entiendo que el pueblo quiera impartir justicia, apruebo esta justicia cuando se satisface con la aniquilación de los culpables, pero en este momento, ¿podría no ser cruel?». El problema, decidió, era que una sociedad injusta había dado un mal ejemplo: «Los amos, en lugar de hacernos más civilizados, nos han hecho bárbaros, porque ellos mismos lo son». Mientras que Babeuf tenía algunas dudas sobre el asesinato de los que se oponían a la Revolución, Madame Roland escribió a un amigo diciendo que se necesitaban más ejecuciones para disuadir a los enemigos de la causa. «Si esta carta no le llega», añadió, «que se ruboricen los cobardes que la lean al saber que es de una mujer, que tiemblen al pensar que ella podría crear cien entusiastas que harían otros millones».[7]

La vehemencia de Madame Roland no era algo aislado. Un panfleto anónimo, típico del humor cruel y burlón que se convertiría en característico de la Revolución, mostraba el infierno recibiendo alegremente a Foulon, a Bertier y a las dos víctimas anteriores, Delaunay y Flesselles: «¡Qué magnífica adquisición para [el diablo] en tan sólo ocho días!».[8] Casi todos los miembros de la Asamblea Nacional habían estado dispuestos a excusar los asesinatos de Delaunay y Flesselles, que se habían cometido durante la emoción desatada tras el asalto a la Bastilla, pero los asesinatos de Foulon y Bertier parecían más difíciles de justificar. Barnave, el diputado del Delfinado y dirigente destacado del Tercer Estado, los disculpó diciendo: «Esta sangre que se derramó, ¿era entonces tan pura?». Estas palabras lo perseguirían a él y al movimiento revolucionario durante años. Resumiendo, Barnave había sugerido que lo que estaba en juego en la Revolución justificaba las acciones que violaban las normas ordinarias de la justicia y que había ciertas categorías de personas que podrían, simplemente en virtud de su identidad, merecer un castigo sin juicio.

A pesar del intento que hizo Barnave por disculpar los asesinatos, la mayoría de los diputados estaban espantados por la violencia que se había desatado en París y consternados por el desorden que, aparentemente, se

había extendido por todas las provincias. El país se había visto sacudido por los recientes acontecimientos y el caos subrayaba la urgencia de restaurar el orden. No podían contar con el rey ni sus ministros para tomar las riendas: la corte del rey estuvo sin cabeza visible hasta que Necker, que se había marchado a su casa en Suiza, volvió a Versalles el 30 de julio. Inmediatamente quedó claro que Necker no tendría el apoyo de la Asamblea: a instancias de Mirabeau, los diputados rechazaron su propuesta de declarar una amnistía para quienes habían ayudado a expulsarle durante la crisis de mediados de julio. Con Necker fuera de juego, serían los diputados más decididos los que tendrían que tomar la iniciativa, en particular los miembros del «Club Bretón». Estaban convencidos de que la única manera de calmar las revueltas en el campo era tomar medidas decisivas a favor del campesinado, de modo que elaboraron un plan para escenificar un gesto dramático: la nobleza renunciaría a sus derechos señoriales. El 4 de agosto, la Asamblea convocó una sesión de tarde extraordinaria. El vizconde de Noailles, descendiente de una de las familias nobles más distinguidas del reino, propuso abolir todos los privilegios fiscales de su estamento y permitir que los campesinos saldaran las deudas que tuvieran con sus señores. Inmediatamente se vio eclipsado por el duque d'Aiguillon, que lanzó una propuesta más detallada y específica. «En este Siglo de las Luces», dijo a la Asamblea, era hora de «establecer, lo más pronto posible, la igualdad de derechos que debe existir entre todos los hombres, y que es la única manera de asegurar su libertad».[9] Como Noailles, D'Aiguillon pretendía asegurar que los nobles fueran debidamente compensados por los derechos que iban a perder; se cuidó de especificar que los pagos existentes debían continuar hasta que se hicieran los cambios necesarios para su reembolso. Sin embargo, lo que más impresionó a los diputados fue la referencia D'Aiguillon a la igualdad y la libertad, y su voluntad de abandonar los privilegios fundamentales que eran en sí mismos la base del estamento nobiliario.

Lo que vino tras los discursos de Noailles y D'Aiguillon superó cualquier expectativa que hubieran tenido los diputados radicales cuando planearon la sesión. Una vez que prominentes portavoces de la nobleza

renunciaron a sus privilegios, representantes de otros grupos entraron a competir para hacer sacrificios similares. Se dejaron llevar por una creciente exaltación, gritaron propuestas que se aprobaron tan rápidamente que después nadie estaba seguro de qué era lo que habían acordado. La sesión continuó hasta las dos de la mañana del día 5 de agosto. «Nunca, sin duda, nadie había ofrecido un espectáculo semejante», escribió Duquesnoy, diputado del Tercer Estado. «Todos se sacrificaban, mostraban generosidad, se pusieron a los pies de la nación. Soy un barón de Languedoc, prescindo de mis privilegios; soy miembro de los estados de Artois, ofrezco mi lealtad; soy un magistrado, voto para hacer justicia a cambio de nada; tengo dos beneficios clericales, voto para prohibir que alguien tenga más de uno. No más privilegios para las ciudades; París, Burdeos, Marsella los abandonan. ¡Grandiosa y memorable noche! Lloramos, nos abrazamos. ¡Qué nación! ¡Qué gloria, qué honor ser francés!».[10]

Un comité tardó una semana en dar forma coherente a las múltiples propuestas que se habían hecho la noche del 4 de agosto. La versión final de los decretos comenzó con un amplio pronunciamiento que estaba destinado a impactar al inquieto campesinado del país: «La Asamblea Nacional suprime por completo el régimen feudal». En realidad, los diputados, muchos de los cuales poseían derechos feudales, no querían decir exactamente eso: aunque abolieron los derechos asociados a la servidumbre personal sin recibir nada a cambio, hicieron que la mayoría de las rentas señoriales fueran «redimibles». Esto significaba que los campesinos tendrían un tiempo para compensar a los propietarios por la pérdida de esas rentas que tenían derecho a cobrar. Pronto quedaría claro que, al tratar de satisfacer a los campesinos sin perjudicar los intereses financieros de los terratenientes, la Asamblea había creado un conflicto que iba a ser imposible de resolver de manera pacífica.

Mientras que las disposiciones de los decretos del 4 de agosto sobre el rescate de los derechos de propiedad reflejaban una renuencia a amenazar la riqueza de las clases terratenientes, otras partes de la legislación eran más radicales. La abolición de los privilegios fiscales y la promesa de que «la recaudación se aplicaría por igual a todos los ciudadanos, a todos los

bienes, de la misma manera y en la misma forma», la cuestión básica planteada por las propuestas de Calonne a la Asamblea de Notables a principios de 1787, ahora parecía una cuestión evidente. Se acabó con el monopolio que tenía la nobleza sobre la caza, y se abolieron los tribunales señoriales, que habían dado a los propietarios tanta autoridad sobre sus vasallos. La Iglesia perdió el diezmo, que era de donde procedían sus ingresos. La Asamblea se comprometió entonces a «sufragar de alguna otra manera los gastos del culto divino» y los de los servicios de bienestar que prestaba el clero, promesa que resultaría en una reforma radical de la institución más grande del país y que tendría consecuencias trascendentales.[11]

La declaración de que «se suprimía la venalidad de los cargos judiciales y municipales» implicaba el fin de los parlamentos y los gobiernos municipales formados por hombres que habían comprado sus cargos. «Puesto que una constitución nacional y la libertad pública son más ventajosas para las provincias que los privilegios de que gozan algunas de ellas», la Asamblea decretó que pondría fin a todos los derechos especiales provinciales, municipales y corporativos, y crearía leyes «comunes a todos los franceses». Las provincias que habían disfrutado de privilegios fiscales especiales o del derecho a comerciar con países extranjeros sin pagar impuestos aduaneros perdieron esos derechos. La corte real tampoco salió indemne. Los decretos del 4 de agosto prometían una revisión de las «pensiones, favores y estipendios» que otorgaba el rey. Una institución que sobrevivió, aunque era claramente contraria a las nuevas nociones de libertad e igualdad fue la esclavitud. Bajo la ley francesa existente, los esclavos en las colonias eran una forma de propiedad, legalmente comprada y pagada, y ninguno de los diputados esclavistas de la Asamblea hizo ademán de renunciar a esa situación. Se ignoró la petición que hizo el duque de La Rochefoucauld-Liancourt: quería que la Asamblea se comprometiera, por lo menos, a «ocuparse de este asunto antes de finalizar sus sesiones».[12]

Sin embargo, aunque eliminaron casi todas las demás instituciones fundamentales que habían definido a la sociedad francesa durante tantos

siglos, los diputados seguían teniendo la esperanza de poder hacer del rey su aliado en lugar de su enemigo: al llegar a su fin la emotiva sesión del 4 de agosto, declararon a Luis XVI «el restaurador de la libertad francesa». Ante el desorden en el que se encontraba el país, todavía sentían la necesidad de que hubiera algún tipo de autoridad central. Muchos, especialmente Mirabeau, pensaban en privado que las medidas radicales ofrecían la oportunidad de fortalecer la monarquía, ya que los decretos prácticamente eliminaban el poder independiente de la nobleza, los parlamentos, la Iglesia y las provincias, es decir, los que habitualmente habían sido obstáculos a la autoridad real. Pero los diputados también se arrogaron dos reales privilegios tradicionales: «En memoria de las impresionantes y trascendentales deliberaciones que se acaban de celebrar por el bienestar de Francia», decretaron que se acuñara una medalla conmemorativa y que se celebrara una ceremonia especial de tedeum, normalmente reservada para las victorias militares y los nacimientos de los herederos reales, en todas las iglesias de Francia.

Los diputados esperaban que sus medidas pusieran fin a la oleada de motines populares en todo el país. La retórica que utilizaban sobre la abolición del «régimen feudal» difundió la idea de que Francia estaba viviendo una transformación completa. El entramado de instituciones que había existido hasta 1789 llevaba ahora el estigma de pertenecer al *ancien régime*, el antiguo régimen, es decir, todos los aspectos del pasado habían sido injustos e irracionales y había llegado el momento de reemplazarlos. Los contornos de la nueva sociedad todavía eran difusos, pero el término *ancien régime* en sí mismo era un arma poderosa que se podía utilizar en contra de personas, instituciones e incluso patrones de comportamiento. Cualquiera que fuera el aspecto del nuevo orden, sería una sociedad que se había «regenerado», otro término que de repente estaba en boca de todos. Con tintes religiosos de purificación y matices biológicos que sugerían un renacimiento, la idea de la regeneración, igual que la del antiguo régimen, tenía un poder dinámico propio. Juntos, los dos términos sugerían un

proyecto casi ilimitado de transformación que cambiaría no sólo la sociedad, sino la naturaleza misma de los individuos que la componían.

Se sintieran regenerados o no, los campesinos franceses, entre quienes se quería poner paz con los decretos del 4 de agosto, estaban dispuestos a enterrar el antiguo régimen y a ejercer sus nuevos derechos. «Las masas habían recibido con la mayor alegría las buenas noticias que acaban de llegar de París sobre la abolición total de los diezmos, los derechos feudales, la caza, los cotos vedados, la prohibición de cazar palomas, etcétera», escribió Arthur Young el 12 de agosto. Más tarde, ese mismo mes, escribió: «Se diría que se están utilizando todas las armas oxidadas de Provenza, matando todo tipo de pájaros», los campesinos estaban aprovechando su nuevo derecho a la caza. «En las declaraciones se habla de condiciones y compensaciones», añadió Young, «pero una multitud ingobernable se aprovecha de los beneficios de la abolición y se ríe de las obligaciones o compensaciones».[13] Sin embargo, los derechos de los señores no eran los únicos objetivos del desorden. En Alsacia, donde había salido elegido diputado un violento antisemita, François Hell, los campesinos se volvieron contra la población judía local, acusándola de cobrar intereses excesivos por los préstamos que concedían. Estos disturbios fueron una advertencia de las pasiones que despertarían las propuestas de conceder derechos a la minoría judía de Francia.

El 10 de agosto, mientras la Asamblea Nacional intentaba ponerse de acuerdo sobre la lista de privilegios e instituciones que se habían abolido la noche del 4 de agosto, intentó sofocar los disturbios mediante la aprobación de una ley que convertía a la Guardia Nacional, la milicia ciudadana improvisada en París y en otras ciudades durante la crisis de mediados de julio, en una fuerza militar oficial independiente del ejército real. El juramento que debían prestar los guardias decía que «serían fieles a la nación, al rey y a la ley», fórmula que ponía a los ciudadanos por encima del monarca.[14] «Nuestra burguesía se está inclinando cada vez más hacia la acción militar», anotó un observador, que describió después con minucioso detalle los elegantes y costosos uniformes que debían llevar los que se incorporaban a sus filas.[15] Los guardias estaban destinados a formar un

baluarte tanto contra el rey y la aristocracia, como contra la inquieta masa de la población que amenazaba con llevar la Revolución más allá de los límites que los diputados creían que podían establecer.

La sesión del 4 de agosto fue el tercer gran hito de la Revolución. El primero había sido la sesión del 17 de junio, cuando los diputados se instituyeron a sí mismos como Asamblea Nacional y afirmaron su derecho a dictar las leyes del país; el segundo había sido la *journée*, o «jornada» revolucionaria, del 14 de julio, cuando la población de París había asaltado la Bastilla y había destruido simbólicamente la autoridad del rey. Lo que no se había logrado en décadas de discusión racional sobre la necesidad de reformas se llevó a cabo en estas tres instancias, con el impulso de la emoción. Los cambios afectaron tanto a los miembros de los estamentos privilegiados como al resto de la población. Babeuf, por ejemplo, que se había ganado la vida redactando documentos que detallaban los derechos de los señores, se dio cuenta de que «la profesión de especialista en derechos feudales ha dejado de existir».[16] Con la esperanza de que el entusiasmo inspirado por sus acciones, junto con una combinación de medidas represivas y la promesa de que la próxima sería una buena cosecha, permitiera controlar el desorden generalizado en el país, la Asamblea Nacional dirigió su atención a lo que los diputados consideraban su tarea más importante: la redacción de la Constitución nacional que habían jurado preparar.

El logro más duradero de las tareas constitucionales de la Asamblea Nacional fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se elaboró a lo largo de una serie de apasionados debates que duraron desde principios de julio hasta finales de agosto de 1789. En estas discusiones, los diputados se esforzaron por trasladar a una sola declaración coherente las nociones de libertad e igualdad que habían estado en el centro de las disputas políticas y filosóficas durante todo el siglo XVIII. La mayoría de los diputados pensaron inicialmente que la confección de una declaración de derechos sería un asunto sencillo. La noción de que todos los

hombres estaban igualmente dotados de derechos naturales era básica en el pensamiento de la Ilustración y Thomas Jefferson la había dejado expresada de forma memorable en la Declaración de Independencia Americana. Las deliberaciones sobre política a ambos lados del Atlántico habían producido un amplio consenso a favor de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa, la protección de la propiedad y la necesidad de salvaguardas contra la detención y el encarcelamiento arbitrarios. También se aceptó de forma consensuada que alguna forma de gobierno representativo era la mejor manera de proteger estos derechos.

En el otoño de 1788, los líderes del movimiento patriota estaban ocupados redactando declaraciones de derechos con base filosófica, que suponían que «todos los hombres son libres e iguales», como afirmó Mirabeau en su propia propuesta. Tal declaración, argumentó Sieyès, «imbuiría a la mayoría de los ciudadanos de los principios esenciales de cualquier asociación humana que sea legítima, que sea *libre*». Condorcet estuvo de acuerdo en que los ciudadanos deben «ser conscientes de sus derechos». Sin embargo, también le preocupaba que los hombres pudieran tener «desaciertos o ideas falsas sobre la naturaleza y el alcance de sus derechos». Una de sus preocupaciones era asegurar que se permitiera a los propietarios «hacer cualquier uso de su propiedad que no sea contrario a los derechos de los demás». Como correspondía a un antiguo colaborador de Turgot, Condorcet consideraba que las restricciones del gobierno al comercio de cereales, las normas de los pueblos sobre la agricultura y los gremios de artesanos infringían la libertad económica individual, lo que significaba que su definición de los derechos estaba destinada a encontrar oposición por parte de las clases populares. Por otra parte, subrayó el derecho de todos los ciudadanos a tener una voz igualitaria en el proceso político mediante la participación en las elecciones, un punto que no figuraba en las cartas de derechos americanas que habían influido en algunas de las discusiones francesas.[17]

Otro antiguo colaborador de Turgot, el economista Dupont de Nemours, compartía la preocupación de Condorcet por garantizar la libertad de empresa económica, pero la lista de derechos que escribió en el *cahier* de su

distrito destacaba por su insistencia explícita en que «toda persona menor de edad, o con alguna discapacidad por vejez o enfermedad, tiene derecho a la asistencia gratuita de los demás», una reivindicación de derechos de asistencia social que iba mucho más allá de lo que habían considerado los revolucionarios estadounidenses. Dupont de Nemours también identificó la educación como un derecho básico, basándose en que los ciudadanos no podían participar plenamente en la vida cívica si no sabían leer ni escribir. El más «americano» de los participantes en las discusiones francesas fue Lafayette, que estaba en estrecho contacto con Thomas Jefferson. La frase claramente jeffersoniana «la búsqueda de la felicidad» *(«pursuit of happiness»)* aparecía en un proyecto de declaración inédito que Lafayette compartió con el embajador estadounidense en junio de 1789.[18]

Al tiempo que unos revolucionarios franceses estaban ampliando la gama de asuntos que se podían incorporar a una declaración de derechos más allá de lo que habían incluido los americanos, otros ponían en duda si era pertinente discutir «cuestiones superfluas de la metafísica abstracta», como dijo el diputado Jacques François-Laurent de Visme. Un antiguo funcionario colonial, Pierre-Victor Malouet, señaló que en Saint-Domingue había veinticuatro mil terratenientes blancos y quinientos mil esclavos negros. «Por lo tanto, no puede permitirse que un ciudadano exalte a esos quinientos mil hombres y los anime a examinar y ejercer sus derechos como hombres libres», afirmó.[19] Algunos católicos también veían con recelo esta pasión por declarar derechos. Muchos clérigos, maltratados durante décadas por las opiniones de los *philosophes*, temían las consecuencias que la libertad de expresión y culto tendría para la Iglesia.

El 9 de julio de 1789, el comité constitucional de la Asamblea Nacional, encabezado por Mounier, recomendó que la Constitución comenzara con una declaración de derechos, pero que se pospusiera la redacción hasta que se hubiera completado el resto del texto constitucional. Dar una lista de «ideas arbitrarias y filosóficas» antes de elaborar los demás detalles abriría la puerta a exigencias que la Asamblea tal vez no quisiera aprobar.[20] El

informe de Mounier allanó el camino para un debate legislativo sobre una declaración de derechos y el 11 de julio, Lafayette, que estaba preparado gracias a sus reuniones privadas con Jefferson, se convirtió en el primer diputado que presentó una propuesta real en la Asamblea. Sin embargo, la crisis provocada por el despido de Necker más tarde ese mismo día, desvió la atención durante varias semanas.

En ese intervalo, las propuestas publicadas por dos de los diputados más destacados, Sieyès y Mounier, aclararon las cuestiones a tratar en la definición de los derechos. La propuesta del abate Sieyès fue precedida por un amplio tratado sobre la naturaleza de la sociedad. Esto concordaba con su argumento de que una declaración trascendente no podía presentar simplemente una serie de proposiciones como «artículos de fe», sino que debía respaldarlos con «razonamientos y pruebas». Su proposición distinguía entre lo que él llamaba «derechos naturales y civiles», que son los que poseen todos los miembros de la sociedad, por un lado, y «derechos políticos», o el derecho a participar en la elaboración y aplicación de las leyes, por otro. En este proceso inventó términos que desempeñarían un papel importante en el curso de la Revolución; llamó a la primera categoría «derechos pasivos» y a la segunda «derechos activos». Estos últimos, argumentó, sólo podían darse a quienes tenían un interés real en la sociedad a través de su propiedad. Entre los que sólo deberían tener derechos pasivos, en su opinión, estaban los niños, los extranjeros y los que eran demasiado pobres para pagar impuestos. En esta lista añadió a las mujeres, «al menos en el estado actual de las cosas», calificación que sugería que su exclusión no era necesariamente un principio fijo; él fue uno de los pocos escritores hombres que al menos mencionó la cuestión en 1789.[21]

La propuesta didáctica de Sieyès ayudó a la mayoría de los diputados a ver lo que no querían ver en un documento como éste. Reaccionaron más favorablemente a las cortas frases declarativas del borrador que aportó Mounier, muchas de las cuales, con pequeñas modificaciones, se incorporarían en la declaración final. La propuesta de Mounier, como la de Sieyès, era radical en lo que se refería a la igualdad. Exponía que «la naturaleza ha hecho a los hombres libres e iguales en derechos» y afirmaba

que «la ley debe ser la expresión de la voluntad general». Sin embargo, la cautela de su autor se reflejó en su sugerencia de que el gobierno no sólo debía proteger los derechos de los ciudadanos, sino también «prescribir los deberes» de éstos. El proyecto de Mounier incluía entre los derechos del hombre el «honor», que los nobles apreciaban, e insistía en que la libertad religiosa debía permitirse sólo en la medida en que no «perturbara el culto público» de la Iglesia católica.[22]

A principios de agosto, un debate de cuatro días sobre la declaración dejó ver las profundas divisiones que había en la Asamblea. Los conservadores no querían ninguna declaración. El obispo de Auxerre consideraba que una declaración de derechos podría ser apropiada para una sociedad como la de los americanos, donde todos los ciudadanos poseían propiedades y ya eran iguales, pero no para Francia. Malouet preveía que, en la práctica, las leyes tendrían que restringir a menudo los derechos supuestamente naturales. «¿Por qué prometer a los hombres que alcanzarán sus derechos en toda su plenitud cuando sólo se les permitirá ejercerlos dentro de unos límites justos?», preguntó. Si había que hacer una declaración de derechos en la Constitución, insistieron muchos diputados, debería ir acompañada de una declaración de deberes. Incluso el abate Grégoire, uno de los clérigos más entusiastas de la Revolución, apoyó la idea. «En un momento de insurrección en el que el pueblo [...] recupera los derechos que habían sido pisoteados y renace a la libertad, se puede llegar fácilmente a los extremos», advirtió. «Muéstrese no sólo el círculo dentro del que puede moverse, sino también el límite que no puede violar».[23]

Sin embargo, a los ojos de la mayoría de los diputados, la propuesta de equilibrar la Declaración de Derechos con una declaración de deberes contradecía la afirmación de que los hombres, por su naturaleza, poseen derechos naturales y que las leyes que aceptan obedecer se basan en su propio consentimiento, no en la obediencia a máximas religiosas o en el respeto ciego a la autoridad. Durante la sesión diurna del 4 de agosto de 1789, justo antes de la sesión vespertina en la que los diputados suprimirían los privilegios legales, y tras un debate tan animado que en ocasiones «los oradores no pudieron hacerse oír», se procedió a una votación nominal. El

recuento final fue de 570 en contra de la declaración de deberes y 433 a favor.[24] El debate en sí, destinado a unificar la nación francesa, puso de manifiesto la fragmentación que sería cada vez más acusada a medida que se desarrollara la Revolución.

Después de la noche del 4 de agosto, se nombró un comité, con Mirabeau a la cabeza, para trazar un único proyecto de declaración de derechos por el que pudieran votar. La propuesta de este comité, que se presentó el 17 de agosto de 1789, recibió un rechazo casi unánime. El propio Mirabeau desconcertó a la Asamblea; primero, sugirió que se pospusieran todas las discusiones sobre la declaración hasta que se hubiera preparado el resto de la Constitución; después, hizo una defensa del derecho a llevar armas, una idea que ni siquiera se había mencionado en los numerosos anteproyectos de declaración que circulaban desde el comienzo del año y que no se incluiría en la declaración final. Desanimados y frustrados, los diputados decidieron desechar la propuesta del comité Mirabeau. En su lugar, se dedicaron a estudiar una mucho más breve y menos polémica que había elaborado la Sexta Mesa, uno de los grupos en que se había dividido la Asamblea para facilitar el debate. «El proyecto carecía de energía», aseguró más tarde el diputado Gaultier de Biauzat. «Pero éste era un defecto mucho menos peligroso que los errores que habíamos visto en muchos otros proyectos».[25]

Al día siguiente, los legisladores comenzaron a revisar la propuesta artículo por artículo e, inmediatamente, decidieron que su lenguaje era demasiado plano y poco inspirado. Querían una declaración que, como dijo el diputado Duquesnoy, hablara «a todas las épocas y a todos los pueblos».[26] De repente, un párrafo elocuente que Mirabeau había propuesto como preámbulo en el borrador del comité adquirió un nuevo atractivo. Decía: «Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración

solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre». Las palabras resonantes anunciaban claramente el propósito del documento. Para satisfacer a los diputados más religiosos, la Asamblea añadió una frase que decía que actuaban «en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo». La Asamblea pasó entonces a los artículos básicos que definen los derechos individuales y el papel del gobierno en su protección.

Al igual que el preámbulo de Mirabeau, las proposiciones estaban redactadas de forma clara y contundente: «Artículo 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común. Artículo 2: La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Artículo 3: El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella». El artículo 4 definía la libertad como el derecho a hacer cualquier cosa que no perjudique a los demás, y el artículo 5 especificaba las circunstancias en las que la libertad individual podía ser restringida por la ley. En unas pocas frases, la declaración esbozaba una teoría de gobierno como un acuerdo entre ciudadanos libres e iguales, definía los derechos que la Constitución debía proteger y afirmaba que sólo un gobierno representativo podía arrogarse una autoridad legítima.

Se produjo un debate especialmente acalorado sobre la redacción de lo que se convirtió en el sexto artículo de la declaración, que trataba la cuestión crucial de cómo se llevaría a cabo el artículo 3. El artículo 3 prometía que sólo la nación podía ejercer el poder soberano de hacer leyes. Charles Maurice de Talleyrand, un obispo aristócrata destinado a adquirir notoriedad en el futuro como ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, propuso un párrafo que entrelazaba la promesa de un gobierno representativo y la igualdad para acceder a puestos de gobierno. Su frase inicial: «La ley es la expresión de la voluntad general», se hacía eco del controvertido *Contrato social* de Rousseau, aunque el concepto de «voluntad general» estaba tan extendido en el pensamiento político francés

del siglo XVIII que el propio Luis XVI lo había utilizado en el resumen de los principios absolutistas que copió cuando era un joven adolescente. El artículo afirmaba entonces que «todos los ciudadanos tienen derecho a participar personalmente o a través de sus representantes» en la elaboración de las leyes. Al declararse la Asamblea Nacional, los diputados ya habían afirmado su derecho a actuar en nombre de los votantes que los habían elegido, pero el artículo 6 sostenía la posibilidad teórica de una democracia directa en la que los ciudadanos participarían personalmente en el proceso de elaboración de las leyes. Los propietarios de esclavos coloniales citarían este artículo para insistir en que no se podían introducir cambios en sus derechos sin su consentimiento.

El artículo 6 de Talleyrand prosigue declarando que la ley «debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar», lo que excluye toda vuelta a las leyes y privilegios especiales que habían caracterizado al antiguo régimen. La última frase del artículo era la más polémica. Prometía que, puesto que los ciudadanos son ahora legalmente iguales, «todos ellos pueden presentarse y ser elegidos para cualquier distinción, cargo o empleo públicos, según sus capacidades y sin otro mérito que el de sus virtudes y sus talentos». El punto de fricción para muchos diputados fue la frase «según sus capacidades», propuesta por Mounier. ¿Significaba simplemente que nadie debería ser elegible para un cargo público a menos que tuviera la capacidad de realizar sus funciones, o era una manera de reintroducir un comportamiento aristocrático al exigir cierta formación o nivel de riqueza para algunos nombramientos? «Ninguna moción sufrió tantas enmiendas, ninguna sesión fue tan tormentosa», comentó un cronista.[27] Después de mucho ruido y furia, el artículo quedó aprobado con la enmienda de Mounier, pero la violencia del debate demostró lo fácil que sería despertar los temores sobre el regreso de los privilegios especiales que violarían el ideal de igualdad.

Hubo muchos menos desencuentros al discutir los tres artículos siguientes de la declaración, que establecían las directrices relativas a las detenciones, los procedimientos judiciales y los castigos. El objetivo principal era descartar prácticas arbitrarias como las *lettres de cachet* que

Mirabeau había denunciado antes de la Revolución. Sólo se podría detener o acusar a un sospechoso si había violado una ley que existía en el momento de la supuesta ofensa. Se les debía considerar inocentes hasta que se demostrara que eran culpables, y los castigos se limitaban a lo que fuera «clara y obviamente necesario». Sin embargo, los diputados también declararon que «todo ciudadano convocado o aprehendido de acuerdo con la ley debe obedecer inmediatamente»: no tenían intención de socavar el respeto a la ley y el orden.

Si había consenso sobre los derechos judiciales, no lo había con respecto a los dos artículos siguientes, que trataban de la libertad religiosa y la libertad de expresión. El borrador de la Sexta Mesa apoyaba firmemente la necesidad de la religión y de un «culto público» o una Iglesia apoyada por el Estado. Su concesión a regañadientes a la idea de la libertad religiosa sólo resolvía que «mientras un ciudadano no perturbe el culto establecido no se le podrá coartar». Los defensores de la libertad de religión se opusieron con vehemencia a cómo se había redactado este punto. El conde de Castellane propuso sustituir el artículo de la Sexta Mesa por una sola frase: «No se debería perseguir a nadie por sus opiniones religiosas, o coartarle en la práctica de su religión». Mirabeau denunció la noción de «tolerancia» en sí misma como «tiránica [...] porque la existencia de una autoridad con el poder de tolerar viola la libertad de pensamiento, ya que lo que tolera, también puede no tolerarlo». «Sería difícil imaginar los gritos, los murmullos, las intrigas, las declamaciones que este proyecto suscitó», escribió el diputado Duquesnoy en su diario.[28]

Al día siguiente el debate continuó con más ímpetu que nunca en una larga sesión. Un diputado, el marqués de Clermont-Lodève, insistió en que «sin religión, es inútil hacer leyes, reglas[;] uno no puede más que entregar su vida al azar». En el discurso más largo del debate sobre la declaración, el portavoz protestante Rabaut Saint-Étienne respondió que no podía haber distinción entre los derechos de la mayoría y los de las minorías religiosas. «Sus principios son que la libertad es un bien común y que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a ella», dijo. «La libertad debe entonces pertenecer por igual y de la misma manera a todos los franceses».

Yendo más allá de la cuestión de su propio grupo, hizo el primer llamamiento en la Asamblea para que se concedieran derechos a los judíos, «este pueblo arrancado de Asia, siempre errante, siempre proscrito, siempre perseguido durante casi dieciocho siglos». Los puntos de vista de Rabaut no tuvieron éxito: sus colegas adoptaron en cambio lo que Duquesnoy llamó un artículo «detestable» y «absurdo» que afirmaba que «no se podrá perturbar a las personas por sus opiniones, incluso sobre religión [*même religieuses*], siempre que su práctica no perturbe el orden público establecido por la ley». La palabra «incluso» *(même)* parecía sugerir que las ideas religiosas no merecían realmente la misma protección que las demás. Aunque Duquesnoy lamentó la timidez del artículo, admitió que una de las razones por las que la mayoría había votado a favor era porque «los toleradores presentaban sus demandas con una energía y una actividad que eran un poco intolerantes».[29] Este comentario traslucía que el afán de algunos revolucionarios por establecer la libertad religiosa total corría el riesgo de que la Iglesia católica y sus partidarios terminaran creyendo que la Revolución era una campaña contra ellos.

Los diputados preocupados por los límites de la libertad religiosa en el artículo 10 se vieron un tanto apaciguados por la redacción del artículo 11, que establecía la libertad de prensa, pero «sujeta a la responsabilidad por el abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley». Una intervención del joven abogado de Arras, Maximilien Robespierre, quedó inscrita en el registro parlamentario: «No debe dudar en declarar enfáticamente la libertad de prensa. A los hombres libres nunca se les permite pronunciar sus derechos de manera ambigua». Sus colegas pronto aprenderían a reconocer la inquebrantable devoción de Robespierre por sus principios. Muchos católicos no veían la libertad de prensa de manera tan positiva. «¡Cuánto ha sufrido la religión por los ataques que se han hecho de ella en escritos licenciosos!», exclamó el obispo de Amiens.[30] En este punto, sin embargo, los miembros conservadores del clero se encontraron aislados, y el artículo pasó sin mayores problemas.

Una vez definidas las libertades individuales que la Constitución debía garantizar a los ciudadanos, los diputados se entretuvieron con una serie de

artículos que justificaban ciertas restricciones sobre éstas. El artículo 12 declaraba que «la garantía de los derechos del hombre y del ciudadano necesita una fuerza pública». El artículo 13 sacó la consecuencia lógica de que los impuestos eran necesarios para pagar por esa protección y por otras funciones gubernamentales, siempre y cuando la carga se «repartiera equitativamente entre los ciudadanos, según sus medios». Cuando un diputado propuso una redacción que daba una imagen negativa de los impuestos, llamándolos «una parte sustraída a la propiedad privada», Mirabeau respondió que los impuestos eran «el precio que se paga por tener propiedades».[31] El artículo 14 otorgaba a los ciudadanos «el derecho a comprobar, por sí mismos o a través de sus representantes, la necesidad de la contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y de determinar su prorrata, su base, su recaudación [...]», afirmando así el principio de que no debe haber impuestos sin representación. El artículo 15, que decía que «la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a cualquier agente público», proporcionaba una base jurídica para que los ciudadanos exigieran a los miembros del gobierno que rindieran cuentas si violaban las leyes.

Después de casi una semana de sesiones dedicadas a la declaración, los diputados estaban ansiosos por terminar la labor. Su documento de trabajo incluía un artículo sobre la separación de poderes, un reflejo de las ideas de Montesquieu y los constitucionalistas americanos. La Asamblea adoptó la redacción propuesta como artículo 16: «Una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de poderes, carece de constitución». Esta declaración impedía cualquier retorno a los principios del absolutismo que Luis XV había enunciado tan memorablemente en la «sesión de flagelación» en el Parlamento de París en 1766.

En este punto, muchos de los diputados estaban listos para volver a otros aspectos de la Constitución. Algunos de ellos, sin embargo, todavía querían insertar otros artículos en la declaración. Sólo uno de ellos tuvo éxito: el magistrado parlamentario Adrien Duport, quien propuso declarar que la propiedad era «un derecho inviolable y sagrado». El artículo 17, que

defendía la propiedad, llevó a muchos críticos, en particular al socialista del siglo XIX Karl Marx y sus seguidores, a criticar la Declaración de Derechos por elevar los derechos económicos por encima de otros aspectos de la libertad. El artículo de Duport, sin embargo, también hizo de la propiedad el único derecho del que se podía privar a los individuos: incluía una disposición para el dominio eminente, la apropiación de la propiedad privada para la «necesidad pública», con una compensación apropiada. En ese momento, la decisión de la Asamblea de interrumpir el debate sobre la declaración el 26 de agosto no tenía por objeto impedir que se añadieran otros artículos. El 27 de agosto, los diputados votaron a favor de «reconocer que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no está terminada», con la promesa de que considerarían la posibilidad de completarla cuando el resto de la Constitución estuviera terminada.[32]

Aunque los diputados pensaron que volverían a examinar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano más adelante, el preámbulo y los diecisiete artículos que habían aprobado cobraron vida propia al instante. El documento se tradujo rápidamente a otros idiomas y se distribuyó por toda Europa y América del Norte, se convirtió en la declaración autorizada de los principios de la Revolución francesa. Para cuando la Asamblea finalmente completó el resto de la Constitución en agosto de 1791, la idea de cambiarla ya era inconcebible. Según el diputado Jacques-Guillaume Thouret, «esta declaración ha adquirido [...] un carácter sagrado y religioso. Se ha convertido en el credo de todos los franceses, se publica en todos los formatos, se cuelga en las paredes de todos los lugares públicos e incluso en las casas de los campesinos; se ha utilizado para enseñar a los niños a leer».[33]



Declaración de Derechos. En este grabado alegórico, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Asamblea Nacional separa el mundo soleado de la libertad del oscuro reino de los derechos y privilegios feudales. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

Una vez pronunciadas, las palabras de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano cambiaron el mundo. Aunque el curso de la Revolución llevaría a los legisladores a sustituir la declaración original por no sólo una, sino dos versiones modificadas, una más radical en 1793 y otra más conservadora en 1795, perduraron los principios básicos de los artículos de 1789. Las tres declaraciones enseñaron a los franceses a considerarse no como sujetos obligados a obedecer a una autoridad superior, sino como ciudadanos poseedores de derechos iguales entre sí y con derecho a voz en la elaboración de las leyes bajo las que vivían. Una vez que se difundió esta idea como un pronunciamiento oficial en nombre de la nación, en lugar de una simple especulación filosófica, resultó imposible erradicarla de la mente de la gente en el mundo entero. Tanto

para los franceses como para los habitantes de otros países, se convirtió en una declaración definitiva de los derechos naturales. Los diecisiete artículos de la declaración contradecían explícitamente las premisas básicas que subyacen a la monarquía absoluta y la jerarquía de privilegios sociales que habían caracterizado al antiguo régimen. Incluso aquellos que rechazaban el gobierno constitucional y la libertad individual, como los monarcas conservadores de la Europa del siglo XIX y los dictadores totalitarios del siglo XX, tendrían que tenerla en cuenta, refutando públicamente sus premisas en lugar de ignorarlas sin más.

Al mismo tiempo, la Declaración de Derechos obligó a sus propios partidarios a enfrentarse a nuevas cuestiones. El hecho de que la forma en que estaba redactado el documento fomentara reivindicaciones que a los diputados no se les habían ocurrido se puso de relieve incluso antes de que terminaran de escribirlo. El 26 de agosto de 1789, los judíos de París se convirtieron en el primer grupo en mencionar el lenguaje que se había utilizado para exigir sus derechos. Dirigiéndose a los diputados, los peticionarios afirmaron que «al devolver al hombre su dignidad original [...] no han querido hacer ninguna distinción entre un hombre y otro; este título nos pertenece como a todos los demás miembros de la sociedad; los derechos que de él se derivan nos pertenecen por igual». Los representantes de los hombres libres de color en las colonias francesas presentaron argumentos similares y la doctrina de los derechos naturales amenazaba claramente las bases de la esclavitud. La cuestión de los derechos de la mujer nunca se mencionó en los debates, dado que el cuerpo de legisladores estaba compuesto exclusivamente por hombres, pero las mujeres estaban entre los espectadores en las galerías de Versalles y algunos de los hombres sin duda pensaban que ellas también merecían igualdad de derechos. Los panfletos satíricos inspirados en la declaración planteaban cuestiones sobre la libertad sexual: uno, que afirmaba hablar en nombre de las prostitutas del Palais-Royal, defendía su derecho «a hacer lo que quisieran con su cuerpo» y, por tanto, a practicar su oficio abiertamente; otro citaba «el éxito de los Derechos del Hombre» para defender los actos homosexuales.[34]

La cuestión de cuán inclusivas eran las definiciones de «hombre» y de «derechos» de la declaración era sólo una de las cuestiones que planteaba el documento. Los diputados se habían preocupado por mantener un equilibrio entre la afirmación de la libertad individual y la necesidad de orden. Pero ¿estarían dispuestos los ciudadanos cuya libertad habían prometido proteger a aceptar las leyes aprobadas por sus representantes como expresiones de su propia voluntad que debían obedecer? ¿O citarían su derecho a «resistirse a la opresión» para justificar la oposición a las leyes que no les gustasen? En una sociedad con un abismo tan grande entre ricos y pobres, ¿aceptaría la masa de la población el énfasis del documento en los derechos de propiedad o insistirían los pobres en el «derecho de subsistencia» del que ya se había hablado durante la Guerra de las Harinas en 1775, pero que no se mencionaba en la declaración? La Declaración de Derechos fijaba los principios del nuevo orden que reemplazaría al antiguo régimen, pero abrió nuevos temas de debate.

9

Redacción de una constitución y conflicto

Septiembre-diciembre de 1789

La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano acabaría considerándose la declaración más importante de los principios de la Revolución francesa. Sin embargo, el debate sobre sus disposiciones dividió y agotó a los diputados, estaban ansiosos por pasar a la sustancia de la nueva Constitución. En pocos meses, definieron las principales características de un nuevo sistema de gobierno que esperaban que protegiera eficazmente la libertad individual que ahora se garantizaba a todos los ciudadanos y que les diera una verdadera voz en la elaboración de las leyes bajo las cuales vivirían. Al mismo tiempo, comenzaron a abordar otras cuestiones urgentes, desde cómo resolver la crisis financiera hasta cómo reformar las divisiones territoriales de Francia. Sus respuestas a estas preguntas tuvieron profundos efectos en cada individuo y comunidad del país.

Con cada paso que daban, los legisladores revolucionarios se veían obligados a tener en cuenta las reacciones de la población. Las esperanzas de la población se habían incrementado por los extraordinarios acontecimientos de los meses anteriores, pero también se habían encendido sus temores. Gracias a la prensa política, el público estaba más informado que nunca de todo lo que ocurría; además, podía ser partícipe a través de los nuevos gobiernos locales y de la Guardia Nacional. Los campesinos se alegraron ante la perspectiva de la abolición de las cuotas feudales, pero les preocupaba que los terratenientes pudieran encontrar formas de proteger sus intereses. Los miembros de la burguesía celebraron el fin de los privilegios nobiliarios, pero se preguntaban si los aristócratas aceptarían la

desaparición de sus privilegios especiales de forma pacífica. Los cambios en el estatus de la Iglesia eran profundamente inquietantes para el clero y para gran parte de la población. Los pobres urbanos y rurales demandaban pan, y los ciudadanos de todas las clases estaban preocupados por el desorden que continuaba interrumpiendo la vida diaria.

Al tiempo que expresaba su satisfacción por el hecho de que la Asamblea Nacional pasara de las cuestiones teóricas abstractas a las prácticas, el diputado Duquesnoy dejó constancia de que sus colegas se estaban dividiendo en grupos opuestos. «La sala está dividida de tal manera que, en una parte, se encuentran hombres que a veces, sin duda, tienen opiniones exageradas pero, en general, tienen un alto concepto de la idea de libertad e igualdad [...] La otra parte está ocupada por hombres menos idealistas, con opiniones menos firmes, lo que les da un aire de debilidad, de cautela, muy lamentable en las circunstancias actuales», escribió.[1] Los diputados que apoyaron la Revolución se sentaron en el lado izquierdo de la sala, mientras que sus oponentes ocuparon los asientos de la derecha; los términos «izquierda» y «derecha» se convirtieron pronto en las etiquetas de reconocimiento para los progresistas y conservadores que hoy se siguen utilizando en todo el mundo.

A medida que se aclaraban las diferencias entre los diputados, los legisladores afines empezaron a formar clubes en los que podían reunirse fuera de la Asamblea para trazar la estrategia con sus aliados. Muchos de los radicales «patriotas» habían participado en el club que fundaron los diputados bretones a principios de año. Una vez que la Asamblea se trasladó a París a mediados de octubre de 1789, el grupo alquiló una sala de reuniones convenientemente cerca de la nueva sala de la legislatura. Oficialmente, el grupo se llamaba a sí mismo Amis de la Constitution (Amigos de la Constitución), pero terminarían siendo más conocidos como los «jacobinos», sin más, porque fue la orden religiosa jacobina quien les alquiló el espacio. Al principio, sólo aceptaban a diputados como miembros, pero en pocos meses dejaron entrar a ciudadanos comunes, siempre que pudieran pagar las cuotas, que eran relativamente altas. Mientras tanto, los rivales de los patriotas crearon sus propias organizaciones. Los más

moderados, a los que se llamaba *monarchiens*, defensores de la monarquía, creían que estaban trabajando para reemplazar el absolutismo con una monarquía constitucional al estilo británico. Por lo tanto, apoyaron las primeras etapas de la Revolución. Había un grupo de diputados más conservadores, que se conocía como los *noirs* (negros), porque muchos de ellos habían sido originalmente representantes del clero y llevaban túnicas negras. Los *noirs* se oponían abiertamente a los principios básicos de la Revolución y esperaban que fuera un fracaso.

La discusión sobre si el rey debía tener el poder de vetar las leyes aprobadas por la asamblea de los representantes del pueblo se convirtió en el primer punto de desencuentro entre estas facciones. Los monárquicos, dirigidos por el abogado del Delfinado, Joseph Mounier, y varios nobles liberales, aceptaban la idea de que el rey debía compartir el poder con un legislador que representara la voluntad del pueblo. Pero, en su opinión, el rey debía tener una autoridad real para mantener el orden público y oponerse a las leyes que se hubieran redactado apresuradamente. Mounier, que todavía era presidente del comité constitucional de la Asamblea, utilizó este puesto el 28 de agosto de 1789, un día después de que terminaran los debates sobre la Declaración de Derechos, para presentar una propuesta que daba al rey el derecho de vetar las leyes con las que no estaba de acuerdo.

El veto del rey estaba en el centro mismo de cómo se interpretaba el artículo 3 de la Declaración de Derechos, que afirmaba que «la base de toda soberanía reside esencialmente en la nación». Si los diputados electos de la Asamblea Nacional representaban verdaderamente a la nación, los «patriotas» se preguntaban con qué derecho podría un solo individuo, aunque fuera el rey, rechazar sus decisiones. Era un asunto peliagudo, porque el rey aún no había aceptado ni los decretos del 4 de agosto ni la propia Declaración de Derechos. «Los nobles y el clero quieren hacer uso del veto para rechazar todas nuestras reformas», escribió un diputado nervioso. En respuesta a la proposición de los monárquicos, los radicales parisinos del Palais-Royal se proclamaron «asamblea patriótica» y

advirtieron a los diputados conservadores de que «quince mil hombres [estaban] dispuestos a incendiar sus castillos y sus casas» si persistían en sus empeños.[2] El 30 de agosto, una multitud intentó incluso marchar hacia Versalles para presionar a la Asamblea. Lafayette, el comandante de la Guardia Nacional de París, dispersó a los manifestantes, pero el incidente recordó a los legisladores que una población inquieta estaba vigilando de cerca y podía volverse contra ellos en cualquier momento.

El debate sobre el veto real aclaró la distinción entre la Constitución y las leyes ordinarias. Si el rey tenía el poder de vetar las leyes constitucionales que ponían los límites a su poder, la Revolución quedaría en nada. Incluso Mounier estuvo de acuerdo en que «el rey no tiene consentimiento alguno que dar a la Constitución; es anterior a la monarquía». Pero los monárquicos consideraban que el poder del rey para vetar las leyes ordinarias era la salvaguarda necesaria contra una asamblea electa que podía aprobar medidas apresuradas bajo la presión de una población enardecida. Sieyès, sin embargo, insistió en que cualquier tipo de veto sería «una *lettre de cachet* lanzada contra la voluntad nacional, contra toda la nación».[3] En medio se encontraban varios diputados que proponían lo que llamaban un veto «suspensivo», que daría al rey el derecho de retrasar las leyes, pero únicamente durante un periodo de tiempo determinado. Los defensores de este compromiso argumentaron que permitiría que el pueblo tomara la decisión final. Si luego reelegían a los diputados dispuestos a anular un veto real, quedaría claro lo que querían.

Antes de resolver finalmente este asunto del veto, los diputados se ocuparon de otra cuestión importante: ¿La futura legislatura nacional debería constar de una sola cámara o de dos, como el Parlamento británico y el Congreso de Estados Unidos? Si ocurría que había dos, ambas tendrían que aprobar las propuestas antes de que se convirtieran en leyes. Preocupados por el hecho de que una legislatura de una sola cámara fuera demasiado vulnerable a la opinión pública, los monárquicos querían un «senado», cuyos miembros fueran nombrados de por vida, para equilibrar una cámara baja electa. Para sus oponentes, esto equivalía a la restauración de una aristocracia privilegiada que podía obstaculizar la voluntad del

pueblo. Los ánimos se exaltaron hasta el punto de que salió «una palabra malsonante» de la boca de un orador y se desencadenó un «tumulto universal» que puso fin al debate.[4] El recurso al insulto en medio de un debate sobre una importante cuestión constitucional disipó la idea de que los diputados se guiaban únicamente por la razón mientras luchaban por redactar la Constitución. Pero, en cualquier caso, se rechazó la propuesta de los monárquicos. En total, 849 de los 1.060 diputados votaron a favor de la creación de una legislatura unicameral. Entre los que ayudaron a aprobar la medida se encontraban varios *noirs*, que esperaban desacreditar la Revolución a base de dar pábulo a sus tendencias más extremistas.

El 11 de septiembre, al final de un debate que se prolongó hasta las cuatro de la madrugada, la Asamblea otorgó el veto suspensivo al rey. Tendría el poder de hacer que tres asambleas legislativas aprobaran una ley de forma sucesiva para que entrara en vigor a pesar de su oposición. Nadie estaba satisfecho con este resultado: los radicales objetaron que el rey podía obstaculizar la voluntad del pueblo, aunque sólo fuera por un número de años, mientras que los conservadores afirmaban que un veto suspensivo no era suficiente para mantener un verdadero equilibrio de poderes entre el monarca y la legislatura.

Los debates sobre el veto real y la creación de una legislatura bicameral irritaron a la opinión pública, especialmente en París. Los altos precios del pan, que habían provocado agitación durante todo el año, seguían agobiando a la población mientras esperaba ansiosamente la recolección de la nueva cosecha. Además, los numerosos artesanos de la capital que dependían de clientes aristocráticos se vieron afectados cuando sus clientes dejaron de hacer encargos o incluso huyeron del país. La negativa del rey a declarar que acataba los decretos del 4 de agosto y la Declaración de Derechos dejó una nube de incertidumbre sobre el camino que iba a tomar la Revolución. La crisis financiera del gobierno seguía empeorando: la ruptura del orden significaba que los impuestos ya no llegaban como ingresos a las arcas del Estado, lo que llevó a la Asamblea a apelar a los ciudadanos para que hicieran contribuciones voluntarias para mantener la solvencia del gobierno. Delegaciones de mujeres que ofrecían sus joyas,

estudiantes que donaban sus hebillas de plata, clérigos que sacrificaban tesoros de sus iglesias y judíos que esperaban que sus contribuciones les ayudaran a conseguir sus derechos visitaron la Asamblea para hacer «regalos patrióticos», pero no fue suficiente para cubrir las necesidades del gobierno. Mirabeau se sintió obligado a denunciar las propuestas que querían resolver la crisis financiera declarando la bancarrota, lo que algunos legisladores habían llegado a ver como una manera de hacer pagar solamente a los ricos y perdonar a todos los demás. «¿Seréis los primeros en mostrar al mundo el espectáculo de un pueblo reunido para traicionar la confianza del público?», preguntó.[5]

Para Mirabeau, su capacidad para convencer a la Asamblea Nacional de que tomara la impopular decisión de aprobar más préstamos dejaba claro lo que se podía conseguir si se otorgaba autoridad suficiente a un líder fuerte. Era evidente que lo que Mirabeau quería era convencer a Luis XVI de que aceptara la Revolución y nombrara un ministro principal –él mismo, por supuesto– que, a diferencia del cauteloso Necker, pudiera dominar la legislatura. En este empeño se encontró con obstáculos por todos lados. El rey desconfiaba profundamente del noble rebelde que tanto había hecho para socavar la autoridad real en junio y julio. Sus compañeros también sospechaban de un hombre que, tras liderar el desafío al rey en la sesión real del 23 de junio, defendió más tarde un veto real absoluto. Mirabeau se había acogido con entusiasmo a la forma de hacer política a través de los medios de comunicación al fundar el *Courrier de Provence*, un periódico que tuvo mucho éxito. Esto, y su demostrada habilidad para enardecer a las multitudes, agudizó el temor que tenían sus colegas menos talentosos de que pudiera conseguir más poder a sus expensas. Entre bastidores, Mirabeau intentaba establecer un contacto directo con el rey y la reina para ofrecerles consejos sobre cómo reforzar el poder real en el marco establecido por la Revolución. Si lo hubieran sabido, los otros diputados habrían sido todavía más reacios a confiar en él. Cuando estalló la violencia popular en París el 5 de octubre de 1789, dando lugar a una marcha armada sobre Versalles, muchos sospecharon que el ambicioso diputado tenía algo que ver con la provocación.

Aunque Mirabeau y los radicales de la Asamblea se beneficiaron de lo que terminó conociéndose como los «Días de Octubre», fueron las mujeres de París las que desempeñaron el papel principal en la segunda *journée* de la Revolución. Además de su preocupación por el precio del pan, las mujeres que comenzaron a reunirse frente al Ayuntamiento de París en la madrugada del 5 de octubre estaban nerviosas por las últimas noticias procedentes de Versalles. Por primera vez desde la crisis de julio, el rey había convocado una unidad de soldados extranjeros, el regimiento de Flandes, cosa que reavivó los temores de que planeaba una acción militar contra la Revolución. En la noche del 1 de octubre, los oficiales de la guardia del rey ofrecieron un banquete para dar la bienvenida a los recién llegados. La familia real apareció brevemente para saludar a los oficiales participantes, quienes respondieron con vítores de «¡Viva el rey!». Los informes sobre el banquete que circulaban por París lo describían como una verdadera orgía contrarrevolucionaria: se decía que en la corte habían agasajado a los oficiales militares con comida y bebida; se habían puesto cintas blancas y negras, símbolos de las dinastías de los Borbones y los Habsburgo, y habían pisoteado las revolucionarias escarapelas tricolor.

A las ocho de la mañana del 5 de octubre, una multitud de mujeres furiosas comenzó a reunirse frente al Hôtel de Ville, el Ayuntamiento de París. Entre ellas destacaban las *dames de las Halles*, las duras y decididas vendedoras del mercado de alimentación al por mayor de la ciudad, un grupo que tradicionalmente expresaba los sentimientos de la población trabajadora de la ciudad en actos públicos. Las mujeres pidieron a los padres de la ciudad que autorizaran una marcha de la Guardia Nacional a Versalles para exigir el castigo de los oficiales aristócratas que habían insultado los colores nacionales; también querían que se adoptaran medidas inmediatas para aumentar la oferta de alimentos de la ciudad. Cuando reconocieron a Stanislas Maillard, un capitán de la Guardia Nacional que había ayudado a asaltar la Bastilla en julio, le pidieron que encabezara su protesta, diciéndole que «los hombres no eran lo suficientemente fuertes para vengarse de sus enemigos; ellas lo harían mejor», como recordó Maillard al año siguiente.[6]

Para cuando Lafayette, el comandante de la Guardia Nacional, llegó a las once de la mañana, algunas mujeres ya habían partido hacia Versalles. Reclutaron a otras que encontraron por el camino para que se unieran y se armaron con «palos de escoba, lanzas, horquillas, espadas, pistolas y mosquetes». Maillard, que hizo lo posible para convencerlas de que depusieran sus armas, estimó que eran siete u ocho mil. El estado de ánimo de los hombres armados de la Guardia Nacional en el Ayuntamiento también se estaba tornando en motín. No sólo le dejaron claro a Lafayette que no dispararían contra «mujeres que piden pan», sino que muchos de ellos querían unirse a la marcha. Hasta la mitad de la tarde, Lafayette permaneció en el Hôtel de Ville, tratando de calmar a la multitud. Pero en ese momento, a pesar de la fría lluvia, miles de parisinos se dirigían a Versalles, llevaban las armas que habían podido encontrar y arrastraban algunos cañones de la Guardia Nacional. Lafayette, «prisionero de sus propias tropas», como diría un observador americano, finalmente decidió que no tenía otra opción que unirse también al despliegue.[7]

Cuando la muchedumbre comenzó a llegar a Versalles a media tarde, algunos de los consejeros del rey le instaron a huir, pero el monarca tardó tanto en decidirse que perdió la oportunidad. Los manifestantes irrumpieron en la sala de reuniones de la Asamblea Nacional y detuvieron sus procedimientos. «La sala se llenó de mujeres borrachas que bailaban, se subían al escritorio del presidente [y] lo abrazaban», escribió escandalizado Duquesnoy en su diario. Madeleine Glain, un ama de casa de cuarenta y dos años, exigió la atención de los diputados y les dijo que las mujeres «pedían que no escaseara el pan». Se admitió a una delegación para que presentara sus demandas de pan al propio rey. «Su Majestad les respondió que él sufría al menos tanto como ellas, al ver que les faltaba», dijo la bordadora Marie-Rose Barré, según un resumen de su testimonio al año siguiente; el rey prometió que se aseguraría de que los envíos de grano a París estuvieran protegidos.[8] El rey se reunió con Mounier, presidente de la Asamblea, y finalmente acordó aceptar los decretos del 4 de agosto y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Para cuando Lafayette llegó a Versalles, las concesiones del rey parecían haber calmado la situación. Al

parecer, el problema principal era encontrar comida para los manifestantes hambrientos –muchos no habían comido en todo el día–, y un lugar para dormir.

En la madrugada del 6 de octubre, los participantes en la marcha, que habían pasado la noche en Versalles, comenzaron a entrar por la fuerza en el palacio. Cuando los guardaespaldas reales trataron de expulsarlos, estalló la violencia. Asesinaron a dos guardaespaldas y los decapitaron. María Antonieta temía por su vida y huyó de su habitación privada en camisón. Lafayette convenció a la Guardia Nacional para que protegiera a la familia real e hizo que los guardaespaldas afirmaran su lealtad a la nación poniéndose unas escarapelas tricolores. Pero le dejó claro al rey que la única manera de evitar un derramamiento de sangre todavía mayor era que él y su familia se trasladaran inmediatamente a la capital. La multitud aclamó al monarca cuando apareció en el balcón del palacio para comunicar esta decisión, pero nadie sabía cómo reaccionarían ante la reina, a quien muchos parisinos consideraban la principal opositora de la Revolución. Fue muy valiente por su parte salir al balcón. La acompañó Lafayette, que puso en riesgo su propia reputación al hacer una reverencia y besarle su mano. La ira de la multitud se aplacó lo suficiente como para poner fin a la crisis, pero la reina se quedó tremendamente alterada. «Nadie creería jamás lo que ha sucedido en las últimas veinticuatro horas», le dijo a su confidente austriaco Mercy d’Argenteau cuando por fin le pudo escribir una carta.[9]

Al mediodía, la familia real había terminado sus apresurados preparativos, y la enorme masa de manifestantes, guardias nacionales y cortesanos comenzaron una lenta marcha hacia París. A medida que avanzaban, la multitud gritaba que «traían de vuelta al panadero, a la esposa del panadero y al hijo del panadero», en referencia al rey, la reina y el pequeño heredero al trono, cuya presencia en la capital supuestamente garantizaría el suministro de pan. También llevaban las cabezas cortadas de los dos guardaespaldas reales a los que habían matado esa mañana, una sombría advertencia de lo que esperaba a los que se oponían a la Revolución. Por todo el país, grabados populares de los Días de Octubre destacaban lo importante que había sido la participación de las mujeres en

el evento. Algunos mostraban a las victoriosas mujeres del mercado de París montadas de forma sugerente sobre los cañones de la Guardia Nacional. En otras representaciones se podía ver a Théroigne de Méricourt, una atractiva joven ataviada con una llamativa chaqueta roja de montar, que quedó grabada en la mente de los testigos. Méricourt, originaria de Bélgica, era una de muchas extranjeras que se habían sentido tan atraídas por el estallido de la Revolución y se habían trasladado a Versalles para ser testigo de los debates de la Asamblea Nacional. A medida que fue avanzando la Revolución, se convertiría en una de las principales activistas que reivindicaban la presencia de las mujeres en la política, pero también se convertiría en uno de los blancos de los ataques misóginos.

La idea de que las acciones de las mujeres habían influido de forma decisiva en las relaciones entre el rey y el pueblo era la prueba de hasta qué punto la Revolución estaba poniendo en tela de juicio aspectos fundamentales de la sociedad francesa. La iniciativa de las mujeres durante los Días de Octubre fue algo tan inquietante para la época, que muchos hombres preferían creer que buena parte de las personas que había en la marcha eran hombres disfrazados de mujer. Los hombres que no eran capaces de aceptar que las mujeres pudieran tomar parte en la política con tanta fuerza se habrían molestado aún más si hubieran leído dos manifiestos publicados poco después de los Días de Octubre. Uno de ellos declaró que los hombres, «con sus sistemas de igualdad y libertad, con sus declaraciones de derechos, [...] nos dejan en una situación de inferioridad, de esclavitud más bien». Además de exigir representación política, en ambos panfletos se exigía la igualdad de derechos matrimoniales entre cónyuges; uno incluso quería una reforma del idioma francés, para que «el género masculino ya no se considere, ni siquiera en la gramática, como el más noble». El periodista Brissot, que aplaudió los resultados políticos de los Días de Octubre, se mantuvo fiel a sus principios rousseaunianos sobre los distintos lugares que deberían ocupar los sexos, una opinión compartida por muchos hombres revolucionarios. Brissot insistió en que una vez que la Asamblea se trasladara a París, se debería prohibir la entrada de mujeres a las galerías públicas. «Sólo traerán un espíritu de frivolidad, causarán

distracciones y desordenarán las discusiones», opinó. «Seguimos siendo demasiado infantiles para debatir delante de las mujeres».[10]

La marcha de las mujeres en los Días de Octubre consiguió forzar tanto al rey como a la propia Asamblea Nacional, que se trasladó a París junto con el monarca, a reconocer el poder del pueblo en la capital. La familia real se instaló en el Palacio de las Tullerías, en el centro de la ciudad, un edificio que se destruiría en otro levantamiento, la revuelta de la Comuna de París en 1871. Una vez que se trasladó a la ciudad, la Asamblea comenzó a celebrar sus sesiones en la cercana Salle de Manège, el picadero real. El rey y los diputados dependían ahora del gobierno municipal de París para garantizar su seguridad. Esto significaba confiar en Lafayette y en la Asamblea de Representantes de la ciudad; a pesar de que Lafayette apenas era capaz de controlar a su Guardia Nacional y la Asamblea de Representantes estaba bajo la presión de activistas como el abogado demagogo Georges Danton, que apoyaba una especie de democracia directa a nivel local.

A algunos de los diputados más conservadores les parecía que estar tan cerca de los parisinos, que se ponían nerviosos fácilmente, era una amenaza. Mounier, al que la prensa calificó de «Monsieur Veto», por su postura durante el debate sobre los poderes del rey, se retiró a su provincia natal del Delfinado. Se convirtió así en el primero de muchos políticos que, tras apoyar inicialmente el pronunciamiento revolucionario, se vieron estigmatizados como contrarrevolucionarios cuando decidieron que se había convertido en algo demasiado radical. Otras personas, en cambio, vieron oportunidades en la nueva situación, como Madame de Staël, la hija del ministro Necker. Ella ejercía su influencia femenina en la política de una forma más tradicional que las mujeres que habían marchado sobre Versalles; llevaba a hombres de diferentes grupos a su salón para conversar. Entre ellos había algunos del Tercer Estado, «distinguidos por su inteligencia y sus talentos», y otros «caballeros más orgullosos de su mérito que de los privilegios de su grupo». Como le gustaría recordar pasados los

años, el resultado de su hospitalidad fue que «las mentes más capaces de discurrir y debatir, trataron las cuestiones más importantes que el orden social había producido jamás». El rey y la reina, al contrario que Madame de Staël y sus amigos, no creían estar a salvo, ni les convencía el curso que iba tomando la Revolución. De puertas afuera, Luis XVI procuró dar la impresión de que había aceptado su posición como monarca constitucional; en secreto, envió una «protesta solemne» a su pariente Borbón, el rey de España, en la que denunciaba «todos los actos contrarios a la autoridad real que me han obligado a realizar desde el pasado 15 de julio».[11]

En principio, Lafayette parecía ser el gran vencedor de la crisis de los Días de Octubre: había conseguido limitar la violencia en Versalles mientras animaba a la familia real a trasladarse a París. Pero los esfuerzos iniciales que hizo para detener la marcha a Versalles el 5 de octubre y su intervención para proteger a la familia real el 6 de octubre, hicieron que los patriotas más radicales desconfiaran de él. En cualquier caso, carecía del temperamento para buscar el poder por sí mismo. Mirabeau no tenía tantos escrúpulos, pero los rumores de que había trabajado para inspirar los Días de Octubre dañaron su ya dudosa reputación. El 7 de noviembre, los rivales de Mirabeau en la Asamblea bloquearon sus ambiciones al aprobar un decreto que prohibía que los diputados pudieran ejercer como ministros reales: la monarquía constitucional de Francia no imitaría el sistema británico, en el que los ministros nombrados por la realeza dirigían el Parlamento al tiempo que dirigían el gobierno. La decisión de la Asamblea Nacional se justificaba como una forma de proteger la separación de poderes que exigía el artículo 16 de la Declaración de Derechos, pero era notorio y todo el mundo lo entendió así, que iba contra Mirabeau. «Un genio elocuente te dirige y te subyuga», dijo el diputado Jean-Denis Lanjuinais a sus colegas. «¿Qué no haría si fuera ministro?».[12]

Como Lafayette no quería y Mirabeau no podía tomar el control del alzamiento revolucionario, nuevas personalidades tomaron posiciones de liderazgo en la Asamblea y en los clubes. Entre los miembros patriotas del Club Jacobino, un «triunvirato» de jóvenes diputados, Antoine Barnave, Adrien Duport y Alexandre Lameth, surgieron como líderes. Barnave, que

apenas un año antes había sido un estrecho colaborador de Mounier en el movimiento provincial del Delfinado, era un orador de talento que no dudó en medirse con Mirabeau en los debates de la Asamblea. Duport, un joven magistrado del Parlamento de París, se había vuelto contra esa institución y desempeñaba un papel importante en la Sociedad de los Treinta. Lameth, menos activo como orador, era un hábil político entre bastidores. Dedicados a hacer funcionar la Revolución, los «triunviros» tenían poca paciencia para lo que consideraban las posiciones democráticas doctrinarias que defendían Robespierre y un puñado de radicales. Los líderes jacobinos también tuvieron que enfrentarse a la oposición de la derecha. A pesar de la deserción de su reconocido líder, Mounier, los *monarchiens* seguían teniendo varios oradores eficaces, como Malouet. En la extrema derecha, el abate Maury, un sacerdote católico con experiencia como predicador, tenía una presencia poderosa en el podio.

Finalmente, resultó que los disturbios de los Días de Octubre serían los últimos en los que habría estallidos de violencia popular en la capital hasta el verano de 1791; después de meses de alborotos casi continuos, los diputados pudieron reanudar su trabajo para redactar la Constitución en un ambiente más tranquilo. Aunque la Asamblea ya no tenía que temer la presión popular directa después de su traslado a París, ahora los diputados notaban más el control y la presión que se ejercía a través de los medios de comunicación que habían surgido gracias a la Revolución: la prensa política y el teatro politizado. Los primeros periódicos revolucionarios se limitaban casi exclusivamente a informar sobre lo que hacían los diputados, condensando horas de confuso debate en breves resúmenes; aun así, pronto se hizo evidente que sus redactores, al elegir los discursos que destacaban y el lenguaje que utilizaban para describir los acontecimientos, moldeaban con eficacia las reacciones de sus lectores. Los propios diputados reconocieron rápidamente que estos boletines informativos impresos eran indispensables para ellos también, les ahorraba el esfuerzo de hacer sus propios resúmenes de los debates para sus amigos y simpatizantes.

El asalto a la Bastilla transformó la prensa revolucionaria. Durante el verano y el otoño de 1789, decenas de nuevos periódicos trataron de satisfacer el insaciable apetito que tenía el público por leer noticias políticas y polémicas. La descripción trepidante que hizo el semanario *Révolutions de Paris* sobre la toma de la fortaleza, en su primer número del 19 de julio, fue un ejemplo de cómo el periodismo podía hacer que los lectores se sintieran parte integrante de la acción revolucionaria: «La cólera estaba en su apogeo, a nadie le importaban la muerte o el peligro [...]. Muchas mujeres nos ayudaron con toda su energía. Incluso los niños, después de cada salva del fuerte, corrían de aquí para allá para recoger las balas de cañón [...]. Nos adelantamos, llegamos a la escalera, liberamos a los prisioneros, entramos en todos lados [...]. Este día glorioso debería asombrar a nuestros enemigos y prometernos el triunfo de la justicia y la libertad».[13] El titular captó la esencia de los extraordinarios eventos que relataba: «Los de arriba parecen poderosos porque nosotros estamos de rodillas. ¡Levantaos!».

Los nuevos periódicos no sólo sumergieron a los lectores en el torbellino de los acontecimientos tal como ocurrieron, sino que también fueron mucho más francos que sus predecesores del antiguo régimen. Un ejemplo clásico era el *Patriote françai*s de Brissot, cuyo lema era: «Un periódico gratuito es un centinela siempre atento por el bien de la gente». Con la intención no sólo de informar sobre las noticias, sino de decir a los lectores lo que debían pensar al respecto, Brissot no dudó en dar una conferencia a los diputados que, en su opinión, no comprendían bien los principios de la democracia. También utilizó su periódico para continuar la campaña contra la esclavitud que había lanzado en febrero de 1788, cuando fundó la Sociedad de los Amigos de los Negros. En su opinión, la libertad por la que luchaban los franceses debía ser universal.

Ningún otro periodista tuvo tanto impacto como Jean-Paul Marat, un hombre mayor que se había hecho conocido sobre todo por sus ataques a las autoridades médicas y científicas establecidas. Su publicación *Ami du peuple (Amigo del pueblo)* llamó rápidamente la atención con sus denuncias vehementes de diputados y funcionarios a los que Marat acusaba de intentar

subvertir la Revolución. También se hizo conocido por sus críticas al pueblo, al que regañaba por no haber «exigido sin descanso el castigo de los enemigos públicos». Marat superó a todos los demás periodistas en su afán por sacar a la luz a los opositores ocultos de la Revolución y denunciar su indiferencia ante los sufrimientos del pueblo. A otros revolucionarios les preocupaba que su incesante vilipendio de todos los líderes del movimiento, excepto unos pocos, y su abierta celebración de la violencia –los estamentos privilegiados nunca habrían renunciado a sus derechos «sin las escenas sangrientas que siguieron a la toma de la Bastilla», escribió en su primer número– hicieran imposible la estabilidad. A las pocas semanas del lanzamiento del periódico de Marat, el gobierno municipal recién instalado trató de clausurarlo por criticar a uno de sus funcionarios. Fue el primero de muchos roces con las autoridades que le permitieron interpretar el papel de mártir perseguido. Otros periodistas «patriotas» se mostraron reacios a condenarle, temiendo que al hacerlo se abriera la puerta a la imposición de límites a sus propias actividades. «Lo considero un buen ciudadano que va demasiado lejos por un exceso de celo», escribió la periodista Luisa de Kéralio a Brissot.[14] Las provocaciones de Marat cambiaron los límites del discurso revolucionario y lo convirtieron en una verdadera fuerza en la vida política.

Cuando otro célebre panfletario, Camille Desmoulins, inició su propio semanario, *Révolutions de France et de Brabant*, a finales de noviembre de 1789, ya había tantas publicaciones periódicas que se quejó de que apenas podía encontrar un título que no estuviera ya cogido. Mientras que Marat mostraba su pesimismo constante sobre las posibilidades de éxito de la Revolución, Desmoulins empezó con una actitud esperanzada. La referencia a la provincia belga de Brabante en su título reflejaba el optimismo de que la revuelta contra el dominio austriaco que había estallado allí recientemente era una señal de que los principios del movimiento francés se estaban extendiendo más allá de las propias fronteras del país. Desmoulins prometió tratar las noticias con sentido del humor; era la única característica que compartía con los fundadores de *Actes des Apôtres (Hechos de los Apóstoles)*, una publicación

contrarrevolucionaria agudamente satírica cuyas denuncias de la Revolución eran tan violentas como las polémicas de Marat. Entre sus colaboradores se encontraban varios poetas conocidos e ingeniosos, y el hermano del líder revolucionario Mirabeau.

Entre los extremos de la izquierda prorrevolucionaria y la derecha antirrevolucionaria, otros periódicos prometían un relato imparcial de las noticias. El más importante de éstos, creado en noviembre de 1789 por el editor Panckoucke, se convirtió en el periódico de referencia de la Revolución. El *Moniteur* de Panckoucke, que duplicaba en tamaño y precio a los demás periódicos, tenía espacio para ofrecer una transcripción completa de los debates de la Asamblea, no sólo un resumen. Las salas de lectura y los cafés hacían que los periódicos fueran accesibles incluso para aquellos que no podían permitirse suscripciones privadas. Johann Heinrich Campe, un alemán que estaba de visita en París, observó cómo los trabajadores en París encontraban a «algún camarada, que tenga la suerte poco común de saber leer» y le hacían leer en voz alta las últimas noticias.[15] En las provincias, los sacerdotes de los pueblos y los funcionarios locales realizaban el mismo servicio, a veces trasladaban el lenguaje de los periódicos al dialecto local. A principios de otoño, los políticos revolucionarios eran muy conscientes de que el público del país entero, y más allá, observaba y criticaba cada uno de sus movimientos.

La desaparición de la censura convirtió los teatros en otro poderoso lugar para la difusión de ideas políticas. Marie-Joseph Chénier, que había estado años peleando para que se representara su obra sobre la matanza de protestantes el día de San Bartolomé de 1572, por fin lo consiguió en noviembre de 1789. La obra, titulada *Carlos IX*, relataba la historia de un rey francés al que una reina, que había nacido en el extranjero, y un prelado católico convencían para que cometiera un crimen en nombre de la religión. A los críticos que advirtieron que podría causar un disturbio público, Chénier respondió: «Si es peligroso hacer detestable el fanatismo y la tiranía, si es peligroso hacer admirables la virtud, las leyes, la libertad, la tolerancia, permítanme presumir de que hay pocas obras tan peligrosas como *Carlos IX*».[16] Otra dramaturga frustrada que de repente se encontró

con la posibilidad de que se vieran sus obras fue Olympe de Gouges, cuyo drama abolicionista *Zamore et Mirza*, en el que un esclavo negro se libra de que lo castiguen por matar a un hombre blanco, provocó un motín a finales de 1789. La obra convirtió a la autora en un fenómeno mediático. Durante los siguientes cuatro años, bombardeó a los parisinos con piezas de teatro, panfletos, carteles y discursos públicos. Igual que los periodistas, los actores dispuestos a adoptar una postura política se transformaron en celebridades de la noche a la mañana. El joven François-Joseph Talma tomó el relevo cuando sus colegas mayores de la Comédie-Française se negaron a hacer los papeles principales en las obras de Chénier y Gouges, y se convirtió rápidamente en el actor más famoso de la época. Cuando representaba obras de la antigüedad utilizaba togas romanas en lugar de los elaborados trajes del siglo XVIII, lo cual contribuyó a promover el culto al republicanismo clásico. También le ayudó a forjar una amistad con otro joven ambicioso, el oficial militar Napoleón Bonaparte, que le daría muy buenos resultados después de la Revolución.

Vigilados de cerca por los periodistas tras su traslado a París y conscientes de las pasiones que se podían desatar en los teatros, el rey y los diputados continuaron su enfrentamiento sobre el futuro del país. Los Días de Octubre dieron a los diputados más influencia sobre el rey, que ahora prometía aceptar las decisiones fundamentales que habían tomado en agosto, pero la marcha de las mujeres les recordó que la multitud indignada todavía podía tener un peso decisivo en el proceso político. El 20 de octubre de 1789 se acusó a un panadero parisino de retener el pan para que no llegara al mercado y lo lincharon a la puerta de su tienda. Fue otra revuelta en la que las mujeres volvieron a tener un papel destacado –una de ellas ató la soga alrededor del cuello de la víctima–, la Asamblea reaccionó aprobando una ley que autorizaba la imposición de la ley marcial para detener los disturbios. El diputado Robespierre, ya identificado como el principal portavoz de los intereses de la gente, se opuso enérgicamente a una medida que pretendía «hacer retroceder al pueblo», en lugar de atender a sus quejas

por los altos precios de los alimentos. En cambio, Duquesnoy, más conservador, anhelaba un «golpe violento para restablecer el orden», según dijo, se necesitaba «una explosión definitiva, quienes se prestan a formar una turba deben desaparecer».[17]

Desde el punto de vista de Robespierre, las cosas empeoraron aún más al día siguiente, cuando la Asamblea decidió limitar el derecho de voto en las elecciones a los hombres que pagaran impuestos equivalentes al valor de tres días de salario de un trabajador ordinario. Se estableció una calificación más alta para los miembros de los colegios electorales, encargados de elegir a los legisladores, y otra aún más alta, el llamado *marc d'argent*, para los propios diputados futuros. Sieyès argumentó que esta norma creaba una distinción entre los ciudadanos «activos», que tendrían derecho a votar y a ocupar cargos, y los «pasivos», que estarían sujetos a la ley, pero no podrían participar directamente en su elaboración o aplicación. Erigiéndose una vez más en defensor de los pobres, Robespierre denunció que la medida «podría fácilmente crear una aristocracia de los ricos sobre las ruinas de la aristocracia feudal». Para él, la exclusión de los ciudadanos más pobres del derecho a votar violaba el principio básico de igualdad consagrado en la Declaración de Derechos. Un año y medio más tarde, en marzo de 1791, seguía exigiendo saber cómo «se puede afirmar que la ley es la expresión de la voluntad general cuando la mayoría de aquellos para los que está hecha pueden no haber participado en absoluto en su elaboración».[18] La postura de Robespierre se ha convertido en algo básico en las definiciones modernas de lo que es la democracia, mientras que la defensa abierta de la posesión de una propiedad para votar ha desaparecido; en la práctica, sin embargo, la distinción de Sieyès entre ciudadanos «activos» y «pasivos» parece describir con más precisión el funcionamiento de las sociedades modernas.

En realidad, para las costumbres de la época, la ley del voto era bastante inclusiva: algo más de la mitad de la población masculina adulta, incluida gran parte del campesinado, reunía las condiciones para votar, aunque el número de personas aptas para ser elegidas como diputados era sólo de unos 72.000. Como los pobres de las ciudades tenían menos probabilidades

de pagar la cantidad requerida de impuestos directos que los campesinos, la proporción de ciudadanos pasivos en las ciudades era mayor que en el campo. En el *faubourg* Saint-Antoine, el corazón del París revolucionario, sólo entre el 12 y el 14 por ciento de los residentes tenían derecho a voto. Según la ley, los que no podían votar tampoco podían servir en la Guardia Nacional, la milicia ciudadana que ahora se encargaba de mantener el orden público. En la capital, sobre todo, la división que la ley creó entre los ciudadanos más ricos y activos, y el resto de la población fue una constante provocación para la gente corriente –hombres y mujeres– que habían asaltado la Bastilla en julio y que obligaron al rey a aceptar la Revolución y trasladarse a París en octubre. Las denuncias populistas del periodista Marat tenían un atractivo evidente; iba en contra de un sistema que favorecía a «los capitalistas, los banqueros, los especuladores, [...] los comerciantes, los minoristas, los que viven de sus inversiones, más preocupados por sus fortunas que por la libertad», mientras negaba una voz política a «la gente pequeña, la única parte decente de la capital».[19]

Aunque la mayoría de los diputados de la Asamblea Nacional votaron a favor de un sistema que pensaban que defendería los derechos de los propietarios, otra de sus decisiones cambió la propiedad de gran parte de la tierra del reino y puso en marcha una serie de acontecimientos que crearían un conflicto divisorio sobre la religión. El 2 de noviembre de 1789, al final de un emotivo debate que había durado casi un mes, los diputados votaron por un estrecho margen –510 contra 345– para poner la propiedad de la Iglesia católica «a disposición de la nación». Como se abolieron los diezmos y los pagos al clero por los servicios religiosos en los decretos del 4 de agosto, la Asamblea Nacional se comprometió a financiar a la Iglesia. Para cumplir con la promesa, los diputados necesitaban encontrar una fuente de ingresos; así, la propiedad de la Iglesia se convirtió en un objetivo obvio. Talleyrand, un obispo prorrevolucionario, había propuesto formalmente la medida el 10 de octubre. Talleyrand nació en el seno de una familia aristocrática, pero un pie zambo le excluyó de las carreras

tradicionales, incluidas las militares. Era uno de los muchos miembros del clero sospechosos de haber entrado en la Iglesia a pesar de no tener un compromiso real con las preocupaciones religiosas. Según sus cálculos optimistas, la venta de los activos eclesiásticos no sólo proporcionaría suficientes ingresos para aumentar el salario de la mayoría de los párrocos, sino que permitiría que el gobierno pagara su deuda.

Los efectos de la expropiación y la venta de los terrenos de la Iglesia, que se inició el siguiente mes de abril, se notaron en todos los rincones de Francia. «¡Qué cambio va a suponer este único decreto y qué consecuencias necesariamente va a tener en [...] los arreglos de todo tipo que han existido en Francia durante muchos siglos!», escribió a su cliente Adrien-Joseph Colson, un abogado encargado de administrar la finca de un noble.[20] La Iglesia poseía más del 10 por ciento de todos los bienes inmuebles franceses, incluyendo las tierras rurales arrendadas a los agricultores y muchas importantes propiedades urbanas. Con los ingresos de estas propiedades se financiaban escuelas, hospitales, orfanatos y otras instituciones, además de iglesias, conventos y monasterios. El gobierno tendría que decidir ahora a cuáles de estos establecimientos seguiría apoyando, involucrándose así en los asuntos internos de una institución que tenía un profundo significado para gran parte de la población.

Inicialmente, la mayor parte del clero francés estaba con la Revolución; un antiguo predicador de la corte, Claude Fauchet, había pronunciado el panegírico por los revolucionarios muertos en el asalto a la Bastilla. A la gente, en general, y a gran parte del clero, en particular, no les entusiasmaba que los obispos y abades aristocráticos llevaran un estilo de vida fastuoso. Muchos diputados creían que la santa pobreza de los primeros cristianos era un ejemplo que el clero debería seguir, y los curas mal pagados de las parroquias estaban dispuestos a dejar que el gobierno reformara una institución que consideraban que había perdido el contacto con su verdadera misión. Adrien Lamourette, uno de estos curas «patriotas», instó a sus colegas a aceptar la expropiación de la propiedad eclesiástica con «gratitud y alegría, como una bendición de la providencia para regenerar la Iglesia».[21]

Sin embargo, estaba claro que muchos diputados, imbuidos de la actitud crítica de la Ilustración hacia la Iglesia católica, veían la reestructuración de la institución como una oportunidad para reducir su influencia y autonomía. «No sé decir si la asamblea ha actuado [...] enteramente por patriotismo o por un gran deseo de rebajar al clero», escribió un observador inglés. Oponentes como el abate Maury, uno de los más elocuentes miembros de los *noirs*, denunciaron la nacionalización de las tierras de la Iglesia como un signo de «crisis de impiedad delirante». Sus orígenes, dijo, se pueden encontrar en las páginas de ese monumento de hostilidad a la religión, la *Enciclopedia*.[22]

Los diputados también eran muy conscientes de que esta medida se podía ver como una amenaza a los derechos de propiedad. La propiedad de la Iglesia, afirmaban los diputados partidarios de la expropiación, estaba constituida por donaciones destinadas a garantizar la prestación de servicios religiosos y caritativos; no se había entregado a ninguna persona concreta y, si se proporcionaban fuentes alternativas de financiación para estos fines, el Estado podía asumirlos de forma legítima. Quienes se oponían a la medida advirtieron que la anulación de los derechos de la Iglesia sobre los bienes que habían sido suyos durante muchos siglos abriría la puerta a posibles afirmaciones en el sentido de que «todos los miembros de una nación y todos los bienes que poseen en su territorio pertenecen a la nación».[23]

Los obstáculos prácticos que había en convertir las tierras de la Iglesia en una fuente de ingresos para el Estado también eran desalentadores. Talleyrand señaló que, si todas las propiedades eclesiásticas se ponían a la venta de una vez, el mercado se inundaría y el gobierno no obtendría el valor total por ellas. Propuso la emisión de bonos respaldados por el valor de las tierras de la Iglesia que el Estado utilizaría para pagar sus gastos. Los individuos podrían entonces intercambiar estos *assignats* por tierras eclesiales cuando encontraran propiedades que quisieran comprar. De esta manera, el gobierno obtendría beneficios de la operación inmediatamente, sin tener que esperar a que se vendieran todas las propiedades de la Iglesia. Ya que podían convertirse en algo tangible –bienes raíces– al principio los *assignats* se vieron como algo diferente al papel moneda, del que se

desconfiaba en Francia desde el espectacular fracaso de los esquemas financieros de John Law al comienzo del reinado de Luis XV.

En vista de la desesperada situación financiera a la que se enfrentaba el gobierno francés, el atractivo del plan para vender las tierras de la Iglesia era grande. La recaudación de impuestos se había colapsado por completo y, una vez que los diputados descartaron declarar la bancarrota del Estado, había que encontrar dinero en algún lado. Muchos miembros «patriotas» del clero aceptaron la noción de que la Iglesia necesitaba hacer sacrificios por el bien público; también estaban satisfechos con la promesa de un ingreso bastante sustancial para los curas que realmente servían en las parroquias. Al parecer, la cuestión de la propiedad de la Iglesia no afectaba a la naturaleza de la creencia católica ni cambiaba los rituales familiares. Sin embargo, estaba claro para todos que ahora la Iglesia estaría firmemente subordinada al Estado. «Se aniquiló la religión, se redujo a sus pastores a la deplorable condición de agentes nombrados por bandidos», se quejó el obispo conservador de Tréguier en Bretaña. Mirabeau y otros partidarios de la medida habían dado por hecho que los compradores de tierras de la Iglesia, o *biens nationaux* (bienes nacionales), como se los llamó, se convertirían en leales a la Revolución; no habían previsto que a los compradores también se los vería como enemigos de la religión y a veces se los amenazaría con la excomunión. La expropiación creó así una dinámica de polarización que pronto llevó a la Asamblea Nacional a realizar una reestructuración todavía más amplia de la Iglesia.

Justo un día después de la votación para hacer de las tierras de la Iglesia propiedad del Estado, los diputados, a instancias de Sieyès, decidieron rehacer completamente el mapa de Francia, sustituyendo las entidades geográficas históricas por nuevas unidades. Había que reemplazar las provincias por nuevos departamentos. Una vez que se aplicara el plan, en 1790, también habría que redefinir las 130 diócesis católicas para que sus límites coincidieran con los de los departamentos. Las jurisdicciones de los tribunales de justicia también se modificaron para adaptarlas a las nuevas

divisiones geográficas del reino. De las numerosas medidas adoptadas por la Asamblea Nacional, pocas tuvieron tanto éxito y han sido tan duraderas como la creación de los departamentos, que siguen siendo las subdivisiones fundamentales de la Francia actual.

Para los reformadores revolucionarios, el mapa del reino, al que Luis XVI había dedicado tanta atención en su juventud, ejemplificaba el carácter absurdo de las instituciones heredadas del pasado. Los límites superpuestos de las provincias, los distritos judiciales y las diócesis se habían establecido al azar a lo largo de los siglos. Las provincias variaban enormemente en tamaño, población y riqueza. Lo más importante, en la mente de Sieyès, era el hecho de que resultaban un obstáculo psicológico para la creación de una nación unificada de ciudadanos iguales. Su plan era «fundir los diversos pueblos de Francia en uno solo y las diversas provincias en un solo Imperio». Advirtió: «Si perdemos esta ocasión, no volverá de nuevo, y las provincias mantendrán eternamente su *esprit de corps*, sus privilegios, sus pretensiones, sus envidias».[24]

El plan original de Sieyès preveía la creación de ochenta unidades cuadradas de igual tamaño, cada una de ellas dividida a su vez en nueve unidades más pequeñas para la administración local. Las líneas rectas del mapa de Sieyès ignoraban las realidades geográficas, como la ubicación de los ríos y las montañas, así como el patrón de las rutas de transporte y las regiones de mercado. El plan que se adoptó finalmente intentó no separar las ciudades de las zonas rurales que las abastecían de alimentos. Aunque los legisladores querían abolir las identidades diferenciadas de las provincias históricas, aceptaron una propuesta de Mirabeau para trazar el nuevo mapa de manera que la mayoría de los departamentos se esculpieran a partir de provincias individuales, evitando acuerdos que aglutinaran poblaciones que a veces tenían una larga historia de hostilidades; algunas provincias más pequeñas sobrevivieron casi intactas con nuevos nombres.

Los nombres se adjudicaron en función de las características naturales, como ríos –por ejemplo, hay departamentos que llevan el nombre del «Bajo Loira» y «Alto Loira»– o montañas, como el «Puy-de-Dôme», los departamentos no tenían que inspirar la identificación psicológica que los

habitantes sentían hacia sus provincias históricas. Mucha gente aceptaba la idea de que los intereses locales debían subordinarse a los de la nación. El director de un periódico lionés, por ejemplo, comentó a finales de 1789 que su periódico había «dejado de ser la revista de Lyon para convertirse [...] casi exclusivamente en la revista de la Asamblea Nacional». Pero había otros que estaban descontentos por esta pérdida. Un grupo de nobles de Normandía protestó porque «se han mutilado burdamente los afectos de todos los franceses por la predicación de un vago e inquieto falso patriotismo y un sistema general de igualdad y uniformidad».[25] De hecho, no fue tan sencillo desarraigar las identidades provinciales. Experimentarían un renacimiento en el siglo XIX, que fue testigo de un aumento del interés por la historia, el folclore y los dialectos regionales, y los franceses de hoy en día todavía se identifican como alsacianos o provenzales más a menudo que como residentes de un departamento concreto.

La decisión de sustituir las tradicionales unidades políticas, jurídicas y religiosas por los nuevos departamentos desencadenó una intensa competencia entre las ciudades de las provincias que se presentaban para ser elegidas como centros administrativos de las nuevas unidades, o de una de sus subdivisiones. Las nuevas disposiciones supusieron una degradación para algunas de las ciudades que habían albergado parlamentos o intendencias provinciales bajo el antiguo régimen, pero el nuevo trazado del mapa dio una nueva importancia a muchos lugares que no habían albergado instituciones importantes antes de 1789. En cada departamento, un «directorio» elegido debía asumir la mayoría de las funciones que antes ejercían los funcionarios reales. Dentro de los departamentos, los pueblos y las aldeas también elegirían a sus propios dirigentes locales. La Asamblea Nacional entendió que, con un espíritu común de patriotismo, estos gobiernos locales aplicarían las leyes decretadas por los legisladores; se acabó con el sistema burocrático de arriba abajo del antiguo régimen, dejando que el rey y los ministros dependieran de la cooperación voluntaria de los funcionarios locales sobre los que no tenían ningún control.

Al terminar el año 1789, la Asamblea se ocupó de otra cuestión fundamental: ¿podrían los miembros de las minorías religiosas ejercer todos los derechos como ciudadanos, incluido el derecho a ocupar cargos públicos? La Declaración de Derechos había prometido a estos grupos la libertad de culto, pero el catolicismo seguía siendo la única religión respaldada por el Estado. El diputado Brunet de Latuque señaló que se había elegido a varios protestantes para la Asamblea y concluyó que no había base para excluirlos de otros cargos. Otros diputados plantearon entonces la cuestión de los derechos de quienes desempeñaban dos profesiones, la de verdugo público y la de actor, que por lo general eran denigradas en la sociedad francesa de la época. El abate conservador Maury defendió estos prejuicios: los hombres que dan muerte a otros o que fingen públicamente ser algo que no son, no merecen el mismo respeto que los demás. El *monarchien* Stanislas de Clermont-Tonnerre replicó que «el verdugo sólo obedece a la ley»; en cuanto a los actores, ya que todos asistían al teatro, se deberían «prohibir las obras por completo o eliminar el deshonor que va asociado al oficio de actor».[26]



La transformación del mapa de Francia. Este mapa detalla la sustitución de las lealtades provinciales históricas de Francia y la reubicación de instituciones como los tribunales y obispados por departamentos. El rediseño del mapa terminó siendo uno de los logros más duraderos de la Revolución. Fuente: Richard Gilbreath.

Habiendo acordado que los protestantes, los verdugos y los actores debían tener los mismos derechos que los demás ciudadanos franceses, la Asamblea se dirigió entonces a un último grupo cuyo estatus no se había resuelto: los cuarenta mil judíos de Francia. Maury y Clermont-Tonnerre volvieron a tener posturas opuestas. El abate insistió en que los judíos eran miembros de una nación extranjera con sus propias leyes y que «nunca

habían emprendido otra cosa que no fuera el comercio basado en el dinero». Estaba dispuesto a tolerarlos como extranjeros residentes, pero no a admitirlos como ciudadanos franceses. Clermont-Tonnerre estaba de acuerdo en que no se debía permitir a ningún grupo minoritario tener sus propias leyes y tribunales, como habían hecho los judíos bajo el antiguo régimen, pero si estaban dispuestos a renunciar a esos derechos y aceptar las leyes francesas, merecían los derechos de ciudadanía. Si seguían manteniendo algunas prácticas distintivas, como oponerse a los matrimonios mixtos y negarse a comer ciertos alimentos, era asunto suyo. «¿Hay alguna ley que me obligue a casarme con su hija?», preguntó. Desviándose de la lógica de sus decisiones sobre otros grupos minoritarios, la Asamblea decidió posponer cualquier decisión sobre los derechos de los judíos. «¡Judíos infelices, permaneced para siempre ajenos a la nación cuya justicia invocáis!», se publicó en un periódico radical.[27] A principios de 1790, los judíos sefardíes ricos y asimilados de Burdeos y Bayona lograron obtener la ciudadanía, pero la decisión no se extendió a la comunidad asquenazí más pobre y numerosa de Alsacia hasta el penúltimo día de trabajo de la Asamblea en septiembre de 1791.

En un discurso ante el pueblo francés, Talleyrand resumió el notable año de 1789 y les recordó a todos cómo habían cambiado sus vidas. «Elevados al rango de ciudadanos, aptos para todos los empleos, críticos informados de la administración, aunque no formen ustedes parte de ella, saben que todo lo hace por y para ustedes; iguales ante la ley, libres para actuar, hablar, escribir; no deben obediencia alguna a los hombres, sólo a la voluntad común, ¡vaya mejora de su condición!».[28] Reconoció que la nueva Constitución nacional no estaba terminada, faltaban por perfilar los detalles de muchas de las decisiones de la Asamblea. Sin embargo, la naturaleza histórica de los eventos del año era obvia para todos. Incluso los campesinos de aldeas remotas y los humildes artesanos urbanos habían hecho cosas que nunca antes habrían soñado. Habían elaborado *cahiers de doléances* y participado en las elecciones. En muchos casos, se habían levantado contra sus señores y las autoridades municipales. La expropiación

de las propiedades de la Iglesia y la redefinición de los límites de las provincias presagiaban nuevas transformaciones.

Para los parisinos, el año revolucionario de 1789 había sido especialmente intenso, en concreto las jornadas del 14 de julio y del 5 y 6 de octubre, que les habían enseñado que podían, por sus propias acciones, hacer historia. Los ciudadanos de la capital esperaban oír los gritos de los vendedores de periódicos en sus calles, y unirse a las animadas discusiones sobre los eventos públicos que tenían lugar en los cafés y las plazas públicas. Tanto quienes vivían estos cambios de forma traumática, como sin duda les ocurrió a Luis XVI y María Antonieta, como quienes se unían a ellos, igual que hicieron muchos de los ciudadanos del país, todos comprendieron que la vida en Francia nunca volvería a ser igual.

10

Un mundo nuevo dividido

Enero de 1790-junio de 1791

Para muchos de los que participaron, la celebración del primer aniversario de la toma de la Bastilla, el hecho que dio inicio a la Revolución, fue tan memorable como el propio día. La celebración del 14 de julio de 1790, que se llamó Fiesta de la Federación, tuvo lugar en el Campo de Marte, el gran espacio abierto en la orilla izquierda del Sena, donde hoy se encuentra la Torre Eiffel, y atrajo a una multitud de más de trescientas mil personas. Los «vencedores de la Bastilla» procedían sobre todo del vecindario inmediato a la fortaleza, pero el resto del público venía de todos los rincones del país. Para simbolizar la unidad de la nueva comunidad nacional proclamada por la Revolución, los miembros de la milicia patriótica, la Guardia Nacional, marcharon a París desde cada uno de los departamentos recién establecidos para unirse a los soldados del ejército regular, a los diputados y al propio rey en un juramento público de lealtad a la nación y a la nueva Constitución.

Se echaba la fecha encima y no se habían terminado los preparativos en el enorme espacio ovalado de las tribunas, todavía había que acondicionar el campo para la celebración, así que se hizo un llamamiento a voluntarios; tenían que venir con sus palas y despejar el terreno de escombros para poder instalar el «altar de la patria» y otras estructuras para la ceremonia. El propio rey visitó la obra y, como recordaría el diputado jacobino Alexandre Lameth, «las más distinguidas damas de la sociedad se entregaron a esta obra patriótica con una gracia que no hizo sino aumentar el entusiasmo. […] Para los que no estuvieron allí en estos días extraordinarios sería imposible imaginar cómo fueron, [...] la felicidad más absoluta, las

observaciones más originales, las canciones patrióticas, los encuentros alegres, la libre apertura de los corazones, el rápido intercambio de esperanzas, la anticipación del hermoso futuro que se preparaba para Francia [...] formaban algo que nunca había existido en la tierra antes de este gran momento de regeneración política».[1] Mientras los voluntarios trabajaban, cantaban una canción pegadiza, «Ça ira, ça ira» («Todo irá bien»), que se convirtió en un himno de la Revolución. Numerosas estrofas podían encajar en el sencillo estribillo de la canción y los cantantes a menudo se daban la mano para bailar en círculo, la *carmagnole*, mientras cantaban. En 1790, la canción reflejaba el optimismo popular de que «a pesar de los amotinados, todo saldría bien»; las versiones posteriores se hicieron más explícitas al pedir el castigo para los aristócratas y otros oponentes del movimiento.

La mañana del evento, en el altar erigido en el centro del recinto, el diputado y obispo Talleyrand dirigió a doscientos sacerdotes en la celebración de la misa para bendecir el país. Igual que había hecho la Iglesia, Luis XVI escenificó su aceptación del nuevo orden con un solemne juramento de lealtad a la Constitución. «Le oí pronunciarlo y cincuenta mil personas lo oyeron como yo», escribió Ferrières.[2] Pero el punto culminante de la ceremonia llegó cuando Lafayette, con su uniforme de comandante de la Guardia Nacional, se dirigió al centro de la gigantesca arena y dirigió la ceremonia de la jura de los guardias allí reunidos. Si el rey simbolizaba el antiguo régimen que originalmente le había dado su autoridad, Lafayette era la encarnación del movimiento revolucionario por la libertad y la igualdad al que se había unido en América y que ahora había llegado a Francia.

Asistir a la ceremonia fue una experiencia que cambió la vida del joven Jean-Marie Goujon. Inspirado por la Revolución, Goujon había abandonado una prometedora carrera de abogado y se había cortado el pelo en «el [estilo] más natural, el más simple, el más sano», para proclamar así sus simpatías políticas. En la fiesta, según contó a su madre en una carta, «vio a quinientos mil hombres reunidos, con los brazos levantados hacia el Ser

Supremo, ofreciéndole almas libres y dignas de virtud. Lo vi, me uní a ellos, mi corazón ardiente buscó en la naturaleza un título más bello que el de ciudadano francés y sentí que estaba en la gloria porque me lo dieron [...]. Viviré libre o no viviré».[3] Sus palabras fueron más proféticas de lo que él podía imaginar: cinco años después de dedicarse en cuerpo y alma a la Revolución, daría literalmente su vida por el movimiento.

El entusiasmo con el que los parisinos ayudaron a terminar los preparativos y la enorme multitud que participó a pesar de la lluvia que cayó durante casi todo el día eran la prueba de que la Fiesta de la Federación había aprovechado un deseo ampliamente compartido de que la Revolución fuera un éxito. Pero los sentimientos que provocó la fiesta no bastaron para disipar la tensión que iba creciendo mientras los defensores de las medidas más radicales para promover la libertad y la igualdad en 1789 trataban de ponerlas en práctica y los que temían las consecuencias de la Revolución endurecían su oposición. En lugar de permanecer unidos, los hombres y las mujeres franceses se encontraron en posiciones enfrentadas y tomando decisiones que los separaban cada vez más. El 20 de junio de 1791, menos de un año después de que jurara defender la nueva Constitución el día 14 de julio de 1790, Luis XVI aplastaría las esperanzas de personas como Goujon cuando intentó huir de París y forzar una vuelta atrás de la Revolución.

Incluso los eventos que habían llevado a la fiesta reflejaban la incertidumbre en la que se encontraba el país. La fiesta nacional se había planificado cuidadosamente para canalizar todas las celebraciones que se habían empezado a organizar a nivel local el invierno anterior en el sudoeste de Francia, donde los campesinos estaban ansiosos por ver cumplida la promesa de que se iba a «abolir el feudalismo». Una verdadera ola de disturbios había afectado al menos a trescientas parroquias de ocho de los departamentos recién creados. Grupos de hombres armados se acercaban a una aldea vecina y animaban a los habitantes a unirse a ellos para atacar los símbolos de la nobleza y los privilegios, como las veletas de las casas de los señores locales y los escudos de armas de las familias aristocráticas que había en los muros de las iglesias o en los bancos. Estas

reuniones frecuentemente culminaban con la erección de un «árbol de la libertad», que se parecía a las alcachofas que se recogen durante las fiestas anuales de la primavera. Los árboles de la libertad se decoraban con símbolos de la Revolución: cintas tricolores, paneles pintados con lemas revolucionarios y, a veces, una representación de la horca como amenaza contra los que se opusieran a la Revolución. Estas bulliciosas federaciones locales, a menudo acompañadas de bebida y disparos al azar, eran ocasiones alegres, pero también mostraban el fuerte temor popular a que hubiera una reacción contra la Revolución y la facilidad con que podía desembocar en violencia.

En la primavera de 1790, este movimiento de las federaciones se extendió desde el campo a las ciudades, llegando a casi todo el país. Se hicieron reuniones de guardias nacionales de regiones enteras para jurar lealtad a la nación y a la Constitución. La pequeña ciudad de Tain, convencida de que «tales federaciones no pueden sino acelerar la regeneración del reino», votó a favor de proporcionar fondos para enviar a los trescientos hombres que formaban su Guardia Nacional a Lyon para un evento regional a finales de mayo. La ceremonia de Lyon, que duró tres días e incluyó conciertos y un espectáculo de fuegos artificiales, atrajo a cincuenta mil guardias y cincuenta mil civiles. Los lioneses pagaron a un escultor local para que creara una montaña artificial de casi veinticinco metros de altura coronada con una estatua de la libertad «al estilo egipcio», e hicieron acuñar medallas de recuerdo para conmemorar la ocasión. En el discurso oficial de la ciudad se prometió apoyo a los decretos de la Asamblea Nacional y, en tono amenazante, se declaró «despreciable y traidor al país a cualquier rebelde que se oponga».[4]

El tono militante de estas declaraciones y la insistencia de los soldados del ejército regular para que se les permitiera participar en las fiestas de las federaciones junto con los «patriotas» de la Guardia Nacional alarmaron al gobierno. La mayoría de las denuncias de la aristocracia se podían descartar como retórica hueca, pero los soldados que dirigieron semejantes epítetos a sus nobles oficiales amenazaban con llevar al ejército a «la más turbulenta anarquía», como advirtió el ministro del Ejército a la Asamblea Nacional el

4 de junio. La gran fiesta en París el 14 de julio se había diseñado para canalizar y controlar el entusiasmo patriótico que este movimiento federalista había desatado. Sólo los soldados uniformados y los guardias nacionales podían participar activamente, y se desalentaban las iniciativas desde abajo, como la de Madame Mouret, que proponía una «federación [paralela] de mujeres francesas». Estos esfuerzos por establecer límites estrictos a la fiesta enfurecieron a radicales como el periodista Marat. Siempre desconfiado de los motivos de los hombres en el poder, denunciaba a viva voz el «juramento criminal» que obligaría a los soldados y a los guardias nacionales a obedecer ciegamente a una Asamblea que había negado el derecho al voto a los pobres; advertía al pueblo contra los «señuelos de esta fiesta, en la que sus implacables enemigos le prometerán una amistad fraternal».[5]

Tanto los temores de las autoridades como la ira de Marat eran consecuencia de los muchos conflictos desatados por las reformas revolucionarias del año anterior. La exitosa cosecha del otoño de 1789 acabó con uno de los motivos del malestar: los disturbios por el precio del pan fueron bastante escasos hasta 1792. Las elecciones locales de enero y febrero de 1790 también fueron casi siempre pacíficas. La participación fue alta, especialmente en las zonas rurales, y los resultados parecían indicar que los miembros de los tres estamentos tradicionales estaban de acuerdo en aceptar el nuevo sistema. Los votantes campesinos con frecuencia elegían a los nobles locales o a los sacerdotes de las aldeas como alcaldes, y la disposición de éstos a aceptar estas responsabilidades demostraba que los miembros de los antiguos estamentos privilegiados querían dar una oportunidad al nuevo régimen. El rey dio la misma impresión el 4 de febrero de 1790, cuando hizo una aparición sorpresa en la Asamblea Nacional. Se dirigió personalmente a los diputados por primera vez desde los Días de Octubre y prometió defender la nueva Constitución. Esto alimentó la esperanza de una transición pacífica hacia un nuevo régimen.

Sin embargo, a la vez que se celebraban las elecciones locales, la ola de disturbios campesinos que inició el movimiento federalista hizo saltar las alarmas. El 9 de febrero de 1790, el abate Grégoire informó a la Asamblea Nacional sobre estas insurrecciones que atribuía al «temor de que no se apliquen los decretos del 4 de agosto, a la falsa interpretación de estos decretos», y pidió a los diputados que aclararan rápidamente qué derechos feudales se abolirían de inmediato y cuáles tendrían que comprar los campesinos.[6] La Asamblea respondió a esta pregunta a mediados de marzo, cuando el veterano abogado feudal Philippe-Antoine Merlin de Douai presentó los resultados de meses de debate en la comisión encargada de la aplicación de los decretos aprobados en el mes de agosto anterior. En un lenguaje casi impenetrable, lleno de palabras arcaicas como *gavenne*, *poursoin*, *sauvement* y *avourie* –términos regionales para los cargos pagados a un señor a cambio de la protección teórica que debía a sus vasallos–, la propuesta dividía los cientos de privilegios que los señores habían acumulado a lo largo de los siglos en los que se consideraban violaciones flagrantes de los derechos naturales individuales y los que se podían considerar propiedad legítima de sus titulares. La Asamblea había reconocido los primeros en su declaración y se habían abolido sin compensación; los campesinos tendrían que comprar los segundos.

La propuesta de la comisión favorecía, sin lugar a dudas, a los señores del antiguo régimen. Las tasas que se les debían pagar por la extinción de las cuotas que habían recaudado tradicionalmente eran elevadas y los procedimientos establecidos hacían muy difícil que los campesinos se liberaran realmente de sus obligaciones. Si había una controversia sobre la legitimidad de una determinada reclamación, correspondía al antiguo vasallo demostrar que no estaba justificada. Los campesinos se sintieron aún más decepcionados por el tratamiento del diezmo por parte del comité. Ahora que el clero recibiría su paga del Estado mediante los ingresos fiscales, los cultivadores que arrendaban tierras esperaban que sus cargas se redujeran. Pero los diputados decidieron que los diezmos debían considerarse parte de la renta legítima que se debe a los dueños de la propiedad. La mayor parte de los beneficios de la abolición del diezmo

terminaron en los bolsillos de los antiguos señores y de los terratenientes burgueses, en lugar de ir a parar a los que trabajaban la tierra.

Cuando las noticias de los detalles del plan de la Asamblea se filtraron y llegaron al campo, los campesinos reaccionaron con enojo. «El pueblo [...] no sólo se niega a pagar o a reconocer estos derechos, sino que amenaza a los propietarios y a los notarios que intentan cobrarlos», se quejaba un funcionario local del departamento de Nièvre.[7] Las poblaciones rurales se sintieron especialmente frustradas cuando se enteraron de que se esperaba que siguieran pagando cuotas incluso en las antiguas propiedades de la Iglesia que ahora pertenecían a la nación: el gobierno revolucionario seguía queriendo los ingresos de estas propiedades hasta que se vendieran. Ahora que eran oficialmente ciudadanos libres e iguales, los campesinos no veían razón alguna para someterse a las mismas obligaciones que habían marcado su condición de inferioridad antes de 1789. Por su parte, los antiguos señores, aunque la letra de la ley estaba en gran parte de su lado, no estaban contentos con la legislación. Se dieron cuenta rápidamente de que tenían pocas posibilidades de cobrar la indemnización que se les había prometido. Además, se quejaban de que no podían liberarse de las restricciones tradicionales del uso de sus propiedades, como la exigencia de dejar que los aldeanos recogieran el grano sobrante en los campos después de la cosecha.

Los decretos cada vez más radicales de la Asamblea Nacional sobre asuntos religiosos eran tan polémicos como sus decisiones sobre los derechos feudales. El 13 de febrero de 1790, los diputados votaron para abolir las órdenes religiosas de monjes y monjas, con la excepción de las congregaciones que prestaban servicios necesarios, como la enfermería y la educación. Los críticos de la Ilustración habían tenido las órdenes en el punto de mira durante mucho tiempo; a diferencia del clero parroquial, que supuestamente inculcaba virtudes morales a sus rebaños, los religiosos de clausura no desempeñaban, en opinión de los *philosophes*, ninguna función útil en absoluto. La idea misma de hacer voto de celibato de por vida le parecía a Barnave «incompatible con los derechos del hombre» y con las

prescripciones de la propia naturaleza. Los revolucionarios estaban convencidos de que las monjas, sobre todo, eran víctimas involuntarias de familias que querían evitar el coste de la dote de sus hijas. Los caricaturistas elaboraban imágenes de mujeres jóvenes sonrientes que se despojaban de sus hábitos y se unían a los monjes liberados, y Olympe de Gouges escribió una obra dramática sobre una joven novicia a quien su amante salva de una vida de celibato. Protestas como las de las monjas carmelitas de París, que negaron indignadas que fueran «víctimas que se iban consumiendo por los remordimientos», no lograron conmover a los diputados. Al fin y al cabo, ellos esperaban, como dijo el economista Dupont de Nemours, que hacerse cargo de los bienes de los conventos y monasterios fuera «una excelente operación desde el punto de vista financiero». Inicialmente, alrededor de la mitad de los miembros varones de las órdenes religiosas –y una proporción aún mayor de mujeres religiosas– trataron de aprovechar las disposiciones del decreto de la Asamblea que les habrían permitido seguir viviendo en comunidades religiosas voluntarias. Sin embargo, a medida que aumentaban las presiones sobre ellos, un número cada vez mayor se camufló entre la población general. Un católico conservador se quejó de que «mujeres que habían prometido ser fieles a Jesús, monjes que habían decidido ser castos voluntariamente [...] prostituían sus corazones con juramentos adúlteros» al abandonar sus órdenes y casarse.[8]

La abolición de las órdenes religiosas hizo urgente que la Asamblea encontrara nuevas formas de llevar a cabo las obras de caridad de las que se había encargado la Iglesia. A finales de mayo de 1790, el duque de la Rochefoucauld-Liancourt, un noble liberal conocido por sus preocupaciones filantrópicas, entregó un informe a la Asamblea Nacional, en el que se establecían los principios básicos para un estado de bienestar secularizado y administrado por el gobierno. En lugar de aceptar la existencia de la pobreza como un aspecto inevitable de la sociedad, argumentaba que el objetivo debería ser eliminarla por completo. «La sociedad debe a todos sus miembros un modo de subsistencia o un trabajo», afirmó. Aunque él y sus colegas no expresaron ninguna simpatía por los individuos sanos que se negaban a trabajar, previeron un sistema integral

que «ayudaría a los indigentes, los débiles y los enfermos de todas las edades, en todas las situaciones sociales y en todas las partes del reino». Esto incluiría la creación de puestos de trabajo para aquellos que no pudieran encontrarlos por sí mismos. La Iglesia usaba la «humillante palabra "limosna"» para describir la ayuda a los pobres, declaró Rochefoucauld-Liancourt. Los nuevos términos de «la asistencia y la obligación deben ennoblecer tanto a la nación que da como a la persona desafortunada que recibe». Los ciudadanos pobres eran «una parte integral de la nación», insistió otro diputado, Jacques-Guillaume Thouret, y por lo tanto sus necesidades deberían estar cubiertas por «los ingresos de la nación».[9]

La Asamblea reconoció que poner en marcha el noble objetivo de proteger a todos los ciudadanos mediante una amplia gama de medidas de bienestar sería un enorme desafío. Los diputados prometieron a las administraciones departamentales recién creadas los fondos necesarios para crear talleres para desempleados, mantener los hospitales y atender a ancianos, huérfanos y dementes, pero el dinero que destinaron estaba muy lejos de ser suficiente. Los efectos reales de estas reformas idealistas se repartieron de manera muy desigual entre hombres y mujeres. Aunque la crisis de la mayor industria del país, que era la manufactura textil, dejó sin trabajo a más mujeres hilanderas y encajeras que a hombres tejedores, poco se hizo para proporcionar empleo a estas mujeres; además, los cálculos que hizo el comité sobre lo que era un salario digno no tenían en cuenta que la remuneración de las mujeres era siempre mucho menor que la de los hombres. Los legisladores elogiaban a las «valiosas ciudadanas» que servían de nodrizas para los niños abandonados, pero sus reformas perturbaron las fuentes de financiación que se suponía que pagaban por este cuidado. Para asegurarse de que los hospitales siguieran contando con personal, el decreto que abolía las órdenes religiosas exigía en realidad que las hermanas enfermeras que trabajaban en ellos siguieran desempeñando sus funciones, pero bajo la administración de médicos varones.

Esta asunción de funciones del ámbito del bienestar por parte del Estado causó menos altercados en la Asamblea y entre el público que todo lo

relativo a la Iglesia. Dos meses después del decreto de abolición de las órdenes religiosas, la Asamblea llevó a cabo su decisión de expropiar todas las propiedades de la Iglesia. Obligados a resignarse a esta pérdida, el 12 de abril de 1790 los partidarios de la Iglesia en la Asamblea se unieron a una propuesta que presentó Christophe Antoine Gerle, uno de los primeros miembros del clero que se unió a la Asamblea Nacional como diputado en junio de 1789. La propuesta declaraba el catolicismo como religión «dominante» en Francia; el debate que se produjo después demostraba una vez más que la religión hacía que los oradores de ambos lados adoptaran posturas extremas. Un clérigo diputado pidió a sus colegas que fueran testigos de que, si la moción no prosperaba, no merecía recibir la maldición de Dios, ya que había hecho todo lo posible por oponerse a ella. Mirabeau respondió recordando la historia de intolerancia religiosa de Francia, y señaló que «desde esta tribuna desde la que os hablo, se ve la ventana desde la que la mano de un monarca francés [...] disparó el arcabuz que marcó el inicio de la matanza del día de San Bartolomé».[10] La votación final fue de 495 a 400 contra la moción de Gerle.

Los diputados que habían votado en contra de declarar el catolicismo la religión del Estado se justificaron argumentando que «la palabra "dominante" implicaba una superioridad contraria a los principios de igualdad, que son la base de nuestra Constitución».[11] Negaron cualquier hostilidad hacia el catolicismo y señalaron que la Iglesia católica seguiría siendo la única que recibiría dinero público. Sin embargo, muchos católicos concluyeron que la Revolución se estaba volviendo contra sus creencias más preciadas. Particularmente en regiones donde había una minoría protestante significativa, los católicos vieron el rechazo de la moción de Gerle como una renovación de los conflictos religiosos del siglo XVI. «El calvinismo se ha hecho cargo de los comités», insistió un panfletario. «Está elaborando discursos, está tomando el control de las fuerzas de la Guardia Nacional y está propagando furiosamente [...] los sentimientos de odio, intolerancia y venganza que animaron a Calvino, su fundador». Las pasiones bullían en varias ciudades del sur donde la Revolución había permitido a prósperos comerciantes y fabricantes protestantes tener el

control de los gobiernos locales y las unidades de la Guardia Nacional. El peor estallido fue en la ciudad de Nimes, un importante centro de producción textil, donde los campesinos se unieron a los artesanos católicos para atacar a los protestantes. Tres días de violencia a mediados de junio se cobraron unas trescientas vidas, un número de víctimas mayor que en cualquier otro episodio de la Revolución hasta ese momento. El informe oficial de la Asamblea Nacional se puso del lado de los protestantes, culpando del derramamiento de sangre a «un partido que se había formado para oponerse a la Constitución, en el momento de sus primeros decretos [de la Asamblea Nacional] sobre la propiedad del clero».[12]

Los problemas en Nimes parecían un renacimiento de la violencia religiosa del pasado, pero las propias acciones de los revolucionarios estaban dando pie a un nuevo conflicto dentro de la Iglesia católica. La decisión de la Asamblea de asumir la totalidad de las propiedades de la Iglesia obligó a los legisladores a llegar a nuevos acuerdos para gobernar la institución más grande del país. Conocida como la Constitución Civil del Clero, la ley, elaborada en debates que se extendieron desde finales de mayo a principios de julio de 1790, reestructuró radicalmente la Iglesia francesa. Una separación de la Iglesia y el Estado al estilo americano era difícil de concebir en Francia, donde los miembros de una sola denominación constituían la abrumadora mayoría de la población. El gobierno y la religión estaban profundamente entrelazados desde el establecimiento del reino hacía más de un milenio. Así como no estaban dispuestos a conceder al rey ninguna voz para determinar los poderes que tendría bajo la nueva Constitución, basándose en que hacerlo sería socavar la soberanía de la nación, los diputados tampoco estaban dispuestos a negociar con la Iglesia sobre las reformas que tenían en mente. Estaban aún menos dispuestos a permitir que el Papa, un extranjero, interviniera en cuestiones que, en su opinión, eran estrictamente nacionales.

Muchos defensores de la reforma dictada por el gobierno se habían inspirado en los argumentos de los jansenistas, un partido de la Iglesia que

se había dirigido regularmente al rey y a los parlamentarios para protegerse de obispos hostiles e incluso del papado. «Vuestros decretos no llevarán ningún ataque a esta santa religión: sólo la devolverán a su primitiva pureza y seréis verdaderamente los cristianos del Evangelio», dijo un defensor de la reforma a sus colegas de la Asamblea. Los diputados imbuidos de las ideas racionalistas de la Ilustración se alegraron de ver la institución literalmente cortada a medida, ya que la Asamblea suprimió muchas parroquias, así como 52 obispados, y estableció los nuevos límites de las diócesis para que coincidieran con los de los departamentos recién creados. Para los católicos que consideraban a los obispos como continuadores divinamente consagrados de la obra de los apóstoles originales, esto era mucho más que una «operación mecánica y puramente temporal», como lo llamó un apologista. El mismo teólogo refrendó las disposiciones de la Constitución Civil para que las asambleas electorales departamentales (que elegían a los diputados) eligieran a los obispos, y para que las asambleas de distrito nombraran a los sacerdotes. El plan simplemente «cambiaba un gobierno arbitrario por uno comunal, acorde con el verdadero espíritu de la Iglesia», escribió.[13] Los opositores objetaron que protestantes, no creyentes e incluso judíos podían formar parte de las asambleas electorales que debían seleccionar a los clérigos católicos.

Aunque la Asamblea insistió en su autoridad para promulgar la Constitución Civil del Clero, tenía que enfrentarse a la cuestión de si el clero y la población aceptarían estos cambios radicales. Al principio, las señales parecían favorables. Muchos clérigos parroquiales estaban dispuestos a apoyar reformas que elevaban su estatus y sus ingresos a expensas de los monjes y sacerdotes que tenían poco contacto con los laicos. Una larga tradición de lealtad al gobierno francés y un genuino entusiasmo por el proyecto de regeneración nacional de la Revolución jugaban a favor para que aceptaran. Muchos miembros del clero habían demostrado su entusiasmo al participar públicamente en las fiestas de la federación que se celebraron mientras se debatía la Constitución Civil. La tradición «galicana» de la Iglesia francesa de independencia del papado, encarnada en el Concordato firmado en 1516 entre la monarquía y el

Vaticano, limitaba el poder del Papa para intervenir en sus asuntos. El entonces papa Pío VI no dijo nada sobre la Constitución Civil durante los debates legislativos porque no quería provocar a los revolucionarios y que se anexionaran el territorio papal de Aviñón en el sur de Francia. En vista del silencio del Pontífice, Luis XVI aprobó la medida el 22 de julio de 1790. Como católico obediente que era, aceptó el argumento de que las nuevas reglas de la Iglesia no afectaban a la esencia de las creencias religiosas. Sin embargo, unos días más tarde le dolió profundamente recibir una carta del Papa advirtiendo de que la ley podría «llevar a toda la nación al error, al reino a un cisma y, quizá, ser la causa de una cruel guerra civil».[14] El rey se encontró atrapado entre su lealtad a la Iglesia y su deber público como jefe del gobierno francés.

La primera mitad de 1790 también estuvo marcada por las controversias sobre las relaciones de Francia con sus colonias y con otros países y por un importante aumento de la campaña contra la nobleza. Después de la noche del 4 de agosto, los defensores del sistema colonial advirtieron a los propietarios de las plantaciones que los franceses estaban «ebrios de libertad» y que podrían tomar medidas para socavar la esclavitud. El hecho de que tantos líderes del alzamiento revolucionario fueran miembros de la Sociedad de Amigos de los Negros de Brissot hacía reales tales temores. A finales de agosto de 1789, los esclavos de dos plantaciones de Martinica «se negaron a trabajar, diciendo en voz alta que eran libres», según el gobernador de la colonia, que enviaba cartas anónimas a Francia haciendo ver que eran de conspiradores negros. Cuando la noticia de la caída de la Bastilla llegó a Saint-Domingue, se informó de que los negros habían entendido que «los esclavos blancos habían matado a sus amos y que ahora eran libres».[15]

Las noticias del levantamiento de París inspiraron no sólo a los esclavos de Saint-Domingue sino también a los colonos blancos. Estos organizaron una versión colonial de las revoluciones municipales que habían barrido la Francia metropolitana, estableciendo asambleas locales en las diferentes

zonas de la colonia y obligando al intendente real a huir. Para entonces, los propietarios de las plantaciones que vivían en París habían creado el Club Massiac, un grupo dedicado a luchar por sus intereses. Los hombres libres de color en París formaron su propio movimiento para protestar porque no tenían quién los representara. Como los hombres de color libres más ricos eran a menudo dueños de esclavos por derecho propio, inicialmente pensaron que podrían convencer a los miembros del Club Massiac para que trabajaran con ellos; Vincent Ogé y Julien Raimond, hombres ricos mestizos de Saint-Domingue, se dirigieron al club a principios de septiembre, pero les dijeron que sus miembros habían decidido que la organización sería sólo de blancos.

Después de este rechazo, los hombres libres de color buscaron aliados entre los revolucionarios blancos. Aunque eran pocos los miembros de los Amigos de los Negros que habían visitado las colonias y no habían dicho nunca nada sobre la situación de los hombres libres de color en sus numerosos panfletos, estaban encantados de sumarse a su campaña. Defender los derechos de hombres como Raimond, que tenía tres abuelos blancos, hablaba y escribía francés con fluidez y era lo suficientemente rico como para cumplir con los criterios de ciudadanía activa de la nueva Constitución, era más sencillo que desafiar la esclavitud misma. De hecho, muchos blancos de Francia no podían entender por qué los que estaban en las colonias no veían lo ventajoso que sería para ellos aliarse con la gente libre de color para formar un único bloque de propietarios opuestos al más numeroso de los esclavos. A los colonos blancos que afirmaban que cualquier concesión a la gente de raza mixta llevaría inexorablemente al derrocamiento de la esclavitud, los estigmatizaron con el apelativo «aristócratas de la piel». Tuvieron que hacer un esfuerzo enorme para tumbar una propuesta que se presentó a finales de noviembre de 1789 que concedería a la gente de color de Saint-Domingue dos representantes en la Asamblea Nacional. A pesar de este éxito, los colonos y comerciantes no bajaron la guardia. Se sabía que Mirabeau, el orador más eficaz de la Asamblea, mantenía correspondencia con el líder abolicionista británico Thomas Clarkson, y le había dicho a su equipo de redactores que trabajara

en una propuesta para abolir el comercio de esclavos. «Vivimos en el temor permanente de los efectos de una metafísica que se extiende a todo con una exageración verdaderamente peligrosa», escribió un comerciante de esclavos en la ciudad portuaria francesa de La Rochelle.[16]

Las noticias de las revueltas blancas contra la administración colonial llegaron a Francia a finales de febrero de 1790. «Cartas de Martinica y Saint-Domingue informan que estas colonias han declarado su independencia de la metrópoli», dijo un periódico a sus lectores.[17] Estas informaciones provocaron un gran nerviosismo en ciudades comerciales como Burdeos, donde los defensores de la esclavitud organizaron una delegación para ir a París. Los comerciantes de la ciudad aseguraban que aceptaban los principios de la Declaración de Derechos, señaló un cronista local, «pero no pueden concebir que los africanos, entre otros, nazcan y permanezcan libres e iguales en derechos».[18] Tales presiones llevaron a Mirabeau a moderar su esperado discurso ante el Club Jacobino el 2 de marzo. Para gran alivio de los colonos, no llegó a pedir medidas inmediatas contra el comercio de esclavos, sino que pidió que se negociara el asunto con los británicos. En la Asamblea Nacional, otro agitador patriota, Barnave, en su calidad de presidente de un comité de asuntos coloniales creado apresuradamente, concentró sus esfuerzos en unir a los colonos blancos. Se les prometió que la Asamblea no aprobaría ninguna medida relativa al «estatus de las personas» –un circunloquio que se refería a los esclavos y a los negros– sin la aprobación previa de los propios colonos.

Barnave presentó decretos el 8 y el 28 de marzo de 1790 para apoyar a las asambleas que habían surgido en las colonias. El abate Grégoire, un partidario enérgico de la causa de los negros libres, exigió garantías de que, si éstos cumplían los requisitos de propiedad para votar, se les daría autorización para participar en las elecciones coloniales. Barnave le tranquilizó en privado, pero la ausencia de toda mención del tema en los decretos permitió a los colonos blancos excluir a sus rivales. Esta ambigüedad abonó el terreno para más problemas. Temiendo que los legisladores franceses pudieran cambiar de opinión, una asamblea de colonos blancos reunida en la ciudad de Saint-Marc redactó su propia

constitución para Saint-Domingue, afirmando su poder para promulgar sus propias leyes sin la aprobación del legislador francés. Al ver que los blancos de la colonia estaban decididos a hacer lo que fuera para excluirlos del poder, los hombres libres de color de ambos lados del océano comenzaron a organizarse para exigir los derechos que, a su parecer, debían incluir los decretos de marzo de 1790.

Las colonias, vitales para la economía francesa, también formaban parte de la competencia global del reino con otras potencias imperiales. La cuestión de quién decidiría cuándo los intereses del país requerirían recurrir a la guerra surgió repentinamente a mediados de mayo de 1790, cuando España entró en conflicto con Gran Bretaña por los derechos sobre el estrecho de Nutka en el Pacífico Norte. España había sido aliada de Francia mediante un «pacto familiar» desde que el antepasado de Luis XVI, Luis XIV, había logrado instalar a un pariente Borbón como rey de España en 1713. Cuando Luis XVI se preparó para respaldar a España si la disputa sobre este remoto territorio daba lugar a un conflicto, los diputados patriotas de la Asamblea se opusieron. Declarar la guerra era un privilegio de la nación, no del monarca, insistieron. «Está entre los intereses de un ministro declarar la guerra», advirtió Barnave, «porque entonces uno se ve obligado a dejarle manejar los inmensos subsidios que se requieren, y su autoridad se incrementa sin límite». En cambio, una asamblea elegida que represente al pueblo se inclinaría naturalmente por la paz. «Todos nosotros tenemos propiedades, amigos, familia, hijos, un conjunto de intereses personales que podrían verse comprometidos por la guerra», concluyó el líder jacobino.[19]

El 22 de mayo, cincuenta mil parisinos llenaron las calles de alrededor de la sala de reuniones y siguieron los debates gracias a boletines escritos a mano que les pasaban por las ventanas. En el interior, el triunvirato jacobino de Barnave, Duport y Lameth luchaba contra Mirabeau quien, una vez más, defendía los poderes reales mientras trataba de convencer al rey y a la reina, en secreto, para que apoyaran los principios básicos de la Revolución. Mirabeau, que quería que el rey y la Asamblea compartieran la

autoridad para declarar la guerra, «estuvo increíble ayer», escribió un noble diputado, Gastón de Lévis, a su esposa. «Hizo polvo a los aristócratas, derribó a los reyes, elevó a los pueblos, irritó a los extremistas y se ganó la admiración de todos». Al final, se decidió que el rey podía proponer una declaración de guerra, pero que sólo la Asamblea podía tomar oficialmente la decisión. Los jacobinos consideraron que el resultado era una victoria: estaban convencidos, sin ninguna duda, de que Francia no se volvería a involucrar nunca más en una guerra de conquista ni enviaría soldados a una batalla con el único fin de conseguir la gloria para su gobernante. Hicieron caso omiso de advertencias como las del marqués de Estourmel, más conservador, que profetizaba dos peligros: o bien los enemigos de Francia «se beneficiarían de nuestro entusiasmo por ensueños filosóficos», sacando provecho para sí mismos de los territorios y las ventajas comerciales, o bien Francia, al decidir que sus principios democráticos le exigían intervenir cuando otras potencias cometían agresiones, estaría «en guerra con todas las naciones que consideramos injustas o que no aceptan nuestro sistema».[20]

Lo que Estourmel veía como un peligro –la posibilidad de que Francia se comprometiera a llevar sus principios revolucionarios al resto del mundo– inspiró a otros, que esperaban que los ideales de libertad, igualdad y democracia se extendieran pronto más allá de las fronteras del país. Ya a finales de 1789, el periodista Camille Desmoulins y otros revolucionarios franceses habían visto con satisfacción el comienzo de una revuelta contra el dominio austriaco en las provincias belgas justo al norte de la frontera francesa. Los rebeldes belgas estaban profundamente divididos entre los tradicionalistas, que se oponían al programa de reformas racionalistas que el emperador de los Habsburgo, José II, quería imponer desde arriba, y los demócratas, que buscaban una reducción de los privilegios de la nobleza local y de la Iglesia católica, pero Desmoulins dio por hecho que el movimiento seguiría los pasos del francés. La insurrección belga derrocó el dominio austriaco en diciembre, pero en marzo, el partido tradicionalista, dirigido por Hendrik Van der Noot, había expulsado a los rivales partidarios del demócrata Jean-François Vonck. Los seguidores de Vonck se refugiaron

en Francia y empezaron a hacer campaña para que hubiera una intervención contra los aristócratas en su propio país.

Los exiliados vonckistas de Bélgica eran sólo algunos de un grupo creciente de extranjeros que se habían sentido inspirados por el espectáculo de la Revolución francesa. También estaban los patriotas holandeses que se habían visto obligados a huir de su país tras la derrota de su movimiento en 1787; el judío polaco Zalkind Hourwitz, que había competido con Grégoire en un concurso de ensayos sobre la emancipación judía en 1787; un periodista alemán, Konrad Oelsner, que se unió al Club Jacobino en 1790 y que tradujo los escritos de Sieyès a su lengua materna, y el oficial militar colonial español Francisco Miranda, que más tarde ayudaría a iniciar una corriente de independencia en su Venezuela natal. El poeta americano Joel Barlow había llegado en 1788 para poner en marcha un programa de especulación de terrenos, la Compañía Scioto, que atrajo la atención de Brissot y otros revolucionarios. La inglesa Helen Maria Williams, que se instaló en París en 1790, recibió a numerosos visitantes a lo largo de los años, entre ellos a la pionera feminista Mary Wollstonecraft y a Thomas Paine, a quien los revolucionarios franceses consideraban un héroe, por su contribución a la hora de difundir la historia de la independencia de Estados Unidos. A través de sus contactos personales, su correspondencia y sus publicaciones, los miembros de esta colonia extranjera en Francia ayudaron a propagar las ideas revolucionarias en el extranjero y alentaron a los revolucionarios franceses a creer que contaban con apoyo en otros países.

Los extranjeros prorrevolucionarios obtuvieron reconocimiento público cuando un grupo de ellos, vestidos con trajes exóticos, se presentó en la Asamblea Nacional el 19 de junio de 1790 y exigió participar en la Fiesta de la Federación. La delegación incluía «árabes, americanos, caldeos, indios» y representantes de más de una docena de países europeos. Su portavoz, un barón prusiano llamado Anacharsis Cloots, que se llamaba a sí mismo «el orador de la raza humana», los presentó como «hombres libres, cuyos países están encadenados, cuyas patrias serán libres algún día gracias a la influencia de su valor inquebrantable y sus leyes filosóficas».[21] La Asamblea les dio la bienvenida, pero no llegó a prometer ningún apoyo

concreto a los movimientos revolucionarios de otros países; sin embargo, el incidente subrayó la convicción de los revolucionarios franceses de que sus principios eran universales y animó a los activistas que esperaban transformar sus patrias. Muchos creían que Francia los apoyaría.

El mismo día que dio la bienvenida a la delegación de Cloots, la Asamblea votó para abolir la institución de la nobleza hereditaria y prohibir títulos como conde, barón y marqués. Su uso, afirmó Carlos de Lameth, un noble liberal, hermano de Alejandro, «ofende a la igualdad que constituye la base de nuestra Constitución; provienen del régimen feudal que habéis destruido». Lafayette y otros nobles prominentes lo apoyaron; sólo el abate Maury, el sacerdote contrarrevolucionario de origen plebeyo, trató de impedir la decisión. Maury protestó que las distinciones sociales eran un aspecto esencial de la vida francesa, y que «si deja de haber nobleza, deja de haber monarquía». El marqués de Ferrières trató de restar importancia a la medida, diciendo a su esposa que, tras la abolición de los derechos feudales el agosto anterior, «la nobleza había desaparecido a todos los efectos prácticos». En cualquier caso, continuó, el decreto era «absurdo, ya que no se puede impedir que un hijo descienda de su padre». Aunque prometió intentar convencer a los demás nobles de su provincia de que se sometieran a la nueva ley, se cubrió las espaldas y dio instrucciones a su esposa para «salvar nuestros títulos familiares [...] y ponerlos a buen recaudo».[22]

La medida de la Asamblea fue empujando a más miembros de la antigua clase privilegiada a dar el paso de marcharse de Francia. El fenómeno de la emigración de los nobles había comenzado durante el verano de 1789: inmediatamente después de la toma de la Bastilla, los cortesanos asociados al infructuoso esfuerzo de reemplazar a Necker, incluido el conde de Artois, el más joven de los dos hermanos de Luis XVI, se habían refugiado en el extranjero. Ante los levantamientos campesinos que siguieron a la caída de la Bastilla, muchos otros nobles también decidieron cruzar la frontera más cercana. Al principio, algunos revolucionarios aseguraron que «es bueno

para la nación ver huir a sus malos ciudadanos», pero al poco tiempo, empezaron a ver a los emigrantes como una amenaza para la Revolución.[23]

En septiembre de 1789, el conde de Artois se había instalado en Turín, la capital del reino de Saboya de su suegro en la frontera sudoriental de Francia. Allí, reunió a otros exiliados. Con la asistencia del exministro Calonne, que había huido cuando lo destituyeron en 1787 y que esperaba recuperar el favor real ayudando a restaurar la monarquía, Artois escribió a otros gobernantes europeos, a quienes explicó que Luis XVI no había actuado libremente al aparentar aceptar la Revolución. Instó a la acción militar para rescatar a la monarquía francesa. Emigrar tomó así la apariencia de un acto deliberadamente contrarrevolucionario para frenar la voluntad del pueblo francés. A mediados de 1790, numerosos oficiales militares y miembros aristocráticos del alto clero se habían unido a la emigración. El príncipe de Condé, otro miembro de alto rango de la familia real, se había instalado en la ciudad alemana de Coblenza. Comenzó a organizar a los oficiales *émigrés* en un ejército, mientras que el clero que se había marchado se dedicó a animar la oposición a las reformas eclesiásticas de la Asamblea Nacional. Este ajetreo de emigrantes avergonzaba a Luis XVI, que actuaba como si aceptara la Revolución mientras esperaba en privado que los propios conflictos internos del movimiento terminaran con él. Instó a Artois y a Condé a que regresaran al país, pero ignoraron sus instrucciones, lo que llevó a otros a sospechar que el rey aprobaba secretamente sus acciones. Dentro del país, los nobles descontentos tomaron la iniciativa de organizar su propia federación contrarrevolucionaria en una ciudad llamada Jalès, en el departamento meridional del Gard, cerca de Nimes, donde había estallado la violencia religiosa a principios de año. Los informes sobre este «campo de Jalès» aumentaron los temores de los patriotas a las tramas contrarrevolucionarias.

El ejército francés fue una de las instituciones más afectadas por la creciente desconfianza entre plebeyos y antiguos nobles. Los puestos de oficiales en el ejército y la marina prerrevolucionarios habían sido casi exclusivamente para los aristócratas; para los soldados y marineros ordinarios era imposible ascender a posiciones más altas. La promesa de

«carreras abiertas a los talentos» proclamada en los decretos del 4 de agosto y la Declaración de Derechos apelaba a los plebeyos en el ejército, pero ofendía a sus superiores, que veían cómo la profesión de caballero se abría a competidores menos educados y sofisticados. La moral del ejército también se vio socavada por la creación de la Guardia Nacional, cuyas reivindicaciones de ser los verdaderos patriotas a menudo ofendían a los soldados profesionales de la infantería. Además, los guardias nacionales a menudo estaban mejor pagados que los soldados regulares. El creciente número de oficiales nobles que abandonaban sus puestos para unirse al ejército de emigrantes de Condé hacía que aumentara la desconfianza hacia los que se quedaban. El *Révolutions de Paris* justificaba la resistencia que los soldados mostraban a menudo a sus superiores y se preguntaba: «¿No ocupan los nobles privilegiados todos los puestos de oficiales? ¿Debe uno pensar que son leales a la Revolución?».[24]

La gravedad de las tensiones entre soldados y oficiales se hizo evidente el 31 de agosto de 1790, cuando se inició un motín entre las tropas en la guarnición de Nancy, un importante bastión militar cerca de la frontera con el territorio austriaco. Durante meses, los soldados de Nancy se habían quejado de que no recibían su paga completa; además, decían que se castigaba injustamente a los hombres que protestaban. Los soldados encontraron apoyo entre las autoridades locales, pero las denuncias de insubordinación de los soldados llevaron a la Asamblea Nacional de París a ordenar a un general aristócrata, François Claude Amour, marqués de Bouillé, que reuniera una unidad de soldados leales y aplastara los disturbios. Cuando su expedición de cinco mil hombres se acercó a la ciudad, los soldados del regimiento de Châteauvieux se prepararon para defenderse y entregaron armas del arsenal de Nancy a sus partidarios civiles. Hubo trescientas bajas en las fuerzas de Bouillé; y probablemente, las pérdidas del lado de los rebeldes fueron mayores. El consejo de guerra que se celebró a continuación dio lugar a veintitrés ejecuciones y a la condena de varias docenas de soldados a largas penas de prisión en las galeras. A la mayoría de la Asamblea Nacional le parecía que la pérdida de vidas y la severa represión eran el precio que había que pagar para

restablecer la disciplina en el ejército; el rey y la reina felicitaron con entusiasmo a Bouillé. Sin embargo, para los radicales democráticos como Robespierre y el periodista Marat la línea dura que se había adoptado contra los soldados era deplorable.

Menos sangriento que el conflicto de Nancy, pero igualmente inquietante fue el motín naval que tuvo lugar en septiembre en la flota atlántica francesa en la ciudad portuaria de Brest, en Bretaña. Fieles a sus tradiciones, los miembros del aristocrático cuerpo de oficiales de la marina enfurecieron a sus tripulaciones al oponerse a sustituir la bandera blanca de la dinastía borbónica por la nueva tricolor de la nación. Además, los oficiales rechazaron las propuestas de abrir sus filas a los capitanes mercantes, quienes, en su opinión, habían hecho sus carreras persiguiendo el beneficio en lugar de tener como «único objetivo la gloria», como dijo un capitán veterano.[25] Los marineros protestaron contra el mantenimiento de las severas regulaciones disciplinarias del antiguo régimen y se negaron a acatar las órdenes de navegar hacia el Caribe, una asignación impopular que podía significar estar lejos de casa durante más de un año. El gobierno de la ciudad de Brest desconfiaba de los oficiales navales aristócratas, de modo que se puso del lado de los hombres y alentó su movimiento. Los amotinados se entusiasmaron aún más con la llegada desde Saint-Domingue del buque de guerra *Léopard*, cuya tripulación se había alineado con la Asamblea Colonial cuando el gobernador real se había opuesto a su exigencia de una mayor autonomía respecto de Francia. Convencidos de que los colonos blancos eran patriotas cuyos derechos estaban siendo pisoteados, los marineros del *Léopard* echaron a su capitán, subieron a 85 miembros de la Asamblea Colonial a bordo y los llevaron a Francia para que pudieran elevar su queja ante la Asamblea Nacional. Mientras los diputados coloniales se dirigían a París, los marineros del *Léopard* animaron a los demás marineros de la flota a enfrentarse a sus oficiales. El Club Jacobino local les prometió que se revocaría el impopular reglamento disciplinario, y la Asamblea Nacional decidió que no tenía otra alternativa que ceder a sus demandas. Igual que había ocurrido con la revuelta de Nancy, el motín de Brest reveló la profunda desconfianza que había entre

los oficiales y los hombres de rango inferior y planteó serias dudas sobre el control que tenía el gobierno revolucionario sobre los militares.

Para el viajero alemán Gerhard-Anton Halem, uno de los muchos extranjeros que fue a París atraído por el extraordinario espectáculo de la Revolución, la reacción de la Asamblea Nacional al motín naval fue la ocasión perfecta para ver cómo funcionaba el nuevo sistema político francés. Cuando llegó a principios de octubre de 1790, Halem, un apasionado del teatro, ya sabía que la Asamblea Nacional era la mejor obra que se representaba en la ciudad. Se podía entrar a las galerías de espectadores de forma gratuita, pero para tener un buen asiento había que llegar antes de las seis y media de la mañana a la Manège, la antigua escuela de equitación convertida en sala de reuniones de los diputados después de los Días de Octubre de 1789. El 20 de octubre, los patriotas aprovecharon la crisis de la marina para exigir al rey que despidiera a sus ministros, a los que acusaron de permanecer deliberadamente inactivos para dejar que la anarquía aplastara la Revolución. A Halem le impresionó mucho Barnave, de quien dijo que «combinaba energía y precisión con facilidad y elegancia en sus discursos». Pero también alabó la elocuencia del diputado conservador Jacques Cazalès, que defendió el derecho del rey a elegir a sus propios ministros. Halem, que procedía de un principado alemán donde, como en el resto de Europa en esa época, no se conocía el debate público sobre la política, se quedó asombrado no sólo por la actuación de los diputados, sino también por la participación activa de los espectadores. Interrumpían constantemente a los oradores con aplausos y murmullos. También destacó la presencia de los periodistas, que ya tenían una zona reservada para ellos detrás de la mesa del presidente. Desde allí, tomaban nota de lo que decían los diputados y de la reacción en las galerías.[26]

Después de ocho horas de debate, la Asamblea tumbó un ataque a los ministros por parte de los diputados de la derecha. Pero Halem pronto se enteró de que ésta no era la última palabra sobre el asunto. Pudo ver que la

población de la ciudad se interesaba activamente por la política: visitó el Palais-Royal, el centro de la discusión pública, y oyó hablar a un orador que denunciaba la distinción entre ciudadanos activos y pasivos como una violación del principio de igualdad, porque impedía que las clases bajas influyeran en las decisiones. Oyó a otro «hombre bien vestido que leía largos pasajes del *Ami du peuple*, llenos de invectivas contra los ministros, a una multitud atenta», y observó el impacto que tenían los periódicos de la tarde, que publicaban resúmenes de los debates parlamentarios del día a las pocas horas de terminar las sesiones de la Asamblea. Aunque probablemente estaría agotado, a las seis de la tarde Halem se unió a otras mil personas que estaban dispuestas a escuchar más diatribas en la reunión de los jacobinos. Mientras observaba los polvorientos volúmenes de teología que llenaban las paredes de la sala de reuniones, Halem pensó que los autores de aquellos tomos «temblarían horrorizados» si hubieran oído los discursos de los políticos revolucionarios. En la lectura de las cartas de los clubes jacobinos provinciales que abrieron la sesión, se dio cuenta de que el club estaba construyendo una red nacional. Después de oír hablar a las estrellas de la izquierda revolucionaria, incluidos Mirabeau, Barnave, los hermanos Lameth y Robespierre, Halem se fue a casa convencido de que la sesión del club había dado a los diputados de izquierda, que habían perdido temporalmente en la *journée* anterior, «un nuevo entusiasmo» para volver a la lucha.[27]

En 1790, ser miembro del Club Jacobino todavía estaba limitado a hombres bastante ricos y respetables. Los aspirantes tenían que tener la recomendación de algún miembro y pagar unas cuotas equivalentes a varios días de salario de un trabajador común. No todos compartían la idea de Halem de que este requisito hacía que los debates del club fueran sensatos. William Miles, otro visitante extranjero al que invitaron a hablar ante los jacobinos sobre la postura de la política británica con respecto a la Revolución, reconoció que los miembros le habían escuchado con interés, pero seguía desconcertado por su «efervescencia salvaje y peligrosa»; temía que los jacobinos «pudieran provocar pronto una reacción que inundara de sangre el país».[28] Aunque tenían dudas sobre los jacobinos, los dos

visitantes extranjeros se dieron cuenta de que a los moderados les resultaba difícil competir con ellos. Un grupo más elitista fundado a principios de 1790, el Club de 1789, nunca había conseguido atraer a un grupo de seguidores populares. Este club reunía a celebridades de los primeros meses de la Revolución, como Sieyès, Lafayette, Mirabeau y Condorcet, que estaban preocupados por el creciente radicalismo de la Revolución. En el otoño de 1790 sus miembros habían regresado a los jacobinos con la esperanza de volver a tener algo de influencia allí. Las reuniones de un club abiertamente monárquico, los Amis de la Constitution monarchique (Amigos de la Constitución Monárquica), se vieron acosadas por los partidarios de la Revolución, que denunciaban sus intentos de ganar el apoyo de los miembros de la clase baja repartiendo pan a precios inferiores a los del mercado y alentando a atacar las tiendas que vendían productos británicos importados.

Tanto Halem como Miles lo comprendieron enseguida: «Ahora estamos en la época de los clubes» –como dijo el librero parisino Nicolas Ruault, él mismo miembro jacobino–, y decidieron visitar otra reunión mucho menos exclusiva del Cercle des amis de la vérité (Círculo de los Amigos de la Verdad). Las sesiones públicas semanales de este grupo, que se celebraban en la arena del circo del Palais-Royal, atraían a cuatro mil o más personas. Mientras que los jacobinos se centraban en las cuestiones políticas a las que tenía que enfrentarse la Asamblea Nacional, los miembros del círculo mantenían vivo el espíritu utópico que había inspirado a la Sociedad Franco-Americana de Brissot en 1787. Soñaban con rehacer el universo y crear una nueva religión de la humanidad. Los fundadores del círculo fueron Nicolas Bonneville, un místico religioso con creencias democráticas, y el sacerdote radical Claude Fauchet, que predicaba un Evangelio que combinaba elementos del cristianismo con ideas elevadas sobre la fraternidad humana universal. Halem reconoció algunas de las ideas de Fauchet, que provenían del mundo masónico. La Revolución francesa, afirmaba Fauchet, era el comienzo de una nueva era: «Se acerca el momento de levantar el velo del misterio con seguridad, cuando los Prometeos que han mantenido viva la llama celestial den vida a la estatua

de la humanidad». Un periodista parisino se sorprendió por «esta mezcla de frases apocalípticas, expresiones orientales, parábolas judías, términos políticos y palabras de amor, unidas de forma poética», pero admitió que «asombró maravillosamente a la audiencia».[29]

El club, que después se llamaría Círculo Social, absorbió a los miembros antiesclavistas de la Sociedad de Amigos de los Negros y se abrió a nuevas ideas sobre el papel público de la mujer. En marzo de 1791, la holandesa Etta Palm d'Aelders, una de las militantes que trabajaba para cambiar las relaciones entre los sexos, felicitó al grupo por haber sido «el primero en admitirnos en las sesiones patrióticas». Utilizó su plataforma para pedir la creación de una red nacional de clubes de mujeres que defendiera la Revolución vigilando a sus enemigos; además, se encargaría de las tareas que antes realizaban los establecimientos religiosos, como la regulación de las nodrizas, la escolarización de los niños pequeños y la distribución de ayuda a los pobres.[30]

Los visitantes extranjeros también encontraban el camino hacia el más radical de los clubes de París, los Cordeliers. Desde sus orígenes en 1789 como asamblea de distrito en un barrio poblado por periodistas, trabajadores de imprenta y actores del cercano Théâtre français (hoy conocido como el Odéon, sigue siendo un hito del paisaje parisino), este grupo acabó teniendo reputación de ser «el terror de la aristocracia y el refugio de los activistas políticos oprimidos de la capital», según la descripción de un periodista radical. El primer presidente de los Cordeliers fue Georges Danton, un abogado cuyas habilidades oratorias se compararon a menudo con las de Mirabeau, aunque a muchos jacobinos los principios democráticos radicales de Danton les parecían «absolutamente imposibles en una gran ciudad como París». Los periodistas Marat y Desmoulins también eran miembros activos, y cuando Marat se enfrentó a las autoridades municipales en 1790, los Cordeliers le ayudaron a esquivar a la policía. «Unas trescientas personas de ambos sexos llenaron el lugar», informó un visitante del club. «Su ropa era tan descuidada y tan sucia que se podría confundir con una reunión de mendigos. La Declaración de los Derechos del Hombre estaba pegada en la pared, coronada por dagas

cruzadas. Se colocó un busto de yeso de Bruto a un lado y uno de Guillermo Tell al otro, como para proteger expresamente la Declaración».[31] El símbolo del club era un ojo que lo veía todo, la señal de la vigilancia que sus miembros pretendían ejercer en nombre del pueblo.

Una red de «sociedades fraternales» extendió la influencia de los Cordeliers. Se habían fundado originalmente para explicar los principios de la Revolución a los miembros incultos de las clases bajas, a quienes los jacobinos excluyeron firmemente de sus sesiones. Facciones políticas de todo tipo trataron de llegar al pueblo a través de folletos y periódicos baratos atribuidos al ficticio Père Duchêne y a otros personajes similares. Durante los primeros meses de 1791 hubo una profusión de panfletos atribuidos a «Mère Duchêne», cuya vigorosa voz coincidía con la de su voluble marido. Entre los periodistas más diligentes que elaboraban esta literatura populista estaba Jacques-René Hébert, hijo de una familia burguesa provinciana. Hébert había arruinado su futuro por un complicado escándalo sexual y antes de la Revolución se ganaba la vida en el mundo marginal del teatro de París. No era el más imaginativo de los periodistas de *Père Duchêne*, pero desarrolló un instinto político que no tenían sus competidores. En poco tiempo, convirtió su periódico en una verdadera fuerza como representante de la gente común.

La «época de los clubes» no se limitaba a París. A finales de 1790, todas las ciudades francesas, del tamaño que fueran, tenía al menos un grupo político; unas sesenta ciudades tenían clubes para mujeres. La locura de los clubes llegó incluso a las colonias, donde los patriotas locales de Cap Français, la ciudad más grande de Saint-Domingue, se reunían para denunciar a los funcionarios reales; después de sus reuniones, «salían insuflados de fuego divino», según un relato periodístico.[32] Los clubes jacobinos provinciales atraían a los funcionarios locales, periodistas, agremiados y oficiales militares; igual que en París, exigían el pago de cuotas para afiliarse, lo que desalentaba a los artesanos y trabajadores. Además de mantener a sus miembros al corriente de la evolución política de la capital, los clubes provinciales se encargaban de mantener bajo estrecha vigilancia a las autoridades locales –tanto a las que habían ganado las

elecciones municipales a principios de 1790 como a los funcionarios departamentales elegidos más tarde ese mismo año– y denunciaban al club de París cualquier señal de «aristocratismo».

La difusión del movimiento jacobino reflejaba una fuerte corriente de apoyo a la Revolución en la mayor parte del país, a pesar de las muchas controversias que surgían de sus reformas. Las protestas podían proceder tanto de grupos que querían llevar el movimiento aún más lejos como de opositores conservadores. Entre los primeros estaban los campesinos, en particular los que se negaban a pagar compensaciones por los derechos feudales abolidos; los demócratas radicales del Club de los Cordeliers, y algunos blancos de las colonias, que se proclamaban «patriotas» aunque exigían mayor autonomía y protección para la esclavitud. Incapaces de establecer un club público para contrarrestar a los jacobinos, los que se oponían a la Revolución se apoyaban en redes informales de antiguos nobles, clérigos y sus partidarios. Sin embargo, los contrarrevolucionarios demostraron ser tan hábiles en el uso de la prensa como sus oponentes. Las primeras publicaciones periódicas monárquicas se habían especializado en la sátira y lanzaban ataques personales contra los principales revolucionarios; de hecho, en esos años las fuerzas contrarrevolucionarias tenían más probabilidades que los partidarios de la Revolución de señalar a determinados políticos e incitar a la violencia contra ellos. En 1790 los monárquicos ya contaban con periódicos que seguían los debates de la Asamblea Nacional tan de cerca como sus rivales prorrevolucionarios, aunque uno de sus editores se quejaba de que hacerlo era una «tarea verdaderamente triste y humillante». No se trataba más que de registrar «asaltos, incendios, asesinatos, estragos, encarcelamientos, actos de venganza atroces», escribió.[33]

A pesar de la vehemencia de su lenguaje, las revistas contrarrevolucionarias carecían de una perspectiva filosófica coherente que estuviera a la altura de las ideas que los revolucionarios habían heredado de los *philosophes*. La crítica más convincente en contra de la Revolución en

sus primeras fases no provino de un polemista francés, sino del político y publicista británico Edmund Burke, que publicó sus *Reflections on the Revolution in France (Reflexiones sobre la Revolución de Francia)* en noviembre de 1790. Burke había seguido de cerca los acontecimientos en Francia durante muchos años. Conocía las debilidades de la antigua monarquía, pero estaba convencido de que deberían haber reformado sus instituciones en lugar de destruirlas por completo. «Empezasteis desde un error, porque empezasteis por despreciar todo lo que era vuestro», dijo a los franceses. Sobre todo, criticó a los revolucionarios por tratar de crear un sistema completamente nuevo basado en principios filosóficos abstractos definidos por la razón. En opinión de Burke, la razón humana era demasiado falible para servir de guía en la política y la sociedad era demasiado compleja para rehacerla de la noche a la mañana. «Tenemos miedo de poner a los hombres a vivir y comerciar cada uno con su propia reserva de razón, porque sospechamos que la reserva de cada hombre es pequeña», escribió. «La naturaleza del hombre es intrincada; los elementos de la sociedad son de la mayor complejidad posible».[34]

La teoría de los derechos naturales, en opinión de Burke, estaba destinada a conducir a una anarquía destructiva. «Su perfección abstracta es su defecto práctico», insistió. El verdadero propósito del gobierno era satisfacer los deseos o las necesidades humanas, y «entre estos deseos está el que se reconozca el deseo [...] de una restricción adecuada de sus pasiones», lo cual requería una autoridad que pudiera hacer frente a la opinión pública en lugar de seguir sus dictados. El ejercicio de tal autoridad se hacía tolerable, según Burke, por los rituales y creencias consagradas por el tiempo, como el carácter sagrado de la monarquía, aunque estuvieran en la categoría de «ilusiones agradables». Su indignación alcanzó su punto más alto en un célebre pasaje sobre el asalto a María Antonieta durante los Días de Octubre de 1789: «Creí que diez mil espadas hubieran saltado de sus vainas para vengar incluso una mirada que la amenazara de forma insultante», escribió. «Pero la era de la caballerosidad se ha terminado. La de los sofistas, economistas y calculadores ha tenido éxito; y la gloria de Europa se ha extinguido para siempre».[35] Convencido de que los principios

de la Revolución contradecían las realidades de la vida social, Burke predijo que los franceses acabarían ejecutando a su rey; que su nuevo papel moneda, el *assignat*, perdería su valor, y que sucumbirían a una dictadura militar; profecías que finalmente se cumplieron.

La verdadera audiencia de Burke estaba en Gran Bretaña: él quería sobre todo contrarrestar el entusiasmo de muchos reformistas de allí que veían en la Francia revolucionaria un modelo a imitar. Su logro duradero fue fundar una tradición de filosofía política conservadora que ha perdurado hasta nuestros días. En ese momento, sin embargo, la mayoría de las reacciones a las *Reflections* de Burke fueron negativas. La obra se consideraba un escándalo, no sólo por sus denuncias de la razón y la democracia, sino porque parecía repudiar los propios principios de Burke. «A Burke lo habían admirado fervientemente los más abiertos e ilustrados amigos de la libertad», escribió el teórico libertario británico William Godwin, «y ellos se sintieron indignados y disgustados, en igual medida, por la furia de su ataque a lo que consideraban su causa sagrada». Godwin intentaba explicar por qué su esposa, la pionera feminista Mary Wollstonecraft, se había precipitado a la imprenta para refutarlo. Burke había defendido la Revolución americana y había denunciado la corrupción del sistema político británico; en los años anteriores a la Revolución francesa, había luchado en una solitaria campaña contra los abusos en la administración de los establecimientos británicos en la India. «Es imposible imaginar que el señor Burke haya deshonrado su propio juicio en la creación de esta obra», opinó Brissot en su periódico.[36]

En los últimos meses de 1790 y la primera parte de 1791, los partidarios franceses tenían una preocupación mucho mayor que la polémica de Burke. Se trataba de una nueva fase del conflicto sobre la reforma de la Iglesia que acrecentó aún más la desconfianza entre partidarios y oponentes de la Revolución. La Asamblea Nacional había asumido que los sacerdotes aceptarían la Constitución Civil pacíficamente, pero el 30 de octubre, más de ciento veinte diputados clericales firmaron un documento de protesta por

sus disposiciones sobre la elección de obispos y la redefinición de las diócesis. Esta postura de los líderes de la Iglesia alentó a los párrocos locales a resistirse a la aplicación de la reforma, lo que a su vez provocó que las autoridades locales de las regiones anticlericales tomaran medidas más fuertes para hacerla cumplir. «Ya nadie puede dudar de que la mayoría de los obispos han formado una liga sediciosa para encender la antorcha del fanatismo en todas partes e intentar empezar así una contrarrevolución», afirmaban los administradores del departamento de Bouches-du-Rhône.[37]

La mayoría patriota de la Asamblea Nacional vio toda su labor en peligro como resultado de la resistencia a la Constitución Civil. Entre otras cosas, las protestas religiosas amenazaban con perturbar la venta de las propiedades de la Iglesia, en las que habían depositado sus esperanzas para salir del abismo financiero que había precipitado la Revolución. El 26 de noviembre de 1790, uno de los diputados, Jean-Georges-Charles Voidel, leyó un largo catálogo de incidentes en los que los miembros del clero se habían opuesto a la legislación que afectaba a la Iglesia. Advirtió a los miembros recalcitrantes del clero: «Ahora todos los ciudadanos del imperio deben inclinar sus cabezas ante la majestad de las leyes», y les exhortó a «pacificar al pueblo, irritado por su resistencia, a una pronta sumisión». A instancias suyas, la abrumadora mayoría de los diputados votaron a favor de exigir a todos los sacerdotes y obispos que quisieran permanecer en sus puestos y seguir cobrando sus salarios que hicieran un juramento público de obediencia a la nueva Constitución nacional y a las nuevas leyes que regían la Iglesia. Cuando algunos diputados que representaban al clero trataron de conciliar la Constitución Civil con sus conciencias declarando que obedecerían sus disposiciones salvo en lo que respecta a las «cuestiones espirituales», la Asamblea insistió en que todos los juramentos tenían que ser «puros y simples», sin ningún lenguaje calificativo.[38]



El juramento del clero. Este grabado, publicado en 1791, capta las divisiones que surgieron por la polémica sobre el juramento del clero. Varios hombres vestidos como respetables burgueses provinciales usan cuerdas y poleas para hacer que un sacerdote levante las manos, mientras que los jóvenes monaguillos y algunas mujeres mayores miran consternados. Dos guardias nacionales uniformados, con sus mosquetes en la mano, observan el proceso con satisfacción, y dos mujeres jóvenes y guapas sonríen a los soldados. Dos caballeros mayores, que parecen ser *cidevant* (antiguos) nobles, no parecen contentos. El papel prominente de las mujeres en este cuadro correspondía a la realidad: los observadores destacaron que las mujeres de la congregación a menudo tomaban la delantera en la oposición al juramento. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

Desde el punto de vista legal, sólo los curas y vicarios que realmente dirigían los servicios de la Iglesia tenían que decidir si hacían el juramento, pero su grey a menudo tenía una influencia clave en las decisiones que tomaban. Las ceremonias públicas en las que los sacerdotes aceptaban o rechazaban la ley eran a menudo momentos explosivos, como ilustra un grabado titulado *Un nuevo método para hacer que los curas presten juramento*.

En todo el país, algo más de la mitad de los cincuenta mil clérigos de las parroquias prestaron juramento al principio; se les llamaba *jureurs* (juramentados), o «clérigos constitucionales». El porcentaje, sin embargo, variaba mucho de una región a otra. Los juramentados eran una clara mayoría en casi todos los departamentos de la cuenca de París y en el sudeste, entre el río Ródano y la frontera alpina, y en partes del sudoeste, donde un católico conservador observó amargamente: «La mitad de la diócesis prestará el juramento porque el interés propio, el vil interés propio, es el gran motor».[39] «El clero refractario» o los *non-jureurs* (no juramentados) –aquellos que se negaron a aceptar los nuevos arreglos– dominaban en el oeste de Francia, la región montañosa del centro-sur del país, y en los departamentos periféricos del norte, este y sudoeste. La ajustada división entre partidarios y opositores intensificó el conflicto. Si una clara mayoría general del clero hubiera aceptado la Constitución Civil, quizá hubiera habido menos presión para obligar a los recalcitrantes a alinearse; si sus oponentes hubieran tenido una ventaja convincente, la Asamblea podría haber tenido que modificar su política. Pero la situación era que ninguna de las partes estaba dispuesta a conceder la victoria a la otra. El alto clero fuertemente aristocrático, que perdía mucho más con la reforma que los sacerdotes ordinarios, era abrumadoramente hostil a la Constitución Civil. Debido a estas divisiones, la cuestión de quién ordenaría a los nuevos sacerdotes y obispos adquirió todavía más relevancia.

El discurso a ambos bandos de la controversia del juramento era acalorado. Para los que se oponían a la reforma, estaba en peligro el propio catolicismo, y se estaban suprimiendo los derechos básicos de sus seguidores. En este asunto, las mujeres estaban tan divididas como los hombres. En París, según Adrien Colson, «las mujeres del mercado castigaban a las Hermanas Grises y a las monjas de Miramiones como si fueran niñas», las azotaban públicamente en las nalgas desnudas. «El crimen de las hermanas había sido enseñar a sus alumnos un catecismo de odio, desprecio y revuelta contra el clero que había prestado juramento [...] y el de las monjas fue insultar y maltratar a su nuevo cura». Los opositores políticos de la Revolución aprovecharon la oportunidad para poner a los

católicos en contra de todo el movimiento. Gaston de Lévis, que siempre había tenido al hermano del rey, el conde de Provenza, por un convencido de las ideas de la Ilustración, comentó irónicamente que el príncipe se había convertido repentinamente en un experto en la ley de la Iglesia: «Conoce todos los pasajes de los concilios eclesiásticos, me aburre hasta el punto de hacerme llorar con las citas evangélicas […]. No hay un sacerdote refractario que sepa más sobre la Constitución Civil y sus defectos». Pero Lévis también entendió que la venta de las tierras de la Iglesia había hecho que surgieran muchos partidarios de la Constitución Civil. «Cada acre vendido produce un converso, y un hombre que no se deje conmover por la libertad o por la intriga luchará como un héroe para salvar su acre», escribió. Los partidarios de la Constitución Civil acusaron a sus oponentes de «predicar desde el púlpito de la paz y la verdad la mentira y los principios del fanatismo»; exigieron que «los culpables se entregaran a la venganza de las leyes».[40] Sorprendidos por el número de sacerdotes que se negaron a prestar juramento, las autoridades locales tuvieron que luchar para encontrar sustitutos, y a menudo estalló la violencia cuando las congregaciones se negaron a permitir que estos «intrusos» tomaran posesión de sus iglesias.

Las autoridades locales se vieron arrastradas a la disputa del juramento, ya fuera al intentar hacer cumplir la ley ante la resistencia, ya porque ellos mismos simpatizaban con los sacerdotes no juramentados y querían evitar tener que tomar medidas contra ellos. Cuando Talleyrand y Jean-Baptiste-Joseph Gobel, los dos únicos obispos de la Asamblea Nacional que habían aceptado prestar el juramento, tomaron la iniciativa de consagrar nuevos obispos según los procedimientos establecidos en la Constitución Civil, el papa Pío VI rompió el cauteloso silencio que había mantenido sobre el tema. Su condena de la Constitución Civil y su amenaza de suspender a los sacerdotes que habían hecho el juramento profundizó el conflicto en Francia y llevó a algunos clérigos a retractarse de los juramentos que habían hecho.

Nadie se angustió más por el conflicto causado por la Constitución Civil que Luis XVI. Aunque apoyó a regañadientes tanto la Constitución como el juramento clerical, el desagrado que le producía la política religiosa de la Asamblea le llevó a considerar las propuestas que se le presentaron en secreto en el otoño de 1790 para organizar su huida de París. María Antonieta estaba igualmente decidida a ver a su marido y a la familia real liberados de su humillante y peligrosa situación, aunque significara pedir ayuda a otras potencias europeas, en particular a su hermano Habsburgo, Leopoldo II. Leopoldo había heredado el trono a la muerte de su hermano José II a principios de 1790. Desde la perspectiva de la familia real francesa, la situación en París se estaba volviendo cada vez más extrema en los primeros meses de 1791. Cuando las dos ancianas tías del rey intentaron abandonar el país en febrero, las autoridades locales las detuvieron en el camino. Fue necesario que interviniera Mirabeau de forma contundente para que las liberaran y les permitieran continuar su viaje. El 28 de febrero, el rumor de que el monarca estaba en peligro inspiró a varios centenares de monárquicos a precipitarse a las Tullerías para defenderlo, lo que provocó la reacción de los patriotas, que exigían una vigilancia más estrecha del palacio. La oposición del rey a la Constitución Civil provocó otro enfrentamiento el 18 de abril, un día después de que Luis XVI mostrara su oposición al juramento religioso comulgando con un sacerdote no juramentado. Cuando la familia real intentó viajar al palacio de Saint-Cloud, a las afueras de París, una multitud bloqueó el carruaje durante varias horas; los guardias nacionales, que velaban por su seguridad, se unieron a la manifestación, diciendo que «el amigo de nuestros enemigos no puede ser nuestro amigo». «Ya han visto que no somos libres», dijo María Antonieta a los soldados cuando volvió a entrar en el palacio.[41]

El 11 de abril, la administración departamental de París intentó llegar a un acuerdo en el asunto religioso y anunció que permitiría a los sacerdotes no juramentados alquilar edificios de la Iglesia que no estuvieran en uso para poder celebrar servicios sancionados oficialmente por sus colegas «constitucionales». El domingo siguiente, una multitud hostil se reunió frente al «sanedrín aristocrático», donde se había anunciado una reunión de

este tipo e impidió que se celebrara la misa. El incidente alarmó incluso a algunos de los más firmes partidarios de la Constitución Civil en la Asamblea Nacional. Talleyrand, que había prestado juramento y había desafiado al Papa consagrando nuevos obispos constitucionales, recordó a los diputados la promesa de libertad religiosa consagrada en la Declaración de Derechos, pero los diputados más radicales no estaban dispuestos a apoyar ningún compromiso sobre la cuestión. «Si se permite esta excepción», dijo el diputado Jean-Denis Lanjuinais, «la ley del juramento que nos ha costado tantos problemas, tantas perplejidades, tantos millones y sobre todo tanta ansiedad [...] habrá sido inútil».[42]

En la primavera de 1791, a medida que las autoridades locales se enredaban cada vez más en las disputas causadas por la Constitución Civil y el juramento, los diputados de la Asamblea Nacional estaban a punto de caer agotados. Durante casi dos años, se habían reunido diariamente, tanto para elaborar la nueva Constitución como para tratar los innumerables problemas inmediatos a los que se enfrentaba el gobierno. El exceso de trabajo, combinado con la extravagante vida privada que llevaba, fueron los motivos de la muerte prematura del gran orador Mirabeau el 2 de abril. Los esfuerzos de Mirabeau por crear una monarquía fuerte que defendiera la libertad individual y la igualdad social habían socavado su influencia respecto a los jacobinos más radicales, pero su poderosa personalidad le había convertido en la única figura que todavía podía frenar sus impulsos más peligrosos sin que le acusaran de ponerse del lado de la contrarrevolución. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Mirabeau fue incapaz de convencer al rey y a la reina de que acataran sinceramente la nueva Constitución. Sin su apoyo, su visión de una monarquía democrática no podía realizarse.

Cuando se difundió la noticia de la enfermedad de Mirabeau, la calle frente a su casa se cubrió de paja para que no le molestara el ruido de las ruedas de los carruajes. Sin embargo, el moribundo «oyó a todo el pueblo hablar de su enfermedad como un acontecimiento que amenazaba la Revolución», escribió un periodista. Para honrar a Mirabeau, la Asamblea Nacional decidió convertir la enorme iglesia abovedada de Santa Genoveva,

que Luis XV había mandado construir en la colina que domina el Barrio Latino de París, en un Panteón, un monumento secular a la memoria de los «grandes hombres» que habían servido a la nación. Antes, sólo recibían semejantes honores públicos los reyes y las reinas franceses, enterrados en elaboradas tumbas en la basílica de Saint-Denis al norte de París. Con el Panteón, que sigue siendo uno de los monumentos nacionales de Francia, la Revolución creó su propia forma de conferir la inmortalidad a sus héroes. En el pueblo de Meudon, donde se había establecido y se había unido al Club Jacobino local, Jean-Marie Goujon pronunció un panegírico de Mirabeau. Fue «tan bello y tan lleno de un patriotismo cálido» que el municipio lo hizo publicar, lanzando así a Goujon a una carrera política. Con su estatura –sacaba una cabeza a la mayoría de los franceses de la época–, con esa «apariencia majestuosa y su actitud decidida», según su íntimo amigo Pierre-François Tissot, Goujon empezaba a descubrir ahora que poseía las cualidades para alentar activamente el espíritu revolucionario.[43]

A la muerte de su compañero de lucha, Mirabeau, los triunfadores jacobinos, Barnave, Duport y Alexandre Lameth y los aliados de éstos se hicieron cargo de su política de intentar frenar el creciente radicalismo de la Revolución y evitar la destrucción total del poder real. Durante la primavera, pusieron en marcha una serie de medidas destinadas a mantener a los miembros más pobres de la sociedad, los ciudadanos pasivos, fuera de la política. Los enfrentamientos con los artesanos y con los trabajadores urbanos aumentaron después de que la Asamblea se ocupara de la cuestión de los gremios urbanos y las organizaciones de trabajadores, las instituciones que habían desempeñado un papel tan importante en la vida prerrevolucionaria de Jacques Ménétra y otros artesanos. Los reformadores económicos habían condenado durante mucho tiempo a los gremios que veían como obstáculos a la libre empresa, y Turgot había querido eliminarlos en 1776. Sin embargo, el 4 de agosto de 1789, los diputados no se habían atrevido a acabar con las organizaciones que tradicionalmente

habían mantenido a los trabajadores urbanos bajo control. A lo largo de 1790, el estatus de los gremios permaneció sin resolver. Muchos jornaleros, todavía bajo el yugo de sus amos, reclamaban ahora el derecho a establecer sus propias tiendas, y los empresarios comerciales, que ya habían encontrado maneras de evitar los privilegios de los gremios antes de 1789, se envalentonaron para ignorarlos abiertamente. Cuando la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley de impuestos laborales que permitía explícitamente a cualquier ciudadano ejercer cualquier profesión, los miembros se dieron cuenta de que tenían que tomar una decisión. El 2 de marzo de 1791, los diputados abolieron los gremios. «Esta disposición debe considerarse uno de los mayores beneficios que la legislatura ha proporcionado hasta ahora a la nación», proclamó un periódico. «Los gremios [gozaban] de privilegios exclusivos que privaban a la gran mayoría de los ciudadanos de uno de los principales derechos del hombre, el de trabajar […]. Todos los hombres tendrán los medios para hacer uso de sus habilidades; no necesitarán grandes sumas para establecerse».[44]

Los gremios habían sido órganos corporativos legalmente reconocidos que incluían tanto a empleadores como a empleados. Su abolición planteó la cuestión del estatus de las demás organizaciones de trabajadores, como la sociedad a la que pertenecía Ménétra. En la mente de los diputados, estas entidades –a través de las que los trabajadores trataban de imponer a los empleadores tarifas salariales normalizadas, a veces mediante huelgas– eran aún más peligrosas que los gremios. Tres meses después de la ilegalización de los gremios, el diputado Isaac-René-Guy Le Chapelier, originalmente uno de los agitadores del Tercer Estado de Bretaña, presentó una ley extraordinariamente dura contra ellos. «No se debe permitir que se reúnan los ciudadanos que ejercen una profesión particular por unos supuestos intereses comunes», afirmó. «No hay más intereses de grupo dentro del Estado, sólo hay intereses privados de los individuos y el interés general». Incluso las sociedades de ayuda mutua que asistían a los desempleados o a enfermos de un determinado oficio violaban ese principio, insistía Le Chapelier, y eran contrarias al interés público. «Corresponde a la nación [...]

proporcionar trabajo a quienes lo necesitan para su existencia y ayuda a los enfermos».[45]

La ley de Le Chapelier se cita a menudo como la prueba de que los legisladores de la Asamblea Nacional estaban empeñados en promover los intereses de la clase burguesa, a la que muchos de ellos pertenecían. Cuando presentó su ley, Le Chapelier se defendió de tales acusaciones pidiendo salarios lo suficientemente altos para que los trabajadores pudieran escapar de «esa dependencia absoluta que proviene de estar privados de las necesidades básicas»; también afirmó que los grupos colectivos similares a los sindicatos modernos violaban la libertad individual tanto de los trabajadores como de los empleadores. De hecho, la Asamblea ya había aplicado los principios de la ley de Le Chapelier a una serie de ocupaciones de clase media. El Colegio de Abogados de París se había disuelto, sus miembros tenían prohibido utilizar la etiqueta *avocat* (abogado), y la misma ley que disolvió los gremios hacía legal que cualquier persona ofreciera servicios médicos, sin ningún requisito de formación o licencia. Un destacado abogado del siglo XIX miraba hacia atrás, hacia la época después de la Revolución, con un escalofrío; escribió que «éste fue uno de los primeros abusos de la libertad, se dio el derecho a cualquiera, sin escrutinio, ni aprendizaje alguno, a practicar las profesiones liberales, especialmente la profesión en la que más necesario era demostrar confianza antes de entregar el honor de las familias, el destino de las viudas y los huérfanos».[46] En la práctica, a los profesionales de la clase media les fue mejor que a los trabajadores manuales en la sociedad individualista creada por la Revolución, pero no todos los miembros de la burguesía se entusiasmaron con los cambios impuestos por el movimiento.

Aunque la ley de Le Chapelier contra los gremios afectaba tanto a los grupos profesionales burgueses como a trabajadores manuales, no hay duda de que él y sus aliados –incluidos los triunfadores jacobinos de la Asamblea, y Bailly y Lafayette, los dos funcionarios más implicados en el mantenimiento del orden en las calles de París– se preocupaban principalmente por el comportamiento de las clases bajas. Los guardias nacionales de Lafayette, incluso los que procedían de entornos

relativamente pobres, se encontraron con una creciente hostilidad en las calles cuando intentaron poner fin a las protestas de los trabajadores y disolver las multitudes hostiles a los curas no juramentados. Un mes antes de que introdujera la ley que llevaba su nombre, Le Chapelier también había sido portavoz de otra legislación restrictiva. Esta ley, aprobada el 10 de mayo de 1791, proponía prohibir las peticiones colectivas y en aquella ocasión se permitió a sí mismo estallar violentamente contra los ciudadanos pasivos. Según sus defensores, la prohibición les impediría expresar sus opiniones. Pero según Le Chapelier, «los hombres que están separados de la sociedad por su inquietud, su pereza, su negativa a practicar cualquier ocupación útil» no merecían tener derechos, ya que eran «una carga para la sociedad en lugar de servirla». Su mensaje a los pobres era claro: «Haz algo útil con tus extremidades, encuentra trabajo, cultiva esta tierra fértil y recibirás el título de ciudadano». Robespierre y su aliado más cercano en la Asamblea, Jérôme Pétion, respondieron enérgicamente a Le Chapelier. Pétion preguntó: «¿Cómo puede haber hombres, aparte de los esclavos, a los que no se les permite protestar legalmente contra las leyes que los oprimen?». Sin embargo, el apoyo de la Asamblea a la prohibición demostraba que el miedo y la hostilidad hacia las clases bajas era algo que compartían muchos miembros.[47]

La palabra «esclavos» se le puede haber ocurrido a Pétion porque el examen de la prohibición de las peticiones interrumpió el debate más tumultuoso de la Asamblea sobre las colonias, otro asunto que seguían sin tratar cuando se acercaba el final de su trabajo sobre la Constitución. Cuando los 85 diputados de la Asamblea de Saint-Domingue que habían llegado a Francia con los amotinados del *Léopard* alcanzaron París, la Asamblea Nacional les puso en su sitio, les aseguraron con toda firmeza que no tenían derecho a hacer leyes por sí mismos. Sin embargo, mientras reconvenía a los colonos, Barnave, el jefe del comité colonial, renovó la promesa que había hecho en marzo de 1790 de que podrían decidir sobre los derechos tanto de los esclavos como de la gente libre de color. Para los

colonos esto era crucial, y recibieron la declaración de la Asamblea como una gran victoria. Sin embargo, dentro del movimiento jacobino, marcó el comienzo de la caída de los triunfadores, Barnave y sus aliados Duport y Lameth. Brissot arremetió contra Barnave por dejar el destino de los esclavos a sus amos. «Un patriota quiere libertad para todos los hombres. La quiere sin excepción, sin modificaciones», proclamó Brissot.[48] Del mismo modo que los triunviros habían sido más astutos que los monárquicos en los primeros meses de la Revolución, al acusarlos de poner en peligro los principios básicos del alzamiento por la libertad y la igualdad, Brissot dirigió ahora la atención a los límites del compromiso de Barnave con esos ideales.

Brissot y sus partidarios estaban decididos a desafiar el orden racial colonial, y más a finales de 1790, cuando llegaron a Francia noticias inquietantes de Saint-Domingue. Vincent Ogé, un hombre negro libre y oficial de la Guardia Nacional de París, había ido a la colonia para exigir que se aplicaran los derechos políticos a los miembros de su grupo, ya que, según él, ésa era la intención evidente del decreto de la Asamblea Nacional del 8 de marzo de 1790. Ogé «dejó claro que no hacía ninguna declaración sobre la esclavitud», informó el *Patriote français* de Brissot.[49] Cuando los colonos blancos rechazaron sus peticiones, organizó una rebelión entre los hombres libres de color en el norte de la colonia. El movimiento de Ogé se controló con rapidez, pero dejó profundamente alterados a los dueños de las plantaciones blancas. Después de un juicio apresurado, a Ogé lo ejecutaron en la rueda, la manera más dolorosa de aplicar la pena capital en Francia, y se ahorcó a varios de sus seguidores.

Los informes sobre la rebelión de Ogé intensificaron los debates sobre la raza en la Francia metropolitana. Los partidarios de los colonos blancos recurrieron a argumentos abiertamente racistas, afirmando que los negros eran una especie diferente, una especie intermedia entre los humanos y los simios. En respuesta, el portavoz de la gente libre de color, Julien Raimond, se convirtió en el primer escritor en afirmar que los prejuicios raciales eran construcciones sociales sin raíces en la realidad. Cuando la noticia de la ejecución de Ogé llegó a Francia, Brissot escribió: «En Saint-Domingue, las

cabezas de los defensores de la libertad son las que caen de los andamios».[50] Unos días más tarde, llegaron noticias de más violencia en esa colonia: soldados enviados desde Francia y marineros de la flota francesa se habían unido a los colonos blancos de Puerto Príncipe para asesinar al coronel Thomas-Antoine Mauduit, el comandante militar que había dispersado la Asamblea Colonial el año anterior. La Asamblea Nacional llegó a la conclusión de que la única manera de restaurar el orden en las colonias era decidir de una vez por todas cómo se integrarían en el nuevo orden.

Durante más de una semana, entre el 7 y el 15 de mayo, los diputados se enfrentaron al debatir si una nación dedicada a la libertad y la igualdad podía tolerar la esclavitud y la discriminación racial en sus colonias. «La cuestión concierne tanto a Europa como a América», escribió un importante periódico a favor de la esclavitud. «La decisión de la Asamblea podría ser un decreto de vida o muerte, de esclavitud o libertad para millones de hombres, y una señal de prosperidad o de la caída del comercio». Quedó claro desde el principio que la mayoría no estaba dispuesta a decretar la abolición inmediata de la esclavitud, debido a las repercusiones económicas que causaría una medida tan drástica. Sin embargo, algunos colonos, como el diputado Médéric Louis Élie Moreau de Saint-Méry, insistieron en que, para tranquilizar a los propietarios de las plantaciones, era necesario que la promesa de la supremacía blanca que se había incorporado en los anteriores decretos de la Asamblea se incluyera en la Constitución. Cuando otros diputados dudaron si excluir la posibilidad de abolir la esclavitud en una fecha posterior, protegiéndola en la Constitución, Moreau de Saint-Méry los desafió directamente: pasó a decretar que «no se haga ninguna ley sobre el estatus de los esclavos en las colonias americanas, ni se cambie el estatus de los hombres de color, salvo en respuesta a una petición precisa y espontánea de las asambleas coloniales».[51]

La moción de Moreau de Saint-Méry desencadenó una de esas airadas tormentas que habían caracterizado constantemente los polémicos debates de la Asamblea. La idea de que la palabra *esclavage*, «esclavitud», pudiera aparecer en una constitución que proclamaba que «los hombres nacen y

permanecen libres e iguales en derechos» indignó a muchos de los diputados. Parafraseando una línea del artículo de la *Enciclopedia* sobre la trata de esclavos, Robespierre exclamó: «¡Dejen que las colonias perezcan antes que abandonar un principio!». Éstas fueron las palabras por las que se hizo más conocido hasta el apogeo del Terror dos años después. Sin embargo, lo más que lograron cambiar él y los otros diputados radicales fue que se utilizara la eufemística expresión de «personas no libres» para referirse a los esclavos.

El debate se trasladó entonces a la cuestión de las personas negras libres. A pesar de las vehementes objeciones de los diputados procoloniales, se permitió a Julien Raimond dirigirse a la Asamblea. Era la primera vez que se permitía a un hombre de ascendencia africana hablar en los debates de una legislatura occidental. Raimond argumentó que hombres como él, que poseían propiedades y esclavos, cumplían todos los requisitos que establecía la Constitución para ser un ciudadano activo y, de hecho, eran esenciales para mantener sumisos a los esclavos de las colonias. Los defensores de los colonos respondieron que permitir que cualquier persona descendiente de esclavos lograra la igualdad con los blancos socavaría fatalmente las distinciones raciales de las que dependía la sociedad de las plantaciones.

Se rechazó la apelación de Raimond para obtener derechos para todos los miembros de su grupo; parecía que el lado procolonial había ganado el debate. Sin embargo, el diputado alsaciano Jean-François Rewbell ofreció una enmienda que, según él, aseguraría la supremacía blanca y al mismo tiempo haría una pequeña concesión a la gente libre de color. La propuesta de Rewbell concedía derechos de ciudadanía a los hombres libres de color cuyos padres hubieran sido libres y que estuvieran legalmente casados. Sólo una pequeña minoría de la población libre de color en las colonias cumplía con estos requisitos, pero los diputados coloniales en la Asamblea objetaron que la enmienda aparentemente menor de Rewbell contradecía la promesa que acababan de hacer: que no se permitirían cambios en el estatus de los no blancos a menos que se iniciaran en las propias colonias. Sin embargo, cuando la mayoría de los diputados apoyaron la enmienda de Rewbell,

Moreau de Saint-Méry y sus colegas anunciaron que abandonaban sus escaños.

Este airado debate había obligado a los diputados a enfrentarse a la contradicción entre sus principios idealistas y la desagradable realidad de la esclavitud. Tal vez todavía estaba en la mente de los diputados al día siguiente, cuando apoyaron por abrumadora mayoría una moción de Robespierre que prohibía a cualquiera de ellos ocupar un escaño en la nueva legislatura que se elegiría una vez terminada la Constitución. Esta «ordenanza de abnegación», destinada a demostrar que la ambición personal de permanecer en el poder no había tenido nada que ver a la hora de elaborar la Constitución, sería «un gran ejemplo de amor a la igualdad, de pura devoción por el bien del país», dijo Robespierre a sus colegas.[52] Pocos se atrevieron a oponerse a su moción por temor a evidenciar su ambición personal; muchos se alegraron de ver que se excluía a sus oponentes de la siguiente asamblea, otros, simplemente estaban exhaustos de trabajar en la ingente tarea que se habían impuesto a sí mismos dos años antes. Parecía que se acercaba el final de su contribución, aunque del sentimiento de unidad que se había generado para la Fiesta de la Federación el julio anterior ya no quedaba más que un recuerdo lejano.

Mientras los diputados luchaban por poner punto final a la Constitución, fueron atacados con una inesperada ráfaga de críticas que cuestionaban si realmente estaban cumpliendo con los objetivos de los *philosophes* prerrevolucionarios. El abate Guillaume Raynal, cuya *Histoire des deux Indes (Historia de las dos Indias)*, publicada por primera vez en 1770, había desencadenado los debates de la Ilustración sobre el colonialismo y la esclavitud, denunció públicamente la Revolución como una «falsa interpretación de nuestros principios». En Francia, afirmaba, sólo veía «conflictos religiosos, debates civiles, la consternación de algunos, la tiranía y la presunción de otros, un gobierno esclavizado por la tiranía popular [...], soldados sin disciplina, líderes sin autoridad, ministros sin recursos» y, sobre todo, «un rey, el primer amigo de su pueblo [...],

indignado, amenazado, despojado de toda autoridad». El poder ahora descansaba en «clubes donde hombres ignorantes e incultos se atreven a pronunciarse sobre todas las cuestiones políticas».[53] En Marsella, de donde era Raynal, los miembros del Club Jacobino respondieron llevando el busto de Raynal desde su sala de reuniones al manicomio local; en Sèvres, el joven jacobino Goujon siguió su exitosa oratoria en honor a Mirabeau con un discurso en la Asamblea Nacional en el que denunció al abate. La diatriba de Raynal reflejaba una creciente desilusión con los resultados de la Revolución incluso entre los devotos de la Ilustración. Entretanto, mientras Raynal proclamaba su furiosa denuncia, Luis XVI y María Antonieta tramaban una estrategia que amenazaba con hundir el movimiento por completo.

11

Un rey a la fuga y una crisis constitucional

Junio-septiembre de 1791

No es probable que los parisinos medianamente informados se sorprendieran mucho el 20 de junio de 1791, cuando se despertaron con la noticia de que el rey y toda la familia real habían desaparecido del Palacio de las Tullerías. Los rumores sobre una fuga habían sido constantes en la capital desde la toma de la Bastilla dos años antes. Fueron más sorprendentes las consecuencias que tuvo esta huida. Muchos esperaban que diera pie a una guerra civil, a una guerra contra las otras monarquías de Europa y al fin de la monarquía en Francia. Todo esto iba a ocurrir en poco más de un año, pero en el verano de 1791, el intento de fuga real no resultó en un conflicto nacional importante ni en uno internacional, ni en la caída del trono. Las decisiones que tomó la Asamblea Nacional en junio y julio para resolver la crisis provocada por la huida del rey permitieron la aplicación de la nueva Constitución, pero acabaron sumándose a las tensiones no resueltas que pronto minarían el esfuerzo por transformar Francia en una monarquía constitucional.

Desesperados por proteger al rey y la autoridad tradicional del trono, los cortesanos habían tratado de convencer a Luis XVI de que huyera a algún lugar a una distancia segura de París en julio de 1789. Lo intentaron de nuevo más tarde, ese año, en los Días de Octubre. Preocupado por la seguridad de su familia y realmente reacio a iniciar una guerra civil entre sus súbditos, el rey no se comprometió con ninguno de los planes que le proponían. Un desafortunado conspirador, el marqués de Favras, terminó en la horca en febrero de 1790 por su participación en un complot para secuestrar al rey y sacarle de París. La crisis provocada por la Constitución

Civil del Clero convenció a Luis de que tenía que intentar escapar de la capital, pero ahora tenía que elegir entre planes contrarios. Como parte de su esfuerzo por convertir al rey a su visión de una monarquía verdaderamente popular, Mirabeau instó a Luis XVI a huir a un lugar seguro dentro del reino, donde pudiera negociar con la Asamblea Nacional sin involucrar a poderes extranjeros en los asuntos franceses. La reina y el barón de Breteuil, líder de una red de *émigrés* partidarios de la monarquía, propusieron un plan distinto, en el que el rey escaparía a una fortaleza cerca de la frontera belga, donde las tropas austriacas podrían intervenir en su nombre si fuera necesario. Luis XVI finalmente aceptó esta opción. Meses de negociaciones secretas terminaron con la promesa de que Leopoldo, hermano de María Antonieta, proporcionaría los fondos y las fuerzas necesarias si la huida tenía éxito. «Para adormecer a los partidos revolucionarios en cuanto a sus verdaderas intenciones», como dijo un conspirador, Luis se dirigió personalmente a la Asamblea Nacional el 19 de abril para renovar su apoyo a la nueva Constitución, y envió una declaración pública a otros tribunales europeos con el mismo mensaje.[1]

El plan de fuga del 20 de junio requirió largos preparativos. Desde los Días de Octubre, Luis XVI había insistido en que no abandonaría a su familia para ponerse él a salvo; él y la reina decidieron que, en cualquier intento de huir, ellos y sus hijos tendrían que viajar juntos. Axel von Fersen, el noble sueco que se había convertido en el amante de la reina antes de la Revolución, se ocupó de los detalles prácticos para sacar a la comitiva real de París. Hizo construir un gran carruaje, o berlina, con espacio para el rey, la reina, los dos niños, su institutriz y la hermana de Luis XVI, Elisabeth. La familia real tendría que salir de París sin escolta, oficiales militares monárquicos con pequeños destacamentos de hombres leales estarían estacionados en puntos clave a lo largo de la ruta, listos para proteger a los pasajeros una vez que estuvieran en el campo. La presencia de estas tropas podría alertar a la población de que algo inusual estaba ocurriendo, pero los conspiradores dieron por sentado que la gente del campo simpatizaría con el rey. A los soldados se les dijo que estarían custodiando un «tesoro»; podrían haber creído que esto significaba dinero para el pago de las tropas en la

frontera. El general Bouillé, que había sofocado el motín del ejército en Nancy el agosto anterior, esperaría cerca de Montmédy con un fuerte contingente de soldados, listo para respaldar a la autoridad del rey mediante la fuerza.

Incluso después de que los oficiales hubieran llegado a sus puestos a lo largo del camino, fue necesario posponer la fecha de la fuga varias veces. Al ver a estos oficiales de caballería, los campesinos locales creyeron que ocurría algo y se alarmaron cada vez más por su presencia. Sin embargo, las primeras etapas del plan terminaron por desarrollarse con éxito. La tarde del 20 de junio, el rey se despidió de su hermano, el conde de Provenza, que se fue a Bélgica, disfrazado de comerciante inglés. Después de sus acostumbrados rituales nocturnos, la familia real se retiró a sus habitaciones. Luego, uno a uno, salieron del oscuro palacio por una puerta sin vigilancia y se unieron a Fersen en un cabriolé. En la oscuridad, la reina casi se tropieza con Lafayette, el comandante de la Guardia Nacional, que había visitado inesperadamente el palacio. Había entretenido al rey con una conversación bastante larga antes de caer la noche, lo cual hizo que se retrasara la fuga, pero no reconoció a la reina.

Fersen llevó a la familia real a una calle cercana donde esperaba el carruaje; luego emprendió su propio viaje secreto a la frontera. Luis XVI le prometió: «Pase lo que pase, nunca olvidaré todo lo que estás haciendo por mí», pero prohibió al amante de su esposa que viajara con ellos. Tres leales guardaespaldas escoltaron a los fugitivos; les habían dado uniformes amarillos, una decisión desafortunada, porque el amarillo, un color asociado al *émigré* príncipe de Condé, atrajo la atención y produjo cierta hostilidad a lo largo de la ruta. A las dos y media de la madrugada, el grupo por fin estaba listo para comenzar el viaje, varias horas más tarde de lo planeado, pero mucho antes del amanecer. Cuando el carruaje, grande y llamativo, empezó a traquetear a lo largo de la carretera principal hacia el este, Luis XVI se puso de buen humor y le dijo a su familia: «En cuanto vuelva a la silla de montar, seré muy diferente de lo que habéis visto hasta ahora». Se imaginó a sí mismo recibiendo a los que habían tenido que emigrar y restableciendo la Iglesia.[2]

Aliviado de estar lejos de París y de sus multitudes hostiles, el rey fue algo incauto al bajarse del carruaje en las paradas para cambiar de caballos e incluso entabló conversación con los transeúntes. Empezaron a circular los rumores de posibles avistamientos del rey a lo largo de la ruta. Luis XVI había dado por hecho que, fuera de París, encontraría partidarios leales, pero en realidad los funcionarios locales y los guardias nacionales, ya alarmados por la inexplicable presencia de soldados a lo largo de los caminos, se pusieron en guardia. A las seis y media de la tarde, la familia real llegó a la Casa de Correos, donde se suponía que la esperaba el primer destacamento de caballeros leales. Para su consternación, no había señal de las tropas ni de su comandante, el joven Claude-Antoine-Gabriel Choiseul. Al ver que el carruaje no aparecía a la hora prevista, Choiseul había decidido que algo había salido mal y pensó que era mejor marcharse antes de que su presencia despertara demasiadas sospechas. Envió un mensaje confuso a las otras unidades que esperaban más adelante; no se le ocurrió dejar a nadie apostado, para que pudiera hacer saber a los viajeros lo que había hecho.

La comitiva real no tenía otra opción más que continuar por la carretera. Cuando llegaron a la ciudad de Sainte-Menehould, el jefe local de Correos, Jean-Baptiste Drouet, se asomó a la berlina después de enganchar los caballos de relevo y le pareció reconocer al rey. Drouet comunicó sus sospechas a los funcionarios del pueblo, quienes le ordenaron que siguiera al carruaje con un compañero. A las once de la noche, el rey y su familia llegaron a Varennes, el último pueblo en el que debían cambiar de caballos antes de llegar al encuentro previsto con Bouillé y sus tropas. Perdieron unos minutos preciosos por una confusión sobre dónde se encontraban los caballos. Mientras tanto, llegó Drouet. Improvisó una barricada para bloquear el puente fuera de la ciudad y alertó a Jean-Baptiste Sauce, el *procureur*, o procurador, de la ciudad. Sauce inspeccionó los documentos de los pasajeros y no encontró razón para detenerlos, pero Drouet organizó tal alboroto que finalmente se decidió que los retendrían en la ciudad hasta la mañana siguiente. Mientras los fugitivos se instalaban tranquilamente para pasar la noche, llevaron a la posada a un residente local que había visitado

Versalles. Reconoció inmediatamente al monarca y no pudo evitar arrodillarse para rendirle homenaje. Su identidad había sido desvelada por un súbdito leal y Luis XVI respondió cansado: «Sí, soy vuestro rey».[3]

Al principio, la gente del pueblo se sintió atraída por el rey cuando este pidió ayuda, y les explicó que él y su familia se habían visto «obligados a vivir en la capital entre puñales y bayonetas». Pero la campana de la iglesia de la ciudad hizo sonar el *tocsin*, lo cual alertó a varios miles de guardias nacionales y campesinos para que fueran a Varennes a preparar las defensas contra cualquier intento de atacar la ciudad. El consejo de la ciudad, formado por residentes humildes, llegó a una decisión: no obedecerían las órdenes del rey. Aunque le aseguraron que estaban de su lado, le dijeron «que su residencia estaba en París y que incluso los que vivían en las provincias le pedían nerviosos y con preocupación que regresara». Al amanecer, dos mensajeros que había enviado la Asamblea Nacional en busca del rey dos días antes, llegaron a Varennes con un decreto que exigía a todos los funcionarios locales que obligaran al rey a regresar a la capital. «Ya no hay rey en Francia», concluyó tristemente Luis XVI.[4]

Al darse cuenta de que su apuesta había fracasado, la agotada familia real volvió a regañadientes a su desafortunado carruaje. Bouillé llegó a una colina que dominaba Varennes con cuatrocientos hombres de caballería poco después de su partida, pero al ver que miles de hombres armados rodeaban el carruaje, decidió que liberar a la familia real era imposible. Cualquier ilusión que aún albergara Luis XVI sobre la simpatía de la población por su causa se diluyó al ver la hostilidad con la que le recibían en la mayoría de las ciudades a lo largo del viaje de regreso a París. Los funcionarios locales, recordó Madame de Tourzel, «sólo tenían un pensamiento en mente: glorificarse en su propio triunfo y humillar a la familia real».[5] Los campesinos locales asesinaron a un noble que gritó *«¡Vive le roi!»* al paso del carruaje. El viaje de regreso se les hizo mucho más lento que el intento de fuga, ya que ahora la berlina tenía que moverse al ritmo de los guardias que marchaban a su lado. El calor era sofocante y la nube de polvo que levantaban las tropas dificultaba la respiración.

A mitad del camino de vuelta a París, la comitiva real se encontró con tres diputados de la Asamblea Nacional a los que habían designado para que les acompañaran. Como reflejo del esfuerzo de la Asamblea por estar unida ante la crisis provocada por la huida del rey, la delegación estaba formada por Charles Latour-Maubourg, un monárquico devoto; Barnave, un líder de la principal facción jacobina, y un radical democrático, Pétion, aliado muy cercano de Robespierre. Latour-Maubourg dejó entrar en el carruaje a sus dos colegas con la esperanza de que la cercanía al rey y la reina suavizara algo su hostilidad. Iban tan apretados que Pétion se vio obligado a sostener a la princesa real en su regazo. Tuvieron que oír una larga arenga de la hermana del rey, Madame Elisabeth, que habló sobre todo de las medidas que los revolucionarios habían tomado contra la Iglesia. «Este discurso impresionó tanto a Barnave que a partir de ese momento cambió su conducta y sus ideas», afirmó Madame de Tourzel.[6]

En realidad, Barnave y sus asociados más cercanos ya habían comenzado a distanciarse de los jacobinos más radicales. De hecho, habían tratado de establecer un contacto secreto con el rey. Parece claro que Barnave y María Antonieta llegaron a algún tipo de acuerdo durante las horas que pasaron en el carruaje; después de su regreso a París, Barnave seguiría los pasos de Mirabeau y comenzaría a tener una correspondencia secreta con ella. En estas cartas, intentó forjar una alianza entre el rey y la Asamblea, y negociar una revisión de la Constitución para restaurar parte de los poderes reales. Incluso cuando el rey y la reina empezaron a vislumbrar que quizá habría una posibilidad de salvar algo de su autoridad, todavía tenían que enfrentarse a la hostilidad de los habitantes de París. En varios puntos, mientras se acercaban a la ciudad, la multitud se dirigió hacia el carruaje y amenazó con matar a los tres guardaespaldas reales que habían ayudado a llevar a cabo la fuga. Lafayette, el comandante de la Guardia Nacional, dio órdenes a los guardias y a los espectadores para que estuvieran en completo silencio y siguieran con el sombrero puesto, en lugar de quitárselo en el

tradicional gesto de respeto a la autoridad. Cinco días después de su partida, la familia real se encontraba de nuevo en el Palacio de las Tullerías.

Más sorprendente que la desesperada huida del rey a Varennes fue la reacción de la Asamblea Nacional y la población ante la crisis. El ayuda de cámara del rey fue el primero en darse cuenta de que la familia real había abandonado el palacio y, una hora después de su descubrimiento, la noticia había circulado por toda la ciudad. Enormes multitudes indignadas se reunieron alrededor de las Tullerías y el Hôtel de Ville, la sede del gobierno de la ciudad. Se empezó a sospechar inmediatamente de Lafayette y de Bailly, el alcalde de París, responsables de la seguridad del rey, por no haber sido capaces de evitar el plan. Cuando los diputados aceptaron la afirmación de Bailly de que «al rey y a algunos miembros de la familia se los llevaron anoche los enemigos del bienestar público», los patriotas revolucionarios sospecharon de toda la Asamblea Nacional. La historia de que habían secuestrado al rey, «como si le hubieran administrado una poción para dormir y se lo hubieran llevado sin que se enterara», como dijo un periodista escéptico, se vino abajo en cuestión de horas, cuando se descubrió que había dejado atrás una larga denuncia de la Revolución. En el documento en cuestión, Luis XVI declaraba que todas las acciones que había llevado a cabo durante su «cautiverio» eran inválidas porque habían sido hechas bajo coacción. Afirmó que durante dos años se había quedado sin poder alguno mientras veía cómo tenía lugar «la destrucción de la monarquía, la subversión de la autoridad, la violación de la propiedad privada, la puesta en peligro de la seguridad personal, la impunidad del crimen y la instauración de la anarquía total».[7]

Incluso los diputados moderados estaban indignados al ver que el rey rompía sus reiterados juramentos de haber aceptado la nueva Constitución y su aparente voluntad de arriesgarse, aunque estallara una guerra civil. La Asamblea rápidamente se reafirmó en su autoridad para emitir decretos y órdenes a los ministros sin la aprobación del rey. Despachó mensajeros para alertar a los funcionarios locales en toda Francia y prohibió salir del país a toda la población. Estas medidas de la Asamblea dieron a Francia su primera muestra de lo que se llamaría «gobierno revolucionario», la

invocación de poderes de emergencia justificados por una crisis abrumadora. En las calles, la gente común tomó su propia venganza contra el monarca infiel. «Todos los carteles en los que aparece "Perfumista del rey" o "de la reina", o "Lotería real", etcétera, se han derribado y quizá en poco tiempo sus nombres ni siquiera se mencionen», escribió una inglesa. Madame Roland, que se había limitado escrupulosamente al «tipo de influencia que parecía adecuada para mi sexo», decidió que las circunstancias la obligaban a asumir un papel público y se inscribió como miembro de un club político que admitía a mujeres.[8]

Por primera vez desde el comienzo de la Revolución, voces serias proponían la idea de que Francia podía existir sin un rey. Thomas Paine, que había ayudado a establecer una república en América, ahora quería ayudar a fundar otra. Esperaba que los franceses vieran «lo absurdo de los gobiernos monárquicos; aquí habrá una nación entera perturbada por la locura de un hombre». El 21 de junio, mientras el carruaje real seguía rodando hacia Varennes, el radical Club de los Cordeliers emitió un comunicado que declaraba a «la realeza, especialmente la hereditaria [...], incompatible con la libertad». El club instó a la Asamblea Nacional a «proclamar inmediatamente que Francia ya no es una monarquía, sino una república». Revistas radicales, como *Annales politiques* de Jean-Louis Carra, el periódico favorito de los clubes jacobinos provinciales, denunciaron al rey en los términos más enérgicos: «Esta mañana, Luis XVI desertó del trono, la capital, el imperio, y mediante esta cobarde deserción, pretendía regresar, con verdugos extranjeros, a gobernar sobre veinticinco millones de cadáveres». En París el apoyo popular a estas ideas era más que considerable. El 24 de junio, dos días después de que la noticia de la captura del rey llegara a la capital, unas treinta mil personas marcharon para presentar una petición de los Cordeliers a la Asamblea Nacional. Los monárquicos devotos interpretaron la huida del rey de forma muy diferente. El 23 de junio, justo antes de conocer la noticia de que habían detenido al rey en Varennes, el editor sin pelos en la lengua de la *Gazette de Paris* dio rienda suelta a su entusiasmo. «Encontró una manera de romper sus cadenas, este desafortunado rey [...]. En cualquier lugar en el que haya

buscado asilo, habrá encontrado verdaderos franceses. Qué alegría incontenible deben sentir al gritar: "¡El rey! ¡El rey!"».[9]

Los líderes de la Asamblea Nacional y el gobierno de la ciudad estaban decididos a poner a salvo su proyecto constitucional de republicanos y realistas (monárquicos). Cuando el 22 de junio, los representantes de los Cordeliers trataron de leer su proclama ante el más moderado Club Jacobino más moderado, un orador recordó a los miembros: «Ustedes son los Amigos de la Constitución y [...], la monarquía es parte de la Constitución». El club votó unánimemente no escuchar a los peticionarios. Los numerosos diputados jacobinos de la Asamblea eran conscientes de que su propia legitimidad dependía de la Constitución que todavía estaba sin terminar, y la monarquía era un elemento esencial de la complicada estructura que habían estado elaborando. La Asamblea había estado preocupada durante meses antes de la huida del rey por cómo contrarrestar el malestar de la población y ahora no estaba dispuesta a reiniciar el proceso revolucionario. La ley aprobada el 10 de mayo que prohibía las peticiones colectivas y la ley Le Chapelier contra las organizaciones de trabajadores eran una muestra de su estado de ánimo. El alcalde y el comandante de la Guardia Nacional no toleraban el comportamiento de individuos radicales, como el conductor al que se detuvo por «atreverse a decir que había que colgar a los señores Bailly y Delafayette».[10]

Fuera de París, la huida y detención del rey provocaron reacciones diversas. En las regiones fronterizas, y especialmente en el noreste, donde Luis tenía la esperanza de poder refugiarse, se temía una invasión extranjera. Las autoridades locales arrestaron a nobles, sacerdotes refractarios y otros sospechosos de albergar simpatías monárquicas, un anticipo de las medidas cada vez más duras que caracterizarían a la Revolución en los años siguientes. En la Bretaña rural, una unidad de la Guardia Nacional intentó localizar a un sacerdote refractario que había salido de su escondite cuando se enteró del intento de fuga de la familia real. Él «gritó en el pueblo de Génezé, con una expresión que irradiaba

alegría: “Buenas noticias, amigos, el rey ha huido, eso es bueno para nosotros”». Una petición del Club Jacobino de la ciudad de Montpellier, en la costa mediterránea, instaba a la creación de una república, lo cual dejaba claro que los parisinos no eran los únicos que estaban dispuestos a considerar esta opción radical. Algunos diputados de París se dejaron convencer por las cartas que recibieron de sus regiones de origen, instándolos a acabar con la monarquía. Un elector escribió que la nación estaba «dispuesta a dar el ejemplo de un pueblo que sabe arreglárselas sin un rey».[11] Una vez que quedó claro que la intención de la Asamblea Nacional era preservar la monarquía, todos estos debates se desvanecieron. No obstante, la posibilidad de un gobierno republicano se había instalado en la mente de al menos una parte de la población.

Al no estar dispuestos a considerar una alternativa a la monarquía o incluso al monarca existente, los dirigentes de la Asamblea Nacional trataron al rey con cautela después de su regreso. La suspensión de sus poderes hasta que se aclararan las circunstancias de la huida fue demasiado para los diputados monárquicos de la Asamblea, que se negaron a participar en el proceso. Haciendo caso omiso de sus protestas y de las de los radicales, los dirigentes de la Asamblea decidieron que considerarían al rey «la primera víctima de una conspiración promovida por los enemigos de Francia» y no un sospechoso, en palabras de un periodista centrista.[12] A Luis se le permitió hacer una declaración sobre sus motivos, pero no se le sometió a un interrogatorio; aunque no fingió que lo hubieran secuestrado, prometió que no se opondría más a la Constitución y dijo que ahora se había percatado de que la población la apoyaba. El general Bouillé, que había huido a un lugar seguro en Bélgica, dio cobertura a la familia real anunciando, falsamente, que había sido él quien había tramado la huida.

Los argumentos a favor de mantener la monarquía se combinaban con apelaciones a la teoría política y a las consideraciones prácticas. Nada menos que Montesquieu, el pensador político más citado durante los primeros años de la Revolución, había insistido en que el gobierno republicano sólo era posible en pequeños estados; Estados Unidos no había existido el tiempo suficiente para demostrar a los franceses que estaban

equivocados. La *Gazette universelle*, un periódico que apoyaba a los moderados en la Asamblea, escribió en uno de sus editoriales: «La monarquía no se ha establecido para Luis XVI [...]. Se ha establecido para evitar un perpetuo choque de ambiciones privadas que aspiran al puesto más alto; para asegurar la separación de poderes, sin la cual no hay libertad ni constitución; para mantener la indivisibilidad del imperio, sin la cual estamos a merced de cualquier vecino ambicioso». Más sinceramente, Lafayette dijo a un amigo británico que los dirigentes de la Asamblea pensaban que les convenía «mantener a un monarca que es débil, ciertamente, y que no ha sido sincero con nosotros», pero que se le podía presionar para que aceptara la Constitución a punto de estar terminada. El temor a las reacciones de los gobiernos extranjeros era una preocupación genuina: los líderes de la Asamblea escribieron al emperador Leopoldo II, con la esperanza de convencerle de que apoyara la Constitución francesa en lugar de expresar su hostilidad hacia ella. Esto último podría llevar a la población francesa a exigir «que se diera la vuelta a todo» y a una guerra contra todas las demás monarquías.[13]

El 12 de julio de 1791, el comité designado por la Asamblea Nacional para proponer una respuesta a la crisis emitió su informe. Como la Constitución había prometido que el rey sería inviolable y no se le podría castigar por sus acciones, los miembros del comité concluyeron que había que reinstituirle, siempre y cuando estuviera dispuesto a jurar obediencia a la Constitución una vez que estuviera completa. La minoría radical de la Asamblea Nacional era incrédula. «¿Cómo se iba a poder restaurar la confianza de la nación en Luis XVI?», preguntó Grégoire. «Si promete ser leal a la Constitución, ¿quién se atreve a responder por él?». Hablando en nombre de la mayoría, Barnave, al que aún se recordaba como uno de los agitadores patriotas de 1789, se hizo eco del argumento de que eliminar al rey amenazaría la base de la sociedad. «¿Vamos a concluir la Revolución, vamos a empezar todo de nuevo?», preguntó. «¿Queda alguna otra aristocracia por destruir excepto la de la propiedad? [...] Es hora de poner fin a la Revolución [...]. Hay que detenerse ahora que la nación es libre y

que todos los franceses son iguales».[14] El 15 de julio, la Asamblea aprobó la recomendación del comité.

La decisión de la Asamblea Nacional de reinstaurar al rey en el trono desencadenó un enfrentamiento con los recién envalentonados radicales democráticos, liderados por el Club de los Cordeliers. Los Cordeliers inmediatamente buscaron el apoyo de otros grupos, como la Sociedad de los Amigos de la Verdad y el Club de los Jacobinos. Tras una reunión conjunta de los clubes la noche siguiente a la votación de la Asamblea, una petición redactada por el periodista Brissot afirmaba que «sería tan contradictorio para la grandeza de la nación ultrajada como para sus intereses seguir confiando las riendas del imperio a un hombre que ha mentido, traicionado y huido».[15] Robespierre, respetado por los radicales por su inquebrantable devoción a la causa popular en la Asamblea Nacional, les pidió que no hicieran circular la petición. Intentaba evitar un enfrentamiento que temía que se utilizara para justificar la represión del movimiento democrático; sin embargo, no siguieron su consejo. Los Cordeliers y los más cautelosos jacobinos pasaron varias horas discutiendo sobre lo que tenía que decir la petición: ¿debería exigir que el rey fuera destituido «por medios constitucionales», o dejar abierta la posibilidad de llamar a la insurrección popular?

El día 16 de julio estuvo lleno de intrigas políticas. Los diputados que habían seguido el ejemplo de Barnave para presionar por la restauración del rey se propusieron perturbar y derrotar a los radicales. Advertidos por Alexandre Lameth, un estrecho colaborador de Barnave, varios prominentes Cordeliers, entre los que se encontraban Danton y Desmoulins, se retiraron de la vista, pero otros convocaron una reunión masiva en el Campo de Marte, donde todavía estaba en pie el «altar de la patria» de la gran Fiesta de la Federación que se celebró en julio de 1790. Mientras los Cordeliers trataban de movilizar a sus partidarios, los aliados de Barnave dejaron el Club Jacobino y fundaron un nuevo grupo, los Feuillants, llamados así porque se reunían en un antiguo monasterio con ese nombre. De los cerca

de trescientos diputados que habían sido jacobinos en los inicios, sólo quedaban seis, dirigidos por Robespierre. En un principio, la mayoría de las sociedades provinciales afiliadas a los jacobinos apoyaban a los Feuillants, cuyo lugar de reunión estaba al lado de la Manège, que parecía un anexo de la legislatura.

Mientras tanto, los partidarios de los Cordeliers se reunieron en el altar de la patria para redactar otra petición. Se cuidaron de no exigir una república, para no desafiar directamente a la autoridad de la Asamblea, pero pidieron que el asunto del futuro del rey se remitiera a las «asambleas primarias» que pronto se reunirían en todo el país para elegir a los diputados de la nueva legislatura. Al dispersarse por la noche, anunciaron que se invitaría a los ciudadanos a venir al Campo de Marte al día siguiente para firmar la nueva petición, que luego se entregaría a la Asamblea. La gente comenzó a acercarse al Campo de Marte la mañana del 17 de julio. La reunión se interrumpió cuando se descubrió a dos hombres bajo la plataforma del altar, donde habían estado haciendo un agujero, probablemente con el fin de mirar bajo las faldas de las mujeres que venían a firmar la petición. Sin embargo, con la ciudad en plena tensión política, la gente pensó que la interrupción era intencionada y que incluso podían haber plantado explosivos. Llevaron a los dos hombres a la comisaría más cercana y luego los asesinaron.

Este incidente era el pretexto que los partidarios de la línea dura de la Asamblea y el gobierno de la ciudad habían estado esperando para acabar con el movimiento radical. La Asamblea se apresuró a aprobar una resolución pidiendo al alcalde que dispersara a la multitud del Campo de Marte. Lafayette y Bailly reunieron a sus fuerzas y marcharon por la ciudad, bandera roja en mano, para anunciar que se imponía la ley marcial. Muchos de los guardias nacionales, frustrados después de haber estado meses tratando de contener a una población rebelde, estaban más que dispuestos a usar la fuerza. Cuando las tropas llegaron al Campo de Marte, sonó un disparo, causando pánico en la multitud y entre los guardias, quienes inmediatamente cargaron hacia el «altar de la patria». No dieron la advertencia que se suponía que debía preceder al uso de la fuerza y

mataron, como mínimo, a sesenta manifestantes. La matanza causó una conmoción tremenda. Por primera vez, los miembros de la Guardia Nacional, la milicia ciudadana creada por el propio movimiento revolucionario, se habían convertido en unos «malditos villanos y granujas de una bajeza tal, que disparaban contra el pueblo», como dijo un cochero al que detuvieron al día siguiente.[16]

Se silenció temporalmente a los periodistas de los Cordeliers, aunque el cronista Nicolas Ruault dijo a su hermano que, «aun así, su opinión se había fortalecido; es el efecto que suele tener la persecución».[17] Se archivaron los planes para organizar un juicio masivo de los detenidos, ya que era evidente que el testimonio de los testigos presenciales no respaldaría la afirmación de que la multitud había comenzado la lucha. Dos meses más tarde, cuando la Asamblea Nacional estaba poniendo fin a sus reuniones, se aprobó una amnistía general para los crímenes políticos. A pesar de todo, muchos de los que se habían puesto del lado de los Cordeliers nunca olvidaron aquella matanza. Dos años más tarde, cuando el alcalde Bailly se vio acorralado durante el Terror y le sentenciaron a muerte, se trasladó la guillotina hasta el Campo de Marte para que su ejecución tuviera lugar en el mismo sitio en el que él había perpetrado su mayor crimen, según sus enemigos.

Una vez resuelto el destino del rey y silenciada temporalmente la oposición radical, la Asamblea Nacional se propuso hacer un último esfuerzo para terminar la Constitución. El trabajo de los líderes del Club de los Feuillants, Barnave y Duport, se complicó por la continua renuencia del rey y de la reina a acatar sinceramente la Constitución. Barnave trató de convencer a la pareja real de que los poderes que tendría Luis bajo las nuevas estructuras todavía serían muy respetables. Su poder de veto sería más efectivo que el derecho que había tenido anteriormente para anular los parlamentos; seguiría eligiendo a todos los funcionarios importantes del gobierno; y su «lista civil», el dinero que podría gastar a su discreción, sería mayor que el de cualquier otro gobernante europeo. «¿Qué más se necesita para ser rey?», preguntó Barnave. Aunque María Antonieta envió a su hermano

Leopoldo II una carta, dictada prácticamente entera por Barnave, en la que le pedía que prometiera respetar la aceptación de la Constitución por parte de Luis, a ella le seguía pareciendo un «tejido de absurdos poco prácticos». En notas secretas le dijo al gobierno austriaco que ella y el rey sólo hacían ver que estaban de acuerdo con los Feuillants, «para poder traicionarlos más fácilmente después».[18]

Aunque Leopoldo seguía siendo reacio a involucrarse en los asuntos franceses, el fracaso de la huida a Varennes los obligó a él y a otros gobernantes europeos a hacer algún gesto hacia su homólogo francés. Hasta ese momento, las principales potencias europeas se habían contentado con tratar la agitación en Francia como un asunto interno; algunos de ellos estaban secretamente complacidos de ver a la principal potencia del continente fuera de juego mientras seguían con sus propios objetivos. Para las tres potencias orientales, Austria, Prusia y Rusia, los acontecimientos en Polonia eran más apremiantes que la situación en Francia. El 3 de mayo de 1791, reformadores «patriotas», que actuaban junto con el rey Stanislas, organizaron una revolución parlamentaria, recortaron los poderes de la aristocracia y concedieron derechos políticos a los residentes urbanos más ricos, aunque no al campesinado. La *Gazette de Leyde* comparaba la Revolución polaca, en la que «no se ha derramado una gota de sangre», con la agitación en Francia, pero los vecinos de Polonia, que no estaban dispuestos a tolerar un movimiento que amenazara su influencia, comenzaron a planificar una intervención militar que daría lugar a la partición del país en 1792.[19]

El emperador Leopoldo y el rey de Prusia se reunieron en la ciudad de Pillnitz el 17 de agosto de 1791 y emitieron una declaración conjunta en la que se calificaba «la actual posición de Su Majestad el Rey de Francia [...] como un asunto de interés común para todos los soberanos de Europa», convirtiendo así a la Revolución francesa en un asunto internacional. Sin embargo, evitaron hacer ofrecimientos para intentar derrotarla. De hecho, dejaron claro que no tenían intención de actuar a menos que todas las demás potencias europeas estuvieran de acuerdo, condición que probablemente no se cumpliría. Como le dijo el leal Fersen, ahora exiliado en Bruselas, a la

reina: para muchas potencias europeas «es útil que el desorden y la anarquía continúen, que el reino se debilite sin que parezca que ellos contribuyen y sin que les cueste nada». Los hermanos del rey, ahora juntos en Coblenza después de que el conde de Provenza lograra huir de Francia, hicieron que se publicara y se distribuyera la declaración de Pillnitz en Francia junto con su propia carta de presentación, en la que insistían con optimismo en que los monarcas europeos estaban listos para intervenir en Francia. Le suplicaron a Luis XVI que no abandonara «las máximas fundamentales de la monarquía» y consiguieron indignarle al querer nombrar a un nuevo gobernador real para la colonia de Saint-Domingue sin su aprobación.[20] Las acciones de los hermanos de Luis XVI hicieron temer que hubiera una invasión de Francia y socavaron la credibilidad del apoyo a la Constitución que había dado el rey.

Mientras tanto, Barnave, Duport y el resto de los líderes de los recién formados Feuillants se pusieron a la tarea de revisar la Constitución de manera que, según ellos, protegería el derecho a la propiedad y fortalecería el poder ejecutivo del gobierno. Propusieron elevar el requisito de propiedad para votar de manera que excluyera completamente a los campesinos y a los artesanos urbanos. Barnave insistió en que «para la mayoría de los hombres, la tranquilidad es más importante que la libertad», lo que hizo que los radicales le tildaran de hipócrita. Afirmaban que había abandonado los valores fundamentales de la Revolución que tanto había hecho por lanzar en el verano de 1789. Robespierre, que se había propuesto salvar el Club Jacobino tras la ruptura con los Feuillants, fue el más catastrofista; los denunció por querer crear una nueva aristocracia: «¿De qué me sirve como ciudadano que deje de haber nobles», quiso saber, «si veo que a esa clase privilegiada la sucede otra a la que me veo obligado a dar mi voto para que pueda tratar sobre mis más preciados intereses?». Los militantes populares exigieron que se permitiera participar a los ciudadanos más pobres en las elecciones de las que saldría la nueva Asamblea. «Se anima a los trabajadores a que se manifiesten con el pretexto de que, puesto que todos los hombres han sido declarados iguales por la ley y por la

naturaleza, no se debe permitir que la riqueza cree diferencias entre ellos», informó el cronista Adrien Colson.[21]

La gente no veía con buenos ojos los esfuerzos que hacían los Feuillants por revisar la Constitución, lo que permitió a Robespierre recuperar la lealtad de muchos de los jacobinos que se habían pasado al nuevo club. Hizo hincapié en su inquebrantable compromiso con la Constitución y su falta de ambición personal en un momento en que Barnave y Duport parecían estar buscando la manera de que les nombraran ministros, a pesar de las disposiciones que se habían aprobado el mes de mayo anterior para establecer el decreto de renuncia. Robespierre se ganó el apodo del «Incorruptible» y la fama de político dispuesto a poner el interés público por delante de su propia carrera. En las provincias, militantes patriotas como Goujon apoyaban a la red jacobina y trabajaban para ganarse a la población. Goujon intimidó al sacerdote local para que le permitiera usar la iglesia para dar conferencias a los aldeanos todos los domingos. No pretendía destruir la religión –«admiraba, por encima de todo, la moralidad de Jesús, en la que encontraba todos los principios necesarios para la felicidad y la paz de las familias y la sociedad», escribió su amigo Tissot–, pero pensaba que los sacerdotes distorsionaban las verdaderas enseñanzas del cristianismo. En sus conferencias promulgó el sueño de los revolucionarios de «regenerar» a la población explicando la Declaración de Derechos y anunciando que «el pobre y virtuoso agricultor, inclinado sobre la tierra que trabaja con las manos, [...] es mil veces más grande [...] que los altivos hombres ricos que piensan que los han elevado por encima de otros hombres». Más tarde Tissot recordaría las lágrimas de los campesinos cuando Goujon les describió «la felicidad que promete la verdadera libertad».[22]

El 13 de septiembre de 1791, el rey anunció que aceptaría la Constitución tal como estaba, sin más revisiones. En ese momento, las elecciones para la Asamblea Legislativa que reemplazaría a la Nacional ya estaban organizadas. Aunque muchos de los nuevos diputados compartían

las opiniones de los Feuillants, era evidente que los jacobinos también tendrían poderosos portavoces en el nuevo órgano, entre otros estarían figuras destacadas como Brissot y Condorcet, y alguno menos conocido como Pierre Vergniaud, que representaba a Burdeos. Sin embargo, no habría más diputados elegidos para representar a los estamentos privilegiados del antiguo régimen, que habían constituido la mitad de los miembros originales de la Asamblea Nacional. Los últimos días antes de entregar el poder a sus sucesores, los diputados de la Asamblea Nacional revocaron las decisiones que habían tomado anteriormente sobre varios asuntos polémicos. Después de muchas dudas, votaron a favor de la anexión del enclave papal de Aviñón en el sur de Francia, sentando un precedente que amenazaba con causar conflictos con el país vecino. Barnave se movilizó para defender a los colonos blancos de Saint-Domingue, que habían prometido «enterrarse bajo sus ruinas, antes que permitir que se promulgara el decreto del 15 de mayo», que concedía derechos a los hombres libres de color nacidos de padres libres y legalmente casados. Mientras los diputados escuchaban el recordatorio de Barnave de que «este régimen es opresivo, pero proporciona un medio de vida en Francia a varios millones de hombres», no eran conscientes de que miles de negros esclavizados en la colonia más rica del país acababan de levantarse contra esa opresión; las noticias de la rebelión que comenzó la noche del 22 de agosto de 1791 llegarían a París un mes más tarde. Tras un debate tan furioso como el choque original sobre el tema en mayo, Barnave obtuvo un último triunfo político al conseguir que la Asamblea Nacional derogara el decreto del 15 de mayo. Los diputados dejarían la cuestión de los derechos de los hombres libres de color a la discreción de los colonos blancos.[23]

Aunque se negó a mantener su anterior postura en nombre de los derechos de la gente libre de color, la Asamblea revocó las restricciones que había seguido imponiendo a los judíos asquenazíes de Alsacia. Un decreto del 28 de septiembre les ofreció derechos de ciudadanía sobre la misma base que a todos los demás habitantes del país, aunque, a diferencia de los miembros de otros grupos minoritarios, se les exigió que prestaran un juramento cívico. En el marco de este juramento, debían renunciar

explícitamente a los privilegios y exenciones legales especiales que las comunidades judías organizadas habían tenido hasta entonces; se les había permitido seguir sus propias leyes en asuntos como el matrimonio y el divorcio, y resolver entre ellos las disputas legales en los tribunales judíos. Mientras que la condición de los judíos suscitó un debate considerable, otra minoría vio su condición transformada sin ningún tipo de discusión. Como parte de una revisión general del Código Penal del país, los diputados votaron a favor de eliminar las penas por «esos falsos delitos, creados por la superstición, el feudalismo, el sistema tributario y el despotismo».[24] Entre esos «falsos delitos» estaba la homosexualidad: Francia se convirtió así en el primer país en despenalizarla completamente.

El 30 de septiembre de 1791, los diputados de la Asamblea Nacional se reunieron por última vez en la Salle de Manège, la improvisada sala de reuniones creada para ellos cuando llegaron a París desde Versalles. No había equivalente a la elaborada ceremonia que había abierto los Estados Generales más de dos años antes. Faltaban algunas de las principales personalidades que habían dado forma decisiva a la extraordinaria historia de la Asamblea. Mirabeau, cuya estruendosa oratoria había reunido a los diputados para desafiar al monarca en la sesión real del 23 de junio de 1789, había muerto; Mounier, que había tenido tanta influencia en los primeros debates, había dimitido tras los Días de Octubre y había regresado a su Delfinado natal. En su último día de trabajo, como de costumbre, los diputados tenían una agenda muy apretada. Entre otras tareas, quedaba redactar un informe sobre la situación financiera, enumerar los problemas de las provincias y enmendar varios decretos. Su presidente dio las gracias al personal que les había asistido en su labor y les recordó que había que cumplir con el protocolo cuando el rey viniera a cerrar oficialmente la sesión.

Se encomendó a Emmanuel Pastoret –un diputado recién elegido para la Asamblea Legislativa que iba a sustituir a la Asamblea Nacional–, la única

evaluación sustancial de lo que habían logrado los legisladores durante los veintinueve meses de trabajo.

> La libertad había huido más allá de los mares o se había escondido en las montañas –dijo–. Ustedes la colocaron de nuevo en su trono entre nosotros. El despotismo había borrado todas las páginas del libro de la naturaleza; insertaron en él esta declaración inmortal, el Decálogo de los hombres libres [...]. Crearon una representación política que [...] hizo de la ley la expresión general de la voluntad de los franceses [...]. Rompieron todos los eslabones de la cadena feudal bajo la que [el pueblo] estaba oprimido. El orgullo había separado a los hombres; ustedes trabajaron para volver a unirlos. La igualdad se había distorsionado hasta tal punto que se convirtió en un privilegio para defender el país. Todos los ciudadanos se han convertido en soldados [...]. Hicieron más venerable el servicio del altar [...]. Liberaron el comercio, la agricultura, la industria, el pensamiento. No satisfechos de haber creado la Constitución más bella del universo, se entregaron a una labor tan inmensa en las leyes que aquellos que algún día intenten imitarlos quizá digan [...] lo que Alejandro dijo de Filipo: «No me ha dejado nada por conquistar».[25]

Pocos de los diputados que escucharon a Pastoret podrían haber aceptado completamente esta visión optimista de sus logros. Hubo celebraciones oficiales de la finalización de la Constitución; el rey pagó la iluminación de los jardines de las Tullerías y los Campos Elíseos el 25 de septiembre, y la ciudad se engalanó todavía más una semana después. Pero, aunque los diputados participaron en estos eventos, sabían muy bien que el país seguía estando en una situación conflictiva. Numerosos nobles firmaron una protesta contra la Constitución y se aceleró el ritmo de las emigraciones. En la izquierda, el descontento con la Constitución era igualmente fuerte. El *Révolutions de Paris* contó a sus lectores cómo los manifestantes habían rodeado a Robespierre y a su aliado Pétion, y les habían colocado coronas de hojas de roble en la cabeza, en homenaje a su tenaz oposición a las características antidemocráticas del documento. En cuanto al resto de los diputados, el diario escribió: «Se han ido, estos representantes infieles, cubiertos de oro y maldiciones». El militante y ateo Sylvain Maréchal dijo a los diputados salientes que no habían logrado nada: «Sigo viendo, igual que antes, dos castas distintas, la rica y la pobre [...], a pesar de la Declaración de Derechos».[26]

Al ver que la Constitución entraba en vigor sin ninguna mención a los derechos de la mujer, la siempre franca Olympe de Gouges se inspiró para reescribir la sección más célebre del documento en forma de Declaración de los Derechos de la Mujer; comenzaba con la afirmación de que «la mujer nace libre y vive igual que el hombre en sus derechos». Su apropiación creativa del lenguaje propio de la Asamblea Nacional le dio a su documento una fuerza especial. Insistió en que «los ciudadanos de ambos sexos, siendo iguales ante la ley, deben ser admitidos por igual en todos los honores, cargos y empleos públicos», y defendió el derecho de la mujer a hablar en público con una formulación impactante: «La mujer tiene el derecho de montar el andamio; debe tener igualmente el derecho de montar la tribuna». Concluyó su manifiesto con un llamamiento a un contrato de matrimonio completamente igualitario.[27] En medio del alboroto de 1791, la publicación de De Gouges llamó poco la atención, pero con el auge de los movimientos modernos, se ha llegado a reconocer como un hito del pensamiento feminista.

Mientras se preparaban para dispersarse, muchos de los diputados habían empezado a arrepentirse de los cambios radicales que habían traído consigo los decretos que votaron la noche del 4 de agosto de 1789; otros estaban convencidos de que no se había hecho lo suficiente para cumplir las promesas de establecer la igualdad y extinguir los restos del feudalismo. Sin embargo, la mayoría de los diputados estaban orgullosos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que habían dejado intacta en agosto de 1791 durante sus debates sobre la revisión de la Constitución, aunque eran muy conscientes de las amargas disputas que les habían dividido sobre el significado de sus principios. Ferrières aseguró a su esposa que «el rey y la reina parecen estar completamente a favor de la Constitución», pero hacía falta un gran optimismo para creer en su sinceridad.[28] Tanto si los diputados habían apoyado como si se habían opuesto a la Constitución Civil del Clero, difícilmente podían estar de acuerdo con la afirmación de Pastoret de que su legislación había resuelto las cuestiones religiosas a las que se enfrentaba el país. Sabían lo divididos que estaban los militares como resultado de los cambios producidos por la

Revolución. Otro de sus últimos actos, en septiembre de 1791, fue un esfuerzo por reconciliar los principios de libertad económica que Pastoret celebraba, con las realidades de la vida de las comunidades campesinas, cuyos disturbios seguían siendo preocupantes. Sin embargo, independientemente de sus verdaderos sentimientos sobre los logros de la Asamblea, los diputados salientes sabían que habían realizado inmensos cambios en la vida de su país. Para bien o para mal, habían inaugurado una nueva era de la historia, para su propio país y para el mundo que lo rodeaba.

12

Una segunda revolución

Octubre de 1791-agosto de 1792

El 1 de octubre de 1791, un día después de la última sesión de la Asamblea Nacional, los 745 miembros de la primera legislatura elegida por la nueva Constitución ocuparon los lugares de sus predecesores en la Manège, la antigua sala de equitación que se había convertido en un lugar de reunión parlamentaria dos años antes. En la Asamblea Nacional la mitad de los legisladores habían sido representantes de los estamentos privilegiados del antiguo régimen, el clero y la nobleza; sin embargo, ahora, en la nueva legislatura una mayoría abrumadora de los miembros procedían del Tercer Estado. Según se estipulaba en las normas aprobadas en 1789, debían ser lo suficientemente ricos para pagar el equivalente a un *marc d'argent* en impuestos, lo que los distanciaba de la población urbana de París y del campesinado, que constituía la gran mayoría de la población francesa. Gracias a la «ordenanza de abnegación» de Robespierre, ninguno de los nuevos diputados había sido miembro de la Asamblea anterior. Los nuevos diputados eran partidarios de la Revolución: dos tercios de ellos habían ocupado cargos locales desde el comienzo del levantamiento. Igual que los miembros de la Asamblea Nacional, procedían de todo el país, y pocos conocían a sus nuevos colegas antes de que se les encargara poner en marcha la nueva Constitución.

Como los miembros de la nobleza habían emigrado y el clero que se oponía a la Constitución Civil no podía presentarse, no había defensores abiertos del antiguo régimen para ocupar el lugar de los diputados de la Asamblea Nacional, como el abate Maury, que había denunciado de forma continuada el experimento revolucionario. Un puñado de los nuevos

legisladores, como Antoine Christophe Merlin de Thionville, Claude Basire y François Chabot, se asociaron al Club de los Cordeliers, radicales de París que, tras la huida del rey, habían exigido que se sustituyera la monarquía por una república democrática. Y sólo 52 de los nuevos diputados se unieron al Club Jacobino que, fiel a su nombre oficial, Amigos de la Constitución, no quisieron criticar abiertamente la nueva Constitución que acababa de entrar en vigor. Durante su viaje a Lyon, Madame Roland escribió a Robespierre, con el que seguía teniendo amistad, para decirle que la población «se ha burlado de la palabra "república" y un rey les parece esencial para su existencia». Su carta reforzó la convicción de Robespierre de que los partidarios de la Revolución debían defender y vigilar de cerca las disposiciones del documento y hacer recaer sobre el rey la responsabilidad de su no cumplimiento. A mediados de octubre de 1791, cuando el periodista Camille Desmoulins predijo que la nueva Constitución no duraría mucho, por la evidente contradicción entre su «prefacio divino», la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y sus otras disposiciones, muchos jacobinos lo atacaron por desacreditar las nuevas instituciones.[1]

Inicialmente, los Feuillants, el grupo de moderados que se había separado de los jacobinos tras la matanza del Campo de Marte en julio de 1791, tenían más adeptos entre los nuevos diputados. La popularidad de los Feuillants reflejaba la esperanza generalizada de que el rey cooperara y ayudara a que funcionara la nueva monarquía constitucional. De espaldas a los demás, el antiguo líder de los Feuillants, Barnave, mantuvo su correspondencia con María Antonieta, instándola a presionar al rey para que hiciera gestos que demostraran de forma más convincente que aceptaba el nuevo régimen. Los acontecimientos habían transformado a la aturdida princesa cuyas escapadas habían escandalizado a Versalles en una estratega política. La reina sustituyó en gran medida al rey en su intento de salvar la monarquía, tanto de los revolucionarios como de «las locuras de los príncipes y emigrantes» cuyos esfuerzos por poner en marcha una invasión extranjera pusieron en peligro la vida de la pareja real. María Antonieta seguía oponiéndose a cualquier cooperación genuina con la Revolución. En

una carta a Fersen, escribió: «No hay nada que hacer con esta Asamblea actual, son una colección de criminales, tontos e idiotas».[2] Sin embargo, estaba convencida de que la única posibilidad que había para derrotar al movimiento era dejar que sus propias contradicciones internas lo destruyeran.

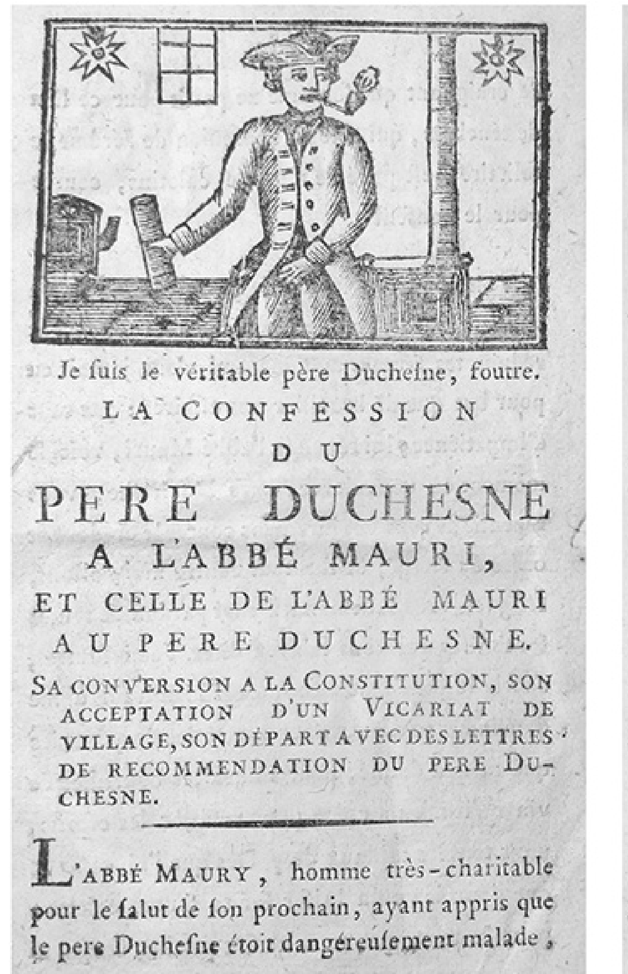
Como se hizo evidente que Luis XVI no estaba dispuesto a comprometerse con ellos, el club de los Feuillants perdió su atractivo para los diputados. Los jacobinos, por el contrario, siguieron ampliando su red de filiales en las provincias, y los debates de sus reuniones en París, ampliamente difundidos en la prensa, atrajeron al público que apoyaba sus ideas. Robespierre, que tanto había hecho por preservar la red jacobina después de la ruptura con los Feuillants, seguía siendo una presencia importante en el club de París, aunque ya no tenía cargo. Sin embargo, el representante más destacado del movimiento era Brissot, periodista y diputado recién elegido. Encontró el apoyo de un grupo de diputados del departamento de la Gironda, la zona de los alrededores de Burdeos. Entre ellos estaban Pierre Vergniaud, un orador deslumbrante, y sus colegas Élie Guadet y Armand Gensonné. Los periodistas hostiles pronto empezaron a hablar de girondinos o «brissotinos» como una facción organizada, aunque el grupo no tenía una estructura formal ni un programa claro. Atraídos por la brillante e ingeniosa Madame Roland, Brissot y muchos de sus aliados se reunían regularmente en el apartamento de ella y su esposo, mucho mayor. A diferencia de Olympe de Gouges o Etta Palm d'Aelders, Madame Roland no se pronunciaba sobre cuestiones relativas a los derechos de la mujer, pero estaba deseosa de dar aliento a la Revolución y animaba enérgicamente a los hombres de su círculo a defender los principios de ésta.

Brissot estaba convencido de que él se merecía dirigir el movimiento revolucionario y no le faltaba algo de razón. Su labor en la fundación de la Sociedad de los Amigos de los Negros dejaba ver que creía genuinamente en el ideal de libertad para todos los hombres, incluso cuando significaba desafiar fuertes intereses creados; y en 1789 había estado entre los más

firmes defensores de la libertad de prensa y de las nociones de derechos naturales y soberanía nacional. Cuando su antiguo socio, Mirabeau, se empeñó en seguir el peligroso camino de combinar el apoyo a la Revolución y la defensa de una monarquía fuerte, Brissot siguió mostrando grandes recelos ante el poder real. También se había vuelto rápidamente contra los primeros líderes jacobinos, como Barnave y Duport, en el momento en que empezaron a alejarse de lo que él consideraba los principios esenciales de libertad e igualdad. Hasta que lo eligieron para la Asamblea Legislativa, Brissot había sido aliado de Robespierre, pero estaba convencido de que él tenía un conocimiento más amplio del mundo que el serio abogado de provincias, procedente de Arras, gracias a su experiencia anterior a la Revolución, que incluía extensos viajes al extranjero y contactos con influyentes figuras políticas. Aunque se sentía a gusto en asambleas mayoritariamente de clase media o entre pequeños grupos de amigos, como los que se reunían en el apartamento de los Roland, Brissot no tenía la capacidad de Danton para relacionarse fácilmente con la gente corriente de París, y su periódico carecía del atractivo populista de las publicaciones que se atribuían al *Père Duchêne* o al *Ami du peuple* de Marat. A la larga, la incapacidad de Brissot para mantener la confianza de los radicales jacobinos o para ganarse al movimiento popular resultaría fatal para él y para su red de aliados. Pero durante casi un año, nadie tuvo más influencia que él en el devenir de la Revolución.

Mientras Brissot y los jacobinos se enfrentaban con los más conservadores Feuillants, apareció una nueva palabra en el vocabulario revolucionario: *sans-culotte*, literalmente, «sin calzones». Al principio, este epíteto lo utilizaban con desdén los conservadores para estigmatizar a los hombres de clase baja que llevaban pantalones largos de trabajo en lugar de los calzoncillos y las medias que se exigen en una sociedad respetable. Pero los periodistas de la izquierda no tardarían en convertir el término en una etiqueta para los verdaderos partidarios de la causa de la gente, en particular los de las clases bajas, precisamente. La respuesta más famosa a la pregunta «¿qué es un *sans-culotte*?» lo definió como «un ser que siempre va a pie, no tiene millones [...] y vive de forma sencilla en un cuarto o quinto piso con

su esposa e hijos, si tiene alguno. Es útil, porque sabe arar un campo, trabajar en una forja, utilizar una sierra o una lima, poner un tejado, hacer zapatos y dar hasta la última gota de su sangre por la República».[3]

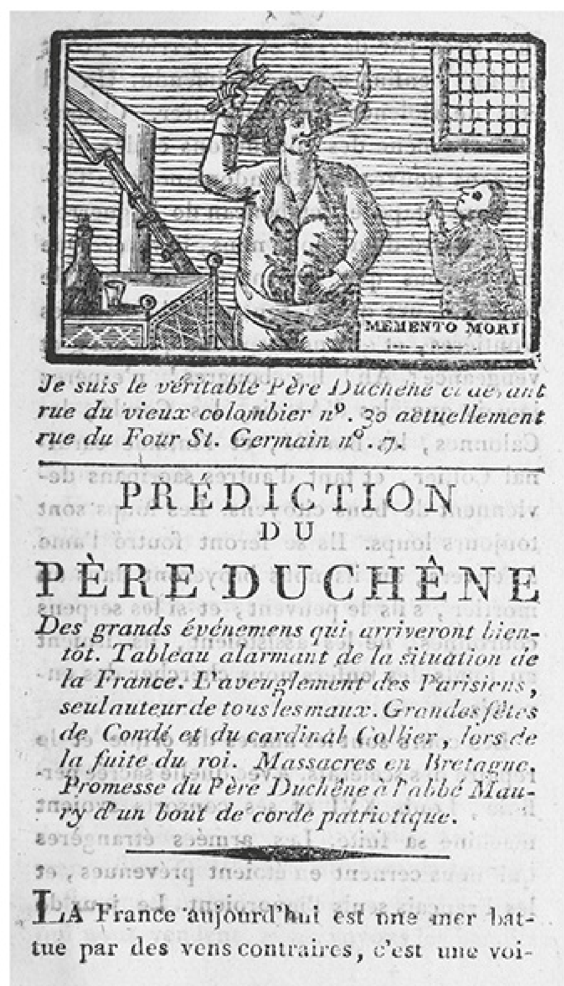


Je suis le véritable père Duchesne, foutre.

LA CONFESSION DU PERE DUCHESNE A L'ABBÉ MAURI, ET CELLE DE L'ABBÉ MAURI AU PERE DUCHESNE.

SA CONVERSION A LA CONSTITUTION, SON ACCEPTATION D'UN VICARIAT DE VILLAGE, SON DÉPART AVEC DES LETTRES DE RECOMMENDATION DU PERE DUCHESNE.

L'ABBÉ MAURY, homme très-charitable pour le salut de son prochain, ayant appris que le pere Duchesne étoit dangéreusement malade ;



MEMENTO MORI

Je suis le véritable Père Duchêne ci devant rue du vieux colombier nº. 30 actuellement rue du Four St. Germain nº. 7.

PRÉDICTION DU PÈRE DUCHÊNE

Des grands événemens qui arriveront bientôt. Tableau alarmant de la situation de la France. L'aveuglement des Parisiens, seul auteur de tous les maux. Grandes fêtes de Condé et du cardinal Collier, lors de la fuite du roi. Massacres en Bretagne. Promesse du Père Duchêne à l'abbé Maury d'un bout de corde patriotique.

LA France aujourd'hui est une mer battue par des vens contraires, c'est une voi-

La voz del pueblo. Dos ejemplos de periódicos atribuidos al Père Duchêne, escritos en un lenguaje simple que la gente corriente podía entender. A la izquierda, un ejemplar de 1790 muestra al Père Duchêne ataviado con un abrigo de aspecto elegante. En la imagen de la derecha, de 1791, lleva la ropa tosca de un trabajador. Las dos pistolas al cinto, el hacha en alto y el mosquete al alcance de la mano no dejan ninguna duda sobre su militancia revolucionaria. Fuente: Biblioteca Newberry.

En la práctica, muchos de los que llegaron a llamarse *sans-culottes* eran más ricos y más educados de lo que sugería el estereotipo. Ser *sans-culotte* era tanto una cuestión de comportamiento político como de clase social. Muchos de los líderes del movimiento *sans-culotte* de París eran pequeños empresarios como el veterano vidriero Jacques Ménétra. A éste lo llegaron a elegir para numerosos puestos de responsabilidad en su sección de París, lo

cual era una prueba del alcance que tenían sus conexiones locales. Otros, como Antoine-Joseph Santerre, propietario de una cervecería, o Claude François Lazowski, un noble polaco, consiguieron adeptos gracias a su liderazgo durante los viajes revolucionarios. El *sans-culotte* era el opuesto virtuoso del *aristocrate*, pero también se oponía cada vez más al estrato más rico y educado del Tercer Estado. Los militantes radicales comenzaron a utilizar el término *sans-culotte* para reunir no sólo a quienes se oponían a los antiguos nobles, sino a todos aquellos que se negaban a identificarse con la gente común.

Aunque la popularidad del término colocó a las clases bajas urbanas en el centro del debate político, las actitudes del campesinado tuvieron la misma importancia en el desarrollo de los acontecimientos de la Revolución. Entre las muchas promulgaciones que hizo a última hora la Asamblea Nacional saliente había un código rural que tenía por objeto institucionalizar los cambios radicales de las leyes que afectaban a la vida de los aldeanos, que eran la abrumadora mayoría de la población francesa. Los legisladores de París tenían la imagen mental de unos campesinos sencillos a los que podían moldear para que fueran una nueva ciudadanía «regenerada», pero reconocían que no podían cambiar la dura realidad económica de la vida rural. Como escribieron los redactores del *Feuille villageoise*, un semanario económico destinado a un público rural, «como no podemos aportar riqueza a los pueblos, por lo menos intentaremos darles verdad e instrucción».[4] La actitud de muchos diputados con la población rural se reflejaba en el periódico, que decía abiertamente a sus lectores que carecían de los conocimientos básicos para entender los debates políticos a menos que se presentaran en términos más sencillos.

Puede que los campesinos no siguieran los entresijos de la política tan de cerca como los *sans-culottes* de París, pero tenían una idea muy clara de cuáles eran sus propios intereses. La población del país no era la masa uniforme que los diputados a menudo imaginaban. Las comunidades rurales de las pobladas regiones trigueras del norte de Francia estaban profundamente divididas por las tensiones entre la minoría de ricos empresarios agrícolas y la mayoría de trabajadores casi sin tierra, mientras

que en los pueblos donde la propiedad estaba distribuida de forma más equitativa había más armonía. Las aldeas prósperas con extensas propiedades de tierras comunes y bosques no tenían los mismos intereses que los asentamientos pobres con pocos recursos compartidos. Las reacciones a la Revolución en las regiones rurales donde los campesinos eran profundamente religiosos eran muy diferentes de las reacciones en las zonas donde la devoción era menor, y las experiencias también eran diferentes dependiendo de si los residentes de una comunidad tenían el francés como idioma principal o no.

Aunque muchos campesinos tal vez no entendieran los detalles de los extraordinarios acontecimientos que comenzaron en Versalles y París en 1789, pronto se dieron cuenta de que su lugar en la sociedad había cambiado de forma drástica. Un antiguo *seigneur* se quejaba de que «los que antes eran vasallos ahora se creen más poderosos que los reyes».[5] Después de la noche del 4 de agosto, los terratenientes y sus representantes ya no dirigían los tribunales locales; tampoco podían obligar a la población a utilizar su molino o su lagar. Las disputas legales a nivel local, que antes se dirimían en los tribunales señoriales, ahora las gestionaban los jueces de paz que habían salido elegidos en la localidad. En sus improvisados juzgados, se permitía que los litigantes presentaran sus argumentos de forma oral, en lugar de tener que pagar a abogados y secretarios para que los escribieran. Los jueces trataban de resolver el mayor número posible de disputas a través de una mediación informal. Más barato y simple que los tribunales del antiguo régimen, el nuevo sistema demostró a los campesinos que la Revolución tenía algunos beneficios reales.

Aunque la mayoría de los campesinos no sabían leer, había al menos un puñado de suscriptores de periódicos en las comunidades más pequeñas, y compartían los últimos informes con sus vecinos. Las asambleas revolucionarias bombardearon a los humildes alcaldes de las aldeas con leyes y decretos que debían hacer cumplir, y las fiestas públicas, como las federaciones de 1790, vinculaban a la población con los acontecimientos nacionales. La formación de unidades de la Guardia Nacional, que tuvo lugar incluso en las aldeas rurales, puso armas en manos de los campesinos

y les dio el poder de defender sus intereses. Sólo en el departamento de Haute-Saône, treinta pueblos con poblaciones de menos de seiscientos habitantes tenían sus propias unidades de guardia.[6] En los primeros años de la Revolución, la Guardia Nacional rural servía principalmente como policía local y como presencia simbólica en las ceremonias patrióticas; la pertenencia a la misma no era especialmente onerosa. Sin embargo, cuando la Asamblea Nacional pidió ayuda a los guardias para presionar a los sacerdotes locales para que prestaran el juramento de apoyo a la Constitución Civil, algunos de ellos se encontraron incómodos con sus vecinos.

A partir de 1789, los abogados de clase media que dominaban las asambleas revolucionarias apoyaron sistemáticamente la idea de que los propietarios debían ser capaces de hacer lo que quisieran con sus tierras y los cultivos que éstas producían. Este ideal individualista estaba arraigado en los fundamentos económicos de los fisiócratas del siglo XVIII y argumentado en numerosos artículos de la *Enciclopedia*, pero pocos campesinos estaban dispuestos a aceptarlo, a pesar de las conferencias de los editores de *Feuille villageoise*, que los regañaban desesperadamente y les decían: «Queréis que los grandes productores, los terratenientes, os contraten y aumenten vuestros salarios, pero no queréis que tengan derecho a vender los frutos de sus tierras». El código rural promulgado por la Asamblea Nacional el 28 de septiembre de 1791 contenía un lenguaje audaz que prometía que los terratenientes eran «libres de variar a su voluntad el cultivo y la gestión de sus tierras, de administrar sus cosechas como deseen y de disponer de todos los productos de su propiedad dentro y fuera del reino». Desde el punto de vista de los campesinos, esto significaba que los terratenientes, a menudo forasteros, podían hacer caso omiso de las prácticas establecidas desde hacía mucho tiempo que protegían a los miembros más pobres de la comunidad, como la exigencia de que se permitiera a todo el ganado de la aldea pastar en los campos una vez recogido el grano. Los autores del código rural eran conscientes de que su intención de aplicar los principios de la libre empresa en el campo encontraría oposición, así que añadieron que las libertades de los

propietarios de tierras se limitaban a las que podían ejercerse «sin menoscabo de los derechos de los demás y respetando la ley», calificación que protegía los derechos de recolección y pastoreo.[7] Muchas de estas limitaciones tradicionales del uso de la tierra persistieron durante gran parte del siglo XIX.

La mayoría del campesinado creía que los cambios producidos por la Revolución les daría la oportunidad de adquirir tierras propias o ampliar las que tenían. Podrían haberlo conseguido gracias a la venta de las tierras de la Iglesia y más tarde de las propiedades confiscadas a los nobles que huyeron del país, pero lo cierto es que sólo una parte relativamente pequeña de esas propiedades terminó en manos de los campesinos. Los administradores revolucionarios, presionados por la necesidad de generar la mayor cantidad de dinero posible, consideraron que lo más ventajoso era vender estas tierras nacionales como grandes parcelas en lugar de subdividirlas para hacerlas asequibles a los campesinos más pobres. En consecuencia, quienes compraron la mayor parte de las propiedades fueron los habitantes ricos de las ciudades, no los aldeanos. El noble Gaston de Lévis señaló que fue algo habitual que los «capitalistas» que «compraron grandes superficies […] las vendieran [más adelante] en pequeñas unidades a los habitantes más pobres de las ciudades y a los campesinos»; así, con el paso de los años, muchas tierras sí terminaron en manos del campesinado.[8] En 1791, sin embargo, los campesinos llegaron a la conclusión de que no estaban disfrutando los beneficios que la Revolución les había prometido.

Además de enfrentarse a los ciudadanos enardecidos en París y a un campesinado convencido de que la Revolución no les favorecía, la Asamblea Legislativa recién elegida se encontró de pronto con una crisis en la colonia de ultramar más valiosa de Francia. La noche del 22 de agosto de 1791, una insurrección multitudinaria entre los negros esclavizados en la provincia norte de Saint-Domingue se extendió por todo el distrito azucarero más rico de la isla. Los rebeldes prendieron fuego a los campos de caña de azúcar, que ardían a gran velocidad, las columnas de humo se

veían a kilómetros de distancia; atacaron las casas de los amos, y mataron a varios propietarios y gerentes de plantaciones. Los colonos blancos, convencidos de que los esclavos negros nunca podrían haber organizado una revuelta tan efectiva por su cuenta, culparon a *philanthropes* metropolitanos (amantes de la humanidad), como Brissot, por meterles ideas explosivas sobre la libertad en la cabeza. No confiaban en los legisladores de Francia, así que los líderes de la Asamblea Colonial de Saint-Domingue pidieron ayuda a las vecinas colonias británicas y españolas antes de comunicarse con su propio gobierno. Esto dio a entender a Brissot y a sus seguidores que los colonos preferían una ocupación extranjera de la isla que la llegada de tropas francesas para sofocar la rebelión, ya que éstas podrían traer consigo ideas revolucionarias.



Levantamiento en Saint-Domingue. La revuelta en la colonia caribeña francesa de Saint-Domingue (hoy Haití) fue el mayor desafío a la esclavitud de la historia. Su estallido obligó a los revolucionarios franceses a enfrentarse a la contradicción entre sus principios de libertad e igualdad y la realidad del sistema opresivo de las plantaciones. Esta ilustración imaginaria del levantamiento se realizó en Alemania, lo que nos da una idea de la visión que podía tener la población alemana de los acontecimientos en Francia. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

Es posible que a algunos de los participantes en el levantamiento les hubieran llegado noticias de los debates revolucionarios franceses, sobre los cuales los colonos hablaban libremente. Pero lo que más motivó a los insurgentes fue el rumor generalizado de que el rey francés quería mejorar su suerte concediéndoles tres días a la semana para trabajar por un salario y así ganar el dinero suficiente para comprar su libertad. La población negra tampoco entendía la campaña revolucionaria contra la Iglesia. Algunos de los sacerdotes católicos de la colonia mantenían contactos con los líderes de la insurrección y servían de intermediarios, intentando reducir la violencia. Paradójicamente, el levantamiento de los esclavos de Saint-Domingue comenzó como un movimiento más comprensivo con los valores del trono y del altar que con los principios abstractos de libertad e igualdad que se habían proclamado en 1789, pero que no se aplicaban a las colonias. Las ideas revolucionarias metropolitanas tuvieron más impacto en la gente libre de color de Saint-Domingue, que comenzó su propia insurrección en partes de las provincias del oeste y del sur de la isla casi simultáneamente a la revuelta de los esclavos en el norte. Querían reclamar los derechos que se les habían prometido en el decreto del 15 de mayo; así que no pedían la liberación de los esclavos, ya que muchos eran ellos mismos dueños de plantaciones, pero sí complementaron sus propias fuerzas armando a algunos de los negros.

Debido al tiempo que tardaban los barcos en cruzar el Atlántico, las noticias de las revueltas en Saint-Domingue no llegaron a París hasta finales de octubre de 1791. Los informes pusieron a los defensores revolucionarios de la libertad y la igualdad en una posición incómoda. Olympe de Gouges, cuya obra *Zamore et Mirza*, representada por primera vez a finales de 1789, había llevado a la escena la causa abolicionista, ahora denunciaba la violencia de los insurgentes negros: «Los hombres no nacen para llevar cadenas, pero vosotros demostráis que son necesarias». Brissot y los Amigos de los Negros siempre habían insistido en que sólo abogaban por una eliminación gradual y pacífica de la esclavitud, no por una agitación que pusiera en peligro la vida de los blancos y la economía nacional. Negaron que sus críticas a la esclavitud pudieran haber desencadenado la

revuelta. Así como los colonos sospecharon inmediatamente que había sido una conspiración jacobina la que había instigado la insurrección de los esclavos, los reformadores blancos llegaron a la conclusión de que el movimiento debía estar atizado por los monárquicos. Una idea que no parecía descabellada, ya que la revuelta había comenzado casi al tiempo que llegó a Saint-Domingue la noticia del intento del rey de huir de París.[9]

El gobierno envió seis mil soldados a Saint-Domingue, era el inicio de un despliegue militar que continuaría a lo largo de la década revolucionaria. Barnave aseguró a María Antonieta que la noticia haría que «todo el comercio y todas las manufacturas de Francia se pronunciaran a favor del gobierno y en contra de los alborotadores». A medida que pasaban los meses sin una solución a la crisis, Brissot y sus aliados bloquearon el envío de más fuerzas militares hasta que los colonos blancos acordaron conceder derechos a la gente libre de color. Mientras los legisladores de París libraban batallas verbales sobre el tema, los blancos y la gente de color en la capital administrativa de la colonia, Puerto Príncipe, se enfrentaron el 21 de noviembre de 1791. La mitad de los edificios de la ciudad ardieron durante los altercados. Los problemas en Saint-Domingue hicieron que los precios del azúcar y del café se dispararan en Francia, lo que provocó, a su vez, disturbios en las tiendas de alimentación. En el Club Jacobino, los oradores propusieron que los miembros mostraran su patriotismo renunciando a ambos productos hasta que bajaran los precios, pero pocos parisinos estaban dispuestos a prescindir de los lujos que se habían convertido en el símbolo de la vida urbana civilizada. Llamado a poner fin a los disturbios, el comandante de una unidad de la Guardia Nacional de París reconoció que sus hombres no le obedecerían, porque «formaban parte del pueblo más que de la Guardia Nacional».[10]

Además de las disputas sobre la política colonial, la Asamblea Legislativa pronto se encontró dividida por las luchas sobre los *émigrés* y sobre la Iglesia que llevaron al rey a un enfrentamiento directo con la mayoría de los diputados. Para los diputados más radicales, como el dirigente de los

girondinos, Vergniaud, no cabía duda de que «la clemencia [...] no ha hecho más que envalentonar a los enemigos de la libertad y de la Constitución» y que «ha llegado el momento de reprimir su criminal audacia».[11] Un decreto del 9 de noviembre de 1791 iba dirigido específicamente a los príncipes reales que estaban presionando a los gobiernos extranjeros para que intervinieran en Francia. El decreto ordenaba que regresaran al reino a principios de 1792 o se los ejecutaría si alguna vez volvían a entrar en territorio francés. Luis XVI difícilmente podía apoyar una medida tan draconiana contra sus propios hermanos y rápidamente ejerció su derecho constitucional de vetar la ley. Una segunda ley, aprobada el 29 de noviembre de 1791, pretendía poner fin a la agitación perturbadora de los sacerdotes refractarios. Ofrecía a los que estuvieran dispuestos a disminuir su hostilidad hacia el nuevo gobierno la opción de tomar un juramento cívico que no suponía aceptar explícitamente la Constitución Civil del Clero en su totalidad. Una vez más el rey usó su veto; los revolucionarios estaban cada vez más convencidos de que el rey estaba decidido a proteger a los enemigos más recalcitrantes de la Revolución.

Temiendo que la supervivencia de la Revolución y del país estuviera en juego, los líderes patriotas se embarcaron en una apuesta arriesgada: liderados por Brissot, empezaron a hacer campaña para declarar la guerra contra las potencias extranjeras que daban refugio a los que se habían marchado de Francia. En la primavera de 1790, cuando se debatió el derecho del rey a declarar la guerra, los partidarios de la Revolución argumentaron que un pueblo libre nunca se embarcaría en una guerra de agresión. Ahora, Brissot pronunció una serie de vehementes discursos en el Club Jacobino, en los que citaba ejemplos de la Antigüedad y de la reciente guerra de independencia americana, y proclamó que «un pueblo que ha conquistado su libertad, después de doce siglos de esclavitud, necesita una guerra para consolidarla, para probarse a sí mismo, para demostrar que es digno de la libertad». Hizo suyo el exaltado lenguaje que se utilizaba en la Sociedad de los Amigos de la Verdad, donde él y sus partidarios aparecían a menudo, para anunciar que «dicha guerra es una guerra sagrada, una guerra cuyo mandato procede de lo alto y, como los cielos, purificará nuestras

almas». Una guerra por la libertad sería también una guerra por la igualdad: «Unirá hombres y rangos, elevará a la plebe, derribará al orgulloso patricio, la guerra en sí puede hacer a todos iguales y regenerar las almas».[12]

Si lo que el rey quería era engañar al país cometiendo traición, argumentaba Brissot, tanto mejor: «Necesitamos grandes traiciones: nos salvarán, pues aún existen en Francia poderosas dosis de veneno, se necesitarán fuertes explosiones para expulsarlas». Los revolucionarios americanos, recordó, habían salido fortalecidos a pesar de la traición de Benedict Arnold. Si los franceses lanzaban una «cruzada por la libertad universal», prometió Brissot, podían estar seguros de que conseguirían el apoyo de los ciudadanos de otros países. «Todas las naciones la desean en secreto», dijo. «Derribará todas las Bastillas extranjeras».[13] No le preocupaba la desorganización que había en el ejército francés por la marcha de los oficiales aristócratas. Si luchaban por una causa noble, insistió, los soldados franceses serían invulnerables. El estrecho aliado de Brissot, el banquero Étienne Clavière, aseguraba que la guerra restablecería el valor del *assignat*, el papel moneda de la Revolución, que se estaba depreciando porque, según él, lo estaban hundiendo deliberadamente los gobiernos extranjeros. La influyente Madame de Staël se unió a la campaña a favor de la guerra por sus propios motivos: acababan de nombrar a su amante, el apuesto conde de Narbonne, ministro de la Guerra, y esperaba hacerse un nombre gracias al lanzamiento de una ofensiva limitada contra Trier, un pequeño estado alemán donde se habían instalado algunos *émigrés*.

Los Feuillants y los moderados de la Asamblea Legislativa tenían serias dudas sobre esta aventura, pero temían que se les viera como defensores de los *émigrés* y de los opositores más radicales de la Revolución. Barnave le insistió a María Antonieta que era clave que el rey tomara una posición firme contra la protección que el gobierno austriaco estaba dando a los *émigrés* en los principados alemanes cercanos a la frontera francesa. En una carta secreta a Mercy d’Argenteau, su confidente durante años, se ve que la reina no estaba de acuerdo con la confianza ilimitada que tenía Brissot en el éxito francés. «No necesito extenderme mucho para explicar lo absurdo de

esta política: somos nosotros los que vamos a atacar cuando no tenemos ejército, disciplina, ni dinero». Sin embargo, María Antonieta explicó que Luis XVI iba a apoyar la exigencia de declarar la guerra. «El rey no es libre, tiene que seguir la voluntad general, y para nuestra seguridad personal aquí, tiene que hacer lo que se le dice».[14]

Era paradójico que el que se oponía más enérgicamente a la guerra de Brissot no era un moderado ni un monárquico, sino Robespierre, el defensor más acérrimo de la democracia radical entre los revolucionarios. En sus discursos en el Club Jacobino, desafió la convicción de Brissot de que los franceses contarían con un amplio apoyo si invadían países extranjeros. «La idea más extravagante que puede surgir de la cabeza de un político es creer que basta con que un pueblo entre en un territorio extranjero con fuerza militar para que allí se adopten nuestras leyes y nuestra constitución. A nadie le gustan los misioneros armados», advirtió. En su opinión, antes de que los franceses trataran de llevar los principios de libertad e igualdad a otros, necesitaban ganar la batalla contra sus enemigos en casa. También temía que la guerra proporcionara al rey y a sus ministros la oportunidad de subvertir la Constitución. La sobria evaluación de Robespierre de los riesgos de tratar de exportar las ideas democráticas a través de la intervención armada fue profética, pero, inicialmente, lo único que consiguió fue que le aislaran de la corriente principal del movimiento revolucionario francés. Madame Roland hizo un último intento infructuoso de evitar que se volviera contra sus antiguos aliados; después de una reunión privada, le escribió: «Vi con dolor que está convencido de que cualquier persona inteligente que piense de forma diferente a usted sobre la guerra no es un buen ciudadano». La postura de Robespierre también lo enfrentó a los voluntarios patriotas que se unían al ejército con entusiasmo. «¡Con qué entusiasmo entraremos en combate!», escribió uno de ellos. «Al luchar por la causa de nuestro país, estaremos luchando por la de todos los pueblos».[15]

El gobierno austriaco quiso evitar un conflicto abierto e instó a los gobernantes alemanes locales a frenar las actividades de los *émigrés*, pero Viena prometió contraatacar si los franceses emprendían una acción militar. La retórica en París se fue volviendo más acalorada, y los austriacos y sus antiguos rivales, los prusianos, sellaron un acuerdo secreto para actuar juntos en caso de guerra. Para entonces, Luis XVI y María Antonieta habían decidido arriesgarse y ayudar a Brissot a conseguir su objetivo. Fersen, que había logrado regresar a París para una reunión secreta con la reina a mediados de febrero, informó al rey sueco de que la pareja real había decidido que «no hay manera de restaurar su autoridad excepto a través de la fuerza y la ayuda extranjera»: en otras palabras, el rey ayudaría a hundir el país en la guerra con la esperanza de que las tropas extranjeras derrotaran a sus propios ejércitos y lo rescataran.[16] La decisión del rey quedó fijada cuando, el 15 de marzo de 1792, nombró un gobierno «jacobino» en el que había, sobre todo, aliados cercanos a Brissot. Aunque el propio Brissot, como miembro de la legislatura, estaba inhabilitado para ocupar un cargo ministerial, se le consideraba el verdadero poder detrás del gobierno. Clavière, el nuevo ministro de Finanzas, había sido un estrecho colaborador de Brissot incluso antes de la Revolución, y el ministro del Interior, Roland, era el marido de la mujer que estaba en el centro de la red de los brissotinos. La política exterior se puso en manos de Charles-François Dumouriez, un antiguo oficial militar que durante mucho tiempo había defendido una política agresiva hacia Austria.

Como parte de este incómodo acuerdo entre los patriotas revolucionarios y el monarca, Brissot logró uno de sus objetivos más preciados. El 4 de abril, el rey aprobó una ley que otorgaba plenos derechos civiles y políticos a la población libre de color en las colonias francesas. También dispuso que se enviara una comisión civil a Saint-Domingue con poderes para reemplazar las asambleas locales de los colonos blancos con nuevos organismos en los que compartieran el poder con sus rivales mestizos. Por primera vez en la historia, un gobierno europeo declaró que los no blancos podían ser ciudadanos de pleno derecho en su imperio. Sin embargo, la ley del 4 de abril no decía nada sobre el fin de la esclavitud, y

la comisión civil que estableció debía ir acompañada de un nuevo contingente de seis mil soldados, para ayudar a sofocar las revueltas que se habían iniciado el agosto anterior. Al revocar la concesión de la Asamblea Nacional de otorgar una amplia autonomía a las colonias, la ley las puso bajo el control directo de la metrópoli. La oposición en la Asamblea Legislativa bloqueó el nombramiento del portavoz mestizo Julien Raimond para la comisión, pero al otro lado del Atlántico, los miembros del grupo mestizo de Raimond ya habían obtenido concesiones importantes incluso antes de que la noticia de la ley del 4 de abril llegara a Saint-Domingue. Cuando vio que la intransigencia de los colonos blancos ante cualquier cambio en el sistema de jerarquía racial hacía imposible acabar con la rebelión de los esclavos, el gobernador de la colonia y otros funcionarios que habían llegado de Francia forjaron una alianza con Pierre Pinchinat, el líder del movimiento de gente libre de color, y el Conseil de paix et d'union (Consejo de Paz y Unión) de los mestizos, creada como alternativa a la Asamblea Colonial de todos los blancos.

La victoria de Brissot en el frente colonial se vio rápidamente ensombrecida por las consecuencias de su política de guerra y la de Dumouriez. Éste, que había nacido cerca de la frontera septentrional de Francia con Bélgica, había apoyado firmemente la revuelta allí contra el dominio austriaco en 1789-1790. Explicó que las tropas austriacas estacionadas en la zona tras la derrota del levantamiento belga eran una amenaza para la seguridad francesa y confiaba, igual que Brissot, en que «estas provincias impregnadas por el espíritu de libertad» acogerían con entusiasmo a las tropas francesas si estallaba la guerra. El 20 de abril de 1792, Luis XVI dio luz verde a Dumouriez para su política; fue a la Asamblea y pidió una declaración de guerra. Louis Becquey, un diputado moderado, se encontró haciendo eco de los argumentos que el radical Robespierre había expuesto en su debate con Brissot: «Apareceremos como agresores, nos verán como un país desorganizado que altera la paz de Europa, que desafía los tratados y nuestras propias leyes».[17] A pesar de esta oposición, se impuso la retórica embriagadora de Brissot y la confianza

descarada de Dumouriez: sólo seis diputados votaron en contra de la declaración.

El entusiasmo por la guerra no se limitaba a los políticos: las filas del ejército estaban llenas de patriotas voluntarios. Cuando la noticia de la declaración de guerra llegó a la ciudad alsaciana de Estrasburgo, una ciudad fortificada a orillas del Rin que estaba destinada a desempeñar un papel importante en la lucha, el alcalde local convocó a Claude-Joseph Rouget de Lisle, un joven militar con talento musical, para que compusiera una canción patriótica que marcara la ocasión. En una noche, Rouget de Lisle escribió seis estrofas, que comenzaban así: *«Allons enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrivé»* («¡Adelante, hijos de la patria! El día de la gloria ha llegado»). Con el fin de despertar el fervor nacionalista, la letra llamaba a los ciudadanos a «formar sus batallones» y «dejar que una sangre impura riegue nuestros campos». La letra se ajustaba a una melodía conmovedora y se titulaba «Canción de guerra para el ejército del Rin». En dos meses, mientras los soldados circulaban por el país, la nueva canción había llegado al otro extremo de Francia. Se presentó en una ceremonia patriótica en Marsella el 22 de junio de 1792. Un periódico local reprodujo la primera versión al día siguiente y permitió que los voluntarios locales se llevaran copias en su marcha al norte.

La declaración de guerra cambió por completo la naturaleza de la Revolución francesa. Es evidente que ninguno de los que la lanzaron era consciente de que comenzaba un conflicto que atraería a todas las potencias de Europa y que duraría, de una forma u otra, más de veinte años. Brissot y Dumouriez, preveían que habría levantamientos populares que derrocarían a los otros gobiernos de Europa, pero subestimaron la determinación de sus adversarios y los recursos que podrían movilizar. También lo hicieron Luis XVI y María Antonieta, que daban por hecho que el tambaleante régimen revolucionario se derrumbaría en poco tiempo. Robespierre lo había advertido: la fe que tenían los halcones revolucionarios en que todos los pueblos acogerían con entusiasmo a los franceses no tenía nada en qué

basarse. Sin embargo, sí se confirmó la expectativa de Brissot de que la guerra impulsaría la Revolución en una dirección más radical. La necesidad de reclutar soldados entre los ciudadanos pasivos, es decir, entre los más pobres, y de pedir a toda la población que se sacrificara por el esfuerzo bélico, hacía cada vez más difícil pretender que estuvieran excluidos de la participación política. Incluso creó oportunidades para que las mujeres exigieran el reconocimiento de sus contribuciones al ofrecerse voluntarias para tomar las armas. Dos mujeres jóvenes en particular, las hermanas Fernig, impresionaron tanto al general que defendía Valenciennes que prometió «enviarlas a la primera línea de fuego en cuanto hubiera ocasión», según una noticia. No fue hasta abril de 1793 que se prohibió oficialmente el combate a las mujeres.[18]

Estas muestras de patriotismo por parte de las mujeres no trajeron consigo una ampliación de sus derechos. Sin embargo, la Asamblea Legislativa impulsó un cambio importante en la política con respecto a la persistente cuestión de la compensación de las cuotas feudales. Éste era un asunto que importaba mucho a millones de campesinos a cuyos hijos llamarían para servir en el ejército. Una ley promulgada el 18 de junio de 1792 revocó la legislación anterior que había favorecido a los antiguos señores: los terratenientes que querían hacer pagar a los campesinos una compensación por las cuotas feudales abolidas ahora tendrían que presentar pruebas documentales para justificar sus reclamaciones. Las medidas de la Asamblea consiguieron reforzar el apoyo de los campesinos al gobierno revolucionario en un momento en que la crisis de la guerra obligaba al gobierno a hacer demandas cada vez más exigentes a la población.

A medida que la guerra empujaba la Revolución en una dirección más democrática, también provocaba que los conflictos políticos fueran más explosivos. Cuando el ministerio de Brissot ordenó que se pusiera en libertad a los soldados encarcelados tras el motín del ejército en Nancy en 1790, se les recibió como héroes que habían desenmascarado la tiranía de sus oficiales aristócratas, un mensaje muy arriesgado mientras las tropas se preparaban para la batalla. En París les dieron la bienvenida en una ornamentada procesión. Los moderados respondieron organizando la Fiesta

de la Ley para honrar al alcalde de un pequeño pueblo asesinado por una turba que exigía pan. El *Révolutions de Paris* se quejó de que los organizadores de la fiesta «se habían propuesto humillar y someter al pueblo», al que creían que tenían «que llamar constantemente al orden».[19] Poco a poco, todos los bandos empezaron a pensar que sus oponentes no sólo estaban equivocados, sino que eran traidores a la patria. Había que eliminarlos físicamente, aunque esto significara limitar severamente las libertades que la Revolución había prometido proteger.

Irónicamente, sin embargo, no serían Brissot y sus aliados girondinos quienes lideraran el movimiento hacia una mayor democracia y radicalismo, sino Robespierre y los revolucionarios más extremos. El temor paranoico que tenía el Incorruptible de que el esfuerzo militar permitiría la restauración de la autoridad real enseguida se vio que era infundado. Fue más profética, en cambio, la preocupación que tenía Robespierre por que la guerra sería una oportunidad para que algunos líderes militares ambiciosos y carismáticos intentaran hacerse con el poder. El hombre que demostraría que Robespierre tenía razón no fue uno de los generales aristócratas que dirigían las fuerzas francesas en 1792, sino un oscuro teniente de artillería cuyo nombre, más allá de la remota isla de Córcega, era completamente desconocido cuando comenzó la guerra. En 1792, sin embargo, el militar con ambiciones no era el teniente Napoleón Buonaparte, que aún estaba dudando si entregarse a la Revolución francesa o a un movimiento independentista en su isla natal, sino el ministro Dumouriez.

Siguiendo el plan de Dumouriez, las tropas francesas cruzaron pronto la frontera belga, pero se hizo evidente al instante que sus expectativas de una gloriosa cruzada en favor de la libertad estaban muy alejadas de la realidad de una guerra. «No es con discursos, peticiones, fiestas y canciones como se consigue derrotar a unas tropas experimentadas, disciplinadas y que conocen bien las tácticas», explicó más tarde un oficial veterano a los políticos en París.[20] Cuando los soldados franceses mal preparados cayeron en una emboscada de las defensas austriacas cerca de Tournai y sufrieron numerosas bajas, los supervivientes se volvieron contra su propio comandante, el general Théodore Dillon. Lo colgaron de una farola y

quemaron su cuerpo. En la Asamblea Legislativa, los diputados respondieron a los reveses militares exigiendo medidas más fuertes contra los sospechosos habituales, los sacerdotes refractarios y los *émigrés*. Brissot y sus aliados legislativos intensificaron sus ataques contra lo que llamaron el «comité austriaco», el consejo secreto a través del cual, según ellos, María Antonieta conspiraba para sabotear el esfuerzo de la guerra. El rey vetó las duras leyes contra los opositores de la Revolución, alimentando aún más la desconfianza existente hacia la corte. Si los austriacos y sus aliados prusianos hubieran estado más preparados para la guerra, podrían haber aprovechado rápidamente el desorden que causaron los reveses militares franceses iniciales y el caos político de París, pero sus generales, seguros del éxito, se tomaron su tiempo para preparar su campaña.

En París, los desacuerdos sobre el comportamiento en la guerra dividieron a los jacobinos. «Robespierre y Brissot, jefes de los diferentes partidos, tienen cada uno sus partidarios, y así se declara la guerra, tan desafortunada en el club como en la frontera. Nos pone al borde del abismo», le decía Rosalie Jullien, una aguda observadora de la política, a su marido. Las derrotas militares hicieron inevitable el conflicto abierto entre los nuevos ministros jacobinos y el rey. El 10 de junio de 1792, el ministro del Interior, Roland, publicó una carta abierta a Luis XVI, redactada en gran parte por su esposa, exigiéndole que tomara medidas inmediatas contra los sacerdotes y otras personas que causaban disturbios. El rey, insistió Roland, necesitaba entender la fuerza emocional que tenía la nueva pasión por el país que había creado la Revolución. «La patria no es sólo una palabra embellecida por la imaginación; es algo tangible por lo que uno hace sacrificios», escribió. Si el rey no demostraba su lealtad, esta intensa devoción por la nación obligaría a los funcionarios locales de los departamentos a tomar «medidas violentas, y el pueblo enfurecido se sumará a ellas a través de sus excesos».[21] Ningún ministro francés se había atrevido nunca a dirigirse a un gobernante en semejante tono, y el rey reaccionó rápidamente destituyendo a Roland y a los demás ministros jacobinos que habían sido nombrados en marzo. Mientras los jacobinos expresaban su indignación, Lafayette, que durante mucho tiempo se había

considerado el único hombre que podía mantener el equilibrio entre la corte y los radicales revolucionarios, se empezó a preocupar. Desde su posición en la frontera, donde ahora comandaba uno de los ejércitos franceses, envió una denuncia enérgica contra los jacobinos. Para aquellos que recordaban cómo los generales romanos habían usado a sus soldados para destruir la República, el hombre que había sido un héroe nacional en 1789 empezó a aparecer como una amenaza para la Revolución.

Si Luis XVI y Lafayette no estaban dispuestos a aceptar los dictados de los militantes prorrevolucionarios, los revolucionarios tampoco lo estaban a retroceder ante la resistencia del rey. El 20 de junio de 1792, una semana después de la destitución de los ministros, una multitud de entre veinte y veinticinco mil hombres y mujeres, muchos de ellos guardias nacionales con armas, se abrió paso hasta la sala de reuniones de la Asamblea Legislativa y después invadió el vecino Palacio de las Tullerías, donde rodeó al rey y lo tuvo acorralado contra una ventana durante varias horas. Luis XVI se enfrentó a esta prueba con un valor inesperado. Permitió que los manifestantes le pusieran un «gorro de la libertad» rojo, símbolo de la militancia de los *sans-culottes*, y brindó por la nación, pero rechazó las demandas de la multitud de retirar sus vetos y rehabilitar a los ministros jacobinos. Insistió en que estaba ejerciendo sus legítimos poderes constitucionales. Dirigieron su ira, más exaltada todavía, contra la reina, pero no la agredieron físicamente. Hacia la noche, el alcalde prorrevolucionario de París, Pétion, apareció tarde en el palacio. Decidido a no provocar un enfrentamiento con los *sans-culottes* que pudiera terminar en un derramamiento de sangre, como la matanza del Campo de Marte un año antes, había aceptado la promesa de los organizadores de la manifestación de no recurrir a la violencia. El rey le reprochó amargamente que hubiera permitido la invasión del palacio. María Antonieta, que se había propuesto ganarse la simpatía del oficial de la Guardia Nacional asignado al palacio para poder sonsacarle información sobre la opinión pública, también estaba furiosa. El oficial no había logrado protegerlos. «Me miró

ferozmente y habló en un tono que dejaba ver su cólera», recordó él más tarde.[22]

La protesta la habían organizado los militantes y activistas jacobinos en las *sections* de París, las nuevas subdivisiones de la ciudad, cada una de las cuales tenía su propia asamblea y su unidad de la Guardia Nacional. Fue la primera intervención política de este tipo que hacían los ciudadanos de a pie de París desde los Días de Octubre de 1789. Sin embargo, a diferencia de aquellos días, la *journée* del 20 de junio no puso fin al estancamiento político que amenazaba con paralizar el gobierno. El comportamiento firme y digno de Luis XVI frente a los manifestantes generó una reacción a su favor, especialmente en las provincias. Más de siete mil parisinos firmaron una petición para denunciar al alcalde Pétion por no haber tomado medidas efectivas para evitar la manifestación, y los administradores conservadores del departamento lo suspendieron de sus cargos. Lafayette dejó su ejército en la frontera para ir a París a denunciar el movimiento militante. Los periodistas radicales le acusaron de amenazar con una «guerra civil mediante la cual espera imponer un protectorado tiránico». «Si, en lugar de hablar, Lafayette hubiera actuado», escribió más tarde un oficial de la Guardia Nacional que simpatizaba con él, «habría sido el fin de todos los jacobinos del mundo».[23]

En la Asamblea Legislativa, Adrien Lamourette, un clérigo constitucional, trató de remediar las inflamadas divisiones políticas. El 7 de julio, pidió a los diputados que dejaran de lado sus diferencias y se abrazaran. Mientras los hombres que apenas se habían hablado durante meses compartían abrazos emocionados, Luis XVI se apresuró a salir de su palacio para renovar su juramento de apoyo a la Constitución. La entusiasta participación de los diputados en «el beso de Lamourette» demostraba que el llamamiento a la unidad nacional apelaba a las emociones, pero el momento de la reconciliación fue fugaz. Tanto los moderados como los radicales estaban convencidos de que sólo lograrían la verdadera armonía eliminando a sus oponentes. Dos días después de la intervención de Lamourette, Brissot lanzó un nuevo ataque contra el rey. Exigió a los diputados que declararan «al país en peligro», insistió en que Francia se

enfrentaba a una crisis porque «sus fuerzas estaban paralizadas»: «¿Y quién las ha paralizado?», preguntó. «Un hombre al que la Constitución ha hecho su líder».[24]

Brissot exigió un comité especial para decidir si las acciones del rey equivalían a una violación de su solemne juramento de defender la Constitución. También pidió que se eliminara la distinción entre «propietarios y no propietarios» que impedía a estos últimos tener estatus de ciudadanos activos. Fuera de la Asamblea, «los patriotas más firmes y los republicanos de París» comenzaron a organizar un movimiento para forzar al rey a abdicar. Entre estos organizadores se encontraban los dirigentes jacobinos, sus aliados militantes en las secciones de París –donde los esfuerzos por excluir a los pobres ya habían fracasado– y los periodistas radicales. Su objetivo era «llevar a cabo una segunda revolución[,] que consideraban necesaria», como uno de ellos diría más tarde. En la primera semana de julio, periódicos parisinos como la *Trompette du Père Duchêne* esbozaban el programa de los radicales, convocando un levantamiento popular para obligar a la Asamblea Legislativa a suspender los poderes del rey, instaurar un gobierno provisional para sustituir a los ministros elegidos por la realeza y convocar elecciones para una Convención Nacional que determinara el futuro de la monarquía y redactara una nueva constitución.[25]

El aniversario de la toma de la Bastilla representó una oportunidad para los radicales de París. Igual que en 1790 y 1791, se preparó en la capital una gran celebración para lo que se reunió a *fédérés*, voluntarios patriotas de todo el país. Posteriormente se enviaría a los participantes armados a las fronteras para dar apoyo al ejército. Sin embargo, mientras estaban en París, los radicales parisinos decidieron que los *fédérés*, seleccionados por su entusiasmo revolucionario, podían ser la fuerza que faltaba para acabar con la resistencia de Luis XVI. Entre las milicias provinciales, los *fédérés* de Brest y Marsella tenían fama de ser los más radicales. En cuanto desembarcaron los marselleses del barco que los llevó por el Sena, se enzarzaron en una pelea callejera con algunos parisinos bien vestidos que

los habían insultado. «La gente más pobre de París se puso del lado de los marselleses», según el cronista Ruault.[26] Éstos no sólo trajeron a las calles de París una nueva militancia, sino también los primeros ejemplares impresos de la nueva canción patriótica que Rouget de Lisle había compuesto en abril. La conmovedora melodía y la letra belicosa de esta «canción de los marselleses» se identificaron indisolublemente con el grupo que la trajo a París. «La Marsellesa», actualmente himno nacional de Francia, sigue siendo la única melodía de la época revolucionaria que es inmediatamente reconocible en el mundo entero.

La Asamblea Legislativa era reacia a respaldar las exigencias de los radicales o las tácticas de mano dura de los *fédérés*, pero incluso los diputados moderados reconocieron lo peligroso de la situación. El país se preparaba para una invasión extranjera y el jefe de gobierno y sus ministros eran sospechosos de connivencia con el enemigo. El 22 de julio, una semana después de la celebración del aniversario de la toma de la Bastilla, mientras los *fédérés* de fuera de la ciudad estaban todavía en la capital, la Asamblea aceptó por fin la recomendación de Brissot de declarar que el «país está en peligro». Su decreto ordenaba a todos los gobiernos locales de tomar las medidas que consideraran necesarias para responder a la crisis, sin esperar instrucciones del rey ni de sus ministros. Los ministros nombrados por el rey para reemplazar a los brissotinos dimitieron, lo cual produjo un vacío en el poder ejecutivo y dejó claro que la monarquía constitucional había dejado de funcionar. Sin embargo, los moderados de la Asamblea seguían siendo reacios a apoyar medidas firmes. Por ejemplo, rechazaron una moción de censura contra Lafayette, incluso después de que éste anunciara que utilizaría sus tropas para oponerse a cualquier amenaza contra el rey.

Cuando se quebró el sistema constitucional que se había instaurado un año antes, ambos bandos se prepararon para una lucha violenta. Dentro del Palacio de las Tullerías, los miembros de la familia real temían por sus vidas. Aunque el rey y la reina desconfiaban de muchos de los guardias nacionales asignados para protegerlos, sentían que podían contar con la lealtad de las unidades de soldados suizos profesionales que compartían ese

deber. Armados con artillería, los defensores esperaban al menos poder causar numerosas bajas si se producía un ataque al palacio. Tal vez esto permitiría que la pareja real resistiera el tiempo suficiente para que los ejércitos austriaco y prusiano avanzaran con rapidez y pudieran rescatarlos. A finales de julio, las fuerzas de los dos monarcas extranjeros estaban listas para cruzar la frontera francesa. Los *émigrés* franceses –cuya presencia en Alemania había sido clave en el estallido de la guerra–, se quedaron muy frustrados cuando los austriacos y los prusianos se negaron a que participaran en la invasión; temían que su presencia incendiara más la resistencia. Sin embargo, las potencias aliadas insistían en que intervenían únicamente para mantener la autoridad legítima de Luis XVI. El 28 de julio de 1792, el comandante del ejército aliado, el duque de Brunswick, emitió un manifiesto en el que advertía que la población de París recibiría un castigo severo si la familia real resultaba perjudicada.

Las amenazas en el manifiesto de Brunswick convencieron a los partidarios de la Revolución de que no había que perder más tiempo en negociaciones con el rey. Hombres como Fournier l'Américain, un antiguo colono de Saint-Domingue que había ayudado a dirigir el asalto a la Bastilla y la marcha de los Días de Octubre en 1789, habían llegado a la conclusión de que «los legisladores franceses sólo actúan enérgicamente cuando el pueblo se levanta y los obliga a actuar».[27] El 3 de agosto de 1792, la asamblea de la sección de Mauconseil de París emitió un manifiesto exigiendo que la Asamblea Legislativa destituyera a Luis XVI del trono. Si los legisladores no lo hacían, el pueblo de París usaría la fuerza para derrocar al monarca. Entre bastidores, un comité secreto de militantes del Club de los Cordeliers y del movimiento *sans-culotte* se preparó para lanzar a los batallones de la Guardia Nacional de las secciones de París contra las Tullerías. Los militantes calcularon que, si su movimiento tenía éxito, los políticos radicales no tendrían más remedio que responder a su exigencia de eliminar a los opositores de la Revolución.

Brissot y los diputados girondinos pensaron que la amenaza de una insurrección intimidaría a Luis XVI lo suficiente para volver a llamar a los ministros que había destituido en junio y permitirles dirigir el esfuerzo de la guerra, pero no se atrevieron a revocar del todo la Constitución. Las consecuencias de una revuelta popular armada eran impredecibles. Les preocupaba que el ejército no aceptara el resultado de un levantamiento violento en París, y que Lafayette encontrara apoyo entre sus tropas para intervenir contra él. El propio Brissot temía que el país no estuviera preparado para un cambio radical de una monarquía a una república. En sus memorias, que escribió tras su propia derrota y detención un año después, recordó que «sabía muy bien que esta simple palabra [“república”] habría ofendido a mucha gente, y quizá había causado el fracaso de la Revolución que se avecinaba».[28] En los inicios, los periódicos girondinos se habían unido a las manifestaciones a favor de deponer al rey, pero ahora comenzaron a transmitir mensajes confusos, en los que afirmaban que sería mejor posponer una confrontación directa. Tras el enfrentamiento decisivo, estas dudas de última hora de los girondinos respecto a las bondades de derrocar a la monarquía por la fuerza se utilizarían para desacreditarlos.

A diferencia de la sublevación espontánea y desorganizada que había desembocado en la toma de la Bastilla, la insurrección del 10 de agosto de 1792 se planeó cuidadosamente. Al amparo de la noche, los activistas convocaron a sus tropas y tomaron el control de la Comuna, el gobierno de París con sede en el Hôtel de Ville. Despidieron a su asamblea electa y la reemplazaron con hombres leales provenientes de las secciones. Durante el siguiente mes y medio, esta Comuna revolucionaria competiría con el gobierno nacional y a veces llegaría a eclipsarlo. A Pétion, el alcalde que no había podido impedir la manifestación masiva del 20 de junio, le detuvieron y pusieron bajo arresto domiciliario, y al comandante de la Guardia Nacional, sospechoso de ser leal a Lafayette, le hicieron ir al Hôtel de Ville y le asesinaron. El cervecero Santerre, figura destacada del movimiento radical popular desde la época de la toma de la Bastilla, ocupó su puesto, e hizo sonar el *tocsin* para convocar a las unidades de la guardia, especialmente a las de los bastiones activistas *sans-culottes* de los

faubourgs Saint-Antoine y Saint-Marcel. En el interior del Palacio de las Tullerías, los defensores del rey oían las campanas y los tambores de la iglesia que sonaban desde todas las direcciones. A las seis de la mañana del 10 de agosto, los batallones de la sección marchaban hacia las Tullerías, empuñando las largas picas que se habían convertido en el utensilio favorito del pueblo en armas. Dentro del palacio, Luis XVI y María Antonieta se prepararon para el que podría ser su último momento. Mientras el rey revisaba sus tropas, María Antonieta le arrancó la pistola del cinturón a un oficial y se la entregó a su marido, diciéndole: «Ahora es el momento de demostrar quién eres». Pero algunos de los guardias nacionales que se suponía que debían defender el palacio revelaron sus verdaderos sentimientos, al grito de «¡Abajo el traidor!» y abandonaron sus puestos.[29]



El París revolucionario. La poblada ciudad de París desempeñó un papel único en el drama revolucionario. La Bastilla, las salas de reuniones de las asambleas y los clubes revolucionarios, el Palacio Real de las Tullerías, la sede del gobierno de la ciudad en el Hôtel de Ville, y los *faubourgs* de clase obrera, donde a menudo estallaron las revueltas, estaban muy cerca. Se podía ir andando de un lugar a otro sin problema. Crédito: Richard Gilbreath.

Si Luis hubiera seguido el consejo de su esposa y hubiera permitido que le detuvieran mientras se ponía al mando de quienes le defendían en las escaleras del palacio, el resultado habría sido fatal para él, pero habría devuelto algo de lustre a la monarquía. En cambio, se dirigió al exdiputado

de la Asamblea Nacional Jacobina Pierre-Louis Roederer para pedirle consejo. Roederer, ahora funcionario municipal, le convenció de que la única forma de salvarse a sí mismo y a su familia era abandonar el palacio y refugiarse en la sala de reuniones de la Asamblea Legislativa. Esta respuesta salvó a la familia real de una posible muerte violenta, pero la convirtió en prisionera. Al mismo tiempo, dejó a la Asamblea Legislativa la incómoda decisión de qué hacer con ella. Para no violar la disposición constitucional que prohibía al rey estar presente durante las deliberaciones de la Asamblea, se encerró a la familia real en el espacio reservado habitualmente para los periodistas que llevaban un registro de los discursos de los diputados. Allí permanecieron hasta altas horas de la noche mientras los legisladores discutían sobre su destino.

La decisión de Luis XVI de abandonar las Tullerías tuvo consecuencias desastrosas para sus más fieles defensores, los guardias suizos. A las 9.30 de la mañana, los agresivos *fédérés* de Marsella se abrieron paso a la fuerza por el patio interior de las Tullerías. Cuando lograron agarrar a dos de los defensores y desarmarlos, los camaradas de los soldados suizos respondieron con una descarga. Dispararon sus cañones a la gran multitud, cobrándose centenares de víctimas; la cifra final de más de mil muertos convertiría el 10 de agosto en el día más sangriento de la Revolución en París. «Las mujeres corrían por las calles entre llantos y lamentos, porque cada una temía una pérdida cruel», informó Rosalie Jullien. Los activistas radicales se indignaron al saber que los suizos habían matado a ciudadanos patriotas incluso cuando la familia real estaba ya fuera de peligro; estaban convencidos de que habían sido víctimas de «un crimen nunca visto hasta esta época, que el tribunal ha planeado para ir en contra de la nación», como se decía en el *Révolutions de Paris*.[30] Al oír los disparos desde su refugio en la sala de la Asamblea, Luis XVI intentó poner fin al derramamiento de sangre dando la orden a los suizos de cesar el fuego, pero era imposible cumplirla en mitad del combate.

La resistencia de los soldados suizos enfureció a los atacantes y, en cuanto pudieron aplastar a sus adversarios con su superioridad numérica, el resultado fue espantoso. Como dejó escrito Ruault, «el pueblo [...] revisó

todas las estancias y asesinó a todos los suizos que encontró. Registraron los pasillos, las oficinas, todos los pasadizos secretos y hasta los armarios; mataron a todos los desafortunados que encontraron en alguno de esos rincones o pasadizos; a otros los arrojaron vivos por las ventanas, sin atender a sus súplicas, y los dejaron empalados en la terraza del jardín y en el patio».[31] La multitud destruyó el mobiliario del palacio. Cuando saquearon armarios y cajones, encontraron cientos de cartas y documentos que ofrecían pruebas de la oposición del tribunal a las políticas revolucionarias.

La violencia en las Tullerías y la idea de que las tropas del rey habían abierto fuego deliberadamente contra el pueblo imposibilitaron cualquier intento de hacer frente a las demandas de los radicales. El derramamiento de sangre no se limitó al palacio: la multitud linchó a un periodista monárquico y al exdiputado moderado Clermont-Tonnerre, así como a varios individuos acusados de saqueo. Atacó las imprentas de los periódicos monárquicos y moderados, y se encarceló a numerosos exnobles, funcionarios reales y sacerdotes refractarios. Se asaltaron las oficinas del Club Massiac de esclavistas coloniales blancos y se confiscaron sus papeles. Los militantes *sans-culottes* no sólo fueron tras los partidarios vivos de la monarquía, sino también tras sus símbolos, como la estatua ecuestre de Luis XIV en la Place des Victoires y la estatua de Enrique IV en la Île de la Cité. Napoleón Bonaparte, que vio el ataque al palacio desde la ventana de un edificio cercano, se mezcló con la multitud después. «Se respiraba una ira feroz en cualquier lugar al que uno fuera», recordaría más tarde. «Había odio en sus corazones y se reflejaba en sus rostros, aunque no todos procedían de las clases bajas».[32] La experiencia le dejó con un prolongado desagrado por la violencia popular.

Al ver que la Comuna se estaba moviendo para tomar el poder en la ciudad, la Asamblea Legislativa tuvo que actuar rápidamente para detener sus avances. El diputado girondino Gensonné presentó una moción para suspender al rey de sus funciones, que sería una repetición de lo que había

sucedido después del intento de fuga del monarca en junio de 1791. Los diputados pidieron la elección de una Convención Nacional que, al igual que la Asamblea Nacional de 1789, tuviera plena autoridad para expresar la voluntad del pueblo. Se desecharon los argumentos que Sieyès, Barnave y tantos otros políticos habían esgrimido para justificar la exclusión de los pobres de la participación política; los legisladores decretaron ahora que cualquier hombre de más de veintiún años que tuviera un empleo remunerado y que no fuera un sirviente en una casa podría participar en las elecciones. En una época en que muchos de los estados de Estados Unidos todavía mantenían los requisitos de riqueza para votar, la Francia revolucionaria se convirtió en el primer país del mundo en aceptar el sufragio universal masculino.

El 11 de agosto, la Asamblea aprobó una serie de medidas de emergencia adicionales. Se hizo prisionera a la familia real y se nombró un tutor especial para el Delfín, el niño heredero al trono, para alejarlo de la influencia de sus padres. Se reemplazó a los ministros reales por un nuevo Consejo Ejecutivo que incluía a Roland y Clavière, miembros del equipo brissotino nombrado el mes de marzo anterior. El consejo incluía varias caras nuevas; la más importante era Georges Danton, que ahora era un estrecho colaborador de la Comuna revolucionaria. Aunque ocupaba un modesto puesto como segundo ayudante del fiscal jefe de la Comuna cuando estalló la insurrección del 10 de agosto, Danton llenó rápidamente el vacío de liderazgo que había dejado la revuelta. Durante seis semanas cruciales, hasta que la Convención recién elegida se reunió el 20 de septiembre de 1792, fue la única figura capaz de dominar tanto a los que estaban del lado de la insurrección como a los que formaban parte de la legislatura. Los primeros, decía Danton, se habían levantado por lo que describió como «este suplemento tan indispensable para la Revolución del 14 de julio».[33] Los segundos, en este momento, luchaban por mantener al país unido frente a una crisis que hacía que incluso los primeros días de la Revolución parecieran tranquilos. Físicamente imponente y, como Mirabeau, con la piel picada de viruela, Danton descollaba entre los grandes oradores revolucionarios. Era un genio de la improvisación: casi nunca

escribía sus discursos con antelación y rara vez se molestaba en hacerlos circular de forma impresa. Su nombramiento como ministro de Justicia tenía por objeto dar credibilidad al Consejo Ejecutivo de urgencia designado para dirigir el gobierno ante el movimiento militante que acababa de derrocar a la monarquía.

Danton y sus colegas estaban muy ocupados tratando de satisfacer a los activistas revolucionarios de París, manteniendo al mismo tiempo cierto control sobre el resto del país y haciendo frente a la invasión enemiga. En la capital, los radicales victoriosos exigieron un rápido castigo para los sospechosos políticos a los que culpaban de la «conspiración» que había dado lugar a la muerte de tantos patriotas el 10 de agosto. En un principio, la Asamblea Legislativa trató de defender el principio de que había que juzgar a todos los acusados de acuerdo con los procedimientos establecidos, pero el 17 de agosto cedió a las demandas de Robespierre y otros, y acordó establecer un Tribunal Revolucionario especial para tratar sus casos. Se eligió a los jueces y jurados por sus convicciones patrióticas, y sus veredictos eran inapelables. Este primer Tribunal Revolucionario funcionó sólo durante tres meses, pero sentó un precedente para la creación de tribunales políticos especiales que se reavivarían a una escala mucho mayor en 1793 y 1794. Entre los primeros acusados condenados por el tribunal y ejecutados de conformidad con sus decisiones se encontraban los funcionarios del tribunal, el comandante de la Guardia Suiza y el periodista monárquico Barnabé Farmian Durozoi, el primero de muchos escritores que descubrió que la garantía constitucional de la libertad de prensa no era una protección en la acalorada atmósfera revolucionaria.

Los juicios del Tribunal Revolucionario atrajeron a grandes multitudes de espectadores que a menudo insultaban a los acusados cuando iban de camino a su ejecución. El editor del boletín oficial del tribunal defendió su comportamiento, llamándolo una expresión de «la pasión de un pueblo libre, satisfecho de verse liberado de un enemigo». Para las ejecuciones, llevadas a cabo por el viejo amigo de Jacques Ménétra, Henri Sanson, se utilizaba la guillotina, la máquina decapitadora destinada a convertirse en el símbolo más duradero de la Revolución. Desarrollada en respuesta a una

moción presentada en 1789 por el diputado de la Asamblea Nacional Joseph-Ignace Guillotin, la guillotina tenía por objeto dar a las víctimas una muerte rápida e indolora, en contraste con los métodos prolongados y dolorosos de la pena capital que solían utilizarse en el antiguo régimen. «En menos de dos minutos, todo había terminado», registró Adrien Colson después de presenciar una doble ejecución.[34] La introducción de la guillotina también representaba una victoria de la igualdad: todos los condenados, independientemente de su condición social o de su delito, se ejecutarían de la misma manera a partir de ahora. La guillotina se usó por primera vez con los delincuentes comunes en abril de 1792; las ejecuciones que ordenó el Tribunal Revolucionario la vincularon indeleblemente a la política revolucionaria.

Los diputados salientes de la Asamblea Legislativa y los ministros provisionales nombrados después del 10 de agosto apenas tuvieron tiempo de pensar en las consecuencias de su adopción de la guillotina como instrumento de venganza política. Estaban más preocupados por definir los principios que encarnaría la nueva Constitución, aunque no la redactarían ellos, sino la Convención Nacional que habían convocado. Más enfáticamente que nunca, los revolucionarios prometieron crear una sociedad basada en los principios de libertad e igualdad. La eliminación de la distinción entre ciudadanos activos y pasivos marcó un gran paso hacia delante para la idea de igualdad, aunque Danton se sintió obligado a insistir en que no aspiraban a «la imposible igualdad de bienes, sino a una igualdad de derechos y de bienestar». La Constitución de 1791 se había basado en la premisa de que la libertad y la igualdad eran compatibles con una forma de gobierno monárquico, pero los acontecimientos del 10 de agosto y la guerra en curso descartaron cualquier compromiso de este tipo. En una proclama redactada por Danton y publicada el 25 de agosto de 1792, se decía a la población que «el pueblo francés y los reyes se enfrentan, ya comienza la terrible lucha, y en este combate [...] no hay otra opción que la victoria o la muerte».[35] Al igual que en julio de 1789, cuando la toma de la Bastilla

había desencadenado «revoluciones municipales» en todo el país que pusieron el poder en manos de los partidarios del movimiento, las noticias de la sublevación del 10 de agosto en París provocaron un nerviosismo considerable entre los gobiernos locales. Los radicales de los departamentos, entre ellos Goujon en el Sena y Oise, comenzaron a expulsar a sus oponentes moderados.

A medida que los nuevos gobernantes de París iban tomando un rumbo más radical, la mayor amenaza provenía de Lafayette, que ya había condenado enérgicamente los ataques a la monarquía constitucional en junio. Cuando la Asamblea Legislativa envió a tres diputados a verle para asegurarse de su lealtad, el hombre que había sido el primero en proponer una declaración de derechos en 1789 demostró lo alejado que estaba de la dirección radical de la Revolución: hizo que los arrestaran. Pero Lafayette había perdido el control sobre sus hombres. «La noticia de la destitución del rey [...] esparce la alegría y la felicidad entre nuestros voluntarios», observó un soldado. «“¡No más rey! ¡No más rey!” Ése es su grito». Cuando Lafayette intentó hacer jurar a sus hombres que defenderían la Constitución monárquica de 1791, se negaron.[36]

Cuando se dio cuenta de que su esfuerzo por oponerse al derrocamiento de la monarquía lo había puesto en peligro, Lafayette abandonó a sus tropas y se entregó a los austriacos, que lo encarcelaron al momento. En París, un periódico anunció que Philippe Curtius, el propietario del museo de cera, «tras admitir que se había equivocado con el traidor Lafayette, que durante mucho tiempo fue una de las principales atracciones de su exposición, [...] le había cortado la cabeza a este héroe tan poco fiable». El general, sin duda, continuó viéndose a sí mismo como un partidario del «pueblo, cuya causa es muy querida para mí y cuyo nombre ahora profanan los bandidos».[37] Pero él y la mayoría de los «hombres de 1789» que habían dirigido las primeras etapas de la Revolución ahora estaban totalmente desacreditados.

Las elecciones a diputados de la Convención comenzaron a finales de agosto, mientras las noticias del frente militar eran cada vez más terribles. Las fuerzas austro-prusianas avanzaban rápidamente. Primero, la ciudad

fortaleza de Longwy y, luego, la ciudad de Verdún –más estratégica, todavía, y el último gran obstáculo en el camino a París– se rindieron a los prusianos el 29 de agosto sin ofrecer resistencia. La noticia de la pérdida de Verdún causó pánico en la capital. Danton exhortó a los ciudadanos a redoblar sus esfuerzos, pidiendo a todos los hombres sanos que se ofrecieran como voluntarios para el ejército y exigiendo registros en los domicilios de los posibles sospechosos políticos. «El *tocsin* que estamos haciendo sonar no es una señal de alarma», dijo a los diputados el 2 de septiembre de 1792. «Es la llamada a la carga contra los enemigos del país. ¡Para derrotarlos, caballeros, necesitamos atrevernos, atrevernos de nuevo, y Francia se salvará!».[38] La estatua de Danton del siglo XIX, que invita a los franceses a rechazar al invasor, y que se encuentra hoy en el concurrido bulevar Saint-Germain de París, capta algo de esa energía revolucionaria que tenía el gran tribuno.

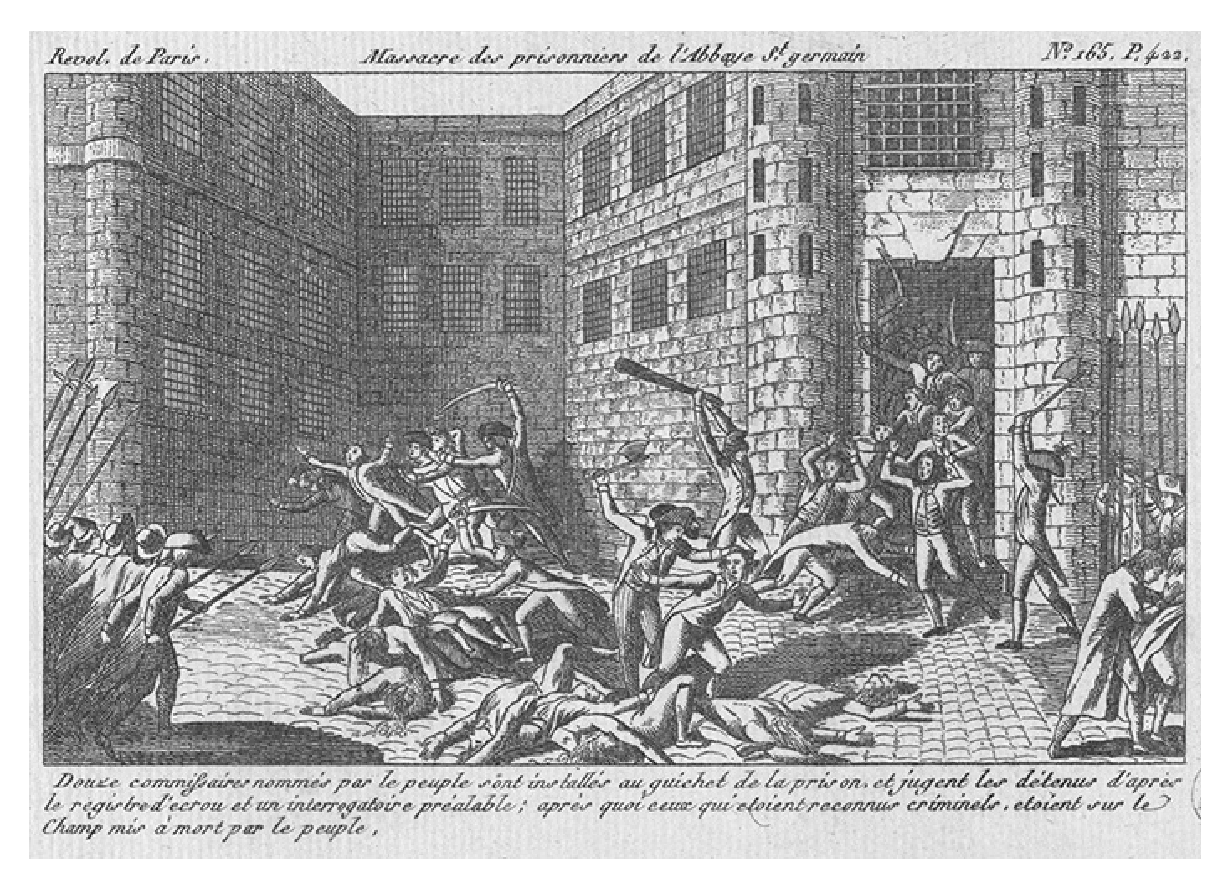
Sin embargo, para los activistas más comprometidos, las palabras por sí solas, incluso la retórica elevada de un Danton, no eran suficientes cuando la supervivencia de la Revolución estaba en juego. Mientras Danton se dirigía a la Asamblea Legislativa, los militantes de la Comuna y las secciones se hacían cargo de las prisiones de la ciudad, que estaban abarrotadas de cientos de sospechosos detenidos en el levantamiento del 10 de agosto. Con la excusa de que creían que los prisioneros querían aprovechar la salida de los voluntarios del frente para organizar un motín cuando se acercara el ejército enemigo, crearon improvisados «tribunales populares». Sacaban de sus celdas a los presos aterrorizados –antiguos nobles, sacerdotes refractarios, parientes de emigrantes y gente común a la que habían arrastrado a la caza de contrarrevolucionarios–, les hacían una audiencia sumaria y, en la mayoría de los casos, los empujaban por las puertas de la cárcel hacia los patios de los edificios o a las calles, donde los mutilaban hasta matarlos. Entre las principales víctimas se encontraba la princesa de Lamballe, que había sido amiga íntima de María Antonieta. Despedazaron su cuerpo en la calle. Como no podían llegar hasta la reina y

la familia real, que estaban fuertemente vigiladas en la prisión del Temple, algunos de los manifestantes agitaron la cabeza de la princesa bajo la ventana para enviar lo que un periodista llamó «un mensaje al que había que prestar atención».[39]

François Jourgniac Saint-Méard, oficial del ejército y colaborador en algunos periódicos monárquicos, describió la experiencia de los prisioneros en su libro *Mon agonie de trente-huit heures (Mi agonía de treinta y ocho horas)*, el relato contemporáneo más difundido sobre las matanzas de septiembre, que continuaron durante los tres días siguientes. A Saint-Méard lo habían detenido diez días antes del comienzo de la matanza y se encontraba en la abadía de Saint-Germain, uno de los numerosos edificios religiosos confiscado y convertido en cárcel. En la tarde del 2 de septiembre, los asesinos llegaron a la abadía y comenzaron a sacar a las víctimas al patio. Desde la ventana de su celda, Saint-Méard podía oír lo que les pasaba a los condenados. «Es completamente imposible expresar el horror del profundo y sombrío silencio que reinaba durante estas ejecuciones», escribió. «Sólo se veía interrumpido por los gritos de los sacrificados y los golpes de sable contra sus cabezas. Tan pronto como se colocaban sus cuerpos en el suelo, surgían murmullos, intensificados por los gritos de "Viva la nación" que eran mil veces más aterradores para nosotros que el terrible silencio».[40]

Saint-Méard fue uno de los prisioneros afortunados que sobrevivieron al calvario. Un guardia amigo le permitió presenciar los interrogatorios de otros prisioneros, para que viera qué tácticas ofrecían la mejor posibilidad de lograr la absolución. A la una de la madrugada del 4 de septiembre, Saint-Méard se encontró frente al improvisado tribunal popular. «Dos hombres, con la camisa ensangrentada y sable en mano, custodiaban la puerta», recordó. Su audiencia se interrumpió mientras los jueces condenaban rápidamente a un sacerdote a muerte. Al volver al caso de Saint-Méard, decidieron darle la absolución. Tres militantes –un albañil, un aprendiz de peluquero y uno de los *fédérés* que habían participado en el levantamiento del 10 de agosto, una muestra típica de los militantes implicados en las matanzas– le acompañaron a su casa para garantizar su

seguridad. Cuando intentó ofrecerles dinero, se negaron indignados, insistiendo en que ellos y los demás participantes en las matanzas actuaban puramente por motivos patrióticos.



Las matanzas de septiembre. La reacción violenta de los militantes revolucionarios ante la amenaza de una invasión extranjera manchó permanentemente la reputación del movimiento. Los diputados elegidos para la Convención Nacional se dieron cuenta de que no tenían más remedio que adoptar las medidas necesarias para asegurar la supervivencia de la Revolución. Aunque los líderes revolucionarios deseaban dejar atrás la violencia, las imágenes de los asesinatos se incluyeron en el semanario de amplia distribución *Révolutions de Paris*. Crédito: © Musée Carnavalet / Roger-Viollet.

A la Asamblea Legislativa y a los delegados de las secciones que formaban la asamblea de la Comuna se les informó de las matanzas poco después de que comenzaran el 2 de septiembre. Ambas instituciones enviaron representantes a las prisiones para intentar convencer a los escuadrones de la muerte de que pusieran fin a sus actividades, pero sin éxito. «Estamos cumpliendo con nuestro deber. Vuelve al tuyo», les dijo un militante. Dado que los asesinos de los prisioneros provenían de las unidades de la milicia de las secciones, que constituían la única fuerza policial de la ciudad, las autoridades no tenían forma de detener

oficialmente sus actividades. El vehemente discurso incitando a la «valentía» que había pronunciado el ministro de Justicia, Danton, en la mañana del 2 de septiembre contribuyó a crear un ambiente en el que las medidas extremas parecían justificadas. El propio Danton estuvo muy callado los tres días que duraron los asesinatos. Entre los otros líderes radicales, el periodista Marat, que, como Danton, estaba a punto de entrar en la Convención como diputado, apoyó abiertamente una justificación de los asesinatos al firmar una carta emitida por el Comité de Vigilancia de la Comuna el 3 de septiembre. El pueblo, según el comité, había decidido que las ejecuciones eran «actos de justicia que les parecían indispensables para disuadir, mediante el uso del terror, a estas legiones de traidores [...] en un momento en que estaba a punto de marchar al encuentro del enemigo [...]. No dejaremos atrás a los bandidos que matarán a nuestros niños y mujeres».[41]

Entre las muchas consecuencias que tuvieron las matanzas de septiembre una fue la brecha insalvable de desconfianza que se abrió entre los radicales revolucionarios que habían colaborado durante el verano de 1792 para quitar al rey del trono. No fueron las matanzas en sí mismas las que afianzaron la ruptura entre Brissot y los girondinos, por un lado, y Robespierre y los jacobinos más radicales, por el otro. Ninguno de los dos grupos participó en la organización de las matanzas, pero ninguno de ellos se apresuró tampoco a condenarlas una vez que comenzaron. El 3 de septiembre, Roland, el ministro del Interior, aliado cercano de Brissot, se quejó de que los militantes parisinos perturbaban sus esfuerzos por mantener el orden, pero se refería a la matanza del día anterior como un acontecimiento sobre el «que tal vez deberíamos correr un tupido velo». Añadió: «Sé que el pueblo, terrible en su venganza, todavía está ejerciendo una especie de justicia». La única acción que exigió a la Asamblea Legislativa fue una declaración de que se había visto incapaz de detener los asesinatos.[42]

A las pocas horas, sin embargo, Roland y Brissot casi se vieron inmersos en el derramamiento de sangre. Los funcionarios de la Comuna emitieron órdenes de arresto contra ellos, lo cual podría haber dado lugar a que los enviaran a una de las prisiones donde estaban asesinando a los reclusos. En la asamblea de la Comuna, Robespierre llamó a Brissot y a otros miembros destacados de la Asamblea Legislativa «pérfidos intrigantes que trabajan con las potencias enemigas armadas contra la libertad francesa». Madame Roland no tenía dudas de que las órdenes para detenerlos procedían de sus rivales políticos. «Estamos bajo el cuchillo de Robespierre y Marat», escribió a un amigo. «Danton es, entre bambalinas, el líder de esta banda».[43] No hay ninguna prueba que demuestre que Robespierre, Marat o Danton fueran responsables de esas órdenes, pero lo cierto es que habían llegado a dudar de la lealtad de Brissot y sus aliados como resultado de su comportamiento vacilante en los últimos días antes del levantamiento del 10 de agosto. Los brissotinos, en cambio, estaban convencidos de que sus rivales en el movimiento revolucionario habían intentado aprovecharse de las matanzas para acabar con la vida de sus líderes. Ahora ya había pocas posibilidades de que los dos grupos trabajaran juntos.

Los asesinatos en las prisiones conmocionaron a los contemporáneos de la época y deben preocupar, sin lugar a dudas, a todos los que piensan que la contribución que hizo la Revolución francesa a las ideas modernas de libertad e igualdad sitúa al movimiento en una categoría diferente a la de los nazis, los comunistas o los instigadores de genocidios más recientes. Las matanzas de septiembre sobresalen entre los otros episodios de violencia de la Revolución tanto por el gran número de víctimas como por su naturaleza unilateral. Es posible que hubiera la misma cantidad de víctimas que en las luchas del 10 de agosto, pero la de agosto fue una batalla entre dos grupos armados en la que ambos bandos creían estar defendiendo sus vidas, mientras que las víctimas de los *septembriseurs* no tuvieron la oportunidad de ofrecer resistencia. Las matanzas también son especialmente preocupantes por la manera en que se integraron en la narrativa revolucionaria, incluso por figuras que, en principio, se oponían a la

violencia arbitraria. Nunca se identificó ni se castigó a los asesinos, y la mayoría de los líderes revolucionarios estuvieron de acuerdo en que era mejor cubrir el episodio con un «velo de silencio» para no interrumpir los esfuerzos por repeler la invasión extranjera. El idealista Jean-Marie Goujon no dijo nada sobre la matanza de similares características que tuvo lugar en su ciudad de Versalles.

Los periódicos cercanos a los girondinos, que casi se habían convertido en víctimas del movimiento, se mantuvieron callados sobre el episodio hasta varios meses después, cuando se dieron cuenta de la ventaja propagandística que tenía desafiar a los radicales. Un periodista exigió saber «cuántos asesinos deben reunirse para que un asesinato cometido por ellos deje de ser un crimen y se convierta en un acto de justicia popular». Algunas publicaciones cercanas a los radicales justificaron abiertamente las matanzas. El pueblo «tomó la medida extrema, pero la única apropiada, de prevenir los horrores que se preparaban contra él, y de mostrarse despiadado con quienes no habrían tenido ninguna misericordia», se decía en *Révolutions de Paris*. El director de la publicación incluso culpó a las autoridades municipales por no deshacerse de los cuerpos de las víctimas con mayor discreción, aunque también envió a los suscriptores nada menos que seis grabados gráficos de las matanzas, imágenes que han mantenido vivo el recuerdo de las jornadas sangrientas desde entonces.[44]

Aunque la noticia de la rendición de Verdún las precipitó, las matanzas no fueron sólo una expresión de pánico o brutalidad popular. El hecho de que los tribunales populares instalados en las prisiones perdonaran a los reclusos que estaban detenidos por delitos comunes o por no pagar sus deudas demostró el propósito político de los participantes. Al igual que la insurrección del 10 de agosto, los asesinatos en las prisiones los organizaron los militantes del movimiento *sans-culotte*, hombres que habían llegado a desconfiar no sólo de todos los que habían pertenecido a las clases privilegiadas del antiguo régimen, sino también de los miembros más educados y privilegiados del Tercer Estado. Ante la posibilidad de que los ejércitos enemigos llegaran a París, los militantes *sans-culottes* pretendían mostrar a los dirigentes políticos, que luchaban por llenar el vacío que había

dejado la caída de la monarquía, lo que les podía suceder si mostraban algún signo de debilidad. Aunque el número de personas involucradas directamente en los asesinatos era relativamente pequeño –un contemporáneo estimó que no serían más de ciento cincuenta–, la reacción de las multitudes que se reunieron fuera de las prisiones sugiere que contaban con un amplio apoyo. Incluso las mujeres exigieron un castigo para los que estaban acusados de oponerse a la Revolución. El 2 de septiembre, mientras comenzaban las ejecuciones, una delegación de mujeres instó a la Asamblea Legislativa a proteger a las reclusas que se encontraban detenidas por no haber pagado los honorarios de las nodrizas, y «ejecutar a todas las demás».[45]

Por muy burda que fuera su comprensión de la política, una parte considerable de la población había llegado a creer que los logros básicos de la Revolución estaban en peligro mortal y que incluso las medidas más drásticas estaban justificadas para defenderlos. Esto lo tuvieron en cuenta los diputados elegidos para la nueva Convención Nacional, que estaban a punto de asumir el reto de defender la Revolución en conflicto. Seis meses más tarde, con el recuerdo de las matanzas de septiembre muy presente, Danton apoyaría el restablecimiento del Tribunal Revolucionario que se había creado por primera vez en agosto de 1792 gritando: «Seamos aterradores, para evitar que el pueblo tenga que serlo».[46] Las matanzas de septiembre abrieron así el camino a los excesos sistemáticos y controlados, pero igualmente preocupantes, del Terror.

13

Una república que nació en una crisis

Agosto de 1792-mayo de 1793

Los ejércitos extranjeros invadían el país y los *sans-culottes* desafiaban a las autoridades establecidas en la capital, nadie estaba seguro de que la Revolución pudiera sobrevivir. Destacadas figuras que habían ayudado a promover el movimiento en sus inicios –entre ellos Talleyrand, que había propuesto la expropiación de los bienes de la Iglesia, y Madame de Staël, cuyo salón había sido un lugar de encuentro para la élite revolucionaria– se vieron obligados a emigrar, y los monárquicos acérrimos que habían huido antes no se mostraron muy amables con ellos. Mientras se convocaban las asambleas electorales para elegir a los diputados de la Convención Nacional, la Asamblea Legislativa saliente continuó reuniéndose en París. Fue simbólicamente apropiado que, en el último día de su sesión, el 20 de septiembre de 1792, la Asamblea Legislativa pasara de centrarse en la guerra y la política de facciones a la aprobación de dos leyes que aplicaban los principios individualistas de la Revolución a la vida privada de los ciudadanos. Una de ellas establecía un sistema secular y estatal de registro civil; la otra legalizó el divorcio. A pesar de la crisis que estaba teniendo lugar a su alrededor, los diputados estaban bajo presión para tratar estos temas porque su reestructuración de la Iglesia había terminado con la jurisdicción de la institución sobre el estado civil y el matrimonio sin ofrecer nada en su lugar.

Aunque hubo poco debate sobre la ley de *état civil* (estado civil), todos reconocieron su importancia. Establecer procedimientos para que los funcionarios municipales registraran los nacimientos, matrimonios y defunciones marcó un hito en el cambio de una sociedad en la que la

religión impregnaba todos los aspectos de la vida a otra en la que la relación del individuo con el Estado se convertía en primordial. Tener la prueba de haber nacido en Francia era crucial para determinar quién cumplía los requisitos de la ciudadanía. Al vincular a los niños con sus padres, los certificados de nacimiento establecían las obligaciones de los padres para mantener a su descendencia y los derechos de los herederos a heredar bienes. Más tarde, fueron cruciales para determinar quién era idóneo para realizar el servicio militar, apto para recibir los beneficios del Estado, tenía edad suficiente para casarse o estaba cualificado para ocupar un cargo político. Las licencias matrimoniales autorizaban el establecimiento de nuevas familias y definían los derechos de los cónyuges a la propiedad compartida, mientras que los certificados de defunción aseguraban una disposición ordenada de esa propiedad. Bajo el antiguo régimen, los sacerdotes católicos conservaban los documentos que establecían la identidad legal de los súbditos de la monarquía. La ley de 1787 que otorgaba el estado civil a los no católicos había creado procedimientos alternativos incómodos para los protestantes y los judíos, pero, como dijo un diputado en el debate de septiembre de 1792, si todos los ciudadanos eran completamente iguales, «no pueden existir formas diferentes de reconocer los nacimientos, los matrimonios y las defunciones».[1]

La transferencia de estas funciones de la Iglesia al Estado no fue un simple traslado de los libros de registro de la iglesia parroquial a la oficina del alcalde local. Según los diputados, el registro de los principales eventos de la vida era un ritual que identificaba a los individuos con la institución que garantizaba su identidad. Simple en principio, la aplicación de la ley se topó con muchas dificultades en la práctica, especialmente en las áreas rurales. Los sacerdotes refractarios que rechazaron la reorganización de la Iglesia hicieron lo posible por continuar con las viejas prácticas. «Bautizan, se casan y entierran, llevan registros de todo y dicen a los ignorantes que no necesitan acudir a los funcionarios públicos», se quejaban los administradores locales de una región.[2] En las zonas no francófonas, los funcionarios locales a menudo no hablaban francés lo suficientemente bien como para rellenar correctamente los formularios, y muchos miembros de la

minoría judía del país no tenían apellidos como exigía la ley. No obstante, el estado civil administrado por el Estado llegó a ser un legado permanente de la Revolución.

Finalizada el mismo día que la de *état civil*, la ley de divorcio definió el matrimonio como un arreglo puramente civil en lugar de un sacramento religioso. La Iglesia católica había prohibido el divorcio y había establecido procedimientos complicados y costosos para la concesión de anulaciones y separaciones legales; la ley de divorcio de 1792 excluía las consideraciones religiosas, poniendo fin al control de la Iglesia sobre una institución social fundamental. La ley también reconocía que las mujeres, aunque no disfrutaran de derechos políticos, merecían tener derechos significativos dentro de la familia. «¿No ha llegado la hora de reconocer en nuestro gobierno, en nuestra legislación, la razón y el espíritu de las mujeres que, en muchos aspectos, no son inferiores al espíritu y la razón de los hombres?», preguntó el diputado Mathurin-Louis-Étienne Sédillez, cuando propuso que fuera un jurado compuesto exclusivamente por mujeres el que decidiera si un marido que presentara una demanda contra su esposa debía ser autorizado a divorciarse de ella.[3]

Se rechazó la propuesta de Sédillez, pero la Asamblea respaldó el argumento de otro diputado, Louis Robin, quien señaló que el derecho al divorcio era una consecuencia necesaria de la libertad individual proclamada en 1789. «Nunca se puede renunciar a la libertad individual de manera indisoluble por ningún contrato», afirmó. Las reglas para el divorcio eran sorprendentemente igualitarias y estaban diseñadas para evitar casos judiciales como el escandaloso enfrentamiento de Mirabeau con su esposa en los años prerrevolucionarios. Las parejas que querían poner fin a su matrimonio debían reunirse con un «consejo familiar» formado por tres parientes de cada lado, que intentaría ayudarlos a llegar a un acuerdo. A menos que la pareja acordara lo contrario, la madre conservaría la custodia de todos los niños menores de siete años; el padre normalmente debía conservar la de los hijos mayores. Ambos progenitores debían compartir el costo de la manutención de los hijos. La única restricción especial impuesta a las mujeres era que no podían volver a casarse durante un año después de

la concesión del divorcio, de modo que la paternidad de cualquier niño nacido en ese periodo quedara clara; los hombres sólo tenían que esperar seis meses. Las mujeres vieron la ley como una oportunidad para liberarse de maridos abusivos: más de dos tercios de las demandas de divorcio que se presentaron durante el periodo revolucionario fueron de mujeres.

Jean-Marie Goujon, que siempre fue un modelo de entusiasmo revolucionario, ahora era funcionario del departamento del Sena y Oise, y adoptó las nuevas reglas sobre las ceremonias civiles tanto en su vida pública como en su vida privada. Como magistrado, se encargó de realizar el primer «bautismo civil» en Versalles. Al hacerlo, proclamó que imponer un ritual religioso a un recién nacido sería «una violación de la libertad de un futuro ciudadano»; otorgó al niño el primer nombre «republicano» y exhortó a los padres a que se aseguraran de que su hijo «aprendiera de vosotros a balbucear los nombres de la patria y la libertad [...] y que cuando escuche el relato de los crímenes de nuestros reyes, que el odio a los tiranos se eleve en su corazón junto con las primeras nociones de humanidad y justicia». Más o menos por la misma época, Goujon le propuso matrimonio a una joven. Antes de comprometerse, sin embargo, dijo que la patria siempre tendría que ser lo primero para él. Preguntó si, al casarse, «¿me ayudarías a tener más valor o intentarías apartarme de mi deber?». Ella le escribió para asegurarle que «distraerle de su deber de ser útil a sus conciudadanos es algo que jamás haría», y la unión siguió adelante.[4]

Mientras los legisladores salientes terminaban su trabajo, los votantes expresaban su opinión sobre los reemplazos. El electorado incluía ahora a casi todos los hombres mayores de veintiún años, aunque los empleados domésticos y los desempleados, a los que se consideraba que carecían de la independencia económica la cual incluso los jacobinos radicales consideraban necesaria para la plena ciudadanía, seguían estando excluidos. A las mujeres se les seguía negando el derecho al voto: los argumentos que Olympe de Gouges había esgrimido en su Declaración de los Derechos de la Mujer en 1791 sólo había convencido a unos pocos. Sin embargo, la

mayoría de la población masculina no hizo uso de su derecho al voto. La participación fue de alrededor del 20 por ciento, por debajo de la que hubo en las elecciones a la Asamblea Legislativa en 1791. Por miedo o renuencia a apoyar el giro radical de la Revolución, muchos conservadores y moderados se quedaron en casa. En Arras, la ciudad natal de Robespierre, un abogado local se quejó de que los partidarios del Incorruptible llegaron a la asamblea electoral «esgrimiendo pesados palos [...] y gritando contra la familia real, el clero y la nobleza». Se dedicaron a intimidar a cualquiera que se atreviera a no estar de acuerdo con ellos.[5]

Estas circunstancias favorecieron la elección de hombres dispuestos a tomar medidas decisivas para proteger los logros alcanzados desde 1789. «Ayudar a organizar un gobierno republicano, establecer el orden y la calma en toda Francia, pero sobre todo expulsar a los extranjeros y silenciar a la aristocracia, ése era mi mandato», escribió René Levasseur, un joven diputado de Le Mans, en el oeste de Francia.[6] Levasseur era un recién llegado a la política nacional, pero 283 de los 749 *conventionnels* eran veteranos de una u otra de las dos asambleas revolucionarias anteriores y tenían un interés personal en defender lo que esos organismos habían hecho. Algunas figuras prominentes, entre ellas Robespierre, Sieyès y Grégoire, volvieron a la legislatura nacional después de un año de ausencia. Para simbolizar las aspiraciones universales de la Revolución, la Convención aprobó la elección de dos extranjeros. Uno era Thomas Paine, famoso por su papel en la Revolución americana, así como por su respuesta al conservador británico Edmund Burke cuando atacó al movimiento francés. El otro fue Anacharsis Cloots, el autoproclamado «orador de la raza humana». Entre sus colegas se encontraban los principales miembros del movimiento de izquierda en la Asamblea Legislativa. Brissot y sus aliados girondinos estaban bien representados, aunque se vieron excluidos de la simbólica delegación de París y tuvieron que conformarse con escaños que representaban a los departamentos provinciales.

Los militantes jacobinos, conocidos como los *montagnards*, o «los hombres de la montaña», porque se sentaban regularmente en los bancos más altos de la sala de la Asamblea, dominaron las elecciones en el propio

París. Robespierre era la primera opción de los electores parisinos, seguido por Danton y otros radicales, entre los que estaban los periodistas Desmoulins y Marat, conocido como el «Amigo del Pueblo», por el título de su periódico *Ami du peuple*. Sorprendentemente, el último diputado elegido en París fue el antiguo duque de Orleans, primo del rey, que se había puesto el apodo de «Philippe-Egalité» y se había unido a las filas de los jacobinos. Con un diputado como Marat, a quien incluso muchos jacobinos radicales detestaban por su defensa abierta de la violencia, la versión más extrema de la ideología revolucionaria tenía ahora un portavoz en la legislatura nacional. Aunque la atención pública se centró en los diputados que ya tenían una reputación, la mitad de los *conventionnels* eran recién llegados, conocidos sólo en sus propias regiones y muchos de ellos eran reacios a tomar partido en las disputas que ya separaban a los girondinos de sus opositores más radicales. Ni los montañeses ni los girondinos pudieron obtener una mayoría en la que pudieran apoyarse en el conjunto de la Convención: durante los primeros ocho meses de su existencia, las dos facciones hostiles lucharon por ganar votos de los diputados no afiliados, que mostraron su independencia sentándose entre los montañeses y los girondinos. Los independientes se llamaban *la Plaine* o *le Marais* (la Llanura o el Pantano) porque estaban sentados en la parte más baja de la sala, en bancos colocados en el suelo.

La hostilidad entre girondinos y montañeses centró todos los debates de la Convención hasta que los montañeses lograron eliminar a sus oponentes. Las diferencias de origen social entre ambos grupos no eran significativas: los dos provenían en su mayoría de la burguesía urbana y principalmente del mundo de las leyes. Ambos hacían gala de su republicanismo y ninguno quería recuperar la distinción entre los ciudadanos más ricos y activos y el resto de la población. Los miembros de ambos grupos también se comprometieron a proteger los derechos de propiedad y a oponerse a todo lo que recordara vagamente a una «ley agraria», una redistribución de la riqueza que beneficiara a los pobres. El líder de los montañeses,

Robespierre, se había opuesto a la declaración de guerra, pero ahora que el conflicto estaba en marcha, todos los miembros de las dos facciones insistían en que había que llevarlo adelante con energía. Ambos grupos apoyaron las duras medidas que la Asamblea Legislativa había aprobado contra los *émigrés* y el clero refractario. Cuando la Convención comenzó sus sesiones en septiembre de 1792, la diferencia más obvia entre los dos grupos surgió de su actitud hacia la violencia popular que había acompañado al levantamiento del 10 de agosto y que se había desbordado en las matanzas de septiembre. Para los montañeses, los girondinos habían traicionado la causa revolucionaria al intentar frenar la insurrección popular contra el rey en el último momento. Según los girondinos, los montañeses estaban a favor de usar la violencia para lograr sus fines, como se había visto en su aceptación de las matanzas de septiembre y, sobre todo, el esfuerzo que hicieron por detener a Brissot y a Roland.

Al principio, los girondinos tuvieron más éxito que los montañeses en la carrera por el control de la Convención. Durante los últimos meses de 1792, sus candidatos ganaron regularmente las votaciones para la presidencia y contaron con el apoyo de la mayoría de los clubes jacobinos provinciales y los periódicos de París. Sin embargo, con el apoyo de los radicales Cordeliers, los montañeses dominaban el influyente Club Jacobino de París, cuyas concurridas sesiones abiertas a la ciudadanía les permitían influir en la opinión pública de la capital. Brissot y sus aliados, que habían expulsado a Barnave y a sus partidarios del Club Jacobino a principios de 1791, sufrieron ahora el mismo destino: a principios de octubre, cuando se le retó a defenderse o a renunciar a ser miembro, Brissot ni siquiera se molestó en aparecer. Las publicaciones más influyentes contra los jacobinos, *Ami du peuple* de Marat y *Père Duchêne* de Jacques-René Hébert, utilizaban un lenguaje populista que a menudo iba más allá de lo que la mayoría de los montañeses aprobaba. Los editores de los dos periódicos tenían seguidores independientes entre la población de París e incluso más allá: el periódico provincial jacobino de Dijon publicó artículos atribuidos a un «sobrino de Père Duchêne» que intentaban imitar el estilo característico de Hébert.

Brissot seguía siendo el portavoz más visible de los girondinos. Su devota amiga Madame Roland le ayudó a mantener la lealtad de los antiguos colaboradores y a reclutar nuevos. Madame Roland era plenamente consciente de los prejuicios que había contra la mujer en la política, por lo que evitaba intervenir abiertamente en las discusiones entre los hombres a los que ella y su marido –una vez más instalado como ministro del Interior–, acogían en su apartamento, pero se sospechaba que era ella quien redactaba muchas de las proclamas pronunciadas en nombre de su marido. Comparando sus actividades como ministro con las de Roland, Danton comentó con sarcasmo: «Todo el mundo sabe que Roland no estaba solo en su oficina. Yo estaba solo en la mía».[7] Tiempo después, Madame Roland se enamoró de François Buzot, uno de los girondinos más jóvenes, y sus ideales rousseaunianos de honestidad emocional hizo que se sintiera obligada a contarle a su marido sus sentimientos, lo que añadió un poco de drama personal a las luchas políticas del grupo. El hecho de que los Roland siguieran trabajando juntos daba idea de lo fieles que eran a sus convicciones.

Lo que unía a los más prominentes montañeses entre sí era algo mucho más laxo; de hecho, los ataques constantes de los girondinos al nuevo triunvirato de Robespierre, Danton y Marat crearon la ilusión de que su relación era mucho más cercana de lo que era realmente. Robespierre había dejado su huella en la Asamblea Nacional con su inquebrantable defensa de los principios democráticos. De 1789 a 1791, había sido a menudo una voz aislada; después del 10 de agosto, sus principios se convirtieron en parte de la política oficial. En los primeros años de la Revolución, Robespierre había sido amigo de Brissot y en ocasiones iba a las reuniones de Madame Roland, pero el debate sobre la guerra puso fin a esas amistades. Cuando no estaba en la Convención o en las reuniones del Club Jacobino, Robespierre pasaba gran parte de su tiempo con la familia de su casero, un próspero carpintero llamado Maurice Duplay. Duplay conocía a numerosos activistas *sans-culottes* en París y ayudó a Robespierre a contactar con ellos. Los Duplay le adoraban y su hija mayor, Eléonore, era una de sus favoritas, aunque no hay pruebas de que su amistad pasara a ser algo más que

platónica. Robespierre era muy maniático con su apariencia y continuó vistiéndose con las ropas formales del antiguo régimen. Se empolvaba el pelo cuidadosamente antes de aparecer en la Convención, donde leía los discursos que había escrito previamente con gran esmero.

En personalidad y apariencia, Robespierre no se parecía nada a Danton, el incendiario del Club de los Cordeliers que se había convertido en una figura nacional por su papel como líder del gobierno provisional después del 10 de agosto. A Madame Roland los modales de Danton le parecían demasiado rudos para su salón; se sentía más cómoda con los militantes de los clubes y las secciones de París. De Robespierre no se sospechaba que utilizara su posición política en beneficio propio, pero se especulaba mucho sobre cómo Danton, un abogado no muy exitoso, había logrado pagar las deudas que había adquirido al principio de su carrera. En 1791, también se había comprado varias propiedades en su ciudad natal. Cuando empezó a formar parte de la Convención, su explicación de cómo había gastado los fondos del Ministerio de Justicia, que había dirigido después del 10 de agosto, no resultó convincente y los rumores de corrupción le persiguieron el resto de su carrera. Robespierre mantenía sus emociones bajo estricto control, Danton se dejaba llevar, tanto en su oratoria como en sus actos privados. A principios de 1793, tras una misión que le había llevado lejos de la ciudad, regresó a París para descubrir que su primera esposa había muerto al dar a luz; la habían enterrado, pero insistió en que se desenterrara su ataúd para poder abrazarla una última vez. Durante más de un año tras la instauración de la Convención, los dos hombres apoyaron las mismas políticas, en general, pero Danton, a pesar de su imagen pública de impulsor revolucionario, estaba más abierto al compromiso que Robespierre. Con la esperanza de evitar una ruptura total de la asamblea, cultivó la relación con miembros destacados de *la Plaine*, el grupo del centro de la Convención, e incluso con algunos girondinos.

Llegar a acuerdos no era el estilo de Marat, el tercer miembro del supuesto triunvirato de los montañeses. El Amigo del Pueblo se había convertido en una fuerza a tener en cuenta gracias a sus ruidosas denuncias de casi todas las figuras importantes de la política revolucionaria. Se

posicionó como un defensor inflexible de los intereses del pueblo, exhortaba constantemente a sus lectores a esperar lo peor de cualquier autoridad. Mucho antes de la Revolución, en su tratado *Les chaînes de l'esclavage (Las cadenas de la esclavitud)*, había concluido que sólo la constante amenaza de una insurrección popular podía disuadir a los gobernantes de violar los derechos de sus súbditos. Los primeros tres años de la Revolución no hicieron nada para cambiar sus opiniones. Igual que Danton, se había unido al Club de los Cordeliers y alentaba a los militantes más radicales de las secciones de París. Casi todos los diputados de la Convención recibieron a Marat con hostilidad cuando resultó elegido en septiembre de 1792, pero sorprendió a todos; se defendía con una eficacia inesperada que convertía las respuestas de sus oponentes en torpes intentos de hacerle callar. Robespierre no deseaba que se le vinculara con él; apenas tuvieron relación, casi no se hablaban. Sin embargo, el Incorruptible era uno de los pocos políticos que Marat veía con buenos ojos, y prestó a Robespierre y a los montañeses valiosos servicios para mantener a sus oponentes girondinos desconcertados.

Sólo un año antes, cuando se reunió la Asamblea Legislativa, había cierta esperanza de que los trastornos que había causado la Revolución estuvieran llegando a su fin. Para cuando llegó el momento de la sesión inaugural de la Convención Nacional, el ambiente había cambiado. Los diputados sabían que asumían sus funciones en medio de una crisis aterradora. Su primer paso, con el objetivo de ganarse la confianza de una población que recelaba de todos los líderes por el caos de los tres años anteriores, fue adoptar una moción presentada por el diputado radical jacobino Georges Couthon, futuro miembro del todopoderoso Comité de Salvación Pública. Couthon, que se había convertido en un destacado jacobino a pesar de la parálisis de sus piernas –su silla de ruedas es una de las más preciadas piezas del Museo de Historia de París, el Musée Carnavalet– propuso que el nuevo plan de gobierno que redactarían se sometiera a la aprobación de los ciudadanos. Ésta fue una gran concesión al principio democrático que afirma que las

leyes deben expresar verdaderamente la voluntad de los ciudadanos. A continuación, Danton instó a sus colegas a «rechazar cualquier exageración» y prometió proteger «toda forma de propiedad, territorial, individual e industrial». Varias semanas antes, había asegurado en privado a los representantes de los propietarios de las plantaciones coloniales que esta promesa cubriría incluso a los negros esclavizados en sus plantaciones. Al mismo tiempo, sin embargo, esbozó un vasto y ambicioso programa para la nueva legislatura: «Hay que volver a mirar todo, recrear todo [...], la Declaración de Derechos en sí misma no está exenta de fallos y merece ser revisada por un pueblo verdaderamente libre».[8]

A pesar de haber comenzado proclamando que respetaría los límites de su propia autoridad, la Convención demostró inmediatamente que interpretaría su mandato de manera libre. Jean-Marie Collot d'Herbois quien, igual que Couthon, terminaría siendo miembro del Comité de Salvación Pública, propuso la abolición de la monarquía. Sólo un puñado de asambleas electorales habían apoyado dar un paso tan radical, y algunos diputados dudaron si tomar una medida tan audaz sin discusión ni tiempo para que los ciudadanos expresaran su opinión. Henri Grégoire, uno de los sacerdotes que se había sentado en la Asamblea Nacional y que ahora era un obispo constitucional, dejó a un lado sus objeciones. «Los reyes son en el mundo moral lo que los monstruos en el mundo físico», proclamó. La moción de abolir una institución central en la vida francesa durante catorce siglos fue aprobada por aclamación.[9]

Se dejó a los periodistas la tarea de explicar al público el significado de la repentina transformación de su país en una república como las que habían imaginado Rousseau y Mably antes de 1789. Una república, escribió el editor de *Révolutions de Paris*, «es un gobierno donde todos son libres, donde nadie es el amo, donde cada ciudadano cuida de su país tanto como el jefe de familia lo hace de sus parientes». Un republicano honesto, añadió, «es un ciudadano que ve a sus semejantes como iguales […]. Un buen republicano [...] se preocupa por el bien común, que prefiere por encima de todo lo demás; no es un frío egoísta». Convertirse en republicano no sería fácil, admitió el escritor. «¡Ciudadanos!», les exhortó, «deben resignarse de

antemano a las privaciones, y resolverse a hacer sacrificios». La República tendría poco espacio para la disensión. En respuesta al ministro girondino, Roland, que había instado a la aceptación de las diferencias políticas, el periodista escribió: «Predicar la tolerancia en este momento es invitar a la holgazanería y a la desorganización».[10] Su visión de la República resultó profética: el nuevo régimen promovería ideales elevados, pero exigiría mucho a sus ciudadanos y trataría con dureza a los que se resistieran.

En el momento en que los diputados de la Convención votaron para declarar la República en Francia, no tenían garantías de que su asamblea sobreviviera lo suficiente para instaurar ninguna de sus medidas. Mientras celebraban su primera sesión, el futuro de la Revolución se decidía en un campo de batalla enfangado del noreste de Francia, no lejos de donde se había puesto fin al intento de fuga de Luis XVI un año antes. Las noticias de la batalla de Valmy llegaron a París el 22 de septiembre. Se había librado dos días antes contra las mismas fuerzas prusianas que habían tomado Verdún el 29 de agosto, ayudando a desencadenar las matanzas de septiembre. Dumouriez, que había dejado su cargo de ministro de la Guerra para dirigir las fuerzas francesas en el campo de batalla, logró infundir un nuevo espíritu a las tropas, que estaban desmoralizadas tanto por sus derrotas a principios de año como por la deserción de Lafayette, su predecesor. El esfuerzo de la guerra sacó energía de una ola de voluntarios patriotas. Gabriel Noël, un joven educado que se había alistado en el ejército un año antes y que ahora se consideraba a sí mismo un veterano experimentado, no se dejaba impresionar por sus nuevos camaradas. «Piensan que todo se pondrá a su favor», escribió en una carta. «Pero una cosa es cortar cabezas, colgar gente, ser unos asesinos, y otra, muy diferente, es luchar contra los prusianos». Añadió: «Vi un destacamento de estos parisinos liderado por una mujer, con un sable en la mano. ¡Qué locura!».[11] Pero por muy duros e inexpertos que fueran, los nuevos soldados daban al ejército una ventaja en número y en espíritu de lucha.

Mientras los prusianos avanzaban hacia París, Dumouriez vio la oportunidad de cortarles las líneas de suministro. Su colega, el general François Christophe de Kellermann, colocó sus armas frente a un molino de viento cerca del pueblo de Valmy, una posición que el enemigo tendría que atravesar para frustrar la maniobra francesa. El cañón de Valmy fue el producto de uno de los esfuerzos de reforma militar emprendidos en las últimas décadas del antiguo régimen: la artillería de campo, ligera y fácil de manejar, la había diseñado el general Jean-Baptiste Gribeauval para responder a las deficiencias reveladas por las derrotas de la Guerra de los Siete Años. Más adelante, el nuevo cañón resultaría esencial en las victorias de Napoleón Bonaparte, aunque él no estuvo presente en Valmy para presenciar este primer éxito.

Como informó Kellermann a la Convención, había mantenido a los prusianos alejados durante catorce horas con disparos continuos. Luego, con su sombrero y su escarapela tricolor en la punta de su espada, gritó «¡Viva la nación!», instó a sus hombres a avanzar mientras la banda del ejército tocaba la canción revolucionaria «Ça ira», cuya letra aseguraba a los soldados que «morirá el despotismo y triunfará la libertad». El célebre autor alemán Johann Wolfgang von Goethe, que estaba con las fuerzas prusianas, fue testigo de cómo se desmoralizaron en su propio bando cuando se dieron cuenta de que no podrían «pinchar a todo el ejército francés y asarlo para comer». Goethe recordó más tarde que mientras los soldados prusianos se sentaban alrededor de una hoguera, alguien le preguntó qué pensaba que significaba la inesperada derrota, y él respondió: «Aquí y ahora comienza una nueva época en la historia del mundo». En privado, al contemplar «una gran nación a la que habían arrancado de su marco», anticipó que «evidentemente, después de nuestra desafortunada campaña, también arrancarán al mundo de su marco».[12]

Al fracasar su intento por recuperar el contacto con su tren de suministros, el duque de Brunswick, el comandante prusiano cuyo amenazante manifiesto había galvanizado la resistencia francesa, solicitó un armisticio para poder retirarse del suelo francés. Las negociaciones dieron a los victoriosos oficiales franceses la oportunidad de decirle al comandante

prusiano lo que pensaban de su «loca presunción» de que podía «intentar dictar leyes a un pueblo que Europa entera es incapaz de conquistar, aunque todos los déspotas se unan contra él». Durante la invasión de 1792, unos aldeanos le explicaron a Frédéric-Christian Lankhard, un oficial del ejército prusiano, su lealtad a la Revolución diciéndole «que los impuestos agobiantes a los que habían tenido que hacer frente se habían abolido, ahora podían pensar, trabajar, ayudarse mutuamente en libertad, disfrutar de la vida y de los frutos de su trabajo en paz, y tener unos ahorros [...]. En resumen, ahora eran conscientes de que eran hombres, ya no eran esclavos a merced de los nobles y los sacerdotes».[13] Animados por su éxito en Valmy, los franceses decidieron llevar la guerra a sus enemigos. A finales de septiembre, un ejército francés había invadido el reino italiano de Saboya, en el sudeste, mientras que otro cruzó el Rin, un preludio del avance que pronto llegaría a Maguncia. En octubre, Dumouriez dirigió la principal fuerza francesa hacia el norte de Bélgica, y el 6 de noviembre derrotó a las fuerzas austriacas en Jemappes, despejando el camino para la ocupación de la principal ciudad de la región, Bruselas.

La victoria en Valmy y las conquistas que vinieron después disiparon la sensación de desastre inminente que se cernía sobre Francia desde el comienzo de la guerra. También daba algo de tiempo para que la nueva república se consolidara. Sin embargo, la atmósfera de desconfianza y temor a la traición que tanto se había intensificado en los meses anteriores se apoderó rápidamente de la Convención. La misma edición semanal del *Révolutions de Paris* que había ofrecido a los lectores su primera explicación de lo que significaría la proclamación de la República, informó que el 25 de septiembre, sólo tres días después de que los diputados parecieran estar tan unidos, la profundidad de su desacuerdo se había hecho evidente.

Los portavoces de la facción girondina lanzaron un asalto total a Robespierre, Danton y Marat. Los acusaron de conspirar para instaurar una dictadura de tres hombres siguiendo el modelo del triunvirato que había

sellado la perdición del gobierno republicano en la antigua Roma. Robespierre y Danton negaron la acusación, pero Marat reconoció con orgullo que él apoyaba una dictadura temporal para defender la Revolución. «Si aún no estás a mi nivel, peor para ti», dijo. Entonces se sacó una pistola del bolsillo, se la llevo a la sien y gritó: «Si hubierais votado para condenarme, me habría volado los sesos delante de vosotros».[14] Él y otros montañeses denunciaron a prominentes girondinos que habían hecho contactos de última hora con el rey justo antes del levantamiento del 10 de agosto, los acusaron de traicionar a la Revolución. Era la chispa inicial de un conflicto que ensombrecería todo lo que acometió la Convención durante los siguientes ocho meses.

El abismo de desconfianza entre girondinos y montañeses se iba haciendo cada vez más profundo mientras los diputados se enfrentaban a la cuestión más explosiva que tenían entre manos: qué hacer con el depuesto Luis XVI. Ahora se le conocía simplemente como Luis Capeto, el nombre dinástico que jamás había utilizado. La justificación para el levantamiento del 10 de agosto había sido la afirmación de que el rey había traicionado al país; existía una fuerte presión por parte de la Comuna y los activistas *sans-culottes* para vengar a los que habían muerto en los combates. Aunque no había monárquicos abiertamente declarados en la Convención, los diputados sabían que la simpatía por el rey seguía siendo fuerte en muchas partes del país. Juzgarlo traía consigo el riesgo de poner a prueba la lealtad de la población hacia el nuevo régimen republicano. Por otra parte, si se le dejaba con vida, Luis XVI seguiría siendo una figura en torno a la que podrían unirse los opositores a la Revolución y si, de hecho, era culpable de traición, dejarle sin castigo haría que pareciera que traicionar a la nación no tenía ninguna consecuencia.

A principios de octubre, apenas una semana después de haber comenzado su sesión, la Convención nombró un comité para analizar el destino del rey. Dominado por simpatizantes girondinos, el comité se declaró abrumado por la cantidad de documentos que tenía que examinar; además, a los enemigos del rey les pareció muy sospechoso que el comité fuera incapaz de encontrar pruebas incriminatorias en esos documentos. Se

encargó a una segunda comisión que investigara si se podía juzgar al rey constitucionalmente y, en caso afirmativo, quién lo haría. Mientras tanto, a finales de octubre, el portavoz girondino, Jean-Baptiste Louvet, conmocionó a todos en la Convención al acusar a Robespierre de fomentar la violencia y de conspirar para convertirse en un dictador. El joven poeta británico William Wordsworth fue a París atraído por el espectáculo de la Revolución y estaba en la galería ese día: años más tarde, en su obra autobiográfica *The Prelude*, recordaba el dramático momento en que Louvet «tomó la palabra en la tribuna y dijo: "Yo te acuso, Robespierre"». Una semana después, Robespierre respondió, justificando la insurrección del 10 de agosto. Sí, había habido violencia, afirmó, pero no había otra forma de derrocar la monarquía y salvar el país. «¿Queréis una revolución sin una revolución?», preguntó. Incluso sus colegas girondinos reconocieron que Louvet había perdido la disputa.[15]

La victoria de Robespierre despejó el camino para centrarse en el debate sobre si juzgar al rey o no, y cómo hacerlo. Desde el punto de vista jurídico, había un grave obstáculo: la Constitución de 1791 había declarado que el único castigo que se podía infligir al rey por violación de las leyes era la destitución del trono; fuera de ello, era «inviolable», inmune al castigo judicial por cualquiera de sus actos. El miembro más joven de la Convención, Louis-Antoine de Saint-Just, que tenía veinticinco años, proporcionó el argumento más fuerte para anular la Constitución. Dirigiéndose a sus colegas por primera vez, Saint-Just causó una impresión difícil de olvidar al argumentar que el crimen de Luis XVI no estaba en lo que había hecho, sino en lo que él era. «¡Juzgar a un rey como a un ciudadano! La idea asombrará a la posteridad […]. No se puede reinar inocentemente […]. Todo rey es un rebelde y un usurpador», insistió Saint-Just.[16] No era necesario ningún juicio para justificar su ejecución: el mero hecho de que hubiera pretendido gobernar sobre hombres que merecían ser libres era suficiente.

La implacable lógica de Saint-Just hizo imposible que la Convención dejara a Luis XVI escapar del juicio, pero la mayoría de los diputados no estaban dispuestos a apoyar una ejecución sin un juicio. Enviarlo ante un

tribunal penal ordinario subrayaría el hecho de que Luis era un ciudadano como cualquier otro, pero creaba un espinoso problema legal, ya que la autoridad de los tribunales existentes provenía de la Constitución de 1791, que había declarado que no se podía hacer al rey responsable de sus actos. Crear un tribunal especial llevaría tiempo y plantearía nuevas complicaciones. La alternativa era que la propia Convención actuara como fiscal del rey y como tribunal para juzgarlo. Los diputados entendieron que esto violaba el principio de la separación de poderes que figura en el artículo 16 de la Declaración de Derechos, pero no parecía haber otra opción factible.

A medida que se prolongaba el debate sobre los procedimientos, el ministro girondino Roland cometió un error que los comprometió seriamente a él y a sus aliados políticos. El 20 de noviembre de 1792, acompañó al cerrajero Gamain, que tantos años antes había enseñado a Luis XVI su oficio, al Palacio de las Tullerías, donde Gamain le mostró una caja fuerte secreta, el llamado *armoire de fer*, llena de papeles que había escondido el rey. Aunque debería haber sido consciente de lo controvertida que sería su acción, Roland revisó los papeles a solas antes de informar del descubrimiento a la Convención. El hecho de que no hubiera testigos presentes cuando Roland examinó los papeles, entre los que se encontraban las cartas de Mirabeau al rey, dio pie a los montañeses para acusarle de eliminar pruebas de posibles contactos de sus aliados con la corte. Los girondinos estaban dejando cada vez más claro que se oponían a la ejecución del rey, lo cual hizo que se sospechara cada vez más de ellos por la manera en que Roland se había encargado del *armoire de fer*. «El propio delito de quitarle los documentos al monstruo Capeto merece la muerte», escribió el montañés Joseph Chalier de Lyon.[17]

Mientras girondinos y montañeses luchaban por el destino del rey, ambos mantenían un ojo alerta a las reacciones fuera de su sala de reuniones. La exigencia de los girondinos de que había que juzgar a los responsables de la matanza de septiembre y su sugerencia de que la Convención necesitaba una guardia armada compuesta por hombres de las provincias generó hostilidad entre ellos y los *sans-culottes* de la capital. En

París, el nerviosismo por los altos precios de la comida se intensificó de nuevo y los portavoces populares reclamaron que los diputados tomaran medidas contra el rey. Jacques Roux, un antiguo sacerdote que se presentó como portavoz de los pobres, unió los dos temas en un potente discurso que pronunció ante la sección del Observatorio de la Asamblea el 1 de diciembre de 1792, «sobre el juicio de Luis, el Último, la persecución de los especuladores, de los acaparadores y de los traidores». Roux advirtió a los diputados que «si no golpean a un tirano cuando está cometiendo las fechorías, la nación soberana los llevará ante su tribunal supremo». Desde Versalles, donde los compradores que representaban a París dejaron vacíos los mercados locales, Jean-Marie Goujon escribió a la Convención para denunciar «a esta clase de capitalistas y propietarios a quienes la libertad sin límites [del comercio] hace dueños del precio del grano». Exigió que el gobierno impusiera controles de precios.[18] En las provincias, las opiniones sobre el rey estaban divididas. Los girondinos quisieron ganar apoyos al denunciar el comportamiento de la población de la capital, una táctica que aisló todavía más a los *sans-culottes*. Brissot y sus aliados también advirtieron que juzgar y ejecutar al rey tenía el riesgo de alargar la guerra. Otras monarquías europeas habían cortado las relaciones diplomáticas con Francia después de la insurrección del 10 de agosto y dejaron claro que estaban preocupados por el destino de Luis.

Finalmente, el 6 de diciembre, la Convención decidió que los propios legisladores juzgaran al rey. Luis tendría un consejero legal y se le permitiría responder a los cargos contra él. Aunque la mayoría de los girondinos apoyaban la idea de un juicio, carecían de una estrategia coherente, por lo que la decisión benefició a sus rivales montañeses, que tenían un objetivo claro en mente. El acta de acusación, redactada por un comité especial, alegaba que todas las acciones del rey, desde el momento en que intentó imponer su programa en la sesión real del 23 de junio de 1789 hasta que dio órdenes a sus tropas en el Palacio de las Tullerías el 10 de agosto de 1792, habían formado parte de un esfuerzo constante por paralizar o derrocar la Revolución. El 11 de diciembre, sacaron a Luis de prisión y Bertrand Barère procedió a interrogarle ante los diputados. Barère

le dijo: «Los franceses le acusan de haber cometido numerosos crímenes para establecer su tiranía a costa de destruir la libertad del pueblo». Como los diputados no conocían las cartas que María Antonieta había enviado en secreto a la corte austriaca y a Fersen, que habrían aportado pruebas convincentes de la connivencia de la pareja real con las potencias extranjeras, Luis pudo responder que sus actuaciones habían sido siempre dentro del ejercicio legítimo de sus poderes. A pesar de lo humillante que era su presencia en la Convención, la dignidad de sus maneras impresionó a los espectadores. «Este comportamiento ha supuesto una considerable revolución en las mentes de la gente de aquí», escribió un espía inglés, «y quienes quizá eran indiferentes a lo que había pasado antes, empiezan ahora a lamentar la aproximación y muy probablemente la pérdida de un soberano cuya vida consideraban sagrada».[19]

Para su defensa, el rey reclutó a François-Denis Tronchet, un distinguido abogado. Hubo otros que se ofrecieron a ayudarle, incluyendo la activista por los derechos de la mujer Olympe de Gouges, una monárquica declarada. El rey aceptó la ayuda que le ofreció su exministro Malesherbes, antiguo defensor de la *Enciclopedia* de Diderot y D’Alembert, que terminaría pagando con su vida la devoción que tenía por el soberano. Finalmente añadió a su equipo a Raymond de Sèze, un especialista en oratoria judicial. El 26 de diciembre, el rey fue transportado de nuevo por las calles de París hasta la sala de reuniones de la Convención. Ante una multitud desbordada, De Sèze expuso lo que el equipo jurídico había decidido que eran los únicos argumentos que podían influir en los diputados: la promesa de la Constitución de que el rey sería inmune a la persecución y la injusticia de que la Convención fuera acusador y juez. Al final de la sesión, Luis XVI hizo una breve declaración. «Al hablaros, quizá por última vez, os declaro que mi conciencia está tranquila […]. Mi corazón se ha desgarrado al ver en la acusación el cargo de haber querido derramar la sangre del pueblo».[20]

Los girondinos propusieron entonces que la cuestión de la culpa y el castigo del rey se sometiera a la votación del pueblo. Los montañeses, a

pesar de su compromiso teórico con la democracia, denunciaron este «llamamiento al pueblo» como una táctica dilatoria y una invitación a la guerra civil. El diputado Barère convenció a la mayoría de los diputados de que dejar la decisión sobre la culpabilidad del rey en manos del pueblo sería abandonar el principio básico del gobierno representativo: «Sería obligar al pueblo soberano a hacer el trabajo que el pueblo ha ordenado que se haga». El discurso de Barère cambió el rumbo del debate: la mayoría votó en contra de los girondinos. Mientras tanto, la tensión en las calles aumentaba, se estaba haciendo evidente que los legisladores tenían que llegar ellos mismos a una decisión sobre la culpabilidad y el castigo del rey. El *Père Duchêne* de Hébert les exigió que dejaran de perder el tiempo y que «acortaran el sufrimiento del cerdo» y lo enviaran a la guillotina. Los disturbios estallaron después de la representación de una obra política, *L'ami des lois (El amigo de las leyes)*, en la que se caricaturizaba cruelmente a los montañeses más destacados. Los simpatizantes realistas todavía podían publicar panfletos en nombre del rey y el 11 de enero de 1793, los alborotadores de Ruan clamaron «¡Viva el rey!». En París, el embajador español, en nombre de su propio soberano Borbón, trató de sobornar a los diputados de la Convención para salvar la vida del rey. Thomas Paine, que se había aliado con los girondinos, hizo un último esfuerzo para evitar una posible ejecución, sugiriendo que se enviara a Luis XVI al exilio en Estados Unidos. Allí, «lejos de las miserias y los crímenes de la realeza», dijo, «puede aprender, desde el aspecto constante de la prosperidad pública, que el verdadero sistema de gobierno no consiste en los reyes, sino en una representación justa, igual y honorable». Se ignoró su sugerencia.[21]

El proceso de votación sobre el destino del rey duró cuatro días agonizantes, que empezaron el 14 de enero, cuando los diputados se pusieron de acuerdo sobre las tres cuestiones a decidir: ¿era el rey culpable de traición? ¿Debería haber una apelación al pueblo? ¿Y qué pena debería recibir? Sobre la primera pregunta, 691 legisladores votaron que había que declarar al rey culpable de traición, 27 se negaron a votar; ninguno afirmó su inocencia. Los girondinos se centraron en la segunda pregunta, pero sólo

pudieron reunir 287 votos contra 424 para someter la sentencia del rey a una votación popular. A las ocho de la tarde del 16 de enero, después de un día de retrasos parlamentarios, los diputados comenzaron a presentarse en la tribuna para emitir el más difícil de los votos: a favor o en contra de la ejecución del rey. Para entonces, todos los diputados sabían lo que estaba en juego en su decisión. Condenar al rey a muerte era eliminar el símbolo vivo del país, una figura por la que gran parte de la población todavía sentía un fuerte apego. Significaba arriesgarse a que estallara un conflicto interno con aquellos que no aceptaran la decisión y a convertir la guerra exterior, que ahora era un conflicto con dos grandes potencias, en una lucha contra todas las monarquías europeas. Docenas de legisladores se sintieron obligados a justificar sus votos, lo cual alargó la sesión hasta la noche.

El primer votante, Jean-Baptiste Mailhe, aportó un nuevo elemento de confusión al procedimiento al votar a favor de la pena de muerte, pero con la disposición de que, si la mayoría apoyaba esa decisión, la Convención realizaría entonces una votación adicional sobre la posibilidad de suspender la ejecución. Otros votantes aprovecharon la formulación de Mailhe, que les permitía votar para condenar al rey a muerte, al tiempo que dejaban claro que esperaban que la sentencia no se cumpliera. De los veinticuatro diputados de París, todos, menos uno, votaron por la muerte, incluido el primo del rey, el antiguo duque de Orleans, cuyo voto hizo temblar a toda la sala. La alternativa más práctica a votar por la muerte era mantener al rey en prisión hasta el final de la guerra y luego desterrarle, una propuesta que obtuvo 319 de los 721 votos emitidos. La ejecución inmediata fue lo que votaron 361 diputados, la mayoría mínima requerida, pero otros 26 votaron a favor de la sugerencia de Mailhe de suspender la sentencia o de alguna otra formulación, lo cual dejaba dudas sobre sus verdaderas intenciones. Un puñado de diputados no se encontraba en París en ese momento y los diputados no querían que una cuestión tan trascendental se decidiera por un margen tan estrecho que sus votos pudieran cambiar el resultado; por lo tanto, se resignaron a llevar a cabo una votación más, sobre la cuestión de si

la sentencia de muerte debía ejecutarse inmediatamente. El recuento final sobre esta cuestión fue de 380 a favor y 310 en contra. La cabeza del rey iba a rodar.

Luis XVI, que había pasado parte de su tiempo en prisión releyendo la historia de la Revolución inglesa de David Hume, esperaba este resultado. Había preparado su última voluntad y testamento. Cuando el devoto Malesherbes estalló en un llanto después de decirle: «¡Señor, han votado por la muerte!», el rey le consoló con un prolongado abrazo. La ejecución se fijó para el 21 de enero de 1793. En la tarde del 20, el rey se despidió por última vez de su familia. Por la mañana, oyó una misa y se quitó el anillo de bodas del dedo, pidiendo a su fiel *valet*, Jean-Baptiste Cléry, que se lo entregara a María Antonieta. Las calles se llenaron de tropas mientras el carruaje le llevaba por la ciudad hasta la gran plaza pública en el extremo occidental de los jardines de las Tullerías –hoy la Place de la Concorde– donde se había levantado la guillotina. El día anterior, un monárquico había matado a puñaladas a Michel Le Peletier de Saint-Fargeau, un diputado montañés, en el Palais-Royal. La Comuna estaba en guardia para evitar cualquier intento de última hora que pudiera haber para rescatar al rey. A pesar de la lluvia fría, una multitud silenciosa llenó las calles. Era difícil saber qué pensaban: como escribió el cronista Nicolas Ruault, «nadie dejaba ver sus sentimientos por miedo a irritar a los militantes que andaban por allí con aire triunfante».[22]

El carruaje del rey tardó más de una hora en ir de la Torre del Temple al lugar de la ejecución. Un periodista monárquico afirmó que una vez que el rey salió del carruaje y subió las escaleras del patíbulo, el sacerdote que le acompañaba le bendijo con las palabras: «Hijo de San Luis, sube al cielo». Cuando Luis llegó al patíbulo, «quiso dar un paso adelante para hablar», según el relato de *Révolutions de Paris*. «Las voces exigían a los verdugos [...] que cumplieran con su deber; sin embargo, mientras le ataban, él pronunció claramente estas palabras: «"Muero inocente, perdono a mis enemigos, y deseo que mi sangre sea útil a los franceses y apacigüe la ira de Dios". A los diez minutos, separaron su cabeza de su cuerpo y luego se la mostraron a la gente. Se oyeron gritos de "¡Viva la República!" por todas

partes».[23] Bajo el patíbulo, algunas personas mojaron pañuelos en la sangre del rey para fabricar reliquias.

«Lo hemos hecho», escribió el diputado de los montañeses Philippe Le Bas. «El camino de vuelta está cortado, tenemos que seguir adelante, queramos o no; ahora podemos decir realmente, “vivir libre o morir”». Para los monárquicos, la muerte del rey fue tan traumática como la pérdida de un miembro de la familia. «Viviremos nuestro dolor en privado, no lo compartiremos con nadie», escribió un periodista. Sin embargo, para los militantes revolucionarios como Hébert, el hombre tras el *Père Duchêne*, el acontecimiento merecía una celebración. Su única preocupación era que «la esposa de Luis y los desgraciados de sus parientes siguen vivos: ustedes no descansarán hasta que sean destruidos». La responsabilidad compartida por la muerte de Luis XVI unió a los *régicides*, los diputados que habían votado por la ejecución: sabían que no habría perdón para ellos si se ponía fin a la Revolución. Los girondinos y otros diputados que habían votado en contra de la muerte estaban desorganizados. El Club Radical Jacobino de Marsella inició una campaña contra los diputados que habían votado a favor de perdonar al rey, tildándolos de «traidores y perturbadores» y exigiendo que fueran expulsados de la Convención.[24] Los activistas políticos se dieron cuenta de que lo que estaba en juego en sus disputas era literalmente a vida o muerte: si se podía mandar al monarca a la guillotina, todos los ciudadanos eran igual de vulnerables.

Mientras asumían el impacto de la ejecución del rey, los líderes revolucionarios también tuvieron que prepararse para una guerra de mayor alcance. Las victorias que habían obtenido los ejércitos revolucionarios en Bélgica, Alemania y los Alpes italianos durante el prolongado debate en la Convención sobre el juicio del rey aumentaron el miedo a la invasión extranjera, y plantearon preguntas apremiantes sobre lo que debía hacerse con los territorios que ocupaban los franceses. En unas regiones, la ocupación francesa se desarrolló relativamente bien. En Saboya, una parte del norte del reino italiano de Piamonte, el general Anne-Pierre

Montesquiou convocó a los delegados a una convención nacional de alóbroges, el nombre que los romanos habían dado a los habitantes de la región. En cuatro días, los diputados habían promulgado leyes que duplicaban todas las grandes reformas que los franceses habían tardado tres tumultuosos años en acordar. La población era francófona y no tenía un fuerte apego a la parte italiana del reino, de la que estaba separada por los Alpes. A finales de noviembre, la Convención había acordado convertir Saboya en un nuevo departamento –que se llamaría como su montaña más alta, Mont Blanc–, e incorporarlo a la nación francesa.

Las mayores dificultades surgieron en otras regiones conquistadas. La situación en Bélgica era particularmente complicada y acrecentó las tensiones en la Convención entre los girondinos, que se identificaban estrechamente con el general Dumouriez, y los montañeses. Dumouriez había tenido contactos desde hacía mucho tiempo con los revolucionarios belgas que se habían levantado sin éxito contra sus gobernantes austriacos en 1789-1790, y uno de sus aliados cercanos, el ministro de Relaciones Exteriores francés Pierre Lebrun, era un exiliado revolucionario de la región. Preocupado por mantener a la población en paz después de que ocupara la zona y, sobre todo, por conseguir comida y otros suministros para sus tropas, Dumouriez permitió que se restablecieran las instituciones tradicionales, aunque violaran los preceptos de la Revolución francesa. «La Revolución apenas se ha instaurado en Brabante», advirtió a París. «La camarilla de sacerdotes y los antiguos estados gobiernan tres cuartas partes del país». Los diputados de la Convención tenían diferentes objetivos: las conquistas francesas debían difundir los ideales de libertad e igualdad. Su primer «decreto de propaganda» –aprobado el 19 de noviembre de 1792, a favor de las directrices para los ejércitos de la República– declaró que la nación francesa «concedería fraternidad y ayuda a todos los pueblos que desearan recuperar su libertad». Era una promesa abierta de asistencia a los movimientos revolucionarios de otros países y una amenaza para los elementos más conservadores de sus poblaciones. Olympe de Gouges, quizá inspirada por el hecho de que Dumouriez nombrara ayudantes de campo a las hermanas Fernig, mujeres voluntarias de su ejército, escribió

rápidamente una obra en cinco actos celebrando la conquista de Bruselas. En la obra, aparecía Dumouriez diciendo: «Vuestro sexo ahora es igual al nuestro; ése es el resultado de esta poderosa Revolución».[25]

Los acontecimientos en Bélgica llevaron rápidamente a un cambio radical en la política francesa. Dumouriez se quejó de que la promesa de ayudas para los movimientos por la libertad estaba alienando a los elementos más conservadores de la población. También entró en violento conflicto con el Ministerio de la Guerra de París, cuyo ministro montañés, Jean-Nicolas Pache, había dado trabajo a aliados que destacaban más por su radicalismo político que por sus capacidades en la organización de suministros para el ejército. Mientras tanto, los radicales testarudos de la Convención exigían saber por qué Francia debía pagar el coste de llevar la libertad a sus vecinos. El 15 de diciembre de 1792, un segundo decreto de propaganda especificaba que se expropiarían las propiedades de los gobernantes expulsados de los territorios ocupados y las de la Iglesia católica. Además, se esperaba que los nuevos gobiernos establecidos con el respaldo francés pagaran los costos de la ayuda francesa. Todos los privilegios «feudales» de los países ocupados quedarían abolidos de inmediato, y cualquiera que «rehusara la libertad y la igualdad, o renunciara a ellas» sería declarado «enemigo del pueblo».[26]

Esta combinación de exigencias estimuló la resistencia contra los «liberadores» franceses no sólo en Bélgica, sino en otros territorios ocupados. La idea de que los habitantes de los territorios liberados pagaran por el mantenimiento del ejército francés, y que adoptaran también inmediatamente el programa revolucionario completo, produjo resentimiento. Incluso los activistas locales que estaban sinceramente a favor de los ideales del republicanismo se encontraban en una situación difícil: necesitaban el apoyo francés, pero eso significaba aceptar las fuertes demandas financieras de los ocupantes. Además, tendrían que pasar por alto los robos generalizados que empezaron a producirse cuando se expropiaron los bienes de la Iglesia y de los nobles. En cuanto se dieron cuenta de que en Bélgica había una gran oposición al republicanismo impuesto por Francia, los miembros del Club Jacobino de Bruselas se vieron obligados a

amenazar a sus compatriotas diciendo «si no queréis ser libres, muy bien, tendréis que serlo a vuestro pesar».[27] Al otro lado del Rin, en Maguncia, en una zona ocupada por las tropas del general Adam Philippe Custine, un grupo seguidor de los «jacobinos alemanes» fundó un club para pelear por una constitución republicana. Inicialmente, consiguieron el apoyo de algunos artesanos, comerciantes y vendedores de la ciudad, pero las fricciones entre las tropas francesas y la población civil socavaron el entusiasmo por el nuevo régimen. Bajo supervisión francesa, los jacobinos de Maguncia celebraron las primeras elecciones de la historia de Alemania el 24 de febrero de 1793, pero pocos ciudadanos estaban dispuestos a prestar el juramento de libertad e igualdad necesario para poder votar. Una semana después de declararse una república independiente, los diputados de la nueva Convención Nacional de Alemanes Libres votaron para pedir la anexión a Francia. Sin embargo, cuando la Convención Francesa aceptó su petición el 30 de marzo, Maguncia estaba sitiada por las tropas prusianas. Para los activistas jacobinos alemanes, la experiencia fue una amarga lección: las exigencias de los franceses habían hecho imposible ganar el apoyo de sus compatriotas y, después, el ejército francés se mostró incapaz de protegerlos.

Mientras los franceses trataban de expandir el republicanismo en los territorios que habían ocupado en el otoño de 1792, se encontraron con que la guerra también se había extendido. Como habían advertido Brissot y otros girondinos, la ejecución de Luis XVI había cambiado negativamente la opinión que se tenía en el extranjero sobre la Revolución y había atraído a nuevos e importantes oponentes al conflicto. Que se sumara la República holandesa a la lista de enemigos de Francia era la prueba de que las monarquías no eran las únicas que veían a la Francia revolucionaria como un peligro mortal. Más significativo, sin embargo, fue el comienzo de la guerra con Gran Bretaña. El 1 de enero de 1793, el diputado girondino Armand Kersaint imaginó con optimismo cómo un conflicto global con los británicos cambiaría el mundo. Los irlandeses y los escoceses estaban

preparados para la revuelta, los corsarios franceses perseguirían a los mercaderes británicos desde los mares, y los movimientos revolucionarios en los imperios de los aliados de Gran Bretaña instaurarían repúblicas libres en México y Brasil. Francia enviaría tropas a la India para ayudar al sultán Tippoo, el gobernante de Mysore, en su lucha contra la Compañía Británica de las Indias Orientales. Finalmente, los patriotas pescadores franceses transportaron un ejército a través del Canal. No había duda en la mente de Kersaint de que «sobre las ruinas de la Torre de Londres […] firmaremos el tratado que decidirá el destino de las naciones y que establecerá la libertad del mundo».[28]

Los pronósticos de Kersaint no eran realistas, pero fue profético al anticipar que las dos décadas de conflicto casi ininterrumpido entre Francia y Gran Bretaña que comenzaron en 1793 tendrían repercusiones en el mundo entero. Danton, que era más práctico, se centró en las consecuencias de la guerra en Europa. Francia, dijo a los diputados a finales de enero, ya no podía esperar llegar a ningún acuerdo pacífico con los demás gobernantes de Europa. «Les habéis lanzado un desafío. Este desafío es la cabeza de un rey», dijo. Independientemente de las consecuencias, Francia debería anexionar los territorios que había ocupado, sin más, especialmente en Bélgica, y convertirlos en partes de pleno derecho de la República revolucionaria. «La naturaleza ha marcado los confines de Francia», insistió. «Llegaremos a ellos desde las cuatro direcciones: el océano, las orillas del Rin, los Alpes, los Pirineos». Esta expansión anularía el tradicional equilibrio de poder en el continente, daría a Francia recursos que ningún otro Estado podría igualar. La afirmación de Danton de que Francia merecía alcanzar sus «fronteras naturales» también desafiaba el principio de la soberanía nacional: suponía que los holandeses, belgas, alemanes e italianos aceptarían gustosamente nuevas identidades como ciudadanos franceses. Otros diputados modificaron su propuesta para dejar claro que estas poblaciones tendrían pocas opciones reales: los generales franceses supervisarían las elecciones en los territorios que ocupaban y los comisarios enviados por la Convención determinarían su validez. Se consideraría que quienes se negaran a participar en esas elecciones demostrarían que «no

quieren ser amigos del pueblo francés» y recibirían un tratamiento acorde con esta actitud.[29]

Durante unas semanas a principios de 1793, los acontecimientos parecieron justificar el optimismo de Danton. Desde Bélgica, Dumouriez envió sus tropas al norte para invadir los Países Bajos, que acababan de entrar en guerra. Los franceses tenían el apoyo de los patriotas neerlandeses, que estaban ansiosos por vengarse de su derrota en 1787. Si los franceses hubieran podido sumar los Países Bajos a las conquistas logradas en Bélgica, habrían obtenido una ventaja estratégica contra los británicos, para quienes una potencia hostil que controlara los Países Bajos representaba siempre una amenaza mortal. Desde el otro lado del Atlántico llegaron noticias alentadoras: los comisarios enviados a Saint-Domingue el junio anterior habían aplicado con éxito la ley del 4 de abril de 1792, que otorgaba derechos a los hombres libres de color. Incluso los colonos blancos rebeldes habían acogido con satisfacción la noticia de la sublevación del 10 de agosto en París, y habían colaborado en la purga de oficiales monárquicos del ejército colonial. En respuesta, los colonos franceses que habían buscado seguridad en Londres firmaron un tratado secreto en el que prometían apoyar la ocupación británica de las islas caribeñas de Francia.

Con la esperanza de convertir el hemisferio occidental en un frente activo en la guerra que se avecinaba contra Gran Bretaña y España, la Convención envió a Edmond-Charles Genêt para que fuera su representante en Estados Unidos. Le dieron instrucciones de organizar una expedición desde Kentucky, desafiar el dominio español en el valle del Mississippi y equipar buques corsarios en puertos americanos para hostigar a los barcos británicos. Los republicanos franceses de nuevo cuño daban por hecho que Estados Unidos, vinculado a Francia por la alianza firmada en 1778, estaría ansioso por unirse a su cruzada internacional contra la monarquía. El 7 de marzo de 1793, Francia declaró la guerra a España, cuyo rey borbón había sido hostil a la Revolución desde que estalló en 1789. Francia se enfrentaba ahora a enemigos armados en todas sus fronteras europeas, así como en el Caribe, donde la colonia española de Santo Domingo, hoy la República Dominicana, ocupaba el extremo oriental de la isla de La Española, cuya

mitad occidental pertenecía a Francia. Los españoles se aliaron rápidamente con los insurgentes negros que se habían levantado contra la esclavitud en la colonia francesa y nombraron a sus líderes, incluido Toussaint Louverture, generales del ejército español.

Incluso cuando la guerra se extendió, la Convención Nacional intentó cumplir su obligación de dar a Francia una nueva constitución. La eliminación de la monarquía hereditaria dio al diputado Condorcet, el *philosophe* superviviente más importante de la política revolucionaria, la oportunidad de aplicar los principios de la razón y las matemáticas al problema de crear una política genuinamente democrática. La Declaración de Derechos de Condorcet, que era casi el doble de larga que su predecesora, trataba de evitar las ambigüedades que tenía el documento de 1789. Proporcionaba, por ejemplo, definiciones detalladas de los tipos de opresión que los ciudadanos tenían derecho a resistir. Rechazaba firmemente cualquier restricción del derecho a votar o a ocupar cargos públicos que se basase en la riqueza, características esenciales de la Constitución de 1791. «Dado que el código de nuestras leyes civiles consagra la igualdad civil, ¿no es mejor que la igualdad política se aplique también plenamente?», preguntó Condorcet. La educación y el bienestar se añadieron a la lista de derechos naturales individuales, y Condorcet, abolicionista desde hacía mucho tiempo, incluyó una disposición según la cual «nadie puede venderse a sí mismo; su persona no es una propiedad alienable». Esta formulación evitaba enfrentarse a la situación de los negros en las colonias francesas, que habían sido vendidos como esclavos por otros.[30] Sin embargo, en general, Condorcet defendió firmemente los derechos de los propietarios, repitiendo el dogma formulado décadas antes por los fisiócratas acerca de su autoridad absoluta para comprar, vender y transportar todo lo que poseían.

El aspecto más original de la propuesta de Condorcet era su intento de crear un sistema de elecciones que reflejara de verdad la voluntad del pueblo. Prácticamente solo entre los políticos de la época revolucionaria,

Condorcet había reflexionado profundamente sobre los problemas matemáticos que se escondían en la idea aparentemente simple de las elecciones como expresión de la voluntad popular. Incluso antes de 1789, había identificado lo que todavía se conoce como la «paradoja de Condorcet», el hecho de que, en una contienda con más de dos opciones, puede ser imposible determinar si hay un resultado que satisfaga verdaderamente a la mayoría de los votantes. Su plan constitucional preveía un procedimiento complicado «tan intricado que es imposible resumirlo», según un periodista.[31] Los ciudadanos participarían directamente en las «asambleas primarias» locales, que se reunirían todos los años para elegir a los diputados de la legislatura nacional y a los ministros para dirigir el poder ejecutivo del gobierno. Las mismas asambleas también podrían proponer leyes y exigir referendos sobre las medidas aprobadas por la legislatura nacional.

A los críticos les disgustaba la idea de dar a las asambleas primarias locales un medio tan fácil de exigir referendos potencialmente controvertidos. Se aplicaron los mismos argumentos que se habían usado para derrotar la propuesta de los girondinos de celebrar un referéndum nacional sobre el destino del rey. Los procedimientos también serían demasiado largos, dijeron los críticos. «¿Quién podría aceptar que, para proponer una ley nueva o revocar una que ya se había votado, estuvieran ocupados cinco millones de hombres durante seis semanas?», quiso saber Marat. Las elecciones anuales a diputados y ministros, de un mes de duración, habrían hecho que la campaña política fuera casi continua. La idea de dejar la elección de los ministros en manos del pueblo tenía un atractivo democrático, pero no habría garantías de que los hombres elegidos trabajaran juntos para perseguir objetivos comunes. Más de un mes antes, con poca fanfarria, los diputados de la Convención ya habían empezado a dar forma a un tipo de gobierno muy diferente, uno que surgió con poca aportación de la población, pero que creían que sería capaz de proporcionar un fuerte liderazgo nacional. El 1 de enero de 1793 habían nombrado un Comité de Defensa General, elegido entre los miembros de los demás comités principales de la legislatura y encargado de «ocuparse

ininterrumpidamente de las medidas que requiere la próxima campaña y el estado actual de las cosas».[32] Era el primer paso hacia la creación de un nuevo tipo de autoridad ejecutiva, que podría actuar de manera más decisiva que la propia Convención de 749 miembros y que no estaría restringida por límites constitucionales. Cuando la Convención volvió a la cuestión de la Constitución dos meses después, nuevas crisis dramáticas habían hecho aún más urgente la necesidad de un gobierno fuerte y decisivo, y la utopía democrática de Condorcet se archivó rápidamente.

A pesar de haber resuelto la cuestión del destino del rey y del optimismo que trajeron las victorias militares a finales de 1792, la supervivencia de la Revolución seguía estando pendiente de un hilo en los primeros meses de 1793. A medida que pasaba el invierno, tras otra decepcionante cosecha, los precios de los alimentos volvieron a subir y estallaron nuevos desórdenes. Se estaba desmoronando el sistema de comercialización de grano en todo el país. Cuando los comerciantes intentaban hacer compras en el campo para llevarlas a las ciudades, a menudo se encontraban con la oposición de la población local, que bloqueaba los envíos fuera de sus distritos. En las ciudades, las autoridades locales se enfrentaban a la presión de limitar el precio del grano y del pan, y de pedir dinero prestado para asegurar el suministro. Mientras tanto, los agentes del ejército y los compradores del gobierno en París recorrían el campo para asegurar que los soldados estaban alimentados, superando las ofertas de otros posibles compradores. Los diputados de la Convención y Roland, el ministro del Interior girondino, continuaron defendiendo el principio del libre comercio; las leyes aprobadas a principios de diciembre de 1792 amenazaban con la pena de muerte a todo aquel que interfiriera en la libre circulación del grano. Las autoridades locales del departamento del Sena Inferior se quejaron de que «los principios [del libre comercio], por muy ciertos que sean, no se aplican en modo alguno a nuestra situación»: sin un suministro adecuado de pan a un precio asequible, no podrían mantener el orden.[33]

En París, las mujeres hambrientas exigieron que el Club Jacobino les permitiera utilizar sus instalaciones para pedir medidas con las que hacer frente a la crisis, argumentando que la cuestión debería tener prioridad sobre los debates acerca de una nueva constitución. Frustradas por la reticencia de los revolucionarios masculinos a intervenir en el funcionamiento del mercado fijando un límite en el precio de los artículos de primera necesidad, las mujeres tomaron la delantera en una oleada de asaltos a los almacenes de los comerciantes. Se hicieron con los productos que querían, como el jabón que necesitaban las lavanderas, y los vendieron a lo que consideraban un precio justo. El líder de los montañeses, Robespierre, con su atención centrada en lo que él y otros políticos consideraban más importante, trató de mantener su reputación de amigo del pueblo, condenando al mismo tiempo tal interferencia en el mercado. «Cuando el pueblo se levanta, ¿no debería tener un objetivo digno de sí mismo?», preguntó. «¿Debería preocuparse por mercancías insignificantes?». Estos llamamientos tenían pocas posibilidades de silenciar las exigencias plasmadas en los panfletos que denunciaban los altos precios de las mercancías. El autor de uno de esos panfletos, que se titulaba «El último grito de los *sans-culottes*», denunciaba también la especulación con el papel moneda de los revolucionarios, que había caído a apenas la mitad de su valor nominal. Se quejaba de que «no se ha impuesto ni una sola sentencia de muerte a estos chupasangres, que te roban con más descaro que los bandidos que frecuentan los caminos solitarios».[34]

Incluso cuando los legisladores trataron de convencer a la gente común de que no causaran trastornos por cuestiones económicas, también les pedían que se comprometieran más con el esfuerzo de la guerra. La expansión de la guerra requería más soldados, sobre todo porque muchos de los voluntarios que se habían puesto los uniformes en 1791 insistían en que su compromiso había sido sólo por un año: algunos de ellos volvieron a casa después de las victorias en Valmy y Jemappes. El 24 de febrero de 1793, la Convención pidió una leva de trescientos mil nuevos soldados. Los hombres solteros de entre dieciocho y cuarenta años eran responsables del servicio; la exención de los hombres casados dio lugar a una avalancha de

bodas organizadas a toda velocidad. A los miles de gobiernos locales del país se les asignaron cuotas de reclutas y se les dijo que decidieran por sí mismos cómo cumplir con ellas si no encontraban suficientes voluntarios. Esta obligación supuso un conflicto entre los funcionarios y sus reticentes electores. A pesar de la insistencia de la Convención en que el país estaba ahora plenamente comprometido con la igualdad, el decreto permitía a los hombres más ricos pagar por sus sustitutos. Las autoridades locales de un pequeño pueblo protestaron por esto; aseguraban que era un error que «el rico indiferente viera a hurtadillas al patriota agotar sus fuerzas y su fortuna mientras él mismo no aporta nada de su esfuerzo o su fortuna a la defensa de la *Patrie* [patria]».[35] Hubo una resistencia generalizada al alistamiento y sólo se pudieron reclutar unos 150.000 hombres.

El impopular impuesto para financiar los gastos militares provocó la revuelta más sonada contra la Revolución, el levantamiento en el departamento occidental de la Vendée. A partir de la primera semana de marzo, los campesinos de la región comenzaron a reunirse para oponerse al llamamiento a filas; en algunos casos, atacaron físicamente a los funcionarios locales y a la Guardia Nacional que intentaban imponerlo. Al verse superados en número por los campesinos hostiles, los republicanos huyeron a ciudades más grandes, lo cual permitió que el movimiento se extendiera. Los campesinos encontraron líderes rápidamente. Algunos de estos líderes, como Jacques Cathelineau, representante de algunos comerciantes textiles de la región y católico devoto, y Jean-Nicolas Stofflet, exsoldado y guardabosques, surgieron espontáneamente de las filas de los plebeyos. Otros, incluyendo al abate Barbotin, eran sacerdotes refractarios. Barbotin estaba «entusiasmado por la idea de que la religión lograría su venganza» por los ataques que había recibido de los revolucionarios.[36]

Después de sus primeras victorias, los campesinos también apelaron a los nobles locales. Aunque estaban descontentos con la Revolución, al principio la mayoría de los nobles eran reacios a unirse a una revuelta contra el nuevo régimen: conocían los terribles riesgos que eso suponía.

Pero cuando los campesinos insurgentes insistieron en que estaban listos para morir por la religión y la monarquía, algunos nobles decidieron arriesgarse. Entre ellos estaban François Charette, un excapitán de marina, y Henri de La Rochejaquelin, un noble de veintiún años. Con su sombrero de plumas blancas, el apuesto joven La Rochejaquelin se convirtió en un icono del movimiento. Su elegancia contrastaba con la ropa tosca y las amplias gorras de campesino de los hombres que dirigía, que al principio sólo iban armados con afilados aperos de labranza. Mientras marchaban los de la Vendée, «el ruido de las conversaciones se mezclaba con el estruendo de los zapatos de madera», escribió un observador. «El choque de sus guadañas y picas era ensordecedor».[37] Los vandeanos se llamaron a sí mismos el «Ejército católico y real», y se colocaron imágenes del Sagrado Corazón, un signo de devoción religiosa, en el abrigo. El terreno boscoso del *bocage*, el centro de la región de la Vendée, favoreció la rebelión: las tropas republicanas que usaban los intricados caminos, muy típicos de la región, caían en emboscadas del enemigo que conocía la zona.

A los pocos días, los funcionarios locales estaban pidiendo ayuda desesperadamente, ya que el levantamiento amenazaba con derrocar el régimen republicano en la región occidental del país. «En todas partes tocan el *tocsin*, en todas partes saquean, asesinan, queman, en todas partes los patriotas son víctimas de la furia y el fanatismo de los rebeldes», escribió la administración del departamento del Bajo Loira el 11 de marzo de 1793.[38] El ejército había enviado a casi todos sus hombres a las fronteras, de modo que había pocas tropas con las que enfrentarse a esta rebelión. Los informes de asesinatos especialmente espantosos en la pequeña ciudad de Machecoul, donde ataron a los prisioneros republicanos con cuerdas para hacer «rosarios» y asesinarlos después, indignaron a la opinión patriótica en todo el país, al igual que las historias de las matanzas de septiembre habían unido antes a los que se oponían a la Revolución.

Aunque la llamada a los reclutas del ejército fue la chispa que desencadenó la revuelta de la Vendée, la hostilidad de los campesinos hacia la República tenía raíces más profundas. En 1789, los campesinos de la Vendée, como los de gran parte del país, acogieron con satisfacción la

proclamación de la «abolición del feudalismo». Sin embargo, con el paso del tiempo, se sintieron decepcionados por las reformas revolucionarias. Las cuotas feudales no habían sido muy onerosas en la zona y las actitudes hacia los nobles locales eran menos hostiles que en muchos otros lugares. Las tierras eclesiásticas que se habían confiscado y puesto a la venta en la región habían ido a parar en su mayoría a los habitantes burgueses de las ciudades locales; la situación de los campesinos había mejorado poco. La Iglesia había sido una parte vital de la vida comunitaria rural en la Vendée y los campesinos se habían opuesto a la Constitución Civil del Clero. El general Jean-Baptiste Canclaux, el comandante republicano de la gran ciudad bretona de Nantes, recomendó que el gobierno considerara una política conciliadora que permitiera al clero local reanudar tranquilamente sus funciones. También pensó que el gobierno debía abandonar su idea de obligar a la región a suministrar más tropas. En lugar de eso, el 19 de marzo de 1793 la Convención respondió con un decreto que decía que a cualquiera que hubiera participado en la sublevación y fuera sorprendido llevando armas o simplemente una escarapela blanca monárquica, se le ejecutaría de inmediato y se confiscarían sus bienes. Aunque se prometió a los campesinos insurgentes una amnistía si entregaban las armas, sus representantes se negaron. Respondieron insistiendo en «el libre ejercicio de una religión que fue la de nuestros padres: […] no podemos vivir bajo un gobierno republicano que vemos como una fuente de divisiones, problemas y guerra», añadieron. A la acusación de que actuaban como partidarios de los enemigos extranjeros de Francia, respondieron: «Les llamamos con todas nuestras fuerzas [...] con la certeza de que son nuestros amigos».[39]

Las noticias de la rebelión en la Vendée llegaron a París justo cuando la capital se tambaleaba por el repentino colapso del esfuerzo militar en Bélgica. El 8 de marzo de 1793, los austriacos lanzaron una contraofensiva que amenazaba con cortar las comunicaciones del ejército republicano con Francia. La Convención envió diputados a las asambleas de sección de toda la capital con el fin de encontrar nuevos voluntarios para el ejército. Uno de

ellos, André Jeanbon Saint-André, informó de que los miembros de la sección del Louvre estaban dispuestos a «salir volando en defensa del país», pero primero querían que la Convención «castigara a los traidores y aniquilara a los intrigantes en casa».[40] Los diputados respondieron reactivando el Tribunal Revolucionario, el tribunal especial que se había creado después del 10 de agosto para juzgar a los acusados de delitos políticos. Como antes, no se podrían presentar apelaciones a las sentencias del tribunal, y las penas de muerte que se impusieran se ejecutarían en un plazo de veinticuatro horas. Como los girondinos habían apoyado a Dumouriez, se convirtieron en la diana de la ira militante. En la Convención, el diputado montañés, Pierre Joseph Duhem, lanzó una violenta diatriba contra los periodistas que los apoyaban, «estos insectos difamadores que son los únicos, los verdaderos obstáculos para el progreso de la Revolución». En la noche del 9 de marzo, militantes *sans-culottes* se pasearon por las estrechas calles del Barrio Latino donde se encontraban las imprentas de los principales periódicos girondinos, y destrozaron las prensas y desparramaron los tipos.

Mientras París estaba en ebullición, Dumouriez vio cómo se desintegraban sus esperanzas de mantener el control sobre Bélgica. Desde su cuartel general en Lovaina, envió una carta a la Convención con un vocabulario tan fuerte que el comité militar se negó a leerla en público. Dumouriez culpó a la Convención y a los agentes que había enviado a Bélgica de no proporcionar los suministros necesarios para mantener la lucha contra el enemigo. Afirmó que las políticas dictadas por el decreto de propaganda del 15 de diciembre de 1792 habían «exasperado el espíritu de los belgas». El 11 de marzo de 1793, Dumouriez prohibió que los clubes establecidos en Bélgica se involucraran en la política, dejando claro que no apoyaría ningún intento de exportar instituciones revolucionarias francesas a los territorios que ocupaba. Una semana después, el 18 de marzo, los austriacos obtuvieron una aplastante victoria sobre las fuerzas francesas en Neerwinden. Desmoralizado, el ejército se retiró hacia la frontera. En Neerwinden, una parte clave del ejército francés había estado a las órdenes de Francisco Miranda, un general que había nacido en la colonia

hispanoamericana de Nueva Granada, que estaba estrechamente vinculado con los girondinos. Otra unidad había estado bajo el mando del duque de Chartres, el hijo del duque de Orleans. En París, esto llevó a que se exigiera que se tomaran medidas de urgencia contra los extranjeros y la familia Orleans.

Igual que había hecho Lafayette después del 10 de agosto de 1792, Dumouriez decidió usar su ejército para derrocar al gobierno revolucionario que consideraba responsable del desastre que había sufrido. «París está abrumada por la tiranía, los asaltos, los crímenes; la anarquía nos está devorando», escribió a la Convención a finales de marzo. «Es hora de que el ejército hable, purgue a Francia de asesinos y agitadores, y dé a nuestro infeliz país la paz que ha perdido por los crímenes que cometen sus representantes». La Convención despachó apresuradamente a varios diputados para que se reunieran con él, pero Dumouriez ordenó que los detuvieran y los entregó a los austriacos. Sin embargo, para su sorpresa, sus tropas y sus oficiales subordinados se resistieron a acatar las órdenes, igual que se habían negado a seguir a Lafayette. Estaban profundamente desilusionados por el comportamiento de su comandante: «¿En quién se puede confiar ahora? Este Dumouriez, que la República francesa consideraba su salvador, se ha quitado la máscara», escribió el voluntario Gabriel Favier a su madre; sin embargo, los soldados siguieron siendo leales al país. «Le abandonó todo el ejército y se vio obligado a huir [...] para salvar su vida», concluía Favier.[41]

La traición de Dumouriez amenazaba con ser un desastre para los girondinos, que habían aplaudido las denuncias que hizo éste de sus radicales oponentes montañeses e insistían en que el vencedor de Valmy era indispensable para el esfuerzo de la guerra. Marat, que había afirmado repetidamente que «Dumouriez es una criatura de la facción brissotina», se jactaba satisfecho: había predicho que Dumouriez se pasaría al enemigo dos semanas antes de que ocurriera. La crisis también perjudicó a Danton, que había visitado varias veces el cuartel general de Dumouriez durante el

invierno y regresaba a menudo para asegurar a sus colegas que se podía confiar en él. Corrían rumores de que Danton había sacado buen provecho de esas visitas, ya que había compartido el botín del saqueo de las propiedades belgas. Se defendió mediante una ofensiva contra los girondinos. Mientras los diputados montañeses vitoreaban, Danton anunció que «no puede seguir la tregua entre la Montaña, entre los patriotas que querían la muerte del tirano, y los cobardes que querían salvarle e hicieron correr mentiras sobre nosotros por toda Francia». En el entusiasmo que siguió al discurso de Danton, la Convención aprobó apresuradamente un decreto que volvería a perseguirlo un año después: votó que la inmunidad parlamentaria que protegía a los diputados se podía ignorar en caso de que hubiera «fuertes presunciones» de que simpatizaban con «los enemigos de la libertad, la igualdad y el gobierno republicano». El decreto convirtió las disputas entre facciones rivales en un deporte sangriento, en el que los perdedores podían tener que vérselas con el Tribunal Revolucionario.[42]

A medida que crecían las divisiones dentro de la Convención, los diputados comenzaron a buscar soluciones para los abrumadores problemas a los que se enfrentaban. En pocos meses, formaron un gobierno revolucionario muy diferente del régimen por asamblea que había prevalecido desde el verano de 1789. Este nuevo gobierno, que nunca hubieran imaginado los pensadores políticos de la Ilustración ni los de las primeras etapas de la Revolución, demostró que era capaz de actuar con celeridad y tomar medidas decisivas, pero también impuso drásticos castigos a los disidentes y creó nuevas y letales divisiones entre los revolucionarios más radicales. El Tribunal Revolucionario que se creó en marzo sería el primero de los principales pilares del régimen. Tras su instauración se redactó un decreto, el 21 de marzo de 1793, por el que se ordenaba la creación de «comités de vigilancia» en cada comuna del país. La función inicial de los comités era hacer listas de todos los extranjeros que vivían en sus jurisdicciones, pero también debían llevar un registro de todos los ciudadanos mayores de dieciocho años y obligarlos a demostrar que tenían fuentes legítimas de ingresos y que habían cumplido sus «deberes cívicos». El requisito de que todos los adultos siguieran este

procedimiento para obtener un «certificado de civismo» dio a los comités de vigilancia un gran poder. Un decreto del 28 de marzo consolidó las leyes que ya existían en contra de los emigrantes. Se los «desterró a perpetuidad del territorio francés» y se los declaró «muertos civiles». El Estado confiscó sus bienes y se los amenazó con la pena de muerte si se los descubría en suelo francés.[43] La ley también castigaba a cualquiera que ayudara a un *émigré*, como los parientes que enviaban dinero o trataban de proteger sus bienes mediante ventas ficticias u otros medios; de modo que el decreto afectaba no sólo a los que habían abandonado el país, sino a muchos de los que permanecían en él.

A medida que la legislación revolucionaria empezaba a involucrarse cada vez más directamente en la vida de la gente común, también se fueron creando instituciones con potestad para hacer cumplir esas leyes. El 6 de abril de 1793, la Convención creó un Comité de Seguridad Pública para reemplazar al menos eficaz Comité de Defensa General que se había establecido en enero. Más pequeño que su predecesor –originalmente tenía sólo nueve miembros– el Comité de Seguridad Pública estaba encargado de supervisar a los ministros y podía anular sus decretos. Las reuniones del comité eran secretas, lo que le permitía tomar decisiones sin ser víctima de las divisiones de la Convención. Para evitar que se independizara de la Convención, sus poderes tenían que renovarse todos los meses. La creación del nuevo comité tuvo un amplio apoyo en la Convención. El girondino Maximin Isnard fue uno de los primeros en exigir «una mano firme, audaz y pura» para hacerse cargo del gobierno, y Barère, considerado independiente tanto de los girondinos como de los montañeses, dijo a sus colegas: «En todos los países, cuando se han producido conspiraciones flagrantes, se ha reconocido la necesidad de recurrir a una autoridad dictatorial temporal».[44] Además de Danton, que dominó el comité durante los tres primeros meses de su existencia, la Convención eligió principalmente a diputados de *la Plaine*, el grupo de legisladores que había evitado tomar posiciones claras en sus disputas internas.

Dos días después de crear el Comité de Seguridad Pública, la Convención formalizó la práctica de enviar a los diputados «en misión»,

medida iniciada en marzo de 1793 para supervisar la contratación de hombres para el ejército. También se asignó a los diputados a los ejércitos del frente y, en poco tiempo, también tendrían que ir a supervisar los gobiernos locales para asegurarse de que seguían las órdenes de la Convención. Estos «procónsules», investidos de «poder ilimitado» por la Convención, podían dar órdenes a los generales y a los funcionarios locales, podían nombrar subordinados para que llevaran a cabo sus instrucciones y gastar el dinero que considerasen necesario para asegurar la defensa del país, siempre que notificasen inmediatamente a la Convención sus acciones. Armados sólo con fajas tricolores, sombreros con plumas tricolores y medallones para establecer su autoridad, los diputados en misión a menudo se encontraban con una fuerte oposición. Los que aceptaron estas misiones fueron principalmente los *conventionnels* más decididos y enérgicos: una gran mayoría de ellos votó con los montañeses en la Convención, mientras que los partidarios de la Gironda eran muy reticentes a asumir tales misiones. Los girondinos esperaban que se redujera el número de sus oponentes en París, pero el resultado fue que se fortaleció la influencia de los montañeses en el ejército y las provincias.

Por más que la Convención aprobara medidas para hacer más eficaz su autoridad, el control de la propia Convención y de las principales ciudades de Francia siguió siendo un constante ir y venir, que llevó al país al borde de una guerra civil entre republicanos. En París, los girondinos, que habían sido los destinatarios del decreto para abolir la inmunidad parlamentaria, lograron volverlo contra su archienemigo: el 14 de abril de 1793, hicieron que se acusara al controvertido periodista y diputado Marat de haber instigado una sublevación para purgar la Convención. Marat, que era experto en huir de la policía, pasó a la clandestinidad durante varios días. Mientras tanto, sus partidarios en las calles amenazaron con «cortar miles de cabezas» si le condenaban.[45] Marat finalmente se entregó, confiando en que el juicio terminaría a su favor. El fiscal Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, simpatizante de los montañeses, le dejó protagonizar el proceso, y

la sala estalló en aplausos cuando fue absuelto. Cuando la multitud entusiasmada llevó a Marat a hombros hasta la sala de reuniones de la Convención, los girondinos se dieron cuenta de que su ataque mal planeado no había hecho más que aumentar su popularidad.

La hostilidad hacia los girondinos, y hacia la Convención en su conjunto, aumentaba por momentos en las asambleas de sección, en la asamblea municipal de la Comuna y en el Club Jacobino. El 8 de abril, una delegación de la sección de Bonconseil denunció a Brissot, Vergniaud y a otros miembros destacados del grupo a la Convención. «¿Qué esperan para acusarlos?», quisieron saber los militantes. Dos días después, Robespierre tomó el mando y acusó a sus enemigos de conspirar con gobiernos extranjeros para «darnos un rey con una constitución aristocrática […]. Esperan forzarnos a esta vergonzosa situación mediante la fuerza de los ejércitos extranjeros y los desórdenes internos».[46] El 15 de abril, Jean-Nicolas Pache, el alcalde radical de París, y Jacques-René Hébert, que finalmente había logrado acabar con las diferentes versiones de su personaje Père Duchêne, se personaron en la Convención para presentar una petición. La había redactado un comité que se había reunido en secreto en la Evêché, antigua sede del arzobispo de París, y 35 de las 48 secciones de París la habían respaldado. La petición exigía la expulsión de veintidós diputados girondinos. El comité de la Evêché, formado por activistas que se habían frustrado por la reticencia de la Convención a actuar contra los girondinos, se convirtió en el centro de actividad de un esfuerzo que planeaba una insurrección. Los planificadores tenían como objetivo utilizar las tácticas del 10 de agosto para colocar a los radicales en el poder.

París no fue la única parte de Francia desgarrada por el descontento popular y los conflictos entre facciones revolucionarias rivales. En Marsella, los radicales que controlaban el Club Jacobino local reaccionaron violentamente ante la noticia del fracaso militar en Bélgica a principios de marzo. Exigieron la destitución inmediata de los diputados girondinos y reunieron a militantes en otras ciudades para apoyar su postura. Las acciones del club desencadenaron una reacción en la propia Marsella, donde los republicanos más moderados se propusieron conquistar las asambleas de

sección de la ciudad y ponerlas en contra de sus rivales. A finales de abril, expulsaron a los diputados promontañeses enviados desde París y detuvieron a los dirigentes radicales locales. Los acontecimientos siguieron un curso similar en Lyon, donde una facción encabezada por un montañés local, Joseph Chalier, había tomado el control del gobierno a principios de marzo y creado su propio Comité de Seguridad Pública local. Los radicales impusieron un precio máximo a los alimentos básicos y crearon una milicia local para asegurar que se respetaba. Pero igual que en Marsella, los opositores movilizaron a sus partidarios para poner a los sectores en contra del gobierno de la ciudad. Desde París, los combativos girondinos alentaron a las secciones de ambas ciudades, mientras que los montañeses temían que, si no actuaban con rapidez, podrían verse superados por una reacción de las provincias.

A pesar del ambiente revuelto de París y de la Convención, los diputados no olvidaban que debían redactar una nueva constitución. Robespierre aprovechó la reanudación del debate sobre el tema el 24 de abril para hacer una potente exposición de sus ideas políticas. Algo escorado hacia el populismo, propuso que, en la Declaración de Derechos de la nueva Constitución, se incluyera un artículo que dijera que «cualquier institución que no defienda que el pueblo es bueno y que los magistrados son corruptibles es perversa». En respuesta a Condorcet, que había hecho una defensa enfática del derecho absoluto a la propiedad y la libre empresa en su proyecto de declaración, Robespierre propuso una definición muy diferente del derecho a la propiedad. Aun cuando aseguró a su audiencia que sólo quería «hacer honorable la pobreza» y prometió que no abogaría por una redistribución de la propiedad, descartó a los ricos como «almas impuras que sólo valoran el oro», insistiendo en que «la extrema desproporción de las fortunas es la causa de muchos males y muchos crímenes». Los revolucionarios de 1789 consideraban que los estratos más ricos de la población eran los ciudadanos más ilustrados y virtuosos. Robespierre claramente pensaba lo contrario.[47]

Robespierre propuso que se considerara legítimo tener propiedades sólo si no «perjudicaban la seguridad, la libertad, la existencia o la propiedad de nuestros semejantes». Entre otras cosas, esta noción justificaba las medidas para obligar a los comerciantes de cereales a vender sus existencias a los precios fijados por las autoridades. A partir de sus principios, Robespierre también sacó la conclusión de que los ciudadanos cuyos ingresos fueran iguales o inferiores al nivel de subsistencia deberían estar totalmente exentos de impuestos, sugerencia que Condorcet también había hecho en su propuesta. Robespierre añadió que los impuestos de los que tienen más riqueza deberían ser progresivos. Los ricos deberían financiar programas de bienestar, lo que Robespierre consideró «una obligación de los que tienen un superávit». Mientras que los agitadores militantes en las calles daban mayor importancia al precio del pan, Robespierre quería asegurar que podrían ganar lo suficiente para mantenerse. Esperaba lograrlo incorporando a la Declaración de Derechos un artículo en el que se afirmaba que «la sociedad está obligada a asegurar la subsistencia de todos sus miembros, ya sea proporcionando trabajo o asegurando los medios de existencia a los que no pueden trabajar». Este principio básico de los estados de bienestar modernos había surgido a principios de la Revolución en las propuestas del Comité de Bienestar de la Asamblea Nacional, pero ahora Robespierre recomendaba darle un estatus constitucional.[48]

Al afirmar que estaba esbozando unos principios eternos, lo que estaba haciendo Robespierre en realidad era vigilar de cerca la situación política que le rodeaba. Su propuesta de declaración de derechos era un arma contra sus enemigos girondinos y una invitación a los militantes populares para que ayudaran a los diputados montañeses a derrotarlos. Uno de los argumentos de los girondinos contra la petición de las secciones de París que pedían su expulsión de la Convención era que ninguna sección del país tenía derecho a hablar en nombre de la ciudadanía en su conjunto. El proyecto de declaración de Robespierre admitía que sólo el pueblo en su conjunto era soberano, pero insistía en que «cada sección de ese pueblo soberano debería tener la completa libertad de expresar su voluntad». Yendo más allá de la referencia que hacía la Declaración de Derechos original al

derecho a resistirse a la opresión, Robespierre definió lo que constituía un pretexto para tal resistencia y añadió una parte que afirmaba que cuando los derechos eran violados, «la insurrección es [...] el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes». Esto dejó claro que él, y por extensión el resto de los montañeses, aceptarían un levantamiento popular para eliminar a los girondinos de la Convención.[49]

Fuera de la Convención, se multiplicaron las protestas de todo tipo. El 1 de mayo de 1793, las mujeres de Versalles se quejaron airadamente a los diputados de que «todos los días, las madres, agobiadas por las responsabilidades familiares, se ven obligadas a permanecer en la puerta de una panadería desde las cuatro de la mañana hasta las diez»; les recordaron: «Nuestros maridos luchan por la salvación de la República». El mismo día, los representantes del siempre inquieto *faubourg* Saint-Antoine exigieron que se fijara un precio máximo para el grano; también querían que se reclutara a todos los hombres solteros, incluidos los sacerdotes, para el ejército y que hubiera un impuesto de emergencia para los ricos. Se quejaban de que «la carga de la Revolución sólo la han soportado hasta ahora los pobres. […] «Es hora de que los ricos y los egoístas también se conviertan en republicanos». Amenazaron con organizar una insurrección si no respondían a sus peticiones.[50]

Presionada por las demandas de las mujeres y los militantes del *faubourg* Saint-Antoine, el 3 de mayo la Convención aprobó a regañadientes una medida de emergencia para establecer un precio máximo para el grano. También instituyó procedimientos destinados a obligar a los agricultores y comerciantes de grano a poner en el mercado los suministros que tuvieran. La decisión significó el abandono de los principios económicos liberales que la mayoría de los diputados –girondinos y montañeses por igual– consideraban artículos de fe. Jean Desvars, un diputado poco conocido, protestó contra la decisión presentando un resumen de manual de los principios del libre mercado. «Quiero evitar la intervención del gobierno en asuntos relacionados con la subsistencia y los registros de propiedad privada, igualmente peligrosos para la libertad», insistió. «Respeten la propiedad, porque es la primera ley de la sociedad».

El problema era que estaba claro que el mercado no funcionaba, e incluso Desvars admitió que se necesitaba un sistema de control de precios. Un girondino que se llamaba François Buzot estuvo de acuerdo, aunque también criticó «la debilidad que hemos mostrado al no atenernos a los principios del libre transporte y comercio». Para los diputados más radicales, esos principios eran precisamente el problema. «La libertad ilimitada del comercio de grano permite dar rienda suelta a la insaciable avaricia de los comerciantes», sostuvo uno de ellos. La Convención reconoció que era políticamente imposible dejar que fluyera «el curso natural de las cosas para reducir el precio de las mercancías», como aconsejaba otro diputado girondino, de modo que al final aprobó el precio máximo y la intervención estatal en la economía que eso significaba.[51]

Las violentas disputas que sacudieron la Convención tuvieron sus equivalentes en miniatura en las asambleas vecinales de las secciones en París, a menudo con consecuencias dramáticas para sus participantes. Jacques Ménétra participó en una lucha política por el control de la sección de Bonconseil, un bastión radical, cuando un grupo de *jeunes gens*, jóvenes de clase media de Bonconseil, trató de tomar el control en la primera semana de mayo, para oponerse a un intento de la Comuna de obligarlos a volver al ejército. El 4 de mayo, estos jóvenes llenaron la reunión de la asamblea de la sección y consiguieron sustituir a sus oficiales con sus propios elegidos. Para celebrar su victoria, redactaron un discurso para la Convención en el que reafirmaban su apoyo a los girondinos y su aborrecimiento de la anarquía impuesta por sus oponentes, que habían logrado «obtener una autoridad tiránica». Ménétra tenía una aversión especial por el hombre que leyó su mensaje a la Convención, un tal Isidore Langlois, a quien criticaba «por no hacer guardia, aunque sabía bien cómo denunciar a la gente de la sección». Esa noche, Ménétra y los otros militantes radicales, con ayuda de camaradas de otros barrios de París, agredieron físicamente a sus rivales y se llevaron a varios a la cárcel. Langlois, después de la embriagadora experiencia de recibir los elogios

públicos de Vergniaud, el portavoz de la Gironda, en la Convención de la mañana, tuvo que esconderse esa misma noche.[52]

A mediados de mayo, la situación militar a lo largo de las fronteras de Francia se había estabilizado. Los austriacos recuperaron sus territorios belgas y tomaron algunas ciudades francesas cerca de la frontera, pero no amenazaron con marchar sobre París. En el oeste, seguía su curso la rebelión de la Vendée, pero los rebeldes no habían ampliado su territorio. Ahora la mayor amenaza para la supervivencia del país era la violenta lucha política en las ciudades. Para las mujeres activistas de París, la situación era una oportunidad. El 10 de mayo de 1793, anunciaron la formación de la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias. Sus líderes, Pauline Léon y Claire Lacombe, apoyaron el programa económico de los agitadores radicales conocidos como los *enragés*; Léon se casaría con uno de los principales portavoces de los *enragés*, Théophile Leclerc, en noviembre. El 19 de mayo, los *citoyennes* de la sociedad acompañaron a una delegación del Club de los Cordeliers a la Convención para exigir la creación de un ejército revolucionario formado por *sans-culottes* para hacer cumplir medidas como la del precio máximo. Sin embargo, la participación directa de las mujeres en las protestas políticas siguió siendo motivo de desencuentro incluso entre los militantes masculinos. El presidente de la asamblea de la sección de Montblanc, que se oponía a la presencia de mujeres en sus reuniones, hizo una denuncia ante la policía después de que le «insultaran de la manera más escandalosa» las mujeres manifestantes.[53]

En las dos últimas semanas de mayo, el conflicto entre facciones en la Convención y en el país en general alcanzó su punto álgido. El 18 de mayo, Barère, que todavía se consideraba un centrista, consiguió el apoyo suficiente de otros diputados para crear una «Comisión de Doce» que investigara los rumores de un complot para organizar una insurrección popular en París. Las pruebas eran abundantes: los agentes de policía coincidían en que «la insurrección es inevitable y está a punto de ocurrir, si no adoptamos medidas de alivio para el pueblo». Incluso Robespierre se prestaba a las críticas, porque, como dijo un militante, «¡empieza a hablarnos de prudencia!». Brissot, el principal objetivo del movimiento

popular, le dijo a un amigo: «Están preparando una matanza del día de San Bartolomé para nosotros». El 24 de mayo, la Comisión de Doce provocó un enfrentamiento al emitir órdenes para la detención de Hébert, del «Père Duchêne», y de Jean Varlet, un importante portavoz *enragé*. Cuando una delegación de la Comuna de París denunció las detenciones, el girondino Isnard, que presidía la Convención, respondió intempestivamente que, si el movimiento militante no cesaba sus amenazas, provocaría tal reacción que «habrá que rebuscar en las orillas del Sena para ver si París ha existido alguna vez».[54]

Aunque no se puede decir que fueran amigos de Hébert y Varlet, Robespierre y sus partidarios en la Convención se negaron a dejar que los girondinos derrotaran al movimiento popular. Reuniendo sus fuerzas en la Convención el 27 de mayo, ganaron un voto para abolir la Comisión de Doce y sacar a Hébert y Varlet de prisión. Al día siguiente, sin embargo, los girondinos recuperaron el impulso, ganaron una votación nominal para restablecer la comisión. Robespierre había advertido constantemente contra un exceso de violencia que dejaría al país sin un gobierno reconocido, pero la noche del 29 de mayo dijo en el Club Jacobino: «No puedo decirle al pueblo cómo salvarse».[55] Una vez más, igual que el 14 de julio de 1789 y el 10 de agosto de 1792, el destino de la Revolución se decidiría en las calles de París.

14

La Revolución al borde del abismo

Junio-diciembre de 1793

Incluso para una población que vivía inmersa en el caos tras cuatro años de Revolución, el verano y el otoño de 1793 fueron momentos de una agitación fuera de lo común. Ejércitos enemigos amenazaban al país desde todas las direcciones, y en el interior, los nuevos levantamientos de las provincias contra los montañeses radicales se sumaron a la rebelión monárquica en el oeste. En la capital, hombres y mujeres activistas desafiaron a la autoridad de la Convención Nacional y de la Comuna al exigir medidas drásticas para ayudar económicamente a la gente común a sobrevivir. Al otro lado del Atlántico, muchas de las preciadas colonias del país amenazaban con escapar de su control y en Saint-Domingue, la posesión más valiosa de Francia en ultramar, los funcionarios revolucionarios dieron el increíble paso de ofrecer la libertad a los esclavos negros, al derrocar la institución de la esclavitud, que había sido clave en todos los imperios coloniales europeos. Tanto en Francia como en el extranjero, muchos dudaban de que el movimiento que había comenzado con tan grandes esperanzas en 1789 pudiera sobrevivir. En medio de este torbellino de conflictos, se formó un conjunto improvisado de instituciones que permitirían a los dirigentes revolucionarios llevar a cabo una movilización sin precedentes de los recursos del país y luchar contra las amenazas a las que se enfrentaba. Sin embargo, la Revolución que surgió del hervidero de mediados de 1793 fue un movimiento muy diferente del que se había iniciado en 1789.

La tempestad que se había estado preparando desde la ejecución de Luis XVI finalmente estalló en París la noche del 31 de mayo de 1793. En la Convención, ni la facción de los girondinos ni la de los montañeses pudieron lograr un control sólido del poder legislativo nacional, así que «ambos bandos se lanzaron a buscar la victoria movilizando el apoyo exterior», escribió el diputado René Levasseur. Los girondinos contaban con sus partidarios en las provincias; a principios de mayo, Vergniaud, su principal orador, dijo a sus electores en Burdeos: «No hay que perder tiempo. Si mostramos verdadera energía, obligaremos a los hombres que están provocando una guerra civil a retroceder».[1] En respuesta, los montañeses pusieron su destino en manos del movimiento popular de la capital. La *journée* del 31 de mayo al 2 de junio de 1793 comenzó siguiendo el mismo guion que el levantamiento del 10 de agosto de 1792. En la noche del 30 de mayo, los miembros del comité insurreccional que se venían reuniendo desde mediados de marzo para conspirar contra los girondinos se declararon representantes del pueblo soberano. Colocaron a François Hanriot, un comandante militar de confianza, como jefe de las unidades militares de las secciones de París, anunciaron que las asambleas de sección se reunirían ahora en sesiones continuas y permanentes, ordenaron que sonara el *tocsin* para reunir a las tropas e informaron a la Comuna de que estaban llamando a la insurrección.

El 10 de agosto, el principal objetivo de la insurrección había sido el rey, al que se culpó de traicionar al país y al esfuerzo bélico. La insurrección del 31 de mayo tenía como objetivo la Convención, cuyos miembros habían sido elegidos por el pueblo. Este asalto a los diputados corría el riesgo de dejar a Francia sin un gobierno reconocido. Por esta razón y porque temían otra matanza como la que había tenido lugar el septiembre anterior, incluso los radicales, que habían apoyado la *journée* de agosto, al principio dudaron de si deberían apoyar la insurrección. Entre estos hombres se encontraban Pierre Gaspard «Anaxágoras» Chaumette, el principal funcionario del gobierno municipal de París, y Hébert, el periodista favorito de los *sans-culottes*. Según el testimonio que haría más adelante uno de los miembros del comité de la Evêché: «Vi a Chaumette

[…] gritar, llorar, rasgarse el pelo y hacer los esfuerzos más violentos para convencernos de que el Comité Central estaba llevando a cabo la contrarrevolución».[2]

Una vez que la Comuna decidió que no tenía más remedio que respaldar el movimiento, el problema era ejercer suficiente presión sobre la Convención para forzar la destitución de los líderes girondinos sin destruir por completo la autoridad de la legislatura nacional. Los representantes de la Comuna se sumaron al comité insurreccional, redujeron la lista de reivindicaciones del movimiento, que originalmente exigía drásticas medidas económicas pensadas para beneficiar a los pobres, la creación de un ejército revolucionario que obligara a los agricultores rurales a entregar su grano a un precio asequible, y una purga completa del personal del gobierno.

A principios del 31 de mayo, un grupo de *sans-culottes* armados rodeó el Palacio de las Tullerías, convertido ahora en el lugar de reunión de la Convención. Algunos se abrieron paso a empujones hasta el salón de actos, donde se mezclaron con los diputados en una escena de total confusión. La Convención era reacia a expulsar a sus propios miembros y, cuando el primer día de la insurrección llegó a su fin, los militantes que la habían lanzado se sintieron muy frustrados. Durante la noche, el comité insurreccional actuó por su cuenta para detener a Madame Roland, a quien veían como el símbolo de los girondinos, y se aseguró de que los hombres armados de Hanriot volvieran a cercar la Convención. El día 1 de junio no trajo ninguna resolución: la Convención siguió negándose a ceder a las exigencias de los manifestantes. El domingo 2 de junio, multitudes aún más grandes que las de los dos días anteriores se reunieron en el centro de París. «Todos los diputados estaban rodeados hasta el punto de no poder salir», informó un miembro jacobino; el diputado Grégoire tuvo que permitir que cuatro hombres armados le escoltaran hasta las letrinas.[3] La sensación de urgencia se vio acrecentada por la llegada de informes de Lyon, donde las fuerzas antimontañesas habían tomado el control de las secciones de la ciudad el 29 de mayo; habían utilizado un cambio de la situación de París para derrocar al gobierno radical de la ciudad.

En nombre del Comité de Seguridad Pública, el diputado centrista Barère apeló a los dirigentes de la Gironda para que dimitieran voluntariamente como gesto patriótico para poner fin a la crisis. Algunos de los girondinos dejaron sus escaños, pero otros se negaron, indignados, a ceder a la presión de la multitud. La Convención aprobó un decreto ordenando la retirada de las fuerzas armadas que la rodeaban; Hanriot respondió amenazando con un bombardeo de artillería. Esto fue demasiado incluso para muchos de los diputados montañeses. Danton protestó: «Ha sido un ultraje para la grandeza de la Convención». Dirigidos por el presidente de la Convención, Marie-Jean Hérault de Séchelles, la mayoría de los diputados salieron para enfrentarse a los *sans-culottes*. En cada entrada al recinto de las Tullerías, el resultado fue el mismo: Hérault ordenó a la multitud armada que dejara pasar a los diputados, pero los militantes se negaron. Cuando se enfrentó directamente a Hanriot, según un artículo de prensa, el general «hizo retroceder a su caballo, levantó el sable [...] y pronunció la orden: "A las armas, cañoneros, a las armas"». Entonces, «los artilleros prendieron las mechas, los caballeros levantaron sus sables, la infantería apuntó sus armas a la Convención».[4]

Al ver que estaban a merced de la multitud armada que los rodeaba, los diputados volvieron a reunirse en su sala, donde los líderes montañeses insistieron en que debían someterse a la voluntad del pueblo. Marat, que llevaba años denunciando a los girondinos, ahora tenía la oportunidad de redactar personalmente la lista de los que iban a expulsar de la Convención y a detener después. Al final, constaba de veintinueve diputados y los ministros Pierre Lebrun y Étienne Clavière. Hubo una gran confusión sobre quién era el responsable de llevar a cabo las medidas contra los girondinos; la mayoría se escondió o huyó de París.

La derrota de los girondinos el 2 de junio puso fin al violento conflicto interno de la Convención que había amenazado con paralizar al gobierno revolucionario, pero no había ninguna certeza de que el resto del país siguiera el ejemplo de la capital. Los diputados montañeses de la

Convención, la mayoría del Club Jacobino y las autoridades de la Comuna de París, que estaban deseando ver a Brissot, Roland y sus partidarios finalmente derrocados, habían seguido los pasos del movimiento insurreccional, pero ninguno estaba dispuesto a ceder su propio poder a los militantes que lo habían puesto en marcha.

Entre los más confundidos por la situación estaba el grupo de activistas antirracistas que había estado presionando a la Convención para que adoptara una posición más radical contra la esclavitud y enviara una unidad militar de hombres libres de color para luchar contra los británicos y los españoles en las colonias. En marzo de 1793, Claude Milscent, un antiguo propietario de una plantación en Saint-Domingue, se había convertido en el primero en pedir la abolición inmediata e incondicional de la esclavitud. En el periódico del Cercle social, escribió que ya no era posible «defender dos constituciones tan contradictorias y luchar sin cesar por un lado contra la esclavitud y por otro para mantenerla».[5] Julien Raimond impulsó la creación de una «Legión Americana», dirigida por el compositor negro Joseph Boulogne, *chevalier* de Saint-Georges. El 3 de junio, inmediatamente después de la derrota de los girondinos, Chaumette, líder de la Comuna y ardiente abolicionista, y Jeannette Odo, una anciana de color, encabezaron una delegación del grupo y se presentaron en el Club Jacobino. En teoría, Odo tenía 114 años y en cuanto apareció se oyó un gran aplauso. Sin embargo, como Brissot había apoyado su causa durante mucho tiempo, Robespierre los denunció; cuando pidieron la palabra para dirigirse a la Convención al día siguiente, se rechazó su petición.

Para los montañeses, que ahora controlaban la Convención, lo más preocupante en ese momento era la reacción a la *journée* en las provincias. Muchos de los departamentos estaban dominados por moderados que simpatizaban con los girondinos y estaban en contra de las pretensiones de los *sans-culottes* de París. Cuarenta y siete de los departamentos enviaron cartas a la Convención para denunciar la *journée* del 31 de mayo al 2 de junio; otros 34 se mostraron a favor de los acontecimientos de París o no dijeron nada. En la mayoría de los casos, los departamentos antimontañeses no hicieron mucho más por responder a los sucesos. Los movimientos

locales contra el radicalismo parisino ya habían tomado el control de dos ciudades clave, Lyon y Marsella, sin embargo, e incluso antes de las revueltas, Caen, la capital del departamento de Calvados en Normandía, había hecho un llamamiento con el fin de crear una fuerza armada para proteger a los diputados moderados de París.

El 9 de junio, una asamblea general de delegados de las secciones de Caen declaró a la ciudad en insurrección contra la Convención; después enviaron mensajeros para incitar a otras partes de Normandía y Bretaña a unirse al movimiento. En Burdeos, capital del departamento de Gironda que había dado nombre a la facción de los girondinos, la noticia de las medidas contra los diputados llevó a la formación de una comisión popular que asumió los poderes gubernamentales y anunció su firme decisión de resistir contra los montañeses. En la isla mediterránea de Córcega, el joven Napoleón Bonaparte fue uno de los que tuvo que decidir entre apoyar al gobierno central jacobino o unirse a una revuelta contra él. La revuelta la lideró Pasquale Paoli, quien estaba decidido a declarar la autonomía de la isla. Bonaparte y su familia se pusieron del lado del representante de la Convención en la isla. Se vieron obligados a huir al continente, ya que Paoli no sólo rechazó la autoridad de ese organismo, sino que puso a Córcega bajo la protección del rey de Inglaterra.

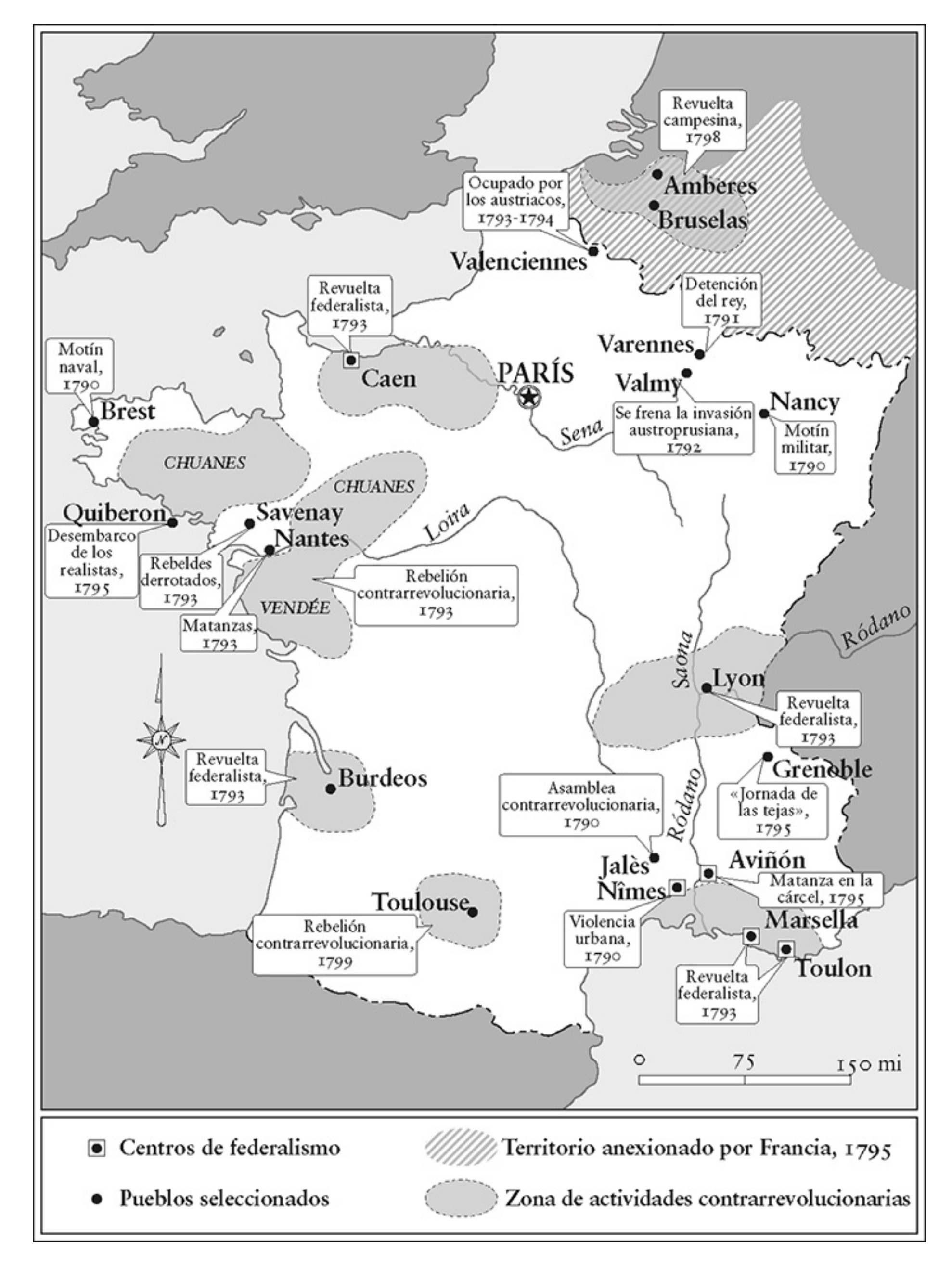
El estallido de la resistencia en las provincias endureció la actitud de los montañeses hacia los girondinos. Los montañeses denunciaron a sus oponentes como *fédéralistes* empeñados en despedazar la República «única e indivisible» que se había proclamado tras derrocar a la monarquía. El federalismo –la idea de que un país podía estar formado por unidades locales relativamente autónomas con pocos lazos entre ellas– era el sistema político adoptado en Estados Unidos: allí, la Constitución de 1787 había creado un gobierno federal central que otorgaba importantes poderes a los estados. En Francia, sin embargo, la idea sugería un regreso al antiguo régimen, en el que las provincias habían tenido leyes diferentes, y esto, según creían los revolucionarios, socavaría la identidad nacional común que querían promover. En mitad de una guerra con potencias extranjeras y de

otras crisis a las que se enfrentaba el país, debilitar los poderes del gobierno central parecía una receta para el desastre.

Los participantes en las revueltas provinciales denunciaban, sobre todo, la excesiva influencia que tenían la población de París, las secciones y los clubes de la capital, en la Convención. Reclamaban la abolición del Tribunal Revolucionario y del Comité de Seguridad Pública, las improvisadas instituciones que habían reforzado la autoridad central y la destitución de los diputados enviados a las provincias «en misión» desde París. Insistieron en que no se rebelaban contra la Convención, pero que sólo reconocerían su autoridad si «recuperaba su libertad, su integridad», readmitía a los diputados expulsados y renunciaba a «las leyes que no aprobaba libremente». Si los diputados de la Convención estaban demasiado divididos para cumplir sus tareas, los rebeldes consideraban que debían convocar nuevas elecciones.[6] No había nada declaradamente «federalista» en este programa; pero tampoco había ningún indicio de cómo podría llevarse a cabo en las circunstancias en las que se encontraba Francia en junio de 1793.

Inicialmente, por lo menos, los llamados movimientos federalistas los dirigían figuras políticas de clase media que habían apoyado la Revolución y habían respaldado la fundación de la República. Pero las cosas pronto cambiarían en algunas zonas, ya que la situación militar se hizo cada vez más desesperada para los líderes rebeldes, que se vieron obligados a aliarse con los monárquicos, e incluso, en la ciudad portuaria mediterránea de Toulon, con fuerzas extranjeras. Desde el principio, los federalistas contaron a menudo con el apoyo de artesanos y comerciantes urbanos, de los mismos orígenes de los que procedían los radicales *sans-culottes* de París. En Lyon, por ejemplo, donde la Revolución había desbaratado la demanda de la tela de seda que era el principal producto de la ciudad, los tejedores se pusieron a menudo del lado de los comerciantes en su afán por poner fin a las revueltas, en lugar de simpatizar con los ataques a los ricos. A diferencia de la revuelta de la Vendée, los movimientos federalistas tenían poco respaldo entre los campesinos: aunque contaban con algunos miembros del clero constitucional y algunos protestantes, como Rabaut

Saint-Étienne, no estaban dispuestos a hacer causa común con el clero refractario y sus partidarios. La rebelión de la Vendée seguía extendiéndose incluso mientras se desarrollaban las protestas federalistas, pero los dos movimientos tenían demasiado poco en común para poder unirse en la lucha contra el gobierno nacional. A principios de junio, mientras los habitantes de la ciudad portuaria bretona de Nantes expresaban su oposición a la reciente *journée* en París, también luchaban desesperadamente contra un asalto de los vandeanos.



La Revolución en las provincias. París era el centro de la historia de la Revolución francesa, pero muchos acontecimientos clave, desde el Gran Miedo de 1789 hasta los levantamientos contrarrevolucionarios, tuvieron lugar lejos de la capital, e incluso en las colonias de ultramar, como muestra este mapa. La capacidad del gobierno revolucionario para controlar las provincias fue decisiva para determinar el resultado de la Revolución. Crédito: Richard Gilbreath.

Mientras los centros provinciales que estaban en contra de la Convención intentaban organizarse, los líderes de otras ciudades debatían sobre su

propio curso a seguir. En Perpiñán, el periódico local denunció el «día fatal del 31 de mayo». Pero cómo, exclamó el editor, era posible «¡enviar fuerzas para que marchen sobre París! ¡Retirar nuestros batallones de las fronteras! Cuando estas fronteras están amenazadas o destrozadas por las numerosas falanges de tiranos extranjeros».[7] Mientras tanto, en París, los diputados montañeses se movilizaron rápidamente para aprovechar su dominio en la legislatura nacional. Todavía no tenían el control completo: muchos partidarios de los girondinos seguían estando en la asamblea, donde protestaron repetidamente porque no se podían tomar decisiones importantes cuando tantos departamentos no estaban plenamente representados, porque habían detenido a sus diputados. Cuando llegó el 19 de junio, 75 diputados ya habían firmado una petición de protesta por el arresto de sus colegas. Para asegurar el apoyo, la mayoría de los montañeses aprobaron a toda velocidad una serie de leyes destinadas a mostrar su preocupación por los pobres. Entre ellas se incluían medidas para poner a la venta las tierras confiscadas a los emigrantes en pequeños lotes para que los campesinos pudieran pujar por ellas; una ley que proponía la parcelación de las tierras comunes de los pueblos para que todos los campesinos fueran propietarios de al menos una pequeña parcela; una ampliación del bienestar de los indigentes y un impuesto de emergencia para los ricos.

Como dijo Pierre Philippeaux, el amigo de Danton, «el medio más seguro para calmar a los departamentos alterados» era terminar el trabajo sobre la Constitución, cuyas disposiciones se habían debatido a intervalos desde la introducción del proyecto de Condorcet en febrero. Una nueva comisión constitucional elaboró un borrador en sólo una semana. Hérault de Séchelles, portavoz del comité, recibió la propuesta como «una de las más populares [constituciones] que jamás haya existido». Sin embargo, el documento ignoraba la mayoría de las ideas genuinamente radicales y utópicas que los diputados habían planteado durante los meses anteriores. Jean-François Barailon propuso permitir el voto a las mujeres solteras; además, pensó que como todos los ciudadanos eran «iguales de hecho y de derecho, todos deberíamos ir vestidos igual», con un «traje verdaderamente

nacional». Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, un radical montañés que acabaría formando parte del Comité de Seguridad Pública, denunció los males de la desigualdad económica y propuso reducirla limitando la cantidad de tierra que cualquier individuo podía poseer; también quería imponer un elevado impuesto a las herencias y redistribuir la riqueza entre los ciudadanos más pobres.[8]

La Constitución de 1793 incorporó en gran medida la Declaración de Derechos que Robespierre había propuesto en abril, con su promesa del derecho al trabajo. La igualdad, mencionada pero no definida en la declaración de 1789, ahora tenía un artículo propio y tenía prioridad sobre la libertad. En contraste con los elaborados procedimientos electorales que Condorcet había propuesto en su esfuerzo por superar las dificultades matemáticas inherentes a los sistemas de votación, el nuevo sistema sería sencillo: en lugar de enviar delegados a las asambleas electorales como habían hecho en las elecciones de 1791 y 1792, los votantes elegirían a los representantes mediante elecciones directas en distritos uninominales. Originalmente, el proyecto constitucional proponía que todas las leyes se sometieran a votación popular; esto se modificó para establecer que se darían por aprobadas a menos que se opusieran las asambleas primarias de más de la mitad de los departamentos. Surgió un ligero desacuerdo sobre una disposición que decía que la nación nunca firmaría la paz con un enemigo cuyas fuerzas estuvieran ocupando el territorio francés. Temiendo que esta estipulación pudiera llevar al país a prolongar conflictos desesperados, el diputado Louis-Sébastien Mercier preguntó si Francia había hecho un «pacto con la victoria». Claude Basire, un montañés, respondió: «Hemos hecho un pacto con la muerte», un ejemplo de la exagerada retórica patriótica que se estaba convirtiendo en un sello distintivo de esta nueva fase de la Revolución.[9]

Para los montañeses, la nueva Constitución encarnaba los ideales de democracia, republicanismo y unidad nacional. Se borraron por completo todos los vestigios de la monarquía y a los otrora poderosos ministros cuyo «despotismo» habían denunciado los revolucionarios se los degradó a meros «agentes principales de la administración» que no debían tener

«ninguna autoridad personal». Muchos diputados moderados votaron a favor de la Constitución de 1793, como escribió más tarde uno de ellos, con la esperanza de que acabara con «la anarquía y el desprecio de las leyes» en Francia y «estableciera y fijara al menos una forma de gobierno».[10] Como había prometido la Convención en su sesión de apertura, la Constitución se sometió a votación en las asambleas locales de todo el país, incluso en las zonas donde los movimientos federalistas se resistían a aceptar el gobierno nacional. A juzgar por las condiciones caóticas de gran parte del país, la participación electoral fue sorprendentemente alta, por encima de los niveles de las elecciones legislativas de 1791 y 1792, y los debates sobre el documento fueron intensos. Con 1.801.918 votos emitidos a favor y sólo 11.610 en contra, la nueva Constitución podía hacer alarde de un respaldo popular más fuerte que cualquiera de las otras actas de gobierno elaboradas durante la década revolucionaria.

Sin embargo, los radicales de París que habían desempeñado un papel central en la insurrección del 31 de mayo al 2 de junio de 1793, seguían insatisfechos. Los montañeses habían ignorado muchas de sus demandas clave, incluyendo el juicio y castigo inmediato de los girondinos, la imposición de controles de precios para forzar la bajada del precio del pan, y el establecimiento de un ejército revolucionario de *sans-culottes* a fin de presionar a los agricultores a fin de que pusieran a disposición las reservas de grano que los militantes creían que estaban acaparando. Jacques Roux pronunció una furiosa diatriba que justificaba plenamente su reputación como uno de los agitadores conocidos como los *enragés*: «Acaban ustedes de terminar de escribir una Constitución que van a someter al voto del pueblo. Pero ¿han incluido una prohibición contra la especulación? ¡No! ¿Han anunciado castigos para los acaparadores y monopolistas? ¡No! Muy bien: les decimos que no han terminado el trabajo», bramó.[11] Inquieto por el hecho de que los *enragés* estaban minando su apoyo popular, Hébert, el tragafuegos «Père Duchêne», impidió que la asamblea de la Comuna criticara la Constitución. Sin embargo, preocupada por las múltiples crisis a las que se enfrentaba el país, la Convención Nacional no hizo nada para poner en vigor el documento.

La Constitución se aprobó justo cuando se intensificaba el conflicto en el país. El 24 de junio, después de que más de la mitad de los diputados girondinos escaparan de París, la Convención encarceló a los demás miembros del grupo. El 28 de junio, delegados de diez departamentos de Normandía y Bretaña se reunieron en Caen para discutir la organización de una marcha sobre París. Para entonces, sin embargo, ya estaba claro que pocos hombres estaban listos para ofrecerse como voluntarios en semejante expedición. En Burdeos, también fracasaron los intentos de crear un ejército insurrecto. Mientras tanto, la Convención estaba reuniendo fuerzas para aplastar los levantamientos. El 8 de julio, el montañés Saint-Just presentó una vehemente acusación contra los girondinos por «conspiración para restablecer la tiranía y la vieja constitución» poniendo al hijo de Luis XVI en el trono. Cinco días después, el 13 de julio, la pequeña fuerza militar que los federalistas habían reunido en Normandía se dispersó, terminando así con la única rebelión que amenazaba directamente a París. «No supieron aprovechar las energías del movimiento inicial», escribió abatido Pétion, uno de los diputados expulsados de la Convención que se había refugiado en Normandía.[12] La rebelión federalista del norte se estaba desmoronando, pero la resistencia en otros lugares se iba haciendo más fuerte. El 12 de julio, Lyon se declaró oficialmente en guerra contra la Convención. Afortunadamente para los montañeses, los diputados que estaban en misión en la zona y los mandos militares locales impidieron que los lioneses se unieran a los rebeldes de Marsella, que habían enviado tropas para ocupar otras ciudades de su región.

El mismo día en que se derrotó al ejército federalista normando, París se vio sacudida por un asesinato que sembró el miedo en los corazones de todos los partidarios de la Revolución. Charlotte Corday, una joven noble de Normandía que simpatizaba con la causa federalista, consiguió entrar en el apartamento del periodista y diputado Marat, el «Amigo del Pueblo», haciéndole llegar una nota que decía que tenía que darle información importante sobre la conspiración federalista en su región natal. Encontró al enfermo Marat sentado en su bañera, tratando de aliviar el dolor de una enfermedad de la piel y lo apuñaló hasta la muerte. Corday no hizo ningún

esfuerzo por escapar. Reconoció que sentía simpatía por los girondinos, pero insistió en que había actuado por iniciativa propia. Les dijo a sus interrogadores: «Sabía que estaba arruinando a Francia. Maté a un hombre para salvar a cien mil». El valor tranquilo que mostró en el juicio impresionó a los espectadores. Un periodista escribió que la condenaron a muerte y que «escribió a su familia y pidió un pintor, diciendo que sin duda sería celebrada por la historia».[13]

El asesinato de Marat puso en marcha una gran teatralización del dolor en París, incluso entre los políticos que habían criticado su extremismo. El artista Jacques-Louis David, ahora diputado montañés, elaboró rápidamente el diseño del cuadro ya clásico en el que logró imbuir de una dignidad intemporal a la figura de Marat desplomado en su bañera. David también supervisó la organización de un histórico funeral al estilo romano con el fin de glorificar a su amigo, pero la solemnidad del evento se vio mermada por el terrible hedor que emanaba del cuerpo del periodista, que se pudrió rápidamente al calor abrasador del verano. El hecho de que una mujer «hubiera dado ejemplo a los hombres», como dijo el girondino Pétion, que había conocido a Corday en Caen, aumentó las acusaciones de que no se podía confiar en las mujeres; la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias trató de contrarrestar esos ataques insistiendo en desempeñar un papel importante en el funeral de Marat. En el Club de los Cordeliers, donde Marat había hablado tan a menudo, colgaron su corazón, conservado en una urna –«los preciosos restos de un dios»–, de las vigas de la sala de reuniones.

Cualesquiera que fueran sus verdaderos sentimientos hacia Marat, los partidarios de la Revolución vieron el crimen de Corday como la prueba de que estaban rodeados de enemigos ocultos. Robespierre insistió en que «el honor de una daga también está reservado para mí». A un periodista le pareció especialmente amenazador que la asesina fuera una mujer joven y hermosa: «Nadie se parecía menos a una criatura sedienta de sangre», escribió.[14] La noticia de que el 16 de julio de 1793 los federalistas de Lyon habían ejecutado a Chalier, su radical montañés local, acrecentó la sensación de que ningún patriota estaba a salvo. Marat y Chalier alcanzaron

la categoría de mártires, cuya sangre había que vengar, junto con el diputado Michel Lepeletier, a quien habían asesinado en el momento del juicio a Luis XVI.

El asesinato de Marat coincidió con un cambio de poder en la Convención. Desde abril, la asamblea había confiado en el Comité de Seguridad Pública para dar una dirección general al gobierno. Al principio, Danton, el popular tribuno, era el miembro más visible del comité, pero para cuando llegó el mes de julio era evidente que él y sus partidarios carecían de una política clara para hacer frente a la crisis que asolaba al país. El 10 de julio, la Convención expulsó a Danton del comité y se quedó sin una personalidad dominante. Esa situación cambió el 27 de julio, cuando la asamblea añadió a Robespierre al grupo. Aunque ya tenía una reputación nacional que se remontaba a su desafiante defensa de los principios democráticos en la Asamblea Nacional, Robespierre nunca había tenido ninguna responsabilidad gubernamental directa. Durante el año siguiente, sería la figura central del gobierno revolucionario y la historia lo recordaría como el líder más visible de la fase más radical de la Revolución, responsable tanto de la defensa exitosa del movimiento como de los métodos extremos que usó para derrotar a sus oponentes. Aunque tenía una autoridad personal que ninguno de los otros miembros del comité podía igualar, Robespierre nunca fue un dictador revolucionario a la manera de Vladímir Ilich Lenin o Mao Tse-Tung. Durante el corto tiempo que Robespierre fue el participante más prominente del gobierno revolucionario, compartió el poder con los otros miembros del Comité de Seguridad Pública. Sus colegas nunca dudaron en discutir con él y, en algunos temas cruciales, fue minoría dentro del grupo.

En la lucha por el poder en el verano de 1793, el principio rector de Robespierre fue que había que mantener la autoridad de la Convención, aunque advirtió que todavía había miembros desleales entre los diputados. Denunció a los agitadores que despertaban la ira de las masas por los precios de la comida; los acusó de querer provocar otra ronda de ataques a las tiendas «por el pueblo o, en realidad, por criminales disfrazados con la ropa del pueblo». También señaló al *enragé* Jacques Roux, cuando preguntó

si «este sacerdote que, en connivencia con los austriacos, denuncia a los mejores patriotas, puede tener opiniones puras o intenciones legítimas». En su opinión, el liderazgo debía estar en manos de «hombres que aman al pueblo sin decirlo, que trabajan incansablemente por su bien sin presumir». Sin embargo, compartía con los militantes *sans-culottes* la convicción de que la Revolución estaba amenazada por conspiraciones de todo tipo. En algunas ocasiones, pidió la destitución de todos los generales del ejército, así como de los funcionarios del gobierno. El hombre que en 1791 había pronunciado uno de los discursos más elocuentes de la Revolución en defensa de la libertad de prensa, ahora exhortaba a los jacobinos a «caer sobre los odiosos periodistas [...], cuya existencia se vuelve cada día más perniciosa para la sociedad».[15]

A medida que avanzaba el verano de 1793, aumentaba la presión para encontrar formas de derrotar a los enemigos de la Revolución. La Convención trató de reforzar el apoyo rural a la Revolución al decretar, el 17 de julio, que los campesinos no tendrían que pagar más compensaciones por los privilegios feudales abolidos, pero ya hacía tiempo que habían dejado de hacer esos pagos de todas formas. El 26 de julio, la Convención aprobó un decreto que declaraba que «el monopolio es un delito capital».[16] La ley denunciaba a los especuladores que acaparaban las existencias de cualquiera de una larga lista de productos alimenticios y materias primas, y exigía a todos los que comerciaban con esos productos que registraran sus existencias ante las autoridades locales. La medida hizo que casi todas las transacciones económicas fueran sospechosas y permitió que los funcionarios gubernamentales y los comités de vigilancia invadieran hogares, empresas y graneros de campesinos en busca de incumplimientos. Aun así, los *enragés* y gran parte de la población de París quedó insatisfecha: los precios del pan no habían bajado y los ricos seguían gozando de privilegios. La sospecha de que los nobles y los parientes de los emigrados contribuían a la paralizante escasez de divisas mediante el contrabando de oro y plata fuera del país se sumó a la sensación de que los

enemigos de la Revolución aumentaban deliberadamente las dificultades económicas que pesaban sobre los pobres.

Los últimos días de julio trajeron una oleada de malas noticias desde las fronteras. Asediadas por las tropas prusianas durante cuatro meses, las fuerzas francesas que ocupaban Maguncia terminaron por rendirse, poniendo fin así a los esfuerzos por llevar los principios republicanos a Alemania. En el norte de Francia, la población civil, presa del pánico por el bombardeo austriaco de la ciudad de Valenciennes, obligó a su guarnición a retirarse, lo que permitió al enemigo tomar una posición clave en suelo francés. La sospecha recayó sobre el general Adam Philippe Custine, que había dirigido la ocupación francesa de Maguncia antes de ser transferido al mando del ejército en el norte. Robespierre le comparó con Dumouriez y le acusó de estar a sueldo de los británicos. Como dijo el cronista Ruault, «a los ojos de los *sans-culottes* la incompetencia y la traición son más o menos lo mismo». El juicio de Custine por el Tribunal Revolucionario se prolongó durante gran parte del mes de agosto, intensificando los temores sobre la lealtad de los oficiales militares que, como él, procedían de familias nobles. Mientras tanto, la campaña contra los rebeldes en la Vendée y Bretaña también iba mal. En la Convención, Barère se quejó de que ninguno de los comandantes republicanos, permanentemente enfrentados, entendía cómo luchar contra el tipo de enemigo escurridizo al que se enfrentaban: «Su ejército es como el de un rey persa», dijo. «Llevan ciento sesenta vagones con su equipaje, mientras que los bandidos marchan con sus armas y un trozo de pan negro en el morral».[17]

Frente a estos reveses, la Convención trató de recuperar el espíritu de entusiasmo y unidad que ahora se recordaba como la característica de las primeras etapas de la Revolución, apuntando a los vestigios de elitismo que todavía quedaban. Además, organizó una gran fiesta pública para celebrar el voto popular a favor de la nueva Constitución. El 8 de agosto de 1793, después de escuchar al artista David denunciar a las academias que habían supervisado los esfuerzos artísticos y científicos como «corporaciones monstruosas, supervivientes del régimen real y ministerial que se han tolerado durante demasiado tiempo» (el sacerdote jacobino Grégoire

intervino afirmando que habían «intentado monopolizar la gloria y guardar para sí el privilegio exclusivo del talento»), la Convención votó para eliminarlas. Un panfletario pidió «una ciencia *sans-culottizada*» y acusó a los *savants* de las academias –igual que los sacerdotes– de «emplear un lenguaje místico, para no ilustrar a los que llamaban profanos».[18] Incluso los descendientes de los *philosophes* se encontraron ahora estigmatizados como enemigos de la igualdad.

La Fiesta de la Unidad Republicana, el 10 de agosto, fue la obra más elaborada de David. Los participantes siguieron un itinerario que los llevó a través de la ciudad para realizar una serie de rituales simbólicos. En la Bastilla, lugar de nacimiento de la Revolución, bebieron agua que brotaba de los pechos de la estatua gigante de una mujer que representaba la naturaleza, la fuente de la libertad y la igualdad. Los diputados y funcionarios públicos se mezclaban deliberadamente con ciudadanos de a pie vestidos con sus ropas de trabajo; el relato oficial de la fiesta destacaba que «el africano, cuyo rostro está ennegrecido por el fuego del sol, marchaba de la mano del hombre blanco […], todos eran iguales como hombres, como ciudadanos, como miembros del pueblo soberano». En un reconocimiento público sin precedentes del papel que las mujeres habían desempeñado en la Revolución, un arco del triunfo honraba a las heroínas de los Días de Octubre de 1789. El presidente de la Convención, Hérault de Séchelles, aplaudió el logro, pero luego les recordó que ahora tenían un papel más tradicional que desempeñar: «La libertad, atacada por todos los tiranos», dijo, «necesita un pueblo de héroes que la defiendan; ¡está en vuestras manos dar a luz a esos héroes!».[19]

Después de haber hecho los honores a los conquistadores de la Bastilla y a las heroínas de los Días de Octubre, la procesión se dirigió a la plaza de la Revolución, donde se había erigido una estatua de la Libertad en el lugar en el que habían guillotinado a Luis XVI. Aquí, Hérault de Séchelles prendió fuego a un conjunto de objetos que simbolizaban el antiguo régimen: tronos, coronas, cetros, escudos. Mientras crepitaban las llamas, se soltaron tres mil pájaros, que llevaban cintas tricolores con el mensaje: «¡Somos libres! ¡Imitadnos!». En el último sitio por el que discurría la

fiesta, en el Campo de Marte, los participantes tenían que pasar por debajo de un nivel de carpintero suspendido de una cinta tricolor, un símbolo masónico que era «una representación visible del equilibrio social que mantiene a todos los hombres en el mismo plano de igualdad». David había erigido una colosal estatua de Hércules; el semidiós sostenía un manojo de palos mientras se preparaba para aplastar a un monstruo bajo sus pies con un garrote. En caso de que la multitud no entendiera el simbolismo de la estatua, el discurso de Hérault se encargaba de explicarlo: «¡Este gigante cuya poderosa mano reúne en un solo manojo los departamentos que hacen su grandeza y su fuerza eres tú! ¡Este monstruo cuya mano criminal quiere romper el manojo y separar lo que la naturaleza ha unido es el federalismo!».[20]

Dos semanas más tarde, el 23 de agosto, nadie podía confundir el papel que el pueblo estaba llamado a desempeñar cuando, para superar la crisis militar, los diputados decretaron una *levée en masse*, es decir, una «movilización total» de la población y los recursos de la nación. Mientras que los anteriores proyectos de reclutamiento habían afectado sólo a hombres en edad militar, la *levée en masse* exigía un esfuerzo universal. «Los jóvenes irán a la batalla; los hombres casados forjarán las armas y transportarán las provisiones; las mujeres levantarán tiendas de campaña, coserán ropas y servirán en los hospitales; los niños transformarán las viejas telas en vendas; los ancianos acudirán a los lugares públicos para animar el coraje de los guerreros y predicar la unidad de la República y el odio a los reyes», decía el decreto. La medida miraba al pasado, a la imagen idealizada de los revolucionarios del patriotismo de los antiguos griegos y romanos, pero también miraba al futuro, a la era de la guerra total del siglo XX. Esta movilización pretendía, teóricamente, alistar a setecientos mil nuevos soldados, pero sólo logró reunir unos dos tercios de ese número. Las numerosas levas que había habido en los dos años anteriores provocaron que quedaran pocos entusiastas por reclutar. En su pueblo, el maestro de escuela Delahaye escribió: «Hubo una desolación general con la partida de estos pobres jóvenes».[21] Sin embargo, el decreto transmitió efectivamente

el mensaje de que todos los intereses individuales estaban ahora supeditados a la necesidad de defender el país.

El día antes de que se decretara la *levée en masse*, las fuerzas de la Convención lanzaron el asalto a la ciudad rebelde de Lyon, el bastión federalista más importante que quedaba. La población de la ciudad había votado a favor de la Constitución de 1793, con la esperanza de que su acción abriera el camino a un final negociado del conflicto con la Convención, pero el gobierno de París no estaba dispuesto a hacer concesiones. Sin otra opción que esperar a que una invasión extranjera pudiera desviar las fuerzas de la Convención antes de que la ciudad tuviera que rendirse, los líderes de la revuelta aceptaron el apoyo de monárquicos como Louis François Perrin de Précy, al que hicieron comandante militar de Lyon. La presencia de los monárquicos entre los defensores sirvió a los intereses propagandísticos de los montañeses. Mientras las fuerzas de la Convención estrechaban el cerco alrededor de Lyon, los movimientos federalistas del sur de la ciudad tenían que tomar decisiones drásticas. Marsella, uno de los principales centros de resistencia en la primavera de 1793, se rindió. En Toulon, sin embargo, la base de la flota mediterránea de Francia, los moderados y los monárquicos aceptaron una oferta de los británicos para desembarcar tropas y ayudar a defender la ciudad a cambio del desarme de los buques de guerra franceses en el puerto.

Igual que había ocurrido con la traición del general Dumouriez, la rendición de Toulon desató la furia en París. La noticia llegó el 4 de septiembre de 1793, justo después de la confirmación de otro desastre sensacional, la destrucción de la ciudad de Cap Français, el principal puerto de la colonia caribeña de Saint-Domingue. El incendio de la ciudad, que causó entre tres mil y diez mil muertes, supuso una enorme pérdida económica, ya que se quemaron los almacenes de azúcar y café. Fue el incidente de violencia urbana más grave de toda la Revolución. Los primeros informes del suceso, que tuvo lugar el 20 de junio, fueron muy confusos. Daban la impresión de que los dos comisarios civiles

republicanos que habían sido enviados a la isla un año antes, con el apoyo del ahora deshonrado Brissot, habían escenificado una versión colonial de una revuelta federalista. «Los comisarios nacionales [Étienne] Polverel y [Léger-Félicité] Sonthonax han usurpado una autoridad dictatorial en la isla y su ambición criminal es la causa de estas últimas desgracias», señaló el portavoz del Comité de Seguridad Pública montañés, André Jeanbon Saint-André, en su intervención ante la Convención el 3 de septiembre.[22] No dijo nada sobre el paso verdaderamente revolucionario que habían dado los comisarios. En la noche del 20 de junio, después de que los comisarios y sus defensores de color libres se vieran casi superados por sus oponentes en Cap Français, Polverel y Sonthonax ofrecieron libertad inmediata a cualquier esclavo negro que tomara las armas para apoyarlos.

Hasta ese momento, las autoridades francesas de Saint-Domingue habían hecho todo lo posible para derrotar a los insurgentes negros que se habían levantado en agosto de 1791; muchos de esos mismos hombres se alistarían en el ejército español cuando España se unió a la guerra contra Francia a principios de 1793. Cuando llegaron a la colonia en septiembre de 1792, Polverel y Sonthonax habían jurado públicamente que renunciarían a sus puestos antes que obedecer cualquier decreto de Francia que ordenara la abolición de la esclavitud. Sin embargo, ambos hombres se oponían personalmente a la esclavitud; en septiembre de 1790, Sonthonax, el más joven y franco de los dos, había escrito un artículo anónimo en *Révolutions de Paris* en el que predecía que «llegará el día –y no está muy lejano– en que verán a un africano de pelo rizado, confiando sólo en su virtud y buen sentido, venir a participar en el proceso legislativo en nuestras asambleas nacionales».[23] La situación de emergencia a la que se vieron enfrentados el 20 de junio dio a los comisarios una excusa para actuar de acuerdo con sus convicciones personales, aunque no tenían la seguridad de que la Convención de París fuera a aprobar su decisión.

La oferta inicial de los comisarios se limitaba a hombres que pudieran unirse al ejército. Pero pronto se dieron cuenta de que reclutar soldados negros leales requería extender el alcance de la emancipación, primero a las esposas e hijos de los hombres que se ofrecieran como voluntarios, y luego,

al final de agosto de 1793, a todos los negros de la colonia. Además, el concepto de «emancipación» de los comisarios estaba limitado por su firme decisión de mantener el sistema de plantaciones que hacía que la colonia fuera tan valiosa para Francia. Hicieron caso omiso de la idea de un colono blanco idealista: ya que se van a abolir los derechos de propiedad de los dueños de las plantaciones sobre sus esclavos, dijo, ha llegado el momento de crear una sociedad basada en «la comunidad de bienes entre todos los individuos». En lugar de eso elaboraron planes en virtud de los cuales los negros serían legalmente libres, pero seguirían estando obligados a trabajar en los campos de azúcar.[24]

Así que había buenas razones para que muchos negros siguieran dudando de las intenciones de los oficiales franceses. Toussaint Louverture, que en ese momento servía como general en el ejército español, condenó a los republicanos franceses por ejecutar al rey y perseguir a la Iglesia, y rechazó indignado su oferta de emancipación. «Ustedes tratan de hacernos creer que la libertad es un beneficio que disfrutaremos si nos sometemos al orden», escribió a Sonthonax y Polverel, «pero mientras Dios nos dé fuerza y medios, conseguiremos otra libertad, diferente de la que ustedes, tiranos, pretenden imponernos».[25] Louverture y los demás líderes negros se habían dejado convencer por sus aliados españoles de que los enemigos de la Francia revolucionaria estaban a punto de invadir el país y les parecía que no tenía sentido aceptar promesas que tal vez no se cumplieran nunca. Sin embargo, la crisis del 20 de junio de 1793, que culminó con la quema de Cap Français y la huida de la mayoría de la población blanca de la colonia, abrió la mayor brecha en el sistema de esclavitud de la historia de las Américas. A los pocos meses, Louverture no sólo cambiaría de bando y se convertiría en uno de los más firmes defensores de las medidas adoptadas por Sonthonax y Polverel, sino que la Convención ampliaría la abolición de la esclavitud al resto del Imperio francés.

La destrucción de Cap Français tuvo un impacto inmediato en Estados Unidos. A principios de julio, los refugiados que huían de la isla llenaron las ciudades portuarias de Norfolk, Baltimore y Filadelfia. La joven República americana era el único aliado de la Francia revolucionaria, pero los

esfuerzos del emisario francés Edmond-Charles Genêt –uno de los nombramientos diplomáticos que había hecho Brissot– por llevar a Estados Unidos al conflicto con Gran Bretaña y España estaban tensando mucho la relación. Cuando Genêt llegó por primera vez en la primavera de 1793, los partidarios «republicanos demócratas» de Thomas Jefferson le acogieron con entusiasmo, veían la Revolución francesa como una extensión lógica del movimiento americano. Sin embargo, los federalistas, partidarios del presidente George Washington, advirtieron que no se debía permitir que el entusiasmo republicano arrastrara al país a guerras por un «interés extranjero». Los enfrentamientos iracundos por la misión de Genêt marcaron la creación de los primeros partidos políticos de América. La llegada de los refugiados de Saint-Domingue, algunos de los cuales trajeron esclavos negros o amantes de color libres con ellos, hizo temer que los «negros franceses» incitaran a los esclavos estadounidenses a la rebelión. A finales de julio, la administración de Washington había acordado exigir que los franceses retiraran a Genêt. Irónicamente, en París, el Comité de Seguridad Pública ya había decidido destituirle, no porque se hubiera enfrentado con el gobierno americano, sino porque era un brissotino. El asunto Genêt marcó el comienzo de una separación entre las dos únicas repúblicas democráticas del mundo y dejó a los franceses con la sensación de que estaban realmente aislados en un mundo hostil.

Junto con las catastróficas noticias de Toulon, los informes de la agitación en Saint-Domingue provocaron otra insurrección popular contra la Convención el 5 de septiembre de 1793. Los organizadores de esta jornada no fueron los poco conocidos militantes de la sección que habían iniciado el movimiento del 31 de mayo, sino Chaumette y Hébert, los dirigentes de la Comuna, y los miembros radicales del Club Jacobino, como los diputados Billaud-Varenne y Collot d’Herbois, que estaban decididos a obligar al Comité de Seguridad Pública a adoptar medidas más extremas para salvar el país. Los manifestantes llevaban pancartas que pedían «la guerra contra los tiranos, los acaparadores y los aristócratas», y su lema era «poner el terror

en el orden del día». Su reivindicación más concreta había estado en la agenda populista desde la primavera: la formación de un ejército revolucionario de *sans-culottes* para peinar el campo, arrancar a la oposición de cuajo y hacerse con los suministros de grano. Billaud-Varenne, por su parte, sugirió un nuevo comité para reemplazar al de Seguridad Pública y lograr lo que este no había conseguido hasta ahora, el exterminio de los enemigos de la Revolución.[26]

Los miembros del Comité de Seguridad Pública tenían serias dudas sobre la creación de un ejército revolucionario. Coordinar a los catorce ejércitos independientes que ya estaban en el campo de batalla y evitar que compitieran entre sí por los suministros que necesitaban desesperadamente ya estaba forzando los recursos del gobierno hasta el límite. El ejército revolucionario estaría bajo el control de los aliados populistas de Hébert, que tenían poco respeto por el comité y la Convención. Desplegar bandas armadas de militantes en el campo sólo lograría extender el caos y distanciar a la población rural. Sin embargo, la presión popular era imposible de resistir. En la Convención, Danton demostró una vez más su talento para la improvisación. Propuso crear un ejército revolucionario, pero con el Comité de Seguridad Pública a cargo de la organización. Al mismo tiempo, sin embargo, la capacidad de las secciones de París para movilizarse contra la Convención se vería frenada al poner fin a su derecho a permanecer en sesión permanente, lo que les permitía agitar constantemente a la opinión pública, limitándose a sólo dos breves reuniones por semana. En un aparente gesto hacia los *sans-culottes*, Danton propuso que se remunerara a los trabajadores y artesanos por asistir a las secciones. Fue una maniobra inteligente, porque los participantes tendrían interés en obtener su dinero, que estaría en riesgo si se interrumpiera el funcionamiento regular del gobierno. Para evitar las críticas a la Comisión de Seguridad Pública, los diputados incorporaron a los dos agitadores Billaud-Varenne y Collot d'Herbois entre sus miembros.

Cuando se dispersó la multitud, pocos reconocieron que, gracias a Danton, la Convención había evitado tener que atender a la exigencia de los militantes de declarar oficialmente el «terror en el orden del día», lo cual

habría obligado al gobierno a satisfacer el llamamiento de los radicales a una ola de represión sin restricciones legales. De todas maneras, la *journée* del 5 de septiembre sentó las bases para una fuerte intensificación de las medidas dirigidas a los enemigos reales e imaginarios de la Revolución y una considerable expansión del poder del gobierno central. El terror –el rápido castigo de los opositores y la exigencia de obediencia ciega a los decretos oficiales– era un medio abiertamente reconocido para llevar a cabo estos decretos. La idea de que la ley debía inspirar terror en las almas de aquellos tentados a violarla tenía una larga historia en el antiguo régimen. Sin embargo, Montesquieu le había dado a la palabra una connotación negativa, identificándola como el principio de los regímenes despóticos. En los primeros años de la Revolución, Marat había sido casi el único que elogiaba la violencia popular como una forma de crear «este ambiente de terror que es saludable y tan indispensable para lograr la gran obra de la Constitución».[27] A mediados de 1792, muchos revolucionarios habían llegado a compartir la idea de que era necesario intimidar a los enemigos de la Revolución por medio del terror; tanto el girondino Vergniaud, como el montañés Danton hablaron de hacer que la corte real experimentara el miedo que durante mucho tiempo había hecho sentir al pueblo.

Lo que era nuevo a finales del verano de 1793 era el concepto de «terror» como método sistemático no sólo para defender la Revolución, sino para lograr sus propios objetivos. «Sí, el terror está a la orden del día y debe ser para los egoístas, para los federalistas, para los ricos que no tienen piedad, para los ambiciosos que son deshonestos, para los intrigantes desvergonzados, para los cobardes desleales al país, para todos aquellos que no sienten la dignidad ligada al título de hombre libre, el republicano puro […]. No habrá compromisos, Francia debe ser completamente libre o perecer, y cualquier método está justificado para defender tan admirable causa», escribió la publicación *Révolutions de Paris*.[28] Los revolucionarios no utilizaban la frase *le règne de la terreur* (el reinado del terror), que, junto con la palabra *terrorista*, inventarían los oponentes de Robespierre tras su derrocamiento en 1794, para desacreditar el sistema que describía. Sin embargo, no se puede negar que estos términos son muy adecuados para

describir las políticas que implementaron a finales de 1793 y en la primera mitad de 1794 los hombres en el poder en Francia durante los diez meses siguientes a la *journée de septembre*. Estaban convencidos de que la supervivencia de la libertad y la igualdad en el mundo dependía de la supervivencia de la República francesa, y temían que ellos mismos no sobrevivirían si fracasaba la Revolución; tenían toda la intención de infundir el miedo, no sólo a sus enemigos, sino a la ciudadanía en general.

En febrero de 1794, cuando el alcance de esta política se hizo evidente, Robespierre la defendió sin vacilar, explicó a sus oyentes que, sin terror, «la virtud es impotente». En su opinión, el terror de la Revolución era un instrumento de justicia que se instauraba mediante la ley, no era una simple arma de los fuertes que se desplegaba para sobrecoger a los débiles; esto era lo que lo justificaba y lo que lo diferenciaba de la violencia descontrolada del pueblo llano. Para sus víctimas, esta insistencia en que el terror revolucionario era una forma de ley y justicia era lo que lo hacía especialmente censurable. Desde su celda, Madame Roland, que durante mucho tiempo fue una de las más fieles partidarias de la Revolución, denunció «el dominio de estos hipócritas que, siempre vestidos con la máscara de la justicia, siempre hablando el lenguaje de la ley, han establecido un tribunal para llevar a cabo su venganza».[29] Dada su situación, difícilmente podría haber apreciado la sinceridad con la que hombres como Robespierre creían que lo que estaban haciendo era necesario y estaba justificado. Pero fue precisamente la intensidad de esa convicción lo que permitió a Robespierre y a muchos otros participantes en la Revolución tolerar los abusos de poder demasiado reales que Madame Roland identificó con tanta perspicacia.

Después de la *journée* del 5 de septiembre de 1793, estaba claro que, a pesar de la histórica celebración de la nueva Constitución un mes antes, no iba a haber ningún movimiento para ponerla realmente en vigor mediante unas elecciones para una nueva legislatura. Robespierre denunció la «insidiosa propuesta» de sustituir a los «miembros purificados» de la

Convención por «enviados de Pitt y Cobourg», refiriéndose a los enemigos extranjeros de la Revolución.[30] Hasta que se ganara la guerra y se afianzara la seguridad del país, la Convención elegida en 1792 continuaría gobernándolo. Además, hasta que la Convención decidiera lo contrario, el Comité de Seguridad Pública, ahora claramente dominado por los montañeses más radicales, sería el centro de la política. El comité gobernó desde septiembre de 1793 hasta julio de 1794. El único organismo con el que compartía autoridad era el Comité de Seguridad General, que supervisaba la policía y el Tribunal Revolucionario.

La Convención actuó rápidamente para ampliar los poderes a estos dos «comités de gobierno». El 17 de septiembre de 1793, la ley de los sospechosos autorizó que se detuviera a «todo aquel que, por su conducta, asociaciones, charlas o escritos se haya mostrado partidario de la tiranía o del federalismo y enemigo de la libertad». Además de esta amplia y vaga definición de los sospechosos, la ley se dirigía a una serie de grupos específicos: quien no pudiera demostrar que se ganaba la vida honradamente, cualquier exfuncionario público al que hubieran suspendido o despedido de su cargo, todos los parientes de los emigrantes que no hubieran «manifestado de manera constante su devoción a la Revolución», y cualquier persona que hubiera emigrado de Francia en los primeros años de la Revolución, aunque hubiera regresado antes de la fecha límite establecida por la ley aprobada en 1792. Los comités de vigilancia que se crearon en marzo de 1793 eran los encargados de aplicar la ley. En París, la Comuna emitió una lista de «características que hacen sospechosa a la gente», entre las que se encontraban «los que hablan crípticamente de las desgracias de la República, se compadecen del pueblo y están siempre dispuestos a difundir malas noticias con aparente pesar, […] los que, para parecer republicanos, aparentan una excesiva austeridad y adustez», y «los que, no habiendo hecho nada contra la libertad, tampoco han hecho nada por ella», criterios lo suficientemente elásticos como para englobar a cualquiera. Los que temían que los detuvieran trataban de parecer buenos patriotas vistiéndose como *sans-culottes* y suscribiéndose al *Père Duchêne*. «La imagen del orador fumando su pipa [...] servía de icono de seguridad en

los tocadores de las mujeres más guapas, en los estudios de los eruditos, en los salones de los ricos y en las oficinas de negocios», recordaba más tarde un parisino.[31]

Se dijo a las autoridades locales que establecieran prisiones para retener a los sospechosos «hasta la paz»; a los detenidos no había que acusarlos necesariamente ni llevarlos a juicio. Como era costumbre en ese momento, los prisioneros tenían que pagar por su propia comida y gastos. Un exmilitar atrapado en estas redadas recordaba que sus captores lo revisaron y decidieron: «Es alto, parece seguro de sí mismo, es sospechoso». Al relatar el incidente, añadió: «Me opongo, invoco la ley, la justicia, nadie me escucha; las risas resuenan entre las bóvedas». Los guardias lo desnudaron, tomaron su ropa y objetos de valor, y lo arrojaron a una celda con otros ochenta reos «sin camas, sin sillas, sólo viejos colchones cubiertos de bichos». Incluso los que no estaban encarcelados estaban sometidos a una vigilancia onerosa. En la pequeña ciudad de Langres, una devota monja católica escribió que «alrededor de trescientas mujeres, a quienes se llama sospechosas, tienen la obligación de registrarse en el Ayuntamiento todos los días. La edad, la enfermedad, nada les importa».[32] El país de los derechos del hombre había creado un sistema penitenciario a una escala sin precedentes en el mundo occidental; en el verano de 1794, medio millón de hombres y mujeres lo habían vivido en sus carnes.

Dos semanas más tarde, la Convención se embarcó en un esfuerzo igual de grande para regular la economía del país. Ampliar el sistema de control de precios que se había impuesto a los cereales y el pan el mes de abril anterior para aplicarlo a una larga lista de productos básicos esenciales se convirtió ahora en una prioridad. Aunque alababan las virtudes del pueblo, los diputados habían llegado a sospechar de lo que uno de ellos llamaba «la codicia y la mala fe de los cultivadores»; creían que los agricultores no vendían sus productos a un precio justo y que eran demasiado reacios a aceptar en pago las *assignats* depreciadas de la Revolución. La ley del máximum general, promulgada el 29 de septiembre de 1793, tenía por objeto estabilizar los precios de los alimentos, los tejidos y las materias primas para la producción industrial y asegurar un suministro adecuado

para los ejércitos. Los precios de los artículos regulados se fijaron en los niveles de 1790, aumentados en un tercio para adecuarse a la inflación. La ley también fijó límites a los salarios, que debían ser una vez y media los de 1790. En teoría, esto equivalía a un aumento para los trabajadores, pero sólo si realmente podían encontrar bienes en el mercado a los precios impuestos por el gobierno. Mientras tanto, la ley autorizaba a los funcionarios locales a castigar a los trabajadores y a los propietarios de empresas «que se nieguen, sin motivos legítimos, a realizar su trabajo habitual».[33] Jean-Marie Goujon había sido uno de los primeros en utilizar la palabra «máximum» de esta manera; había aparecido en su carta a la Convención el noviembre anterior. Ahora, de repente, se veía elevado a un puesto de importancia nacional: el Comité de Seguridad Pública lo nombró uno de los tres miembros de la comisión encargada de administrar el control de los precios en todo el país. Sólo dos años antes, había pronunciado discursos altisonantes sobre el amor que tenía la Revolución por la gente corriente; ahora se le confió la labor de satisfacer sus necesidades prácticas más urgentes.

Junto con la ley contra el acaparamiento y la especulación, la ley del máximum general limitó drásticamente la libertad de empresa económica que había sido un aspecto central de los derechos que los revolucionarios habían declarado en 1789. Los empresarios patriotas al principio prometieron respetar la ley. «Me ha costado más de cincuenta mil libras», escribió uno. «Hice el sacrificio sin esfuerzo y sin arrepentirme, porque se necesitaba una crisis en el comercio para detener el continuo e ilimitado aumento de precios de los bienes más necesarios». El máximum de la administración pronto generó un floreciente mercado negro, ya que los clientes con dinero tentaron a los proveedores ofreciéndoles pagar más que el precio legal por los escasos productos básicos. Los trabajadores presionaron a los empleadores para que les pagaran más que la tasa oficial. Sólo la amenaza de que los infractores podrían ir a la cárcel como sospechosos o incluso tener que comparecer ante el Tribunal Revolucionario obligó a aceptar a regañadientes unos reglamentos que a menudo eran inviables. En su forma original, por ejemplo, la ley no tenía en

cuenta el coste del transporte de los productos básicos desde su lugar de origen, omisión que desalentaba el envío de mercancías a mercados distantes. Gran parte de la labor de los ejércitos revolucionarios creados después de la *journée* del 5 de septiembre de 1793 consistió en presionar a los campesinos para que vendieran sus cosechas al precio oficial e intimidar a los trabajadores para que hicieran su trabajo por lo que consideraban salarios inadecuados, actividades que aumentaron el resentimiento de la población contra la Revolución. «Se habla mal del ejército revolucionario por todo el campo», escribió un observador de la policía. «Los campesinos, ya molestos por el límite de precios, no están dispuestos a dejarlos entrar pacíficamente en sus casas y confiscar [...] los productos que han almacenado».[34]

Sin embargo, a pesar de todos sus defectos, la ley del máximum general permitió alimentar a la población urbana y a los ejércitos durante el invierno y la primavera de 1794. La amenaza que lanzó el gobierno revolucionario de castigar a los que se negaran a aceptar *assignats* detuvo el precipitado descenso del valor del papel moneda. Después de caer a menos del 30 por ciento de su valor nominal en septiembre de 1793, el *assignat* se elevó a más del 50 por ciento de ese valor en diciembre, incluso cuando la masa de dinero en circulación seguía aumentando. Con todas las demás demandas a las que se enfrentaban, los funcionarios locales tenían poco tiempo y energía para recaudar impuestos; la gran mayoría de los ingresos del gobierno procedían de la venta continuada de propiedades de la Iglesia y de los emigrantes, que prosiguió a un ritmo constante durante todo el Terror. Como los pagos se aceptaban en *assignats*, el gobierno obtenía mucho menos que el valor total de estas ventas, pero proporcionaban lo que el experto fiscal de la Convención, Pierre Cambon, llamó «recursos incalculables para la conquista de la libertad».[35]

Para dar a sus políticas una base legal, el 10 de octubre de 1793, los diputados de la Convención aprobaron un decreto que había presentado el montañés Saint-Just, miembro del Comité de Seguridad Pública, en el que declaraba que «el gobierno provisional de Francia es revolucionario hasta la paz». «En las circunstancias en las que se encuentra la República»,

proclamó Saint-Just, «la Constitución no puede entrar en vigor; se volvería contra sí misma. Protegería los ataques contra la libertad, porque no permitiría la violencia necesaria para detenerlos». El decreto consagró el poder del Comité de Seguridad Pública y le otorgó la autoridad para dirigir a ministros y generales. Un decreto más detallado, que se emitió dos meses después, el 4 de diciembre –o sea, el 14 frimario del año II, según el nuevo calendario revolucionario que la Convención había adoptado para entonces–, revirtió la descentralización del poder que había sido uno de los rasgos esenciales del proceso revolucionario. El decreto declaraba que «la Convención Nacional es el único centro motriz del gobierno» y convertía a los funcionarios locales electos en «agentes nacionales»; serían responsables de llevar a cabo las leyes aprobadas por la Convención, así como las órdenes emitidas por el Comité de Seguridad Pública.[36] Lo que la monarquía absoluta había soñado con poseer a través de su sistema de intendentes estaba ahora a disposición de su sucesor revolucionario: una burocracia nacional que, al menos en teoría, aplicaría inmediatamente las políticas del gobierno central en todo el país. Napoleón diría más tarde que el Terror había sido el único gobierno serio que Francia había tenido durante la década revolucionaria.

La necesidad de ganar la guerra proporcionó la principal justificación para la rápida expansión de los poderes del gobierno revolucionario. Aunque la retórica más acalorada de 1793 estaba dirigida contra los enemigos nacionales –los federalistas y los rebeldes de la Vendée– el grueso del ejército seguía desplegado contra los enemigos extranjeros. Afortunadamente para los franceses, los invasores mostraron mucha menos urgencia por continuar sus campañas que los revolucionarios por combatirlos. Después de expulsar a los franceses de Maguncia, los prusianos se centraron en su frontera oriental, uniéndose a los rusos en la partición de Polonia que debía poner fin al movimiento reformista en ese país. En el sudeste, los piamonteses luchaban por recuperar la provincia de Saboya que Francia había anexionado un año antes, y en el sur, las fuerzas

españolas tomaron algunas fortalezas fronterizas. Sin embargo, estos frentes estaban lejos de París: la verdadera amenaza para la República estaba en Bélgica. Aun siguiendo el manual de estrategias de la guerra del siglo XVIII, las fuerzas austriacas y británicas se movían lenta y cautelosamente, asediando posiciones fortificadas en lugar de buscar la destrucción de los ejércitos franceses en el campo de batalla. Además, los aliados dividieron sus fuerzas, y los británicos atacaron el puerto costero de Dunkerque, mientras que los austriacos enviaron el grueso de sus tropas a Maubeuge, a cientos de kilómetros de distancia.

En el otoño de 1793, los franceses causaron importantes derrotas a sus dos oponentes en el norte. El 6 de septiembre, la victoria del general Jean-Nicolas Houchard en Hondschoote puso fin al asedio de Dunkerque. Como en su más famosa retirada del mismo puerto en 1940, los británicos tuvieron que abandonar gran parte de su material y dejar el conflicto en el continente a sus aliados. En lugar de recibir elogios por su victoria, a Houchard lo detuvieron rápidamente por no continuar su avance con suficiente vigor. El 15 de noviembre, le cortaron la cabeza en la guillotina, destino que era una clara advertencia para otros generales republicanos. Mientras tanto, el 6 de octubre, el general Jean-Baptiste Jourdan derrotó a los austriacos en Wattignies, obligándolos a renunciar a su esfuerzo por capturar Maubeuge. Mientras los austriacos lograban retirarse en buen estado, su ofensiva había terminado por ese año, dando a los franceses un tiempo precioso para preparar las tropas nuevas que la leva en masa estaba reuniendo para futuros combates.

Una vez finalizadas, de momento, las operaciones militares, los revolucionarios emprendieron nuevas campañas destinadas no sólo a defender los logros de la Revolución, sino a cambiar el mundo. Ya a principios de agosto, en medio de la guerra civil y las calamidades militares, la asamblea había aplaudido un largo informe que presentaba un nuevo sistema de pesos y medidas, que ahora conocemos como el sistema métrico. Este sistema emanaba de la propia naturaleza: el metro se definía como una diezmillonésima parte del meridiano, o la distancia desde el polo terrestre hasta el ecuador; el litro era el volumen de un cubo definido en

términos métricos; y el gramo, el peso de una fracción específica de un litro de agua. Los creadores del sistema métrico lo vieron como universal, un «símbolo de la igualdad y un indicador de la fraternidad que debe unir a todos los hombres». El hecho de haber podido aprobar la reforma en medio de tantas otras preocupaciones fue importante para los revolucionarios. «La filosofía se complacerá algún día en contemplar [...] el genio de las ciencias y de la humanidad trascendiendo las tormentas de las revoluciones y las guerras», se dijeron a sí mismos los diputados.[37]

Otra campaña alteró el discurso cotidiano al eliminar la distinción entre la forma educada de dirigirse a los superiores sociales, *vous* (usted), y *tu* (tú), reservada para dirigirse a los íntimos, a los niños y a los de rango inferior. Una petición a la Convención prometía que si el *tutoiement* –el tuteo– se hacía obligatorio, «estos principios serán una demostración básica de nuestra igualdad, ya que ningún hombre, no importa quién sea, será capaz de pensar en distinguirse por llamar de "tú" a un *sans-culotte*». Hubo algunas objeciones: un periodista se preocupó de que los hombres se aprovecharían del nuevo uso para afirmar una familiaridad con las mujeres que «derribaría la última barrera entre los dos sexos».[38] Sin embargo, al igual que la sustitución de *monsieur*, un término de respeto, por el *citoyen* igualitario, el uso del «tú» se convirtió en algo corriente. El afán de igualdad también subyace en la ley aprobada en el 12 brumario del año II, que concede a los hijos ilegítimos partes iguales de la herencia de sus padres. Esta disposición se hizo retroactiva a 1789 unos meses más tarde, aunque exigía la reapertura de fincas que se habían liquidado hacía algunos años. La ley del 12 brumario prohibía los juicios de paternidad, partiendo del supuesto optimista de que ya no sería necesario presionar a los padres para que reconocieran a sus hijos.

La transición al calendario revolucionario fue más difícil que muchos de los otros cambios que introdujeron los revolucionarios, porque el ritmo del tiempo estaba muy vinculado a la observancia religiosa. El 20 de septiembre de 1793, el diputado Gilbert Romme presentó a la Convención el plan para introducir un nuevo calendario. Tenía por objeto mostrar explícitamente que el mundo había entrado en una nueva era. El informe de

Romme denunciaba el calendario gregoriano como el producto de «un pueblo ignorante y crédulo». Añadió: «Durante dieciocho siglos ha servido para anclar en el tiempo el progreso del fanatismo, la degradación de las naciones».[39] En el nuevo calendario, el año comenzaba el 22 de septiembre, que, por feliz coincidencia, como señaló Romme, era una fecha significativa tanto en la naturaleza, porque marcaba el equinoccio de otoño, como en la historia, ya que conmemoraba la proclamación de la República francesa en 1792, que se declaró retrospectivamente como el año I. El año se dividiría ahora en doce meses de treinta días, cada uno con tres semanas de diez días, o *décades* (décadas), y los días se dividirían en diez horas de cien minutos cada una, una idea que nunca llegó a calar. Entre las muchas ventajas del nuevo calendario, según sus defensores, estaba el que los trabajadores estarían ociosos sólo un día de cada diez en lugar de un día de cada siete, lo que supuestamente les permitiría obtener más ingresos. El cambio también significaba que la población dejaría de asistir regularmente a la iglesia, ya que el domingo dejaría de ser día de descanso.

Inicialmente, los meses, las *décades* y los días estaban simplemente numerados. Philippe Fabre d'Églantine, un diputado que había sido poeta y dramaturgo, ideó un elegante esquema que vinculaba los nuevos meses con el ciclo de las estaciones. Un sufijo común vinculaba los tres meses de cada parte del año y sus nombres evocaban el clima del momento. Así, los tres meses del otoño eran *vendémiaire* (vendimiario), el mes de la vendimia, o *vendange*; *brumaire* (brumario), el mes de las brumas, o nieblas de otoño, y *frimaire* (frimario), el mes de las heladas. Tras un invierno de *nivôse*, *pluviôse* y *ventôse* (nivoso, pluvioso y ventoso), los franceses saludarían a la primavera con sus meses de *germinal*, cuando brotaban las plantas; *floréal* (floreal), cuando florecían, y *prairial* (pradial), cuando empezaban a madurar. *Messidor* (mesidor, llamado así por la cosecha) y *thermidor* (termidor, por el calor) saludaban a los cultivos en maduración en los campos que estarían listos en *fructidor*, el mes de los frutos. Las estaciones en el esquema de Fabre eran las de la Francia europea: los ciudadanos negros recién emancipados del Saint-Domingue tropical tenían que adoptar meses nombrados para el frío y la nieve que no correspondían a su clima.

Como los revolucionarios no podían alterar el hecho de que la naturaleza había hecho que el año solar durara 365 días, cada año terminaba con cinco «días *sans-culottide*», más un día adicional en los años bisiestos, cada uno de los cuales sería una fiesta dedicada a una virtud moral que fortalecía a la República.

Convencer a la población de que adoptara el calendario revolucionario se convirtió en una de las principales preocupaciones de los revolucionarios, un esfuerzo que no acabaría hasta el año XIV, cuando Napoleón decretó el regreso al calendario gregoriano. El uso de las nuevas fechas era obligatorio en todos los documentos legales. Los entusiastas del nuevo calendario lo vieron no sólo como una forma más simple, más racional y, gracias a Fabre d'Églantine, más poética, de llevar la cuenta del tiempo, sino como una forma de que los ciudadanos reafirmaran su compromiso con la República en actos de la vida cotidiana. Por la misma razón, los opositores a la Revolución se aferraron al viejo calendario y especialmente al ritual de la observancia del domingo como una forma de demostrar su hostilidad al nuevo régimen. La guerra por el calendario se convirtió así en uno de los campos de batalla más disputados en la lucha revolucionaria.

La introducción del calendario revolucionario coincidió con una repentina e intensa campaña para desmantelar la Iglesia católica por completo. Para muchos militantes revolucionarios, esta campaña de descristianización fue la culminación lógica de la crítica de la Ilustración a la religión revelada y del programa revolucionario que insistía en la lealtad exclusiva a la nación. Aunque la Constitución de 1793 había prometido la libertad de culto, la presión sobre la Iglesia se había ido intensificando a lo largo del año. Los revolucionarios exigieron que los sacerdotes demostraran su fiabilidad renunciando a sus votos «antinaturales» de castidad: ahora debían casarse. Una ley aprobada en julio de 1793 prohibía a los obispos castigar al clero que lo hiciera. Los funcionarios locales cerraron las iglesias o las

convirtieron en «templos de la razón» para la realización de ceremonias civiles.

Diputados en misión, como Joseph Fouché, un antiguo sacerdote oratoriano al que habían enviado a la Nièvre, que más tarde se convirtió en el temido ministro de Policía de Napoleón, promovieron la política antirreligiosa con ahínco. Con el apoyo de los militantes locales, cerró iglesias e hizo colocar carteles en los cementerios diciendo a los dolientes: «La muerte es un sueño eterno», una reprimenda directa al dogma cristiano de la eternidad del alma. En la catedral de Reims, donde se había coronado tradicionalmente a los reyes de Francia, el diputado Philippe Ruhl destruyó el frasco que contenía el aceite sagrado, supuestamente de la época de Clodoveo, con el que se les había ungido a todos. Los sacerdotes, las monjas y las iglesias se convirtieron en objetivos a perseguir. «Ordené que todos los curas se casaran», informó un comisario revolucionario. «Unos veinte prometieron hacerlo en dos meses y tengo autoridad para encontrarles esposas». En total, unos dieciocho mil párrocos, alrededor de un tercio del total, renunciaron oficialmente a su condición durante la campaña de descristianización, y unos seis mil se casaron.[40]

En París, el procurador de la Comuna, Chaumette, fue un partidario igualmente entusiasta de la descristianización. Junto con sus aliados, particularmente Hébert, el autor del *Père Duchêne*, cuya influencia estaba en su apogeo, Chaumette organizó una serie de eventos para marcar lo que los descristianizadores vieron como su victoria histórica sobre la superstición. Acompañado por Chaumette, Jean-Baptiste Gobel, el obispo constitucional de París, anunció a la Convención que abandonaba sus funciones religiosas. El único que tuvo la valentía de oponerse públicamente a esta tendencia fue Grégoire, un jacobino de toda la vida, pero también católico convencido. «Ahora me acosan para que presente una abdicación que no obtendrán de mí», dijo; en un acto de desafío, siguió llevando sus ropas eclesiásticas a la Convención incluso después de que se prohibieran en los lugares públicos.[41]

Para consolidar lo que él consideraba una victoria sobre la superstición, Chaumette presidió una precipitada Fiesta de la Razón organizada en el

corazón simbólico del catolicismo parisino, la expropiada catedral de Notre Dame. El *Père Duchêne* describió alegremente la escena para sus lectores: «Los piadosos, hombres y mujeres, se entristecieron al ver que extraían a sus santos de sus nichos […]. En lugar de ese altar o, mejor dicho, de ese escenario para charlatanes, se había construido un trono para la libertad. En lugar de una estatua muerta, había una imagen viva de esa divinidad, una obra maestra de la naturaleza [...], una mujer encantadora, hermosa como la diosa que representaba». Después de la ceremonia, la multitud llevó a su «diosa» a la Convención, armada con una pica y adornada con el sombrero rojo de la libertad, donde se sentó junto al presidente de la asamblea. Mientras tanto, en las calles, «se presentaban las más ridículas farsas en cada barrio», escribió la inglesa Helen Maria Williams. «Las damas revolucionarias y las sacerdotisas de la Razón se habían santificado a sí mismas con la ropa de la Virgen».[42]

El violento asalto de los descristianizadores a la Iglesia no fue simplemente una extensión de la campaña de los *philosophes* contra la religión organizada. También alimentó el anticlericalismo popular que venía de lejos, de hombres corrientes como Jacques Ménétra, que estaban en contra de los privilegios del clero y su interferencia en la vida de la gente de a pie. Las formas habituales de burla que se habían utilizado para ridiculizar a los maridos cornudos y otros que se saltaban las normas comunitarias, como pasear por la ciudad a lomos de un asno, se aplicaban ahora para ir contra la Iglesia. En el departamento de Loir-and-Cher se pudo ver un carro con «los restos de la monarquía y la superstición; tiraba de él un burro ataviado con un sobretodo y una cinta para el cuello, que llevaba la pancarta: “Soy más útil que un rey”». Después de asistir a una Fiesta de la Razón en un pequeño pueblo, un observador de la policía que apoyaba personalmente esta política, sin embargo, hizo una astuta observación sobre los límites del apoyo popular a la misma. En público, «el pueblo da pasos gigantescos hacia la abolición de los prejuicios y las supersticiones religiosas», comentó, pero en su vida privada, «al no tener nada que sustituya al culto que acaban de derribar, si algún accidente, alguna desgracia les ocurre, piensan que es un castigo del cielo». En una parroquia,

habían muerto cinco recién nacidos en dos *décades*. «Eso fue suficiente para perturbar las mentes, aterrorizar a las madres, y hacer que echaran la culpa de esta coincidencia a la falta de bautizos». Otro funcionario señaló que el cierre de las iglesias enfurecía tanto a las mujeres mayores –que a menudo «aprovechaban el largo viaje [a misa] para intercambiar chismes con otras señoras cotillas»–, como a las jóvenes, que esperaban con ilusión los bailes del domingo. Estos comentarios ayudan a explicar por qué las mujeres a menudo seguían más comprometidas que los hombres con su fe.[43]

El movimiento de descristianización tenía críticos incluso entre los partidarios de la Revolución. En el sur, donde los invasores españoles se hacían pasar por defensores de la Iglesia, las autoridades locales advirtieron a la Convención que «si el pueblo [...] oye a los apóstoles de la Revolución tratando de convencerlos de que todas las religiones se basan en fábulas o en conceptos absurdos [...] se rebelarán contra un nuevo sistema que parece obligarlos a renunciar a su religión y a sus creencias religiosas». En la Convención, Robespierre se opuso al movimiento, diciendo: «Debemos tener cuidado de no dar a los contrarrevolucionarios hipócritas, que buscan encender la llama de la guerra civil, ningún pretexto que pueda justificar sus calumnias». Instó a los diputados en misión a no dar la impresión de que «la guerra se hace contra la propia religión».[44] El desacuerdo entre los descristianizadores radicales y la mayoría de los miembros del Comité de Seguridad Pública dejaba ver una tensión creciente entre populistas como Hébert y Chaumette, por un lado, y, por otro, los dirigentes de los montañeses de la Convención, que estaban decididos a mantener el extremismo bajo control.

A pesar de las tensiones sobre la campaña de descristianización, los revolucionarios se mantuvieron unidos en la convicción de que había que aplastar las revueltas internas que amenazaban la Revolución. El 9 de octubre, Lyon se rindió, poniendo fin a la más grave de las sublevaciones federalistas. El 17 de octubre, los ejércitos republicanos, tras sufrir una serie

de humillantes derrotas en la Vendée a lo largo del verano, consiguieron finalmente una importante victoria en Cholet. En lugar de retirarse hacia el sur, hacia las zonas de donde procedían la mayoría de sus combatientes, la principal fuerza rebelde, acompañada por miles de mujeres y niños, cruzó de forma imprevista el río Loira y comenzó una marcha desesperada hacia el norte; su esperanza era llegar a un punto de la costa donde pudieran recibir apoyo de los británicos. Los sesenta mil participantes en esta marcha superaban en número a las unidades republicanas dispersas por la región; no las detuvieron hasta que rechazaron su intento de capturar el puerto normando de Granville, cerca de la famosa abadía de Mont-Saint-Michel, el 14 de noviembre. Una vez aniquilada la amenaza de una intervención extranjera en el oeste de Francia, los republicanos podían centrar sus esfuerzos en castigar a los que habían participado en el levantamiento.

El castigo de los enemigos de la Revolución era una de las exigencias más duras de los radicales de París. Querían que las unidades del ejército revolucionario incorporaran tribunales revolucionarios y estuvieran equipadas con guillotinas móviles, para poder ejecutar inmediatamente a los sospechosos que fueran condenados. Los comités de la Convención temían que el proceso de represión se descontrolara y se resistieron a estas demandas; sin embargo, aprobaron una serie de juicios políticos de alto nivel en París que captaron la atención pública durante todo el otoño de 1793. La primera víctima de renombre fue María Antonieta, a quien muchos revolucionarios llamaban simplemente «la viuda Capeto». Tras la ejecución de Luis XVI en enero, ella había permanecido en la prisión de la Torre del Temple. En el acta de acusación que presentó el fiscal del Tribunal Revolucionario, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, el 14 de octubre de 1793, se daba rienda suelta al odio misógino que había perseguido a la reina desde el momento en que su matrimonio se hizo realidad. Se la acusó de haber sido, «durante toda su estancia en Francia, la maldición y el parásito de los franceses», de haber celebrado «reuniones conspirativas [...] al amparo de la noche» en las que se habían tramado todas las calamidades de la Revolución y de haber enseñado a Luis el «peligroso arte del disimulo». Desde su exilio en Londres, Madame de Staël insistió en que el destino de

la reina concernía a todas las mujeres francesas: «Su imperio está condenado si la ferocidad prevalece, su destino está sellado si sus lágrimas fluyen en vano». Hébert aseguró que María Antonieta había enseñado a su hijo a masturbarse y a menudo había compartido la cama con él. Esto justificaba el temor que tenía De Staël de que los ataques a la reina reforzarían los prejuicios contra su sexo. María Antonieta ganó un momento de simpatía cuando apeló a las mujeres del público, diciendo que «la naturaleza se niega a responder a semejante acusación contra una madre».[45]

La mayoría de los detalles citados por los testigos para demostrar la participación de la reina en la oposición a la Revolución eran irrelevantes o engañosos; en ausencia de las cartas que había escrito a la corte austriaca y a su amante Fersen, no existían pruebas verdaderamente condenatorias de sus esfuerzos por conseguir apoyo extranjero. Igual que el rey en su juicio, no se atrevió a admitir que ella había entendido que su deber era hacer todo lo posible para preservar la monarquía, incluso si significaba engañar a los políticos revolucionarios con los que trataba y apelar secretamente a otros monarcas para invadir Francia. El veredicto nunca se puso en duda y el 17 de octubre de 1793, la reina, vestida con un simple vestido blanco que había elegido deliberadamente como signo de su inocencia, fue camino a la guillotina. En su habitual estilo vengativo, el *Père Duchêne* de Hébert instó a los *sans-culottes* a silenciar a cualquiera que mostrara la más mínima simpatía por «la abominable furia que quiere encadenarte».[46]

El juicio de María Antonieta apenas había terminado cuando el Tribunal Revolucionario se ocupó del caso de los girondinos expulsados de la Convención el 2 de junio. Había varios, entre los que estaban el filósofo Condorcet y el exministro Roland, que seguían en la clandestinidad, pero a otros veintidós, Brissot y Vergniaud entre ellos, los llevaron ante el tribunal. En el juicio surgieron problemas que el de la impopular reina no tuvo. Enviar a representantes electos del pueblo a la guillotina sentaba un precedente peligroso, incluso aunque los propios girondinos hubieran sido los primeros en intentarlo cuando hicieron juzgar a Marat el abril anterior. Utilizando tácticas que copiarían los regímenes dictatoriales en los tiempos modernos, André Amar, el portavoz del Comité de Seguridad General, hizo

responsables colectivamente a todos los miembros del grupo de cualquier cosa que hubiera hecho alguno de ellos; sacó los hechos fuera de contexto para crear una apariencia de culpabilidad, y pintó todo lo que los acusados habían hecho en los tres años anteriores como parte de una conspiración planeada desde hacía mucho tiempo para servir a los intereses del rey y de los enemigos extranjeros de Francia. Pero el peor crimen de los girondinos, insistió Amar, fue su hipocresía: «Han enseñado a todos los enemigos de la Revolución el execrable arte de asesinar la libertad adoptando sus lemas».

En tanto que lección política para la población, no se puede decir que el juicio fuera un éxito. En el Club Jacobino, Hébert se quejó de que la publicación de las actas daba la impresión de que «no hay pruebas contra el acusado». Alarmado por el hecho de que la disputa en la sala del tribunal amenazara con prolongarse indefinidamente, el fiscal Fouquier-Tinville apeló a la Convención para que cambiara las reglas y permitiera que el jurado declarara que había oído suficientes pruebas para emitir un veredicto. Los diputados siguieron su consejo, pero al principio los jurados se resistieron. Al final, sin embargo, los veintidós acusados fueron condenados a muerte. «Un gran movimiento estalló entre los condenados», afirmaba el informe oficial. «Muchos gritaron "¡Viva la República!". Otros insultaron a los jueces».[47] Vergniaud supuestamente dijo: «La Revolución, como Saturno, devora a sus hijos». A la manera clásica romana, el diputado Charles Valazé logró apuñalarse hasta la muerte; el tribunal ordenó que trasladaran su cuerpo al lugar de las ejecuciones para enterrarle junto con los de los demás acusados.

Sabiendo que tenían pocas posibilidades de escapar a su destino, varios de los girondinos pasaron su tiempo en prisión o en la clandestinidad escribiendo sus memorias. Brissot recordó la educación juvenil que le había imbuido de «un amor a la independencia, un odio al despotismo», y que le había llevado a preguntarse por qué Luis XVI, nacido el mismo año que él, «estaba en el trono, mientras que yo nací hijo de un cocinero». Madame Roland encontró consuelo en el pensamiento de que algún día su historia «podría entretener a algún desafortunado cautivo, que olvidará su propia situación al apiadarse de la mía». Tal vez el testimonio más conmovedor del

grupo fue el de Condorcet, que logró mantenerse oculto durante el invierno de 1793-1794. En sus últimos meses, antes de que le detuvieran y se suicidara, se dedicó no a una memoria personal, sino a un *Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano*, en el que relataba el surgimiento de la civilización y reafirmaba su creencia de que «llegará el día en que el sol brillará, en toda la tierra, sobre los hombres libres, que no conocerán otro amo que su razón».[48] Como la afirmación de Ana Frank ciento cincuenta años después en su diario de que «a pesar de todo, sigo creyendo que la gente es básicamente buena de corazón», el optimismo de Condorcet ganó la simpatía de la posteridad.

Los girondinos no fueron los traidores que los montañeses pintaron en su juicio. Habían apoyado siempre la democracia revolucionaria. Brissot y Condorcet merecen un reconocimiento por su dedicación a la abolición de la esclavitud y los prejuicios raciales, y Condorcet fue un elocuente defensor de la igualdad de la mujer. Sin embargo, tenían cierta responsabilidad por su propio destino. Su defensa de la guerra en abril de 1792, su lealtad a Dumouriez y, sobre todo, su actitud inconsistente hacia el rey, pusieron en duda su juicio y honestidad. Su intento de negociar con Luis justo antes de la sublevación del 10 de agosto de 1792 y su posterior intento de evitar su ejecución, después de votar para condenarle por traición en enero de 1793, hicieron que otros sospecharan que vacilaban en su lealtad a la Revolución. Sus incendiarios ataques verbales a los montañeses y a los *sans-culottes* de París en las semanas previas a su derrota el 31 de mayo de 1793, se sumaron a su impopularidad, y las acciones de sus partidarios en las provincias los dejaron vulnerables a la acusación de que estaban dividiendo el país en un momento en que se enfrentaba a una invasión extranjera y a una guerra civil. En sus apasionados llamamientos a la guerra, el propio Brissot había acogido con satisfacción el hecho de que alentaría la caza de traidores; había contribuido a crear un ambiente en el que él y sus amigos se encontraban en esa categoría.

Las sentencias sobre Brissot y sus colegas se cumplieron el 31 de octubre de 1793. Los prisioneros se abrazaron y cantaron desafiantes «La Marsellesa»; mientras tanto, la multitud hostil gritaba «abajo los traidores».

Fue la mayor ejecución en masa que se había realizado hasta entonces con la guillotina, pero los verdugos ya estaban bien entrenados en su oficio: se despacharon a los veintiún girondinos y otros once hombres en 38 minutos. Rosalie Jullien, cuyo marido era un diputado montañés, escribió a su hijo que habían exterminado justamente a los girondinos «por la espada de la ley». Le preocupaba, sin embargo, que los revolucionarios perdieran «nuestra humanidad y el sentido de la compasión que distingue al hombre del resto de los animales». El baño de sangre podría haber sido mucho peor: Robespierre había intervenido personalmente para evitar que se juzgara a otros 73 diputados con ellos. Los habían encarcelado a todos después del día 5 de septiembre por firmar una petición el junio anterior a favor de sus compañeros detenidos. «No busquemos multiplicar el número de culpables», dijo a los jacobinos. «Que caigan las cabezas de la viuda del tirano y los jefes de la conspiración, pero después de estos ejemplos necesarios, ahorremos sangre».[49]

A pesar de la promesa de Robespierre, el juicio de los girondinos fue seguido rápidamente por una serie de enjuiciamientos de otras figuras políticas prominentes. Madame Roland, que estaba acusada de ser el cerebro de la conspiración de los girondinos, hizo planes con un amigo cercano para decir unas palabras ingeniosas camino a la guillotina: «¡Oh! ¡Libertad! ¡Qué crímenes se cometen en tu nombre!». A Olympe de Gouges la juzgaron porque había redactado panfletos y carteles en los que exigía que se permitiera a los votantes decidir si querían una república o una monarquía, lo que constituía, a ojos de la fiscalía, la prueba de que ella cuestionaba el respaldo del pueblo soberano a la Constitución. Cuando pidió un abogado, los fiscales se burlaron de la mujer que había exigido que los miembros de su sexo tuvieran los mismos derechos que los hombres, diciéndole que tenía «suficiente espíritu para defenderse».[50]

Bailly, el exalcalde, que había dirigido a los diputados en el juramento del Juego de Pelota el 20 de junio de 1789, estuvo de pie temblando durante horas bajo la lluvia de noviembre mientras se montaba la guillotina en el Campo de Marte, lugar de la matanza de julio de 1791 que él ordenó y por la que se le condenaba ahora. Cuando uno de sus guardias le acusó de

temblar de miedo, respondió: «Tengo frío, amigo mío». A Barnave, que había defendido con tanta fuerza el restablecimiento del rey en 1791, le acusaron, entre otras cosas, de haber destruido las colonias, cargo que también figuraba en la acusación contra Brissot. Barnave objetó que ambos no podían ser culpables de ese crimen, ya que habían abogado por políticas opuestas, pero el tribunal lo ignoró. El primo del rey, el duque de Orleans, elegido en la Convención como diputado de los montañeses en septiembre de 1792, había votado a favor de la ejecución de Luis XVI, pero ahora era víctima de las acusaciones de que había conspirado para conseguir el trono para sí mismo. A Madame du Barry, la notoria amante de Luis XV, la sacaron de su retiro y la juzgaron como símbolo de la corrupción del antiguo régimen; a diferencia de la mayoría de las víctimas, que se esforzaron por mostrar coraje en sus últimos momentos, ella gritó de terror mientras la arrastraban al patíbulo.

Los juicios y las ejecuciones de personajes destacados en París fueron semejantes a las medidas despiadadas contra los miles de personas corrientes que habían participado en las revueltas contra el gobierno montañés. El 12 de octubre de 1793, tres días después de la rendición de la ciudad rebelde de Lyon, la Convención emitió un decreto espeluznante que anunciaba que se iba a erigir un monumento donde se había levantado la ciudad con la inscripción: «Lyon hizo una guerra contra la libertad; Lyon ya no existe»; lo que quedaba del asentamiento se llamaría Ville-Affranchie (Ciudad Liberada).[51] Collot d'Herbois y Fouché, dos diputados en misión, decidieron que había que convertir las medidas contra los rebeldes derrotados en un castigo ejemplar para los enemigos de la Revolución, y para hacerlo planearon una espectacular ejecución en masa en Lyon a principios de diciembre, en la que encadenaron a varios cientos de víctimas y las mataron a cañonazos. La idea era golpear a los enemigos de la República con la fuerza de un rayo, pero el resultado fue demasiado espantoso incluso para los verdugos. Los soldados tenían que caminar entre una masa de cuerpos sanguinolientos para rematar a docenas de víctimas

heridas con sables y bayonetas. Los montañeses volvieron a métodos menos teatrales de ejecución, la guillotina y el pelotón de fusilamiento, pero se ejecutó a unos mil novecientos lioneses por su participación en el levantamiento. De acuerdo con el decreto de la Convención, se demolieron las fachadas de las casas de los habitantes más ricos de la ciudad, para que sirviera de recordatorio visible de su castigo.

Se adoptaron medidas aún más duras contra los insurgentes de la Vendée. Un decreto del 5 de noviembre de 1793 ordenaba la destrucción completa de las ciudades que albergaban a sus combatientes y un agente del Comité de Seguridad Pública propuso expulsar a toda la población local y reasentar en la región a buenos patriotas de otras partes de Francia. Abrumados por el número de rebeldes que habían capturado, las autoridades republicanas llevaron a cabo ejecuciones masivas y dejaron morir a cientos de personas por enfermedades hacinadas en las cárceles. En Nantes, la ciudad más grande de la región, el diputado de la Convención Jean-Baptiste Carrier supervisó una serie de atrocidades en las que se ató a los prisioneros, entre ellos mujeres y niños, se los obligó a subir a barcos sobrecargados, que remolcaron hasta el Loira y los hundieron deliberadamente, para ahogar a las víctimas. Al parecer, las peores acciones las llevaron a cabo los miembros del ejército revolucionario sin órdenes específicas de Carrier, pero éste defendió lo que denominó *déportations verticales* (deportaciones verticales).[52]

Al igual que las matanzas de septiembre en París, los *noyades* (ahogamientos) en Nantes se convirtieron en parte inextricable de la leyenda negra de la Revolución. Así como las operaciones de las *colonnes infernales* (columnas infernales) comandadas por el general Louis-Marie Turreau, a quien pusieron al mando de las fuerzas que tenían la orden de arrasar el centro de la Vendée a principios de 1794. «Vamos a traer fuego y llamas, el fusil en una mano y la antorcha en la otra. Hombres y mujeres, a todo se le dará muerte», escribió a su familia el soldado republicano François-Xavier Joliclerc.[53] A medida que las columnas de Turreau avanzaban por el campo, iban matando a todos los habitantes de los pueblos, incluso a los partidarios de la Revolución, quemaban granjas y

casas, y sacrificaban el ganado. La devastación que causaron fue contraproducente: los campesinos que podrían haberse reconciliado a regañadientes con la vida bajo la República se vieron impulsados, en cambio, a una resistencia desesperada. Aunque los rebeldes de la Vendée ya no podían reunir grandes ejércitos, como habían hecho en la primavera y el verano de 1793, ellos y los chuanes, bandas de campesinos rebeldes de Bretaña, continuaron ocupando a considerables fuerzas republicanas durante todo el año 1794.

Al mismo tiempo que ponía todo su empeño en las regiones rebeldes del país, el gobierno revolucionario se esforzó por ampliar el control que ejercía sobre la capital. El decreto que Danton había presentado el 5 de septiembre puso fin a las sesiones permanentes de las asambleas seccionales de París y redujo en gran medida su potencial para movilizar protestas. Jacques Roux y otros portavoces *enragés* se encontraban ahora en la cárcel –Roux se suicidaría en enero de 1794– y el gobierno aprovechó un enfrentamiento entre las militantes de la Sociedad de Mujeres Republicanas Revolucionarias y las vendedoras del mercado de alimentos de Les Halles, en París, para lanzar una campaña contra las activistas. Tras la aprobación de la ley del máximum general en septiembre, las mujeres miembros de la Sociedad se habían enfrentado a las mujeres del mercado que evadían las normas de la ley y se negaban rotundamente a llevar las escarapelas tricolores patrióticas. Un informe policial afirmaba que la presión de los militantes para que las mujeres se pusieran las escarapelas no era más que el principio. «Cuando tengan la escarapela, dicen, exigirán tarjetas cívicas, querrán votar en nuestras asambleas, compartirán los puestos administrativos con nosotros».[54]

En respuesta a estas quejas, la Convención abordó la cuestión de la participación de la mujer en la política. Amar, el portavoz del Comité de Seguridad General, insinuó que las Mujeres Republicanas Revolucionarias estaban creando problemas a fin de interrumpir el juicio de los girondinos; pensaba que no poseían «la fuerza moral y física» para ejercer los mismos derechos que los hombres. Un diputado se opuso, preguntando: «A menos que vayas a cuestionar si las mujeres son parte de la especie humana,

¿puedes quitarles este derecho que es común a todos los seres pensantes?». Sin embargo, la Convención votó a favor de prohibir los clubes políticos de mujeres. Cuando las dirigentes de las Mujeres Republicanas se dirigieron a la Comuna, cuyas iniciativas radicales habían apoyado tantas veces durante los meses anteriores, su líder, Chaumette, denunció el activismo de las mujeres como contrario a la naturaleza. «¿Desde cuándo se permite renunciar al sexo? […] ¿Es a los hombres a quienes la naturaleza confía los cuidados domésticos? ¿Nos ha dado pechos para alimentar a nuestros hijos?».[55] Por si aquellas a quienes se dirigía no veían la seriedad de su advertencia, les recordó las recientes ejecuciones de Madame Roland y Olympe de Gouges. Ante semejante oposición, las mujeres que habían intentado aplicar los principios de los revolucionarios para reclamar la igualdad de derechos se vieron obligadas a guardar silencio.

15

El punto álgido del Terror

Enero-julio de 1794

El quinto día del mes revolucionario de nivoso, del año II, fue el 25 de diciembre de 1793, día de Navidad, según el antiguo calendario. Para los diputados de la Convención Nacional era un día de trabajo cualquiera, salvo porque Maximilien Robespierre pronunció un discurso en el que expuso «los principios del gobierno revolucionario». Pocos consideraban a Robespierre un orador que lograra embaucar a las masas. Normalmente, cuando los miembros del Comité de Seguridad Pública tenían algo que comunicar a la Convención, Barère hablaba por ellos: su altisonante elocuencia le valió el apodo de «el Anacreonte de la Guillotina», en referencia al famoso poeta griego. Robespierre no tenía la poderosa presencia física de Mirabeau o Danton. Tenía una voz aguda, con poca proyección, y necesitaba gafas para ver sus textos, que leía lenta y cuidadosamente, para asegurarse de que los periodistas de la sala tuvieran tiempo de captar sus palabras. Ni siquiera parecía un verdadero revolucionario. En el otoño de 1793, la mayoría de los políticos imitaron la apariencia y el discurso de los *sans-culottes*, se dejaron el pelo largo, se vistieron a la manera de la gente de la calle y adoptaron el lenguaje crudo del *Père Duchêne* de Hébert. Robespierre seguía llevando una peluca empolvada y llevaba «un traje de otros tiempos», en palabras de Jean-Victor Colchen, del Ministerio de Asuntos Exteriores. «Me llamaba "*monsieur*" en lugar de "ciudadano", no empleaba el familiar "tú"», informó Colchen.[1]

Sin embargo, cuando Robespierre pronunciaba uno de sus discursos cuidadosamente pensados en la Convención o en el Club Jacobino, sus colegas sabían que tenían que prestar atención. En los cuatro años y medio

que habían pasado desde que llegó a los Estados Generales como diputado de la ciudad provincial de Arras, Robespierre había ejercido una autoridad moral que no era comparable con la de ningún otro líder revolucionario. Una vez nombrado miembro del Comité de Seguridad Pública, se convirtió en un líder, no un dictador, sino la persona que mejor supo encontrar el delicado equilibrio que preservaría la autoridad del gobierno y al mismo tiempo satisfaría la presión pública que exigía medidas firmes para proteger la Revolución.

El momento que había elegido Robespierre para su discurso era favorable. Seis días antes, el 19 de diciembre, las fuerzas de la Convención habían retomado Toulon, el puerto naval del Mediterráneo que se había rendido a los británicos a finales de agosto. La victoria se debió en gran medida a la energía del oficial de artillería de veinticuatro años, Napoleón Bonaparte, un joven engreído que no dudó en escribir directamente al Comité de Seguridad Pública para promover su plan para la campaña: alejaría a la flota enemiga apoderándose de un promontorio clave desde el cual los cañones franceses podrían dominar el puerto. Entre los que quedaron impresionados por las habilidades de Bonaparte estaba el hermano menor de Robespierre, Augustin, un diputado en misión, quien dijo a su hermano mayor que el joven oficial era un hombre cuyas «virtudes serían trascendentales».[2]

Sin embargo, Robespierre no elogió a Napoleón Bonaparte ni a ningún otro individuo en su discurso. En su lugar, utilizó el «milagro de Toulon» para destacar la importancia que tenía el gobierno revolucionario que había proclamado su compañero Louis-Antoine de Saint-Just en octubre. También trazó el camino que seguiría el comité en el uso de los poderes que le habían sido otorgados tres semanas antes por el decreto del 14 frimario del año II. «La teoría del gobierno revolucionario es tan nueva como la Revolución que la concibió», anunció Robespierre. Los hombres de 1789 no tenían ni idea de la magnitud de la tarea en la que se embarcaban; pensaron que proclamar los principios de libertad e igualdad sería suficiente para asegurar su triunfo. Sin embargo, en 1793, había quedado claro que la

sustitución de un orden político y social por otro basado en principios diferentes requería atravesar el fuego de la Revolución. «La Revolución es la guerra que libra la libertad contra sus enemigos», proclamó Robespierre, y esa guerra no puede estar limitada por leyes ordinarias. El objetivo del gobierno revolucionario era llegar a ser innecesario después de dar a la nación una constitución firme, «la que corona el edificio de la libertad una vez que se ha obtenido la victoria y la nación está en paz». La visión de Robespierre acerca de cómo sería una buena sociedad dotada de «libertad cívica» no había cambiado desde 1789. «Bajo un gobierno constitucional se requiere poco más que proteger al individuo contra los abusos del Estado», insistió. Pero para llegar a ese punto, «el gobierno revolucionario está obligado a defender al propio Estado contra las facciones que lo asaltan por todos los flancos. El gobierno revolucionario debe a los buenos ciudadanos la plena protección del Estado; a los enemigos del pueblo sólo les debe la muerte».[3]

¿Había llegado el momento de regresar al gobierno constitucional tras las recientes victorias de los ejércitos revolucionarios en Hondschoote, Wattignies y Toulon? «El barco de la Constitución no se había construido para que estuviera siempre navegando», admitió Robespierre, «pero ¿debemos botarlo cuando azota la tormenta?». Sólo los enemigos de la Revolución, afirmaba, querían que la Constitución entrara en vigor inmediatamente. Nadie que comprendiera la situación política de París podía malinterpretar el mensaje del resto del discurso de Robespierre, en el que esbozaba la política que él y el Comité de Seguridad Pública pretendían seguir. El gobierno revolucionario, prometió, no permitiría la «anarquía ni el desorden», ni un «gobierno arbitrario». El desafío que tenía por delante era «navegar entre los arrecifes gemelos de la debilidad y la temeridad, el moderantismo y la exageración: el moderantismo, que es a la moderación lo que la impotencia a la castidad, y la exageración, cuyo parecido con la energía es como el de la hidropesía con la buena salud». Entre el público había hombres para quienes las palabras de Robespierre sonaban como una advertencia: durante más de un mes, algunos diputados habían estado

pidiendo el fin de las formas más duras del Terror, mientras que otros habían insistido en que era necesario hacerlas aún más feroces.

Al posicionar al Comité de Seguridad Pública y a sí mismo entre los dos extremos que condenaba, Robespierre se enfrentó a otro temor: dos meses antes, a mediados de octubre, Philippe Fabre d'Églantine, el hombre que había dado al calendario revolucionario su brillo poético, había buscado a Robespierre y a Saint-Just. Fabre, amigo de Danton, les hizo jurar que guardarían el secreto antes de acusar a varios personajes destacados de la política revolucionaria de ser parte de un «complot extranjero». Les aseguró que estaba financiado por los británicos y los austriacos, con el objetivo de destruir la Revolución desde dentro, proponiendo medidas cada vez más extremas y enfrentando a los buenos patriotas entre sí. Acusaciones como éstas a menudo tienen fundamentos reales, por supuesto, ya que las naciones siempre encuentran maneras ingeniosas de entrometerse en la política de los demás. Pero Fabre no tenía pruebas certeras, sus incriminaciones estaban pensadas para aprovecharse de la debilidad que tenía Robespierre por las teorías conspiranoicas, y sembrar la máxima confusión. Dio el nombre de Anacharsis Cloots, barón prusiano y diputado de la Convención, y de varios extranjeros más que habían participado activamente en el Club Radical de los Cordeliers; se les consideraba partidarios de Hébert, el «Père Duchêne». Además, lanzó sospechas sobre alguien del propio Comité de Seguridad Pública, Hérault de Séchelles, el único miembro relevante del comité que tenía orígenes nobles y compartía casa con un austriaco, Pierre-Jean Berthold Proli, que también estaba en la lista de Fabre.

Denunciar a los enemigos de la Revolución era el deber de todo buen patriota, pero los motivos de Fabre estaban lejos de ser puros. Él mismo estaba en el centro de un plan para sacar provecho de los cambios que estaban ocurriendo en la nación durante la Revolución: se trataba de vender los activos de las empresas monopolistas del Estado que se habían constituido bajo la monarquía. Fabre había redactado personalmente un

decreto que liquidaba la Compañía de las Indias que Calonne había establecido a mediados de la década de 1780, y que le había permitido embolsarse miles de libras. Al incitar a Robespierre y a Saint-Just a iniciar una caza de conspiradores en las filas de los militantes revolucionarios, esperaba desviar las sospechas que recaían sobre él hacia otras personas.

Robespierre mantuvo en secreto los detalles de las acusaciones de Fabre, pero los rumores sobre los políticos pusieron nerviosos a muchos. Uno de los que estaban preocupados era el diputado François Chabot, un exmonje y antiguo miembro del Club de los Cordeliers que había llamado la atención al casarse con una hermana de los Frey, ricos banqueros judíos austriacos. Al hacerlo, había adquirido una dote impresionante. Muchos sospechaban que, en realidad, era dinero que habían ganado gracias a la corrupción. En un esfuerzo por protegerse, Chabot, igual que había hecho Fabre, fue a contar historias de conspiraciones a Robespierre: sacó a la luz el complot para malversar dinero de la Compañía de las Indias y culpó a los monárquicos que hacían lo posible por desacreditar a la Convención. Aunque había más pruebas de la denuncia de Chabot que de las de Fabre –incluso le mostró a Robespierre un paquete de *assignats* que, según decía, le habían dado para sobornarle– los contactos, demasiado obvios, que tenía Chabot con extranjeros ricos le jugaban en contra. Lo detuvieron y la maraña de acusaciones envenenó aún más la atmósfera política. Cada vez era más difícil saber en quién confiar.

Muchos de los hombres bajo sospecha eran socios de Danton, el más célebre de los antiguos Cordeliers de la Convención, cuya reputación tampoco se podía decir que fuera intachable. Al regresar de una visita de un mes a su pueblo natal, Danton reunió a un grupo de figuras políticas que se acabaría conociendo como los Indulgentes, y empezaron a pedir el fin de los excesos cometidos desde el 5 de septiembre. Robespierre compartía algunas de las preocupaciones de los Indulgentes, y tenía una relación más cercana con uno de ellos –el experiodista y diputado Camille Desmoulins–, que con cualquier otro político importante. Por encima de todo, Robespierre se oponía a la violenta campaña de descristianización, que había alcanzado su punto álgido a principios de noviembre. Cuando denunció la

«extraordinaria y repentina intensidad, el exagerado y excesivo celo» de la guerra contra la religión en un discurso el 21 de noviembre, Robespierre seguramente tenía en mente la historia de Fabre sobre el complot extranjero para destruir la Revolución fomentando el extremismo.[4]

Para Camille Desmoulins, la campaña de los Indulgentes fue una oportunidad para volver a ser el centro de atención como lo había sido al principio de la Revolución. Todo el mundo recordaba cómo aquel joven abogado había contribuido a agitar a las masas en julio de 1789 y el éxito de su periódico *Révolutions de France et de Brabant*, pero después Desmoulins se había encontrado con que en la Convención le trataban como a un inmaduro político de poco peso. Tomó su pluma una vez más para lanzar un nuevo periódico, el *Vieux Cordelier* (el Antiguo Cordelier), y recuperó el protagonismo cuando denunció a los extremistas revolucionarios. Haciendo un paralelismo con la historia romana, argumentó que los enemigos de la Revolución podían desautorizar fácilmente a los líderes patriotas, que trataban de gobernar por el bien del pueblo, respondiendo a cada propuesta con «una más populista todavía, para convertir así los principios y el patriotismo en algo extravagante».[5]

Robespierre, amigo de Desmoulins desde la escuela, revisó el contenido de los dos primeros números del *Vieux Cordelier* antes de que salieran a la luz y no encontró nada censurable. Pero para Desmoulins no era suficiente hacerse eco de los ataques de Robespierre a los «hebertistas» y de la campaña de descristianización. En el tercer número, con el pretexto de describir cómo tiranizaban los emperadores romanos a sus ciudadanos «convirtiendo en delito una simple mirada, la tristeza, la compasión, los suspiros, e incluso el silencio», condenó enérgicamente la ley de los sospechosos. En el cuarto número, dirigido directamente a Robespierre, pidió que un «comité de clemencia» considerara la liberación de «estos doscientos mil ciudadanos a los que ustedes llaman sospechosos, ya que la detención por sospecha no aparece en la Declaración de Derechos». En su obsesión por descubrir a sus enemigos, acusó a la Revolución de haber olvidado su verdadero propósito, el establecimiento de «la libertad, que es la felicidad, que es la razón, que es la igualdad, que es la justicia».[6] Esto era

demasiado para los miembros más ortodoxos del Club Jacobino: uno de ellos advirtió a Desmoulins que «llevaba mucho tiempo tonteando con la guillotina».[7]

Los llamamientos a la clemencia de Desmoulins coincidieron con el pico de la represión de los rebeldes contrarrevolucionarios de la Vendée y los federalistas de Lyon. Los informes sobre el ahogamiento de prisioneros en Nantes y la ejecución masiva de sospechosos en Lyon resultaron en unas protestas en París contra la conducta del diputado Jean-Baptiste Carrier y el comandante del ejército revolucionario, Charles-Philippe Ronsin. Ronsin, a quien habían enviado a Lyon para asegurarse de que se castigaba a los rebeldes, había pronunciado una escalofriante proclama: «Debemos hacer que el sangriento Ródano, en su camino hacia el mar, arroje a sus orillas los cadáveres de los cobardes que han matado a nuestros hermanos».[8] Las súplicas de que había demasiadas víctimas inocentes de las matanzas masivas hicieron mella en la Convención y el 17 de diciembre, dieron la orden de detener a Ronsin y a varios de sus socios. Sin embargo, según los informes policiales sobre las conversaciones callejeras, Ronsin y su vociferante defensor, Hébert, todavía gozaban de un fuerte apoyo entre los *sans-culottes* de París. También contaban con aliados influyentes en la Convención. El diputado Jean-Marie Collot d’Herbois, que había colaborado con Ronsin para organizar las ejecuciones en Lyon, se apresuró a volver a París para exigir la liberación del general. Collot protestó ante los jacobinos: «Quieren moderar el movimiento revolucionario. ¡Ah! ¿Se puede dirigir una tempestad?». El *Père Duchêne* se regocijó: «El gigante ha aparecido y todos los enanos que iban contra los mejores patriotas han regresado a sus madrigueras».[9]

El discurso de Robespierre del 25 de diciembre, pronunciado apenas dos días después de la intervención de Collot d’Herbois y el mismo día de la publicación del quinto número del *Vieux Cordelier* de Desmoulins, fue, pues, un esfuerzo por contrarrestar la presión contradictoria que los Indulgentes y los hebertistas estaban ejerciendo sobre el Comité de Seguridad Pública. Entre bastidores, los miembros de ese comité y sus colegas del Comité de Seguridad General estaban frenéticos intentando

encontrar sentido a las numerosas acusaciones que habían hecho Fabre y Chabot. Ronsin y sus colegas del ejército revolucionario acabaron en la cárcel mientras los comités presionaban a sus agentes de policía para que les dijeran si el Club de los Cordeliers podía estar planeando otro levantamiento de los *sans-culottes* para apoyarlos.

Cuando los jacobinos llamaron a Desmoulins al estrado, Robespierre se esforzó por proteger a su viejo amigo; dijo que era «un niño con poca cabeza [...] que se había dejado llevar por las malas compañías». Sería suficiente castigo que se quemaran solemnemente los números ofensivos del *Vieux Cordelier* en presencia de los miembros del club. Aunque sabía lo que arriesgaba, Desmoulins se negó a aceptar semejante humillación. «Robespierre dijo que había que quemar los ejemplares de mi periódico; yo le respondí, citando a Rousseau: "¡Quemar no es la respuesta!"».[10] Danton y él estaban en una posición peligrosa: unos días después, el 17 de enero de 1794, salieron a la luz las falsificaciones de Fabre d'Églantine, y los detuvieron a él, a Chabot y a algunos más que tenían vínculos con los Indulgentes. El miembro del Comité de Seguridad Pública Hérault de Séchelles compartió su destino, lo cual demostraba que ningún miembro de la Convención era inmune a las fuerzas que podían provocar la caída en desgracia. A medida que aumentaba el peligro para los Indulgentes, la marea parecía inclinarse a favor de los hebertistas, y el 2 de febrero, la Convención dio orden de liberar a Ronsin.

En medio de estas tensas maniobras entre facciones políticas, resurgió de forma repentina la cuestión colonial de la esclavitud, la mayor contradicción de los revolucionarios que se erigían en defensores de la libertad. Como hemos visto, la noticia de la destrucción de Cap Français había ayudado a inspirar la *journée* del 5 de septiembre de 1793. La Convención había aceptado inicialmente la versión de ese evento que daban los colonos proselitistas, culpando a Sonthonax y Polverel, y a sus patrones girondinos. El propio Robespierre había respaldado las acusaciones de los colonos blancos contra Sonthonax y Polverel en un importante discurso en

el que exponía la políti-ca exterior del Comité de Seguridad Pública el 17 de noviembre de 1793. Sin embargo, la alianza de los revolucionarios de París con los propietarios de esclavos se vio amenazada a finales de diciembre, cuando se supo que los colonos blancos que quedaban en Saint-Domingue habían permitido que las fuerzas británicas ocuparan las ciudades de la costa occidental de la colonia. Los representantes de los colonos en la capital convencieron a los montañeses de que aceptaran su argumento de que los blancos estaban «obligados a elegir entre la muerte o el sometimiento al rey de Inglaterra».[11] El 23 de enero de 1794, a los colonos les sorprendió la noticia de que tres hombres de Saint-Domingue –un aliado blanco de Sonthonax y Polverel, un hombre negro y uno de raza mestiza– habían aparecido en París con documentos que demostraban que los habían elegido diputados de la colonia en la Convención: su misión era lograr que la asamblea aprobara la emancipación de los esclavos que habían iniciado Sonthonax y Polverel.

Los colonos blancos consiguieron que sus aliados del Comité de Seguridad General emitieran órdenes de arresto contra los miembros de esta delegación «tricolor» de Saint-Domingue, pero antes de que pudieran encarcelarlos, los hombres se reunieron con varios miembros del Comité de Seguridad Pública, que ordenó que los liberaran. Barère, que siempre había juzgado bien el mar de fondo que había en ese comité, dejó atónitos a los defensores de la esclavitud cuando dijo que se había dado cuenta de que «en esa colonia los blancos son aristócratas y los hombres de color y los negros son patriotas».

Los combativos dantonistas, que nunca habían mostrado interés alguno por la esclavitud, ahora, de pronto, hicieron suya la causa y convencieron a la Convención de que aceptara las credenciales de los diputados de Saint-Domingue. Jean-Baptiste Belley, antiguo esclavo, nacido en el continente africano, y James Mills, mestizo, se convirtieron en los primeros hombres negros en ocupar un escaño en la legislatura de un país europeo, adelantándose más de setenta años a los senadores y representantes negros de Estados Unidos elegidos durante la Reconstrucción. El 4 de febrero, un día después de su admisión, Louis Dufay, el miembro blanco del grupo,

pronunció un discurso de tres horas ante la Convención. Apoyó las acciones de Sonthonax y Polverel después del motín de los marineros en Cap Français el año anterior, en junio, y prometió que «su colonia de Saint-Domingue florecerá cuando la cultiven unas manos que sean libres [...]. Pronto dominará el archipiélago del Golfo de México».[12]

Dufay tuvo cuidado al justificar a Sonthonax y Polverel. Explicó que habían tomado medidas expeditivas necesarias para hacer frente a una crisis, en lugar de aducir que era la aplicación de los principios de libertad e igualdad de la Revolución. No contaba con el apoyo del Comité de Seguridad Pública: a pesar de que había sido el comité el que había dejado que saliera de prisión con sus compañeros, ninguno de los miembros estaba presente para escuchar su discurso. En ese momento, estaban en una reunión de emergencia con los representantes de los colonos blancos, quienes les rogaron que retrasaran cualquier ataque al sistema de esclavitud. Al salir de la reunión, los grupos de presión se enteraron de que era demasiado tarde. Entusiasmado por las palabras de Dufay, el diputado René Levasseur se movilizó inmediatamente para «decretar a partir de este momento la abolición de la esclavitud en todo el territorio de la República», insistiendo: «Quiero que todos los hombres sean libres, sin distinción de color». El dantonista Jean-François Delacroix pidió a la asamblea que no se «perdiera el honor alargando el debate», y en cuestión de minutos, se derrumbó la institución que había sido clave para la creación del imperio francés de ultramar.[13]

No sólo se declaró que los negros eran libres, sino que se les concedió inmediatamente plenos derechos como ciudadanos franceses. Una ola de emoción similar a la de la noche del 4 de agosto de 1789, cuando la Asamblea Nacional había declarado abolido el sistema feudal, recorrió la sala: los diputados se habían enfrentado por fin a la mayor contradicción de los principios de libertad e igualdad del Imperio francés. El presidente de la Convención abrazó a los dos diputados negros mientras otros miembros vitoreaban.

Incluso quienes habían sido partidarios de la abolición desde el inicio se sorprendieron por lo repentino de este cambio. Grégoire, un defensor de la

igualdad racial en los primeros años de la Revolución, temía que la moción de Levasseur fuera «un desastre [...], el equivalente político de un volcán». Tal vez consciente del malestar que muchos diputados sentían por el radicalismo de su acción, Danton dejó que sus aliados impulsaran la moción antes de demostrar, por última vez, su asombrosa habilidad para combinar la audacia y la cautela. Predijo que, gracias a las acciones de la Convención, «a partir de hoy, Inglaterra está muerta»: los negros esclavizados en sus colonias seguramente se levantarán en una revuelta y trastocarán la economía. Pero instó a los diputados, algunos de los cuales querían enviar la noticia a las colonias inmediatamente, a que dejaran la aplicación del decreto en manos de la Comisión de Seguridad Pública.[14] Fue la última intervención destacable que hizo en la política revolucionaria antes de que le detuvieran.

Quizá Danton había creído que el Comité le daría las gracias por mantener la autoridad de la institución. De hecho, el comité decidió no enviar el decreto a las colonias francesas del Océano Índico, porque temía que los propietarios de las plantaciones de allí entregaran las islas a los británicos. Y hubo un prominente miembro del comité que mostró su desacuerdo con la decisión. Unas semanas más tarde, mientras debatía qué cargos presentar contra Danton en su juicio, Robespierre intentó, sin éxito, que se le culpara específicamente de la aprobación de un decreto «cuyo resultado probable será la pérdida de nuestras colonias».[15] Era la prueba de lo obsesionado que estaba con la idea de que había una conspiración extranjera contra los intereses franceses. Muy diferente fue la reacción de Toussaint Louverture, el general negro que había rechazado la oferta de libertad de los oficiales revolucionarios locales en Saint-Domingue en agosto de 1793. Cuando la noticia de la proclamación de la Convención llegó a la colonia, rompió con los otros líderes del movimiento negro y sus partidarios españoles, y anunció su conversión a la causa republicana. Sus soldados se convirtieron en el núcleo del ejército francés que evitó que la colonia cayera en manos de los enemigos del país.

En el lado contrario del espectro político de Danton, el *procureur* de la Comuna, Chaumette, también aprovechó el decreto de abolición para llevar

a cabo su última acción política significativa. «Este decreto no es obra de los hombres», dijo a la Comuna reunida el 6 de febrero. «Es más bien obra del Eterno [...] que quiere que todos los hombres no sean más que una familia de hermanos, de ahora en adelante». El 18 de febrero, Chaumette presidió una gran ceremonia en Notre Dame para jalear lo que él consideraba nada menos que un retorno de la humanidad al estado original de la naturaleza y el comienzo de una nueva era en la historia. Otras ciudades francesas organizaron sus propias celebraciones. En la pequeña ciudad normanda de Bernay, «los miembros de las clases populares rodearon a sus nuevos hermanos, los abrazaron y les pusieron gorras de la libertad en la cabeza; se completó este cuadro conmovedor con himnos y escenas de alegría».[16]

Al tiempo que aplaudían el decreto idealista que abolía la esclavitud, los revolucionarios se movilizaban para un esfuerzo militar a una escala nunca antes vista en la historia europea. En enero de 1794, unos 670.000 hombres se habían unido al ejército, superando con creces los 400.000 que Luis XIV había comandado en el punto álgido de sus guerras un siglo antes. La *levée en masse* decretada en agosto de 1793 había engrosado las filas del ejército, pero había pasado tiempo antes de que los reclutas pudieran ser útiles en el campo de batalla. «Valientes en el combate, los voluntarios no comprendían aún el oficio de soldado», escribió el diputado Levasseur. Había que convencer a los nuevos hombres de que seguir órdenes era compatible con su condición de ciudadanos libres. «Cuando un soldado obedece a su superior, está claro que obedece únicamente la ley y no al individuo», explicó un comandante de batallón. La calma relativa en la lucha después de las victorias del otoño proporcionó un tiempo valioso para entrenar a los nuevos hombres y adoctrinarlos con valores revolucionarios. «No es sólo por el número y la disciplina por lo que se debe esperar la victoria», proclamó Saint-Just en febrero de 1794. «Sólo lo conseguiréis cuando el espíritu republicano se instale en el ejército».[17] Ejemplares del *Père*

Duchêne y fiestas patrióticas en las que soldados y ciudadanos proclamaban sus valores comunes ayudaron a inculcar actitudes patrióticas.

Durante algún tiempo, la Convención había presionado al ejército para que mezclara a los veteranos que quedaban de las unidades profesionales prerrevolucionarias con los voluntarios patriotas de la Guardia Nacional reclutados en 1791 y 1792, y los que se habían alistado en 1793. Un decreto de la Convención del 10 de enero de 1794 hizo oficial esta política de *amalgame*: todas las unidades existentes se formarían en *demi-brigades*, un tercio de los hombres procederían del antiguo ejército y el resto serían nuevos reclutas. Todos llevarían el mismo uniforme y se les pagaría lo mismo.

Desde principios de marzo, los oficiales y los soldados elegían a los miembros de unos consejos para decidir sobre los asuntos cotidianos que afectaban a sus unidades, práctica que reflejaba los valores democráticos de los voluntarios. La mayoría de los soldados rasos del nuevo ejército combinado se habían incorporado después de 1789, pero el cuerpo de oficiales seguía estando formado principalmente por hombres cuya carrera había comenzado antes de la Revolución. La emigración masiva de nobles que se oponían al proceso revolucionario abrió oportunidades para hombres como Napoleón Bonaparte y para suboficiales talentosos del Tercer Estado. Lazare Carnot, el experto militar del Comité de Seguridad Pública, y los generales eran conscientes de que los soldados carecían de la disciplina necesaria para ejecutar las maniobras de combate a corta distancia de la guerra tradicional del siglo XVIII, de modo que decidieron confiar en la superioridad numérica y en los ataques violentos con bayoneta. Lazare Hoche, una de las jóvenes estrellas en ascenso del ejército, resumió concisamente la doctrina del ejército revolucionario: «Sin maniobras ni habilidad, acero, potencia de fuego y patriotismo».[18] En medio de las crisis de 1793, no había habido tiempo para pensar en un plan militar global. En 1794, Carnot estaba decidido a concentrar el mayor número posible de fuerzas en la frontera belga, tanto para proteger París como para derrotar al ejército austriaco, el enemigo más peligroso.

Mientras los soldados se preparaban para la siguiente campaña, el país entero se esforzaba por proporcionarles las herramientas necesarias. Para suministrar mosquetes, rifles y cañones, el gobierno creó un enorme taller de armas, la Manufacture d'armes de Paris (Manufactura de Armas de París). Los trabajadores cualificados estaban exentos del servicio militar y se les prometía un salario superior a la media. Para obtener un suministro adecuado de salitre, un ingrediente crucial en la pólvora, los funcionarios municipales e incluso los escolares se desplegaron por todas partes para encontrar depósitos en sótanos húmedos, donde puede formarse en las paredes cuando el nitrato de potasio de la mampostería reacciona con la humedad. Tenían derecho a invadir la propiedad privada en esta búsqueda. La Convención organizó una fiesta en la que las secciones de París presentaron su acopio de salitre, decorado con símbolos revolucionarios.[19] Los revolucionarios movilizaron a los científicos del país a fin de encontrar nuevos métodos para refinar el material precioso en pólvora. También dieron instrucciones a los científicos para que desarrollaran mejores procedimientos para extraer el bronce de las campanas de las iglesias y de las estatuas reales que se utilizarían para forjar cañones. Los miles de sociedades y clubes populares que ahora se extendían por todo el país recogían suministros para los soldados; en un esfuerzo por aumentar las tropas montadas del ejército, el gobierno animó a estos clubes a recaudar dinero para reclutar y equipar soldados de caballería.

A fin de fomentar la unidad necesaria para mantener dicho esfuerzo bélico, los líderes montañeses anunciaron una campaña contra los idiomas regionales que se hablaban en algunas partes del país. Hay que enseñar a todos los ciudadanos, dijo Barère en la Convención, a hablar «el idioma más bello de Europa, el primero que consagró claramente los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el que tiene la misión de transmitir al mundo las ideas más sublimes de libertad». Las regiones donde eran más corrientes las lenguas no francesas –Bretaña, Alsacia, Córcega y el País Vasco– eran todas, como señaló, partes periféricas del país expuestas a la invasión extranjera, por lo que era especialmente importante asegurar su lealtad. «El federalismo y la superstición hablan bretón», advirtió. «La emigración y el

odio a la República hablan alemán; la contrarrevolución habla italiano y el fanatismo habla vasco».[20] Además de abastecer al ejército de soldados, se exhortó a las sociedades populares del país a encontrar maestros de escuela que pudieran difundir el idioma nacional. Era un programa ambicioso que sólo se lograría llevar a cabo bajo la Tercera República, un siglo más tarde.

Para justificar sus exigencias, el gobierno revolucionario necesitaba convencer a la población general y a los soldados de que la victoria militar era para su bien. Aunque se esforzó por proporcionar prestaciones sociales a los civiles más necesitados, la Convención hizo esfuerzos heroicos para asegurar subvenciones a las familias de los soldados y pensiones a los heridos y las viudas. En los primeros días del mes revolucionario de ventoso, mientras el Comité de Seguridad Pública preparaba su movimiento contra los hebertistas de París, que habían querido identificarse con la causa del pueblo común, Saint-Just propuso un conjunto de decretos que demostrara que el gobierno revolucionario se preocupaba por las clases bajas. Aunque la Convención siempre había dudado de la idea de redistribuir la propiedad en beneficio de los pobres, Saint-Just propuso un nuevo principio: «Quien haya demostrado que es enemigo del país no podrá poseer propiedades». Sería lo más justo, insistió, que la riqueza de los enemigos del pueblo se diera a los ciudadanos pobres: «Las propiedades de los patriotas son sagradas, pero los bienes de los conspiradores están ahí para todos los necesitados». Prometió que esta medida acabaría con la mendicidad, «que deshonra a un país libre», y que transformaría la sociedad. «La felicidad es una nueva idea en Europa», concluyó.[21]

En el siglo XX, después de que los revolucionarios rusos intentaran crear una sociedad comunista, se elogiaron a menudo los decretos de Saint-Just como intentos pioneros de desafiar el reinado opresivo de la propiedad privada. En realidad, ni él ni ningún otro miembro de la Convención imaginaban una sociedad socialista basada en la propiedad colectiva. La idea de confiscar propiedades a los opositores a la Revolución se desprendía lógicamente de las medidas que ya se habían tomado contra la Iglesia y los *émigrés*. La promesa de adjudicar lo confiscado a patriotas pobres que se lo merecían, en lugar de ponerlo a la venta, era más radical, pero el propósito

no era tanto socavar el principio de la propiedad en sí, como crear nuevos propietarios a pequeña escala que fueran leales a la República.

En anotaciones privadas que no se publicaron entonces, Saint-Just concluyó que, para crear una sociedad justa, «hay que dar a todos un poco de tierra». Añadió que «no debería haber ricos ni pobres», pero su principal preocupación era crear lo que llamó «instituciones» o prácticas sociales que promovieran la virtud y la lealtad a la República. Con ese fin en mente, quería que los niños se separaran de sus familias a los cinco años para que aprendieran a ser agricultores y soldados. Los adultos debían hacer una declaración anual de quiénes eran sus amigos. Esto consistiría no sólo en publicar sus nombres, sino en aceptar la responsabilidad por su comportamiento: si un hombre cometía un delito, se desterraría a sus amigos.[22] Para Saint-Just, estos decretos de ventoso eran un primer paso hacia la creación de una república moral. Pero no habrían tenido mucho atractivo para los *sans-culottes* de la ciudad, cuyo portavoz del Comité de Seguridad Pública estaba a punto de pronunciarse en contra: pocos obreros y artesanos de París querían convertirse en campesinos.

Sin ser consciente del peligro que corría, Hébert tomó los discursos de Saint-Just como una señal para intensificar su propia campaña contra los Indulgentes. Al día siguiente de la aprobación del segundo decreto de ventoso, se dirigió al Club de los Cordeliers para exigir el juicio inmediato de los 73 diputados de la Convención que aún estaban en prisión por haber firmado una petición a favor de los girondinos en junio de 1793. Él y otros Cordeliers exigieron que se detuviera a Desmoulins y a sus partidarios. Carrier, el diputado que había supervisado el ahogamiento masivo de prisioneros en Nantes, despertó a los miembros del club exclamando: «Una santa insurrección, así es como debéis enfrentaros a los sinvergüenzas». Hébert criticó directamente a Robespierre, y el grupo votó a favor de cubrir con un velo la copia enmarcada de la Declaración de Derechos que había en la pared «hasta que el pueblo haya recuperado sus derechos sagrados».[23] Los discursos exaltados de la reunión proporcionaron el pretexto que los

comités de la Convención necesitaban para empezar a preparar la detención de los principales Cordeliers, pero los hebertistas, a pesar de que muchos eran veteranos de las anteriores *journées* de París, en realidad no hicieron nada para planear un levantamiento. Collot d'Herbois, el miembro del Comité de Seguridad Pública que había defendido la política terrorista en diciembre, decepcionó a los Cordeliers al pedirles que moderaran sus demandas. A Hébert le sacaron los colores cuando un informante reveló que, mientras denunciaba a los acaparadores de alimentos, había recibido en su casa un importante paquete de carne salada de cerdo, que él afirmó que era para distribuir entre los pobres.

El 14 de marzo de 1794, el 24 de ventoso del año II, los comités aprovecharon la oportunidad, emitieron la orden de detención de Hébert, Ronsin, François-Nicolas Vincent –el subalterno de Ronsin–, y Antoine-François Momoro –presidente de los Cordeliers–, por participar en un complot extranjero para derrocar al gobierno. Los hebertistas, acusados de conspirar para hacer morir de hambre a la población de la capital y matar a los diputados de la Convención, se encontraron con varios extranjeros, en particular el prusiano Anacharsis Cloots, el austriaco Pierre-Jean Berthold Proli y con otros acusados que no tenían nada que ver con el grupo. Mientras tanto, también detuvieron a los principales sospechosos del escándalo de la Compañía de las Indias, lo que indica que los comités tenían la intención de perseguir a los socios de Danton del otro bando del espectro político. El 17 de marzo, encarcelaron a Chaumette, la figura dominante de la Comuna de París, para asegurarse de que el gobierno municipal no se convertía en una fuente de apoyo para los hebertistas. Cuando los llevaron a la prisión del Palacio del Luxemburgo, los otros reos, entre los que había muchos hombres detenidos por denuncias de militantes *sans-culottes*, se burlaron de los hebertistas. Un anciano preso le dio a Chaumette una lección de gramática revolucionaria: «Yo soy sospechoso, usted es sospechoso, él es sospechoso, nosotros somos sospechosos, ustedes son sospechosos, ellos son todos sospechosos».[24]

El resto de los miembros del Club de los Cordeliers se apresuraron a diferenciarse de sus camaradas detenidos, poniendo fin a la organización

como alternativa populista a los jacobinos. Como sabían lo que sus empleadores querían oír, los agentes de policía que trabajaban para el Comité de Seguridad General les aseguraron que la opinión pública apoyaba abrumadoramente las detenciones. De lo que no se dieron cuenta fue de que sus informes revelaban que las medidas que se habían tomado para excluir a las mujeres de la política no habían sido eficaces del todo. «Las mujeres decían que todo lo que antes habían querido al Père Duchêne, ahora lo odiaban en igual medida», escribió un policía, aunque añadió que «muy pocas decían que tal vez los detenidos no eran culpables». Sin embargo, otras mujeres, «esposas de *sans-culottes* buenos», se desilusionaron con el asunto. «¿Qué va a ser de nosotras, ahora que nos han traicionado tantos hombres en los que habíamos puesto toda nuestra confianza?», preguntaron.[25]

Los hebertistas acusados tenían la esperanza de que los pondrían en libertad, y el Comité de Seguridad Pública, a su vez, estaba nervioso por la posible reacción pública a sus detenciones. A Hébert se le acusaba de querer «destruir el comercio mediante sus denuncias, sin distinción, contra cualquier ciudadano que participara en él», lo cual aumentaba la escasez de alimentos. A Ronsin, que había sido comandante del ejército revolucionario, se le describía como un potencial Cromwell que podría haber usado a sus soldados para disolver la Convención. El éxito que había tenido Hébert al presentarse como la voz de los *sans-culottes* le había hecho creer que el pueblo le quería tanto que no podrían tratarle como él había hecho con muchos de sus objetivos en el pasado. Un observador de la policía comentó que apenas respondió a las preguntas del juicio: «El contraste entre la indignación pública que le envuelve ahora y el amor casi universal del que fue objeto [...] es la mejor manera de dejarle sumido en una especie de estupor».[26] A diferencia de los demás miembros del grupo, fue incapaz de dar una imagen digna cuando le llevaron a la guillotina: Ronsin se enfrentó a su destino con valentía, Hébert parecía completamente destrozado.

Con la muerte de Hébert, el «Père Duchêne», la corriente abiertamente populista de la Revolución perdió al hombre que había sabido, mejor que nadie, convertir el discurso en bruto del pueblo en una verdadera fuerza

política. Por primera vez desde 1789, un conflicto entre los dirigentes en el poder y un movimiento de los de abajo que quería empujar la Revolución en una dirección más extrema terminó con la derrota decisiva de los radicales. Los jacobinos de clase media que lo habían enviado a la guillotina eran conscientes del peligro que suponía la pretensión de Hébert de hablar al pueblo en su propio idioma. El *Journal de la Montagne*, un periódico semioficial, le condenó por establecer «una categoría separada de una clase de gente más vulgar, que habla un lenguaje más vulgar», insistiendo en que «hoy, cuando la igualdad ha reunido a todos los hombres, el lenguaje debería ser el mismo para todos».[27] Sin embargo, los lectores que se habían reconocido en las páginas de Hébert, y que ahora se veían obligados a aceptar el lenguaje de los jacobinos cultos, estaban destinados a sentir que la Revolución los estaba abandonando.

Nadie había hecho tanto como el Père Duchêne por avivar los temores de conspiraciones contrarrevolucionarias y traiciones de los políticos burgueses, o para alentar los impulsos punitivos que tan a menudo salieron a la luz durante el Terror. Lo que les faltaba a Hébert y a los demás agitadores populistas era un programa coherente. La exigencia de imponer controles de precios más estrictos no tenía en cuenta las causas de la escasez que asolaba a la población urbana; los reiterados llamamientos a la insurrección y a más ejecuciones no eran una alternativa convincente a la política de los comités de gobierno. Las acusaciones por las que se condenó a los hebertistas eran falsas, pero los miembros del Comité de Seguridad Pública, sobrecargados de trabajo, que se esforzaban por movilizar los recursos del país para la guerra y evitar el colapso de la economía, tenían poca tolerancia con los agitadores, que parecían no comprender los verdaderos problemas del país. La disolución del ejército revolucionario, anunciada durante el juicio de los hebertistas, se recibió con entusiasmo fuera de París, y una ola de detenciones de militantes acusados de simpatizar con los «conspiradores» extendió el impacto de la represión a toda Francia.

Incluso antes de que enviaran a los hebertistas a la guillotina, Robespierre advirtió que los comités de gobierno tenían una segunda facción en el punto de mira. Los moderados reunidos en torno a Danton no podrían beneficiarse de la derrota de sus enemigos. Los comités estaban de acuerdo en llevar a juicio a Fabre, a los demás diputados implicados en el escándalo de la Compañía de las Indias y a Hérault de Séchelles, que estaba implicado en otro asunto de corrupción, pero no se ponían de acuerdo para decidir si incluir a Danton y a Desmoulins. Saint-Just, experto en estos asuntos, redactó la acusación, pero la cuestión de quiénes serían los acusados era demasiado delicada para que decidiera una sola persona. Los miembros más exaltados del comité –Collot d'Herbois y Billaud-Varenne, del Comité de Seguridad Pública y Amar y Jean-Henri Voulland, del Comité de Seguridad General– insistieron en el peligro que representaban los Indulgentes: sus peticiones de clemencia podrían convencer a los diputados de *la Plaine*, los silenciosos partidarios de la Convención, para que se volvieran contra el Terror y los hombres que lo habían dirigido. Los miembros más prácticos del comité, como Lazare Carnot y Robert Lindet, pensaban que detener a un héroe revolucionario como Danton era demasiado arriesgado. «Piensen detenidamente, una cabeza como la de Danton costará muchas más», advirtió Carnot.[28]

El voto crucial era el de Robespierre. A pesar de sus diferencias, él sabía lo que Danton había hecho por la Revolución en muchos momentos críticos, y su amistad personal con Camille Desmoulins se remontaba a la época del colegio. Pocos días antes de que los comités tomaran la fatídica decisión de detener a Danton, Robespierre aceptó ir a una cena con él; la habían organizado unos amigos comunes con la esperanza de que se reconciliaran. Los relatos de lo que se dijeron no se pueden verificar, pero al parecer Danton sugirió que algunos de los políticos que habían terminado ante el Tribunal Revolucionario eran inocentes, y Robespierre respondió que, según las normas de Danton, jamás se declararía culpable a un conspirador.[29] El encuentro convenció a Robespierre de que Danton no abandonaría sus críticas a los comités de gobierno; también era consciente de que Desmoulins había preparado el séptimo número del *Vieux Cordelier*

que contenía un ataque tan punzante contra el Comité de Seguridad Pública que su imprenta se había negado a publicarlo.

En la reunión decisiva con los demás miembros de los comités directivos, Robespierre propuso dejar que Danton se justificara ante la Convención antes de tomar medidas. «Puede usted correr el riesgo de ser guillotinado, si así lo desea», respondió Marc-Guillaume Vadier del Comité de Seguridad General. «Por mi parte, prefiero evitar este riesgo, haciendo que los detengan de inmediato». Una vez que aceptó la decisión, Robespierre buscó en lo que recordaba de su relación con Danton desde el comienzo de la Revolución, pruebas que se pudieran tergiversar para justificar una acusación. Danton le había instado una vez, cuando Barnave y Lameth eran los líderes de los jacobinos, a que suavizara sus críticas hacia ellos: una prueba de intenciones conspirativas. En otra conversación privada, Danton se había burlado de la obsesión de Robespierre por la virtud, señalando que no conocía ninguna virtud mayor que la que «practicaba todas las noches con su esposa»: una prueba del amor por el placer que haría a un hombre susceptible a la corrupción.[30]

En opinión de Robespierre, la supervivencia de la Revolución dependía de mantener la unidad y la autoridad de los comités. Si no se podía convencer a Danton y Desmoulins de que pusieran fin a sus críticas, habría que eliminarlos, independientemente de lo que sintieran personalmente por ellos. Desmoulins se enteró de la decisión del Incorruptible por las malas. «Estoy perdido», le dijo a un amigo. «Fui a visitar a Robespierre, y dio instrucciones para que no me dejaran entrar». Las órdenes de detención de Danton, Desmoulins y sus aliados se ejecutaron la noche del 30 de marzo de 1794 (10 de germinal del año II). La noticia causó sensación. «La gente está atónita y no sabe qué pensar», informó un agente de policía. En la Convención, el diputado Louis Legendre, uno de los socios más cercanos de Danton, causó una conmoción al informar de la noticia. Después de su vacilación inicial, Robespierre negó categóricamente a los dantonistas cualquier oportunidad de defenderse. «Pálido de ira y aparentemente impulsado por la sensación de un gran peligro», según un testigo, silenció a

la oposición anunciando: «Veremos en este día si la Convención sabe cómo destruir a un ídolo falso».[31]

Camille Desmoulins tenía claro que no podía esperar un buen resultado en su juicio: cuando el fiscal le preguntó la edad, respondió que tenía treinta y tres años, «la misma que el *sans-culotte* Jesús» cuando se presentó ante Poncio Pilato. Danton, que se había atribuido el mérito de establecer el Tribunal Revolucionario en marzo de 1793, había ignorado las advertencias de su detención inminente. «Recibí un soplo y no podía creerlo», dijo, cuando se vio en prisión. Se le pidió que diera su nombre y dirección, y respondió: «Pronto no viviré en ningún sitio; en cuanto a mi nombre, lo encontrarán en el panteón de la historia». En cualquier caso, estaba decidido a mostrar valentía. «Siempre que nos dejen hablar largo y tendido», aseguró a sus colegas, «estoy convencido de que voy a derrotar a mis acusadores y si el pueblo francés es lo que debe ser, tendré que pedirle que los perdone». Con nada más que vagas acusaciones de conspiración y corrupción contra los acusados, el fiscal, Antoine-Quentin Fouquier-Tinville, se encontró a la defensiva: Danton tomó el control de la sala, gritaba de tal modo que se oía su voz en la calle. La transcripción oficial de las actuaciones dejó claras las dificultades de Fouquier: los lectores se podían imaginar a Danton bramando: «¿De un revolucionario como yo, tan comprometido con la causa, esperáis una tibia defensa? Los hombres como yo no se pueden comprar; en la frente llevan impreso, en caracteres indelebles, el sello de la libertad, el genio del republicanismo; ¡y se me acusa de haberme arrastrado a los pies de viles déspotas!».[32]

Al tercer día del juicio, Fouquier-Tinville había advertido al Comité de Seguridad Pública que no podía garantizar el resultado a menos que se impidiera hablar a los acusados. Saint-Just se apresuró a denunciar la «revuelta de los culpables» que perturbaba la sala del tribunal: «Admiten sus crímenes al oponer resistencia a las leyes», dijo. Los diputados votaron obedientemente un decreto que permitía que el fiscal retirara a los acusados de la sala, ya que cualquiera que se comporte de esta manera «se resiste o insulta a la justicia de la nación». Cuando se los llevaron, Danton se quejó: «Nos van a juzgar sin dejarnos hablar»; y los demás gritaron desafiantes:

«Llévennos al patíbulo». Mientras esperaba la ejecución, Danton mantuvo unas palabras con los antiguos colegas responsables de su destino. Otro prisionero le oyó decir: «Si dejara mis pelotas a Robespierre y mis piernas a Couthon, el Comité de Seguridad Pública podría durar un poco más». Aún en plena posesión de su sentido de la escena mientras subía al cadalso al día siguiente, Danton le dijo al verdugo: «No olvides enseñar mi cabeza a la gente; merece la pena verla».[33]

Las muertes de Danton y sus colegas tuvieron lugar tan rápido después de la ejecución de los hebertistas, que quedó patente que los comités de gobierno no tolerarían ninguna crítica pública de sus políticas. Nadie, por grande que fuera su contribución a la Revolución, estaba a salvo. Esta advertencia llamó la atención no sólo del público en general, sino también de los miembros de la Convención. En las prisiones de París, que irónicamente se habían convertido en uno de los pocos lugares donde se podía hablar libremente, los reclusos no dudaron en predecir el destino del propio Comité de Seguridad Pública. Un prisionero en Saint-Lazare se imaginó a Danton diciéndole a Caronte –el barquero de la mitología griega que recogía monedas de los muertos para llevarlos por el río Estigia–, que se quedara con el cambio: «Yo pago por Couthon, Saint-Just y Robespierre».[34] Más que cualquier otro episodio de la Revolución, el drama de la repentina caída de Danton, su transformación de héroe revolucionario en víctima, ha tenido una atracción irresistible para los artistas. Su conflicto con Robespierre es el tema de *La muerte de Danton*, un drama clásico del dramaturgo alemán del siglo XIX Georg Buchner; de la película *Danton* del cineasta polaco Andrzej Wajda, realizada en 1983, y de la primera obra importante de la novelista británica Hilary Mantel, *A Place of Greater Safety (La sombra de la guillotina)*, publicada en 1992.

Presentar la muerte de Danton como el resultado de un duelo con Robespierre es un eficaz dispositivo dramático, pero distorsiona la importancia histórica que tuvo la destrucción de la facción de los Indulgentes. Robespierre no fue el único miembro de los comités de gobierno que vio a Danton como una amenaza; en efecto, Robespierre se puso en peligro por sus repetidos esfuerzos por defenderlos a él y a

Desmoulins mientras intentaba guiarlos de nuevo al redil de la ortodoxia. Robespierre y los demás líderes revolucionarios se enfrentaron a un verdadero dilema: permitir una revisión de las premisas del Terror amenazaba con desacreditar el movimiento revolucionario en su conjunto. El hecho de que algunos de los partidarios de Danton, en particular Fabre d’Églantine, fueran realmente culpables de ciertos delitos hacía que fuera legítimo sospechar del propio Danton. En el momento en que los Indulgentes fueron a juicio, la rebelión de la Vendée seguía en marcha, a pesar de las medidas brutales que se habían tomado para acabar con ella, y la campaña militar de 1794 que expulsaría a los invasores extranjeros de suelo francés aún no había comenzado. Habiendo sobrevivido con dificultad a las rebeliones, traiciones y violentas disputas entre facciones de los doce meses anteriores, los miembros de los comités de gobierno estaban más preocupados por el resurgimiento de tales conflictos que por los posibles excesos a los que su política pudiera llevar.

La ejecución de Danton y sus seguidores enviaba un mensaje claro: mientras el gobierno revolucionario siguiera en el poder, no se permitiría ningún desafío público a su liderazgo. Para reforzar su autoridad, el 14 de germinal del año II (3 de abril de 1794), la Convención abolió los ministerios que teóricamente habían continuado dirigiendo las políticas gubernamentales y puso a sus funcionarios directamente bajo el control del Comité de Seguridad Pública. Entre los afectados por este cambio se encontraba Jean-Marie Goujon, a quien se había recompensado por su constante devoción a la causa revolucionaria nombrándole ministro justo antes de que se eliminara el ministerio. Como compensación, sustituyó a Hérault de Séchelles –al que habían ejecutado recientemente–, en la Convención, un logro notable para un joven que, tan sólo cuatro años antes, no era más que un participante anónimo en la Fiesta de la Federación. Goujon siempre se había aferrado a la esperanza de que la pureza de la causa revolucionaria reuniera a todos sus acólitos, pero la eliminación de los hebertistas y los dantonistas no hizo más que acrecentar los conflictos

en la cúspide del movimiento. A finales de la primavera, como recordaría más tarde Carnot, el Comité de Seguridad Pública tuvo que trasladar sus reuniones a una sala aislada, «para que la gente no pudiera ver el torbellino en el que nos movíamos».[35] La desconfianza entre los miembros de ese comité y sus colegas del Comité de Seguridad General era tan extrema que Robespierre y Saint-Just crearon su propia red de policía paralela. Muchos diputados de la Convención habían sido colegas de los miembros de una u otra de las facciones que ahora se habían eliminado, y temían seguir los pasos de sus antiguos amigos hasta la guillotina. Por el momento, sin embargo, no se atrevían a tomar ninguna decisión contra los comités aparentemente todopoderosos.

Los periódicos, cuyo poder para influir en la opinión pública habían demostrado tan eficazmente Hébert y Desmoulins, ahora ofrecían sólo historias edificantes sobre el heroísmo de los soldados revolucionarios en la batalla y sobre las ceremonias públicas en las que ciudadanos y funcionarios se unían para proclamar su apoyo a la Convención y a sus políticas. Para los escritores y artistas dispuestos a apoyar al gobierno, el año II ofrecía algunas oportunidades. La producción de canciones, poemas y obras de teatro revolucionarias alcanzó su punto culminante cuando los editores y directores de teatro trataron de demostrar su patriotismo. Espectáculos patrióticos como *Jugement dernier des rois (El juicio final de los reyes)*, de Sylvain Maréchal, que relataba cómo los súbditos derrocaban a todos los monarcas de Europa, para enviarlos después a una isla remota donde se los tragaba un volcán, y escenificaba eventos gloriosos, como la recaptura de Toulon; todo ante una sala a rebosar. Aunque los jacobinos habían excluido a las mujeres de la política y del servicio militar, los dramaturgos a menudo les permitían demostrar su lealtad nacional en el escenario. En una obra sobre Toulon, una mujer comerciante sacrifica su riqueza para servir como espía contra los británicos; en otra, una madre republicana se disfraza para evitar ser reconocida mientras observa a su hijo, que es un soldado, a fin de asegurarse de que es un buen patriota. Se publicaron más de cuarenta versiones diferentes de naipes revolucionarios en los que los reyes, las reinas y las jotas de las barajas tradicionales fueron

sustituidos por figuras alegóricas que representaban diferentes aspectos de la libertad y la igualdad, o por cuadros de soldados revolucionarios y *sans-culottes*. Incluso en sus actividades de ocio, los buenos patriotas debían reafirmar constantemente su apoyo a la Revolución.

Por los informes policiales que recibían diariamente, los comités de gobierno sabían que este entusiasmo tenía sus límites. Los parisinos comunes y corrientes seguían quejándose de la escasez de alimentos y artículos de primera necesidad. Un sistema de racionamiento de pan aseguraba a la población un mínimo de calorías, pero muchos querían que se aplicara el mismo sistema a la carne y a otros productos. Cuando se revisaron las tasas de la ley del máximum general en marzo de 1794, «todo el mundo dijo que [eran] muy favorables para la gente del campo y para los comerciantes», según los informes de la policía. Las autoridades utilizaban las restricciones legales sobre los salarios para disuadir a los trabajadores de presionar para que se los subieran; se castigaba a los huelguistas por socavar el esfuerzo de la guerra. El requisito de que todos tuvieran una *carte de civisme* (carnet de ciudadanía) del comité de vigilancia local para reclamar su ración de pan o para viajar hacía que la gente dependiera de funcionarios sobrecargados de trabajo, a los que se acusaba de aceptar sobornos para proteger a los sospechosos y de utilizar sus poderes para acosar a sus enemigos personales. «Todos los días se oye decir que [los comités de vigilancia] están compuestos por intrusos que explotan a la nación y oprimen a los ciudadanos», escribió un observador de la policía.[36]

Curiosamente, aunque el control del gobierno revolucionario sobre la población alcanzó su punto álgido en los meses centrales del año II, fue también el momento en que la gente corriente participó más en la vida pública. A los antiguos nobles y los prósperos abogados que habían dominado los gobiernos municipales al principio de la Revolución los sustituyeron ahora hombres de orígenes más modestos. En Nancy, la capital de Lorena, los artesanos y comerciantes, que en 1790-1791 representaban el 12 por ciento del concejo municipal, pasaron a constituir el 36 por ciento de sus miembros; en Burdeos, los comerciantes, que en 1790-1791 representaban el 55 por ciento del concejo, pasaron a representar el 33 por

ciento, apenas por delante del 32 por ciento de los artesanos o comerciantes.[37]

Jacques Ménétra, que no podía ni imaginar que llegaría a ocupar un cargo de importancia política en el antiguo régimen, ocupó tantos puestos diferentes en su sección de París durante el Terror que después no era capaz de recordarlos todos. Fue miembro del comité de vigilancia, asistente del juez de paz local, presidente de la comisión de salitre y candidato a un escaño en la asamblea de la Comuna.[38] En teoría, se suponía que cada ciudad o pueblo tenía un consejo y un comité de vigilancia, y todas las comunidades, salvo las más pequeñas, tenían también una sociedad popular o club político, lo que significaba que una parte bastante importante de la población masculina tenía algún tipo de responsabilidad política. A pesar de que la Convención prohibía que las mujeres participaran en la política, asistían a menudo a las reuniones como espectadoras, vigilaban a los hombres y se aseguraban de que cumplieran con sus responsabilidades. El personaje de Charles Dickens, Madame Defarge en *A Tale of Two Cities (Historia de dos ciudades)*, la vengativa esposa de un comerciante que coge su labor y va todos los días a burlarse de los acusados del Tribunal Revolucionario, tenía sus equivalentes en la vida real, militantes femeninas que consideraban que su deber patriótico era asegurarse de que los jurados supieran que el pueblo quería que sus enemigos recibieran su castigo.

Los miles de ciudadanos que tenían puestos políticos en el año II tenían pocas posibilidades de impugnar la ortodoxia revolucionaria, pero a menudo estaban casi superados por las tareas que se les imponían. Además de las responsabilidades tradicionales de mantener el orden público y recaudar impuestos, se esperaba que reclutaran soldados para el ejército y que aportaran los fondos para sus uniformes y armas. En virtud de la ley de los sospechosos, no sólo tenían que identificar a los enemigos potenciales de la Revolución, sino que tenían que crear y administrar prisiones para los detenidos. Los decretos de ventoso que promulgó Saint-Just obligaban a los gobiernos locales a identificar a los *emigrés* y a otros cuyos bienes se pudieran confiscar, así como a los buenos patriotas que pudieran merecer parte de los mismos. Pocas comunas se esforzaron por aplicar esa ley.

Fueron más activos en la aplicación de un decreto posterior, que presentó Barère el 22 de floreal (11 de mayo). La medida proporcionaba fondos para establecer un sistema de bienestar integral en las zonas rurales. Los consejos de las aldeas prepararon rápidamente listas de campesinos y artesanos de más de sesenta años que ya no podían mantenerse por sí solos, así como de madres pobres con hijos; también se los obligó a reclutar *officiers de santé* (técnicos de sanidad) para ofrecer atención médica gratuita a los indigentes. Además, con las iglesias cerradas en todo el país, se suponía que los funcionarios locales y las sociedades populares organizaban rituales cívicos para marcar el *décadi*, o décimo día del calendario republicano, y para respetar las fiestas nacionales decretadas desde París. También desde París llegó un aluvión de papeleo sin precedentes, lo que supuso una gran presión para los funcionarios recién instituidos que, a menudo, apenas sabían escribir.

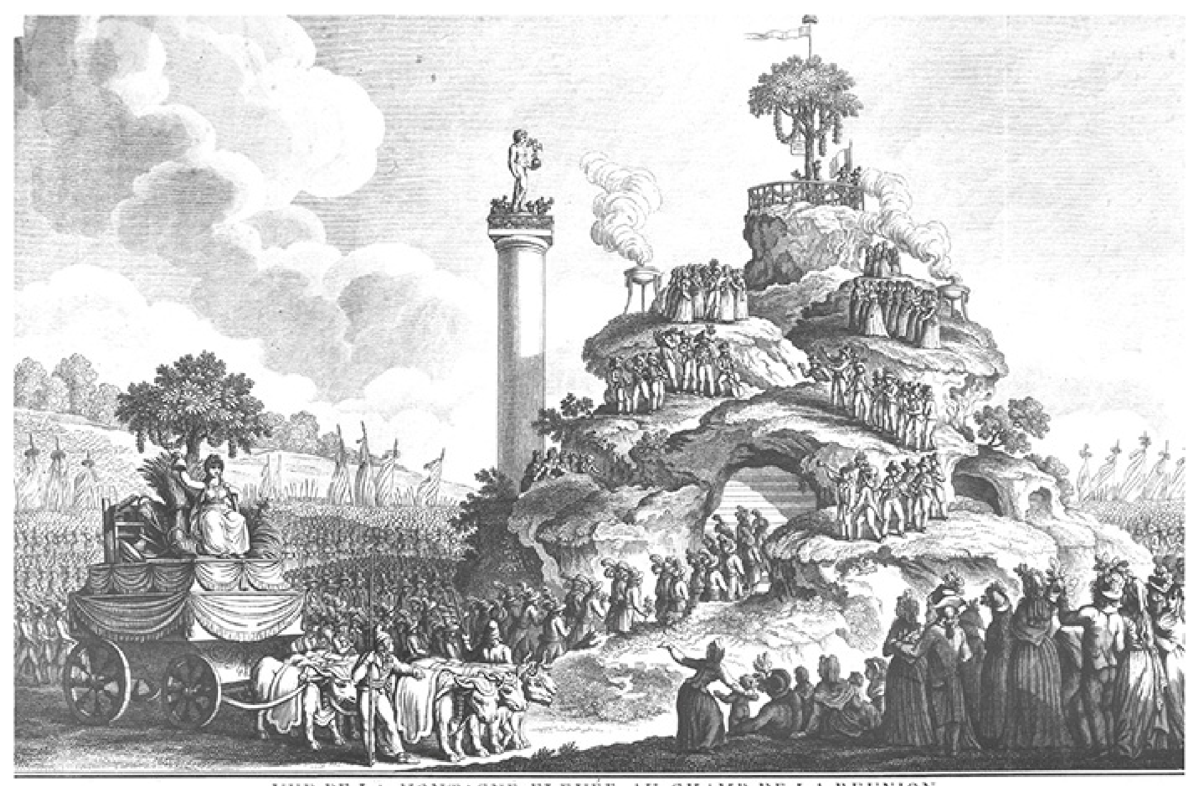
Un desafío que los funcionarios locales aceptaron con gusto fue la orden de la Convención de preparar una celebración especial para el día 20 de pradial del año II (el 8 de junio de 1794). Por primera vez, toda la población se movilizó para participar en una fiesta organizada simultáneamente en todo el país. La idea fue una iniciativa personal de Robespierre; de hecho, ninguna otra acción realizada durante el año en que fue miembro del Comité de Seguridad Pública se identificó tan directamente con él. Apenas un mes después de la ejecución de los dantonistas, en lo que resultó ser el último de sus principales discursos, el Incorruptible pidió que se iniciara un «culto al Ser Supremo». Tres meses antes, en su discurso sobre los principios de la moral política, Robespierre había proclamado la necesidad de la virtud como base de la República y había denunciado a las facciones que, según él, conspiraban para socavarla. Ahora que esas facciones habían sido derrotadas, podía hacer que el triunfo de la virtud fuera duradero. En términos mesiánicos, Robespierre anunció que «todo ha cambiado en el orden físico; todo debe cambiar en el orden moral y político. Ha triunfado

la mitad de la revolución mundial, ahora queda llevar a buen término la otra mitad».[39]

Mientras pedía el reconocimiento de lo que denominó «la religión universal de la naturaleza», Robespierre tuvo cuidado de que el culto que él proponía se distinguiera tanto del fanatismo de los ateos radicales, que habían cerrado las iglesias durante la campaña de descristianización, como de las «religiones hechas por sacerdotes» que habían atacado. Robespierre se había inspirado claramente en el concepto de Rousseau, que tanto apreciaba, de una religión civil que pudiera unir a la sociedad. Esperaba que una declaración formal de que «el pueblo francés reconoce la existencia del Ser Supremo y la inmortalidad del alma», y una lista de deberes morales –«detestar la mala fe y el despotismo, castigar a los tiranos y traidores, ayudar a los desafortunados, respetar a los débiles, defender a los oprimidos, hacer todo el bien que se pueda al prójimo y comportarse con justicia hacia todos los hombres»– uniría a todos los ciudadanos y permitiría poner fin a los conflictos que habían sacudido la Revolución.[40]

El artista y diputado de la Convención, Jacques-Louis David, «maestro de ceremonias» designado por la República, se puso a planificar la «Fiesta del Ser Supremo» del día 20 de pradial en la capital, y se dio instrucción a los gobiernos municipales de todo el país para que lo imitaran lo mejor posible. En París, la procesión tardó cuatro horas en llegar desde el centro de los jardines de las Tullerías hasta el Campo de Marte, al otro lado del Sena. Los manifestantes vieron cómo ardía una figura de papel maché de «ateísmo execrable», revelando una estatua de yeso de «sabiduría» oculta en su interior. En el Campo de Marte, David erigió una montaña artificial, símbolo de los montañeses jacobinos, con plataformas a los lados para sostener grupos que iban desde madres con bebés recién nacidos hasta patriarcas de pelo blanco. Un coro cantaba himnos compuestos especialmente para la ocasión, y cerca había una carreta de bueyes cargada con la cosecha recién recogida, que representaba la abundancia de la naturaleza. Igual que en la fiesta anterior, que celebraba la aceptación de la Constitución, una enorme estatua de Hércules, montada en una columna, simbolizaba el poder del pueblo.

Sus colegas eligieron a Robespierre presidente de la Convención para la ocasión, lo cual le daba el derecho de marchar a la cabeza de su grupo. Mientras los guiaba en la procesión, sostenía una gavilla de trigo para honrar los productos de la agricultura. Detrás, los diputados que resentían su protagonismo murmuraban palabras como «dictador» y «tirano»; al menos uno de ellos afirmó más tarde que hubiera querido asesinarle si se le hubiera presentado la oportunidad. Independientemente de lo que pensaran los diputados, la mayoría de los participantes se imbuyeron del espíritu del momento. Según un testigo, «la Fiesta del Ser Supremo fue un éxito. Se creía que sería el preludio de una amnistía general […]. El clima era estupendo. Había tanta gente que parecía que París había resucitado de entre los muertos, rejuvenecido, bullicioso y chispeante; las damas volvieron a salir con sus viejas galas, sus rostros exultantes». Joachim Vilate, miembro del Tribunal Revolucionario, dijo que se había encontrado con Robespierre, «su rostro [...] transformado por la alegría», mientras observaba el «glorioso espectáculo» que él había hecho posible.[41] La expectativa generalizada de que la fiesta era una señal del final inminente del Terror animó incluso a los prisioneros a demostrar su lealtad patriótica: pusieron en escena sus propias versiones del evento, construyeron montañas en miniatura en los patios de las cárceles y cantaron los himnos apropiados. En algunos casos, se permitió que las familias pasaran el día con ellos, lo que hizo aumentar la esperanza de que pronto los liberarían.



Fiesta del Ser Supremo. En el apogeo del Terror, la Fiesta del Ser Supremo dejó que la población vislumbrara el pacífico y próspero futuro que los montañeses querían creer que estaba a la vuelta de la esquina. Este grabado muestra la montaña artificial de David, la estatua de Hércules y la carreta de bueyes con la recompensa de la naturaleza. Fuente: Biblioteca del Congreso.

La exaltación de Robespierre duró poco. Apenas dos días después, el 22 de junio de 1794, Couthon, su aliado más cercano, no presentó a la Convención una propuesta de amnistía, sino un decreto para intensificar el Terror. La ley del 22 de pradial recortaba drásticamente los derechos de los acusados que juzgaba el Tribunal Revolucionario: ya no tenían derecho a un abogado, la muerte era la única pena para todos los delitos y la «conciencia de los jurados, iluminada por el amor a la *Patrie*», era suficiente para emitir un veredicto. Hasta ese momento, el Tribunal Revolucionario había absuelto a menudo hasta la mitad de los sospechosos que se le presentaban; en los dos meses de su funcionamiento después de la aprobación de la ley del 22 de pradial, el índice de condenas aumentó hasta el 80 por ciento.[42] En las semanas que llegaron a conocerse como *la Grande Terreur* (el Gran

Terror), el tribunal de París envió a más de mil trescientas personas a la guillotina.

Las razones de esta repentina escalada, tan fuera de sintonía con las expectativas creadas por la Fiesta del Ser Supremo, no están claras. Las dificultades con las que se encontró el Tribunal Revolucionario durante el juicio de Danton ejercieron, sin duda, mucha presión para que se simplificaran los procedimientos y se redujera la capacidad de los acusados para justificar sus acciones. Las presiones también vinieron de algunos de los diputados en misión. El diputado Étienne Maignet, que quería acelerar el castigo de los contrarrevolucionarios en el valle del Ródano meridional, recibió el visto bueno para crear una comisión popular en la ciudad de Orange con autoridad para llevar a cabo las ejecuciones. Una vez aprobadas estas medidas para la comisión de Orange, que ordenaría 332 ejecuciones durante su propia versión del Gran Terror, el Comité de Seguridad Pública pudo pensar que París también debía aumentar el número de ejecuciones. Dos intentos de asesinato contra Robespierre y Collot d'Herbois a principios del mes de pradial recordaron a los líderes montañeses cómo había terminado Marat. Se diría que Robespierre casi quería sacrificar su vida; escribió en privado: «Rodeado de sus asesinos, ya me he colocado en el nuevo orden de cosas donde ellos desean enviarme». Otros revolucionarios querían acciones más severas para evitar tales ataques.[43]

A pesar de lo peligrosa que se había vuelto la resistencia sin ambages al Comité de Seguridad Pública, algunos diputados de la Convención entendieron la amenaza que suponía la ley del 22 de pradial e intentaron al menos retrasar su aprobación, o exigir que la Convención tuviera derecho a aprobar la detención de cualquiera de sus miembros. Estos intentos fueron la primera señal de la oposición que llevaría al derrocamiento de Robespierre menos de dos meses después. Robespierre aumentó los temores de los diputados cuando describió abiertamente a quienes le criticaban como hombres «que hablaban continua, temerosa y públicamente de la guillotina, como algo que los tiene en el punto de mira por degradar y perturbar la Convención Nacional».[44]

Los funcionarios del Tribunal Revolucionario, abrumados por el número de reclusos en las prisiones de París, pusieron inmediatamente en práctica los procedimientos legales para hacer juicios rápidos. Martial Herman, un colega de Fouquier-Tinville, exigió que el comité diera la autorización para «purgar las prisiones de un solo golpe y dejar el suelo de la Libertad limpio de esta basura, de esta escoria de la humanidad». Los informantes de la prisión, a los que los reclusos habían puesto el apodo de *moutons* (ovejas), proporcionaban a los fiscales listas de nombres que se utilizaban para confeccionar *fournées* (hornadas) cada vez más grandes de hombres y mujeres a los que se condenaba por conspiraciones imaginarias. Entre las víctimas se encontraban distinguidas figuras públicas como Malesherbes, que se había ofrecido voluntario para defender a Luis XVI en su juicio; intelectuales, como el químico Antoine Lavoisier y el principal poeta de la época, André Chénier, cuyo hermano, el dramaturgo Marie-Joseph Chénier, participó en la Convención; clérigos que habían apoyado la Revolución, como el arzobispo de París Jean-Baptiste Gobel y el exdiputado Adrien Lamourette, y hombres y mujeres corrientes que habían hablado demasiado alto sobre el precio del pan. La guillotina se trasladó a un lugar en el extremo oriental de la ciudad para que el espectáculo de varias docenas de ejecuciones al día no provocara una reacción negativa. En privado, el cronista Ruault lamentaba que los líderes revolucionarios, que habían hecho grandes cosas para salvar al país, se hicieran «abominables ahora por el horror y la multiplicación de castigos innecesarios […] Ningún ciudadano está seguro de estar vivo dos días más».[45]

La impresión de que el Terror se había convertido en un irracional y descontrolado baño de sangre iba acompañada por una mejora en la situación militar. La marea estaba cambiando claramente a favor de la República. En mayo, las fuerzas francesas lograron una victoria decisiva sobre los españoles, asegurando la frontera sur del país. El 1 de junio de 1794, la flota atlántica francesa, cuya disciplina restauró André Jeanbon Saint-André, miembro del Comité de Seguridad Pública, se enfrentó a los

británicos en Bretaña para proteger un convoy que transportaba un enorme cargamento de grano desde Estados Unidos. Los británicos capturaron o hundieron varios buques de guerra franceses, pero las tripulaciones francesas actuaron con valentía; impidieron que el enemigo interceptara los buques mercantes y su cargamento tan necesario. En tierra, el encuentro crucial fue la batalla de Fleurus, sobre suelo belga, el 26 de junio. Por primera vez en la historia de la guerra, la aviación se utilizó con fines militares: los franceses amarraron un globo aerostático como puesto de vigilancia, lo que «contribuyó mucho al éxito de la campaña», recordó más tarde un soldado francés.[46] Como había esperado Carnot cuando decidió desplegar el grueso de las fuerzas francesas en la frontera septentrional, el ejército austriaco se vio obligado a retirarse, abriendo el camino a una nueva ocupación francesa de los territorios belgas que duraría hasta la derrota de Napoleón en 1814.

Los comandantes austriacos quedaron profundamente desanimados por su situación. «¿Cómo es posible que un ejército bien equipado, equilibrado y disciplinado haya sido derrotado por un enemigo con tropas toscas, sin caballería y comandado por generales inexpertos?», se preguntaba uno. Un joven oficial alemán que años más tarde ayudaría a derrotar a Napoleón, ofreció una respuesta: «La terrible posición en la que se encontraban los franceses, rodeados de varios ejércitos que pretendían (o eso creían) esclavizarlos y condenarlos a la eterna miseria, daba coraje al soldado, animaba al ciudadano a hacer sacrificios voluntarios, reunía suministros para el ejército y llamaba a la población civil a unirse a los colores».[47] Los prusianos emprendieron la retirada de los combates para concentrar sus fuerzas en Polonia, donde en marzo de 1794 había estallado un movimiento revolucionario dirigido por Tadeusz Kościuszko, que había sido oficial del ejército revolucionario americano. En un esfuerzo por liberar a su país de la dominación extranjera, los revolucionarios polacos fueron más allá del limitado programa de reformas que se había proclamado en 1791 y anunciaron la abolición de la servidumbre personal y otras reformas a favor de los campesinos. Los «jacobinos» polacos representaban una amenaza más inmediata para los vecinos del país, todos ellos dependientes de la

servidumbre, que los acontecimientos en Francia. Una coalición de tropas rusas, prusianas y austriacas aplastó el movimiento de Kościuszko, pero la campaña en Polonia desvió recursos cruciales de la guerra contra Francia y llevó a Prusia a iniciar negociaciones secretas con París.

Para los verdaderos creyentes en la Revolución, las ejecuciones diarias en París y las buenas noticias de los ejércitos demostraban el éxito sin fisuras del movimiento. Rosalie Jullien y su marido se unieron a otros parisinos en un «banquete fraternal» para celebrar el aniversario del 14 de julio. Ricos y pobres se reunieron para compartir una comida común en mesas instaladas en las calles. «Bebimos a la salud de la República, de la Convención, de la Montaña. Es una alegría tan sencilla, tan decente, a pesar de la multitud y la mezcla, que nada se puede equiparar a estos placeres para propagar la igualdad», escribió Rosalie a su hijo. Robespierre, cada vez más desconfiado, veía los banquetes bajo una luz diferente. Le preocupaba que proporcionaran a los ricos la oportunidad de ganarse el favor de los pobres al darles comida y bebida. A petición suya, Barère los denunció en la Convención: «La fraternidad no consiste en comidas en las calles; no puede haber nada en común entre el opulento egoísta, que suspira por la desigualdad y los reyes, y el *sans-culotte*, lleno de franqueza, que sólo ama la República y la igualdad».[48]

El matiz religioso de la Fiesta del Ser Supremo ofrecía a los enemigos de Robespierre una vía para el ataque. El 27 de pradial del año II (15 de junio de 1794), Marc-Guillaume Vadier, miembro del Comité de Seguridad General, entregó un largo informe sobre una supuesta conspiración centrada en una anciana, Catherine Théot, que se había proclamado profetisa religiosa, la «Madre de Dios». Robespierre intervino para evitar que el caso llegara al Tribunal Revolucionario. Su actitud permitió a sus colegas insinuar que estaba protegiendo a una cábala de fanáticos religiosos e incluso que se veía a sí mismo como una figura mesiánica. Después de una furiosa discusión con sus colegas del comité, durante la cual Robert Lindet le gritó: «¡La nación no es un solo hombre!», Robespierre dejó de asistir a las reuniones del grupo; durante casi un mes, apareció en público sólo para asistir a algunas sesiones del Club Jacobino.[49]

A pesar de haber pasado su carrera revolucionaria denunciando conspiraciones, Robespierre no tomó ninguna medida efectiva para contrarrestar la que se estaba gestando contra él. Varios de sus colegas del Comité de Seguridad Pública, incluidos los radicales Billaud-Varenne y Collot d'Herbois, y otros más moderados, como Carnot y Barère, estaban dispuestos a atacarle, y él había conseguido poner en su contra a la mayoría de los miembros del Comité de Seguridad General. Los enemigos más peligrosos de Robespierre eran hombres que habían desempeñado un papel destacado en el Terror, en particular Joseph Fouché, que había iniciado la campaña de descristianización en el otoño de 1793; Jean-Lambert Tallien, que había supervisado la represión tras la sublevación federalista en Burdeos, y Paul Barras, que había estado en misión en Marsella. Que Robespierre se volviera contra los terroristas más violentos y luego cumpliera su promesa de 1793 de restablecer las protecciones constitucionales, no parecía imposible y, de hecho, muchos de sus biógrafos lo han sugerido.

Si Robespierre tuvo tal idea, fue increíblemente inepto para llevarla a cabo. Denunció a Fouché, cuyo compromiso con la descristianización le había ofendido profundamente, y logró que le expulsaran del Club Jacobino, pero sólo consiguió que Fouché intensificara su complot. Aprovechando los rumores de que Robespierre ya había decidido los nombres de los opositores que pensaba detener, Fouché advirtió a otros diputados: «Estáis en la lista, estáis en la lista y yo también, estoy seguro».[50] Mientras los conspiradores se arrimaban a los miembros de *la Plaine*, a quienes habían mantenido la cabeza gacha durante las peligrosas luchas entre facciones de los dos años anteriores, y a los miembros desafectos de las comisiones gubernamentales, el Incorruptible permaneció aislado, se veía sólo con unos pocos leales en su casa. Sus oponentes temían que pudiera encontrar apoyo en la Comuna de París, cuyo jefe, Claude-François Payan, nombrado para sustituir a Chaumette tras la detención de éste, era un inquebrantable seguidor de Robespierre. Los batallones militares de las secciones, cuya intervención había obligado a la Convención a expulsar a los girondinos el 2 de junio de 1793, seguían bajo

el mando de François Hanriot, otro fiel a Robespierre. Sin embargo, desde la caída de los hebertistas y Chaumette, la política que había impuesto el Comité de Seguridad Pública a la Comuna dejaba de lado a la población trabajadora, la protagonista del éxito de las *journées* de 1792 y 1793. Los funcionarios de la Comuna suprimieron rigurosamente las protestas de los trabajadores por los salarios y las condiciones de trabajo, insistiendo en que perturbaban el esfuerzo de la guerra, y el 5 de mayo de 1794 Payan prohibió las reuniones de las asambleas seccionales en las que los parisinos corrientes habían podido hacer oír su voz. Los *sans-culottes* tenían pocas razones para hacer caso de las llamadas de apoyo que hacían hombres que habían silenciado efectivamente su movimiento.

Durante las cruciales semanas previas a la crisis final, es posible que Robespierre estuviera enfermo o incluso que sufriera una especie de crisis nerviosa; en cualquier caso, era evidente que había perdido el instinto político que le había llevado a protagonizar la etapa revolucionaria. En los primeros días de ese mes, Barère, un moderado de corazón, pero que había sido un fiel aliado de Robespierre durante mucho tiempo, hizo un último esfuerzo por evitar una confrontación. El 4 de julio, los miembros de los dos comités se reunieron sin Robespierre. A cambio de promesas de que se aplicarían sus decretos de ventoso que pedían el reparto de tierras entre los pobres, Saint-Just prometió que convencería a Robespierre de que dejara de lado sus diferencias con sus colegas. Al día siguiente, Robespierre se unió al grupo y aprobó el acuerdo a regañadientes, pero sólo después de atacar personalmente a varios de sus colegas, cosa que sembró dudas acerca de su sinceridad. Luego desapareció de nuevo durante dos días y redactó un discurso sobre cuyo contenido los demás sólo podían especular.

En la mañana del 8 de termidor (26 de julio), Robespierre hizo su esperada reaparición en la Convención. Había escrito un discurso largo, pero le faltaba su habitual organización y claridad. Pintó un sombrío cuadro de una revolución en mayor peligro que nunca por facciones y conspiradores anónimos a sueldo de intereses extranjeros. Cualquiera que pensara que

Robespierre abogaría por una disminución del Terror debió estremecerse cuando llamó a las políticas del gobierno revolucionario «el rayo de la venganza lanzado por la mano de la libertad contra el crimen». Por encima de todo, los oyentes se sorprendieron por el tono personal del discurso. Una y otra vez, se quejó de que la persecución a la que le estaban sometiendo era injusta. «¿Qué [...] soy yo para que me acusen? Un esclavo de la libertad, un mártir viviente de la República», protestó. Ya cuando refutó indignado la acusación de que sólo quería el poder dictatorial, estaba claro que había llegado al punto de considerar cada pequeña oposición como una prueba de una conspiración. Esa misma noche, apareció en el Club Jacobino. Las divisiones entre los miembros del Comité de Seguridad Pública eran evidentes. Cuando Billaud-Varenne y Collot d’Herbois intentaron impedir que hablara, Robespierre respondió: «Es obvio que los facciosos que hay entre nosotros temen que los descubran en presencia del pueblo». Después de que lograra pronunciar su discurso, gritó a sus oponentes: «¡Conspiradores a la guillotina!».[51] Los organizadores del movimiento contra él se dieron cuenta de que tenían que actuar inmediatamente, antes de que lo hiciera Robespierre.

Según el acuerdo que habían alcanzado varios días antes los miembros de los dos comités directivos, se suponía que la sesión de la Convención del 9 de termidor (27 de julio) se abriría con un discurso de Saint-Just. Antes de que tuviera tiempo de leer apenas unas líneas, Tallien lo interrumpió y comenzó a atacar a Robespierre y a sus dos principales aliados en el Comité de Seguridad Pública, Saint-Just y Couthon. Robespierre trató de apoderarse del podio, pero lo silenciaron al grito de «¡Abajo el tirano!» y «¡Es la sangre de Danton la que lo ahoga!». La Convención votó para detener a Hanriot, el comandante de la sección de batallones. Vadier sacó a relucir la defensa que Robespierre había hecho de Catherine Théot; Tallien lo acusó de cobardía por no aparecer en público el 10 de agosto de 1792, y finalmente, varios diputados dieron el paso decisivo de pedir su detención. «¿Debe un hombre ser el amo de la Convención?», quiso saber uno de ellos. El hermano menor de Robespierre, Augustin, y su amigo Philippe Le Bas mostraron su devoción exigiendo que los detuvieran a ellos también, y la

Convención añadió los nombres de Saint-Just y Couthon al decreto. «Querían formar un triunvirato que recordara las sangrientas proscripciones de Sila», afirmó el diputado Stanislas Fréron, que había sido partidario de las medidas terroristas más extremas.[52]

Los cinco diputados detenidos se sometieron inicialmente a la autoridad de la Convención, pero los carceleros de las prisiones donde los enviaron, todos nombrados por el gobierno municipal pro-Robespierre, se negaron a asumir la responsabilidad de su encarcelamiento. El comandante de la Guardia Nacional, Hanriot, en un primer momento evitó el arresto y se lanzó a recorrer la ciudad, ordenando a las secciones que enviaran sus batallones al Hôtel de Ville, la sede del gobierno municipal que tan a menudo había servido de contrapeso al gobierno nacional durante las anteriores *journées* revolucionarias. Sin embargo, en lugar de lanzar inmediatamente un ataque contra la cercana Convención, los leales a la Comuna permanecieron en el Hôtel de Ville y perdieron su mejor oportunidad para acabar con sus oponentes. Mientras las noticias de los confusos acontecimientos del día circulaban por la ciudad, muchos ciudadanos siguieron con sus rutinas habituales; en la Place du Trône, el lugar relativamente aislado al que se había trasladado la guillotina, el verdugo despachó a cuarenta víctimas que podrían haber sobrevivido unos días más tarde.

Cuando el sol se puso a las siete y media de la tarde, guardias de varias de las secciones se reunieron en la plaza frente al Hôtel de Ville, aunque muchos todavía no estaban seguros de la naturaleza de la crisis y no tenían decidido a quién apoyar. Al oír las alarmas que sonaban en toda la ciudad, los prisioneros del Luxemburgo estaban aterrorizados: no tenían noticias, temían que se repitieran las matanzas de septiembre de 1792. La Convención designó al diputado Paul Barras para dirigir las fuerzas favorables a la Convención. Informados de las fugas de los diputados detenidos y de las actividades de Hanriot, la asamblea decretó que ahora estaban «fuera de la ley» y sujetos a una ejecución inmediata sin juicio en cuanto se los detuviera. La mayoría de las secciones se unieron a la Convención y algunas de ellas enviaron mensajes a sus unidades de

guardia, ordenándoles que regresaran del Hôtel de Ville. Dentro del edificio se reunió un comité insurreccional, pero no se dieron órdenes a los soldados que estaban fuera, en la plaza, cada vez más desconcertados. Eran más de las nueve de la noche cuando el primero de los diputados proscritos, Augustin Robespierre y Le Bas, llegó al Hôtel de Ville. Maximilien Robespierre se mostró poco entusiasmado por unirse a ellos; nunca había tomado protagonismo en ninguna de las insurrecciones de la Revolución. Cuando finalmente llegó, pasadas las diez, evitó aparecer en la gran sala de reuniones de la Comuna, que estaba llena de activistas deseosos de liderazgo; en cambio, se reunió sólo con los miembros del comité insurreccional, que «lo trataron como a un hermano y le dijeron que le protegerían».[53]

Conscientes del peligro mortal al que se enfrentaban, Robespierre y sus seguidores debatieron cómo formular su petición de apoyo. Couthon quería denunciar a la Convención como un nido de conspiradores, pero Robespierre seguía insistiendo en respetar la legitimidad de la asamblea. Mientras tanto, los guardias que se habían reunido en la Place de Grève frente al Hôtel de Ville comenzaron a irse. Algunos volvieron a sus secciones; otros se unieron al ejército que Barras estaba reuniendo. El fanfarrón Hanriot, que aparentemente desconocía que sus fuerzas se estaban disolviendo, continuó dando órdenes. Les dijo: «Si ven diputados [de la Convención] dirigiendo patrullas para hacer proclamaciones, agárrenlos […]. ¡Mucha energía, firmeza, y la causa del pueblo triunfará!».[54] Cuando las fuerzas de la Convención llegaron al Hôtel de Ville preparadas para un enfrentamiento, alrededor de la una de la madrugada, encontraron la Place de Grève desierta. Al entrar en el edificio, descubrieron que los robespierristas, reconociendo que la población no se había unido a su causa, ya habían abandonado la lucha. Le Bas se pegó un tiro; Augustin Robespierre y Hanriot quedaron gravemente heridos al saltar por las ventanas. Al paralítico Couthon, que se había unido al grupo en el Hôtel de Ville unos minutos antes del final, le sacaron de su silla de ruedas y le golpearon. Maximilien Robespierre sangraba copiosamente porque una bala

de pistola le había aplastado la mandíbula y no podía hablar; al parecer había intentado suicidarse.

Trasladaron a los prisioneros a las oficinas del Comité de Seguridad Pública, donde les trataron de sus heridas, y luego los llevaron a la prisión de la Conciergerie, mientras se instalaba la guillotina en la plaza de la Concordia. Finalmente, a las siete y media de la tarde del día 10 de termidor (el 28 de julio), comenzaron las decapitaciones. Al paso de los carros que llevaban a las víctimas a su destino, «era un día de fiesta, la gente elegante se asomaba a las ventanas para verlos pasar; todos aplaudían y vitoreaban a lo largo de la calle Saint-Honoré», escribió Nicolas Ruault. Robespierre sufrió una última humillación cuando el verdugo le arrancó la venda de la mandíbula y le dejó gritando de dolor al bajar la hoja.

Durante los dos días siguientes, asesinaron a más de cien de los que se habían unido a él el día 9 de termidor (27 de julio). Casi nadie se atrevió a expresar simpatía por las víctimas. Rosalie Jullien, cuyo hijo, Marc-Antoine, había sido uno de los favoritos del Incorruptible, fue un ejemplo de rapidez para encajar en el nuevo orden de cosas. «La rapidez de los acontecimientos es tan milagrosa como su importancia», escribió a su hijo, «y seis horas fue quizá todo el espacio que el destino utilizó para llevar a cabo tan extraordinarios cambios». Sólo lamentaba que «el infame Robespierre» hubiera «arrastrado a excelentes patriotas en su caída».[55]

La tentación de echar toda la culpa de la violencia y los excesos del Terror sobre los hombros de Robespierre era fácil de comprender. Pero habían sido miles los que habían participado en esos eventos, entre ellos los miembros del Comité de Seguridad Pública que siguieron en sus puestos. Desde luego, Robespierre no era inocente. Nunca se permitió la abierta defensa del derramamiento de sangre que había caracterizado a Marat y Hébert, nunca participó personalmente en las peleas callejeras de las *journées* de París, ni en las campañas de represión que muchos de sus colegas de la Convención supervisaban en las provincias. Pero justificó esa violencia argumentando que era inevitable y necesaria si se querían alcanzar los objetivos de la Revolución. La idealización que hacía Robespierre del pueblo le ganó un seguimiento popular que duró hasta bien entrado el

periodo del Terror, aunque era incapaz de relacionarse con la gente corriente como hizo Danton con tan buenos resultados. Robespierre fue también, al menos hasta los últimos meses de su increíblemente corta carrera pública –tenía treinta y seis años cuando murió– un político dotado, capaz de tomar el pulso a las fuerzas que competían en las complicadas situaciones a las que se enfrentó y de tomar medidas eficaces para alcanzar sus objetivos.

La mayor debilidad de Robespierre fue el reverso de su total compromiso con sus principios: para él aquellos que no compartían sus convicciones eran personas motivadas por intereses egoístas y, por tanto, fáciles de corromper y susceptibles de participar en conspiraciones. Algunos de los que se oponían eran corruptos, en efecto, o estaban dispuestos a utilizar medios inconstitucionales para oponerse a los principios básicos de la Revolución, o ambos; entre ellos, Luis XVI y María Antonieta, el general Dumouriez, Fabre d'Églantine y los demás participantes en el asunto de la Compañía de las Indias. Después de la guerra a la que él se opuso, Robespierre tenía motivos para considerar a los gobiernos extranjeros como enemigos peligrosos. Sin embargo, cada vez más metía en el mismo saco a todos los que se oponían a él junto con los genuinos enemigos de la Revolución y apoyaba medidas cada vez más violentas contra ellos.

Al final, estaba convencido de que todos los que no estaban de acuerdo con él formaban parte de un complot respaldado por extranjeros, en el que había federalistas, descristianizadores, indulgentes y monárquicos, todos ellos capaces de aparentar ser buenos patriotas. Le resultaba cada vez más difícil fiarse de los demás. A pesar de su profesada devoción por el pueblo, incluso llegó a ver las quejas por la escasez de alimentos y los bajos salarios como signos de una conspiración. La reticencia de muchos revolucionarios a prestar algo más que un mínimo apoyo a los principios morales incorporados en el culto al Ser Supremo aumentó su aislamiento. Para cuando llegó termidor, el Incorruptible se había convertido en una amenaza potencial para casi todos sus colegas: demasiado identificado con el gobierno revolucionario para poder ignorarle, pero demasiado impredecible para poder confiar en él. Por las mismas reglas que había aplicado a los

líderes de las otras facciones revolucionarias que había ayudado a eliminar, había que destruirle. Su muerte, aunque era inevitable según la lógica del sistema político que tanto había contribuido a crear, dejó un vacío enorme. Robespierre fue la última figura que realmente podía afirmar haber encarnado la visión de libertad e igualdad que había inspirado a tantos participantes en la Revolución. Su ejecución significó el abandono de las esperanzas utópicas que se habían expresado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dejando a sus sucesores la tarea de enfrentarse a la cuestión de qué valores representaban ahora el movimiento revolucionario y la República.

Los eventos del 9 de termidor pusieron fin a la carrera de Robespierre, pero la forma en que los vencedores de aquel día llevaron a los robespierristas a la guillotina indicaba que no estaban todavía preparados para abandonar los métodos que se empleaban durante el Terror. Muchos de los que pronto se conocieron como los «termidorianos» habían sido tan responsables de sus políticas como Robespierre, Saint-Just y Couthon. El coste humano del periodo de gobierno revolucionario fue alto, pero había logrado detener a las fuerzas combinadas de las otras potencias europeas, así como el levantamiento monárquico en el oeste y las revueltas federalistas. Con gran dificultad, el gobierno había evitado que la población urbana se enfrentara a una verdadera hambruna y había proporcionado a sus ejércitos suficientes suministros para que pudieran resistir. Si bien sus medidas más extremas habían aislado a buena parte de la población, el gobierno revolucionario también había inspirado el apoyo real de miles de personas comunes y corrientes, que actuaban como funcionarios locales, se comprometían como activistas, participaban en fiestas públicas y soportaban los sacrificios que se les exigían. Nadie podía afirmar que el Terror hubiera respetado los ideales de libertad proclamados en 1789, pero no era fácil descartar por completo el argumento que había esgrimido Robespierre cuando insistió en que no podían aplicarse las normas ordinarias en una situación de emergencia tan drástica como la que afrontaba el país en el año II. Aunque el Terror restringía la libertad, seguía promoviendo el otro gran ideal revolucionario de la igualdad, arraigándolo

profundamente en las mentes y las costumbres de la población. Incluso en retrospectiva, es difícil decir si los logros básicos de la Revolución podrían haberse mantenido en 1793 y 1794 sin algo parecido a una dictadura revolucionaria.

16

El nuevo comienzo de la República

Julio de 1794-octubre de 1795

Al final de la carta en la que describía los acontecimientos del 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794), Jean Dyzez, diputado de la Convención, escribió: «Ahora tendremos que esperar varios días para saber qué curso tomarán los acontecimientos». Su incertidumbre era la prueba de que los termidorianos no tenían objetivos claros más allá de librarse de Robespierre y de sus aliados más cercanos. Incluso cuando denunciaron al supuesto dictador el 9 de termidor, los termidorianos prometieron mantener la República y continuar la guerra total contra sus enemigos. Cuando algunos diputados exigieron la abolición del Tribunal Revolucionario y de los comités de vigilancia, que eran instrumentos esenciales del Terror, los líderes termidorianos, Tallien y Billaud-Varenne, se apresuraron a preservarlos, siempre y cuando se purgara a los leales a Robespierre, como el temido fiscal Fouquier-Tinville. «Cuidado sobre todo con ese fatal moderantismo que, mientras habla de paz y misericordia, es capaz de dar la vuelta a todo a su favor», exigió Barère. «Que el movimiento revolucionario no vacile en su curso purificador; y que la Convención siga aterrorizando a los traidores y a los reyes, a los conspiradores de dentro y a los gobiernos despóticos de fuera».[1]

Sin embargo, los vencedores de termidor se dieron cuenta rápidamente de que, después de acabar con el hombre que había simbolizado el Terror, no podían continuar ejerciéndolo sin más. El reto, como ha dicho un historiador, era «salir del Terror» sin desmontar el régimen revolucionario republicano para cuya protección se había ideado.[2] En general, siempre se ha considerado que los termidorianos fracasaron en este intento. Al igual

que los revolucionarios desacreditaron a la monarquía llamándola «el antiguo régimen», Napoleón y sus partidarios justificaron el derribo de la República postermidoriana en 1799 aduciendo que era tan débil y corrupta que no tenía remedio; pasaron por alto –muy convenientemente– el hecho de que el propio Napoleón y la mayoría de sus asociados políticos habían desempeñado un papel importante en ese periodo. Con la excepción de Napoleón, la segunda mitad del decenio revolucionario de Francia tampoco logró producir ninguna personalidad destacada. Mientras que Mirabeau, Danton y Robespierre se habían lanzado audazmente a la palestra, los hombres que asumieron el control de la República después de termidor tuvieron siempre reticencias y se abstuvieron de asumir posturas públicas de las que no pudieran retractarse. Un caso paradigmático de este estilo fue Sieyès, el más importante de los hombres de 1789 que resurgió como figura destacada después de termidor. Su lacónico voto en enero de 1793 a favor de la «muerte, sin discusión», después del juicio de Luis XVI, había evitado que le acusaran de ser un moderado durante el Terror, pero cuando le preguntaron qué había hecho durante ese periodo, respondió simplemente: «He sobrevivido». La cautela y la flexibilidad política que caracterizaron a los políticos después de termidor crearon una nueva atmósfera de desconfianza entre ellos: nadie sabía quién iba a mantener sus principios proclamados públicamente y quién estaba preparado en secreto para acoger el regreso de la monarquía o el abandono de otros cambios revolucionarios importantes.

Sin embargo, hasta el golpe de Estado de Napoleón del 18 brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), los líderes de Francia y sus ciudadanos no sabían que la República resultaría tan efímera. Para muchos de ellos, termidor parecía haber dado al movimiento un nuevo comienzo, una oportunidad de corregir los errores que habían llevado a la época del Terror y de crear instituciones que realmente protegieran la libertad y la igualdad. Los años de 1794 a 1799 también fueron testigos de una dramática expansión del impacto de la Revolución fuera de Francia. Las conquistas militares engrosaron el orgullo nacional francés y sacudieron instituciones centenarias como el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico. Ver a

hombres negros, que antes habían sido esclavos, ejercer los mismos derechos que los ciudadanos franceses, y a uno de ellos, Toussaint Louverture, en el puesto de gobernador de una importante colonia, escandalizó a los defensores de la esclavitud y la jerarquía racial en todo el hemisferio occidental. La invasión francesa de Egipto en 1798 marcó el comienzo de las modernas incursiones europeas en el mundo musulmán, iniciando los conflictos que continúan hasta hoy. La segunda mitad de la década revolucionaria de 1790 es, por lo tanto, una parte esencial de la saga revolucionaria.

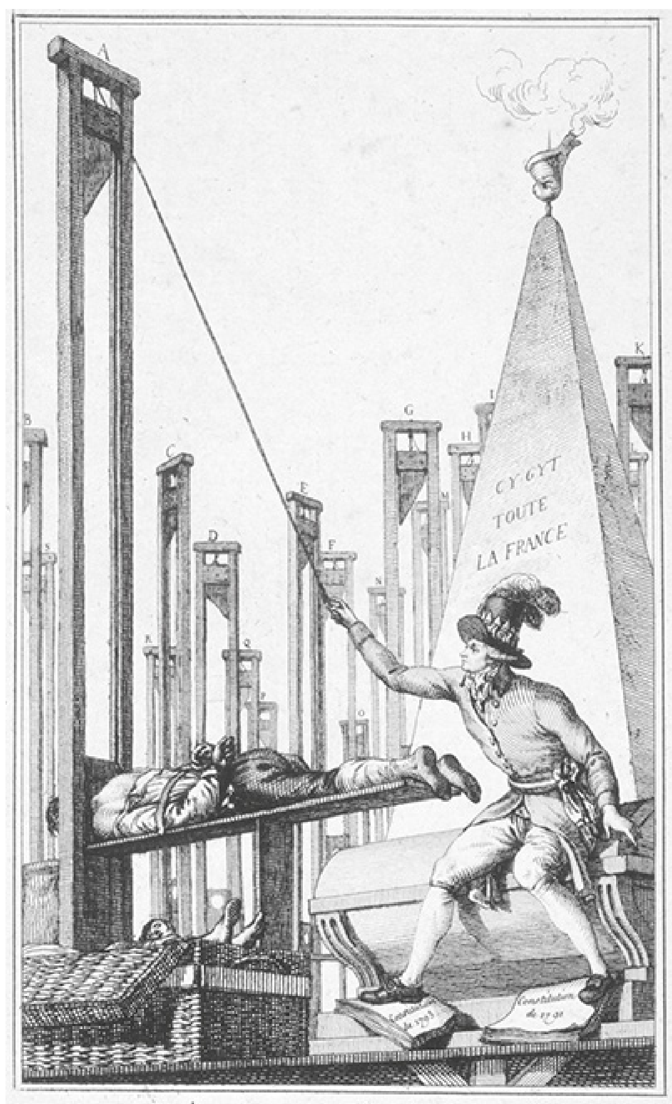
Tras su muerte, Robespierre se transformó en el dictador que nunca había sido en vida. Al caricaturizarlo como un monstruo patológico, los termidorianos pudieron culparle de todos los excesos del Gobierno del Terror y hacer el papel de víctimas inocentes. Un panfleto anónimo afirmaba que gracias al coraje de los termidorianos se había podido desbaratar el plan de «asesinar la Convención Nacional y casar a la hija de Capeto [la hija de Luis XVI y María Antonieta] con Robespierre para reinar juntos y hacer que mataran a 80.000 ciudadanos». Cuando a Billaud-Varenne y a otros miembros del Comité de Seguridad Pública les afearon su conducta por haber seguido la política de Robespierre, él respondió: «¿Hemos olvidado que, en la Convención Nacional, Robespierre se convirtió pronto en el hombre que, al centrar toda la atención en su propia persona, ganó tanta confianza que se erigió en líder?».[3] Tan pronto como tuvieron noticia de su caída, los funcionarios locales y las sociedades populares se apresuraron a unirse para denunciar «al audaz dominador del pueblo y de sus representantes [...], ese tigre sediento de sangre», y aplaudir a quienes lo habían derrocado.[4]

En cualquier caso, los termidorianos aprendieron rápidamente que, al derrocar a Robespierre, habían desatado fuerzas que no podían controlar. En un pequeño pueblo del norte de Francia, el escritor Charles Lacretelle vio cómo la gente se agolpaba para oír los detalles. «Todos estos transeúntes, que el día anterior no se hablaban porque desconfiaban de todos, ahora se

saludaban y hablaban entre ellos como viejos amigos. Estaba claro que, una vez disipado el terror de su alma, no se podría reinstaurar». Apenas cinco días después del 9 de termidor, la presión popular consiguió que la Convención derogara la ley del 22 de pradial y la sustituyera por normas que permitían a los jurados absolver a los acusados si llegaban a la conclusión de que no habían actuado con intención criminal. Cuatro días después, la Convención ordenó la liberación de los sospechosos a los que se había detenido injustamente. Cuando Tallien fue personalmente a la prisión del Luxemburgo para abrir las puertas de algunos de ellos, «se agolpó una multitud, lo cubrió de bendiciones, le abrazó, abrazó a los que habían recuperado la libertad […]. Los ojos de todos se llenaron de lágrimas de alegría y de emoción», informó un periodista. Pero la apertura de las prisiones provocó una reacción en cadena de reproches y acusaciones cuando los que se habían considerado sospechosos quisieron conseguir el despido o el castigo de quienes los habían acusado. Plantearon una pregunta embarazosa: «¿Es posible que Robespierre hiciera tanto mal él solo?»[5]

En cuanto se dieron cuenta de la importancia que iba a tener esta reacción, los líderes termidorianos comenzaron a poner distancia no sólo con Robespierre, sino también con las políticas del Gobierno del Terror. El 2 de fructidor del año II (19 de agosto de 1794), cuando un diputado reavivó la petición de «mantener el terror en todas partes como orden del día», Tallien respondió: «El terror es el arma de la tiranía». Entonces pidió que se pusiera fin a las denuncias a antiguos nobles y otros por el mero hecho de su estatus en el antiguo régimen. El 11 de fructidor (28 de agosto), Tallien pronunció un largo discurso en el que expuso un análisis del Terror como «sistema» y evocó los mecanismos psicológicos que habían hecho que funcionara. No era su estilo habitual en absoluto, muchos sospechaban que alguien se lo había escrito. Dijo que un gobierno basado en el terror «implica también un poder absoluto [...] que no debe obediencia ni responsabilidad a nadie». El miedo, «cuando se ha convertido en un estado mental habitual, hace que los hombres no piensen más que en sí mismos y en la parte menos digna de sí mismos, me refiero a su supervivencia física. Rompe todos los lazos, extingue todos los afectos, aleja a la gente de la

fraternidad, de la sociedad, de la moralidad», continuó, anticipando así los análisis del totalitarismo más significativos del siglo XX. Tallien, durante su misión en Burdeos, se había enamorado de una «sospechosa» mujer sorprendentemente bella y rica, Teresa Cabarrús. Es posible que estuviera pensando en su relación con ella cuando agregó que el Terror había alterado las interacciones entre hombres y mujeres: «La experiencia de un año ha demostrado que el arte de hacer temblar a los hombres es un medio infalible de corromper y degradar a las mujeres».[6]



Robespierre guillotinando al verdugo. La propaganda termidoriana culpó a Robespierre de todos los excesos del Terror. En esta caricatura, la guillotina se ha multiplicado y, cada máquina representa a un grupo diferente de víctimas. Crédito: © Musée Carnavalet / Roger-Viollet.

Las propuestas reales de Tallien fueron más cautelosas que su análisis de la psicología del Terror. Quería que la Convención reafirmara que el gobierno de Francia seguiría siendo revolucionario mientras continuara la guerra y acalló cualquier sugerencia de celebrar nuevas elecciones. Tampoco sugirió que entrara en vigor la nueva Constitución de agosto de 1793, que se había aprobado con tanta ceremonia. Sin embargo, cuando

pidió que la justicia, y no el terror, estuviera «a la orden del día», suscitó acalorados debates sobre la responsabilidad del Terror. El diputado Laurent Lecointre exigió que se acusara a Billaud-Varenne, a Collot d'Herbois, a Barère y a cuatro miembros del Comité de Seguridad General de haber «llenado Francia de prisiones, de mil Bastillas». En su primera gran intervención en un debate de la Convención, Jean-Marie Goujon se levantó para señalar el peligro que tenía poner en tela de juicio toda la Revolución: «Se acusa a la Convención, se juzga al pueblo francés». El dantonista Louis Legendre advirtió que reexaminar los acontecimientos pasados podría desacreditar no sólo a los políticos, sino también a «los que quemaron los castillos al principio de la Revolución», a los campesinos cuya sublevación contra el feudalismo en 1789 había hecho posible el movimiento.[7]

Un desastre público, la explosión de un polvorín en la Rue de Grenelle en París, que mató e hirió a cientos de personas y causó más daños a los edificios de la ciudad que cualquiera de las *journées* revolucionarias, reavivó momentáneamente los temores a las tramas contrarrevolucionarias y desvió la atención de la política. Pero la opinión se estaba poniendo en contra de los jacobinos, y otros diputados insistieron en denunciar aspectos del Terror que seguían afectando al país. El 14 de fructidor del año II (31 de agosto de 1794), Grégoire, que ya en la época de la campaña de descristianización se había opuesto a la destrucción de los monumentos artísticos vinculados a la Iglesia y a la monarquía, tildándola de «vandalismo», presentó un extenso informe sobre el tema. El diputado y científico Antoine-François Fourcroy se unió a él y recordó a la Convención que «querían quemar las bibliotecas; habían paralizado la educación […]. ¿Cómo se podía esperar tener ciudadanos educados, cuando se perseguía a los hombres educados, cuando bastaba con tener conocimientos o ser un hombre de letras, para que lo detuvieran a uno por aristócrata?». Unas semanas más tarde, Edmond Dubois-Crancé denunció las acusaciones contra los ricos, «todos aquellos cuya fortuna pone en marcha el talento y la industria del pueblo, a los que se saqueó y asesinó bajo la acusación de ser aristócratas».[8] Su discurso fue el principio de una campaña contra los controles económicos asociados con el Terror.

El movimiento que pronto se conocería como «reacción termidoriana» no se limitaba a París. A los pocos días de la caída de Robespierre, se empezaron a extender las expulsiones y, en algunos casos, las detenciones de funcionarios y activistas locales que habían llevado a cabo las políticas del Terror. Uno de los que se vio envuelto en la caza de robespierristas en las provincias fue Napoleón Bonaparte, el joven oficial de artillería cuya carrera impulsó Augustin, el hermano de Maximilien, en tiempos de su misión en Provenza. Durante doce días, Bonaparte estuvo en arresto domiciliario en Niza. Incluso después de que le liberaran, su carrera se descarriló durante un tiempo. A nivel local, los objetivos eran a menudo los miembros más activos de los comités revolucionarios, a los que se acusaba de detenciones arbitrarias y de abuso de poder; se encarceló a numerosos jacobinos, ya que los sospechosos que ellos habían encarcelado anteriormente ahora estaban en libertad.

A medida que aumentaban las críticas sin tapujos a las políticas heredadas del gobierno revolucionario, se fue desmoronando la coalición improvisada entre los que todavía se identificaban con el gobierno revolucionario y los que estaban dispuestos a abandonarlo. El 17 de fructidor (3 de septiembre), el Club Jacobino, punto de encuentro de los que todavía se identificaban con el régimen de los montañeses, expulsó a Tallien y a Stanislas Fréron, su colaborador más cercano, que habían sido dos de los principales artífices del 9 de termidor. Pero los defensores del Terror se pusieron a la defensiva cuando comenzó el juicio a 94 hombres de la ciudad bretona de Nantes a los que había detenido el diputado Jean-Baptiste Carrier durante el Terror cuando lo enviaron allí en misión el otoño de 1793. El testimonio de los testigos en el juicio puso de manifiesto las atrocidades que Carrier había cometido y ordenado; como consecuencia los jacobinos acérrimos sufrieron un «bajón terrible en la opinión pública», según un informe policial. Se absolvió a los acusados y se juzgó a los acusadores, terroristas militantes que habían operado bajo el mando de Carrier, que habían llevado a cabo las matanzas masivas en Nantes a finales de 1793 y principios de 1794. Los antiguos terroristas insistieron en que Carrier les había dicho que «vaciaran las prisiones» y eliminaran no sólo a

los presos de la Vendée, sino también a «los acaparadores, los comerciantes, los federalistas, los ricos, los moderados»: en otras palabras, a la burguesía.[9] El juicio a los terroristas de Nantes precipitó un cambio decisivo en el ambiente político. Se oyeron gritos en las calles e incluso en la sala del tribunal; se exigía que se juzgara también a Carrier, que seguía siendo un miembro activo de la Convención y participaba en las reuniones del Club Jacobino.

La campaña contra Carrier no fue del todo espontánea: después de que los expulsaran del Club Jacobino, algunos de los conspiradores termidorianos, en particular Tallien y Fréron, se lanzaron a la guerra total contra los defensores del gobierno revolucionario. Aunque ellos mismos eran exrevolucionarios extremistas, ahora estaban dispuestos a aliarse con quien se opusiera al movimiento. La joven esposa de Tallien, Teresa Cabarrús –«la humanidad hecha persona de la forma más deslumbrante», como dijo uno de sus admiradores– tuvo un papel activo en la campaña de su marido.[10] Su salón se convirtió en un campo de reclutamiento de antiguos miembros de las facciones moderadas y contrarrevolucionarias, cuya lealtad a la República había sido puesta en duda. Un grupo de jóvenes se hizo cargo de periódicos cuyos anteriores directores habían sido víctimas del Terror; así se unieron a Fréron, cuyo *Orateur du peuple*, con una tirada de quince mil ejemplares, se había convertido en la revista política más popular del país, en la que se denunciaba a los jacobinos.

Además de librar una guerra de palabras, los periodistas estaban decididos a tomar las calles y los lugares públicos de París. Uno de ellos era Isidore Langlois, que había competido con Jacques Ménétra por el control de la sección de Bonconseil en la primavera de 1793. Langlois había pasado gran parte del Terror en prisión. Conscientes del poder simbólico de la vestimenta, él y sus amigos adoptaron deliberadamente un atuendo que mostraba su distancia: abrigos de confección tosca y las gorras de la libertad de color rojo que vestían los *sans-culottes*. Langlois y sus aliados llevaban una chaqueta hecha a medida, un alto cuello de seda y un

sombrero de copa. Armados con pesados bastones, estos *muscadins*, como se llamaba a los miembros de la *jeunesse dorée* (juventud dorada) termidoriana, tenían la misión de interrumpir las reuniones de sus oponentes en las calles y otros lugares, para deleite de las *merveilleuses*, sus equivalentes femeninos, cuyos reveladores vestidos y extravagantes joyas eran señal de rechazo a la austeridad republicana. A principios de 1795, la juventud dorada había adoptado un himno, «Le reveil du peuple» («El despertar del pueblo»), que había compuesto uno de sus miembros. Su verso inicial era: «Pueblo francés, pueblo de hermanos, / ¿puedes ver sin un escalofrío de horror, / el crimen desplegando sus estandartes de carnicería y terror?». Era suficiente para que todos los partidarios de la Revolución que lo oyeran entendieran bien el mensaje: si respondían cantando «La Marsellesa», seguro que estallaría una pelea.

Los defensores del Terror iban perdiendo terreno. La Convención impidió que los clubes jacobinos se comunicaran entre sí, de modo que se aisló al club de París de su red de apoyo en las provincias. Los miembros de la *jeunesse dorée* atacaron al menguante número de jacobinos parisinos, y a mediados de noviembre, el otrora poderoso club se cerró y se llevó a juicio al diputado Carrier. Aprovechando los detalles escabrosos del juicio de Nantes, que incluía afirmaciones infundadas de que los asesinos habían hecho juramentos sellados con la sangre de sus víctimas, los periódicos convirtieron el apodo *buveurs du sang* (bebedores de sangre) en sinónimo de «jacobinos», lo que dañó fatalmente la imagen pública de sus oponentes. Como se habían temido otros diputados montañeses, el intento que hizo Carrier por justificarse creó problemas para todos aquellos que habían visto el Terror como una política dura pero necesaria. «Hoy, cuando las cosas están en calma», argumentó Carrier, «estos horrores nos hacen temblar, pero recuerden los tiempos y las circunstancias […]. En ese momento, estábamos convencidos de que no se podía ser patriota sin llegar al extremismo […]. Los decretos decían que se quemara y se exterminara. Declaro que dije a la Convención lo que había hecho […]. ¡Volví a la Convención, me recibieron con los brazos abiertos, y un año más tarde todo se vuelve contra mí!».[11] Sin embargo, para la mayoría de los diputados, la

necesidad de demostrar que la propia República podía castigar a los que habían cometido excesos en su nombre justificó la condena y la ejecución de Carrier. El procesamiento de Carrier coincidió con las reivindicaciones para que se rehabilitara a las víctimas del Terror. Políticamente, el tema más candente fue el destino de «los 73», los diputados de la Convención encarcelados en el otoño de 1793 por haber firmado una petición a favor de los girondinos. A finales de octubre, se liberó a los miembros supervivientes del grupo y a otros diputados, como Thomas Paine, y se les permitió recuperar sus escaños en la Convención el 8 de diciembre de 1794. Su readmisión inclinó aún más la balanza del poder en la asamblea hacia el repudio del Terror.

Mientras los diputados debatían las políticas del periodo del Terror, la población también hizo oír su opinión. Las viudas comenzaron una vigorosa campaña para recuperar las propiedades de sus maridos ejecutados por sospechosos y para limpiar sus nombres de la acusación de traición. Además, los legisladores se vieron inundados de peticiones críticas respecto a las leyes revolucionarias sobre el divorcio y la herencia. «El orden social está completamente anulado», se quejaba el autor de una carta que no estaba de acuerdo con las nuevas reglas sobre la división de la propiedad familiar. Los críticos sostenían que la ley igualitaria de divorcio aprobada en 1792 había hecho peligrosamente fácil para la mujer «escapar a la severa vigilancia del marido»; además, la división igualitaria de la herencia, decían, daba demasiada independencia a la mujer. «Sin duda, el hombre está dotado por naturaleza para ser el amo de la mujer –escribió un hombre–. Hoy, por ley, se convierte en su esclavo». Las mujeres no sufrieron estos desafíos en silencio. Un «Discurso de las ciudadanas de la antigua Normandía» calificó la ley de herencia como una corrección necesaria a las prácticas que habían dejado a las hijas empobrecidas mientras «sus hermanos vivían en la ociosidad y la opulencia».[12] Aunque muchos legisladores termidorianos estaban más bien a favor de la idea de que las leyes revolucionarias habían minado la base de la autoridad en el seno de la familia, por el momento no se modificaron las principales disposiciones que regían el matrimonio y la herencia.

Mientras la Convención se enfrentaba a cuestiones explosivas surgidas de la revisión de lo que se había hecho durante el Terror, todavía trataba de avanzar en la remodelación de la sociedad francesa. Incluso durante los momentos más turbulentos de 1794, el Comité de Instrucción Pública de la Convención había seguido trabajando para reemplazar el puzle que había sido el sistema escolar del antiguo régimen, por ejemplo, que quedó paralizado por la campaña contra la Iglesia. En la tormentosa atmósfera de 1793, la Convención había promulgado y luego suspendido o ignorado dos propuestas: la primera, y más radical, era que se educara a todos los niños varones en internados; la otra era dar a los padres ayudas para pagar la educación de sus hijos en cualquier escuela de su elección. Sin embargo, no se había hecho nada para crear un nuevo sistema escolar. El 7 de brumario del año III (28 de octubre de 1794), el diputado Joseph Lakanal presentó finalmente una propuesta integral sobre la educación básica. Su recomendación se basaba en la convicción de que una educación común, compartida por igual por todos los ciudadanos y financiada por el Estado, era esencial para garantizar la perpetuación de los logros de la Revolución. «Un pueblo ilustrado debería ser capaz de mantenerse libre», prometía su informe. «¿Cómo podría ser tan débil como para estar encadenado, si tiene una idea adecuada del hombre? ¿Si ve la tiranía con todo el horror que inspira?». La tarea era abrumadora: Lakanal calculó que un sistema nacional de educación primaria requeriría 24.000 escuelas con casi 40.000 maestros para acomodar a unos 3,6 millones de niños, el 15 por ciento de la población nacional. «El objetivo de nuestros legisladores parece ser que los franceses no sólo sean las personas más libres, sino también las más instruidas del universo», escribió un periodista favorable al proyecto.[13]

Aunque la ley Lakanal, que se debatió ampliamente y que se aprobó el 27 de brumario (17 de noviembre), prefiguraba el sistema educativo nacional que Francia instauraría finalmente en los últimos años del siglo XIX, era demasiado costosa y ambiciosa para aplicarla con éxito en 1794. Lakanal tuvo más éxito con su propuesta de establecer escuelas de formación de maestros en París y en los departamentos para preparar a los profesores de enseñanza secundaria. La institución que hoy se conoce como

École normale supérieure (ENS) abrió sus puertas en enero de 1795 y desde entonces ha atraído a muchos de los estudiantes más destacados del país. La ENS fue sólo una de las numerosas instituciones educativas y de investigación que se fundaron durante el periodo termidoriano. La Escuela Politécnica, destinada a la formación de ingenieros, se había creado un mes antes; al igual que la ENS, sigue siendo una parte prestigiosa del sistema de enseñanza superior de Francia. En diciembre de 1794, la Convención aprobó la legislación para establecer también escuelas médicas modernas. Su plan de estudios se basaría en las reformas propuestas en los primeros años de la Revolución, poniendo fin a la tradicional separación de la medicina teórica de la práctica clínica y la cirugía.

Los termidorianos, que habían abolido las academias reales prerrevolucionarias en 1793, completaron su sistema de instituciones académicas justo antes de la disolución final de la Convención Nacional en octubre de 1795, con la creación del Institut national, conocido ahora como el Institut de France. A diferencia de las antiguas academias, el Institut era una institución basada enteramente en la meritocracia, sin asientos reservados para miembros elegidos en función de su condición social. Con secciones separadas dedicadas a las ciencias naturales, las ciencias sociales y las artes y la literatura, el instituto se pensó para promover la investigación y la invención en todas las áreas de la cultura. Junto con el Musée national d'histoire naturelle (Museo Nacional de Historia Natural), un centro de investigación biológica creado en 1793, las nuevas escuelas y el Instituto Nacional dotaron a Francia de un conjunto de instituciones científicas y culturales sin parangón en el mundo.

Con la legislación de la Convención termidoriana sobre la escolarización y la creación de nuevas instituciones para sustituir a las academias reales se cerró la brecha que se había abierto durante el Terror entre la Revolución y los científicos e intelectuales del país. Robespierre los había denunciado por ateos, y grandes figuras, como el químico Antoine Lavoisier y el diputado filósofo Condorcet, terminaron por suicidarse o en la guillotina. Entre los crímenes que los termidorianos amontonaban ahora sobre los hombros de Robespierre estaba su supuesto intento de «convencer

al pueblo de que la ilustración es peligrosa y sólo sirve para engañarlo». En abril de 1795, la Convención patrocinó la primera publicación de *Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano* de Condorcet, que había afirmado el inevitable triunfo de la razón; la obra proporcionó una legitimación ideológica de la República. Sin embargo, incluso durante el Terror, los escritores y sabios imbuidos del espíritu secular del siglo XVIII se habían negado a creer que el movimiento revolucionario los rechazaría por completo. A finales de abril de 1794, algunos de ellos habían publicado el primer número de una nueva revista, *Décade philosophique (Década Filosófica)*, en la que se acogía con satisfacción la democratización de la vida intelectual y artística: «No más obstáculos ni humillaciones para el desarrollo del genio; no más injusticias que temer, sin necesidad de cortejar a los poderosos, sin tener que aceptar humillaciones», proclamaba.[14] Cautelosa a la hora de seguir la línea revolucionaria oficial en los meses anteriores a termidor, la revista se convirtió posteriormente en el órgano central para aquellos que veían en la República posrobespierrista una oportunidad para crear una sociedad regida por los dictados de la ciencia y la razón.

Al mismo tiempo que tomaban medidas que animaban a los discípulos de la Ilustración a adherirse a la República, los termidorianos tuvieron que lidiar con las cuestiones religiosas que tanto habían alimentado la violencia del periodo del Terror. Aunque la Convención, a instancias de Robespierre, había condenado la violenta campaña de descristianización de diciembre de 1793 y había prometido que se respetaría la libertad de culto, en la práctica habían dejado de hacerse todo tipo de celebraciones religiosas públicas. Los sacerdotes refractarios o *non-jureurs* –los que se habían negado a prestar el juramento impuesto por el gobierno– estaban escondidos, en prisión o en el exilio, y muchos de los clérigos católicos constitucionales y ministros protestantes que sí habían prestado juramento –los *jureurs*– habían renunciado por completo a sus funciones religiosas. Los intelectuales inspirados por la Ilustración, que dominaron las nuevas instituciones académicas de Francia, siguieron siendo críticos con la religión y se opusieron a cualquier retroceso del gobierno que pudiera permitir a la

Iglesia recuperar su influencia. En estos círculos, el nuevo libro más discutido de 1795 fue *Origine de tous les cultes, ou religion universelle (Compendio del origen de todos los cultos)* de Charles-François Dupuis, un hito en el estudio comparativo de la religión. Dupuis sostenía que las creencias religiosas eran creaciones humanas inspiradas en los esfuerzos por aplacar las fuerzas de la naturaleza. En su opinión, el portador de luz «designado por los cristianos con el nombre de Cristo, no es más que el sol, o la divinidad adorada por todos los pueblos, bajo tantas formas y nombres diferentes».[15]

Una ley termidoriana aprobada en un «día bisiesto» del calendario revolucionario, 2 *jour complémentaire* del año II (18 de septiembre de 1794), anuló los salarios que se habían seguido pagando a los sacerdotes de la Iglesia constitucional: desde el punto de vista legal, la Iglesia y el Estado estaban ahora totalmente separados. En la práctica, se toleraban las reuniones privadas con fines religiosos, pero el culto público seguía estando controlado. Grégoire, el líder del clero constitucional que todavía permanecía activo y el más dedicado defensor de la libertad religiosa del país, se quejó de que «hay libertad de culto en Turquía; en Francia, no». Muchos de los termidorianos habían estado entre los principales defensores de la descristianización, y no dieron su apoyo. Legendre, que era dantonista, respondió: «Pensé que la Revolución había avanzado lo suficiente como para no tener que ocuparnos más de la religión».[16]

Grégoire por fin convenció a sus colegas de que aprobaran una ley que protegiera la observancia religiosa siempre que se organizara de forma privada. La ley del 3 de ventoso del año III (21 de febrero de 1795) trataba a todas las religiones por igual y suponía una política de neutralidad del Estado, lo que significaba que Francia aceptaba la diversidad religiosa. Los católicos se apresuraron a reanudar el culto regular. «Nuestras iglesias no son lo suficientemente grandes para albergar a todos aquellos que quieren ir a escuchar la misa», escribió un periódico de París.[17] La ley no satisfizo ni a los demás partidarios de la Iglesia constitucional, que continuaron llamando la atención del gobierno sobre lo que consideraban actividades subversivas de sus más numerosos oponentes refractarios, ni a los católicos que seguían

rechazando las reformas revolucionarias que se habían realizado en la Iglesia. Desde sus refugios en los países vecinos, los obispos refractarios exiliados enviaron «vicarios apostólicos» para tratar de volver a poner en marcha el culto regular en las parroquias que habían perdido a sus sacerdotes durante el Terror. Los obispos se preocuparon no sólo por desafiar la hostilidad del gobierno republicano, sino también por limitar la difusión de las nuevas formas de culto católico que habían organizado hombres y mujeres laicos durante el Terror: el pueblo se había acostumbrado a celebrar «misas blancas» sin sacerdotes, una iniciativa que amenazaba a la jerarquía tradicional de la Iglesia.

Los sacerdotes refractarios que regresaron al país encontraron a muchos aliados entre las mujeres. «Estas mujeres que deberían cuidar de sus hogares, velar por la felicidad de sus maridos y la crianza de sus hijos, van de familia en familia y las aburren o molestan con su ridículo parloteo teológico», se quejaba el periódico del clero constitucional. En cuanto a los propios sacerdotes refractarios, decía, «rehacen las confesiones, vuelven a casar a las parejas, rebautizan […], cometen un montón de extravagancias que van en contra de las simples y saludables nociones de religión». Entre otras cosas, los «constitucionales» acusaban a sus rivales de advertir a los compradores de las propiedades eclesiásticas expropiadas que tendrían que devolverlas, una amenaza destinada a inquietar a los nuevos propietarios. Los partidarios de la Iglesia refractaria se sintieron aliviados al poder recibir de nuevo los sacramentos y, en algunas comunidades, recuperaron el uso de los edificios eclesiásticos. «Culto público, 29 de junio, POR LA GRACIA DE DIOS», anotó la monja Gabrielle Gauchat en su diario.[18] Pero aún anhelaban que se reinstauraran manifestaciones de la posición privilegiada de la Iglesia católica en la vida pública, como el repique de las campanas y el derecho de los sacerdotes y otros religiosos a llevar su ropa distintiva en público.

La relajación de las restricciones respecto al culto religioso se unió a ciertas medidas para atenuar algunos de los edictos más rigurosos contra los *émigrés* que habían huido del país durante el Terror. Una ley del 20 de nivoso del año III (10 de enero de 1795) permitía el regreso de los

campesinos o artesanos que se hubieran marchado después de la *journée* del 31 de mayo de 1793, cuando expulsaron a los girondinos de la Convención. Esto benefició a miles de campesinos alsacianos que habían cruzado el Rin junto con el ejército austriaco que se retiraba, y a los trabajadores de la seda de Lyon que habían huido para escapar de la represión tras la revuelta federalista. La ley de Grégoire sobre la libertad religiosa permitió a los sacerdotes emigrados regresar siempre que estuvieran dispuestos a prestar un juramento en defensa de la libertad y la igualdad; ya no estaban obligados a aceptar la Constitución Civil que el Papa había condenado.

Así, los termidorianos rebajaron el nivel de la campaña contra la Iglesia, ofrecieron la amnistía a algunos emigrados, e intentaron controlar los conflictos en las regiones rebeldes del oeste. Incluso antes de la caída de Robespierre, el Comité de Seguridad Pública había llamado al general Louis-Marie Turreau y había puesto fin a la matanza indiscriminada de civiles en la Vendée. El 17 de febrero de 1795, François Charette, el principal dirigente de la Vendée, firmó un tratado en el castillo de La Jaunaye. Sus disposiciones incluían el permiso para que la Iglesia refractaria celebrara sus ritos en la región y la promesa de que sus habitantes no serían reclutados para el ejército ni se les exigiría el pago de impuestos durante un periodo de diez años. A finales de la primavera de 1795, el gobierno de París pensó que finalmente había terminado la guerra civil que había costado miles de vidas y amenazaba la supervivencia de la Revolución.

El fin de la lucha activa en el oeste de Francia coincidió con los avances militares más allá de las fronteras del país. A lo largo del otoño, los soldados franceses consolidaron su avance en Bélgica tras su victoria en Fleurus. Los soldados del frente pagaron un alto precio por estos éxitos, pero muchos de ellos continuaron expresando sentimientos patrióticos en sus cartas a casa. «Hace dos meses que dormimos en la misma paja en nuestras madrigueras», escribió un capitán del ejército del Rin a su madre a finales de 1794. «Sin embargo, la esperanza de ver a nuestro país triunfar

sobre todos sus enemigos nos hace soportar el sufrimiento con paciencia». Los termidorianos aprovecharon estos logros militares para fomentar un nacionalismo cada vez más agresivo. Cuando la guerra comenzó en 1792, se anunció como una cruzada idealista para llevar la libertad a otros pueblos. Durante las luchas desesperadas para derrotar a los invasores, el patriotismo significaba defender el territorio francés. Ahora las victorias se celebraban como prueba de la superioridad francesa sobre otros países. Las buenas noticias del Caribe aumentaron la sensación de que Francia consolidaba su posición como potencia mundial. El comisario republicano Victor Hugues expulsó a los británicos de Guadalupe, y una carta de Saint-Domingue anunciaba que «Toussaint Bréda ha tomado Saint-Michel y Saint-Raphaël», dos ciudades del Santo Domingo español. Fue la primera mención que se hacía en la prensa francesa del general negro Toussaint Louverture.[19]

A principios de 1795, los franceses invadieron los Países Bajos. Su llegada reavivó el movimiento republicano holandés, que había desafiado la autoridad de su gobernante, el estadista Guillermo V de Orange, antes de que la intervención prusiana acabara con los republicanos en 1787. Numerosos patriotas holandeses se habían refugiado en Francia. En 1793 habían tenido la esperanza de que la invasión de Dumouriez llegara a su país y formaron una legión militar para participar en la campaña. La derrota de la primera invasión francesa de los Países Bajos los decepcionó, pero continuaron movilizándose por la «liberación» de su patria. En el interior del país, los patriotas formaron una red de clubes –supuestas «sociedades de lectura»– para preparar un levantamiento revolucionario una vez que la ayuda francesa estuviera lo suficientemente cerca para apoyarlos.

Mientras los republicanos holandeses se preparaban para poner en marcha su propia versión de 1789, los republicanos franceses ya no estaban de humor para fomentar levantamientos radicales; el Comité Termidoriano de Seguridad Pública estaba ocupado por entonces en lograr victorias militares contra los británicos y recursos económicos para su propio esfuerzo bélico. A causa de un invierno muy frío cuyas consecuencias en el interior del país preocupaban cada vez más al gobierno francés, se

aceleraron los acontecimientos militares. A mediados de enero, se helaron los múltiples afluentes del Rin que tradicionalmente servían de freno ante los ejércitos invasores, lo cual permitió que los franceses atravesaran las líneas enemigas de defensa y llegaran a Ámsterdam. A medida que los franceses avanzaban, los líderes del movimiento de clubes holandeses expulsaron a los partidarios del estatúder de los gobiernos locales y proclamaron una «República bátava». Los republicanos holandeses consideraban que habían llevado a cabo su propia revolución, aunque hubiera sido con el apoyo de Francia, y su objetivo era que se les reconociera como un aliado independiente, no querían que los trataran como a sus vecinos belgas.

Los generales franceses victoriosos veían la situación desde otra perspectiva. Uno de ellos afirmó en el Comité de Seguridad Pública: «Fue el hielo, el infatigable coraje de nuestras tropas y el talento de nuestros generales los que nos consiguieron [Holanda], no una revolución. De esto se deduce que no hay razón alguna para tratarla de manera diferente a un país conquistado».[20] Los franceses estaban convencidos de que los Países Bajos, cuya riqueza sobreestimaron en gran medida, les traerían cantidades casi ilimitadas de dinero. Inicialmente planearon anexionar varias piezas clave del territorio holandés para fortalecer su posición militar. La oposición holandesa y el reconocimiento –algo tardío– del peligro que tenía alienar a la población llevó a Francia a suavizar un poco los términos, pero aun así, el precio de convertirse en una *république soeur* (república hermana) fue considerable para los holandeses: una indemnización de cien millones de florines holandeses, la obligación de pagar al ejército francés de ocupación y participar en la guerra junto a Francia. Estas disposiciones provocaron la interrupción del comercio de ultramar del país y la pérdida de la mayoría de las colonias holandesas de ultramar en favor de los británicos. Los acuerdos crearon un modelo que los franceses mantendrían al seguir expandiendo sus conquistas en los años siguientes.

En enero de 1795, el gobierno prusiano aceptó entablar negociaciones con Francia, señalando su intención de retirarse de la coalición de grandes potencias que se oponían a la República. Para los franceses, cuya

diplomacia estaba ahora bajo la dirección del veterano revolucionario Sieyès, las negociaciones ofrecían la oportunidad de tener una frontera natural en el Rin mediante la anexión de varios territorios alemanes ocupados. El Tratado de Basilea, firmado el 5 de abril de 1795, incluía cláusulas que prometían que Berlín no se opondría a estas anexiones si los franceses negociaban finalmente una paz general con el Sacro Imperio Romano Germánico. A cambio, los franceses se asegurarían de que se compensara a Prusia con tierras en otras partes de Alemania. Si la Francia republicana lograba poner fin a la guerra en términos favorables, una consecuencia necesaria sería el rediseño total del mapa de Alemania, que transformaría el equilibrio de poder en Europa.

Al mismo tiempo que la diplomacia francesa separaba a Prusia de la coalición enemiga, estaba en negociaciones con los Borbones de España. Además de las adquisiciones a lo largo de su frontera sur, los franceses presionaron para obtener concesiones en las Américas, lo que dejaba ver que la República no tenía ninguna intención de abandonar su imperio de ultramar. Inicialmente, Sieyès y el Comité de Seguridad Pública esperaban recuperar todo el territorio de Luisiana, que Francia había cedido a España después de la Guerra de los Siete Años. «Obtener una colonia continental [americana] al final de una revolución es más importante de lo que se puede expresar en una carta», decían las instrucciones enviadas al negociador francés.[21] Al final, los franceses tuvieron que conformarse con la mitad oriental de la isla La Española, que se había dividido en dos: su colonia Saint-Domingue y el Santo Domingo español, que es la actual República Dominicana. La paz con España colocaba a los franceses en una posición favorable. Sólo una importante potencia continental –Austria– seguía en guerra con ellos, y ahora estaba claro que los demás estados de Europa estaban dispuestos a convivir con una república que había ejecutado a su rey.

El éxito de la República dependía no sólo de las victorias en el extranjero, sino también de la capacidad del gobierno para mantener la lealtad de su población en el interior. Esa lealtad se puso a prueba en la primera mitad de 1795. Las temperaturas que helaron los ríos holandeses y

facilitaron la victoria francesa en enero fueron parte de una ola de frío que Europa occidental no había sufrido en casi un siglo. Para la población, el momento no pudo ser peor. A partir del otoño de 1794, los diputados de la Convención abandonaron su intento de regular la economía a través de la ley del máximum general. Inicialmente, la idea de no aplicar esa ley tuvo cierto apoyo popular. Los trabajadores de todo tipo se habían rebelado contra los topes de sus salarios y los comerciantes del mercado central de París, Les Halles, insistían en que «el libre comercio de alimentos, no más ley del máximum, la libertad absoluta», era «la única manera de reducir el coste de los alimentos».[22] La mayoría de los diputados creían sinceramente en las virtudes de la libertad económica y los problemas prácticos que tenía aplicar el precio máximo eran penosamente evidentes. El diputado moderado Antoine Thibaudeau dijo de la ley que era «la fuente de todas las desgracias que hemos sufrido». En su opinión, había «llenado Francia de un enjambre de mercaderes negros y arruinado a los hombres de buena fe que respetaban las leyes».[23] El 4 de nivoso del año III (24 de diciembre de 1794), la Convención abolió todos los límites a los precios de las mercancías, aunque dejó a las autoridades locales el poder de requisar los suministros de alimentos si fuera necesario.

Por muy necesaria que fuera la abolición de la ley del máximum, a corto plazo resultó catastrófica para gran parte de la población. La cosecha del otoño de 1794 fue mucho menos abundante que otros años, y el fin del Terror produjo la caída en picado del papel moneda de la Revolución. A los pobres, la combinación de escasez de suministros y disminución de poder adquisitivo los llevó a la indigencia. Sus problemas se vieron agravados por la decisión del gobierno de despedir a los trabajadores que hubieran estado empleados en los talleres que se abrieron para abastecer al ejército. El clima frío que llegó a finales de 1794 hizo que la situación fuera apocalíptica. Al helarse el Sena y quedar cerrada la ruta de transporte de mercancías voluminosas se agotaron los suministros de leña y carbón, necesarios para la calefacción y la cocina.

Los informes de la policía de París de los últimos meses de 1794 y la primera parte de 1795 podrían haberse titulado *Les misérables*. Semana tras semana, los observadores de la policía escribieron una crónica de las dificultades que tenía la población para encontrar pan. Las reservas de grano escaseaban y los panaderos no conseguían combustible para encender sus hornos. Se redujo la ración diaria hasta sólo media libra, pero incluso así, los suministros a menudo se agotaban antes de poder servir a todos los clientes. Temiendo que las dejaran fuera, las mujeres comenzaron a hacer cola en las panaderías a primera hora de la mañana; finalmente, algunas estaban en pie, en el frío, antes de la medianoche, preparadas para dormir allí con tal de conseguir comida para su familia. En los muelles del Sena, la distribución de leña y carbón provocaba escaramuzas diarias. Un informe policial increíblemente explícito describía la situación en términos muy claros:

> Es de la mayor justicia e importancia acudir en ayuda de la clase indigente, que no puede conseguir lo que más necesita debido al abrumador y súbito aumento de los precios. Sobre todo, es de la mayor importancia asegurar a esta clase trabajadora y útil el suministro de pan, que es, por así decirlo, su único alimento […]. Es de temer que, si continúan las preocupaciones sobre este asunto esencial, los malintencionados se aprovecharán del descontento general para causar revueltas violentas.[24]

Otro tema constante en los informes policiales de finales de 1794 y principios de 1795 fueron las actividades de la *jeunesse dorée*. El diputado Stanislas Fréron había convertido a los miembros del grupo en una fuerza de ataque antijacobina. Ellos vivían bien, podían ignorar el hambre creciente en las calles; se reunían diariamente en cafés del Palais-Egalité para hablar de política y coordinar campañas editoriales en los numerosos periódicos que controlaban. Por las tardes y las noches, se dedicaban a acosar a sus enemigos. Durante el otoño, se enfrentaron con frecuencia, aunque no siempre con éxito, a mujeres militantes que habían convertido las galerías públicas de la Convención en uno de los pocos bastiones jacobinos que quedaban. En un incidente, una mujer propinó un puñetazo a un miembro de la *jeunesse dorée* y le dijo: «Sería mejor que fueras al frente

como nuestros maridos». En enero de 1795, la *jeunesse dorée* comenzó a destrozar los bustos de Marat que se habían erigido después de su asesinato en 1793 en teatros y otros lugares públicos de París. El 14 de pluvioso del año II (2 de febrero de 1794), dos agentes de policía del Théâtre des Arts informaron de que «un centenar de jóvenes se reunieron en el vestíbulo, volcaron el busto y lo arrojaron al fuego».[25] Unas semanas más tarde, sacaron las cenizas de Marat del Panteón; los miembros de la *jeunesse dorée* se apoderaron de la urna y tiraron el contenido por una alcantarilla. Los bustos de yeso y las urnas no eran sus únicos objetivos: cuando los actores y actrices que habían apoyado el movimiento jacobino aparecían en escena, los jóvenes los recibían con silbidos, les pedían que se disculparan por sus acciones y exigían que cantaran el himno de la *jeunesse dorée*, el «Réveil du peuple» («Despertar del pueblo») cuya letra era de una violencia inusitada.

El mensaje político del lenguaje y el comportamiento de la *jeunesse dorée* era ambiguo. En público, los miembros del grupo juraban ser leales a la Convención y a la República, pero la definición de «bebedores de sangre» admitía muchos matices. Sus periódicos aplaudían la reapertura de las iglesias y las escuelas religiosas, cuyos maestros ahora podrían enseñar «los principios de la religión, sin los cuales el hombre sólo puede ser un bandido y la nación una horda de criminales». Otro documento cuestionaba la necesidad de continuar la guerra: «Si realmente queremos la paz, entreguemos la frontera del Rin». La policía era consciente de que los sentimientos realistas crecían entre la población: un informe a principios de marzo mencionaba individuos misteriosos que preguntaban a la gente que pasaba por las calles: «¿Cuánto son quince más dos?». Después de que el interpelado respondiera «diecisiete», decían: «Eso es lo que necesitamos». Era una referencia fácil de entender; hablaban del Delfín encarcelado, que los monárquicos consideraban que era el rey Luis XVII.[26]

En sus periódicos, los hombres de la *jeunesse dorée* criticaban agresivamente no sólo a los jacobinos, sino a los pobres en general. Por primera vez desde 1789, la retórica sentimental sobre la gente común fue reemplazada por el desprecio. La *Gazette française* no tenía ninguna

simpatía por las mujeres trabajadoras que expresaban su temor al impacto que tendría la abolición del precio máximo: «La mayoría de ellas no pueden recordar el pasado y no pueden pensar en el futuro», escribió el editor del periódico. Las simpatías de los escritores de derechas se dirigieron en cambio a los miembros de las clases más ricas que habían sufrido durante la Revolución. «Su destino es tanto más atroz, porque ellos sufren la humillación además de la desgracia», escribió Charles Lacretelle. Al aumentar el descontento por la escasez de pan, la juventud dorada se dedicó a deshacer grupos que se quejaban de los precios de los alimentos. En respuesta, los trabajadores de los *faubourgs* de la ciudad comenzaron a atacar al «millón de oro, a los *muscadins*, a los comerciantes y a los jóvenes de Fréron».[27] Hubo peleas en el Palais-Egalité en las que los jóvenes acabaron en la fuente.

Los hombres que luchaban contra los jóvenes dandis alrededor del Palais-Egalité y las mujeres que los azuzaban tenían sus propias ideas políticas. A veces, la policía oía hablar de que el pan nunca había escaseado de esta manera bajo la monarquía y se preocupaba de que ello alimentara un movimiento popular a favor de la realeza. Sin embargo, lo más frecuente era que los pobres revivieran las ideas de los *enragés* de 1793 y los montañeses de 1794. «Hablaban del régimen anterior al 9 de termidor», informó un agente de policía, «cuando los bienes no eran tan costosos y la plata era convertible con sus *assignats*». A finales del mes de ventoso, un cartel impreso que pedía «pan y la Constitución del 93» apareció en las paredes de los *faubourgs* de Saint-Antoine y Saint-Michel, el tradicional caldo de cultivo de las insurrecciones. Al ver la cólera creciente en las calles, los diputados de la Convención Nacional respondieron el día 1 de germinal del año III (21 de marzo de 1795) con la aprobación de una dura «ley del alto mando policial» que había propuesto Sieyès. La medida autorizaba la represión de cualquier oposición al gobierno, lo cual no hizo más que aumentar la percepción de que la Convención se había vuelto contra los pobres.

Si alguien pensaba que el 9 de termidor había puesto punto y final a las tumultuosas *journées* revolucionarias, los eventos del 12 de germinal (1 de

abril) mostraron lo contrario. Esa mañana, algunas secciones de París redujeron la ración de pan a su nivel más bajo hasta entonces: un cuarto de libra por persona. Era demasiado para la sufrida población. «Una gran multitud entró a la fuerza en la sala de la Convención, gritando que querían pan, la Constitución de 1793 y la liberación de los patriotas», informó el *Moniteur*. Con el apoyo de los espectadores en las galerías, varios diputados de la extrema izquierda de la Convención pidieron a sus colegas que atendieran las demandas del pueblo, que uno de los manifestantes resumió así: «Es hora de que la clase indigente deje de ser víctima del egoísmo de los ricos y del egoísmo de los comerciantes […]. Hagan justicia contra el ejército de Fréron, estos *messieurs* con sus grandes palos».[28]

La sesión se alargaba –los diputados no se retirarían hasta las seis de la madrugada–, y los manifestantes se fueron yendo poco a poco. Pero los termidorianos convirtieron lo que había comenzado como una recreación de los levantamientos populares de 1792 y 1793 en una nueva versión del día en que cayó Robespierre. Cada vez más enfadados, los diputados decretaron la inmediata deportación de tres antiguos miembros del Comité de Seguridad Pública anterior a la *journée* de termidor: Billaud-Varenne, Collot d'Herbois y Barère. También querían que se detuviera a seis de sus colegas que habían apoyado las reivindicaciones de la muchedumbre ese mismo día, y a varios antiguos robespierristas que habían escapado de las purgas anteriores. Enviarían a los diputados deportados a Cayena, una remota colonia francesa en la costa de América del Sur que se conocía como «la guillotina seca» debido a su clima insalubre.

La situación en París seguía siendo explosiva. Además, el país se vio sacudido por una serie de brotes violentos en el valle del Ródano, en el sudeste, donde las pasiones políticas suscitadas por las revueltas federalistas de 1793 y su violenta represión de 1794 se combinaron con la desesperación generada por aquel invierno terrible y la escasez de comida. En Lyon, grupos similares a la *jeunesse dorée* parisina se unieron a los supervivientes de las ejecuciones que habían ordenado Fouché y Collot d'Herbois un año antes; formaron una red organizada que identificó públicamente a los antiguos «terroristas» y exigió que recibieran su castigo.

El 15 de floreal del año III (4 de mayo de 1795), más de treinta mil personas irrumpieron en las prisiones de la ciudad, donde muchos exjacobinos estaban encarcelados; mataron a más de cien prisioneros y los arrojaron al río Saona. Cuando el diputado en misión en la ciudad exigió a los asesinos que obedecieran la ley, éstos respondieron: «En este momento, su voz no se oye entre los gritos de los nuestros, víctimas de las carnicerías, que claman venganza».[29] En los meses siguientes, se produjeron matanzas similares en Marsella y otras ciudades cercanas. En toda la región, exactivistas revolucionarios de otras ciudades huyeron de sus hogares para escapar de la ola de *Terreur blanche* (Terror Blanco) que las autoridades parecían no poder o no querer controlar. Igual que las acusaciones de «bebedores de sangre» incitaban al odio contra los antiguos jacobinos, las referencias a los *égorgeurs* (degolladores) *del Midi*, las bandas de asesinos antiterroristas de la región del sudeste de Francia, se convirtieron en una herramienta fiable para los republicanos, que la utilizaron para reunir a sus seguidores contra los presuntos enemigos de la Revolución.

La primavera puso fin al amargo frío de París, pero aún faltaban meses para que llegara la nueva cosecha. Mientras tanto, las provisiones escaseaban hasta el punto de que los pobres, que dependían de la ración diaria de pan para su sustento, se enfrentaron literalmente a la inanición. «Todo lo que se ve en las calles son rostros pálidos y demacrados, que muestran los estragos de la tristeza, el agotamiento, el hambre y la miseria», escribió un periodista.[30] La gente se desmayaba de hambre por las calles y la policía informó de un aumento preocupante de suicidios. El gobierno estaba convencido de que no se podía volver a las políticas del año II, de modo que siguió permitiendo que las pastelerías vendieran pasteles de lujo a los clientes con dinero, incluso cuando los panaderos tenían tan poca harina que no podían proporcionar a sus clientes la minúscula ración diaria de pan, que a veces se reducía a dos onzas. Los disturbios diarios en las puertas de las panaderías eran constantes y las asambleas ilegales en las secciones demostraban que la derrota del levantamiento de germinal no había

conseguido acallar el descontento popular. Convencidos de que los diputados de la Convención habían dejado de interesarse por su destino, los ciudadanos empezaban a desear que fueran sustituidos por nuevos legisladores elegidos por los procedimientos democráticos prometidos en la Constitución de 1793.

El comité militar de la Convención, consciente del peligro de que estallara una nueva insurrección, convocó a las tropas en París. Sin embargo, como en julio de 1789, los soldados mostraron una alarmante tendencia a simpatizar con el pueblo, los miembros de una unidad juraron que «no iban a matar a gente medio muerta de hambre». El 30 de floreal del año III (19 de mayo de 1795), circuló por las calles un llamamiento impreso a la «insurrección del pueblo, para conseguir pan y reconquistar sus derechos». Se instaba a los ciudadanos a marchar a la Convención. La sublevación de germinal había sido una manifestación; la *journée* que tuvo lugar unos días más tarde, el 1 de pradial del año III (20 de mayo de 1795), fue un verdadero intento de reemplazar al gobierno. Los autores anónimos del panfleto titulado «La insurrección del pueblo» convocaron a los hombres y las mujeres de París para actuar en nombre de toda la nación. Justificando su revuelta con el argumento de que la Convención estaba «haciendo que el pueblo muriera inhumanamente de hambre», exigieron la detención inmediata de todos los miembros de los comités directivos de la Convención, la aplicación de la Constitución de 1793, elecciones nacionales inmediatas y una nueva asamblea. Mientras tanto, París se pondría en estado de emergencia: se cerrarían las puertas de la ciudad excepto para los que trajeran provisiones y se suspendería a todos los funcionarios públicos de sus cargos. «El pueblo no se retirará hasta que se haya asegurado la subsistencia, la felicidad, la tranquilidad y la libertad de todos los franceses», prometía el documento.[31]

Más que cualquier otra *journée* de la Revolución, excepto los Días de Octubre de 1789, el levantamiento del 1 de pradial del año III fue obra de las mujeres. Por toda la ciudad, grupos de mujeres corrían por las calles exhortando a sus vecinos a unirse a la marcha sobre la Convención. Invadían las oficinas de las secciones para exigir que sus batallones se

movilizaran «por la buena causa», a veces amenazaban a los recalcitrantes con cuchillos o se apropiaban de los tambores de las unidades de guardia para hacer sonar el llamamiento a las armas.[32] Para cuando la Convención comenzó su sesión a las once de la mañana, las mujeres habían llenado las galerías, y gritaban y hacían gestos a los diputados. Los hombres tardaron más en llegar, pero a media tarde, batallones armados del *faubourg* Saint-Antoine, el bastión tradicional de la militancia popular, se reunieron a la puerta de la sala de reuniones de los diputados. Al igual que el 12 de germinal, la Convención contaba con la ayuda de batallones de la Guardia Nacional de los sectores más burgueses de la ciudad, pero la insurrección de pradial estaba tan extendida –la multitud, que se estimaba en unos 35.000, era la más numerosa de todas las *journées* revolucionarias– que poco podrían hacer esas unidades.

Exactamente a las 15.33, según la versión del *Moniteur*, los militantes derribaron la puerta y entraron en la sala, haciendo que los legisladores se levantaran de sus escaños. En la confusión, mataron al diputado Jean-Bertrand Féraud y le cortaron la cabeza; de toda la violencia que había visto la Revolución, ésta fue la primera y única vez que se asesinó a un legislador en el lugar de reunión de la asamblea. François Boissy d’Anglas, el termidoriano conservador, no se movió de la silla del presidente durante varias horas, ni siquiera cuando los atacantes le pusieron delante la pica que sostenía la cabeza de Féraud. Estaba decidido a impedir que los legisladores pasaran los decretos que exigía repetidamente la multitud por medio de la intimidación. Por la noche, la multitud ya estaba impaciente: su plan era que la Convención aprobara sus demandas. Cuando Boissy d’Anglas cedió finalmente la silla a otro diputado, varios de los montañeses que quedaban en la Convención, incluido el idealista Jean-Marie Goujon, presentaron mociones que obtuvieron el apoyo de los manifestantes: la liberación de los prisioneros políticos encarcelados después del 9 de termidor y el 12 de germinal; la exigencia de que los panaderos hicieran un solo tipo de pan, que se compartiera por igual con todos los clientes; la ampliación de los derechos de las asambleas de sección, y la detención de los periodistas que «envenenaban el espíritu público». Los diputados que propusieron estas

medidas se defendieron posteriormente afirmando que esperaban calmar a la multitud y conseguir que se dispersara. La alternativa, según el montañés Gilbert Romme, habría sido permitir que los exaltados manifestantes «se apoderaran del derecho a hablar, a deliberar, a ejercer la autoridad y a disolver por completo la representación nacional».[33]

Romme y los demás diputados montañeses decidieron entonces sustituir el Comité de Seguridad General, que en ese momento coordinaba los esfuerzos para derrotar la insurrección, por una comisión provisional. A pesar de que la madre de Goujon había ido a convencerle de que no cumpliera el juramento de «vivir libre o morir» que había hecho en la Fiesta de la Federación en 1790, él aceptó un puesto en la comisión. Sabiendo que quizá tendría que cumplir su promesa, le dijo a un colega: «El pueblo está sufriendo, alguien debe sacrificarse por él».[34] Este esfuerzo por reemplazar los comités de gobierno lo utilizaron sus oponentes, que acusaron a los montañeses de intentar derrocar al gobierno legítimo. Ya era casi medianoche y la mayoría de los manifestantes se habían dispersado. De repente, las tropas leales a los termidorianos entraron en la sala de reuniones; era la primera vez en la Revolución que se desplegaban soldados entre los diputados. Boissy d'Anglas retomó el control de los procedimientos y los diputados anularon rápidamente todos los decretos aprobados por la tarde. También decretaron el arresto de catorce de sus colegas montañeses, acusados de colaborar con los insurgentes.

No bastaron los decretos parlamentarios para acabar con el levantamiento. La agitación en las secciones se reanudó a la mañana siguiente y las asambleas no autorizadas enviaron representantes a una reunión general para crear una asamblea comunal en toda la ciudad. Esta amenaza de resucitar la Comuna de París, que se había abolido después de termidor, alarmó a la Convención: muchos diputados recordaban muy bien cómo utilizaron los insurgentes del 10 de agosto de 1792 una asamblea similar para derrocar a la monarquía. Muchos de los batallones de la sección volvieron a converger en la Convención con su artillería. «Hoy tenemos la fuerza y la sección de Montreuil está decidida a deshacerse de todos los mendigos de la Convención», anunció un artillero.[35] Algunos de

los diputados se dirigieron a la tensa multitud en un último esfuerzo por convencer a los insurgentes de que tomarían medidas urgentes para hacer frente a la crisis provocada por el hambre y preparar la aplicación de la Constitución. Sólo consiguieron desactivar la situación; a las 23.00 horas, la mayoría de los hombres armados que los habían amenazado se habían ido a casa.

Después de dos días de enfrentamientos no concluyentes, los insurgentes estaban cansados, no tenían claro qué debían hacer. Mientras tanto, la Convención reunió fuerzas militares de las que se podía fiar. Su objetivo inmediato era volver a capturar al aprendiz de cerrajero Jean Tinel, al que ya habían detenido y condenado a muerte por llevar la cabeza del diputado Féraud en una pica. La tarde del 3 de mayo, cuando llevaban a Tinel a la Place de la Grève para su ejecución, la multitud le había liberado y llevado triunfante al *faubourg* Saint-Antoine. Las fuerzas de la Convención también tenían un objetivo más amplio: querían acabar con el poder de los habitantes de París de una vez por todas. Únicamente se convocó a los «buenos ciudadanos que tenían riquezas que proteger» a tomar las armas. En total, las fuerzas de la Convención sumaban más de veinte mil hombres. Los habitantes de los *faubourg* carecían de liderazgo y, en cuanto comenzó la operación militar contra ellos, se rindieron sin oponer verdadera resistencia. A Tinel le volvieron a detener y le ejecutaron; una ola de detenciones se llevó por delante no sólo a los participantes activos en las *journées* recientes, sino a todos los militantes revolucionarios que habían tenido un papel activo durante el Terror. Los miembros de la Convención, muy alterados por el papel que habían tenido las mujeres en el levantamiento, «engañadas o animadas por los enemigos de la libertad», aprobaron decretos para ordenar que se «retirasen [...] a sus casas» y prohibir que formaran grupos en la calle. Los *honnêtes hommes* (literalmente, «hombres honestos»), defensores de tomar medidas severas para instaurar el orden, tomaron las secciones de París que ardían en deseos de vengarse de los derrotados «terroristas, asesinos, bebedores de sangre, ladrones y agentes», como los llamaba la asamblea de la sección de Bruto.[36]

Se creó una comisión militar para juzgar a los principales insurgentes lo más rápido posible. De las 36 sentencias de muerte que firmó esta comisión, las más importantes fueron las de seis diputados montañeses de la Convención, entre ellos Goujon, Romme y Ernest Duquesnoy, que habían tomado partido por los manifestantes en la tarde del 1 de pradial. Sus amigos habían logrado introducir un cuchillo y un par de tijeras en la prisión; en lugar de ir a la ejecución, los condenados se apuñalaron a sí mismos y luego pasaron el cuchillo a un compañero. «Quiero que mi sangre sea la última que fluya», dijo Duquesnoy mientras moría. «Que consolide la República».[37] Su gesto, que evocaba el valor estoico de los antiguos republicanos romanos, los inmortalizó como los «mártires de pradial». La fidelidad a sus principios contrastaba con el oportunismo de los líderes termidorianos como Tallien y Barras, que se habían identificado con el radicalismo durante el año II, pero ahora dirigían la campaña contra los antiguos terroristas. Por el momento, los termidorianos ejercían un firme control sobre la Convención, pero una red de antiguos montañeses, incluido el camarada de Goujon, Pierre-François Tissot, seguían siendo fieles a los ideales que habían movido a los mártires de pradial y esperaban una oportunidad para revitalizar el movimiento republicano.

Aunque el republicanismo democrático seguía teniendo un apoyo importante en el país, la derrota del levantamiento de pradial marcó el fin del movimiento popular parisino que había ejercido una influencia tan poderosa en el curso de la Revolución. No se produciría otra revuelta de las clases bajas en las calles de la ciudad hasta la Revolución de julio de 1830, una generación más tarde. Incluso si los insurgentes de pradial hubieran logrado interrumpir la Convención, es dudoso que hubieran encontrado suficiente apoyo fuera de la capital para revivir el republicanismo militante del Terror. Los triunfantes líderes termidorianos de la Convención ahora podían ignorar las demandas del pueblo que quería pan: se abandonó a los desmoralizados *sans-culottes* a su suerte hasta que la nueva cosecha trajera algún alivio.

Alterados por las sublevaciones de germinal y de pradial, los diputados decidieron dejar claro que la Constitución democrática de 1793 nunca se pondría en práctica. Desde la caída de Robespierre, había habido cierta inclinación por volver a la Constitución de 1791. Como el hijo de Luis XVI, el Delfín, sólo tenía diez años, hubo quienes pensaron que la Convención podría nombrar un consejo de regencia para dirigir el gobierno; asumieron que el muchacho podría ser adoctrinado para aceptar el papel de monarca constitucional cuando llegara a la mayoría de edad. Pero la salud del niño se había quebrado durante su largo encarcelamiento en la Torre del Temple y el 8 de junio de 1795 murió. El siguiente en la línea sucesoria era el hermano de Luis XVI, el conde de Provenza, que había escapado de Francia en el momento de la huida a Varennes en 1791. Ahora vivía en Verona, en Italia. Si hubiera estado dispuesto a volver bajo los términos de la Constitución de 1791, quizá habría sido bienvenido, pero esto hubiera requerido que llegara a un acuerdo con algunos de los hombres que habían derrocado la monarquía y habían votado a favor de la ejecución de su hermano. En una declaración del 24 de junio de 1795, el conde de Provenza se proclamó a sí mismo legítimo gobernante de Francia bajo el nombre de Luis XVIII. Se comparaba con Enrique IV, que había luchado para llegar al trono y había puesto fin a las guerras de religión en Francia doscientos años antes. Luis XVIII se negó a aceptar ninguno de los cambios que habían hecho los revolucionarios. Para él, los termidorianos eran «usurpadores traicioneros y crueles» que merecían un castigo. Si regresaba a Francia, restauraría la «antigua y sabia constitución» de la monarquía, la autoridad de la Iglesia católica y la distinción entre los tres estamentos que se habían abolido en 1789.[38]

La postura intransigente de Luis XVIII forzó incluso a políticos que podían haber favorecido secretamente una restauración a trabajar por una constitución republicana más estable. Justo cuando la noticia de la proclamación de Luis XVIII llegaba a Francia, la causa monárquica sufría un nuevo revés: se frustró el intento de desembarcar un ejército de *émigrés* franceses en Bretaña apoyado por los británicos. Quien había ideado el plan, Joseph de Puisaye, había conseguido el apoyo de los británicos, y a

finales de junio de 1795 desembarcaron unos 4.500 soldados en la península de Quiberon, en la costa sur de Bretaña. Esta fuerza era una mezcla de nobles *émigrés* leales a la causa monárquica y soldados franceses prisioneros a los que los británicos presionaron para que se unieran a la expedición.

Los *émigrés* lograron unirse a los rebeldes chuanes de la zona, pero el general republicano Lazare Hoche impidió que salieran más allá de su cabeza de playa de Quiberon. Nunca llegaron los refuerzos británicos que esperaban, y el 21 de julio de 1795, los hombres de Hoche capturaron el fuerte que defendía la entrada a la península. «Fue una debacle total», escribió, en una carta a su esposa, Gaston de Lévis, antiguo diputado noble de la Asamblea Nacional que había huido de Francia en 1792 y se había unido a las fuerzas contrarrevolucionarias.[39] El diputado termidoriano Tallien, de quien se rumoreaba que estaba entre los que hubieran aceptado un monarca constitucional, no mostró ninguna clemencia con los nobles que habían huido. De acuerdo con el decreto que condenaba a muerte a cualquier *émigré* capturado «con las armas en la mano», hizo ejecutar a 748, aunque se otorgó el perdón a los soldados rasos y a los chuanes; Lévis fue uno de los pocos nobles que logró escapar y volver a Inglaterra. El desastre de Quiberon causó un daño perdurable a la causa monárquica. Los partidarios de la monarquía constitucional y absolutista se culparon mutuamente de la catástrofe y las teorías conspiranoicas según las cuales los británicos podrían haber hecho fracasar deliberadamente la expedición como una forma de debilitar a su enemigo tradicional sembraron la desconfianza entre los *émigrés* y sus anfitriones.

Mientras tanto, los diputados de la Convención volvían a centrarse en el objetivo original de la Revolución: elaborar una constitución que finalmente trajera orden y estabilidad al país, protegiendo al mismo tiempo los principios de libertad e igualdad proclamados en 1789. Debido a su papel crucial en 1789, Sieyès esperaba dominar el comité que se había formado para redactar la nueva Constitución, pero pronto se dio cuenta de que sus colegas no estaban de acuerdo con él en muchos asuntos cruciales. Renunció rápidamente aunque el rencor que la situación le produjo

reaparecería cuatro años después. Los restantes miembros del comité, termidorianos moderados y antiguos girondinos, estaban básicamente de acuerdo en dos puntos: que había que reducir drásticamente la capacidad de la gente de a pie para intervenir en política y que debía haber una verdadera división de poderes para evitar que se repitiera el tipo de autoridad dictatorial que había ejercido la Convención durante el Terror.

El argumento de que sólo se podía confiar en los propietarios para tomar decisiones racionales había justificado la distinción entre ciudadanos activos y pasivos que se adoptó en 1789, pero tras los levantamientos de germinal y de pradial, se expresó de manera mucho más cruda. «Poetas, novelistas, filósofos deshonestos han alabado la simplicidad, la incorruptibilidad, la honestidad de los aldeanos, de los artesanos […]. Esta descripción está lejos de la verdad», anunciaba un periódico parisino mientras los diputados debatían la posibilidad de restringir el derecho de voto a los propietarios. «El egoísmo y los celos son pasiones que desgarran el corazón humano ya sea bajo tejados de paja o bajo techos dorados». Algunos escritores, partiendo de la afirmación de que los propietarios tenían derecho a echar a cualquiera de sus tierras, llegaron a la conclusión de que los no propietarios no eran ciudadanos en ningún sentido, ya que los que poseían propiedades podían unirse y expulsar a todos los demás del país. «El no propietario […] no puede ejercer tareas de gobierno, y se limita a obedecer las leyes que se le imponen, a violarlas cuando puede y a ir a la horca cuando lo atrapan», escribió un panfletario. Charles Duval, cuya publicación *Journal des hommes libres* sería el más tenaz defensor de la democracia hasta que Napoleón llegó al poder, expresó su indignación ante los conservadores que «le dicen abiertamente que hay que olvidar incluso la palabra "democracia"». Observó amargamente que «en 1793 era habitual considerar la gran propiedad de tierra como una violación de los derechos de los hombres», mientras que «ahora está de moda colocar [el ejercicio de] la soberanía nacional en la propiedad de la tierra».[40]

Duval estaba librando una batalla perdida: en el discurso en el que esbozó los principios que el Comité de los Once había decidido seguir al redactar la nueva Constitución, Boissy d'Anglas, el héroe de los días de

pradial, no dejó ninguna duda sobre su decisión de excluir a los pobres de una participación política significativa. «Nos deben gobernar los mejores», proclamó. «Los mejores son los que tienen más formación y los más interesados en el mantenimiento de las leyes: ahora, con muy pocas excepciones, tales hombres se encuentran sólo entre los que, al ser dueños de una propiedad, se dedican al país donde está esa propiedad, a las leyes que la protegen, a la tranquilidad que la mantiene».[41] La asamblea estableció un sistema de elecciones indirectas, con colegios electorales que elegirían realmente a los diputados. Se estableció una alta calificación de propiedad para los miembros de los colegios electorales, en lugar de para los propios diputados, alegando que, de esta manera, se podría seguir eligiendo a ciudadanos más pobres.

A diferencia de las dos primeras constituciones revolucionarias, la Constitución de 1795, o año III, estableció una legislatura bicameral. «Sólo me detendré brevemente para recordarles los peligros inevitables de una sola asamblea», dijo Boissy a sus colegas. «Para ayudarme, tengo su propia historia, de la que todos ustedes son conscientes».[42] El ejemplo de la Convención había demostrado que «una circunstancia inesperada, un entusiasmo súbito, una idea popular errónea», podían fácilmente llevar a una sola asamblea a promulgar leyes imprudentes. El ejemplo de la Constitución de Estados Unidos, con su Cámara de Representantes elegida por el pueblo y un Senado más restringido, era la prueba de que podía existir una república con una legislatura de dos cámaras. Sin embargo, dado que la Francia revolucionaria había rechazado definitivamente cualquier tipo de sistema federal, no había ninguna base clara para dos asambleas, y la Convención no estaba dispuesta a crear una cámara alta hereditaria como la Cámara de los Lores británica. En su lugar, los mismos votantes elegirían las dos cámaras de la nueva asamblea, pero la mayor de las dos, el Conseil des cinq-cents (Consejo de los Quinientos), abierto a diputados de veinticinco años, propondría leyes, mientras que el Conseil des anciens (Consejo de Ancianos), cuyos 250 miembros debían ser mayores de cuarenta años y estar casados o viudos, las revisaría y propondría enmiendas. Cada año se elegiría un tercio de los diputados de ambos

consejos. La formación de la rama ejecutiva del nuevo gobierno fue incluso más delicada que la creación de dos cámaras legislativas. Las propuestas para instaurar una presidencia al estilo americano, elegida por los votantes, se rechazaron: el antiguo girondino Louvet advirtió que este sistema podría permitir a los electores instalar a un príncipe Borbón en el poder. En su lugar, la Constitución creó un consejo ejecutivo de cinco hombres, conocido como el Directorio. Los miembros los elegiría la legislatura en vez del pueblo, lo cual los constituyentes temían que daría demasiada autoridad a los directores. De acuerdo con las disposiciones de la Constitución, se reemplazaría a un miembro del Directorio cada año.

Al igual que en 1789 y 1793, la cuestión de incluir o no una declaración de derechos en la Constitución generó enconados debates. Algunos querían eliminar por completo una declaración, argumentando que, como habían predicho los conservadores en 1789, la original había dado pie a ataques contra leyes que supuestamente violaban los derechos naturales individuales. La declaración que finalmente adoptaron mantuvo el formato básico de las versiones anteriores, pero era claramente más conservadora. El primer artículo de la declaración de 1795 especificaba que sólo enumeraba los «derechos del hombre en la sociedad», descartando las apelaciones a los derechos naturales que los conservadores temían. En una inversión del orden de la declaración de 1793, la libertad se definía antes que la igualdad y no se mencionaba el derecho a la insurrección que se había reconocido en las dos declaraciones anteriores. La propuesta de incluir el derecho al bienestar se rechazó porque podría justificar las exigencias de que el gobierno proporcionara «trabajo o pan», como habían exigido los insurgentes en germinal y pradial.[43] La libertad religiosa no se mencionaba en la declaración, aunque una cláusula de la Constitución, que al final tenía 377 artículos, la protegía, a la vez que prohibía el apoyo del Estado a cualquier organización religiosa. La libertad de prensa se incluyó en el artículo 355, que también reiteraba la prohibición de los gremios de 1791 y la promesa de una libertad económica sin restricciones. Durante el Terror, estas libertades se habían limitado sin ningún fundamento constitucional; el artículo 355 preveía la posibilidad de su suspensión en

caso de crisis, pero prometía que cualquier acción de este tipo sólo estaría en vigor durante un año como máximo.

A pesar de su coloración conservadora, la Declaración de Derechos de 1795 mantuvo parte del lenguaje de sus predecesoras más radicales. Reafirmaba que «la ley es la voluntad general» y que «la soberanía reside esencialmente en el cuerpo universal de ciudadanos», y reconocía que todos los ciudadanos tenían derecho a participar en los debates sobre las leyes y en la elección de diputados, aunque las demás disposiciones de la Constitución limitaban enormemente la influencia de los votantes más pobres. También otorgaba protecciones básicas a los acusados legalmente, repetía la disposición de la declaración de 1793 de que los hombres no podían venderse como esclavos y reafirmaba la insistencia de la declaración de 1789 en la necesidad de una división de poderes en el gobierno para impedir el surgimiento de lo que Sieyès, anticipándose al término «totalitarismo» del siglo XX, denominó un *ré-totale*, un régimen que reivindicaba un poder total sobre sus ciudadanos, en contraposición a una *ré-publique*, en la que las leyes sólo se referían a los asuntos públicos. La alteración más evidente de la nueva Constitución con respecto a sus predecesoras fue la inclusión, junto a la lista de derechos, de una «declaración de deberes», idea que se había rechazado en 1789. La declaración de deberes sorprendía sobre todo por su banalidad: se amonestaba a los ciudadanos a «no hacer nada a los demás que no querrían que les hicieran a ustedes», y se los instaba a obedecer las leyes, a respetar la propiedad y a estar dispuestos a defender su país. Los diputados, algunos de los cuales eran conocidos por su comportamiento disoluto, declararon, en tono santurrón, que «nadie es un buen ciudadano si no es un buen hijo, un buen padre, un buen hermano, un buen amigo, un buen marido».[44]

Aunque la Constitución de 1795 reflejaba el rechazo de muchas de las iniciativas que se habían adoptado durante la fase radical de la Revolución, se reafirmó una de las medidas más radicales de la Convención: la abolición de la esclavitud y la concesión de la ciudadanía a los negros de las colonias. Los colonos blancos intentaron convertir la emancipación de los esclavos de Saint-Domingue por parte de los comisarios republicanos Sonthonax y

Polverel en uno de los «crímenes» del Terror, pero una comisión parlamentaria dominada por los antiguos aliados girondinos de Brissot apoyó sus acciones. No sólo fracasó la ofensiva de los colonos blancos, sino que la Convención termidoriana aseguró que la abolición y la ciudadanía negra formaran parte del nuevo orden constitucional de forma explícita. El diputado Jacques Defermon instó con éxito a sus colegas a «eliminar toda la ansiedad, toda la incertidumbre sobre su situación» de la mente de los negros emancipados. Sus argumentos no eran del todo idealistas: subrayó las contribuciones de Toussaint Louverture, «un soldado intrépido que acepta órdenes, un líder emprendedor», y sus cinco mil soldados negros en la guerra contra los británicos, y afirmó, con cierta exageración, que la producción de azúcar y café se estaba recuperando rápidamente gracias a los esfuerzos de los negros que ahora eran trabajadores libres. Boissy d'Anglas, el portavoz del comité constitucional, dijo a la asamblea: «La abolición de la esclavitud se ha decretado de forma solemne, y ustedes no querrían cambiar eso […]. Fue el único acto de justicia que la tiranía les dejó pasar; no querrán parecer menos partidarios de esos principios eternos que los tiranos».[45] Doce años antes de que el Parlamento Británico prohibiera finalmente la trata de esclavos –pero no la práctica de la esclavitud– y setenta años antes de que Estados Unidos pusiera fin a la esclavitud, la Francia republicana reafirmó la promesa de libertad universal e igualdad racial que había hecho en febrero de 1794.

Tras hacer de las colonias del Caribe y de su población mayoritariamente negra partes integrantes de Francia, la Convención actuó para ampliar las fronteras del país en Europa. Tras verse desgarrada por su propia revolución y luego en guerra contra los ejércitos francés y austriaco, la población de Bélgica se resignó a la idea de que la anexión era la única solución que podía traer la paz. Según dijo el diputado Joseph-Étienne Richard, hasta los que se habían opuesto a esta opción ahora decían: «Nos habéis hecho tan infelices, el estado de incertidumbre, ansiedad y sufrimiento en el que nos mantenéis es tan insoportable, que preferimos ser parte de Francia que quedarnos como estamos».[46] Dividida en departamentos a la francesa, Bélgica formó parte del país hasta la derrota de

Napoleón en 1814. La situación de los territorios alemanes que los franceses habían conquistado en el lado oeste del Rin era más complicada. Los líderes de la Convención no ocultaron su firme deseo de conservarlos, pero el reconocimiento internacional de su absorción dependía de que se llegara a un acuerdo de paz con los austriacos, protectores del Sacro Imperio Romano Germánico, y de que se obtuviera al menos la aquiescencia de los habitantes. Algunos de estos últimos querían crear una república independiente propia en lugar de convertirse por la fuerza en ciudadanos franceses. En septiembre de 1795, los ejércitos franceses cruzaron el Rin, amenazando con adentrarse en los territorios alemanes, pero no pudieron obligar a los austriacos a pedir la paz, dejando claro que la guerra continuaría al año siguiente.

Después de tres años agotadores, los diputados supervivientes de la Convención finalmente se prepararon para culminar su trabajo. Se convocaron las asambleas primarias para votar la aprobación de la nueva Constitución y para elegir a los electores, que a su vez elegirían nuevos diputados. Sin embargo, el día 5 de fructidor del año III (22 de agosto de 1795), la Convención provocó un alboroto cuando exigió que dos tercios de los diputados de los nuevos consejos legislativos se eligieran entre sus propias filas. Su argumento era que la rotación completa de personal, tras la decisión de la Asamblea Nacional en 1791 de prohibir a sus miembros sentarse en la segunda legislatura, había puesto el destino de la Revolución en manos de hombres inexpertos que no estaban preparados para los problemas que se les presentaban. El verdadero temor de los diputados era que si se daba a los votantes completa libertad, casi seguro que rechazarían a prácticamente todos los *conventionnels* a favor de hombres que no tenían ningún compromiso con la República.

El «decreto de dos tercios» era un blanco fácil para los críticos de todas las tendencias, y los jóvenes periodistas que habían estado activos en la *jeunesse dorée* vieron la oportunidad de fomentar la oposición a políticos que parecían querer mantenerse en el poder indefinidamente. «¿Cómo se

atreven a decirle al pueblo que los perpetúe una vez más y que tenga ante sus ojos para siempre el espectáculo de sus torturadores y de su eterna vergüenza?», preguntó uno de ellos. Con los activistas *sans-culottes* marginados tras las derrotas de los levantamientos de germinal y pradial, los jóvenes y sus partidarios de clase media habían tomado el control de muchas de las asambleas de sección de París. Utilizando la retórica de la soberanía popular, se prepararon para escenificar una insurrección de la gente adinerada en lugar de la gente corriente. Ni siquiera ellos sabían con certeza lo que harían si tuvieran éxito: como Charles Lacretelle, uno de sus líderes, escribió más tarde, «evitamos explicar qué forma de gobierno debe adoptarse». Aunque sus oponentes republicanos los denunciaron como monárquicos, los agentes oficiales de Luis XVIII no tuvieron contacto directo con los agitadores parisinos. «¿Están realmente con nosotros?», se preguntó un conspirador monárquico.[47]

El 1 de vendimiario (23 de septiembre), el primer día del año IV republicano, se anunciaron los resultados del referéndum sobre la Constitución y el decreto de dos tercios. La participación global en las elecciones fue sólo la mitad de lo que había sido en la votación de la Constitución democrática de 1793. Según las cifras oficiales, se habían emitido 914.853 votos a favor del nuevo documento y 41.892 en contra. Sin embargo, sólo 167.758 votantes estaban a favor del decreto de dos tercios, mientras que 95.373 estaban en contra. Para lograr un resultado positivo, los contadores de votos habían ignorado los resultados en las secciones de París que informaban de un voto unánime en contra de los decretos en lugar de proporcionar una cifra numérica, y el total de votos a favor incluía un gran número de votos de unidades del ejército cuyos soldados tenían poco conocimiento del ambiente entre los civiles. A un teniente del ejército que llegó a París justo después de la votación le sorprendió el contraste que encontró. «Los soldados están engañados; la mayoría de ellos no saben lo mal que lo está haciendo el gobierno», escribió. «Aquí la gente está sufriendo y ve las cosas como son».[48]

La naturaleza dudosa de los resultados de las elecciones dio a los militantes de la derecha de las secciones conservadoras de París el pretexto

que necesitaban para llamar a una insurrección. La Convención echó más leña al fuego al movilizar tropas cerca de París y dar armas a algunos de los *sans-culottes* desarmados tras los levantamientos populares de la primavera. «¿Vamos a ver la reaparición de esos días de horror y derramamiento de sangre que ya vivimos otras veces?», preguntó la sección de Lepeletier, el centro del movimiento, mientras intentaba motivar al resto de la ciudad para apoyar su llamada a las armas. La Convención no estaba bien preparada para defenderse. Se despidió de forma fulminante al comandante militar de París, el general Jacques-François Menou, sospechoso de simpatizar con los monárquicos, y se nombró de nuevo al diputado Barras, que era quien había organizado la defensa durante la sublevación de pradial. Varios oficiales que se encontraban en París sin destino se ofrecieron a ayudarle; uno de ellos era el joven Napoleón Bonaparte, a quien Barras conocía desde su misión en Toulon en 1793. Había salido de la cárcel poco después de termidor y le dieron la misión poco atractiva de luchar contra los rebeldes de la Vendée; estaba tan desanimado por sus perspectivas que pidió permiso para aceptar un puesto en el ejército otomano. En la noche del 12 de vendimiario (4 de octubre), se encargó de colocar piezas de artillería para cubrir las calles y puentes que llevaban al lugar de reunión de la Convención en las Tullerías.

Los insurgentes que atacaron la Convención el 13 de vendimiario (5 de octubre) superaban en número a los defensores de la Convención, pero eran casi todos civiles inexpertos; se enfrentaban a soldados entrenados y carecían de artillería. En años posteriores, Bonaparte se atribuiría el mérito de haber alejado a los asaltantes de su punto fuerte, la iglesia de Saint-Roch en la calle Saint-Honoré, con «un racimo de metralla» de su cañón. De hecho, la batalla por la iglesia duró más de una hora y hubo bajas en ambos bandos. «Matamos a muchos de los suyos; ellos mataron a treinta hombres e hirieron a sesenta», escribió Napoleón Bonaparte a su hermano José. En contraste con la forma en que reaccionaron ante la insurrección de pradial, en esta ocasión la Convención hizo pocos esfuerzos por castigar a los instigadores del movimiento. Las puertas de la ciudad de París se dejaron deliberadamente abiertas para que los activistas más comprometidos pudieran escapar, y sólo se ejecutó a dos participantes. Sin embargo, sus

partidarios estaban desmoralizados. «Ya no se ven atolondrados jóvenes amotinados, antiguos aristócratas suspirando por sus sueños, sacerdotes dispuestos a servir en el altar de la discordia», informó la policía. «Incluso las prostitutas han dejado de instigar la sedición».[49]

Aunque la Convención trató a los rebeldes con indulgencia, el fallido levantamiento de vendimiario tuvo importantes consecuencias políticas. Las asambleas de sección de París, en las que se habían iniciado tantos movimientos políticos, se abolieron de forma definitiva; no habría otra movilización de masas en las calles de la capital hasta la Revolución de julio de 1830. Por primera vez desde 1789, se habían desplegado tropas del ejército regular contra los ciudadanos de París. Habían obedecido las órdenes de disparar contra ellos, señal de que los soldados ya no se identificaban con la población civil. Y, por encima de todo, lo que hizo el movimiento de vendimiario fue volver a encauzar la carrera del general corso de veintiséis años. «Es a él y a sus sabias y oportunas disposiciones a las que debemos la defensa de este recinto», dijo Barras a los diputados. Tras la insurrección, Bonaparte fue nombrado para comandar el «ejército del interior», las fuerzas encargadas de mantener el orden en el país. Barras introdujo al joven oficial, con escasas aptitudes sociales, en su círculo de moda. Allí conoció a Joséphine Beauharnais, una mujer criolla de Martinica a cuyo primer marido habían ejecutado durante el Terror. Siete años mayor que Bonaparte y madre de dos hijos, Joséphine «no se podía decir que fuera hermosa», recordó Lucien, el hermano menor de Napoleón, pero su espíritu y su sofisticación le dejaron perplejo.[50] A principios de marzo, Bonaparte recibió el mando del ejército francés en Italia; era su primera oportunidad de comandar las tropas en el campo de batalla. Justo después de su nombramiento para el puesto, se casó con Joséphine y los diputados termidorianos Tallien y Barras hicieron de testigos.

La derrota de la insurrección de vendimiario permitió a la Convención proceder con su plan para instaurar la Constitución de 1795. En los tres años que habían transcurrido desde que se reunieron por primera vez en 1792, con ejércitos extranjeros en el interior del país y la conmoción de las matanzas de septiembre todavía reverberando, los diputados supervivientes

de la Convención habían vivido una serie de crisis aparentemente interminables. Habían declarado una república y ejecutado a un rey. Habían visto a docenas de sus colegas guillotinados y eran muy conscientes de lo fácil que hubiera sido que ellos hubieran sufrido el mismo destino. Se habían estremecido ante la noticia de las derrotas militares y las traiciones de los comandantes, y habían aplaudido los informes de las victorias sin precedentes. Habían luchado para satisfacer las exigencias del movimiento popular y para derrotar peligrosas revueltas contrarrevolucionarias. Habían improvisado una dictadura revolucionaria y luego se habían esforzado por desmantelarla sin ceder el poder a sus enemigos. Sabían que habían escrito un capítulo extraordinario de la historia, aunque todavía no tenían forma de saber cuáles serían sus consecuencias.

Los últimos días de la Convención Nacional fueron agitados y conflictivos, dejaron poco tiempo o energía para la reflexión. Sabiendo que no iban a estar representados en los nuevos consejos, los radicales comprometidos volcaron sus ansias y temores en los discursos finales; algunos incluso quisieron anular los resultados de las elecciones de los candidatos cuya lealtad a la República era dudosa. Otros denunciaron «una especulación infernal, desenfrenada, que duplica, triplica, cuadriplica, decuplica el precio de los bienes» y lamentaron que «a los republicanos más sabios y virtuosos se los echa de todos los cargos públicos; los *émigrés* vuelven a todas partes junto con los sacerdotes deportados». Los diputados conservadores respondieron con ira que «el terror aún se cierne sobre esta sala de reuniones». Tratando de mantener un curso medio, Marie-Joseph Chénier opinó que «un gran pueblo, después de numerosas crisis revolucionarias, debería levantar un templo al olvido». Aunque pidió que se dejaran de lado «las etiquetas de moderados, girondinos, terroristas, que sólo sirven para desgarrarnos», también pidió el destierro permanente de todos los monárquicos.[51]

Como lo había hecho durante todas sus sesiones, la Convención alternó los arrebatos de pasión partidista con iniciativas constructivas. En el

penúltimo día de la institución, Pierre Daunou impulsó la versión final de la ley por la que se establecía un sistema nacional de educación pública y se creó el Instituto Nacional, «el órgano representativo de la república de las letras». Pierre-Charles-Louis Baudin des Ardennes, encargado de presentar una ley de amnistía que impidiera cualquier otro enjuiciamiento por actos políticos cometidos durante el periodo de sesiones de la Convención, insistió en que también debía incluir la abolición de la pena de muerte, «este castigo que la naturaleza aborrece». Argumentó que era apropiado que la asamblea, que había comenzado su trabajo tres años antes, cuando abolió la monarquía, terminara prohibiendo otra «plaga [...] que oprime a la humanidad». La Convención respondió votando que las ejecuciones debían terminar una vez que se ganara la guerra. También apoyó la petición de Baudin para llamar a la plaza de la Revolución, donde se había pasado por la guillotina a Luis XVI, la plaza de la Concordia. Por último, recordando que la hora en que la Convención había prometido disolverse oficialmente ya había pasado, el presidente declaró que su trabajo había terminado. «La unión, la amistad, la armonía entre todos los franceses, es la manera de salvar la República», dijo. Más de un diputado debió de pensar que una asamblea que había mostrado tan pocas de esas cualidades, difícilmente podía asegurar que sus sucesores las disfrutaran.[52]

17

La República cuestionada

Octubre de 1795-septiembre de 1797

Después de varios años de exilio, Madame de Staël regresó a Francia a mediados de 1795 y se dio cuenta de que a casi nadie le gustaba la nueva Constitución del Directorio. Quería recuperar la influencia que había ejercido a través de su salón en los primeros años de la Revolución, así que decidió convencer a sus amigos de que «los fundadores de la Constitución de 1791 deberían ser los defensores de la Constitución de 1795». La mayoría de sus amigos hubieran preferido una monarquía constitucional. Como escribió Madame de Staël, aunque Francia podía «continuar siendo una república, […] para convertirse en una monarquía constitucional tendría que pasar por una dictadura militar».[1] La gente corriente podría renegar del carácter elitista del nuevo gobierno, pero la experiencia del Terror la había dejado demasiado desilusionada para levantarse contra él. El apoyo ambivalente de Madame de Staël a la República con un sistema de directorio reflejaba el desafío al que se enfrentaba el nuevo régimen: tenía pocos partidarios verdaderos, el argumento más sólido a su favor era que las alternativas –el regreso del intransigente Luis XVIII o un resurgimiento del jacobinismo militante– eran demasiado aterradoras para contemplarlas siquiera. Madame de Staël esperaba que el mismo razonamiento que la había convertido al republicanismo convenciera a los líderes del país de dejar de lado las diferencias partidistas y personales. Sin embargo, era pedir demasiado. Muchos de los políticos encargados de hacer funcionar el gobierno tenían que trabajar ahora con colegas que los habían enviado a prisión durante el Terror o que los habían amenazado con la ejecución.

El impopular decreto de dos tercios que daba la mayoría de los escaños en los consejos a los antiguos diputados de la Convención aseguraba que la mayor parte de los nuevos legisladores tenían al menos alguna razón para querer que la nueva Constitución tuviera éxito. Sin embargo, a pesar de la ley del 3 de brumario del año IV (25 de octubre de 1795), que excluía a parientes de los *émigrés*, a sacerdotes refractarios y a otros presuntos contrarrevolucionarios de las cuidadosamente elaboradas asambleas electorales, los votantes siguieron eligiendo a los miembros más moderados de la Convención y algunos hombres nuevos que a menudo eran sospechosos de tener tendencias monárquicas. A François Boissy d'Anglas, el hombre que se había enfrentado a los manifestantes de pradial, lo votaron en 36 departamentos diferentes, y a Jean-Denis Lanjuinais, un antiguo conservador girondino, en más de treinta. Los antiguos partidarios del movimiento jacobino y del gobierno revolucionario del año II, prácticamente excluidos del gobierno nacional y que temían a los funcionarios locales que se habían colocado en el periodo termidoriano, veían la nueva Constitución como un abandono de los ideales democráticos que recogía la de 1793. La militancia republicana seguía estando muy extendida en los ejércitos, ya que los soldados recordaban a los camaradas que habían muerto por defender la Revolución; los generales, sin embargo, se veían a sí mismos sustituyendo a los políticos contenciosos de París.

La primera obligación de los dos nuevos consejos era elegir a los cinco miembros del Directorio que formarían el poder ejecutivo del gobierno. Emmanuel Sieyès, resentido porque la Convención no había aceptado sus propuestas constitucionales, rechazó un puesto en el Directorio, señal de que el nuevo sistema político no contaba siquiera con el apoyo de miembros clave de la élite republicana. Los hombres elegidos eran una muestra representativa de los diputados que habían sobrevivido al Terror sin abandonar sus convicciones republicanas. Todos habían votado por la ejecución del rey, lo que les daba una razón de peso para oponerse al regreso de los Borbones. Sólo un director, Jean-François Rewbell, había sido miembro de la Asamblea Nacional. Lazare Carnot, antiguo miembro del Comité de Seguridad Pública del año II, había sobrevivido a las purgas

termidorianas que había maquinado su compañero director Paul Barras, entre otros, pero aún quedaban preguntas sobre su pasado político. De Étienne-François Letourneur se decía que carecía de peso político. Louis-Marie Larevellière-Lépeaux se había visto obligado a esconderse durante el Terror debido a sus vínculos con los girondinos y antiguos montañeses, como Carnot, Rewbell y Barras, seguían sospechando de él. El director con mejor imagen pública era Barras, un exaristócrata cuya desagradable reputación por corrupción quedó diluida por su actuación a la hora de supervisar las campañas contra las revueltas federalistas en el Midi y la organización de la defensa de la Convención durante los levantamientos de pradial y de vendimiario. Sea justo o no, la personalidad polémica de Barras y su longevidad –fue el único director que estuvo en el puesto durante los cuatro años de existencia del régimen– le convirtieron en el símbolo de un gobierno cuyos miembros fueron, en su mayoría, hombres que trabajaron con ahínco para evitar la catástrofe política.

Para subrayar el hecho de que la nueva Constitución declaraba que el poder ejecutivo del gobierno fuera independiente del legislativo, los directores y sus familias se alojaron en el Palacio de Luxemburgo, a más de una milla de las Tullerías, donde los consejos celebraban sus sesiones. En los actos oficiales, los directores llevaban trajes abigarrados: sus capas bordadas y sus afiligranados sombreros de plumas eran un filón para los caricaturistas satíricos y marcaban una ruptura con la afectada simplicidad que había prevalecido durante el Terror. A Larevellière-Lépeaux le preocupaba que el lujo del palacio y la compañía de Barras, «un verdadero propagador de la corrupción», fueran una mala influencia para su hija adolescente. Con la esperanza de evitar constantes disputas, los directores dividieron sus responsabilidades. Carnot, como había hecho durante el Terror, supervisaba los asuntos militares, mientras que Letourneur estaba al mando de la marina. Larevellière-Lépeaux consideraba que los asuntos internos eran su fuerte; tenía un interés especial en el ámbito religioso, donde quería impulsar un culto deísta, la teofilantropía, y se oponía a hacer concesiones a la Iglesia católica. El irascible Rewbell era la principal voz

del Directorio en política exterior. Barras supervisaba a la policía y vigilaba de cerca a las diversas facciones que competían por imponerse en la capital.

Los arquitectos de la Constitución de 1795 le habían dado al nuevo gobierno tiempo de sobra para consolidar su poder. Las primeras elecciones legislativas no debían celebrarse hasta abril de 1797, pero era necesario, ya que la Convención había dejado a sus sucesores una serie de problemas sin resolver. La cosecha de ese año no fue lo suficientemente abundante para tranquilizar a la población en cuanto a la alimentación; la policía de París siguió advirtiendo a sus superiores sobre la frustración que sentían las mujeres que se reunían en las calles del *faubourg* Saint-Antoine, donde «utilizan los epítetos más escandalosos para describir al gobierno».[2] A pesar de las derrotas de los levantamientos de 1795, los agentes estaban convencidos de que ni los antiguos militantes revolucionarios ni los agitadores contrarrevolucionarios de la *jeunesse dorée* habían renunciado a la esperanza de derrocar el nuevo régimen. Las provincias tampoco estaban tranquilas: aunque habían disminuido las protestas de los campesinos, los gobiernos locales seguían tan desesperados como las autoridades de París por encontrar grano para la población, incluso aunque tuvieran que vérselas con los agricultores. Los años de agitación habían dejado una atmósfera de anarquía en muchas regiones, donde las bandas de rateros, algunas de ellas de marcada tendencia monárquica, sembraban el miedo y la inseguridad.

El fracaso del papel moneda de la Revolución fue una fuente importante de malestar; el *assignat* había perdido tanto valor que las denominaciones más pequeñas no valían el papel en el que estaban impresas, literalmente. Los campesinos con escaso grano para vender exigieron el pago en moneda y los trabajadores urbanos que pagaban en *assignats* se encontraron con precios cada vez más altos por el pan y otras necesidades. Entre las víctimas de la depreciación de la moneda se encontraba Jacques Ménétra, quien vendió su taller pagadero a seis meses, «cuando ya no valía la pena cobrarlo». En marzo de 1796, el Directorio abandonó el *assignat* y lo reemplazó por una nueva forma de papel moneda, el *mandat*, respaldado por los bienes inmuebles que el gobierno aún poseía y planeaba sacar al mercado. En un mes, la nueva moneda perdió el 80 por ciento de su valor.

Un policía que redactó un informe que parecía escrito por un analista financiero, predijo acertadamente que las tierras confiscadas, «que son los únicos recursos del gobierno para cubrir los gastos indispensables de la guerra, no producirán las sumas que se esperan; caerán en manos de especuladores con los bolsillos llenos de *mandats*, adquiridos a precios de ganga, los entregarán al gobierno a su valor nominal y revenderán [las tierras nacionales compradas] por dinero en metálico ante los ojos de las autoridades a quienes culpan de la situación». El hecho de que los funcionarios públicos a menudo compraran esas propiedades e incluso justificaran sus ganancias empeoró aún más la imagen del Directorio. «Desde el comienzo de la Revolución», escribió un diputado, «pensé que había que hacer las cosas con honestidad […] pero no llevar el estoicismo hasta el punto de descuidar los propios intereses».[3]

A finales de año, el gobierno decidió que no quedaba más remedio que abandonar del todo el papel moneda. Para evitar la ruina absoluta de quienes habían firmado contratos durante el periodo de inflación, las deudas se calcularon de acuerdo con el valor aproximado del papel moneda en varias épocas de la Revolución, lo que complicaba enormemente la liquidación de los asuntos financieros. Para convencer a la opinión pública de la necesidad de volver a la moneda metálica con una severa deflación, se otorgó a la Compañía Dijon (privada) el derecho a cobrar los *mandats* que quedaran en las tesorerías públicas de todo el país a cambio de un anticipo de moneda sólida al gobierno. La compañía recogió una cantidad mucho mayor de *mandats* de lo que esperaba el gobierno y los vendió rápidamente a otros especuladores, quienes los utilizaron para comprar tierras nacionales a precios de ganga antes de la fecha límite del gobierno para retirarlos de la circulación. Una demanda prolongada y finalmente infructuosa contra la Compañía Dijon hizo que el escándalo apareciera en la prensa durante más de un año, lo que dañó gravemente la imagen pública del Directorio.

El Directorio intentó utilizar los periódicos, de forma más agresiva que los regímenes revolucionarios anteriores, para ganar apoyos mediante la subvención de los que representaban diferentes corrientes del republicanismo postermidoriano. El favoritismo hacia estos periodistas

leales irritaba a sus competidores, incluso cuando compartían las opiniones políticas de los periódicos subvencionados, y no sirvió en absoluto para reducir la popularidad de las publicaciones críticas con el Directorio. Los periodistas de la izquierda, que ahora miraban hacia atrás con nostalgia a los días de Robespierre, eran tan activos como los partidarios de la monarquía. El *Journal des hommes libres* mantuvo viva la tradición jacobina y el *Ami du peuple* de René Lebois se erigió en heredero de Jean-Paul Marat. Con la entrada en vigor de la nueva Constitución se proclamó una amnistía política que permitió a los periodistas contrarrevolucionarios, que habían incitado al levantamiento de la Vendée, retomar sus ataques al gobierno.

En abril de 1796 el Directorio, preocupado por el éxito que tenían los periódicos que abogaban por la restauración de la monarquía o la vuelta al radicalismo democrático, instó a los consejos a aprobar una ley de mano dura que impusiera la pena de muerte a cualquiera que abogara por cambios en la Constitución de 1795. El Directorio también alentó a los escritores a defender su versión del republicanismo socialmente conservador como la única alternativa a los extremos que eran el monarquismo o la *anarchie* (anarquía), la etiqueta que usaba el gobierno para hablar de la democracia jacobina. El nuevo amante de Madame de Staël, Benjamin Constant, nacido en Suiza, se convirtió en el defensor más elocuente de este argumento. En un panfleto ampliamente leído, titulado *La fuerza del gobierno actual de Francia*, sostuvo que, si bien había sido legítimo que los *philosophes* de la generación anterior criticaran los abusos de la monarquía francesa instaurada desde tiempo inmemorial, la propia fragilidad del nuevo orden republicano convertía en un deber moral de los ciudadanos responsables evitar que los hombres en el poder llegaran a los extremos. Si los conservadores reconocieran que los principales logros de la Revolución no se pueden deshacer, afirmó Constant, podrían tener una influencia constructiva, pero temía que estuvieran empeñados en hacer todo lo contrario. «Ven que la Revolución fue algo terrible y desastroso, y de ahí concluyen que lo que ellos llaman una contrarrevolución sería un acontecimiento feliz. No son conscientes de que esta contrarrevolución en sí

misma será sólo una nueva revolución».[4] Adrien Lezay dio la vuelta al argumento de Constant en otro panfleto titulado *Sobre la debilidad de un gobierno recién fundado*, en el que decía que, en un sistema constitucional, era el gobierno el que necesitaba seguir los dictados de la opinión pública, no al revés. «Las autoridades pueden vejar, oprimir, insultar a la clase de ciudadanos a los que llama *honnêtes gens* [gente honesta]», a quienes Constant instaba a renunciar a sus sentimientos conservadores, escribió Lezay, pero «siempre serían la clave para una mayoría nacional».[5]

A pesar de tener ideas diferentes, Constant y Lezay compartían el rechazo a cualquier tipo de radicalismo social, como la campaña que lanzó Gracchus Babeuf en el invierno de 1795-1796 en su *Tribun du peuple (El Tribuno del Pueblo)*. En la época prerrevolucionaria, Babeuf había sido *feudiste*, experto en la redacción de documentos relacionados con los derechos señoriales, actividad que le había proporcionado un conocimiento profundo de las formas en que los terratenientes ricos explotaban a los pobres. Atraído por las ideas radicales incluso antes de 1789, había llevado una carrera turbulenta al margen de la política revolucionaria y el periodismo, y pasó la época del Terror en prisión. Liberado después de termidor, fundó el *Journal de la liberté de la presse (Diario de la Libertad de Prensa)* que denunció a Robespierre por silenciar el movimiento popular. Sin embargo, rápidamente decidió que los conspiradores que habían derrocado al Incorruptible y habían puesto fin al Terror eran un peligro aún mayor para la gente que los montañeses, y cambió el nombre de su periódico a *Tribun du peuple*, en el que aseguraba que sólo se hablaba de los intereses de los pobres.

Hasta el otoño de 1795, Babeuf no se distinguía mucho de otros militantes que pedían la instauración de la Constitución democrática de 1793. Ahora iba más allá de sus predecesores al pedir un mundo en el que todas las personas fueran verdaderamente iguales. Esto se lograría mediante la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad en la que todos los bienes serían comunes y se compartirían por igual entre la

población. Según las leyes de la naturaleza, proclamó Babeuf, «la tierra no pertenece a nadie, pertenece a todos […]. Si alguien se lleva algo más allá de lo que necesita para alimentarse es un robo a la sociedad». Babeuf no simpatizaba con la idea de que los que trabajan duro o las personas talentosas deberían recibir recompensas adicionales de la sociedad. «Es absurdo e injusto reclamar una mayor compensación para alguien cuyo trabajo requiere más inteligencia y más esfuerzo y pensamiento; nada de eso aumenta las necesidades de su estómago».[6]

Babeuf imaginaba una sociedad comunista que terminaría con todos los males que acosan a la humanidad. «Este gobierno acabará con […] la envidia, los celos, la codicia, el orgullo, el engaño, la duplicidad, con todos los vicios. Es más [y éste es sin duda el punto clave], acabará con la preocupación universal, especial y perpetua que nos corroe a todos por cómo viviremos mañana, el próximo mes, el próximo año, en nuestra vejez, y qué será de nuestros hijos y nietos». El régimen de derechos de propiedad privada creado por la Constitución de 1795, decía Babeuf, era peor que el código esclavista que «los duros colonos impusieron a los negros en nuestras islas». Para los que saben que el intento de crear sociedades comunistas en el siglo XX condujo al desarrollo de burocracias opresivas, el optimismo de Babeuf sobre una «administración común» que «suprimiría la propiedad privada, asignaría a cada uno su tarea de acuerdo con sus habilidades y le obligaría a depositar lo que produce en el almacén común» es difícil de creer. Su seguridad, en respuesta a sus críticas, de que «las personas responsables de preservar este sistema nunca se verían tentadas a preservar su autoridad desafiando la voluntad del pueblo» ahora parece tan poco convincente como su arrogante despreocupación por los límites de la libertad individual que sería necesario imponer para garantizar que todos contribuyeran de manera ecuánime al bienestar común.[7]

Las ideas comunistas de Babeuf –que su discípulo italiano, Filippo Buonarroti, describió en términos elogiosos a principios del siglo XIX–, inspiraron a generaciones de revolucionarios, desde Karl Marx hasta los bolcheviques. Estaban decididos a hacer realidad la promesa que habían hecho los seguidores de Babeuf cuando predijeron que la Revolución

francesa resultaría ser sólo «la precursora de una revolución mayor e imponente, que sería la última».[8] En 1796, sin embargo, incluso el pequeño círculo de seguidores de Babeuf reconoció que sus ideas eran demasiado extremas para atraer al gran público. Los *sans-culottes* que habían salido a la calle durante las jornadas revolucionarias y los campesinos que habían forzado el abandono de los derechos señoriales soñaban con independizarse económicamente, no con acabar con la propiedad privada. Sin embargo, el sufrimiento demasiado evidente de los pobres bajo el Directorio convenció a Babeuf de que si se dirigía a las masas de forma adecuada, se las podría motivar para que se levantaran y derrocaran al régimen, creando así una oportunidad para que un determinado grupo de líderes pusiera en práctica sus ideas. Además de ser los precursores del comunismo moderno, Babeuf y sus seguidores fueron los primeros en imaginar la revolución como un proceso calculado dirigido por una vanguardia de conspiradores cuyos objetivos podrían ser desconocidos para la masa de sus seguidores.

En el otoño de 1795, mientras Babeuf expresaba sus ideas en su periódico, otros radicales intentaron revivir el movimiento de clubes en París. El Club Jacobino seguía estando prohibido, pero un nuevo Club du Panthéon, llamado así porque se reunía cerca del santuario de los héroes de la Revolución, fue el foro para la agitación contra el Directorio socialmente conservador y a favor de la Constitución más radical de 1793. Tanto si entendían que las ideas de Babeuf iban mucho más allá de una vuelta a los principios de ese documento, como si no, muchos exjacobinos, incluidos 32 exdiputados de la Convención Montañesa y las viudas de los mártires revolucionarios Michel Lepeletier y Marat, se suscribieron a su periódico. Los exrevolucionarios de las provincias también estaban a favor de sus ideas. Cuando Babeuf anunció que se había publicado una nueva entrega de la revista, el líder de un grupo en la ciudad borgoñona de Autun le escribió diciendo: «Desciende un gran silencio, la alegría se refleja en todos los rostros, nuestros espíritus se animan, el valor renace, y estamos listos para caer sobre el enemigo».[9] Preocupado por este resurgimiento del jacobinismo militante, el Directorio dio orden al general Bonaparte, comandante del Ejército del interior, de que cerrara el Club du Panthéon. La

forma en que cumplió esta orden mostró que el otrora protegido de Augustin Robespierre ahora se había alejado por completo de cualquier facción de la izquierda revolucionaria.

Cuando se vieron obligados a pasar a la clandestinidad, Babeuf y sus seguidores más cercanos recurrieron a los métodos conspirativos. A fines de marzo de 1796, él y tres colaboradores cercanos, Félix Lepeletier, Pierre-Antoine Antonelle y el dramaturgo ateo Sylvain Maréchal, se habían constituido como un Directorio Insurgente de Seguridad Pública. Como tenían que operar en secreto, se basaron en la lista de suscripción del *Tribun* de Babeuf y sus contactos con exactivistas revolucionarios para encontrar posibles partidarios. En la Declaración de Insurrección que tenían previsto emitir cuando lanzaron este movimiento, los babuvistas denunciaron al gobierno del Directorio por ser un «opresor» que había «ultrajado, degradado y abolido las cualidades e instituciones de la libertad y la democracia» y «había asesinado a los mejores amigos de la República». En sus memorias, Buonarroti admitió que el levantamiento habría comenzado con «un día de terror justificado y saludable», pero una vez eliminados los directores y sus aliados en la legislatura, «habrían seguido la indulgencia y el olvido».[10]

Los babuvistas encontraron apoyo entre los exmilitantes *sans-culottes*, así como entre los soldados de la Legión de Policía, una fuerza reclutada para proteger el Directorio y otras instituciones gubernamentales. Los conspiradores también esperaban ganar el apoyo de algunos exdiputados montañeses. Lograron reclutar a una figura célebre, Drouet, el jefe de Correos provincial que había reconocido a Luis XVI en Varennes en junio de 1791, y algunos de sus agentes tenían contactos con el director Barras, un camaleón político que al menos quería saber qué se estaba gestando en los círculos de militantes. A diferencia de Barras, los otros directores estaban preocupados por la creciente agitación y los informes sobre la falta de confianza en la Legión de Policía. Carnot, a pesar de su pasado como miembro del Comité de Seguridad Pública durante el Terror, tomó la iniciativa de exigir medidas para sofocar cualquier agitación radical. Gracias a un agente doble, el 10 de mayo de 1796, la policía pudo detener a

los principales babuvistas y finalmente al propio *Tribun du peuple*, que había estado viviendo en la clandestinidad durante varios meses.

Aunque a muchos testigos les resultó difícil tomarse en serio un complot que había organizado un comité cuyos miembros eran desconocidos incluso para sus propios partidarios, el Directorio aprovechó la ocasión para presentarse como el defensor de la propiedad y el orden social. *Nouvelles politiques (Nuevas Políticas)*, un periódico conservador, expuso la opinión oficial: «Por inconcebible que parezca la conspiración que se acaba de descubrir, dada la audacia de la acción, la atrocidad de su objetivo y las dificultades de su ejecución, ciertamente existió».[11] El Directorio puso en marcha un sinfín de detenciones de militantes revolucionarios a nivel nacional. Se acusó a más de un centenar de participar en la conspiración. La decisión del gobierno de acusar a Drouet, un miembro en funciones de la legislatura, complicó los planes para juzgar a los babuvistas: según la Constitución, los cargos que involucraban a los diputados tenían que presentarse ante un «Tribunal Superior» especial, y el juicio no comenzó hasta febrero de 1797. La demora dio tiempo a la oposición republicana a reorganizarse y contrarrestar las acusaciones de que sus miembros se habían sumado a las ideas comunistas de Babeuf.

Los miembros del Directorio esperaban que la detención de Babeuf y sus seguidores les consiguiera el apoyo de los moderados y los propietarios. Aunque los autores de la Constitución de 1795 habían intentado convertir a los propietarios en los pilares de una república conservadora, éstos se mostraban reacios a dar un apoyo real al régimen. Pero también frustraron a los defensores de un regreso a la monarquía. Desde su posición como observador en la ciudad suiza de Berna, el periodista bien informado Jacques Mallet du Pan describió a la mayoría de ellos como «realistas de opinión […], reconocían que era necesario un rey», decía, «pero quieren uno que sea hijo de la Revolución, elegido por la nación […]. Esperan así garantizar su seguridad, disipar el miedo a la venganza y tranquilizar a los compradores de propiedades nacionales».[12] En ausencia de una alternativa factible a Luis XVIII, estos «realistas de opinión» se vieron obligados a

comprometerse con el Directorio y aceptar un gobierno encabezado por hombres que habían votado a favor de ejecutar al rey.

Mallet du Pan reconoció que también había «realistas conspiradores», hombres que seguían convencidos de que la población agradecería una restauración borbónica si lograba asestar un golpe repentino a la República. Sin embargo, también se dio cuenta de que el desastroso desembarco en Quiberon en 1795 y la posterior derrota del levantamiento de vendimiario los había dejado desmoralizados. Los agentes realistas esperaban que Jean-Charles Pichegru, el comandante del ejército del Rin, se volviera contra la República. Pichegru aceptó dinero de los realistas y los animó a hacer circular propaganda entre sus tropas. En marzo de 1796, sin embargo, le requerían en París. Su reemplazo, Jean-Victor Moreau, compartía su falta de entusiasmo por la causa republicana, pero no estaba dispuesto a intentar dar un golpe militar. La causa realista se enfrentó a más reveses en los primeros meses de 1796, cuando el general Lazare Hoche, firmemente republicano, reprimió un intento de resurgimiento de la *chouannerie* en Bretaña. Se capturó y ejecutó a dos de los principales líderes chuanes, Jean-Nicolas Stofflet y François Charette.

Aunque en la práctica las posibilidades de un regreso al antiguo régimen seguían siendo escasas, los primeros años del Directorio fueron muy creativos para los pensadores contrarrevolucionarios, particularmente los que se encontraron retenidos en los refugios dispersos de la emigración fuera de Francia. La supervivencia continuada del régimen revolucionario, incluso después de los excesos del Terror, desafió a los conservadores a explicar cómo pudo haber ocurrido semejante desastre y a presentar nuevos argumentos sobre cómo podrían ponerle fin. El abad Augustin Barruel, un sacerdote *émigré* francés, ofreció una respuesta que tendría repercusiones. Ya en 1793, Barruel mantenía que la Revolución era el resultado de una conspiración deliberada «meditada durante mucho tiempo en Francia por hombres que, bajo el nombre de *philosophes*, parecían haberse dividido las tareas. Algunos querían derrocar el trono, otros el altar».[13] En publicaciones durante el periodo del Directorio, Barruel amplió su teoría; aseguraba que los autores de la Ilustración, los masones y los *illuminati* alemanes, una

sociedad secreta fundada en la década de 1780, se habían unido para subvertir las monarquías y la fe cristiana y que la Revolución francesa había sido la culminación de sus planes destructivos. La teoría de la conspiración de Barruel ha seguido atrayendo discípulos hasta el día de hoy, a pesar de lo inverosímil de su afirmación de que toda la Ilustración europea fue una conspiración para derrocar a la monarquía francesa. De hecho, los revolucionarios radicales de 1793 habían cerrado las logias masónicas a las que Barruel culpaba del levantamiento.

Otros escritores *émigrés* plantearon desafíos más estimulantes a los postulados que sustentaban el movimiento revolucionario. Joseph de Maistre, un noble de habla francesa al que habían expulsado de su hogar en el reino de Saboya durante la invasión francesa, y Louis de Bonald, un noble provincial de Auvergne, en el sur de Francia, publicaron obras importantes en 1796, que iban más allá de Barruel y Edmund Burke; ponían en duda la posibilidad misma de una sociedad basada en deducciones racionales que partieran del axioma de que los individuos poseen derechos naturales. De Maistre veía la Revolución como la forma que tenía Dios de demostrar a la humanidad lo profundamente pecaminoso que es tener fe en la razón humana. «La Divinidad nunca se ha mostrado más claramente en ningún evento humano», escribió. «Si hace uso de los instrumentos más viles, es para castigar con el fin de regenerar». Los revolucionarios se habían equivocado al pensar que una constitución política podía surgir de las deliberaciones de una asamblea y quedar reducida a la escritura, o que existían principios generales comunes a todas las sociedades. «Citan a América», comentó De Maistre. «Nada impacienta más que los elogios con los que se cubre a este bebé en pañales: vamos a ver cómo crece». En cualquier caso, la idea de que los seres humanos debían vivir una vida pacífica y feliz contradecía las convicciones cristianas de De Maistre sobre los inescrutables propósitos de Dios. En un capítulo titulado «Sobre la destrucción violenta de la especie humana», argumentó que la guerra era un aspecto inevitable y necesario del mundo y que el sufrimiento de los inocentes era parte del plan divino: «No hay castigo que no purifique».[14]

El violento asalto de De Maistre a la corrección política de su época le convirtió en un precursor del catolicismo militante que más tarde sería una característica importante de la vida francesa del siglo XIX. Bonald compartía el intenso catolicismo de De Maistre y su rechazo al individualismo y al racionalismo de la Ilustración y la Revolución, pero proponía una alternativa distinta. Su postulado fundamental era que los individuos no existían fuera de las unidades sociales a las que pertenecían, la familia, el Estado y la comunidad religiosa, y que, para evitar conflictos, cada una de estas unidades necesitaba un solo gobernante: el padre en la familia, el rey en el Estado y el Papa en la Iglesia. «El hombre solo existe por el bien de la sociedad y la sociedad le forma únicamente para sus propósitos», escribió, una afirmación que dio la vuelta a la convicción de los revolucionarios de que la sociedad era una creación para atender las necesidades de sus miembros individuales.[15] El argumento de Bonald tendría una influencia importante en el desarrollo de la sociología moderna.

Los directores, amenazados por conspiradores radicales, enfrentados a la hostilidad explícita de gran parte de la clase propietaria del país y sumidos en una profunda crisis financiera, esperaban que los éxitos militares apuntalaran la posición del régimen y proporcionaran una fuente de ingresos que necesitaban con urgencia. No estaba claro que los ejércitos republicanos pudieran responder a estas esperanzas. El número de soldados había disminuido en al menos un tercio desde su pico a principios de 1794. Por falta de fondos, el gobierno no había podido pagar a las tropas con regularidad ni garantizar los suministros adecuados. «A los desgraciados ejércitos no les corresponde más que un trozo de pan, dormir sobre paja, ir mal vestidos y sin zapatos, marchar por montañas cubiertas de nieve», escribió un soldado.[16] Aunque las regulaciones que se introdujeron en 1795 fortalecieron la autoridad de los oficiales sobre sus hombres y acabó con los consejos de soldados electos, era difícil mantener la disciplina; esto era especialmente cierto en territorio extranjero, donde no se podía impedir que la gente hambrienta se apoderara de las provisiones de la población. Años

más tarde, Jean-François Noël recordaba con orgullo cómo había defendido a sus camaradas cuando el general Jean-Baptiste Jourdan, comandante del ejército de Sambre-et-Meuse, amenazó con castigarlos por llevar a cabo saqueos: «La indignación se apoderó de mí; avanzo hasta el centro del largo círculo formado por los generales y oficiales superiores; en pocas palabras cargadas de franqueza militar […] exijo, en nombre de mis compañeros de armas, que al soldado se le dé la comida y el equipo que la ley le promete».[17]

Al inicio de 1796, todos los ejércitos franceses se encontraban en condiciones similares, pero a principios de mayo llegaron a París noticias de la primera de una asombrosa serie de victorias que lograron las tropas de Italia bajo el mando de su nuevo comandante de veintiséis años, Napoleón Bonaparte. Desde que ayudó a derrotar el levantamiento federalista en Toulon en diciembre de 1793, Bonaparte había soñado con liderar una invasión francesa del norte de Italia. Durante su estancia en París, había elaborado planes de campaña y, a principios de marzo, su patrón Barras se aseguró de que tuviera la ocasión de llevarlos a cabo. Los oficiales mayores y más experimentados que ya servían en el ejército de Italia reconocieron rápidamente la inteligencia y la fuerza de voluntad de Bonaparte. «Nos interrogó sobre la posición de nuestras divisiones, sobre su equipo, sobre el espíritu y la fuerza efectiva de cada cuerpo, trazó el rumbo que debíamos seguir, anunció que al día siguiente haría una inspección y al otro día atacaría al enemigo», recordó el general André Masséna.[18] Bonaparte también impresionó a los hombres, aunque las elocuentes palabras con las que luego afirmó haber ganado su lealtad las compuso cuando dictó sus memorias tras su derrota en Waterloo: «Ustedes tienen hambre y están desnudos. El gobierno les debe mucho, no puede darles nada»; y su promesa de llevarlos «a las llanuras más fértiles de la tierra», donde «encontrarían honor, gloria y riquezas».[19]

Bonaparte logró dividir a los ejércitos enemigos que se enfrentaban a él y no tardó en aplastar a los piamonteses cansados de la guerra. Excedió los límites de su autoridad y actuó como diplomático y como general; estaba convencido de que su promesa de extorsionar a la derrotada monarquía de

Saboya para conseguir el dinero que tanto necesitaban disiparía cualquier preocupación que el Directorio tuviera sobre su conducta. Sin perder tiempo, se dirigió a Milán, la capital de la provincia austriaca de Lombardía. La batalla crucial tuvo lugar en Lodi, donde las tropas francesas tuvieron que asaltar un puente bajo el intenso fuego austriaco. Después de la victoria, Bonaparte, conocedor del valor de la publicidad, encargó unos grabados en los que se le ve encabezando la peligrosa carga; fue una de las muchas exageraciones que marcarían su carrera como propagandista. Aunque no había sido tan imprudente como para arriesgar su propia vida, había sido capaz de inspirar a sus hombres a realizar esfuerzos heroicos, ganándose el apodo «el Pequeño Cabo», una muestra de la lealtad que le tenían. Los acontecimientos de Lodi dispararon las ambiciones de Bonaparte. «Ya no me consideraba un simple general», escribió en sus memorias, «sino un hombre llamado a decidir el destino de los pueblos. Entonces se me ocurrió que realmente podía convertirme en un actor decisivo en nuestro escenario nacional».[20] Mientras los austriacos se retiraban a la fortaleza de Mantua, bloqueando la carretera a través de los Alpes hacia Viena, el general francés dirigió su atención a los pequeños estados de Italia central y las posesiones del papado. En toda la península, la llegada de los franceses desató una agitación política febril; en la historia italiana, el trienio de 1796 a 1799, se recuerda como el momento en que comenzó el movimiento para unificar el país. En las ciudades italianas, las ideas de la Ilustración habían encontrado una audiencia mucho antes de 1789, y los «jacobinos» italianos ahora vieron la oportunidad de ponerlas en práctica. Sin embargo, a diferencia de los Países Bajos, donde el movimiento patriota organizado estaba listo para tomar el poder tan pronto como llegaran los franceses, en Italia la política revolucionaria era una novedad y no había un consenso claro sobre cómo se podrían aplicar las nuevas ideas.

Mientras los abogados y periodistas burgueses y los nobles de mentalidad reformista que componían el movimiento jacobino italiano debatían si apoyar la creación de un Estado-nación unificado o una federación que respetara la diversidad histórica y cultural de la península, el

principal interés de los franceses era apropiarse de los recursos de la región. Para cumplir con la exigencia de Bonaparte de una «contribución» de veinte millones de francos, los milaneses tuvieron que entregar el contenido del tesoro público de la provincia, los fondos en poder de sus instituciones benéficas e incluso los objetos en poder de la casa municipal de empeño. Al igual que hicieron en los Países Bajos, los franceses cobraron parte de su tributo en forma de pinturas y otros objetos de arte, que luego enviaron a París como muestra de que la República iba a ser el centro de la cultura europea. «En virtud de su poder y la superioridad de su cultura y sus artistas», dijo el *Moniteur*, «la República francesa es el único gobierno del mundo que puede proporcionar un refugio seguro para estas obras maestras».[21] Bonaparte envió parte del dinero que obtenía por la fuerza de los territorios que ocupaba de regreso a Francia, proporcionando al Directorio los fondos que tanto necesitaba; también pudo pagar a sus soldados parte de su salario en efectivo, lo cual no hizo sino aumentar su lealtad hacia él.

Con estos éxitos en Italia, Bonaparte empezó a destacar entre los demás generales franceses. En París, Carnot consideraba a Alemania, donde estaban comprometidas las mayores fuerzas francesas, como el principal escenario de la guerra. Sin embargo, en 1796, la campaña que comenzó allí con los ejércitos de los generales Jourdan y Moreau cruzando el Rin y avanzando hacia territorio enemigo, terminó en derrota a fines de agosto. Ambos ejércitos franceses tuvieron que luchar para regresar a sus puntos de partida, dejando tras de sí a una población llena de ira por la incautación de alimentos y cualquier otra cosa que los invasores pudieran conseguir. Mientras tanto, en el norte de Italia, Bonaparte había repelido con éxito los repetidos intentos austriacos de acabar con el sitio de Mantua. La fortaleza finalmente se rindió el 2 de febrero de 1797, después de las celebradas victorias napoleónicas en Arcole y Rivoli. La pérdida de Mantua no sólo puso fin a las esperanzas austriacas de recuperar sus posesiones en el norte de Italia, sino que dejó a su propia capital, Viena, vulnerable a un ataque francés desde el sur.

Desde la invasión de Bélgica por Dumouriez en 1792 los gobernantes del Directorio conocían bien la forma en que los generales ambiciosos tendían a desarrollar sus propias políticas, de modo que intentaron evitar que Bonaparte desafiara las instrucciones del gobierno. En este punto, los políticos franceses habían abandonado cualquier interés en difundir los ideales de libertad e igualdad. «No se puede republicanizar Italia. El pueblo no está dispuesto en absoluto a aceptar la libertad, ni es digno de esta bendición», escribió el representante del Directorio en Génova. El Directorio tampoco tenía ningún interés en promover la unificación de los pequeños estados en los que se dividía la península en una entidad mayor, «un gigante cuyo gran tamaño sería motivo de vergüenza para nosotros algún día», como decía Barras.[22] En lo que a los directores se refería, las conquistas de Bonaparte valían la pena sólo por los recursos que aportaban y porque podrían usarse como moneda de cambio para llevar a Austria a la mesa de negociación, donde podrían obtener su consentimiento para que Francia se anexionara el territorio alemán en la orilla occidental del Rin.

Pero Bonaparte tenía sus propias ideas. En el otoño de 1796 permitió la formación de la «República cispadana» para unificar los pequeños principados y las partes de los Estados Pontificios que había ocupado al sur del río Po. Prometió al Directorio que se aseguraría de que la Constitución de la nueva república reflejara las opiniones de los italianos moderados y no las de los partidarios de la «democracia pura». Los moderados, escribió, eran «los ricos terratenientes y sacerdotes que, en última instancia, siempre influyen en la masa del pueblo», y era a los que había que convencer para que triunfara la causa francesa.[23] Aunque Bonaparte reprimió implacablemente cualquier oposición que pudiera amenazar el dominio francés sobre las áreas que había conquistado, estaba deseando llevarse bien con la Iglesia católica y evitar el estallido de algo parecido a la revuelta de la Vendée en Francia. «Mientras los ministros de la religión mantengan principios verdaderos […] los respetaré, respetaré su propiedad y sus costumbres, ya que contribuyen al orden público y al bien común», prometió. No puso ninguna objeción a que la República cispadana declarara

el catolicismo como religión oficial, aunque la idea iba en contra de la política del Directorio en Francia.[24]

El final de 1796 trajo la suspensión acostumbrada de las operaciones militares en el norte de Europa y el mal tiempo interrumpió el proyecto militar francés más ambicioso, un intento de desembarcar tropas en Irlanda para provocar un levantamiento de la población contra el dominio británico. Sin embargo, las operaciones de Bonaparte en Italia no se detuvieron. Después de capturar Mantua, volvió su atención hacia el sur. Cuando tomó Ancona, un puerto en los territorios que tenía el Papa en el mar Adriático, su mente quedó cautivada por la perspectiva de establecer el dominio francés sobre el Mediterráneo oriental: «Desde aquí se puede […] llegar a Constantinopla en diez días».[25] Su objetivo inmediato era obligar a los diplomáticos papales a aceptar un tratado draconiano como precio para que no marchara sobre Roma. En la paz de Tolentino, el Vaticano cedió gran parte de su reino italiano a la República cispadana. Bonaparte exigió el pago de treinta millones de libras y el tributo habitual de los tesoros artísticos que se enviarían a París.

Los soldados de Bonaparte pronto se encontraron marchando hacia el norte de nuevo cuando su comandante se dispuso a imponer su voluntad al enemigo austriaco contra el que Francia había estado luchando durante cinco años. El 7 de abril de 1797, el ejército francés se encontraba en Leoben, apenas a veinte millas de Viena. En lugar de conquistarla en nombre de la Revolución, Bonaparte quería llegar a un acuerdo: esperaba conseguir el consentimiento de Austria para que Francia se anexionara Bélgica y los territorios alemanes al oeste del Rin, así como el reconocimiento de la República que había creado en el norte de Italia. A cambio, estaba dispuesto a prometer a los austriacos que Francia invadiría la centenaria República de Venecia, un Estado neutral que había tratado de mantenerse al margen de los conflictos en la península, y luego entregarles su territorio. Era una propuesta tan cínica como la partición de Polonia que Austria, Prusia y Rusia habían pactado recientemente, y por el momento había que mantenerla en secreto, no sólo de los venecianos, sino también del Directorio en Francia, que no le había dado autoridad al ambicioso

general para hacer nada parecido. El acuerdo público al que llegó Bonaparte con los austriacos en Leoben fue mucho más limitado: le dio Bélgica a Francia, pero no Renania ni el norte de Italia. Sabiendo que el Directorio, cuya prioridad era poner la frontera de Francia en el Rin, no estaría satisfecho, Bonaparte amenazó con dimitir y regresar a París: estaba seguro de que el gobierno inestable no se arriesgaría a repudiar a su general más glorioso.

Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, Toussaint Louverture, el líder negro cuyo paso del lado español al francés en 1794 había salvado la colonia caribeña para la República, estaba, como Bonaparte, convirtiendo su éxito militar en poder político. Después de unirse a las filas francesas, Louverture se arrimó al gobernador militar francés, Étienne Laveaux, quien había quedado al mando cuando retiraron a los comisarios civiles Sonthonax y Polverel en junio de 1794. Para mostrar su afecto por Laveaux, Louverture le llamaba «papá» e instaba a la población negra a mostrar gratitud a la República francesa que la había liberado de la esclavitud. Pero también le pedía que recordara: «Fui yo quien primero levantó el estandarte de la insurrección contra la tiranía»[26] y, por tanto, eran sus órdenes las que debían obedecer. Igual que Bonaparte, se ganó la lealtad de sus soldados asegurándose de que tuvieran comida, municiones y uniformes, y llevándolos al éxito en la batalla. La mayoría de las tropas blancas de Laveaux habían sucumbido a enfermedades tropicales y estaba agradecido a Louverture por el apoyo. Laveaux le recomendó para su nombramiento como general en el ejército francés y la Convención termidoriana lo aceptó en el verano de 1795.

Del mismo modo que Bonaparte navegó hábilmente contra la corriente de la política italiana, Louverture manejó las complejidades de la sociedad colonial caribeña. Lograba aunar sus muestras de preocupación por la población negra con gestos para ganarse la confianza de los blancos, así como de la población mestiza, que se había proclamado legalmente libre antes de la abolición de la esclavitud. La mayoría de los antiguos esclavos anhelaban dividir las plantaciones y reclamar parcelas de tierra para sí mismos, pero Louverture defendió los derechos de los terratenientes e

insistió en que los negros debían demostrar que eran dignos de la libertad «por su sumisión a las leyes, su trabajo y su obediencia». Esperaba que los blancos reconocieran su papel esencial para mantener a raya a la población negra. En diciembre de 1795, cuando dirigió la elección de diputados para representar a la provincia occidental de Saint-Domingue en la legislatura francesa, les encargó que informaran sobre «los grandes y memorables servicios que había prestado al país y a todos los ciudadanos que vivían bajo su mando amable y humano». Como había hecho Bonaparte, Louverture rechazó la hostilidad del Directorio hacia la Iglesia; en un momento, instó al republicano Laveaux a «imitar a Jesucristo, que murió y sufrió tanto por nosotros».[27]

Una vez que el Directorio se convenció de que la amenaza de un asalto británico a Saint-Domingue había desaparecido, en enero de 1796 envió una nueva comisión civil a la colonia. Su miembro más destacado era Sonthonax, que había concedido la libertad a la población negra allí en 1793; uno de sus colegas era Julien Raimond, el representante desde hacía mucho tiempo de la población de color libre, que se convirtió así en el primer hombre de ascendencia parcialmente africana designado para tal cargo. Sonthonax ahora estaba casado con una mujer de color a la que había conocido en Saint-Domingue en una misión anterior, lo que le daba mayor credibilidad ante la población.

Los comisarios civiles llegaron en junio de 1796, justo después de que una crisis política hubiera alterado significativamente el equilibrio de poder en la colonia. El 20 de marzo, uno de los rivales de Louverture, el general mestizo Jean-Louis Villatte, dio un golpe de Estado, detuvo a Laveaux y se autoproclamó gobernador. Louverture reunió a sus tropas negras y logró volver a poner a Laveaux en su cargo, pero ahora estaba claro que era Louverture quien tenía el poder real en Saint-Domingue. Aunque tanto Sonthonax como Louverture estaban firmemente comprometidos con la abolición de la esclavitud, los dos hombres pronto se vieron envueltos en una lucha por el control de la colonia. Muchos negros veneraban a Sonthonax por darles la libertad, y Louverture estaba resentido por la popularidad del hombre blanco. Reforzó su propia posición al disponer que

se eligiera a Laveaux para la legislatura francesa, donde se convirtió en un firme defensor del general negro. Después de la partida de Laveaux a Francia a fines de 1796, Louverture le reemplazó como gobernador de la colonia. El general francés Donatien Rochambeau, que había acompañado a Sonthonax, se reunió con Louverture y percibió su ambición; predijo que «algún día obligará a los miembros del Directorio a plegarse a todos sus deseos».[28]

Saint-Domingue no era la única colonia por la que debía preocuparse el Directorio. El comisario francés Victor Hugues había arrebatado Guadalupe de las manos de los británicos a mediados de 1794. Después ejecutó a muchos de los blancos dueños de plantaciones que antes habían dado la bienvenida a los invasores y gobernó la isla como un auténtico dictador hasta 1798. Ignorando las órdenes de la metrópoli de implementar la Constitución de 1795, Hugues se negó a otorgar la libertad plena a los antiguos esclavos negros. Sin embargo, el ejército estaba formado mayoritariamente por negros. También era negra la tripulación de la mayoría de los numerosos barcos corsarios que Hugues armó para interrumpir el comercio británico en la región. Los corsarios de Hugues se apoderaban de los buques mercantes estadounidenses que comerciaban con las colonias británicas. Así, Hugues arrastró a Francia a una «cuasi guerra» con Estados Unidos que agrandó el abismo que había entre las repúblicas a ambos lados del Atlántico. Se ordenó la abolición de la esclavitud en Cayena, la colonia francesa escasamente poblada en el continente sudamericano, pero el Directorio introdujo allí una nueva forma de servidumbre al designarla como colonia penal para los presos políticos deportados de Francia. En febrero de 1796, el Directorio envió comisarios a las dos remotas colonias insulares de Francia en el Océano Índico, los únicos territorios franceses donde aún no se había implementado el decreto de abolición de 1794. Cuando los comisarios finalmente llegaron a la Isla de Francia después de su viaje de cuatro meses, los colonos blancos los empujaron de regreso a su barco antes de que pudieran proclamar la ley. El Directorio no tomó ninguna medida contra los colonos blancos rebeldes, porque temía que, si se enfrentaba a ellos, entregarían la isla a los

británicos. La pasividad del gobierno generó dudas sobre su determinación de mantener la abolición de la esclavitud.

Mientras tanto, la política en Francia se encontraba en un estancamiento tenso. La detención de los babuvistas distanció al Directorio del resto de los jacobinos, pero no le ganó ningún apoyo genuino de los monárquicos, que ya esperaban con optimismo las elecciones legislativas programadas para abril de 1797. Un amigo republicano de Carnot, alarmado de que el antiguo miembro del Comité de Seguridad Pública hubiera liderado la represión contra el complot de Babeuf, le advirtió que los monárquicos estaban esperando la oportunidad de intentar tomar el poder: «Te privas todos los días del apoyo de aquellos cuya supervivencia está unida a la tuya».[29] Un ataque contra el campamento militar de Grenelle a principios de septiembre de 1796, que se atribuyó a los agitadores de izquierda, sólo amplió la brecha entre el gobierno y los republicanos. En las calles, según la policía, la gente llamaba a los sospechosos detenidos «trabajadores a los que habían llevado por el mal camino»; se negaron a creer que «desafortunados sin recursos, armas ni dinero pudieran haber tenido la idea de atacar un campamento bien protegido».[30]

Para demostrar que estaba en guardia contra cualquier resurgimiento del republicanismo militante, el Directorio adoptó una actitud más ambivalente hacia el movimiento de la derecha. Carnot estaba convencido de que el Directorio necesitaba llegar a un entendimiento con los miembros más moderados de este grupo, ya que representaban las opiniones del restringido electorado creado por la Constitución de 1795. Otros miembros del Directorio, sin embargo, temían que las concesiones a la derecha al final condujeran a una restauración de la monarquía. Los diputados, periodistas y agentes monárquicos que componían la derecha política estaban divididos a su vez, tanto con respecto a sus objetivos como sobre la mejor estrategia para alcanzarlos. Desde finales de 1794, políticos conservadores se habían estado reuniendo en casa de uno de sus miembros en la Rue de Clichy. En este «Club de Clichy» se ventilaron las diferencias entre las corrientes

rivales. En un extremo se encontraban los verdaderos monárquicos, que estaban decididos a restaurar la dinastía borbónica y dispuestos a recurrir a la fuerza para derrocar al Directorio. En el otro había republicanos cautelosos que pensaban que la terquedad de Luis XVIII imposibilitaba el regreso de la monarquía; querían concentrarse en consolidar el orden social y dar a la Constitución de 1795 una interpretación conservadora. En el centro estaban los monárquicos constitucionalistas que consideraban que cualquier gobierno republicano era fundamentalmente inviable; sin embargo, estaban igualmente descontentos con la perspectiva de volver a la antigua monarquía. El agente británico William Wickham, a quien su gobierno había encargado que diera sentido a «esa extraña masa de personas y partidos que forma la hoy débil oposición al gobierno de París», concluyó que poco se podía esperar de ellos.[31]

En público, los diputados conservadores y los periodistas aliados con ellos se limitaron a impulsar la revisión de la legislación social aprobada durante la etapa radical de la Revolución. Una propuesta para un código integral de derecho civil, que se había presentado en junio de 1796, habría restaurado el derecho exclusivo de los maridos a administrar la propiedad familiar. También habría reducido los derechos a la herencia de los niños adoptados y los niños nacidos fuera del matrimonio. En realidad, sólo se aprobó una ley más estricta que excluía a los hijos ilegítimos de cualquiera de las partes de la herencia de su padre. Las denuncias de la ley de divorcio –un orador dijo que «permitía a un hombre cambiar de esposa como de ropa y a las mujeres cambiar de marido como de sombrero»– consiguieron aplausos, pero no la aprobación legislativa.[32] Los conservadores también se presentaron a sí mismos como el «partido de la paz». Estaban dispuestos a abandonar objetivos como la anexión de los territorios alemanes en la orilla occidental del Rin y criticaron negativamente la política agresiva de Bonaparte en Italia. «Al propagar la Revolución más allá de nuestras fronteras, perpetuamos la guerra», escribió el periodista Charles Lacretelle.[33] Tales críticas desacreditaban a los generales que estaban ganando cada vez más influencia y permitían que los partidarios del Directorio cuestionaran la lealtad de sus oponentes a la nación. Dado que el

Directorio se había comprometido a mantener la abolición de la esclavitud en Saint-Domingue, los conservadores hicieron causa común con los propietarios blancos desplazados de las plantaciones, alegando que el gobierno no estaba haciendo nada para proteger sus derechos sobre sus tierras en la colonia. «¿Qué hombre blanco sería lo suficientemente valiente para vivir sin protección ni garantía alguna en medio de estos mismos individuos cuyas manos están manchadas de la sangre de sus compañeros?», preguntó un colono.[34]

A comienzos de 1797, el gobierno detuvo a un grupo de conspiradores monárquicos liderados por el abad Brottier, con la esperanza de demostrar que cargaba por igual contra extremistas de la derecha que de la izquierda. Sin embargo, su campaña de propaganda tuvo un éxito limitado. A los periodistas de derechas les sacaba de quicio que se empañara su causa al asociarla con un complot que «no podía tener ninguna esperanza real de éxito y que tenía un solo propósito: perturbar, dividir y romper el orden constitucional». La respuesta reflejó su irritación al ver interrumpido su plan de tomar el control del gobierno por medios legales.[35] Según la Constitución, las elecciones para reemplazar a un tercio de los diputados en los dos consejos se llevarían a cabo en abril. Los conservadores y los monárquicos difícilmente podían ocultar su impaciencia: estaban seguros de que las asambleas electorales, formadas por ricos propietarios con malos recuerdos del Terror, los favorecerían. «¡Tiembla, tú que eras la plaga de tu país!», advertía un panfleto de amplia circulación a los antiguos *conventionnels* que debían presentarse a la reelección.[36] Divididos entre ellos, los miembros del Directorio no hicieron nada por evitar la inminente debacle republicana; el inicio del juicio de Babeuf y sus compañeros conspiradores, que coincidió con la campaña electoral, atrajo la atención de los radicales republicanos que aún quedaban, pero sirvió para recordar a los conservadores los peligros de la anarquía.

El único problema de la derecha era la falta de coordinación general. Con el apoyo de los británicos, el exdiputado de la Asamblea Nacional, Antoine d’André, formó una red de monárquicos, el Instituto Filantrópico, que trató de seleccionar candidatos con los que se pudiera contar para

seguir un programa común. Pero no pudo controlar los más de treinta periódicos de derechas que se publicaban en París, muchos de ellos editados por hombres que pensaban que serían excelentes diputados, o las decenas de notables locales que estaban decididos a presentarse con o sin aval de la organización. Al revisar el resultado seis meses después, otro conspirador que había trabajado con D'André escribió que cuando comenzó su trabajo, dos meses antes de la votación, «tenía motivos para creer que se había formado un partido para el restablecimiento de la monarquía [y] que este partido tenía conexiones en los departamentos. Qué sorpresa me llevé al descubrir que todo esto sólo existía sobre el papel […]. ¡No se había hecho nada! ¡Ni siquiera en París había partido, ni organización!».[37] Las asambleas electorales sí rechazaron a casi todos los exmiembros de la Convención y los diputados que eligieron eran mayoritariamente conservadores. Pero los nuevos diputados no se pusieron de acuerdo sobre la manera en que debían promover sus ideas.

Mientras los políticos de la derecha con más experiencia intentaban reunir a sus colegas en el Club de Clichy, los directores discutían entre ellos sobre cómo reaccionar ante el resultado de las elecciones. Rewbell quería declarar nulos los resultados e impedir que los nuevos diputados tomaran posesión de sus escaños, una política que habría provocado una crisis constitucional inmediata. Carnot argumentó que, en lugar de eso, debían intentar comprometerse con los conservadores más moderados. El resultado del juicio de Babeuf, que se había prolongado durante tres meses en la ciudad provincial de Vendôme, agravó la situación del gobierno. Los acusados y su hábil abogado, Pierre Réal, lograron desacreditar gran parte de las pruebas aportadas para probar la existencia de una conspiración, a pesar de que Babeuf casi echa por tierra esta estrategia al jactarse de sus intenciones y defender su visión comunista. Al final, la mayoría de los sesenta acusados fueron absueltos; a Babeuf y a su socio Augustin Darthé se los condenó a muerte, no por conspiración, sino por violar la ley de prensa aprobada en 1796 que prohibía abogar por un retorno a las políticas del Terror. Como los «mártires de pradial», los montañeses Babeuf y Darthé se apuñalaron a sí mismos, pero sobrevivieron el tiempo suficiente para que

los llevaran a la guillotina. La prensa republicana denunció estas «ejecuciones bárbaras», que parecían especialmente excesivas en vista de las sentencias relativamente leves impuestas a los monárquicos que habían sido detenidos en la conspiración de Brottier.[38]

En cuanto pudieron ocupar sus escaños en los consejos legislativos, los diputados conservadores del «nuevo tercio» mostraron sus fortalezas y debilidades. Lograron elegir a un nuevo director, François Barthélemy, que reemplazaría a Letourneur. Barthélemy, un exaristócrata y diplomático, carecía de energía y experiencia en política nacional y pronto demostró que era incapaz de enfrentarse a sus colegas más enérgicos. Eligieron al general Pichegru para liderar el Consejo de los Quinientos. Tenía una personalidad más fuerte, pero sus contactos traicioneros con los monárquicos le dejaban en muy mala situación. Los directores republicanos se enteraron de que había habido estos contactos en julio de 1797 gracias a la correspondencia incautada por Bonaparte en Italia. La primera iniciativa legislativa que tomaron los conservadores, un ataque a la política del Directorio en Saint-Domingue, se les volvió en contra. Después de denunciar la emancipación de los negros en la colonia como una medida adoptada «más por odio a los blancos que por apego a los negros», los conservadores se vieron obligados a condenar toda la fase republicana de la Revolución y a los políticos que la habían apoyado. «Ya saben los males que han causado en Francia los atroces decretos que estos mismos hombres han dejado pasar durante los últimos cinco años», declaró un miembro conservador que estaba a favor de la esclavitud. El comentario provocó una furiosa respuesta del exdiputado de la Convención, Merlin de Thionville, un termidoriano que había estado dispuesto a ponerse del lado conservador; ahora objetaba que el legislador quería «llevar a juicio a quienes fundaron la República, a pesar de ese legislador, precisamente».[39]

El alboroto que generó este debate dañó las posibilidades de que hubiera una alianza entre los miembros más agresivos del Club de Clichy y los republicanos moderados que podrían haber estado dispuestos a formar una coalición con ellos. Los de Clichy recuperaron algo de impulso cuando Camille Jordan, miembro del nuevo tercio, propuso suavizar las

restricciones a las celebraciones religiosas públicas y desechar la prohibición de tocar las campanas de las iglesias para anunciar los servicios católicos. A diferencia de los defensores de la esclavitud, Jordan pudo apelar al principio de libertad religiosa que estaba recogido en la propia constitución de la República e incluso revivir el lenguaje sentimental de los jacobinos sobre los «hombres simples y buenos que atienden nuestros campos y los hacen productivos a través de su necesario trabajo». Exigió que se diera a estos aldeanos la libertad de «seguir en paz la religión de su corazón». Comparó ingeniosamente la «superstición filosófica que nos hace temer las campanas» con la «superstición popular que las une a las mujeres de nuestros pueblos».[40]

Para entonces, la constante repetición de clichés políticos había privado a los discursos parlamentarios del efecto galvanizador que a menudo habían tenido antes en la Revolución. La defensa que hizo Jordan de la libertad religiosa fue uno de los últimos discursos que tuvo verdadero impacto público. Indudablemente, tenía razón al argumentar que gran parte de la población habría aceptado gustosa que volvieran a oírse las campanas de las iglesias y las ceremonias funerarias religiosas. Los comentarios a sus propuestas daban una idea de lo alejados que estaban los republicanos de sus oponentes. El *Sentinelle*, editado por Jean-Baptiste Louvet, uno de los diputados girondinos que los montañeses habían expulsado de la Convención en 1792, se opuso a la afirmación de Jordan de que la religión tenía un impacto positivo en la moralidad. Los sacerdotes, insistió el *Sentinelle*, no podían instruir a la gente: «Para ilustrar a los hombres, uno mismo tiene que ser ilustrado, y no querer empequeñecer la razón de sus semejantes».[41] Los periódicos de la derecha también quitaron valor al convincente argumento de Jordan de que otorgando mayor libertad a los católicos se reduciría su hostilidad hacia la República. Uno de los periódicos se quejó de que su «proyecto parece proponer la tolerancia de un culto supersticioso más que la protección debida a una religión verdadera, una religión que se puede llamar la de Francia».[42]

Para contrarrestar a los monárquicos y al Club de Clichy, el Directorio buscó el apoyo del ejército. Aunque la política de Bonaparte en Italia era

socialmente conservadora, estaba enfurecido por las denuncias que habían hecho los derechistas franceses de su invasión de la histórica República de Venecia. Cuando los periodistas le exigieron que explicara cómo podía «seguir hablando de la soberanía inalienable de los pueblos mientras traficaban con su sangre y sus derechos», se dio cuenta de que no tenía más remedio que apoyar al gobierno republicano en París.[43] Aunque la Constitución francesa prohibía que el ejército tomara partido en política, Bonaparte animó a sus hombres a aprobar resoluciones que se hicieran eco de la retórica radical del año II. Les dijo: «Sé que estáis profundamente afectados por las desgracias que amenazan al país […]. Las montañas se interponen entre Francia y nosotros; las cruzaríais a la velocidad de un águila, si fuera necesario, para defender la Constitución y la libertad, proteger al gobierno y a los republicanos».[44] Siguiendo las órdenes secretas de Barras, Hoche, otro comandante republicano convencido, llevó unidades de su ejército hacia la capital. Desde el otro lado del Atlántico, Toussaint Louverture, inquieto por la noticia de la hostilidad del Club de Clichy hacia la emancipación negra, envió una proclama recordando a los franceses que «cuando Francia estuvo a punto de perder la colonia, fueron los negros quienes utilizaron sus brazos y sus armas para conservarla». Afirmó que la población negra, «con la Constitución en una mano […] defenderá la libertad que ésta garantiza».[45]

El diputado centrista Antoine Thibaudeau, iba de reunión en reunión con la esperanza de evitar un desenlace violento. Utilizó los contactos que tenía en el salón de Madame de Staël con el fin de obtener información que le pudiera servir para convencer a los directores de que hicieran concesiones y ganarse así a los derechistas más moderados. Luego se encontró con diputados del Club de Clichy para argumentar contra los monárquicos que estaban decididos a provocar un enfrentamiento violento con el gobierno. Barras ocultó tan bien sus intenciones que engañó a Carnot, quien creyó que podía contar con él para apoyar el tipo de acuerdo que buscaban Thibaudeau y otros. El 27 de mesidor del año V (15 de julio de 1797), Carnot propuso que el Directorio mostrara su voluntad de acercarse a los consejos destituyendo a los ministros del gobierno más

claramente republicanos. Para su consternación, Barras votó con sus colegas más militantes, Rewbell y Larevellière-Lépeaux, con el fin de destituir a los ministros más dispuestos a llegar a acuerdos con los conservadores. En el mismo momento, llegaron a París informes de que las tropas de Hoche habían cruzado el límite prescrito en la Constitución, que establecía que las unidades militares no debían acercarse a más de treinta kilómetros de la capital. Los periodistas de la derecha calificaron las acciones del Directorio como «una declaración de guerra civil».[46]

A pesar de tener soldados a su disposición, los «triunviros» –la prensa había empezado a llamar así a Barras, Rewbell y Larevellière-Lépeaux–, no actuaron. Barras había dado orden a Hoche de que llevara a sus soldados a París sin informar a sus dos colegas, pero el general no estaba dispuesto a respaldar un golpe militar sin el apoyo de éstos. En verano, durante todo el mes de termidor y la primera mitad de fructidor, los dos campos rivales se observaron con recelo. El Directorio animó a que sus partidarios en los consejos formaran un grupo propio, el Club de Salm, también conocido como el Círculo Constitucional, para contrarrestar al grupo de Clichy. La formación de este club inspiró a los antiguos jacobinos de algunas ciudades de provincia a formar sus propios círculos constitucionales. Como sustituto del indeciso Hoche, Bonaparte envió a uno de sus generales, Pierre Augereau, para que estuviera listo para dirigir las fuerzas republicanas. Barras contactó con las redes de exactivistas en los *faubourgs* de París, para asegurarse de que apoyarían al Directorio si fuera necesario. Sintiendo que corrían un peligro creciente, los diputados de la derecha en los consejos organizaron una fuerza militar propia, designada oficialmente como salvaguarda de la independencia de la legislatura, y reclutaron partidarios civiles de la antigua *jeunesse dorée*.

A algunos observadores la tensión creciente en la capital les recordó las semanas anteriores a la *journée* del 10 de agosto de 1792, pero cuando estalló el enfrentamiento apenas se derramó sangre. En la noche del 17 de fructidor del año V (3 de septiembre de 1797), se colgaron proclamas en las paredes anunciando un golpe. Estas incluían copias de documentos que Bonaparte había enviado desde Italia con pruebas de la traición del general

Pichegru, uno de los líderes del Club de Clichy. Soldados uniformados rodearon las salas de reuniones de los consejos. Detuvieron a Barthélemy, el director al que habían elegido recientemente; Carnot logró escapar.

En la mañana del 18 de fructidor (4 de septiembre), los organizadores del golpe contaron a los diputados de los dos consejos, que consideraban dignos de confianza, que los tres triunviros estaban tomando medidas para acabar con un intricado complot monárquico. Se les pidió que respaldaran la detención y deportación a Cayena de 65 supuestos conspiradores contrarrevolucionarios, incluidos los otros dos directores y 53 diputados. Se declararon nulos los resultados electorales en más de la mitad del país, quitando de en medio a más de un centenar de diputados, a quienes se reemplazó por republicanos en los que se podía confiar. Invocando el artículo de la Constitución que autorizaba restricciones a la libertad de prensa en caso de emergencia, el Directorio suprimió más de treinta periódicos de la derecha y ordenó que se detuviera a sus directores y editores. La mayoría de los políticos y periodistas de la lista lograron escapar de la policía. Madame de Staël, que había cenado con Barras la noche anterior al golpe, avisó al líder termidoriano Boissy d’Anglas y a otros conocidos, y el Directorio puso poco empeño en la caza de los fugitivos. Las tropas de Augereau se aseguraron de que no hubiera una clara resistencia al golpe, y dieron la orden de dispersarse a algunos grupos de militantes republicanos entusiasmados que habían respondido a los llamamientos de Barras.

El *coup d’état* (golpe de Estado) del 18 de fructidor demostró que los miembros de la élite republicana postermidoriana no permitían que se los destituyera del poder por los mecanismos de la Constitución que ellos mismos habían creado. Para justificar sus acciones, el ministro de Policía, Jean-Marie Sotin, presentó un informe sobre «el vasto proyecto de restauración de la monarquía que se había estado llevando a cabo en toda la República, antes del 18 fructidor». No le costó mucho demostrar que numerosos *émigrés* habían estado buscando la manera de regresar a Francia, a menudo con la ayuda de funcionarios locales, y que había un apoyo generalizado para volver al culto católico o, como él lo llamó, la

«resurrección» del «fanatismo». Explicó que, en numerosas cartas interceptadas por la policía, era patente el entusiasmo por los diputados del nuevo tercio; lo cual, según él, demostraba que «numerosos miembros de los dos Consejos» eran «partidarios, protectores, corresponsales [y] cómplices» de los monárquicos.[47] Desde el punto de vista del derrotado movimiento de la derecha, la facilidad con la que los habían aplastado los impopulares republicanos demostraba que nunca habían tenido el apoyo que creían. Años más tarde, el periodista Charles Lacretelle concluyó que sus lectores quizá compartieran sus opiniones, pero lo que realmente querían eran líderes que, «sin alarmar demasiado a los republicanos, sin que nos cueste ningún esfuerzo, sin que tengamos que tomar las armas, un día aprobaran este simple decreto: se proclama a Luis XVIII rey de Francia».[48]

En la superficie, el golpe pareció demostrar no sólo la debilidad de la oposición de derecha, sino también la fuerza de la República del Directorio. Barras, Rewbell y Larevellière-Lépeaux dieron una lección magistral sobre cómo un régimen con pocos apoyos podía acabar con sus opositores. Al mismo tiempo, a diferencia de los vencedores de las *journées* revolucionarias de 1792 y 1793, lograron hacerlo dentro de los márgenes de la ley, aunque por poco, y controlar la situación tras la victoria. No hubo un regreso al radicalismo popular después de fructidor, y las instituciones del régimen –el Directorio y los consejos legislativos– permanecieron intactas, aunque se violara flagrantemente el principio de que el gobierno debía reflejar la voluntad del electorado. A Carnot y a Barthélemy se los destituyó sin miramientos y en su lugar se colocaron republicanos de confianza, las vacantes en los consejos se cubrieron rápidamente y se reanudó la rutina del debate parlamentario. Ni siquiera se acabó con la libertad de prensa: muchos de los periódicos de la derecha que se habían prohibido no tardaron en reaparecer con nuevos nombres, y los periódicos republicanos continuaron mostrando su desacuerdo entre ellos con fuerza suficiente como para dejar claro que el debate público seguía vivo.

A pesar de esta aparente tranquilidad, el golpe de fructidor marcó un cambio importante en la naturaleza del régimen republicano. Si bien los vencedores lograron dar a sus acciones un barniz de constitucionalidad,

claramente habían violado el postulado fundamental del gobierno representativo, el principio de que se debe respetar la voluntad de los votantes. Sin duda, el electorado, reducido por los mecanismos de la Constitución de 1795, no estaba formado por la totalidad del pueblo francés, pero el golpe de fructidor no se llevó a cabo para democratizar el sistema. Al contrario, los autoproclamados defensores del republicanismo recurrieron a los generales y sus ejércitos para que les brindaran el apoyo que necesitaban para derrotar a los partidarios de la realeza. A pesar de las constantes referencias a las formas en que Julio César y Oliver Cromwell habían utilizado la fuerza militar para derrocar las instituciones republicanas de la antigua Roma y la Gran Bretaña puritana que salpicaban los debates revolucionarios franceses, los líderes del Directorio se arriesgaron a invitar a los militares a entrar en política. Por el momento, su apuesta tuvo éxito: los generales, incluso el ambicioso Napoleón Bonaparte, aceptaron la autoridad del «Segundo Directorio» que surgió de fructidor. Pero el golpe de Estado que habían dado Barras y sus colegas sentó un precedente que se volvería contra ellos.

18

De fructidor a brumario

Septiembre de 1797-noviembre de 1799

Igual que ocurrió tras la derrota de los girondinos el 31 de mayo de 1793 –y tras la de la insurrección realista el 13 de vendimiario del año IV (5 de octubre de 1795)–, después del golpe contra los moderados y contrarrevolucionarios del 18 de fructidor del año V (4 de septiembre de 1797) hubo un resurgir de la agitación republicana. El Segundo Directorio, fortalecido con dos nuevos miembros republicanos en los que podía confiar, Philippe-Antoine Merlin de Douai y Nicolas-Louis François de Neufchâteau, tomó fuertes medidas para asegurar que ninguna fuerza política hostil amenazara el régimen. En el extranjero, los ejércitos franceses convirtieron el año siguiente al del golpe en el punto álgido de la expansión de la República. Bajo la bandera tricolor, las tropas republicanas expulsaron a los invasores británicos de las posiciones que habían ocupado en Saint-Domingue, alcanzaron las cumbres de los Alpes suizos, derrocaron a los gobiernos de la mitad meridional de la península italiana y cruzaron el Mediterráneo para ganar batallas a orillas del Nilo. Los éxitos del Segundo Directorio intensificaron la convicción de que Francia era una «gran nación, acostumbrada a la victoria», como escribió el poeta y diputado legislativo Marie-Joseph Chénier.[1] Sin embargo, aunque el régimen demostró su capacidad para derrotar a sus enemigos dentro y fuera del país, sus dirigentes siguieron siendo conscientes de que aún no se habían ganado el corazón de su propia gente, muchos de los cuales se negaban a aceptar las instituciones republicanas que se suponía que iban a transformarlos en ciudadanos leales. De hecho, incluso entre las élites gobernantes de la República se notaba cierto descontento con el sistema que se había creado

en 1795. Cuando la marea de la guerra se volvió contra los franceses en 1799, la supervivencia de la República se puso inmediatamente en duda.

Los vencedores de fructidor no perdieron tiempo en sacar partido de su triunfo. La prensa republicana formó un coro atronador para justificar el golpe. «En las grandes crisis políticas, es sencillamente imposible atenerse a los procedimientos jurídicos ordinarios a los que los conspiradores nunca apelan, excepto cuando intentan anularlos», entonó la *Décade philosophique*, el órgano de los intelectuales laicos del país.[2] Benjamin Constant, que estaba deseando ser el filósofo político del régimen, insistía en que «en toda la República no debería haber un solo funcionario, desde el administrador de la comuna más pequeña hasta la máxima autoridad ejecutiva [...] que no esté comprometido con la libertad republicana».[3] Además de expulsar a los partidarios del Club de Clichy del Directorio y de los consejos, y prohibir sus periódicos, el Directorio purgó sistemáticamente las administraciones locales de todo el país, asegurándose de que siguieran las órdenes de París. Los consejos se unieron al esfuerzo y restablecieron duras leyes contra los nobles y los sacerdotes que habían emigrado. Envalentonados por su posición reforzada, los directores declararon una bancarrota parcial, disfrazada de consolidación de las obligaciones del Estado, liberándose así finalmente de la carga insostenible de la deuda que había derribado a la monarquía. A los tenedores de bonos se les dijo que recibirían sólo un tercio de lo que se les debía. Tuvieron que aceptar la promesa de que al menos una parte de su inversión estaría ahora segura.

Los debates en la legislatura posfructidor a veces se inclinaban hacia acciones que recordaban al Terror. En un ataque de celo ideológico, los legisladores aprobaron una ley que privaba a todos los antiguos nobles que permanecían en Francia de sus derechos cívicos, a pesar de las objeciones de que la medida castigaba a miles de individuos que nunca habían violado ninguna ley. El gobierno necesitaba «todos los medios posibles para derrotar a los enemigos del contrato social», proclamó un periodista.[4] En la práctica, se hicieron excepciones con los nobles que habían salido elegidos en cualquiera de las asambleas revolucionarias anteriores y con los que

actualmente ocupaban un cargo o servían en el ejército; de lo contrario, figuras tan prominentes como el director Paul Barras hubieran tenido que renunciar a sus cargos. Los sacerdotes *émigrés* a los que se había permitido regresar antes del golpe no fueron tan afortunados como los antiguos nobles: en los dos años posteriores a fructidor se detuvo a unos 10.000 u 11.000 y se encerró a unos 1.500 en islas de la costa oeste de Francia. El lenguaje republicano contra el clero alcanzó niveles nunca vistos desde la campaña de descristianización de 1793. «Un hombre que se convierte en sacerdote ha abandonado la razón; es un imbécil o un hipócrita», declaró un polemista.[5]

La afirmación de los fructidorianos de que la República había logrado escapar por los pelos de un derrocamiento a manos de los monárquicos, tuvo una consecuencia que los golpistas no habían previsto: estimuló el resurgimiento de un auténtico republicanismo popular. Los círculos constitucionales se extendieron rápidamente por París y aparecieron en ciudades y pueblos de toda Francia. Una vez más, como lo habían hecho durante la época de la Convención Nacional, los artesanos, comerciantes y empleados, «hombres sin mucha educación que no tienen otros bienes que su virtud moral y política», como dijo un comisario de policía de Burdeos, reclamaron su derecho a participar activamente en los asuntos cívicos.[6] El éxito del movimiento demostró que ni el recuerdo de los excesos cometidos durante el Terror ni la represión del activismo en los años transcurridos desde termidor habían acabado con el deseo de una sociedad más democrática. Una amenaza todavía peor para los conservadores era el nuevo activismo entre algunas de las mujeres de la clase obrera de la capital. Cuando un grupo de mujeres organizó una manifestación, un periodista preguntó cómo podía el gobierno tolerar a estas «mujeres desvergonzadas, que podían convertirse en cualquier momento, como hicieron más de una vez, en el núcleo de una formidable revuelta».[7]

Ante este recrudecimiento de la política popular, los propagandistas del gobierno volvieron a utilizar la afirmación de que estaban protegiendo al país tanto de las tendencias monárquicas como de la «anarquía», su palabra clave para referirse al espíritu jacobino. Los partidarios de los círculos

constitucionales respondieron vigorosamente. «Cuando un arquitecto reconstruye una casa, no llama “anarquía” al inevitable desorden de los materiales que se han reunido con gran dificultad», declaró en un editorial el *Courrier de la Gironde*.[8] Para contrarrestar la propagación de los círculos constitucionales, el gobierno impuso un impuesto de timbre sobre la prensa, que obligó a los editores a subir el precio de las suscripciones. Como se quejó el *Journal des hommes libres*, la ley iba claramente contra los periódicos cuyos lectores «no son ricos, pero que sin embargo necesitan un antídoto contra las malas opiniones».[9] Los funcionarios del Directorio reprimieron la práctica de la *ambulation* de los círculos constitucionales, por la que los miembros de un club lograban sortear la prohibición de sus clubes yendo a una ciudad o pueblo vecino para reunirse con sus compañeros activistas. La versión del republicanismo del Directorio consistía sobre todo en un esfuerzo intensificado por imponer la ley y el orden en el campo. La Gendarmerie, una fuerza policial autorizada antes de fructidor, se convirtió en una organización mayor y más profesional. Una ley aprobada a mediados de enero de 1798 permitía que fueran consejos militares quienes juzgaran a los miembros de las bandas de ladrones. Actuaban con más celeridad que los tribunales ordinarios y aplicaban castigos más severos.

La línea dura de las políticas del gobierno dentro del país se complementaba con una política exterior más agresiva. En los meses anteriores a fructidor, Francia había mantenido conversaciones de paz con el gobierno británico. El Directorio culpó a los británicos de la supuesta conspiración monárquica que había provocado el golpe y rompió esas negociaciones. Los austriacos reconocieron que no conseguirían más concesiones de Francia, donde el Directorio exhortaba ahora a Bonaparte a hacer demandas aún mayores, y se apresuraron a concluir un tratado oficial para reafirmar el acuerdo informal al que habían llegado en Leoben seis meses antes. Para dar cumplimiento a los términos del Tratado de Campo-Formio, firmado el 17 de octubre, Bonaparte entregó Venecia y sus territorios en la península italiana a los austriacos. A cambio, éstos reconocieron la independencia de la República cisalpina y abandonaron sus

reivindicaciones sobre su antigua provincia de Lombardía. Los austriacos reconocieron la anexión de Bélgica por parte de Francia y prometieron apoyar la exigencia francesa de los territorios alemanes de la ribera occidental del río Rin; por su parte, los franceses se encargarían de compensar a Austria, por fin, a expensas de los pequeños estados alemanes del Sacro Imperio Romano Germánico.

El Directorio no estaba contento con el Tratado de Campo-Formio, dos de los cinco miembros incluso se negaron a firmarlo. Querían un acuerdo más firme con Austria, que reconociera las conquistas francesas a lo largo del Rin, y estaban molestos porque Bonaparte, al entregar Venecia y sus territorios circundantes a Austria, había dejado al enemigo con una posición estratégica en Italia. Sin embargo, cuando el general regresó a París a finales de noviembre de 1797, el gobierno no tuvo más remedio que recibirle con honores en un ceremonioso acto público en el patio del Palacio de Luxemburgo. Talleyrand, el ministro de Asuntos Exteriores que había regresado del exilio el año anterior, elogió los logros de Bonaparte y su modestia, e insistió en que, al honrar sus logros, «todos los republicanos franceses deberían sentirse más grandes». El propio discurso de Bonaparte fue breve y carente de retórica exagerada, pero sus palabras finales –«cuando la felicidad del pueblo francés esté asegurada por mejores leyes orgánicas, Europa será libre»– dejaron claro que la Constitución de 1795 no le parecía adecuada. Bonaparte había esbozado lo que quería decir con «mejores leyes orgánicas» en una carta a los dirigentes de la «República de Liguria» que él había establecido en Génova. En la carta, culpó a las políticas revolucionarias de haber alienado a la Iglesia y a la nobleza en Francia, lo cual había creado interminables conflictos internos, y pidió «frialdad, moderación, sabiduría, razón en la concepción de los decretos». En un momento en que el Directorio estaba intensificando su actitud contra los sacerdotes y exaristócratas, era evidente que su general más destacado tenía ideas muy diferentes.[10]

Habiendo derrotado reyes, instituido repúblicas y negociado tratados en Italia, Bonaparte estaba listo para reclamar una posición importante para sí mismo en Francia. En público, cultivó un aire de humildad; cuando el

público de un teatro se enteró de que Bonaparte estaba allí, le pidieron que hiciera una reverencia, pero él se negó a mostrarse. Elegido miembro de la sección de ciencia y tecnología del Instituto Nacional, halagó a los intelectuales que le habían honrado diciendo: «Antes de convertirme en su igual, seré durante mucho tiempo su alumno».[11] En privado, sondeó a los políticos sobre la posibilidad de cambiar el requisito de la edad en las elecciones para el Directorio, así podría reclamar un puesto; o sobre la modificación de la Constitución. También habló con otros generales para tantear su voluntad de apoyar un golpe militar.

Algunos periodistas ya le aclamaban como una figura providencial. «El semidiós Bonaparte ha aparecido para lograr la victoria, para cumplir la idea que yo tengo del hombre, y para mostrarnos el valor de la sabiduría unida al coraje», escribió uno. En opinión de Madame de Staël, no se parecía nada a ninguno de los políticos que había conocido. «Había visto hombres muy dignos de respeto; también había visto hombres de aspecto peligroso: nada en la impresión que me produjo Bonaparte me los recordó». A Bonaparte, por su lado, le pareció que la ambiciosa Staël era irritante; cuando ella quiso saber a quién consideraba «la primera entre las mujeres», él respondió: «La que más hijos tiene». La gente le rodeaba cada vez que aparecía en público y la prensa informaba de todos sus movimientos, pero Bonaparte no dejó que su popularidad se le subiera a la cabeza. Cuando su compañero y ayudante Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne mencionó que «debe ser agradable que sus conciudadanos estén entusiasmados de verle», Bonaparte respondió: «Estarían igual de entusiasmados si me llevaran al cadalso».[12] Llegó a la conclusión de que no era el momento adecuado para hacer un intento de derrocar al Directorio, de modo que aceptó una misión para inspeccionar las tropas que se estaban reuniendo para una posible invasión de Inglaterra y abandonó la capital.

Mientras el Directorio reflexionaba sobre qué hacer con un ambicioso general, resultó que había otro militar que también les daba muchos quebraderos de cabeza. A mediados de 1797, Toussaint Louverture había ganado su batalla de voluntades contra el comisario francés Sonthonax y le dio la orden perentoria de que regresara a Francia como representante

legislativo de Saint-Domingue. El compromiso de Sonthonax en la defensa de la libertad de la población negra permaneció inquebrantable: apoyó firmemente una nueva ley sobre las colonias, que se aprobó el 1 de enero de 1798 y que esbozaba los procedimientos para dividir los territorios de ultramar en departamentos con las mismas instituciones civiles que la Francia metropolitana; también garantizaba que «los individuos negros o mestizos [...] gozarían de los mismos derechos que un individuo nacido en territorio francés». Pero Sonthonax advirtió al gobierno contra las crecientes ambiciones de Louverture y afirmó que la «mente supersticiosa y poco iluminada del general negro le ha hecho dependiente de los sacerdotes contrarrevolucionarios que, tanto en Saint-Domingue como en Francia, utilizan todos los medios posibles para derrocar la libertad». El Directorio reemplazó a Sonthonax por Joseph Hédouville, un general conocido por haber reprimido duramente a los rebeldes en la Vendée, pero Hédouville se dio cuenta rápidamente de que estaba indefenso ante el firme control que Louverture ejercía sobre las tropas negras de la colonia. «Con él, puedes hacer cualquier cosa; sin él, eres impotente», le dijo un veterano oficial blanco del ejército de Louverture a Hédouville.[13]

Como Bonaparte, Louverture tenía su propia política exterior. En agosto de 1798, negoció un tratado con Thomas Maitland, comandante de las fuerzas británicas, en el que se estipulaba la retirada de los casacas rojas de los territorios que habían ocupado desde 1793; a cambio, avisó a los británicos de un complot respaldado por el Directorio para provocar una insurrección de esclavos en Jamaica. Louverture también estableció sus propias conexiones con Estados Unidos, socavando la posición francesa en la «cuasi guerra» en curso entre las dos repúblicas. Las relaciones franco-americanas ya se habían deteriorado a causa de las incautaciones francesas de buques mercantes estadounidenses; se agravaron todavía más cuando Talleyrand exigió un soborno considerable a los representantes estadounidenses que habían ido a París para tratar de resolver el conflicto entre los dos países. Esta propuesta escandalizó al gobierno americano, que se refería a los intermediarios de Talleyrand como X, Y y Z, en lugar de publicar sus nombres, de ahí que el asunto se conozca como el «Caso XYZ».

Los partidarios del presidente John Adams en Estados Unidos procedieron a impulsar una declaración de guerra contra Francia. Toussaint Louverture se puso del lado americano al prohibir a los corsarios franceses que utilizaran Saint-Domingue como base. Aunque los americanos de los estados del sur tenían reparos en forjar vínculos con una isla de negros que se habían rebelado, con éxito, contra la esclavitud, una ley que imponía un embargo comercial a Francia, aprobada en febrero de 1799, contenía una exención, conocida como «cláusula de Toussaint», que permitía el comercio de Estados Unidos con Saint-Domingue.

Mientras esta colonia francesa amenazaba con escapar del mando del Directorio, el gobierno francés reforzaba su control sobre las repúblicas hermanas que había patrocinado en los Países Bajos e Italia y ampliaba la influencia francesa a nuevas partes de Europa. Desde la invasión francesa de 1795, los republicanos holandeses se habían encontrado en un punto muerto entre una facción «unitaria» radical que quería un gobierno centralizado fuerte y un partido «federalista» que esperaba preservar un papel significativo para las provincias históricas del país. El 22 de enero de 1798, los defensores del centralismo, apoyados por las tropas holandesas y francesas, detuvieron a sus principales opositores e impusieron una constitución que reflejaba sus ideas. El golpe de Estado en los Países Bajos sirvió de modelo para una remodelación similar del gobierno en la República cisalpina, donde los consejos legislativos recién creados trataron de obtener cierta independencia de Francia oponiéndose a los términos propuestos en el tratado para la alianza. El tratado exigía que los italianos pagaran dieciocho millones de francos al año para apoyar al ejército francés y estipulaba que se permitiría a los franceses nombrar al comandante de las propias tropas cisalpinas. Los jacobinos italianos más enérgicos utilizaron el malestar del Directorio con esta resistencia para eliminar a sus rivales moderados.

Mientras tanto, se había añadido Suiza a la lista de repúblicas hermanas dominadas por los franceses. Igual que los Países Bajos y Venecia, Suiza había sido una de las repúblicas tradicionales de Europa; el legendario héroe Guillermo Tell, líder de una revuelta contra el dominio austriaco en el

siglo XIV, formaba parte del panteón de revolucionarios a los que los propios franceses honraban como predecesores. Sin embargo, como ocurría en otras repúblicas del antiguo régimen, las ricas élites urbanas dominaban al resto de la población, e incluso algunos campesinos estaban dispuestos a acoger a los franceses y su promesa de promover la igualdad social. El director Jean-François Rewbell calificó al país como una «loca asamblea sin forma de gobierno [...], todos despóticos y todos enemigos de la República francesa».[14] Los opositores al gobierno oligárquico de Berna, el centro de la confederación libre de los cantones suizos, alentaron secretamente una invasión francesa, que tuvo lugar en enero de 1798. Para entonces, los pasos a seguir para crear nuevas repúblicas eran conocidos: se proclamó la nueva República helvética el 22 de marzo de 1798, y su constitución, editada previamente por los directores franceses Rewbell y Merlin de Douai, entró en vigor el 12 de abril. En lugar de destruir la monarquía en toda Europa, como habían prometido en 1792, los franceses habían derrocado todos los regímenes republicanos históricos del continente.

Seguía sin resolverse la cuestión crucial del tipo de republicanismo que prevalecería en la propia Francia. La purga de los consejos en fructidor significaba que se sustituiría a más de la mitad de los diputados en las elecciones de abril de 1798. Durante el invierno, los directores enviaron a agentes disfrazados de inspectores de caminos para informar sobre el ambiente político que se respiraba en provincias. Muchos respondieron que, efectivamente, las carreteras estaban en mal estado, es decir, que los conservadores impenitentes o los neojacobinos amenazaban con dominar la próxima votación. Los enérgicos partidarios de los círculos constitucionales se esforzaron por lograr el éxito de los valores democráticos que se habían eclipsado desde el derrocamiento de Robespierre. Habían estado averiguando las tácticas que serían necesarias para tener éxito en un sistema electoral. Un periodista republicano de Marsella escribió que «por primera vez desde la proclamación de la Constitución, los republicanos se alegran

ante la perspectiva de acudir libremente a las asambleas primarias, sin temer golpes arbitrarios de magistrados que se han vendido a la facción monárquica».[15]

A medida que fueron llegando los primeros informes sobre la presencia abrumadora de los radicales en las asambleas electorales, el Directorio y sus partidarios contraatacaron, afirmando que los monárquicos y los neojacobinos estaban conspirando para «asesinar a la República», como proclamó el comisario del gobierno en Burdeos. «Ambos quieren derrocar al gobierno republicano; ambos apuntan al mismo objetivo, por distintos medios, y ese objetivo no es otro que reinstaurar la monarquía, mediante un terror espantoso o una reacción atroz».[16] De hecho, los diputados centristas dispuestos a apoyar al Directorio llevaban las de ganar en la mayoría de los departamentos, pero el gobierno estaba decidido a impedir que los candidatos de los círculos constitucionales obtuvieran una victoria, aunque fuera parcial. Cuando se enfrentó a la derrota, el Directorio dijo a sus partidarios que argumentaran que se estaban violando los procedimientos legales; entonces provocaron un cisma al abandonar las asambleas electorales y formar su propio grupo rival. Incluso cuando se vio que la asamblea disidente tenía muchos menos participantes que la original, los leales al gobierno en los consejos declararon a sus candidatos legalmente elegidos. El 22 de floreal del año VI (11 de mayo de 1798), los directores dieron un nuevo golpe de Estado. Anularon todos o parte de los resultados en casi la mitad de los departamentos y destituyeron a 127 legisladores recién elegidos, incluido Tissot, el leal amigo del mártir de pradial, Goujon. La *Décade philosophique* reconoció que era una violación de los principios legales, pero lo justificó argumentando que era necesario enseñar a los votantes «a ser sensatos a la hora de elegir».[17] El Directorio francés ordenó que se dieran golpes de Estado siguiendo el modelo de la purga de floreal que se llevó a cabo en las repúblicas hermanas, donde se reemplazó a los radicales instalados después de fructidor por figuras más moderadas. Esta sucesión de levantamientos dirigidos desde París puso fin a la idea de que los gobiernos de las repúblicas bátava, cisalpina y helvética tuvieran alguna autonomía y los desacreditó a los ojos de sus propias poblaciones.

Una vez que quedaron –temporalmente– marginados los movimientos de oposición en Francia tanto a la derecha como a la izquierda, los mandos del Directorio eran libres para capitanear «el barco de la República» en lo que anunciaban que sería un camino intermedio entre «los dos abismos que estas facciones mantienen abiertos a ambos lados de la misma». Para entonces, las esperanzas utópicas que habían animado a los revolucionarios en los primeros años después de 1789 se habían olvidado en gran parte, pero François Poultier d'Elmotte, un oscuro diputado legislativo y editor del periódico pro-Directorio más popular de la época, el *Ami des lois*, todavía tenía una imagen del objetivo que quería creer que Francia alcanzaría en algún momento. En una serie de artículos sobre «el año 100 de la República» que se publicaron en el verano de 1798, se imaginó una sociedad en la que «la abundancia general, la distribución más o menos igualitaria de la riqueza, no como resultado de una violenta redistribución de la tierra, sino por la influencia gradual de las leyes sobre la herencia y los impuestos, habrá hecho desaparecer la excesiva desigualdad de las fortunas, así como todos los crímenes, provocados por la extrema riqueza y la extrema necesidad». Las guerras revolucionarias habrían terminado hacía mucho tiempo y Europa aceptaría pacíficamente la superioridad moral de Francia, que intervendría siempre que fuera necesario para proteger a los oprimidos de los tiranos. El Directorio de cinco miembros seguiría alojado en el Palacio de Luxemburgo, donde recibirían al público cada *décadi* y resolverían todas sus quejas. Aunque él mismo era diputado, Poultier ni siquiera mencionó el órgano legislativo, el mecanismo constitucional por el que se suponía que la voluntad del pueblo estaba representada. El sueño de Poultier no preveía los cambios dramáticos que se avecinaban en la tecnología y la sociedad: cambios que harían que, en cien años, Francia pasara de ser un país de carros de bueyes y aldeas a uno de ferrocarriles y ciudades. En 1798, con el recuerdo de los disturbios de los años anteriores aún fresco en la cabeza de todos, la idea de la libertad y de la igualdad sin más conflictos resultaba atractiva.[18]

François de Neufchâteau, que fue nombrado ministro del Interior en 1798 tras un breve periodo como miembro del Directorio, bombardeó a los

comisarios del gobierno en los departamentos con circulares destinadas a hacer realidad la visión de Poultier. En una larga serie de instrucciones enviadas en septiembre de 1798 les decía que se aseguraran de visitar regularmente cada rincón de los territorios que les habían asignado. Debían tomar el pulso al «sentido de comunidad» de su zona e intentar mejorarlo promoviendo la apertura de escuelas y bibliotecas públicas. El gobierno quería que sus agentes fomentaran nuevos métodos de cultivo que prometieran aumentar la producción. Debían ser igualmente activos en el impulso del comercio y la manufactura. El ministro, que fue un ecologista adelantado a su tiempo, lamentó la gran destrucción de bosques que habían llevado a cabo los campesinos en busca de leña; se entusiasmó con «la atracción que no podemos evitar» por los árboles recién plantados. Para pagar todo esto, los comisarios debían asegurarse de que se recaudaban los impuestos. A nivel nacional, una de las innovaciones más exitosas de François de Neufchâteau fue la organización de exposiciones anuales de productos y manufacturas agrícolas. La primera exposición industrial, celebrada en el verano del año VI, sirvió para ensalzar las nuevas tecnologías: se concedió un premio, por ejemplo, a una fábrica de la Vendée por sus textiles. Las muestras de las exposiciones mostraban que el país se estaba recuperando de «los desastres de una guerra que lo asolaba todo», según el informe oficial de la exposición, que presumía que Francia estaba superando el liderazgo de Gran Bretaña en tecnología.[19]

Las ambiciones positivas de la República del Directorio siempre estuvieron acompañadas de la preocupación de que sus enemigos pudieran sabotear sus iniciativas. Las circulares de François de Neufchâteau, aun cuando instruían a los funcionarios locales para que se aseguraran de que los hospitales y otras instituciones que servían a los pobres de su zona estuvieran bien administrados, terminaron siendo ataques a las organizaciones benéficas religiosas del pasado, que «eran demasiado indulgentes con la pereza». Había que poner a los pobres a trabajar y gastar el mínimo dinero posible en alimentarlos. Una larga y detallada circular sobre las escuelas, que se consideraban instituciones cruciales para promover la igualdad social, mezclaba nociones progresistas, como la

abolición de los castigos físicos y la creación de consejos estudiantiles para administrar la disciplina, con advertencias contra cualquier vuelta a las tradiciones religiosas.[20]

Todas las ideas de François de Neufchâteau sobre la mejora de la vida de los ciudadanos franceses dependían de que el gobierno tuviera suficientes ingresos para pagar sus gastos y suficientes soldados para mantener sus ejércitos. La Asamblea Nacional había promulgado un impuesto básico sobre la tierra y un impuesto sobre la licencia comercial. El Segundo Directorio añadió dos nuevos impuestos, uno sobre el lujo que recaía principalmente en los ricos y otro basado en el recuento de las puertas y ventanas de los edificios, una medida aproximada del valor de la propiedad. Los impuestos básicos establecidos por el Directorio se convirtieron en la base del sistema de ingresos nacionales y libraron con éxito a los gobiernos franceses de crisis financieras como la que había derribado al antiguo régimen, al menos hasta que las guerras inmensamente costosas del siglo XX obligaron a imponer nuevos gravámenes, incluido un impuesto sobre la renta.

Después de la *levée en masse*, mediante la que se había reclutado a los hombres para los enormes ejércitos que salvaron al país en 1793 y 1794, la Francia republicana no tenía un sistema regular para alistar nuevos soldados. En septiembre de 1798, sin que se vislumbrara todavía el fin de la guerra, los consejos establecieron un sistema permanente de reclutamiento militar. El plan, propuesto por el general Jourdan, permitía que se pudiera llamar a filas a todos los hombres que tuvieran entre veinte y veinticinco años durante un periodo de hasta un lustro, y el número real a reclutar cada año se determinaba en función de las necesidades del ejército. La ley recaía por igual sobre ricos y pobres: no había ninguna disposición que permitiera a las familias más ricas pagar a un sustituto para ocupar el lugar de su hijo, como se había permitido en las primeras convocatorias del reclutamiento revolucionario. Los periodistas republicanos aplaudieron la idea del servicio militar universal. Los jóvenes se curarían de «todas las falsas ideas contrarias a los intereses de su país [...], todos los gérmenes del monarquismo o del anarquismo», escribió uno, añadiendo que daría lugar a

un ejército «en el que ningún jefe ambicioso puede convertirse en un peligro para la República». La ley Jourdan se aprobó durante una tregua momentánea en las principales operaciones militares; al principio se supuso que cada año sólo una minoría de los hombres aptos tendrían que servir realmente. Pero cuando estalló la guerra de nuevo a finales de 1798, las cuotas del reclutamiento se elevaron inmediatamente. Igual que había ocurrido en 1793, hubo protestas en las regiones donde la oposición al régimen republicano era más fuerte. En los departamentos belgas anexionados en 1795, los que estaban en contra instaron a «todos los jóvenes afectados por la llamada a filas» a unirse a un levantamiento «para luchar por nuestra patria y nuestra religión, contra los bárbaros franceses».[21] A pesar de esta resistencia, la ley de Jourdan creó el mecanismo básico por el cual Napoleón llenaría más tarde las filas de sus ejércitos.

Mientras los ministros y diputados se enfrentaban a las dificultades prácticas de establecer un régimen que funcionara, los intelectuales como Madame de Staël esbozaron una justificación teórica de arriba abajo del republicanismo de arriba abajo Segundo Directorio. En un largo manuscrito titulado *Sobre las circunstancias actuales que podrían poner fin a la revolución y los principios en que se debería fundar la República en Francia*, De Staël sostenía que lo que realmente necesitaban los ciudadanos era la libertad de perseguir sus propios intereses privados, más que el derecho a participar activamente en la política. La Revolución había traído consigo algunos cambios cruciales que era necesario proteger, afirmó, incluida la abolición de los privilegios sociales hereditarios y la sustitución de la monarquía por una república, pero el pueblo todavía no estaba suficientemente educado para apreciarlos plenamente. «En Francia, hasta el momento en que la instrucción pública haya formado a una nueva generación en la libertad, es necesario repartir varias partes del poder conservador entre las manos de los republicanos», escribió, lo cual indicaba que estaba a favor de los golpes de fructidor y floreal. Staël no sólo quería restringir la libertad de los votantes, también exigía límites a la libertad de prensa, ya que los periódicos eran «capaces de inducir a los ciudadanos a

error sobre lo que deben hacer». En efecto, constituían «un medio tan poderoso de gobernar o revolucionar que no se puede separar de la vigilancia de las autoridades».[22]

De Staël se diferenciaba de los directores y los intelectuales que formaban buena parte de su círculo de amigos por su convicción de que, en lugar de intentar imponer una religión cívica no histórica a la población, la República francesa debería adoptar el protestantismo, que compartía con su amigo y amante, Benjamin Constant. Los científicos y filósofos racionalistas que ocupaban los sillones en el Instituto Nacional se oponían a la idea de hacer cualquier concesión a las creencias cristianas. Los académicos del país estaban entre los más entusiastas partidarios de la República socialmente conservadora establecida en 1795; estaban contentos de verse liberados de las restricciones del antiguo régimen que tanto habían irritado a los *philosophes* de la Ilustración y se sentían apoyados por el gobierno contra los ataques al elitismo que habían tenido lugar durante la fase radical de la Revolución. Varios de ellos, como el destacado doctor Pierre Cabanis, eran diputados u ocupaban otros cargos políticos, y su prestigiosa revista, la *Décade philosophique*, dio al régimen un apoyo incondicional.

En 1798, una de las principales figuras del grupo, Antoine Destutt de Tracy, publicó varios ensayos que esbozaban una «ciencia de las ideas», a la que llamó *idéologie*. Basándose en las ideas de Condorcet, cuya publicación póstuma *Esbozo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano* sirvió de inspiración, y del filósofo francés de la Ilustración Étienne Bonnot de Condillac, los *idéologues* estaban convencidos de que sus métodos racionalistas podían unificar todos los conocimientos humanos, desde la psicología y la medicina hasta la física y la astronomía.

Los esfuerzos de los *idéologues* por fomentar métodos científicos empíricos sentaron las bases para el desarrollo de la ciencia social moderna y para los verdaderos avances en la medicina y en las ciencias naturales. Impulsaron los estudios clínicos, por ejemplo, en la investigación médica. Los *idéologues* estaban entre los principales partidarios de la vigorosa campaña del Segundo Directorio para imponer el uso del calendario

republicano. Entre abril y septiembre de 1798, cuatro nuevos decretos y leyes intentaron prohibir las referencias a los antiguos meses y días de la semana, e impusieron el ritmo de diez días de la *décade* en todos los aspectos de la vida pública. Para promover las ceremonias cívicas que tenían lugar en el *décadi*, las leyes exigían que asistieran los funcionarios públicos y los escolares, y establecían que era el único día en que podían celebrarse matrimonios. Como explicaron los funcionarios locales del departamento de Lot-et-Garonne, «la conducta cívica de los ciudadanos, el desarrollo de sus asuntos, incluso la elección de sus placeres, debe estar regulada de ahora en adelante por un calendario que no pertenezca a ninguna religión».

El director Larevellière-Lépeaux se hizo mecenas de la teofilantropía, un esfuerzo, como el culto al Ser Supremo de Robespierre, de crear una nueva religión que pudiera ocupar el lugar de la Iglesia. Los promotores del nuevo culto inventaron ceremonias para acompañar el registro de nacimientos, matrimonios y defunciones, y quisieron instituir clases de catecismo para enseñar sus principios a los niños. Los campesinos, que iban desganados a las ceremonias del *décadi*, aparecían con su ropa de trabajo, y las mujeres, que todavía eran la columna vertebral de la resistencia a la innovación religiosa, organizaron disturbios para evitar que las ceremonias impuestas por el gobierno se celebraran en las iglesias. Por mucho que la idea de cambiar las prácticas religiosas de la nación atrajera a los intelectuales y militantes republicanos, fue uno de los aspectos más rechazados de las políticas del Directorio.

La unión de políticos e intelectuales que impulsó el infructuoso esfuerzo de rehacer las prácticas religiosas de Francia tuvo más éxito en la promoción de una nueva política colonial. La abolición de la esclavitud obligó a replantear el propósito de extender el dominio francés a los territorios de ultramar. En 1796, los defensores de un tipo diferente de expansión, bajo el liderazgo de Henri Grégoire, revivieron la Sociedad de los Amigos de los Negros y añadieron «y las Colonias» a su nombre. Argumentaban que, si Francia no hacía nada, Gran Bretaña dominaría el mundo no europeo. Proponían que la República francesa intentara ganar

influencia en África llevando la civilización a las poblaciones ignorantes. «En su tierra natal, los africanos no son conscientes de todas las ventajas que pueden obtener de su suelo y su clima para su propio uso y el de los demás […] ¿No tienen una necesidad urgente de instrucción moral y física?».[23] La perspectiva de adquirir nuevas colonias en el África subsahariana era remota mientras los británicos controlaran el Atlántico, pero había oportunidades en otros lugares. En *Essay on the Advantages to Be Gained from New Colonies (Ensayo sobre las ventajas que se obtendrían de las nuevas colonias)* Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores del Directorio, propuso Egipto, cuyo clima, según él, era adecuado para el cultivo del azúcar y la cotufa que Francia ya no podía obtener en sus islas caribeñas.

Recién regresado de tres años de exilio en Estados Unidos, Talleyrand había llegado a la conclusión de que la expansión territorial era una forma de desviar la inquieta energía que generaba la Revolución de las disputas políticas internas. Napoleón Bonaparte, la encarnación misma de la energía inquieta, ya estaba soñando con Egipto. En el verano de 1797, había escrito al Directorio que «no está lejos el momento en que nos daremos cuenta de que, para destruir realmente a Inglaterra, necesitamos tomar Egipto». Así, Francia podría amenazar la conexión de Gran Bretaña con la India, su más valioso territorio de ultramar. Además de lo que la invasión de Egipto podría suponer para la posición estratégica de Francia, Bonaparte, inspirado en el ejemplo de Alejandro Magno, soñaba con lo que podía suponer para él. «No tengo suficiente gloria», le dijo a su leal ayudante, Bourrienne. «Esta pequeña Europa no ofrece suficiente. Es necesario ir a Oriente, todas las grandes reputaciones se forjan allí».[24]

La expedición egipcia selló la alianza entre el general y la élite intelectual republicana que ya había acogido a Bonaparte como miembro del Instituto Nacional. Un largo artículo en dos partes en la revista *Décade philosophique*, de los *idéologues*, abogaba por lo que, en el siglo XIX, vendría a llamarse *misión civilisatrice*, la misión civilizadora de Francia en el mundo no europeo. El Oriente Medio, anunciaba el autor del artículo, era la región del mundo en la que «el destino de las personas es el más

deplorable y donde sería más útil cambiarlo». El editorialista de *Décade* reconocía que sería difícil hacer frente al «fanatismo religioso» de la población nativa, pero confiaba en que se podría superar «la invencible ignorancia de los musulmanes, o el desprecio que profesan por aquellos a los que llaman incrédulos». Anticipándose a una de las grandes líneas divisorias entre europeos y musulmanes hasta nuestros días, llegó a la conclusión de que el único obstáculo real para el éxito de la transformación de Oriente Medio sería «el sistema de moralidad, especialmente en lo que respecta a las mujeres».[25]

El autor del artículo de *Décade* admitía que las poblaciones árabes de Egipto y Siria se resistirían a cualquier esfuerzo por transformar sus países de acuerdo con los principios ilustrados, así que se le ocurrió otra propuesta revolucionaria: la creación de un Estado judío en Palestina. Los judíos de Europa proporcionarían los recursos y la energía para que la región entrara en el mundo moderno. «¡Sabemos cuánto anhelan su antigua patria y la ciudad de Jerusalén! […] Vendrán corriendo desde los cuatro rincones del mundo, si se les da la señal». Otro periodista pro-Directorio amplió estas ideas en una propuesta para la convocatoria de una asamblea nacional judía que haría un tratado formal con Francia y financiaría el establecimiento de una república hermana en la antigua Tierra Santa. Las ambiciones del Directorio condujeron así tanto a la idea de un mandato europeo para extender su civilización al resto del mundo como al primer manifiesto del nacionalismo judío moderno –o sionismo–, aunque esta propuesta de una patria judía probablemente la elaboró alguien no judío.[26]

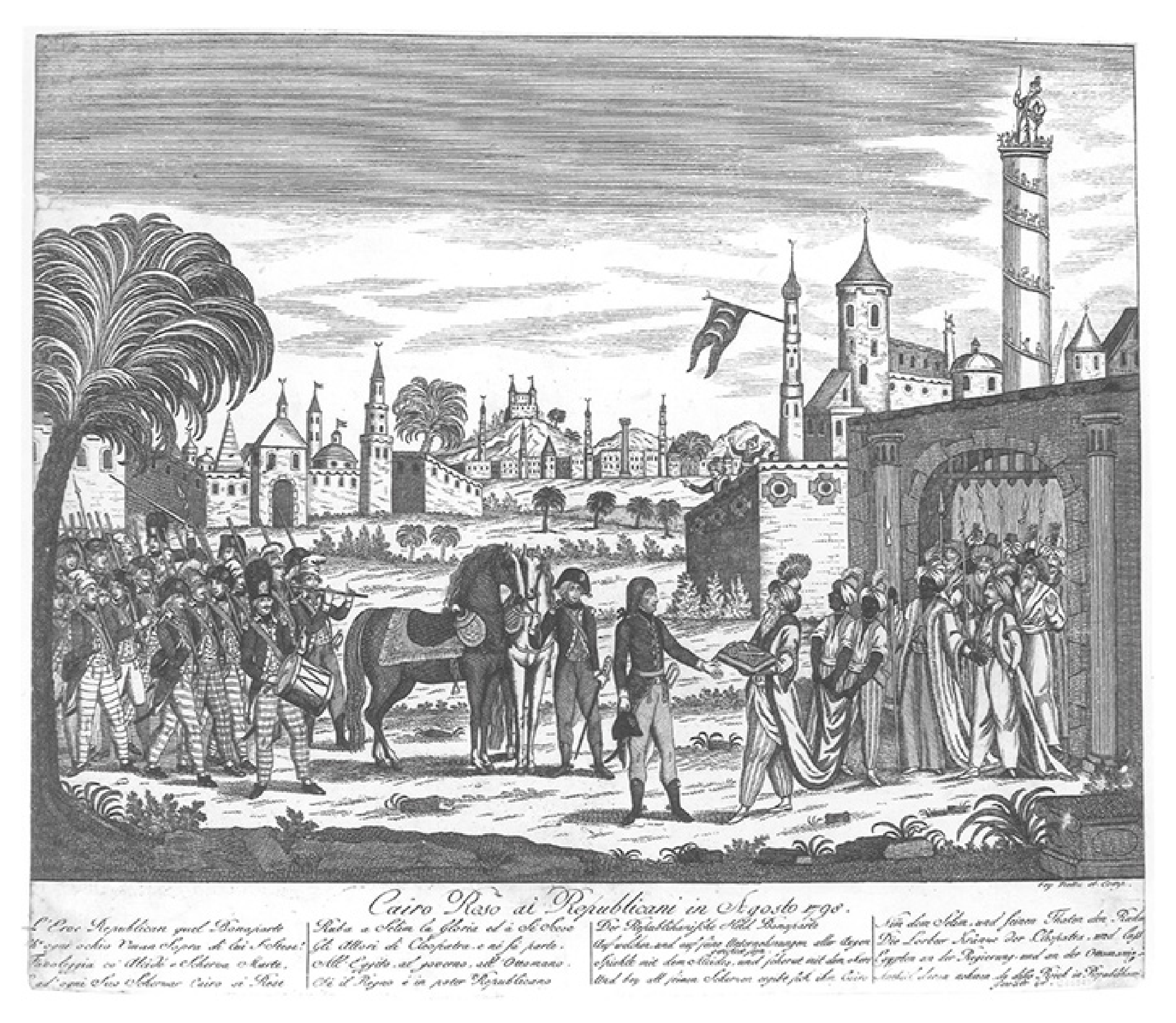
La fuerza expedicionaria de Bonaparte partió hacia Egipto el 19 de mayo de 1798. En total, iban 56 barcos de guerra y 309 buques mercantes que transportaban 36.800 hombres y sus suministros. Entre los viajeros había unos 170 científicos, artistas y expertos en antigüedades, lo que demuestra la ambición francesa de llevar la civilización europea a Egipto y descubrir el legendario pasado del país. Los franceses esquivaron al almirante británico Horatio Nelson, a quien habían enviado para interceptarlos, y

desembarcaron en la histórica ciudad de Alejandría. Bonaparte emitió una proclama diseñada para ganarse a la población local. Afirmaba que los franceses habían venido a liberar Egipto de la tiranía de los mamelucos, la casta militar empleada por los otomanos para controlar el país. «Egipcios, oirán que he venido a destruir su religión; es mentira, ¡no lo crean! […] Yo, más que a los mamelucos, respeto a Dios, a su profeta Mahoma y a su glorioso Corán». Los enviados otomanos en París, que habían recibido los honores del Directorio y habían cenado con Bonaparte y su esposa, se sorprendieron de que los franceses, «exhibiendo deshonestidad, engaño y perfidia [...], permitieran que sus acciones hipócritas se hicieran públicas al atacar la tierra sagrada de Egipto sin previo aviso, como ladrones».[27]

Los franceses avanzaron lo más rápido posible por el territorio desértico, hasta El Cairo, donde las fuerzas egipcias se enfrentaron a ellos a orillas del Nilo, a la vista de las pirámides. «¡Soldados, cuarenta siglos os contemplan!», dijo Bonaparte a sus tropas. Los franceses obtuvieron una victoria decisiva y, cuatro días después, Bonaparte entró en la ciudad y estableció su cuartel general. Ordenó la creación de una asamblea de habitantes locales para gobernar la ciudad y prometió a sus miembros que «traería la justicia, el respeto a las propiedades, la Ilustración y reabriría, para un pueblo digno de mejorar, las fuentes de la felicidad». Dado que «los fondos del ejército tenían muchas dificultades para satisfacer las necesidades de los soldados», como escribió Bonaparte delicadamente en sus memorias, la población local, como la de otros países que los franceses habían ocupado, se vio obligada a pagar una fuerte indemnización. Mientras Bonaparte se instalaba en su papel de gobernante de El Cairo, le llegó la noticia de un desastre en la costa: el 2 de agosto de 1798, la flota de Nelson pilló a los franceses anclados frente al puerto de Abukir. «La playa entera quedó cubierta de los escombros de nuestros barcos», escribió un oficial francés.[28] El ejército de Napoleón estaba ahora atrapado en el país que había conquistado, sin posibilidad de volver a casa.

Los científicos e intelectuales que Bonaparte había traído con él se apresuraron a crear un «Instituto Egipcio» a imitación del Instituto de Francia. Los sabios franceses emprendieron investigaciones sobre

problemas prácticos, como la purificación del agua, y estudiaron las antigüedades que encontraron, que hasta entonces eran desconocidas para los europeos. Las inscripciones de uno de sus descubrimientos, que se conoció como la piedra Rosetta, finalmente darían la clave para la lectura de los antiguos jeroglíficos, abriendo así el camino a la comprensión de la civilización que había creado las pirámides. Se admitió a algunos miembros de las minorías religiosas de Egipto en el Instituto Egipcio, pero los musulmanes mantuvieron las distancias. A pesar de sus profesiones de respeto al islam, escribió uno, los franceses «son una secta de filósofos que rechazan la Ley y afirman que obedecen a la naturaleza». Los funcionarios musulmanes locales se sintieron incómodos cuando se les quiso imponer que llevaran la escarapela tricolor; tampoco vieron con buenos ojos la demolición de puertas dentro de la ciudad y de tumbas sagradas, que los franceses retiraron para facilitar el desplazamiento de sus tropas.



Napoleón en Egipto. La invasión francesa de Egipto en 1798 marcó el comienzo de la expansión colonial europea en Oriente Medio. La expedición de Napoleón contó con el apoyo entusiasta de la élite intelectual de la Francia republicana. En este grabado, publicado en Italia en esa época, se ve a los dignatarios locales recibiendo a Napoleón Bonaparte. Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

La hostilidad hacia los franceses estalló el 21 de octubre de 1798, cuando la población se rebeló. El cronista egipcio Abd al-Rahman al-Jabarti escribió que «la gente sobrepasó todos los límites, cometieron todos los excesos, asaltaron y maltrataron a la gente, saquearon y robaron».[29] Asesinaron a unos doscientos cincuenta franceses, y al menos a diez veces más egipcios. A pesar de la promesa de Bonaparte de respetar la religión, los soldados franceses que sofocaron la revuelta mostraron poco respeto por los lugares sagrados musulmanes. Cuando entraron en la famosa mezquita de Al-Azhar, uno de los bastiones de la rebelión, «trataron los libros y los

volúmenes coránicos como basura, tirándolos al suelo», escribió Al-Jabarti. «Bebieron vino y rompieron las botellas en el patio central». Cualquier ilusión de que las ideas de la Revolución francesa podían trasladarse fácilmente a Oriente Medio se hizo añicos. Bonaparte ahora descartaba a los habitantes de El Cairo como «los pícaros más brutos y salvajes que existen en el mundo».[30]

Bonaparte se encontraba varado en Oriente Medio, sin forma de sacar a su ejército. Temía que las fuerzas turcas pudieran atacar Egipto desde el norte, por lo que decidió tomar la iniciativa e invadir Palestina. Las atrocidades de esta invasión mancharon su reputación. Cuando la ciudad de Jaffa se negó a rendirse, las tropas francesas «asesinaron a hombres, mujeres, ancianos, niños, cristianos, turcos», escribió el matemático Étienne-Louis Malus. Uno de los subordinados de Bonaparte había convencido a la guarnición turca para que se rindiera a cambio de la promesa de que se les perdonaría la vida, pero Bonaparte decidió que no podía dejar atrás a varios miles de soldados enemigos mientras continuaba su avance, ni podía derrochar alimentos y recursos para cuidarlos. Las tropas francesas, que recibieron la orden de ejecutar a los prisioneros desarmados, se quedaron sin munición y tuvieron que andar entre montones de cuerpos para rematar a los heridos con sus bayonetas. «No pude soportar la horrible escena», escribió un oficial. «Hui, pálido y a punto de desmayarme».[31] La matanza de Jaffa amplió el abismo entre las proclamaciones francesas de que traían la civilización a Oriente Medio y la realidad de la ocupación militar. También demostraron lo lejos que Bonaparte sería capaz de llegar para lograr sus objetivos. Desde Jaffa, continuó su avance hacia el norte, pero se encontró varado en el puerto de Acre, donde tuvo que emprender un largo asedio mientras una epidemia de peste diezmaba sus tropas.

Mientras tanto, los acontecimientos en Europa amenazaban con destruir cualquier posibilidad de que Bonaparte tomara el poder. El Tratado de Campo-Formio que había negociado había puesto fin a la guerra contra Austria, pero era un acuerdo frágil. Cuando los franceses ayudaron a los revolucionarios locales en febrero de 1798 en la creación de un gobierno

republicano en Roma que llevó al exilio al papa Pío VI, los austriacos se quejaron de que Francia estaba expandiendo su esfera de influencia sin ofrecer ninguna compensación. Austria respondió sellando una alianza con el último estado italiano independiente que quedaba, el reino de Nápoles, en el sur de la península. La dinastía gobernante de Nápoles, una rama de los Borbones, era irrevocablemente hostil a la República francesa, y el entusiasmo de los napolitanos por una guerra con Francia no hizo más que crecer cuando el almirante Nelson llegó con su flota tras su victoria en Abukir. Por influencia de su amante Emma Hamilton, esposa del embajador británico y confidente íntima de la reina de Nápoles, Nelson vio que Nápoles se incorporaba a una coalición antifrancesa que incluía no sólo a Gran Bretaña y Austria sino también a Rusia. El gobernante ruso, el zar Pablo I, jefe honorario de los Caballeros de Malta, estaba ansioso por vengarse de la ocupación de Bonaparte de esa isla en su camino a Egipto. El empeño británico por encontrar aliados en el continente se intensificó después de que el Directorio enviara tropas francesas para ayudar al levantamiento de los United Irishmen, una revuelta contra el dominio británico en Irlanda que estalló en la primavera de 1798. Los exiliados irlandeses habían trabajado durante años para cultivar el apoyo francés a su causa, y las noticias de la revuelta inspiraron a los oradores de la fiesta de París del 14 de julio a prometer que «toda Francia se armará si es necesario para ayudaros».[32] Aunque la expedición francesa sufrió una rápida derrota, la rebelión en Irlanda era el mayor temor del gobierno de Londres. Los británicos estaban convencidos de que la amenaza sólo podía eliminarse destruyendo la República francesa.

Los franceses se encontraron frente a una formidable «Segunda Coalición» cuyas fuerzas superaban en número a los ejércitos de la República, que estaban agotados por tantos años de combate casi continuo. La invasión napolitana de la República romana, el 23 de noviembre de 1798, inició una nueva ronda de luchas tan encarnizadas como las de los primeros años de las guerras revolucionarias. Los ejércitos enemigos nunca llegaron a cruzar las fronteras de Francia durante el conflicto, pero pusieron en peligro la hegemonía de la nación y el sistema de repúblicas hermanas

que había impulsado para extender su autoridad. Los franceses repelieron rápidamente la invasión napolitana de Roma y se dirigieron al sur, obligando al Borbón Fernando IV a huir de Nápoles y refugiarse en Sicilia. En contra de los deseos del Directorio, que no quería ser responsable de la defensa de otro lejano Estado clientelar, el general francés Jean-Étienne Championnet supervisó la proclamación de la «República partenopea».

A diferencia de Roma, cuya vida estaba dominada por la Iglesia católica, Nápoles tenía una élite culta imbuida de las ideas de la Ilustración, e incluso miembros educados de la nobleza apoyaron la causa jacobina. Eleanora Pimentel Fonseca, cuyos talentos literarios le habían granjeado un sitio entre lo más granado de la intelectualidad de la ciudad antes de la Revolución, asumió el liderazgo del movimiento y editó su periódico, el *Monitore Napoletano*. Las clases bajas de la abarrotada ciudad, los *lazzaroni* y los campesinos empobrecidos de las zonas rurales del reino, en cambio, se sentían más cómodos bajo los estandartes de la religión y la monarquía. Pimentel creía que «el pueblo desconfía de los patriotas porque no los entienden», y que si la propaganda se escribía en el dialecto local conseguiría convencerlo, pero sus esfuerzos tuvieron poco efecto.[33] La nueva república se vio inmersa en una guerra civil similar al sangriento conflicto de la Vendée en Francia. Un aristócrata eclesiástico, el cardenal Fabrizio Ruffo, con el apoyo del rey Fernando, reclutó a campesinos y bandidos de la región y formó un «Ejército de la Santa Fe». Se dedicarían a aterrorizar a los partidarios de la República y a la gente del pueblo en general.

En vista del gran levantamiento popular, los republicanos napolitanos se vieron forzados a depender de las tropas francesas para defenderse. Sin embargo, a partir de abril de 1799, las fuerzas de la coalición antifrancesa, dirigidas por un enérgico general ruso de setenta años, Aleksandr Suvórov, salieron victoriosas en el norte de Italia y obligaron a los franceses a evacuar apresuradamente la península, para evitar que las tropas quedaran a su merced. Abandonados a su suerte, los líderes del movimiento napolitano se rindieron a las fuerzas de Ruffo a cambio de la promesa de que les perdonaría la vida. Al regresar de su exilio siciliano, el rey Fernando IV de

Nápoles no estaba de humor para perdonar a sus enemigos. Su amigo, el almirante Nelson, atizó sus instintos vengativos y se procedió a colgar a 119 personalidades destacadas de la República partenopea, incluida Eleanora Pimentel, de las vergas de los barcos del rey; una advertencia a los republicanos del mundo entero sobre el destino que les esperaba si Francia resultaba derrotada. Mientras tanto, los franceses estaban librando una batalla desesperada contra el ejército de Suvórov en Suiza. La avalancha de malas noticias de los ejércitos, exageradas por los monárquicos que hacían circular reportajes de los periódicos extranjeros, no animaba a los jóvenes a responder a la llamada a filas. El Directorio quiso reavivar el patriotismo explotando un ultraje que habían cometido los austriacos; sus tropas habían detenido a tres diputados franceses que volvían a casa desde la ciudad alemana de Rastadt en mayo, después de que se interrumpieran las negociaciones sobre la aplicación del Tratado de Campo-Formio. A dos de ellos los asesinaron y les robaron sus documentos diplomáticos. «Hay crímenes que sólo hay que contar al pueblo para exhortarlo a la venganza», escribió un periódico progubernamental. Pero, según la policía, la población reaccionó con indiferencia.[34]

Las malas noticias de los ejércitos coincidieron con la temporada anual de elecciones en Francia. El ministro del Interior, François de Neufchâteau, supervisó una campaña agresiva para influir en la votación de la población, y especialmente para advertirla contra «los sucesores de Robespierre y Marat». Su severa purga de funcionarios locales en el periodo previo a las elecciones resultó contraproducente: en muchas comunidades, los hombres a los que destituyeron de sus cargos tomaron la delantera al oponerse a los candidatos del gobierno. Las asambleas electorales fueron tumultuosas. Las multitudes a menudo rodeaban las salas de reuniones e incluso interferían en los procedimientos: en un cantón del departamento suroccidental de las Landas, una mujer agarró la urna que contenía los votos y la rompió sobre la cabeza de un opositor. En Marsella, el comisario gubernamental se quejó de que la Guardia Nacional local había apoyado a los anarquistas. «En lugar del majestuoso y respetable espectáculo de un pueblo unido al que se ha convocado para ejercer su derecho», escribió, las asambleas primarias de la

ciudad «no eran más que una escandalosa reunión de fumadores, bebedores y parlanchines enloquecidos por las máximas revolucionarias».[35] Como ocurrió en 1798, muchas asambleas se dividieron en dos o incluso tres grupos rivales, cada uno de los cuales aseguraba que los miembros del otro habían violado los procedimientos legales.

Los resultados indicaban un claro rechazo al Directorio: sólo se eligieron 56 de sus 141 candidatos respaldados oficialmente. Lo que los votantes querían realmente no estaba tan claro. Los candidatos respaldados por los círculos constitucionales obtuvieron buenos resultados. Encontraron aliados entre los republicanos más moderados que estaban preocupados por las derrotas militares que el Directorio parecía incapaz de detener y decepcionados por la corrupción que se cernía sobre el régimen. En cambio, a diferencia de lo que había sucedido en 1798, los diputados que no se habían presentado a la reelección, encargados de decidir entre los demandantes rivales cuando se dividieron las asambleas electorales, siguieron una política coherente de seleccionar al candidato que tuviera el mayor número de votantes. Este sistema permitió que varios neojacobinos tomaran sus escaños. El sorteo anual entre los directores obligó a Rewbell, una de las personalidades más fuertes del grupo, a renunciar a su posición. Los consejos dejaron clara su opinión cuando en su lugar colocaron a Sieyès, quien nunca había dejado de criticar la Constitución de 1795 y de pedir su revisión o sustitución.

Sieyès «no aportó nada al gobierno, excepto una personalidad difícil, un espíritu de descontento, un miedo extremo a los revolucionarios y proyectos para derogar la Constitución, que esperaba adaptar a sus propias ideas», escribió más tarde Pierre-François Tissot, el amigo de Goujon.[36] En los consejos, los nuevos diputados no perdieron tiempo en atacar a los demás miembros del Segundo Directorio. Exigieron que el Directorio explicara cómo era posible que «apenas [hayan] pasado dos meses desde que Italia era republicana y victoriosa bajo nuestras banderas» y ahora estaba «invadida por un feroz vencedor». También querían saber qué planeaba hacer el poder ejecutivo del gobierno para reactivar la economía y

tranquilizar a «los amigos de la libertad, tanto tiempo proscritos y perseguidos por los monárquicos», en las provincias.[37]

Cuando los directores no respondieron, el 28 de pradial del año VII (16 de junio de 1799) los dos consejos se declararon en sesión permanente y obligaron al director Jean-Baptiste Treilhard a abandonar su cargo, acusándole de no haber cumplido los estrictos requisitos constitucionales cuando le eligieron un año antes. Le reemplazó Louis-Jérôme Gohier, considerado cercano a los neojacobinos. Entre bastidores, Barras –siempre decidido a acabar en el bando ganador–, y Sieyès presionaron a Larevellière-Lépeaux y Merlin, los dos miembros del Directorio que quedaban, para que dimitieran. En el Consejo de los Quinientos, el diputado Bertrand du Calvados dijo indignado: «No tienen poder para hacer ningún bien, nunca tendrán la confianza de sus colegas ni la del pueblo ni la de sus representantes».[38] Dos días después los dos directores recalcitrantes finalmente cedieron. Sus sustitutos fueron Roger Ducos, aliado de Sieyès, y Jean-François-Auguste Moulin, uno de los muchos generales que se habían quejado de que el Segundo Directorio no proporcionaba al ejército los recursos necesarios.

Mientras redactaba su dimisión a regañadientes, Larevellière-Lépeaux advirtió: «Les digo que la República está condenada».[39] El «golpe» del 30 de pradial (18 de junio) fue la tercera vez en menos de dos años que las presiones políticas habían dado lugar a la anulación de los procedimientos constitucionales. Mientras que en los golpes de fructidor y floreal había habido unos ganadores y unos perdedores, en el golpe del 30 de pradial no estaba tan claro. Algunas de las figuras políticas que lo llevaron a cabo eran neojacobinos deseosos de revivir la energía democrática del periodo radical de la Revolución; otros compartían la opinión de Sieyès de que la República necesitaba una nueva constitución que hiciera al gobierno más independiente del electorado. Tras el golpe, los consejos se movilizaron rápidamente para desmantelar varias de las políticas del Segundo Directorio. Se levantaron las restricciones que se habían impuesto a la prensa tras el golpe de fructidor, y una nueva ley electoral prohibió la táctica de iniciar cismas deliberados en las asambleas electorales. Los

periodistas de todos los colores políticos aprovecharon inmediatamente su libertad recuperada. Una vez más, el *Père Duchêne* apeló al pueblo, gracias a los esfuerzos de René Lebois, un veterano de la extrema izquierda. Los escritores monárquicos que habían estado escondidos desde fructidor también resurgieron, denunciando al gobierno republicano y la persecución continua a la Iglesia católica.

Un nuevo club jacobino comenzó a celebrar sesiones públicas en la Manège, la antigua sala de reuniones de la Convención en el Palacio de las Tullerías. «Pregunten a la Libertad cómo llama a sus hijos», escribió el nuevo *Père Duchêne*. «Su respuesta será "jacobinos"». El *Journal des hommes libres*, siempre la voz del movimiento neojacobino, publicó artículos argumentando que la dictadura revolucionaria del año II había sido necesaria para salvar la República; insinuó que volvía a ser preciso tomar medidas similares. Tissot insistió en que «si en el plazo de un mes la legislatura no ha tomado grandes medidas, la matanza de los patriotas está asegurada». Atemorizados por este indicio de que se reactivaba la militancia republicana, los opositores se reunieron fuera de la sala de reuniones, al grito de «¡Abajo los jacobinos! ¡Abajo los bebedores de sangre!» e incluso algún «¡Viva el rey!». Un periodista monárquico dijo a los lectores que no era necesario informar sobre las reuniones del club, «donde no hacían más que dar gritos sin sentido», pero que podían estar seguros de que se les informaría de «lo más importante, es decir, lo más horrible».[40]

Durante el primer mes después del golpe del 30 de pradial, los consejos aprobaron varios decretos que reflejaban la influencia del movimiento jacobino. Mediante una versión revisada de la ley de reclutamiento de Jourdan se realizó un llamamiento inmediato a reclutas para cinco años con el fin de reorganizar los maltrechos ejércitos. Para suprimir la agitación contrarrevolucionaria en las provincias, los legisladores votaron a favor de una «ley de rehenes» el 24 de mesidor (12 de julio) para disuadir a los que querrían llevar a cabo «ataques y actos de bandolerismo por odio a la República». En virtud de la ley, se podía detener a los familiares de los emigrantes y exnobles, y se les podían confiscar sus bienes, independientemente de que existieran pruebas de que habían participado en

actos delictivos. El antiguo *philosophe*, André Morellet, se opuso preguntando: «¿Ésta es la libertad que la misma República que ha dado a los negros de nuestras colonias los derechos del hombre [...] otorga a los franceses?».[41] También hubo un acalorado debate sobre una ley que requería que los contribuyentes más ricos aportaran para un préstamo forzoso, que se aprobó finalmente a principios de fructidor (mediados de agosto).

Los éxitos de los neojacobinos en el primer mes después del golpe de Estado de pradial fueron posibles porque numerosos diputados más moderados se unieron a ellos para desmantelar las políticas del Segundo Directorio. Pero esta alianza táctica no tardaría en comenzar a desmoronarse. El 29 de termidor (16 de agosto), los neojacobinos trataron de convencer al Consejo de los Quinientos de que procesara a los tres antiguos directores que habían sido expulsados en pradial. La perspectiva de volver a los juicios públicos de alto nivel, como en el pasado, asustó a los moderados, aunque un portavoz de los neojacobinos prometió que el único castigo que querían infligir a los antiguos directores era obligarlos a barrer las calles de París ataviados con sus trajes oficiales. Inmediatamente, Sieyès se puso a trabajar para acabar con los aliados neojacobinos con los que había cooperado apenas dos meses antes. Entre los que se unieron a él estaba el hermano menor de Bonaparte, Lucien, que había logrado hacerse con un puesto en el Consejo de los Quinientos como representante de Córcega, de donde procedía su familia. En un discurso muy conocido, juró que Francia «no vería más patíbulos, ni más terror, ni otro execrable régimen como el de 1793».[42] Unos días después, Sieyès convenció a sus colegas para que nombraran ministro de Policía a Joseph Fouché, el exterrorista y líder de la conspiración de termidor contra Robespierre. Fouché, que había abandonado hacía tiempo cualquier simpatía por el radicalismo de 1793-1794, puso sus inigualables habilidades organizativas al servicio de la represión de los neojacobinos, cuyo club se clausuró a mediados de agosto.

Al igual que con los neojacobinos de París y las provincias, donde habían surgido cerca de 250 clubes, el Directorio también tuvo que

enfrentarse a una nueva sublevación monárquica, programada para coincidir con las ofensivas de los enemigos extranjeros de la República. El 5 de agosto de 1799, los rebeldes iniciaron una insurrección en el campo alrededor de la ciudad de Toulouse, con el apoyo de los grupos monárquicos de Bretaña y la Vendée. Tenían la esperanza de que un desembarco planificado de tropas británicas y rusas en los Países Bajos, y el avance de tropas austriacas y rusas en Italia y Suiza evitarían que el Directorio enviara tropas para oponerse a ellos. Las noticias de los levantamientos monárquicos animaron a los neojacobinos de París a hacer un intento más por inclinar la balanza de los consejos legislativos a su favor. Pero la moción del general Jourdan para declarar «el país en peligro», que se consideró un preludio a medidas revolucionarias iguales a las que se adoptaron en 1792 y 1793, fracasó por 171 votos contra 245.

La posición del nuevo Directorio debería haberse consolidado por un cambio de tendencia en la guerra contra las potencias extranjeras. El 19 de septiembre de 1799, el general Guillaume Brune derrotó de forma aplastante a la fuerza de invasión anglo-rusa en los Países Bajos. Una semana más tarde, el general André Masséna obtuvo una victoria decisiva sobre los rusos en Zúrich, poniendo fin a la amenaza contra la República helvética. La mejora de la situación política y militar de la República no disuadió a Sieyès de perseguir el objetivo que tenía en mente desde su elección al Directorio tres meses antes. Convencido de que la Constitución de 1795 era fatalmente defectuosa, estaba decidido a cambiarla. Había decidido desde el principio que necesitaría a un general prominente como socio, preferiblemente uno sin demasiadas ambiciones políticas. Durante el verano había echado el ojo a Barthélemy Joubert, un joven comandante que había servido a las órdenes de Bonaparte en Italia. Con la esperanza de forjar la reputación de Joubert, Sieyès lo mandó a Italia; a mediados de agosto, sus tropas obtuvieron una victoria muy reñida en la batalla de Novi, pero el general tuvo la desgracia de morir en combate. Sieyès recurrió a otras opciones, pero a principios de octubre todavía no había encontrado un oficial dispuesto a desempeñar el papel de su «espada» en un golpe de Estado. Entonces, el 9 de octubre de 1799, el comandante del ejército de

Egipto desembarcó inesperadamente en el puerto de Fréjus, en el sur de Francia.

Como no había logrado una victoria decisiva sobre los turcos después de su invasión de Palestina, Bonaparte había comenzado a hacer preparativos para regresar a Francia, pero no se embarcó hasta el 22 de agosto. Cuatro meses antes, había recibido una carta de su hermano Joseph instándole a volver a casa, tanto por razones políticas como para hacer frente a las infidelidades de su esposa, Joséphine. Después de organizar la retirada de sus fuerzas a El Cairo y de ganar una batalla en Abukir contra un ejército turco, que habían transportado allí los británicos, Bonaparte decidió que sus soldados podrían aguantar un tiempo sin él. Cuando negoció un intercambio de prisioneros con los británicos tras el asunto de Abukir, le dieron a leer periódicos europeos para informarle de que casi todas sus conquistas en Italia se habían perdido. Bonaparte se dio cuenta de que Francia se enfrentaba a la posibilidad de un desastre militar. No tuvo el coraje de informar a sus soldados de que se marchaba, ni siquiera al general Jean-Baptiste Kléber, que quedaría al mando de la fuerza expedicionaria atrapada. «Ese cabrón nos ha abandonado con los pantalones llenos de mierda», exclamó Kléber cuando se enteró de lo que había hecho Bonaparte.[43]

Técnicamente, Bonaparte había abandonado su puesto y el director Barras afirmó más tarde que cuando él y sus colegas se enteraron de su llegada a Francia, discutieron la posibilidad de detenerle y mandar que le fusilaran. Para entonces, sin embargo, ya habían recibido al general con una bienvenida eufórica en todos los pueblos por los que pasaba camino de París. En Lyon, «todas las casas estaban iluminadas y cubiertas con banderas […]. El aire se llenaba de gritos de “Viva Bonaparte, que viene a salvar el país”».[44] Una vez que llegó a la capital, la primera tarea de Bonaparte fue resolver un drama familiar. Sus hermanos y hermanas lo presionaron para que rompiera con Joséphine, pero él se reconcilió con ella. Quería evitar que el proceso de divorcio lo distrajera, mientras perseguía su objetivo fundamental de encontrar una ruta hacia el poder. Instalado en su casa en la calle que se había llamado «de la Victoire» en su honor,

Bonaparte se sumergió en una ronda de encuentros con políticos para ver qué oportunidades se le presentaban.

Para estudiar la situación, Bonaparte contaba con la ayuda de varias figuras clave que vieron en la alianza con él una forma de promover sus propios fines. Talleyrand, al que habían destituido como ministro de Relaciones Exteriores tras el golpe del 30 de pradial, desempeñó un papel clave gracias a su amplia gama de contactos. Pierre-Louis Roederer, igual que Talleyrand, tenía conexiones en todo el espectro político, así como con los intelectuales del movimiento de los *idéologues*. Estos simpatizaban con el general porque los había incorporado a su empresa egipcia. Lucien Bonaparte, miembro del Consejo de los Quinientos, también estaba profundamente involucrado en estas intrigas políticas. Muchos de los generales colegas de Bonaparte compartían su desprecio por los políticos civiles que dirigían el país y estaban dispuestos a aceptar el liderazgo del corso. Algunos neojacobinos podrían haber cooperado con Bonaparte; una de sus quejas contra el Directorio era que había enviado deliberadamente al general al «exilio» en Egipto. Tuvo una larga y enconada reunión con el general Jean Bernadotte, el líder militar más cercano al partido neojacobino. El programa democrático de los neojacobinos no tenía ningún atractivo para él. «Después de haber triunfado con ellos», dijo más tarde, «habría tenido que triunfar sobre ellos».[45] Se reunió con los dos miembros menos políticos del Directorio, Gohier y Moulin, para explorar la posibilidad de ser nombrado para esa institución, pero no estaban dispuestos a ayudarle.

Al darse cuenta de que la oposición de estos dos directores no le dejaba ninguna posibilidad de ganar poder por medios legales, Bonaparte se dirigió a posibles aliados que estuvieran abiertos a la idea de un golpe de Estado. Sieyès era el principal candidato. Tan pronto como la noticia del regreso de Bonaparte llegó a París, el general Jean-Victor Moreau, con quien Sieyès había estado negociando, señaló lo obvio: «¡Ahí está su hombre! Él dará su golpe mucho mejor que yo».[46] Sieyès hubiera preferido a un general con una personalidad más flexible, pero no había otra alternativa. Ya había elaborado un plan en el que el Consejo de Ancianos, en el que tenía un firme grupo de partidarios, activaría una disposición constitucional que

permitiera la declaración del estado de emergencia. Esto provocaría el traslado de ambas asambleas legislativas a un lugar fuera de París, donde se podría presionar al Consejo de los Quinientos para que votara a favor de un nuevo régimen.

Desde el punto de vista de Bonaparte, la principal desventaja de unirse a este complot era que el veterano político revolucionario Sieyès suponía que sería él mismo quien tomaría las decisiones clave sobre las nuevas disposiciones constitucionales para sustituir al Directorio. Esperaba que el general simplemente prestara su popularidad a la operación y aceptara un papel secundario. La alternativa a Sieyès era Barras, que había ayudado a lanzar la carrera de Bonaparte al pedirle que sofocara el levantamiento contrarrevolucionario de vendimiario de 1795. Un encuentro entre los dos hombres en la noche del 30 de octubre de 1799, no salió bien: Barras le dijo a su antiguo protegido que era demasiado inexperto para asumir un papel político. A la mañana siguiente, cuando varios de los antiguos aliados de Barras que se habían pasado al lado de Bonaparte le convencieron de que había cometido un terrible error, el general ya se había comprometido con Sieyès.

En poco más de una semana, los conspiradores finalizaron sus planes. Temprano en la mañana del 18 de brumario del año VIII (9 de noviembre de 1799), se entregaron cartas a 150 miembros del Consejo de Ancianos, convocándolos a una reunión de emergencia; no se informó a otros cien que se consideraban poco propensos a apoyar el golpe. Uno de los conspiradores les dijo que el país estaba amenazado por una terrible conspiración y que, si no actuaban de inmediato, «no habrá cuerpo representativo, ni libertad, ni república». Los soñolientos diputados se quedaron aturdidos por la falta de pruebas de un inminente levantamiento, pero votaron para nombrar a Bonaparte comandante de las tropas en París y para ordenar el traslado de los consejos a la pequeña ciudad de Saint-Cloud al oeste de la ciudad. Los conspiradores habían elegido este lugar porque

evitaría que se formaran multitudes que se opusieran a sus planes; también les permitiría rodear a los diputados con tropas leales.

Mientras se congregaba el Consejo de Ancianos, Bonaparte reunió a otros líderes militares en su propia casa. Una vez que recibió el decreto que le nombraba comandante militar de París, acudió al Palacio de las Tullerías, sede de la legislatura. Se dirigió a las tropas reunidas alrededor del edificio para justificar su acción como un asunto de seguridad nacional. «¡En qué situación dejé Francia y en qué situación la encuentro ahora! ¡La dejé en paz y encuentro la guerra! ¡La dejé con conquistas y ahora el enemigo amenaza nuestras fronteras! […] Este estado de cosas no puede durar; en tres meses nos habría llevado al despotismo. Pero queremos una república [...] basada en la igualdad, la moral, la libertad civil y la tolerancia política. Con una buena administración todos olvidarán las facciones de las que fueron miembros para convertirse en franceses».[47]

Mientras Bonaparte estaba ocupado en las Tullerías, Talleyrand se encargó de expulsar a los tres directores potencialmente hostiles del Luxemburgo. Barras recibió un generoso soborno y se exilió a su finca, poniendo fin a su carrera política. Sus colegas, Gohier y Moulin, se dieron cuenta de que la resistencia era inútil. Mientras tanto, carteles y panfletos impresos preparados de antemano se distribuían por toda la ciudad celebrando a Bonaparte y justificando el golpe. «No puede ser que un hombre tan eminente por sus servicios permanezca excluido del liderazgo», insistía una pieza de propaganda.[48] Ninguna de las publicaciones que anunciaban el golpe hacía mención alguna a Sieyès, el hombre que realmente lo había puesto en marcha.

El día 18 de brumario había transcurrido sin problemas, pero los conspiradores todavía tenían que lidiar con los consejos, que debían reunirse en el antiguo palacio real de Saint-Cloud a la mañana siguiente. En una reunión por la noche del 18 brumario, Sieyès, Bonaparte y los otros conspiradores principales discutieron durante horas sobre cómo conseguir que los legisladores aceptaran abandonar la Constitución de 1795. Sieyès, el civil, estaba a favor de la acción de fuerza: quería detener a los diputados neojacobinos del Consejo de los Quinientos antes de que pudieran expresar

cualquier oposición. Bonaparte, el militar, se mostró reacio: quería mantener una fachada de legalidad, para que el nuevo régimen no tuviera el estigma de haber sido impuesto por la fuerza. Tanto Bonaparte como Sieyès se dieron cuenta de que su plan todavía podía fracasar si los diputados se ponían realmente en pie para defender la Constitución, como habían hecho seis meses antes cuando obligaron a los miembros del Directorio a renunciar. En la mañana del 19 de noviembre, mientras un carruaje que le transportaba a Saint-Cloud cruzaba la plaza de la Revolución, donde se había ejecutado a Luis XVI y a Robespierre, el ayudante de Bonaparte, Bourrienne, dijo a su compañero: «Mañana dormimos en el Luxemburgo o acabamos aquí».[49]

Si el 18 de brumario había sido un modelo de un golpe de Estado bien ejecutado, el día 19 fue una lección sobre los peligros de la improvisación. Mientras que los conspiradores habían logrado evitar que los potenciales oponentes atendieran la sesión matutina del Consejo de Ancianos del día anterior, esta vez llegaron todos los miembros de las dos asambleas, incluyendo a los diputados neojacobinos. Iban acompañados por varios miles de soldados, también por los guardias oficiales del Consejo, con los que no se podía contar para apoyar el golpe, y por una gran multitud de espectadores civiles. Era más del mediodía cuando los dos consejos comenzaron oficialmente sus sesiones en sus cámaras improvisadas. El plan de los conspiradores era que el Consejo de Ancianos aprobara inmediatamente un decreto que nombrara tres cónsules provisionales para reemplazar el Directorio y pequeños comités extraídos de los dos consejos para redactar una nueva constitución. Lucien Bonaparte, el presidente del Consejo de los Quinientos, entonces, impulsaría la medida a través de ese cuerpo, y se suspenderían las reuniones de los dos consejos.

En lugar de ceder a las presiones de los conspiradores, el Consejo de Ancianos mantuvo un furioso debate. Los diputados que se habían mantenido alejados de la sesión del día anterior exigieron pruebas de la conspiración que justificaba su traslado a Saint-Cloud. «Ya no estamos en los tiempos en que el Comité de Seguridad Pública decía: "Doy mi palabra" y dictaba decretos a los representantes de la nación», exclamó un

diputado.[50] Mientras tanto, los neojacobinos opositores al golpe en el Consejo de los Quinientos ignoraron los esfuerzos de Lucien Bonaparte por silenciarlos y exigieron en cambio que todos los miembros del Consejo hicieran, uno por uno, un nuevo juramento de lealtad a la Constitución de 1795. A las cuatro de la tarde, Napoleón Bonaparte, con los nervios de punta, había decidido dirigirse al Consejo de Ancianos en persona. Cuando le desafiaron a declarar si apoyaba la Constitución, se dirigió a los diputados para decir: «¡La Constitución! Todas las facciones la invocan y todas las facciones la violan; todas la desprecian; no puede salvarnos, ya que nadie la respeta». Llamado a aportar pruebas de que la República estaba en tanto peligro que se necesitaban medidas de emergencia para salvarla, repitió su afirmación de que sólo él representaba «el gran partido del pueblo francés». Finalmente, descartó cualquier posibilidad de convencer, se dirigió a «los valientes soldados cuyas bayonetas veo», y amenazó abiertamente a los legisladores. «¡Recuerden que marcho acompañado por el dios de la victoria y el dios de la buena fortuna!», dijo a los diputados recalcitrantes.[51]

Incluso el leal Bourrienne admitió que «nada de lo que había logrado decir tenía el más mínimo sentido […]. Bonaparte no era un orador». En cuanto salió de la sala de reuniones, surgió una nueva oposición a las exigencias de sus aliados de emprender la acción. «Todas las medidas deben tener la aprobación del cuerpo legislativo y deben tomarse de acuerdo con la Constitución», insistió un diputado.[52] Mientras tanto, Bonaparte, acompañado por dos granaderos, se había abierto paso a la fuerza hasta la Orangerie, donde su hermano Lucien estaba rodeado de furiosos diputados jacobinos que gritaban: «¡Muerte al tirano! ¡Abajo el dictador! ¡Larga vida a la República y a la Constitución del año III!». Cuando vieron a Napoleón Bonaparte avanzar hacia el podio del orador, los jacobinos se volvieron contra él, gritando: «¡Proscríbanlo! ¡Proscríbanlo!». Bonaparte parecía aturdido e incapaz de hablar con coherencia cuando los granaderos y varios oficiales que se habían apresurado a defenderle le arrastraron fuera de la sala. Dentro, Lucien luchaba para evitar que los diputados votaran inmediatamente y declararan a su hermano «fuera de la ley».

Una vez que Bonaparte recobró la cordura, él, Sieyès y los otros líderes del complot apelaron a los soldados reunidos fuera del palacio. Lucien Bonaparte surgió para hacer que se unieran con la falsa afirmación de que «la inmensa mayoría del Consejo está en este momento aterrorizada por unos pocos diputados con navajas». El mismo Napoleón Bonaparte le secundó diciendo: «Quería hablar con ellos; me han respondido con puñales». Liderados por el general Joachim Murat, los soldados entraron en la Orangerie. Se abandonó por completo la pretensión de hacer ver que el poder estaba cambiando de manos dentro de la legalidad. «¡Que se vayan todos los hombres honestos o no respondo de mis actos!», anunció un oficial. El Consejo de Ancianos, informado de que su órgano hermano había sido dispersado a la fuerza, hizo un último esfuerzo por imponerse, aprobando una resolución que anunciaba el nombramiento de un gobierno provisional, pero que también pedía una nueva convocatoria de las dos asambleas un mes más tarde, una medida que exasperó a los conspiradores. Para asegurarse de su éxito, se vieron obligados a reunir a suficientes miembros del Consejo de los Quinientos, entonces dispersos, para celebrar una especie de sesión parlamentaria. Allí, los miembros del consejo fueron intimidados para votar una resolución que nombraba a Sieyès, Ducos y Bonaparte para dirigir el gobierno como cónsules provisionales y reemplazar los consejos con dos comités que redactarían una nueva constitución. Se presionó a los demás miembros del Consejo de Ancianos para que aprobaran la medida. No fue hasta las tres de la mañana del 20 de brumario (11 de noviembre) que los recién nombrados cónsules pudieron jurar su cargo. Lucien Bonaparte proclamó: «A partir de hoy, todas las convulsiones de la libertad han terminado».[53]

Mientras los exhaustos participantes del drama de Saint-Cloud regresaban a París, tenían poca idea real de lo que los acontecimientos de los dos últimos días presagiaban para la República y el legado de la Revolución. La actuación de Napoleón Bonaparte había levantado dudas sobre su capacidad para desempeñar el papel principal que se había otorgado a sí mismo; tal vez pronto se vería superado por Sieyès y los otros políticos veteranos que habían organizado el derrocamiento del Directorio.

Al mismo tiempo, sin embargo, el uso de tropas para expulsar a los representantes electos de la nación de su sala de reuniones hacía surgir el espectro de una verdadera dictadura militar. En su airada arenga al Consejo de Ancianos, Bonaparte había acusado a los propios dirigentes de la República de desacreditar los principios de la Revolución, citando los golpes que habían dado el 18 de fructidor del año V (4 de septiembre de 1797), el 22 de floreal del año VI (11 de mayo de 1798) y el 30 de pradial del año VII (18 de junio de 1799). La ausencia de reacción popular al derrocamiento del Directorio demostró el poco apoyo que tenía el régimen creado en 1795. Sin embargo, la falta de entusiasmo por la Constitución de 1795 no fue un mandato para sustituirla por un gobierno unipersonal. Mucho tendría que suceder todavía antes de que, en diciembre de 1804, los franceses se encontraran de nuevo viviendo bajo un gobernante hereditario.

19

La muerte lenta de la República

1799-1804

A pesar de la torpeza de Bonaparte en Saint-Cloud el 19 de brumario, el golpe procedió como habían planeado sus conspiradores: los miembros intimidados que quedaban de los dos consejos dieron su autorización para que se redactara una nueva constitución. Como los termidorianos, que, después de derrocar a Robespierre, lo habían culpado inmediatamente por el extremismo del Terror, los brumarianos echaron la culpa de todo a quienes habían estado en el poder antes que ellos. Inundaron el país de propaganda en la que se decía que, bajo el Directorio, el país había estado al borde de la catástrofe y que sólo su intervención lo había salvado de los «desorganizadores tiránicos».[1] Los éxitos innegables del nuevo régimen durante sus primeros años hacen que sea fácil concluir que el republicanismo revolucionario estaba en las últimas en 1799 y que un régimen autoritario se adaptaba mucho mejor al país. En el momento del golpe brumario, sin embargo, ni el propio Bonaparte ni nadie más sabía qué tipo de gobierno iba a sustituir al Directorio y qué parte del legado de la Revolución francesa preservaría o desharía. Como todos los episodios de la Revolución, el desmoronamiento de la República después de 1799 fue una historia cuyo desenlace no se podía prever.

Los vencedores de brumario afirmaban que habían actuado para salvar la República, no para destruirla. Se referían a su golpe por la fecha del calendario revolucionario y, al tiempo que denunciaban todo lo anterior, el 90 por ciento de los puestos del nuevo gobierno lo ocuparon hombres que habían servido bajo el Directorio.[2] El propio Bonaparte –no empezarían a llamarle por su nombre de pila, Napoleón, hasta que se estableció

firmemente en el poder varios años después–, era «hijo de la Revolución», uno de tantos hombres ambiciosos que habían alcanzado posiciones con las que nunca hubieran soñado antes de las transformaciones de 1789 y las intrigas políticas de los años del Directorio. Había luchado bajo la bandera tricolor y se había identificado con el laicismo ilustrado del Instituto Nacional, cuyos científicos y filósofos le habían recibido con entusiasmo como miembro. La ambición que le guiaba era evidente, pero estaba por ver qué medidas adoptaría llevado por sus anhelos y, lo que es igualmente importante, si tenía capacidad para entusiasmar a las élites políticas y a la población en general.

La propaganda de los brumarianos ensalzó la figura de Bonaparte de una manera nunca vista en la era revolucionaria. Un periódico ilustrado publicó unos versos que decían que era «el amigo inmortal de los franceses» y «el dios de la luz». Pero incluso sus colaboradores más cercanos dudaban de que el joven general tuviera realmente las habilidades necesarias para ser un líder político eficaz. Con apenas treinta años cuando asumió el poder, Bonaparte tenía poca experiencia en el laberinto de la política revolucionaria francesa; hombres como Sieyès, que había pasado una década dominando el arte de la política, esperaban quitárselo de encima con sus astutas maquinaciones. Pierre-Louis Roederer, el camaleón político que había sacado del poder a Luis XVI la mañana del 10 de agosto de 1792, y que sobrevivió para meter a Bonaparte siete años después, notó que el general no sabía hablar en público: «No conseguía encontrar palabras contundentes, expresiones graciosas y el ritmo necesario».[3] Ni siquiera la influencia de Bonaparte sobre los militares estaba asegurada del todo: había otros generales ambiciosos dispuestos a dar un paso al frente si Bonaparte tropezaba.

Los nuevos hombres en el poder pudieron aprovecharse de la insatisfacción que existía respecto al Directorio. Además de los conflictos políticos y la criminalidad que asolaba muchas regiones rurales, diez años de desorden revolucionario habían hecho mella en las infraestructuras físicas y sociales del país. Los funcionarios que enviaron para evaluar la situación poco después del golpe de brumario informaron que había

puentes, canales, puertos y edificios públicos por todas partes que necesitaban reparaciones urgentes. El científico Antoine-François Fourcroy encargado de inspeccionar los hospitales de Normandía, lamentó que «los enfermos están sin sábanas o las que tienen están hechas jirones, las camas están sin mantas»; otro inspector descubrió que había una gran cantidad de niños abandonados en la región de Provenza y estimó que el 95 por ciento de ellos habían muerto.[4] Los gobiernos locales carecían de ingresos suficientes para hacer frente a estos problemas y los recursos del gobierno central se los llevaba una guerra aparentemente interminable. Sin embargo, a pesar de estos problemas, el Directorio había ido mejorando la eficiencia de su maquinaria administrativa y las condiciones en la mayor parte del país eran mejores que en 1795. Tras sobrevivir a la crisis militar de 1799 y demostrar que podía mantener a raya a los neojacobinos más extremos, el régimen no tenía por qué haberse derrumbado si no hubiera sido por la acción deliberada de sus propios líderes.

Un informe de la policía de París señaló que «la satisfacción que produce la Revolución del 18 de brumario no tiene nada de la exaltación o el entusiasmo que surgen y se desvanecen casi en el acto». Esto quería decir que gran parte de la población, incluidos los propios observadores, estaban esperando a ver qué harían los nuevos hombres en el poder y si serían más efectivos que sus predecesores antes de aceptarlos del todo. Para algunos, brumario parecía una toma del poder por parte del ejército. «Esta revolución tiene un carácter militar, no se puede negar», escribió Christine Reinhard, esposa del último ministro de Relaciones Exteriores del Directorio derrocado. Otros esperaban que el golpe abriera la puerta a la restauración de la monarquía borbónica. Incluso Bonaparte comprendió que la facilidad con la que él y sus asociados habían derrocado el Directorio no aseguraba su propia posición. En una discusión con algunos de sus asesores a principios de 1800 sobre la modificación de la ley contra los *émigrés* que habían huido del país durante la Revolución, dijo: «Gobernamos hoy; mañana, otros pueden inscribirnos en la lista de *émigrés*».[5]

Los primeros movimientos de los brumarianos reflejaron su propia incertidumbre sobre qué curso seguir. Los carteles de propaganda de los conspiradores cubrieron las paredes de París con su versión del golpe. La policía de Joseph Fouché tomó medidas enérgicas contra los teatros que se apresuraron a representar obras no autorizadas sobre el golpe, pero al mismo tiempo, los periódicos, que aún operaban con considerable libertad, publicaron informes que contradecían el relato oficial de que la vida de Bonaparte había corrido peligro. Los cónsules revocaron la ley de rehenes que los consejos habían aprobado antes del golpe, según la cual se podía detener a los parientes de los *émigrés* y exnobles y confiscar sus bienes. También revocaron otra ley aprobada casi al mismo tiempo, que obligaba a los ricos a contribuir a un préstamo al gobierno. Estas decisiones indicaban que los cónsules querían desvincularse del republicanismo militante que había estallado durante la crisis de la primavera y el verano de 1799. Cuando un cartel publicitario anunció la próxima publicación de «la despedida del *Père Duchêne* de los franceses», la policía actuó rápidamente para evitar cualquier reaparición del mítico portavoz de los *sans-culottes*.[6] En todo el país, los cónsules provisionales llevaron a cabo una drástica purga de funcionarios locales; destituyeron a un 70 por ciento de ellos; en general, sus reemplazos procedían de los miembros más ricos y conservadores de la población local.

Todo esto sugirió un giro conservador, pero cuando los cónsules anunciaron que iban a enviar a casi sesenta jacobinos al exilio en la Guayana francesa, se produjo una fuerte reacción. «La gente pensó que era la señal de que volverían las acciones arbitrarias y se restablecería un sistema que el público despreciaba», escribió Jean-Jacques Cambacérès, a quien pronto nombrarían segundo cónsul, y la idea quedó olvidada. Los brumarianos también tomaron medidas para acallar los rumores de que «van a regresar los sacerdotes deportados, se va a reinstaurar el culto católico y se podrá celebrar una misa solemne la víspera de Navidad». El ideólogo Pierre Cabanis, uno de los legisladores involucrados en la redacción de la nueva Constitución, prometió a sus antiguos colegas que se protegerían los logros básicos de la Revolución. «No, no habrá ninguna

reacción», insistió. «No, las propiedades adquiridas por los compradores de tierras nacionales seguirán siendo tan sagradas como las de otros ciudadanos».[7]

La confusión del público sobre las intenciones de los brumarianos reflejaba el hecho de que Sieyès, Bonaparte y sus partidarios habían derribado el Directorio sin haberse puesto de acuerdo sobre el sistema que lo reemplazaría. El 19 de brumario, cuando Antoine Boulay de la Meurthe, uno de los colaboradores de Sieyès, le explicó que todo el mundo daba por hecho «que tenéis una constitución preparada», se sorprendió al descubrir que el hombre que acababa de derribar la Constitución de 1795 no tenía absolutamente nada. Él respondió que quería «volver a las ideas de 1789», pero los revolucionarios originales difícilmente habrían interpretado las ideas de Sieyès como la manera de llevar a cabo su programa. Sieyès desconfiaba por completo de la «democracia bruta» y adoptó la máxima de que «nadie debería ser nombrado para una función por aquellos sobre los que ejerce la autoridad», lo que significaba abandonar el principio fundamental de que los ciudadanos debían elegir a quienes redactaban las leyes por las que se regían.[8] En lugar de elecciones, propuso que los ciudadanos con propiedades de cada comuna elaboraran una lista de «notables» aptos para el cargo. Los notables locales se reunirían a su vez y designarían al 10 por ciento de su grupo como posibles titulares de cargos al nivel de los departamentos. A continuación, los notables de los departamentos designarían al 10 por ciento de los suyos como posibles titulares de cargos nacionales, y el gobierno central elegiría entre ellos para las nuevas asambleas legislativas y otros cargos. En la mente de Sieyès, este sistema, en el que «la confianza viene de abajo y la autoridad de arriba», seguía siendo una forma de gobierno representativo, ya que todos los que estaban en el grupo de notables los designaban sus conciudadanos como funcionarios potenciales. Sin embargo, el sistema no permitía que los votantes decidieran quiénes ocupaban realmente el cargo.

Sieyès estaba decidido a sustituir las turbulentas legislaturas electas del decenio revolucionario por instituciones completamente aisladas de la opinión popular. Su plan preveía un Corps legislatif (Cuerpo Legislativo) de

trescientos miembros, que votaría las propuestas de ley, pero no tendría poder para ponerlas en marcha ni debatirlas. Sus votos se emitirían después de escuchar a los miembros de una segunda cámara, el Tribunat (Tribunado), con un número menor de miembros. Los tribunos estarían autorizados a debatir los proyectos de ley que les presentara el gobierno, pero no a presentar propuestas por su cuenta. El plan constitucional de Sieyès también incluía un tercer cuerpo, que se llamaba Sénat (Senado). Los senadores serían responsables de decidir si las leyes aprobadas por las otras dos cámaras violaban la Constitución. Sieyès había propuesto tal jurado constitucional en 1795 y se sintió humillado cuando la Convención termidoriana rechazó unánimemente la idea; esta vez sólo tenía que convencer a una persona –Bonaparte– para que la aceptara. En teoría, el Sénat, cuyos miembros lo serían de por vida y se les darían dotaciones sustanciales para asegurar su independencia, habría servido a un propósito similar al del Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Bonaparte estaba bastante dispuesto a aceptar las ideas de Sieyès sobre la eliminación de las elecciones más significativas y sobre su legislatura tripartita. Lo que le preocupaba del plan de Sieyès era el poder ejecutivo del nuevo gobierno. Sieyès proponía un gobierno encabezado por un *grand électeur* que tendría un salario considerable; su poder, en cambio, se limitaría a elegir a dos cónsules, uno para dirigir la política exterior y el otro responsable de los asuntos internos. Si este gran elector excedía su autoridad, en gran medida representativa, el Sénat podía «absorberle» y convertirle en un miembro ordinario de su institución. Bonaparte se dio cuenta de que Sieyès tenía la intención de nombrarle gran elector, es decir, le iba a dar un título prestigioso, pero sin poder real. «Creyó o simuló que creía que todo este sistema se había ideado con el único propósito de ponerle en ridículo y deshacerse de él en un par de meses», recordó Boulay de la Meurthe. Una reunión muy tensa casi llevó a la ruptura total entre los dos; Bonaparte amenazó con reclamar el poder por su cuenta, incluso aunque le hiciera parecer un dictador.[9]

Sieyès entendió que no podía interponerse en el camino de Bonaparte, y Bonaparte se percató de que sería imprudente romper el velo de legalidad

que justificaba el golpe. «Al fin y al cabo, era obvio que era Bonaparte a quien la nación quería ver a cargo de sus asuntos», escribió Boulay. «Era necesario darle suficiente poder para que pudiera [...] emplear su popularidad, su energía y su genio para el bien del país».[10] Roederer, siempre hábil para llegar a acuerdos, propuso transformar el *grand électeur* de Sieyès en *premier consul* con poder para dirigir el gobierno. Estaría flanqueado por otros dos cónsules para evitar que pareciera que Francia volvía al gobierno de un solo hombre. Los otros, sin embargo, no tendrían ningún poder real.

Una vez establecida la nueva estructura ejecutiva, Bonaparte le dijo a Sieyès que seleccionara a los cónsules, sabiendo que su compañero de conspiración convertido en adversario no tendría más remedio que nombrarle primer cónsul. También dejó en manos de Sieyès, que conocía mejor que él las personalidades de la escena política de París, la elección de la mayoría de los miembros de los nuevos órganos legislativos. En lugar de aceptar una posición puramente subordinada como segundo cónsul, Sieyès aceptó ser presidente del Senado. Bonaparte dispuso rápidamente que se le concediera a Sieyès una valiosa propiedad fuera de París; su aceptación del regalo destruyó la reputación de Sieyès como estadista desinteresado en adquirir riquezas. Christine Reinhard comprendió la situación de Sieyès: «Ahora tiene las manos atadas y no puede aspirar a nada más», escribió. Aunque se dio cuenta de que la nueva administración le costaría el trabajo a su marido, estaba satisfecha con el resultado. «Confío en el genio de Bonaparte; ¡no nos defraudará! No habría escapado de mil peligros, no habría cruzado milagrosamente el mar, si su destino no tuviera que cumplirse».[11] Ésta era la actitud que compartía gran parte de la población.

Se seleccionó con sumo cuidado a los que serían segundo y tercer cónsul, Jean-Jacques Cambacérès y Charles-François Lebrun. El nombramiento de Cambacérès, un exdiputado de la Convención que había votado a favor de la ejecución de Luis XVI en 1793, tranquilizó a los exjacobinos, mientras que Lebrun, un monárquico constitucional que había sido diputado de la

Asamblea Nacional, hizo lo mismo con los monárquicos moderados. Bonaparte permitió que uno de los periódicos de París subrayara el mensaje de sus nombramientos en un artículo en el que se le citaba diciendo: «Los puestos estarán abiertos a franceses de todas las opiniones, siempre que sean inteligentes, capaces y virtuosos».[12] El nuevo Senado, el Cuerpo Legislativo y el Tribunado estaban compuestos en su inmensa mayoría por antiguos diputados directores. Los hombres que no encontraban un escaño en las asambleas eran nombrados a menudo para ocupar cargos administrativos o para el recién creado Conseil d'État (Consejo de Estado), un órgano de expertos jurídicos pensado para redactar las leyes. El Consejo de Estado sigue siendo una de las contribuciones duraderas del régimen napoleónico a la vida política francesa. Sin embargo, a pesar de la presencia de algunos antiguos montañeses, como el ministro de Policía Fouché, el nuevo gobierno del Consulado cerró firmemente la puerta a los neojacobinos, cuyo movimiento había experimentado un breve resurgimiento en 1799.

El 24 de frimario del año VIII (15 de diciembre de 1799), apenas un mes después del golpe de brumario, se publicó la Constitución de 1800 (el año VIII). Los cónsules anunciaron que «la Revolución se resuelve según los principios que la iniciaron; está terminada». El nuevo documento difiere de los de 1791 y 1795 en varios aspectos. Como señaló el veterano legislador Antoine Thibaudeau, el nuevo documento «no decía nada sobre la libertad de culto, de prensa, el carácter público de los procedimientos judiciales»: de hecho, no incluía ninguna declaración de derechos. La Constitución de 1795 había previsto la posibilidad de que se suspendieran derechos específicos en caso de crisis; el nuevo documento autorizaba la suspensión de toda la Constitución en caso de «problemas que amenazaran la seguridad del Estado». Otro cambio importante fue el anuncio de que «el régimen de las colonias francesas está determinado por leyes especiales», cláusula que planteaba la posibilidad de que la esclavitud, abolida en 1794, volviera a legalizarse. El *Journal des hommes libres*, todavía identificado como un órgano jacobino, pero ahora controlado por Fouché, admitió que los republicanos «tienen derecho a lamentar que una serie de principios que

les eran tan queridos se hayan pasado por alto en silencio en el nuevo pacto social». La publicación recordó a sus lectores «la inutilidad de los esfuerzos que hicieron, en otros tiempos, para poner en práctica y llevar a cabo, incluso con sus más queridos legisladores, las cosas más justas y más aceptadas». Menos comprometida con el nuevo régimen, la monárquica *Gazette de France* no veía ninguna posibilidad de que el jefe de gobierno se viera frenado por la Constitución. «No hay que hacerse ilusiones en política», escribió su editorialista. «Los franceses no tienen ninguna salvaguarda contra la preponderancia del poder ejecutivo, y si es justo y sabio, lo será porque le interesa».[13]

En un aspecto, Bonaparte sí rindió homenaje al dogma de la soberanía popular. A pesar de las objeciones de Sieyès, insistió en que la nueva Constitución se sometiera a votación y exigió que se permitiera participar a casi todos los hombres adultos, independientemente de su riqueza o ingresos. Este gesto populista no era realmente significativo: se pedía a los ciudadanos que escribieran su voto junto a su nombre y su dirección, y las nuevas instituciones se ponían en marcha incluso antes de que se celebrara el plebiscito, con miembros de los nuevos órganos legislativos que habían nombrado, sin más, los cónsules. El gobierno anunció que más de tres millones de ciudadanos habían votado a favor, y sólo 1.562 habían dicho que no. En realidad, Lucien Bonaparte, el ministro del Interior, intervino de nuevo, como había hecho en Saint-Cloud el 19 de brumario, para salvar a su hermano de la vergüenza: sólo se habían emitido 1,6 millones de votos, menos que los 1,8 millones que habían apoyado la Constitución jacobina de 1793. Lucien aumentó sistemáticamente las cifras para que el nuevo régimen pudiera reclamar un respaldo más fuerte que su predecesor democrático.[14] El plebiscito permitió que Bonaparte compareciera como un representante elegido por el pueblo francés, a diferencia de los miembros de los tres órganos legislativos, ninguno de los cuales había sido elegido.

Desde el principio, Bonaparte no intentó siquiera ocultar la molestia que le ocasionaba cualquier crítica pública. Cuando Benjamin Constant hizo una

moción de censura al gobierno en el Tribunado, «la ira del primer cónsul fue más allá de todos los límites», escribió Christine Reinhard. «Quería tomar medidas draconianas, anular las últimas elecciones para eliminar a los partidarios de Sieyès de todas las cámaras». A medida que las tendencias autoritarias del nuevo gobernante se hicieron evidentes, incluso muchos de los hombres que habían participado en la conspiración de brumario comenzaron a tener dudas sobre el apoyo que le habían dado para que llegara al poder. A finales de la primavera, la policía informó de que Sieyès mantenía misteriosos encuentros con antiguos jacobinos. «Él seguía obstinado en considerar a Bonaparte como un auxiliar que el partido moderado podía controlar cuando quisiera», le dijo Madame Reinhard a su madre.[15]

El 27 de nivoso del año VIII (17 de enero de 1800), poco después del comienzo de la sesión legislativa, los cónsules anunciaron que se volvía al antiguo sistema de licencias para publicaciones periódicas y prohibieron todos los periódicos que circulaban por París, excepto trece. Los periodistas y editores, que habían sobrevivido a muchos intentos de represión durante la Revolución, probaron sus tácticas habituales, crearon nuevos periódicos con diferentes nombres, pero esta vez se enfrentaron a un régimen decidido a hacer cumplir sus edictos. En pocos meses, se acabó con cualquier vestigio de la prensa republicana. El Consulado toleró la creación de un diario abiertamente contrarrevolucionario, el *Journal des débats (Diario de Debates)*, cuyos directores habían publicado anteriormente revistas que apoyaban el levantamiento de vendimiario en 1795 y el Club de Clichy en 1797; rápidamente se convirtió en la publicación que más se leía en todo el país y ejercía verdadera influencia en la opinión pública. Aunque el *Journal des débats* evitaba el comentario político abierto, su crítico literario Julien-Louis Geoffroy llevó a cabo una campaña implacable contra las ideas de la Ilustración. Decidido a combatir la influencia de la *décade philosophique* de los *idéologues*, el *Journal* subrayaba el valor del orden social y fomentaba el retorno a la religión.

Imponer el orden en la sociedad fue también la principal motivación de las políticas que Bonaparte puso en marcha en los primeros meses del

Consulado. Instalado en el antiguo palacio real de las Tullerías, donde comenzó a recuperar rituales públicos que recordaban a la corte real, actuó rápidamente para sustituir los órganos administrativos departamentales y locales, que se habían formado durante la Revolución, y cuyos miembros eran elegidos por funcionarios nombrados a dedo a los que llamó *préfets* y *sous-préfets* (prefectos y subprefectos). Los prefectos sustituyeron a los comisarios del gobierno que había nombrado el Directorio, pero mientras que el sistema del Directorio seguía pareciéndose a una improvisación, la nueva estructura administrativa de arriba abajo adquirió rápidamente un aire de permanencia. Bajo este sistema «el movimiento del poder será rápido», escribió un periodista progobierno. «Encontrará sus órdenes ejecutadas en todas partes, sin oposición, siempre tendrá los instrumentos necesarios y no encontrará ningún obstáculo».[16] A muchos, los prefectos les recordaban a los intendentes del antiguo régimen, contra los que se había dirigido con fuerza la ira de los revolucionarios en 1789. Pero los intendentes siempre se habían enfrentado a la resistencia de los tribunales parlamentarios, las asambleas provinciales y otras instituciones locales. Ahora que la Revolución había acabado con estas negativas al mando centralizado, a los prefectos les resultaba mucho más fácil hacer cumplir las órdenes del gobierno. El sistema de prefecturas resultó tan eficaz que todos los gobiernos franceses posteriores lo han mantenido, aunque hoy en día los prefectos por nombramiento comparten el poder con los consejos departamentales y regionales elegidos.

Aunque el nuevo gobierno silenció a los exrepublicanos y permitió un renacimiento de las ideas conservadoras en la prensa, no podía ignorar la amenaza de una agitación monárquica, especialmente en las regiones occidentales, donde la oposición a la Revolución volvió a estallar. Bonaparte no perdió tiempo en ocuparse del problema. Envió tropas y negoció con los líderes rebeldes; intentó convencerlos de que su régimen sería un sustituto aceptable de la monarquía. En otras regiones, donde el bandidaje rural se había hecho endémico durante el Directorio, el nuevo gobierno amplió las medidas represivas ya desplegadas por su antecesor.

Declaró el estado de sitio en grandes zonas y estableció tribunales militares que no dudaron en imponer penas de muerte.

A la vez que el gobierno intentaba poner fin al largo conflicto armado en el oeste de Francia, buscaba una solución que permitiera regresar a muchos de los que habían salido del país durante la Revolución. Aunque la Constitución del año VIII mantenía las leyes existentes contra los *émigrés*, los cónsules anunciaron que no se añadirían más nombres a la lista de los sancionados por haber huido antes del golpe de brumario. Cuando percibieron que el ambiente había cambiado, varios *émigrés* aprovecharon la oportunidad de volver, aunque no se los pudo eliminar oficialmente de la temida lista. La propia actitud de Bonaparte sobre el tema era inconsistente: quería impulsar la reconciliación, pero era consciente del rechazo que mostraba el ejército por los aristócratas que habían luchado contra Francia. Los *émigrés*, por su parte, regresaban con sus propios resentimientos. Muchos de ellos descubrieron, como dijo uno, que «excepto en algunos casos especiales o inusuales, uno no recupera sus propiedades. Los jóvenes tienen que entrar en el ejército, las jóvenes tienen que seguir trabajando como en la emigración; los viejos se mueren de hambre». François-René de Chateaubriand, un joven noble que había huido en 1792 y había pasado años en Gran Bretaña y América, se sintió aliviado de poder volver a su país natal, pero no pudo deshacerse del recuerdo de los miembros de su familia que murieron en la guillotina durante el Terror. Caminando por París, tuvo la sensación de «andar sobre sangre». Bonaparte fue conciliador con los *émigrés* y los monárquicos nacionales, pero sólo si estaban dispuestos a aceptar el nuevo régimen. Cuando el hermano mayor de Luis XVI, Luis XVIII, escribió a Bonaparte prometiendo una buena recompensa si utilizaba su posición para reinstaurar la monarquía, la respuesta de Bonaparte fue inequívoca: «No debéis esperar volver a Francia; tendríais que marchar sobre cien mil cadáveres. Sacrificad vuestro propio interés por la paz y la felicidad de Francia. La historia os lo agradecerá».[17]

Por muy enérgico que fuera el nuevo gobierno en el tratamiento de los asuntos internos, Bonaparte y sus partidarios sabían que la clave para cimentar su poder era acabar ganando la guerra que habían heredado del

Directorio. A pesar de los éxitos de los ejércitos franceses en septiembre de 1799, las conquistas de Bonaparte en Italia habían caído ahora en manos enemigas. Además, los austríacos habían roto la promesa de aceptar las conquistas francesas en el norte de Europa que Bonaparte había logrado con el Tratado de Campo-Formio. Al acercarse la temporada de campaña, Bonaparte reunió un ejército de reserva cerca de Dijon, un lugar estratégico que mantenía al enemigo en la duda de si marcharía hacia el norte para invadir Alemania o hacia el sur para intentar recuperar Italia. A mediados de mayo, tomó su decisión: lideraría sus fuerzas sobre los Alpes para llevar a la retaguardia al ejército austriaco que sitiaba Génova, el último punto de apoyo francés en Italia. Esta audaz maniobra sorprendió a los austriacos y Bonaparte reocupó rápidamente Milán, la capital de Lombardía. Pero la crítica batalla de Marengo, librada el 14 de junio de 1800, estuvo a punto de terminar en un desastre. Como no esperaba un ataque por parte de Austria, Bonaparte había dispersado sus fuerzas y se vio muy superado en número. Lo salvó en el último momento la llegada del general Louis Desaix, que murió a pesar de que sus tropas atacaron con éxito. El infortunio de Desaix hizo que no estuviera presente para contradecir a Bonaparte cuando describió lo ocurrido en Marengo como una batalla que ganó gracias a su propia brillantez estratégica. La espectacular victoria consolidó el poder de Bonaparte en su país, aunque tuvieron que pasar otros seis meses de lucha antes de que la victoria del general Jean-Victor Moreau en la batalla de Hohenlinden llevara a los austriacos a pedir la paz.

El Tratado de Lunéville, firmado en febrero de 1801, restituyó todas las adquisiciones que Francia había obtenido cuatro años antes en Campo-Formio e incluso las incrementó. Los austriacos reconocieron oficialmente la anexión por parte de Francia de los territorios alemanes al oeste de su autoproclamada «frontera natural» en el Rin. El gobierno de Viena tuvo entonces que convocar un congreso de los gobernantes del Sacro Imperio Romano Germánico a fin de establecer compensaciones para los diversos príncipes cuyas posesiones habían tomado los franceses. El proceso anuló los complicados acuerdos que habían gobernado Europa central durante varios siglos. Inicialmente, llevó a la expansión de la influencia francesa en

Alemania, ya que los gobernantes locales competían para ganar el apoyo de Bonaparte para sus demandas. A la larga, abrió el camino a un movimiento nacionalista alemán setenta años más tarde, cuando Otto von Bismarck creó un imperio alemán unificado después de derrotar a Francia en la guerra de 1870-1871, poniendo fin definitivamente a la era del dominio francés en Europa.

Junto con la campaña cada vez más exitosa para restablecer la ley y el orden en las zonas rurales, la paz con Austria aumentó la popularidad de Bonaparte y le permitió embarcarse en nuevas iniciativas que de otro modo habrían sido demasiado polémicas de llevar a cabo. A medida que el cónsul se afianzaba más sólidamente en el poder, sus oponentes internos se quedaban sin otra forma de enfrentarse que la conspiración. Tanto los monárquicos como los republicanos militantes hicieron circular panfletos clandestinos en los que justificaban el asesinato como respuesta legítima al comportamiento dictatorial de Bonaparte. La policía desarticuló varios complots, pero el 3 de nivoso del año IX, la víspera de Navidad de 1800, cuando Bonaparte se dirigía a la ópera en su carruaje, una «máquina infernal», un carro de caballos cargado de pólvora –la versión en la era revolucionaria de un coche bomba– explotó cerca. Falló por poco, pero mató a varios transeúntes.

Incluso antes de que comenzara la investigación policial, Bonaparte ya estaba convencido de que el complot era obra de militantes republicanos. Exigió una venganza inmediata: «Debe correr la sangre, hay que fusilar a tantos culpables como víctimas, quince o veinte, deportar a doscientas personas y aprovechar esta oportunidad para purgar la República de ellas».[18] Intimidó al Senado para que aprobara medidas arbitrarias, entre ellas la creación de tribunales especiales para celebrar juicios expeditos a los acusados de amenazar la seguridad pública. Se envió a más de un centenar de antiguos jacobinos y activistas *sans-culottes* a la Guayana o a las Seychelles en el Océano Índico, donde la mayoría murió. Mientras tanto, los agentes de Fouché realizaron una de las primeras investigaciones forenses modernas; llevaron los restos del caballo que conducía el carro a los herreros de París. Uno de ellos lo reconoció e identificó al dueño del

caballo; resultó ser un conspirador monárquico. Se detuvo inmediatamente a varios de los autores y se los ejecutó, aunque el cerebro del complot escapó, y pasó el resto de sus días como sacerdote católico en Charleston, Carolina del Sur. A pesar de la revelación de la naturaleza monárquica del complot, Bonaparte se negó a reconsiderar la medida que había ordenado contra los jacobinos. Aunque el Consulado mantenía una fachada de republicanismo, el primer cónsul estaba decidido a destruir los últimos rastros del radicalismo revolucionario.



TABLEAU HISTORIQUE

DES CAUSES QUI ONT AMENÉ LA RÉVOLUTION DU DIX-HUIT BRUMAIRE.

Mauvaise conduite du Directoire. — Motion incendiaire de la faction dominante au Conseil des 500. — Poignards tirés sur Buonaparte, parés par un grenadier. — Courage de ce Général pour disperser les factieux, et empêcher les soldats de les passer à la bayonnette. — Nomination de deux Commissions pour reviser la constitution — Entrevue des Consuls de la République française et d'un Parlementaire anglois. — Ouverture et communications qui ont été faites dans cette conférence. — Détermination prise par ces mêmes Consuls à la suite de cette entrevue. — Déclaration du roi de Prusse de faire marcher 70 mille hommes contre les puissances qui refuseraient de faire la paix. — Annonce d'une suspension d'armes. — Convocation d'une séance extraordinaire pour la ratification de la paix générale. — Prochaine rentrée des réquisitionnaires et des conscrits dans leurs foyers.

LA révolution du 18 Brumaire, entraine les derniers soupirs des tirans désorganisateurs, elle nous fait espérer le ravivement du commerce, la restauration des finances, et déja plusieurs millions versés dans les caisses nationa-

Propaganda para el golpe de Estado. Los conspiradores que derrocaron al Directorio hacían un hábil uso de los medios de comunicación para consolidar su poder. Esta publicación mostraba al joven Napoleón Bonaparte flanqueado por los hombres mayores que habían aceptado ejercer de segundo y tercer cónsul. Llevan pergaminos en los que está escrita la promesa de pagar las deudas con el Estado, lograr la paz e inspirar el «amor por las leyes». Fuente: Biblioteca Nacional de Francia.

El carácter cada vez más arbitrario y autoritario del régimen de Bonaparte amplió la brecha entre los intelectuales republicanos que habían ayudado a llevar a cabo el golpe de Estado y el hombre al que habían ayudado incautamente a tomar el poder. Al oponerse a los tribunales

especiales, el tribuno Pierre Daunou advirtió que los argumentos de los partidarios del gobierno podían servir para justificar «la suspensión de los derechos individuales y de todas las garantías sociales; los impuestos militares; las detenciones arbitrarias; las detenciones indefinidas; las inquisiciones arbitrarias». En sus meditaciones privadas, Benjamin Constant lamentaba ahora que él y sus amigos hubieran estado tan dispuestos a sabotear la ruidosa política pública del Directorio en nombre del orden. Bonaparte, se lamentaba Constant, estaba extendiendo los principios del ejército a todas las áreas de la vida nacional. «El espíritu militar se desliza en todas las relaciones civiles. Uno imagina que, para la libertad, como para la victoria, nada es más apropiado que la obediencia pasiva».[19] Ante las nuevas realidades, Constant y sus amigos desarrollaron las bases intelectuales para una defensa por principio de las libertades individuales que daría sus frutos bajo los regímenes menos represivos que siguieron al de Napoleón en el siglo XIX. Por el momento, sus protestas cayeron en saco roto.

El asunto de la «máquina infernal» convenció a Bonaparte de dos cosas: su régimen seguiría pareciendo frágil mientras él fuera el único que lo mantenía unido, y era necesario hacer las paces con Gran Bretaña para que dejara de apoyar a los monárquicos. No estaba aún en posición de tratar el primer problema convirtiendo el régimen en hereditario, pero la victoria sobre Austria le dio la suficiente ventaja para llevar a los británicos a la mesa de negociación. El 1 de octubre de 1801 se firmó un acuerdo preliminar en el que los británicos acordaron devolver a Francia y a sus aliados casi todos los territorios de ultramar que le habían arrebatado a cambio de la retirada francesa de Egipto y de la mitad meridional de la península italiana. A principios de noviembre hubo grandes celebraciones en París, coincidiendo con el aniversario del golpe de Estado de brumario. El 25 de marzo de 1802 se firmó un tratado definitivo en la ciudad de Amiens, en el norte de Francia. Por primera vez desde abril de 1792, Francia ya no estaba en guerra. En sus memorias, Talleyrand, ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón, escribió: «Se puede decir, sin la menor exageración, que, en la época de la paz de Amiens, Francia gozaba de una

potencia, una gloria y una influencia tan grande en el mundo como el espíritu más ambicioso podía desear para su país».[20]

Para Bonaparte, una de las consecuencias más importantes de la paz de Amiens fue el acuerdo con Gran Bretaña que permitía que Francia lanzara inmediatamente una expedición naval para recuperar el control total de sus colonias caribeñas. Cuando Bonaparte tomó el poder a finales de 1799, Saint-Domingue estaba en plena guerra civil entre Toussaint Louverture y André Rigaud, el líder de la gente libre de color de la isla. El último comisario del Directorio, el general Joseph Hédouville, había animado a Rigaud a desafiar al jefe negro. En la isla más pequeña de Guadalupe, una revuelta de la población libre de color obligó al general francés Edme Desfourneaux a huir a principios de octubre de 1799.

Bonaparte había decidido volver a imponer el control de la metrópoli sobre las colonias y restaurar el estatus de Francia como potencia mundial; de hecho, negoció con España para reclamar Luisiana –el vasto territorio en el valle del Mississippi que Luis XV había cedido después de la Guerra de los Siete Años en 1763– con el fin de crear un imperio americano. Sin embargo, mientras la marina británica impidiera el envío de un gran número de tropas al Caribe, él no especificaría cuáles eran las «leyes especiales» que la nueva Constitución preveía para las colonias. En diciembre de 1799, Bonaparte emitió una proclama en la que prometía a la población de Saint-Domingue que nunca se atacarían ni modificarían «los sagrados principios de la libertad e igualdad de los negros», pero esto no tranquilizó a Louverture. Sabía muy bien que el nuevo gobernante francés ya había prometido que la esclavitud se mantendría en las colonias donde no se había aplicado la ley de 1794. También sabía que Bonaparte había nombrado a varios antiguos defensores de la esclavitud para importantes puestos de gobierno. Por lo tanto, Louverture le dijo al representante del Consulado: «Somos libres hoy porque somos los más fuertes. [Bonaparte] mantiene la esclavitud en Martinica y en la Isla de Borbón; también seremos esclavos cuando él se convierta en el más fuerte».[21]

Mientras esperaba el momento de poder actuar en el extranjero, Bonaparte consultó a los antiguos colonos sobre la política que debía

adoptar. Algunas de las respuestas fueron inesperadas: los antiguos diputados de la Convención de Saint-Domingue, Louis Dufay y Jean-Baptiste Belley, cuya presencia el 16 de pluvioso del año II (4 de febrero de 1794) había convencido a la Convención de que aprobara su histórico decreto de abolición de la esclavitud, se habían vuelto en contra de Toussaint Louverture e instaron a intervenir para eliminarlo. Sin embargo, el antiguo lobista de los propietarios de esclavos blancos, Pierre-François Page, llegó a la conclusión de que ya era demasiado tarde para anular la política de emancipación. Bonaparte no estaba de acuerdo con las políticas igualitarias que la Convención y el Directorio habían adoptado. En 1801, cuando la devolución pendiente de Martinica volvió a poner sobre la mesa la cuestión de la esclavitud, Thibaudeau le oyó pronunciar una verdadera diatriba racista: «Estoy a favor de los blancos, porque soy blanco; no tengo otra razón, y ésa es buena. ¿Cómo se puede conceder la libertad a los africanos, a los hombres que no tienen civilización, que ni siquiera saben lo que es una colonia, lo que es Francia?».[22] Es posible que Bonaparte estuviera influido por su esposa, Joséphine, cuya familia poseía tierras en Martinica, aunque rara vez permitía que ella le diera consejos. En 1802, ella dejó que el autor de un libro sobre los errores de la negrofilia *(The Errors of Negrophilism)*, un violento tratado contra la abolición de la esclavitud, le dedicara su obra.

Sin embargo, Bonaparte no dejó que sus creencias personales sobre la raza y la esclavitud le impidieran pensar en formas de sacar provecho de los éxitos de Toussaint Louverture. A principios de 1801, redactó una carta en la que nombraba capitán general de la colonia al líder negro. Sin embargo, en lugar de enviarla, Bonaparte cambió de opinión y decidió despedir a Louverture y expulsarlo del ejército francés. Después de derrotar a las fuerzas de Rigaud a principios de 1800, el general negro había desafiado las instrucciones del gobierno francés y había ocupado la colonia española de Santo Domingo (hoy, la República Dominicana), la mitad oriental de la isla La Española. En febrero de 1801, Louverture puso bajo arresto domiciliario a Philippe Roume, el último funcionario francés que quedaba en la colonia, y en abril convocó una asamblea para redactar su propia constitución para

Saint-Domingue. Al otro lado del Atlántico, Bonaparte ya había dado órdenes para que se reuniera una fuerza expedicionaria y se desplegara en el Caribe antes de recibir una copia de la Constitución de Louverture, pero el contenido del documento confirmó sus peores temores. Incrementó el número de tropas que trasladarse a la colonia.

En su constitución, Louverture había evitado cuidadosamente declarar la independencia; en lugar de eso, se apropió del lenguaje de la Constitución francesa de 1800 para afirmar que él estaba simplemente estableciendo las «leyes especiales» que prometía el documento para las colonias. Mientras la Constitución consular había omitido cualquier declaración de derechos, el documento de Louverture usaba el lenguaje de la libertad y la igualdad. Declaraba la esclavitud «abolida para siempre», afirmaba que «todos los hombres nacen, viven y mueren libres y franceses», que los hombres de todos los colores podían tener «todo tipo de empleos», y que «la ley es la misma para todos, tanto en lo que respecta a la protección como al castigo». La Constitución de Louverture apelaba a la doctrina de los derechos naturales e iba más allá de lo instituido por Bonaparte, ya que establecía un gobierno autoritario, que dirigiría el propio Louverture «durante el resto de su gloriosa vida». El único control teórico de su poder era una asamblea cuyos miembros elegía él mismo. Se declaró que el catolicismo era la religión oficial y se prohibió el divorcio. A pesar de la abolición de la esclavitud, Louverture instituyó un sistema de trabajos forzados; incluso previó la posibilidad de que el gobierno de Saint-Domingue comprara a cautivos traídos de África para promover «el renacimiento y la expansión de la agricultura». El conservadurismo social subyacente en la Constitución de Louverture no estaba lejos de las opiniones del propio Bonaparte, pero al primer cónsul le enfureció el desprecio que mostraba el gobernador negro hacia su autoridad. La iniciativa de Louverture contribuyó a inspirar un movimiento contra el gobernador blanco de Guadalupe, donde un oficial militar mestizo, Magloire Pélage, tomó el poder con el apoyo de soldados negros del ejército que «pensaban que iban a volver a ser esclavizados», según decía un informe.[23]

La expedición que zarpó desde Francia en noviembre de 1801 fue uno de los mayores esfuerzos militares de ultramar organizados por un gobierno europeo hasta ese momento. Se necesitaron más de cien barcos para transportar a los más de veinte mil soldados destinados a las dos islas. Bonaparte nombró a su cuñado Victoire Leclerc, casado con su hermana Pauline, como comandante del ejército destacado en Saint-Domingue. Las instrucciones de Leclerc conformaban un plan en tres partes: inicialmente tranquilizaría a la población sobre sus derechos y negociaría con Toussaint Louverture, «con el fin de tomar posesión de las fortalezas y entrar en el país». Una vez asegurados los puntos estratégicos de la colonia, Leclerc se haría «más exigente» y retiraría a Louverture de su puesto; mientras tanto, iría incorporando a los soldados y oficiales negros a su propio ejército. Finalmente, arrestaría a los oficiales negros, les «dispararía como si fueran rebeldes» si se resistían, y desarmaría a la población negra, no dejándole posibilidad alguna de opinar sobre la autoridad francesa. El plan se basaba en una propuesta anónima que se había publicado en Francia varios años antes por un panfletario que estaba a favor de la esclavitud. Su autor recomendaba explícitamente que se hiciera la promesa de que no se reinstauraría la esclavitud hasta que la colonia estuviera asegurada militarmente, entonces se podría derrotar a los negros «y someterlos para evitar nuevas desgracias».[24]

Informado de la reacción hostil de Bonaparte a su constitución y la inminente llegada de la expedición militar, Louverture se preparó para luchar. Cuando la flota francesa llegó al puerto norteño de Cap Français, que se había reconstruido en los años posteriores al devastador incendio de 1793, puso en marcha su propio plan. Henri Christophe, uno de los comandantes de Louverture, quemó la ciudad una vez más y se retiró al campo. Leclerc pudo llevar sus fuerzas a tierra, pero se encontró con una feroz oposición del ejército de Louverture y de las guerrillas de las montañas de la isla. Las fuerzas negras infligieron numerosas bajas a los franceses y asesinaron a los blancos susceptibles de ponerse del lado de los invasores. Sin embargo, a finales de abril, los franceses habían ganado la batalla. De acuerdo con sus instrucciones, Leclerc permitió a Christophe,

Jean-Jacques Dessalines y otros oficiales negros mantenerse en sus filas e incorporó a sus hombres a su propio ejército. Abandonado por sus propios partidarios, Toussaint Louverture aceptó renunciar a su puesto de gobernador de la colonia y retirarse a su plantación.

En cuanto le llegaron las noticias de estas victorias militares en el Caribe, Bonaparte decidió que era libre para hacer uno de los repudios más enfáticos de los principios revolucionarios de libertad e igualdad: el 20 de mayo de 1802 se derogó la ley de la Convención del 16 de pluvioso del año II, y se legalizó la decisión de mantener la esclavitud en las colonias donde no se había abolido en 1794. La decisión suscitó cierta oposición: un tercio de los tribunos y 63 miembros del Consejo Legislativo votaron en contra. La derogación no decía nada sobre Saint-Domingue y Guadalupe, pero la amenaza a la libertad de los negros era evidente. A esta nueva legalización de la esclavitud le siguió otra ley que prohibía que «los negros, mulatos u otras personas de color, de ambos sexos» entraran en el territorio europeo de Francia. Al ver que se volvía a los días anteriores a la revolución, los capitanes de los barcos de esclavos zarparon hacia la costa africana. Los blancos que habían huido de Cap Français después de la sublevación de esclavos de 1791 se apresuraron a volver a la colonia para reanudar sus oficios. Uno de ellos, un sastre llamado Norbert Thoret, reabrió su tienda en Cap Français y pronto empleó a cuarenta trabajadores para hacer los uniformes de los oficiales franceses. «Si las cosas se hubieran tranquilizado», escribió más tarde, «estoy convencido de que habría hecho una gran fortuna en poco tiempo».[25]

La sensación de seguridad entre la población blanca de Saint-Domingue se hizo más evidente en junio de 1802, cuando Leclerc acusó a Toussaint Louverture de alentar en secreto a los negros a levantarse contra los franceses. Al final, pillaron a Louverture desprevenido en su propia plantación, le detuvieron y le subieron a un buque de guerra con destino a Francia; allí le separaron de su familia y le encarcelaron en el Fuerte de Joux, cerca de la frontera con Suiza. Bonaparte se negó a leer el extenso memorando que escribió Louverture para justificar su conducta. Poco acostumbrado al frío y la humedad del clima europeo, Louverture cayó

enfermo y murió en abril de 1803. Para entonces, el general Leclerc también había caído, junto con gran parte de su ejército, que se había visto diezmado por una epidemia mortal de fiebre amarilla. A medida que disminuían las filas de soldados blancos, los oficiales de Louverture cambiaron de bando nuevamente, impulsados por los informes sobre Guadalupe. Habían oído que el comandante francés Antoine Richepance había sofocado una revuelta armada, que dirigía el mestizo Louis Delgrès; pero antes, los rebeldes se habían negado a rendirse, habían volado su último bastión y, al hacerlo, se habían suicidado al grito de «¡No a la esclavitud! ¡Viva la muerte!».[26] Los negros en Guadalupe, Martinica y las colonias francesas del Océano Índico no obtendrían la libertad hasta 1848, cuando otra revolución acabaría, por fin, con la esclavitud en el Imperio francés.

En Saint-Domingue, el esfuerzo francés por acabar con la resistencia negra fracasó. En octubre de 1802, el general mestizo Alexandre Pétion y los generales negros Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe iniciaron una revuelta con el objetivo claro de conseguir la independencia de Francia. En el invierno de 1802-1803, Bonaparte invirtió miles de soldados más en la lucha. La mayoría de ellos, como sus antecesores, terminaron muriendo en la isla; las pérdidas para Francia fueron de unos cincuenta mil soldados y marineros. El destino de la expedición quedó sellado después de mayo de 1803, cuando la frágil paz de Amiens se derrumbó y la marina británica volvió a cortar las comunicaciones francesas con el Caribe. El sucesor de Leclerc, el general Donatien Rochambeau, recurrió a tácticas brutales, importaba perros rastreadores de Cuba para pillar a los rebeldes negros en las montañas y asfixiaba a los prisioneros en las bodegas de los buques de guerra. Sin embargo, a finales de 1803, se vio obligado a rendirse y lo que había sido la posesión de ultramar más valiosa de Francia se convirtió en la nación independiente de Haití. Cuando la inminente derrota en Saint-Domingue destruyó su sueño de crear un imperio en el Nuevo Mundo, Bonaparte ofreció el territorio de Luisiana a los estadounidenses de forma apresurada. Esto sería el inicio de la expansión del nuevo país que lo convertiría en una potencia mundial.

Abandonar la abolición de la esclavitud y el experimento que había convertido a Francia en una entidad política multirracial entre 1794 y 1802 fue el incumplimiento más devastador de las promesas de la Revolución por parte del Consulado. Pero para la población de la Francia metropolitana había una preocupación más inmediata: la política de Bonaparte respecto a la Iglesia católica. Desde el inicio del Consulado había dado pasos que presagiaban el fin de la campaña revolucionaria contra la Iglesia. Poco después del golpe, se acabaron las deportaciones de sacerdotes refractarios a Guayana y se permitió a los católicos reanudar los servicios dominicales. Sin embargo, los sacerdotes todavía estaban obligados a prestar juramento de lealtad a la Constitución, algo que la mayoría se negó a hacer y muchos funcionarios, en particular el ministro de Policía, Fouché, siguieron siendo hostiles a la Iglesia. «No sabemos qué decir sobre este gobierno», escribió el sacerdote saboyano François Molin en su diario en marzo de 1800. «Liberan a unos y encarcelan a otros». Pero aumentaba la presión para llegar a un acuerdo más amplio entre el gobierno y la Iglesia. Después de su estudio de las provincias occidentales, el científico y funcionario Antoine-François Fourcroy concluyó: «Es un error de algunos filósofos modernos, que yo mismo compartí, creer que es posible difundir una educación suficiente para destruir los prejuicios religiosos».[27]

Sin embargo, Bonaparte avanzaba hacia un acuerdo con la Iglesia que pondría fin al conflicto religioso que había iniciado la Asamblea Nacional con la Constitución Civil del Clero. Cuando ocupó Milán en junio de 1800, Bonaparte había pedido al clero local que organizara una ceremonia pública para celebrar su victoria y habló de «eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir la reconciliación completa entre Francia y la cabeza de la Iglesia».[28] Pío VII, el nuevo Papa elegido en 1800, había indicado, durante la invasión francesa de Italia en 1797, que era posible la coexistencia entre la Iglesia y las ideas republicanas. Informado de la «gloriosa y afortunada decisión» de Bonaparte de iniciar negociaciones sobre la restauración de la Iglesia, respondió positivamente. Bonaparte concibió originalmente un trato unilateral en el que utilizaría al Papa para obligar al clero *émigré* recalcitrante a alinearse, como le explicó a un miembro del Consejo de

Estado. «La gente necesita una religión. Esa religión debe estar bajo el control del gobierno. Actualmente, cincuenta obispos emigrados pagados por Inglaterra dirigen el clero francés. Hay que acabar con su influencia; para eso es necesaria la autoridad del Papa». A cambio de dar protección legal a la Iglesia en Francia, haría que el Papa ordenara a todos los obispos de la Iglesia francesa que renunciaran a sus puestos. Esto incluiría a los que se habían exiliado porque se oponían a la Revolución y a quienes, como el líder de la Iglesia constitucional Henri Grégoire, se habían plegado a la Constitución Civil. A aquellos que estuvieran dispuestos a aceptar el nuevo orden de las cosas se les volvería a nombrar. «El Papa confirmará la venta de la propiedad de la Iglesia; él bendecirá a la República», dijo Bonaparte a un miembro del Consejo de Estado. Aseguró a su oyente que su determinación no tenía nada que ver con ningún apego personal al catolicismo. «Dirán que soy papista; no soy nada; yo era musulmán en Egipto, seré católico aquí por el bien de la gente».[29]

El Concordato requirió muchas concesiones de la Iglesia. Primero, tendría que aceptar la pérdida permanente de la propiedad que se le había expropiado en 1789. A cambio, el gobierno acordó reanudar los pagos al clero que se habían anulado en 1795. Pero ahora el gobierno nombraría obispos, quienes todavía recibirían su consagración religiosa del Papa. Este arreglo fue básicamente un regreso a las prácticas de la Iglesia galicana prerrevolucionaria, pero después de una experiencia que había demostrado lo hostil que podía ser un gobierno francés a la religión. El Concordato reconoció el catolicismo como «la religión de la mayoría de los franceses», en lugar de otorgarle un estatus especial, y garantizó la libertad de culto a los protestantes y judíos del país. También se aseguraron los derechos de los ciudadanos que no se suscribían a ninguna religión. Después de que Pío VII aceptara los términos de Bonaparte y firmara el acuerdo, el gobierno francés agregó unilateralmente una serie de artículos llamados «orgánicos» a sus disposiciones. Entre otras cosas, estas adendas prohibían que el Vaticano se comunicara directamente con el clero francés y exigían que los servicios de la Iglesia incluyeran oraciones por la salvación de la República

y los cónsules. En años posteriores, se ordenó a los sacerdotes que dijeran a sus feligreses que el servicio militar era una obligación religiosa.

Para evitar que la población católica se alejara por completo de la Iglesia, Pío VII aceptó lo que era, desde su punto de vista, un acuerdo muy desfavorable. Cuando las negociaciones que condujeron al Concordato comenzaron en 1800, el sacerdote refractario Molin anotó en su diario su preocupación de que «la antorcha de la fe finalmente se apague en nuestro desdichado país». No se estaba formando a nuevos sacerdotes, y después de tantos años de interrupción, los laicos se encontraban en un estado de «asombrosa estupidez» acerca de su fe. Un funcionario del gobierno comentó que los campesinos habían perdido la costumbre de confesarse, recibir la comunión y evitar la carne los viernes. «Donde no hay sacerdotes, el maestro de escuela oficia y ellos son felices», escribió.[30] El Concordato dio a la Iglesia la oportunidad de restablecerse en la vida nacional y restaurar la autoridad del clero sobre los laicos. La voluntad de Bonaparte de reconocer el control del Papa sobre la jerarquía católica francesa a fin de silenciar a los obispos constitucionales y refractarios en disputa marcó un importante cambio de poder dentro de la Iglesia. Los gobernantes y el clero franceses se habían resistido durante mucho tiempo al «ultramontanismo», el reconocimiento de la autoridad del Vaticano «más allá de las montañas». Al invocar la autoridad del Papa para silenciar la disidencia en la Iglesia francesa, Bonaparte ayudó a poner en marcha los cambios que culminarían en el Concilio Vaticano I de 1870, en el que se consagró la doctrina de la infalibilidad papal y se creó la Iglesia católica moderna y altamente centralizada.

El Concordato entró en vigor oficialmente el domingo de Pascua, el 18 de abril de 1802, con una gran ceremonia en la catedral de Notre Dame de París. El gran edificio medieval, que había sido escenario de la revolucionaria Fiesta de la Razón y la celebración de la abolición de la esclavitud, reasumió ahora su función religiosa. El escritor *émigré* Chateaubriand programó el lanzamiento de su obra *Génie du christianisme (El genio del cristianismo)*, una elocuente respuesta a las críticas de la religión propagadas por los *philosophes* y la Revolución, para que

coincidiera con la ceremonia. La prensa conservadora se deshizo en alabanzas y marcó un punto de inflexión en la opinión pública. Sin embargo, la promulgación del Concordato y la ceremonia de Notre Dame no consiguieron devolver la fe católica a toda Francia. Jacques Ménétra, que escribió sus memorias durante el Consulado, todavía arremetía contra los «antiguos prejuicios góticos del clero». Cuando Bonaparte quiso convencer al escritor Constantin Volney de que el país quería que se restableciera la Iglesia, se indignó tanto por la respuesta de Volney –«si Francia le pidiera que trajera a los Borbones, ¿lo haría?»–, que le dio una patada en el estómago y lo tumbó. A un visitante británico, Henry Redhead Yorke, le pareció que la escena de Bonaparte y otros dignatarios en la ceremonia de Pascua, «reunidos en un lugar para adorar a un Dios en el que no tienen fe y profesar una religión que desprecian» no haría mucho por restaurar la fe de la gente. Señaló irónicamente que el primer cónsul, que «había adorado el altar del ateísmo algunos años antes en París [...], después se arrodilló ante el Papa en Roma y alabó la religión de Mahoma en África».[31]

Muchos oficiales del ejército estaban especialmente descontentos por la restauración del catolicismo. Cuando obligaron a un grupo de generales a asistir a la misa en Notre Dame, echaron a algunos de los sacerdotes de sus asientos, «los insultaron y los hicieron salir corriendo para ocupar sus lugares». Después de la ceremonia, cuando Bonaparte preguntó a uno de ellos qué pensaba de él, respondió: «Es una pena que no estén aquí el millón y pico de hombres que perdieron la vida por destruir lo que usted ha restablecido». Un pequeño grupo de escritores, algunos de ellos vinculados a los *idéologues*, mantuvieron una tenaz campaña para desacreditar las creencias religiosas. Marie-Joseph Chénier ridiculizaba a Chateaubriand y su círculo en su obra *Les nouveaux saints (Los nuevos santos)*, y el popular autor Pigault-Lebrun se apresuró a publicar una obra destinada a mostrar que «el edificio de la religión es el traje de arlequín, unas piezas cuyos matices discordantes impactan a la vista igual que el conjunto entero impacta a la razón». Bonaparte sabía, sin embargo, que podía ignorar a estos críticos: a diferencia de los partidarios de la Iglesia, eran incapaces de

causar disturbios generalizados. A principios de 1803, dirigió la atención hacia el último bastión de los ideólogos anticlericales, la clase de Ciencias Morales y Políticas del Instituto. El grupo fue disuelto y reemplazado por una clase de Historia y Literatura Antigua de tendencia conservadora, a cuyos miembros se les dio instrucciones para que evitaran «cualquier discusión histórica, religiosa o política».[32]

El restablecimiento de la esclavitud y el Concordato eran dos signos inequívocos de que la era de la Revolución estaba realmente llegando a su fin: ahora había un gobierno basado en principios muy diferentes a los de 1789. En marzo de 1802, Bonaparte utilizó al dócil Senado para llevar a cabo una purga del Tribunado y del Cuerpo Legislativo. Acabó con Benjamin Constant y otros ideólogos que inicialmente habían apoyado el golpe de brumario, pero que luego se habían convertido en críticos acérrimos de las tendencias autoritarias del primer cónsul. «La voluntad de la nación es que no se debe impedir que el gobierno haga el bien», le dijo Bonaparte a Cambacérès. Poco después de la celebración del Concordato, Bonaparte abandonó otra de las políticas distintivas de la Revolución al impulsar una ley que otorgaba una amnistía a la gran mayoría de los *émigrés* que habían huido de Francia durante la Revolución. La policía de París informó de animados debates sobre la medida en las calles y los cafés, pero Bonaparte estaba seguro de que el público la aprobaría «siempre que se respetara la venta de tierras nacionales».[33]

La paz de Amiens y el Concordato aumentaron la popularidad de Bonaparte, quien estaba ansioso por aprovechar la oportunidad para fortalecer sus ya enormes poderes. Según la Constitución de 1800, su nombramiento como primer cónsul era sólo por diez años, pero muchos de sus partidarios querían declararlo cónsul vitalicio. Bonaparte, preocupado por las apariencias, evitó hacer él mismo la solicitud, pero cuando los legisladores vacilaron en tomar la iniciativa, les pasó por encima y convocó otro plebiscito: la población podía decidir si debía ser primer cónsul vitalicio. Su fiel partidario Pierre-Louis Roederer argumentó que Bonaparte

merecía «un regalo digno de su devoción: el del tiempo necesario para asegurar la felicidad de Francia».[34] Los resultados de las elecciones se anunciaron a principios de agosto de 1802; daban a Bonaparte una victoria rotunda: 3.568.885 votantes dijeron que sí y 8.374 dijeron que no. En contraste con el referéndum de 1800, el recuento de votos en 1802 fue relativamente honesto y reflejaba un respaldo genuino al régimen.

Bonaparte subrayó además su determinación de romper con las ideas de la Revolución al crear la Legión de Honor, un premio que reconoce a quienes han prestado un servicio destacado al país y garantiza su lealtad al régimen. Los defensores argumentaron que la Legión no contradecía el dogma de la igualdad porque todos los ciudadanos varones podían ser miembros, lo que no conllevaba privilegios legales y no era hereditario. Sin embargo, para muchos antiguos revolucionarios, la Legión parecía un renacimiento de la práctica de la monarquía de otorgar títulos y condecoraciones en lugar de depender del amor desinteresado de los ciudadanos por su país. En el Consejo de Estado, un exdiputado de la Convención se opuso a esta entrega de «chucherías». Bonaparte replicó: «Es con chucherías con lo que se dirige a los hombres».[35] A pesar de la purga que se hizo a principios de año, hubo una vociferante oposición a la Legión de Honor en el Tribunado y 110 votos negativos en el Cuerpo Legislativo, el número más alto contra cualquiera de las medidas de Bonaparte. Sin embargo, como muchas de las innovaciones del Consulado, la Legión de Honor se convirtió en algo permanente de la vida francesa, y ha sobrevivido incluso durante los regímenes democráticos.

Los revolucionarios habían intentado remodelar la sociedad civil de acuerdo con sus ideas sobre la libertad y la igualdad; Bonaparte y sus partidarios querían inculcar ciertos valores, pero ahora tenían que asegurarse de que los principios de orden y respeto por la autoridad impregnaran todos los aspectos de la vida francesa. Su herramienta más poderosa para lograr sus objetivos fue el Código Civil unificado, que el Consejo de Estado elaboró en cientos de sesiones a partir de 1800, a menudo con la asistencia de Bonaparte. Finalmente se completó en 1804. El nuevo Code civil des Français (Código Civil de los franceses) mostró cómo

los conceptos clave de la Revolución podían interpretarse de manera que sirvieran para propósitos muy diferentes a los que los revolucionarios de 1789 tenían en mente. El nuevo conjunto de leyes reflejaba la determinación de los revolucionarios de hacer de las personas independientes (de género masculino) la unidad básica de la sociedad: todos los hombres adultos tenían ahora los mismos derechos legales. La definición de propiedad del código consolidó la abolición de la panoplia de derechos feudales, señoriales y comunales del antiguo régimen y erigió salvaguardias contra las limitaciones al individualismo económico propuestas por los radicales revolucionarios. Los redactores aceptaron la opinión de Jean-Baptiste Say, cuyo *Tratado de economía política*, destinado a moldear el pensamiento económico durante décadas, apareció en 1803. Say insistía en «la libertad que deben tener los hombres para disponer de sus personas y sus bienes; libertad sin la cual felicidad social y propiedad son palabras sin sentido».[36] Las disposiciones del código se formularon para favorecer a los patriarcas propietarios, que debían gobernar a sus familias y a sus empleados como Bonaparte gobernaba ahora Francia.

Mientras que la legislación civil de la Revolución, especialmente las leyes relativas a la familia, tendía a igualar los derechos de hombres y mujeres, el Código Civil otorgaba a los maridos autoridad sobre las esposas y al padre autoridad sobre los hijos. Los maridos tenían el control total de los bienes de la familia y las mujeres casadas sólo podían trabajar o realizar negocios con su permiso. La autoridad de los padres sobre los hijos se vio reforzada por una revisión de la ley igualitaria de la Revolución sobre la herencia, que les daba derecho a ceder una parte de la herencia familiar como quisieran, lo que significaba que podían privilegiar a los herederos favoritos. A los niños «naturales» y a las madres solteras se los privó de los derechos que les otorgaba la legislación revolucionaria. En aras de la protección de la propiedad familiar, se prohibieron las demandas de paternidad y esos niños no podían reclamar ninguna herencia, incluso aunque sus padres los reconocieran.

El matrimonio siguió siendo un contrato civil, pero ya no era un acuerdo entre iguales. El Código Civil decía que «el marido debe protección a su

esposa, la esposa debe obediencia a su marido», disposición que Jean-Étienne Portalis, portavoz del código, justificó con el argumento de que «la sociedad conyugal […] sólo puede existir si uno de los cónyuges está subordinado al otro».[37] Bonaparte, que ya estaba pensando en poner fin a su matrimonio sin hijos con Joséphine en aras de fundar una dinastía, se aseguró de que el divorcio siguiera siendo legal, aunque una mayoría del Consejo de Estado quería abolirlo. Según el Código Civil, el marido podía entablar un proceso de divorcio mucho más fácilmente que la esposa, que sólo podía iniciar una demanda en casos de extrema crueldad o si su cónyuge traía a otra mujer al hogar familiar. Se abolieron los «consejos de familia» igualitarios que había establecido la ley revolucionaria de 1792 y el número de divorcios se redujo drásticamente. Las mujeres que se casaban con extranjeros perdían la ciudadanía francesa.

Se excluyó a las mujeres de los debates del Consejo de Estado sobre su situación en virtud del nuevo Código Civil. Madame de Staël, en cuyo círculo de amigos había muchos que habían tomado parte en el golpe brumario, al principio esperaba que su salón se convirtiera en el centro intelectual del nuevo régimen, pero no tardó en darse cuenta de que el primer cónsul no la soportaba. «Aconsejadle que no se interponga en mi camino, no importa cuál sea, no importa adónde vaya, de lo contrario acabaré con ella», advirtió Bonaparte a un intermediario. La mayoría de las prominentes mujeres militantes de los años radicales de la Revolución ya habían muerto en ese momento, pero algunas voces nuevas todavía hablaban en nombre de su género. En 1801, en mitad de los debates sobre el Código Civil, Fanny Raoul escribió: «Por la misma razón por la que no quiero que las mujeres dominen, tampoco quiero que sean dominadas […]. Libertad e igualdad civil; eso es lo que les pido. ¿No hay un punto medio entre la autoridad soberana y la nulidad absoluta?». Aunque Raoul no llegó a exigir derechos políticos para las mujeres, como habían hecho los radicales de 1793, quería que se les permitiera emprender cualquier carrera profesional y que no se limitaran a ocupaciones manuales y servicio doméstico mal pagado.[38] Su protesta mostró que algunas mujeres aún recordaban los temas que se habían planteado sobre los derechos de las

mujeres durante la década revolucionaria, pero su panfleto no tuvo un impacto inmediato.

Además de inclinarse fuertemente del lado de la autoridad patriarcal, el Código Civil y otras leyes daban a los empleadores ventajas sobre sus trabajadores: en caso de disputas, por ejemplo, el testimonio del empleador se aceptaba automáticamente. Además, se restableció una ley prerrevolucionaria que requería que los trabajadores tuvieran un *livret* o pasaporte de trabajo. Los trabajadores no podían dejar un trabajo a menos que tuvieran permiso de su empleador. De este modo, los empleadores tenían un arma poderosa sobre su fuerza laboral; se esperaba que ayudaran al gobierno a mantener bajo control a las clases bajas urbanas. Los campesinos, que todavía constituían la abrumadora mayoría de la población, mantuvieron una mayor independencia bajo el nuevo código legal. Las disposiciones sobre la propiedad salvaguardaban las posesiones de tierras que muchos de ellos habían adquirido o ampliado a medida que se vendían las propiedades de la Iglesia y de los emigrantes, y ya no estaban en deuda con los señores. Thomas Holcroft, uno de los muchos británicos que se apresuraron a viajar después de que la paz de Amiens pusiera fin a la ruptura entre los dos países, escribió que «aunque todavía hay muchas casitas miserables, los campesinos en general están mejor vestidos y parecen estar, si no de buen humor, al menos más tranquilos y con mejor actitud».[39]

El Consulado eliminó las elecciones de los alcaldes de las aldeas, pero a cambio proporcionó un sistema de administración local consistente y relativamente eficiente que los campesinos aceptaron en gran medida. Bonaparte esperaba que la sociedad rural estuviera dominada por ricos terratenientes, las «masas de granito» con las que contaba para mantener unida a una sociedad que temía que de otro modo no fuera más que «granos de arena». Sin embargo, a diferencia de los señores del antiguo régimen, los terratenientes ricos ya no tenían autoridad legal sobre el resto de la población.[40] A pesar de su tendencia machista y autoritaria, el Código Civil fue quizá el logro más exitoso del Consulado de Bonaparte. Comparado con las tortuosas complejidades del derecho civil del antiguo régimen, el nuevo

código, rebautizado como Code Napoléon (Código Napoleónico) en 1807, era claro y coherente. Sigue siendo la base de la sociedad francesa actual, con considerables modificaciones en lo que respecta a sus prejuicios contra las mujeres y los trabajadores. Introducido en territorios bajo control francés durante el periodo napoleónico, también sigue siendo el marco legal básico en países vecinos como Bélgica, Holanda, Alemania occidental e Italia, así como en la Luisiana estadounidense.

Cuando se completó el Código Civil en 1804, la evolución del régimen de una república autoritaria a una nueva forma de monarquía estaba casi terminada. La decisión de Bonaparte de dar los pasos finales en esa dirección se aceleró con la reanudación de la guerra contra Gran Bretaña en mayo de 1803. El pretexto aparente para reiniciar el conflicto fue la negativa británica a retirar sus fuerzas de Malta, como había prometido en el Tratado de Amiens. Lo cierto era que ninguna de las partes se había comprometido realmente con los términos del acuerdo. Los fabricantes británicos se sintieron decepcionados cuando descubrieron que Bonaparte no tenía intención de abrir el mercado francés a sus productos; sus consejeros recordaron lo impopular que había sido el tratado de libre comercio de Calonne en 1786, y tenían la intención de hacer de Europa una esfera protegida para las propias industrias de Francia. Por su parte, Bonaparte se quejaba de que los británicos se negaban a extender el reconocimiento oficial a las repúblicas hermanas que Francia había restablecido en Italia y Suiza después del Tratado de Lunéville con Austria. También se opuso a la protección que los británicos continuaron brindando a los obispos *émigrés* que se negaron a aceptar el Concordato, así como al conde de Artois, el hermano menor de Luis XVIII y a otros exiliados realistas. Estaba indignado por los ataques virulentos contra él en la prensa británica y se negó a aceptar que la tradicional libertad de prensa británica hiciera imposible que el gobierno los impidiera. El embajador británico dijo a su gobierno: «Si el primer cónsul nos declara la guerra, estoy convencido de que será más por la irritación que le causan nuestros diarios que por la disputa en sí».[41]

La reanudación de las hostilidades llevó al gobierno británico a dar luz verde a un nuevo complot de corte monárquico contra la vida de Bonaparte. El conspirador chuan, Georges Cadoudal, que había ayudado a organizar intentos anteriores, se unió al general Jean-Charles Pichegru, que se había exiliado después de fructidor, para reclutar una red de agentes; su plan era capturar al primer cónsul cuando estuviera de camino a la finca de su esposa Joséphine en Malmaison. Con Bonaparte fuera de juego, el conde de Artois llegaría a Francia y anunciaría la restauración de la monarquía. Los conspiradores se pusieron en contacto con el general Jean-Victor Moreau, quien seguía siendo una figura popular en el ejército y era bien conocido su resentimiento por el papel predominante de Bonaparte. La policía francesa se enteró de la conspiración, pero tuvo dificultades para localizar a los principales participantes, especialmente a Cadoudal. Detuvieron a Moreau, pero los posibles asesinos seguían prófugos. En febrero de 1804, Bonaparte vivía en un estado de ansiedad permanente por los rumores sobre la inminencia de un ataque. «¡Vaya maestro, que lleva cinco meses sin poder dormir más de dos horas seguidas!», escribió un espía monárquico.[42] El 28 de febrero de 1804, se declaró el estado de sitio en París.

Finalmente, a principios de marzo, detuvieron a Pichegru y Cadoudal en París. Bonaparte decidió que no bastaba con castigar a los conspiradores que habían planeado matarle: quería devolver el golpe a la familia Borbón. Sospechaba que el duque de Enghien, hijo del príncipe de Condé, exiliado en el estado alemán de Baden, había estado involucrado en el complot. El 15 de marzo de 1804, los soldados franceses, violando la neutralidad de Baden, organizaron una redada y le capturaron. Le llevaron a París, donde un tribunal militar, convocado en medio de la noche, le condenó a muerte, aunque no había pruebas de que supiera nada sobre el complot de asesinato. Más tarde, el ministro de Policía Fouché afirmó haber dicho: «Es peor que un crimen, es un error». Muchos monárquicos que habían aceptado el gobierno de Bonaparte condenaron este golpe directo contra la familia de los Borbones. Desde el punto de vista de Bonaparte, la ejecución fue una cuestión de Estado, una *raison d'État*. «Era necesario mostrar a los

Borbones, al gabinete de Londres, a todas las cortes de Europa, que esto no es un juego de niños», le dijo a un senador.[43]

Para Bonaparte, la ejecución del duque de Enghien fue también un paso necesario para justificar su decisión de convertir el Consulado en un imperio hereditario. En la historia de la Revolución que escribió Madame de Staël después de la caída de Bonaparte, descifró la lógica de sus acciones. «Pensó que era necesario, por un lado, tranquilizar a los revolucionarios asegurando que los Borbones no volverían y, por otro, demostrar a los realistas que, al apoyarlo, estaban rompiendo definitivamente con la antigua dinastía.[44] Espoleada por Bonaparte, comenzó una campaña para instarle a fundar una nueva dinastía, un paso que aseguraría la supervivencia del régimen incluso si le sucedía algo. El Senado aprobó una resolución en la que le pedía que considerara «qué pasaría con el barco de la República si tuviera la desgracia de perder a su capitán […]. Nos ha salvado usted del caos del pasado, nos ha permitido disfrutar de los beneficios en el presente, denos garantías para el futuro».[45] Sólo unos pocos legisladores, entre ellos Carnot, el exorganizador «de la victoria», ahora en el Tribunado, y el exobispo constitucional Grégoire, en el Senado, denegaron su aprobación. El 18 de mayo de 1804, el Senado votó que se declarara «emperador de los franceses» a Bonaparte, quien rápidamente siguió el precedente de otras familias reales al llamarse a sí mismo «Napoleón» en lugar de usar su apellido. Condenado a muerte junto con diecinueve de sus cómplices, el conspirador Cadoudal afirmó: «Queríamos instaurar a un rey, instauramos a un emperador». Igual que se hizo en 1800 y 1802, se celebró un plebiscito para legitimar el cambio constitucional. La tasa de aprobación fue considerable –3.572.329 votantes a favor y sólo 2.569 en contra–, pero más de la mitad de los votantes no participaron.

El 2 de diciembre de 1804, una gran ceremonia de coronación en Notre Dame marcó el fin de la República que había nacido del movimiento revolucionario doce años atrás. Un reacio Pío VII recibió presiones para que viniera de Roma a bendecir la ceremonia. Sin embargo, a fin de dejar claro el papel subordinado de la Iglesia, Napoleón se coronó a sí mismo, en lugar

de seguir el precedente y dejar que lo hiciera el Papa. El gesto fue un tanto incómodo: el artista Jacques-Louis David, encargado de realizar una gran pintura de la ceremonia, eligió en cambio destacar el momento en que Napoleón coronó a Joséphine como emperatriz. Las calles de París se llenaron de gente, pero un observador escribió más tarde que «mostraban poco entusiasmo». No fue el único en decirlo. Un espectador comentó que los presentes no expresaron el «ímpetu que hubiera querido un soberano deseoso de recibir el testimonio de amor de sus súbditos».[46]

Uno de los primeros actos oficiales del emperador fue abandonar el calendario republicano y su mensaje implícito de que la Revolución francesa había marcado una nueva era en la historia del mundo. Napoleón juró «mantener la integridad del territorio de la República; respetar y hacer respetar las leyes del Concordato y la libertad de culto, libertad política y civil, y la venta de tierras nacionalizadas; no recaudar impuestos excepto en virtud de la ley; mantener la institución de la Legión de Honor; gobernar pensando sólo en los intereses, el bienestar y la gloria del pueblo francés».[47] Aparte de la vaga referencia a la libertad política y civil, los únicos resultados de la Revolución que él prometió defender explícitamente fueron la libertad religiosa y la seguridad para compradores de propiedades de la Iglesia y los *émigrés*. Luis XVI podría haber suscrito la mayor parte del juramento: él también se había sentido obligado a defender el territorio francés, a imponer sólo impuestos legales y a velar por el bienestar y la gloria de sus súbditos. Cinco años después del golpe de Estado del 18 de brumario, Francia parecía haber vuelto al punto de partida. Los propagandistas napoleónicos ya habían comenzado a considerarle el fundador de una cuarta dinastía, siguiendo los pasos de los merovingios, los carolingios y los capetos.

Aunque la instauración del Imperio napoleónico marcó un alejamiento de muchas de las ideas fundamentales de la Revolución, no fue un simple regreso al pasado. Napoleón abolió la celebración del aniversario de la toma de la Bastilla, pero el recuerdo de los acontecimientos de la Revolución permaneció en la memoria de la gente. Por muy manipulado que estuviera, el plebiscito que se celebró para respaldar el cambio fue una concesión al

principio de soberanía nacional: a diferencia de Luis XVI, Napoleón afirmó que gobernaba por la voluntad del pueblo francés, no «por la gracia de Dios». En unos años, comenzaría a establecer una nueva nobleza, formada principalmente por sus principales generales y funcionarios civiles, pero sus miembros no disfrutaban de los privilegios legales que habían diferenciado a la vieja aristocracia del resto de la población. Los miembros del clero eran muy conscientes de que ya no ocupaban el puesto especial que tenían antes de 1789. En pocos años, las relaciones entre el emperador y el Papa se deterioraron hasta el punto de que Napoleón hizo detener a Pío VII y le tuvo prisionero. El ejército del antiguo régimen había ido a la batalla bajo la bandera blanca de la dinastía borbónica; el del Imperio napoleónico luchó y murió por la bandera tricolor creada por los revolucionarios.

Aunque el Imperio napoleónico se diferenciaba en aspectos importantes de la monarquía absoluta derrocada en 1789, sus principios estaban igual de lejos de los articulados por los revolucionarios de la década de 1790. La libertad se reducía ahora al derecho de los hombres adultos a llevar sus asuntos privados como quisieran; se rechazó con firmeza la idea radical de que las mujeres también podían merecer esa libertad y a los negros de las colonias francesas se los privó de la libertad que habían conseguido en 1794. La igualdad también se definió en términos estrictos que reforzaban las estructuras jerárquicas de autoridad en la familia y en el lugar de trabajo. Se abandonó la idea de que la ciudadanía implicaba el derecho a tener voz en el gobierno y en la elaboración de leyes, al igual que la noción de que una constitución libre requería un equilibrio de poderes. La libertad de expresión se redujo drásticamente y los críticos como Madame de Staël se vieron obligados a marchar del país. La exaltación de los triunfos militares de Napoleón continuó una tradición arraigada en el nacionalismo agresivo de las guerras revolucionarias y la población toleró el alto coste humano de sus guerras, aunque el impacto de ese coste se diluyó en Francia a medida que su ejército reclutó más tropas de sus territorios de habla no francesa.

Por encima de todo, Napoleón rompió con la Revolución al imponer un sistema de gobierno unipersonal en Francia. Su poder no estaba restringido por las instituciones tradicionales que habían limitado la autoridad de los

monarcas absolutos del antiguo régimen, y sólo prestó unas pocas palabras a la noción revolucionaria de que el poder debería basarse en última instancia en el consentimiento del pueblo. Comparado con otras dictaduras, el régimen napoleónico fue bastante suave: el número de prisioneros políticos nunca fue muy grande y la gente corriente podía vivir sin el temor constante a ser perseguida. En comparación con el Gobierno del Terror o las dictaduras de Stalin y Hitler en el siglo XX, las acciones de Napoleón fueron mucho más predecibles. Aunque el emperador era capaz de ser duro cuando lo creía necesario, como demostraron las ejecuciones de los prisioneros turcos en Jaffa y del duque de Enghien, no era un sádico.

Durante gran parte de su reinado, Napoleón fue realmente popular: hay pocas dudas de que la mayoría de la población prefería su gobierno al tumulto de la Revolución. Jacobinos tan prominentes como los exmiembros del Comité de Seguridad Pública Carnot y Barère se acomodaron a su gobierno, igual que los monárquicos que se habían opuesto a la Revolución. Jacques Ménétra, ya retirado de su oficio, tuvo libertad para escribir sus memorias; recordaba, en su estilo falto de puntuación, «el bien y el mal que la Revolución ha traído todos los asaltos los días las noches los castigos y la suerte de nuestros desgraciados amigos que perecieron en la época del Terror cuando los hombres buenos temían por sus vidas».[48] En 1810, decidido a tener un heredero varón para perpetuar su dinastía, Napoleón se divorció de Joséphine. Igual que Luis XVI, se casó con una princesa Habsburgo y la unión demostró que los monarcas de Europa estaban preparados, aunque de mala gana, para aceptar su legitimidad. El defecto fatal del régimen de Napoleón fue su dependencia del éxito militar. Su incapacidad para refrenar su ambición, ya evidente en la catastrófica expedición a Saint-Domingue bajo el Consulado, lo llevó a otras desastrosas aventuras, primero en España y luego en Rusia. Sin esas derrotas, no sería muy desacertado pensar que su régimen se hubiera consolidado.

Cuando Napoleón regresó del exilio que había aceptado tras su derrota en 1814 y sus dramáticos «Cien Días», intentó unir a la población reviviendo el espíritu de 1789. Animó a las unidades de voluntarios,

formadas por hombres llamados *fédérés*, como los soldados de 1792, y pidió al filósofo político liberal Benjamin Constant que redactara una «ley adicional» a la Constitución imperial. Le dijo: «Tráeme tus ideas: el debate público, las elecciones libres, los ministros con responsabilidad real, la libertad de prensa».[49] La apelación de Napoleón a los principios de la Revolución no fue suficiente para vencer a la coalición extranjera que se alineó contra él, pero era una señal de que esos principios estaban ahora profundamente arraigados en la mente de gran parte de la población francesa. Incluso Napoleón se dio cuenta de que los ideales de la Revolución perduraban.

Epílogo

Napoleón fue el primero de muchos líderes que pensaron que podían pasar la página de la Revolución francesa. Tras su derrota, las potencias europeas restauraron en Francia la monarquía borbónica, con el hermano de Luis XVI, que se llamaba Luis XVIII desde la muerte de su sobrino en 1795. Por mucho que a Luis XVIII le hubiera gustado volver al antiguo régimen, intuía que sólo podría gobernar el país si elaboraba una constitución escrita, compartía el poder con un Parlamento elegido y permitía la libertad de religión y de expresión. La abolición de las provincias y los parlamentos, la unificación de las leyes del país y el fin de los privilegios aristocráticos estaban tan arraigados que no se podían revocar. El decidido intento de recuperar el catolicismo en el país provocó un renacimiento de las ideas de la Ilustración que contribuirían a la Revolución de 1830, cuando los parisinos de a pie salieron a las calles, como habían hecho sus antepasados en la década de 1790, para derrocar a los Borbones. Los supervivientes de la Revolución, como Lafayette y Talleyrand, ayudaron a instalar al hijo del duque de Orleans de la época revolucionaria como un «rey ciudadano» que trajo de vuelta la bandera tricolor de la Revolución. En 1848, otra revolución acabó definitivamente con la monarquía en Francia y creó una segunda república basada en el sufragio universal masculino. El sobrino de Napoleón imitó a su tío, derrocó la República en 1851 y se proclamó emperador con el nombre de Napoleón III, pero no pudo detener el progreso de la democracia. Cuando la Alemania recién unificada de Bismarck derrotó a este Segundo Imperio en 1870, Francia volvió al republicanismo, que ha sido la forma de gobierno del país desde entonces, salvo el periodo de

ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. El 14 de julio –día de la Bastilla– se convirtió en la fiesta nacional del país, y «La Marsellesa» se estableció firmemente como su himno nacional.

En 1886, Francia presentó una colosal estatua de la Libertad al pueblo americano como símbolo del compromiso compartido de los dos países con los ideales que habían inspirado sus dos revoluciones cien años antes. Para entonces, esos ideales se habían extendido a muchas otras partes del mundo, como las repúblicas de la América de habla hispana. Después de la Primera Guerra Mundial, los imperios que habían luchado contra la Francia revolucionaria –Austria, Alemania, Rusia, Turquía– se desintegraron y vinieron a reemplazarlos unos estados-nación con constituciones democráticas. Este aparente triunfo de las ideas de 1789 fue efímero e incompleto: los regímenes comunistas y fascistas destruyeron la libertad en muchos países, e incluso democracias como Gran Bretaña y Francia se negaron a extenderla a sus colonias de ultramar. Sin embargo, una guerra mundial aún más destructiva estimuló la reafirmación de las tradiciones democráticas y republicanas arraigadas en la Revolución francesa. La Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada en 1948, tres años después de la derrota de Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, se basó en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Al afirmar explícitamente la igualdad racial y los derechos de la mujer e incorporar los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación, la seguridad social y la atención sanitaria, los redactores de la Declaración Universal reconocieron la importancia de las ideas radicales expresadas por primera vez durante el movimiento francés.

El año 1989 estuvo marcado por dos acontecimientos importantes: el bicentenario de la Revolución francesa y el derrumbe de las dictaduras comunistas de Europa oriental. Un politólogo estadounidense, Francis Fukuyama, escribió un libro que fue un éxito de ventas, *The End of History (El fin de la historia)*, en el que afirmaba que los principios de la libertad democrática y la libre empresa capitalista –dos poderosas aspiraciones de los revolucionarios franceses– habían logrado finalmente la hegemonía

mundial. Al igual que la evaluación optimista de Thomas Paine sobre la Revolución francesa en 1792, la conclusión de Fukuyama fue prematura. En los tres decenios transcurridos desde la fastuosa celebración del bicentenario en París en 1989 y la caída del Muro de Berlín, el mundo ha sido testigo del resurgimiento de regímenes autoritarios incluso en países que parecían haber acogido para siempre la democracia. Ha habido muchos movimientos religiosos que han estado en contra de la secularización de la vida pública asociada a la Revolución francesa. En muchos países no occidentales, el orden mundial liberal cuyas raíces se remontan a las ideas de 1789 se sigue criticando con el argumento de que es una fachada para mantener la hegemonía europea y americana, y todavía resuena el llamamiento de Toussaint Louverture en favor de «otra libertad» en lugar de la que se esbozaba en la Declaración de los Derechos del Hombre.

En el momento del bicentenario de la Revolución francesa en julio de 1989, nadie sabía que el bloque comunista no sobreviviría el año. Las críticas a la Revolución francesa en ese momento procedían principalmente de quienes destacaron las formas en que el movimiento, especialmente en su fase radical durante el Terror, prefiguró la Revolución bolchevique de 1917 en Rusia. Tras el colapso del comunismo de estilo soviético, es más fácil ver las diferencias entre las dos revoluciones. Los revolucionarios franceses nunca abandonaron su fe en la libertad individual y en la economía de mercado, incluso cuando las crisis los llevaron a suspender esos principios. Después de la caída de Robespierre, los republicanos franceses «salieron del Terror». Lo hicieron con torpeza y a costa de un considerable sufrimiento popular, pero es loable, teniendo en cuenta las pasiones que la Revolución había desatado, incluso que fueran capaces de salir. En cambio, en Rusia, después de 1917, la dictadura se convirtió en un método permanente del gobierno.

Si bien la Revolución francesa no merece ser manchada con la misma brocha que la Revolución rusa, su legado sigue siendo preocupante en varios sentidos. La facilidad con la que Sieyès y Napoleón socavaron las instituciones creadas por los revolucionarios es un recordatorio de que los ideales como la libertad y la igualdad no prevalecen necesariamente. La

historia de la Revolución muestra lo difícil que puede ser alcanzar un consenso sobre lo que significan la libertad y la igualdad, y cómo los esfuerzos por promover esos valores pueden despertar la resistencia de grupos que van desde los creyentes religiosos hasta los propietarios de bienes. El gran drama de la Revolución francesa nos permite apreciar el poder de las creencias expresadas en el Juramento del Juego de Pelota en 1789, la Fiesta de la Federación en 1790 y los vítores que saludaron la abolición de la esclavitud en 1794. Sin embargo, esas mismas emociones también produjeron el impulso de la guerra en la primavera de 1792, la reacción contra los derechos de la mujer en 1793, los excesos del Terror y el vaciamiento de la democracia después de termidor en 1794. La Revolución francesa fue el laboratorio en el que se probaron por primera vez todas las posibilidades de la política moderna, tanto las positivas como las negativas.

Mientras me esforzaba por escribir este libro, por dar vida a los actores y a las ideas de la Revolución francesa para los lectores de hoy, he aprendido mucho sobre aspectos de este interminable y complicado evento que son nuevos para mí, incluso después de pasar más de cuarenta años estudiando y dando clases sobre el tema. Una historia que me ha intrigado particularmente es la de Jean-Marie Goujon, el «mártir de pradial» cuyo nombre ha aparecido a menudo en estas páginas, y su amigo, Pierre-François Tissot, que le sobrevivió más de medio siglo. Sus cartas y escritos me han ayudado a comprender el entusiasmo que impulsó la Revolución. Como apóstol de la libertad y la igualdad, Goujon trató de llegar a la gente común e inspirarla. En los años críticos de la Revolución, fue más allá de la predicación y se dedicó a la urgente cuestión de asegurar que la población tuviera comida suficiente. Tuvo la suerte de no participar en la Convención Nacional hasta después de las purgas sangrientas de los girondinos, los hebertistas y los indulgentes, y se ausentó de París el 9 de termidor del año II (27 de julio de 1794), lo que le libró de tener que tomar partido a favor o en contra de Robespierre. Hay muchas razones para creer que, como argumentaron él y sus compañeros acusados en su juicio después del levantamiento de pradial, él apoyaba algunas de las exigencias de la

multitud porque deseaba, sinceramente, evitar el derramamiento de sangre y preservar parte de la autoridad de la Convención.

Víctima de las pasiones de la Revolución, Goujon murió con sólo veintinueve años. Contrastar su vida con la de su amigo Tissot, que hizo tanto por preservar la memoria de Goujon, es un ejercicio que invita a la reflexión. Los dos se dejaron llevar por la emoción en la Fiesta de la Federación en 1790. Al mismo tiempo que Goujon se casaba en 1793 en una ceremonia republicana, Tissot se casaba con la hermana de su amigo. A Tissot le faltaba el carisma y la capacidad oratoria de Goujon, pero a medida que despegaba la carrera política de Goujon, pudo emplear a Tissot en varios puestos administrativos. En el fatídico día 1 de pradial del año III (20 de mayo de 1795), mientras Goujon estaba en su puesto en la Convención, Tissot se encontraba en la galería con los manifestantes, donde logró evitar que le detuvieran. Durante algunos años después de la ejecución de Goujon, Tissot siguió involucrado con la izquierda radical. Participó en la conspiración de Babeuf y, bajo el Consulado, estaba en la lista de antiguos montañeses cuya deportación estaba prevista después del intento de asesinato de Napoleón en diciembre de 1800. Algunos de sus amigos convencieron al primer cónsul para que le perdonara.

Después de 1800, Tissot abandonó su radicalismo. Para mantener no sólo a su propia familia, sino también a la viuda de Goujon y a sus hermanos menores, se puso a trabajar. Abrió una fábrica de faroles en el *faubourg* Saint-Antoine de París. Como fabricante, hizo su pequeña contribución al progreso tecnológico, un movimiento que permitiría al mundo escapar de la pobreza que había hecho que los ideales de la Revolución francesa fueran tan difíciles de realizar en la década de 1790. Tissot también se embarcó en una carrera literaria y consiguió tener cierta fama por sus traducciones de poesía latina. Gradualmente, se asentó en el régimen de Napoleón. Fue recompensado con un puesto de profesor en el Colegio de Francia en 1813, poco antes de que cayera el Imperio. Bajo la Restauración borbónica, participó activamente en la oposición liberal moderada y, cuando ese régimen cayó en 1830, alcanzó la cima de la gloria al ser elegido para la Academia Francesa. Autor de una de las primeras

historias de la Revolución francesa, Tissot vivió lo suficiente para convertirse en uno de los pocos que habían participado en el movimiento de 1789 y que presenció la proclamación de la Segunda República francesa en 1848.

Dos jóvenes se apoderaron del espíritu de libertad en 1789, dos jóvenes que siguieron el cambio del movimiento revolucionario hacia posiciones cada vez más radicales hasta 1794, dos hombres que mantuvieron la fe republicana incluso después del derrocamiento de Robespierre, y cuyos destinos divergían sólo porque uno habló en la Convención durante el levantamiento de pradial y el otro escapó sin que le descubrieran. ¿Cuál de los dos resume mejor el verdadero significado de la Revolución? ¿Goujon, que sacrificó su vida con tal de no abandonar los ideales que había hecho suyos? ¿O Tissot, que finalmente se acomodó a las sobrias realidades de la vida después de 1800? Sin idealistas como Goujon, la Revolución nunca se habría grabado en la mente de sus contemporáneos y de la posteridad; sin pragmáticos como Tissot, sus principios podrían haber sido completamente rechazados. A través de las historias de Goujon y Tissot, quizá podamos llegar a comprender las complejidades del impacto que tuvo la Revolución en las vidas de quienes la vivieron en primera persona y las formas en que su legado se perpetuó.

Agradecimientos

Este libro es el resultado de cincuenta años de estudio y enseñanza de la Revolución francesa. Sería imposible mencionar a todos los que me han ayudado a comprender el tema. El filósofo marxista Herbert Marcuse, con quien hice un curso de licenciatura en filosofía social y política en el año revolucionario de 1968, me mostró por primera vez que la Revolución fue algo más que una simple demostración de la justicia que hay en la libertad y la igualdad. Me abrió los ojos al hacerme leer las críticas conservadoras de Edmund Burke, Joseph de Maistre y Louis de Bonald. Una sucesión de distinguidos historiadores franceses, desde Jacques Godechot, François Furet y Daniel Roche durante mis años de estudios de posgrado hasta académicos de mi propia generación, como Jean-Clément Martin, Marcel Dorigny y Pierre Serna, me dieron la bienvenida a sus seminarios y me enseñaron las numerosas formas conflictivas en que se puede interpretar el acontecimiento más polémico de la historia de su país. Mi buen amigo Pierre Rétat y yo compartíamos una pasión común por el estudio de la prensa de la época, me entristece que su reciente fallecimiento le impida ver este libro.

He tenido la suerte de formar parte de un grupo extraordinariamente talentoso de historiadores anglófonos especialistas en el tema, así como de especialistas de Alemania, Italia, Israel y otros países, muchos de los cuales se han convertido en amigos. No es posible nombrar a todos aquellos de cuyos variados conocimientos me he beneficiado, pero algunos merecen una mención especial. En el decenio de 1970, aprendí lecciones vitales sobre la investigación de compañeros de estudios de posgrado, como

Michael Sibalis, que me llevó en audaces expediciones a las salas traseras de los Archivos Nacionales Franceses en busca de índices que estaban oficialmente fuera del alcance de los lectores. Las perspectivas únicas de Patrice Higonnet sobre el asunto me han desafiado a refinar mis propios puntos de vista desde mis días de estudiante en Harvard. Lynn Hunt, que comenzaba su larga carrera en Berkeley cuando yo estaba terminando mi tesis allí, ha sido una inspiración a lo largo de mi carrera, y su apoyo fue crucial para que este proyecto despegara. Keith Baker fue una fuente inestimable de apoyo en la primera fase de mi carrera. La erudición ejemplar y la integridad intelectual de Timothy Tackett se reflejan, espero, en estas páginas. Quiero dar las gracias especialmente a Jack Censer, con quien he discutido sobre la Revolución francesa durante casi medio siglo. Leyó el manuscrito cuidadosamente e hizo muchas sugerencias valiosas. Mi agente Lisa Adams fue una guía inmejorable para llamar a la puerta de las editoriales, y los editores de Basic Books Dan Gerstle, Brandon Proia y Lara Heimert han sido excelentes compañeros con quienes llevar a cabo el proyecto. Por mucho que deba a mis compañeros, la interpretación de la Revolución que se ofrece aquí es, para bien o para mal, mía. A menos que se indique lo contrario en las notas, también lo son las traducciones de las fuentes francesas.

Comencé el trabajo que tendría como resultado este libro durante un año (2012- 2013), que pasé en el Centro Nacional de Humanidades en Durham, Carolina del Norte, y pude llevarlo a buen puerto gracias, en gran parte, a una ayuda del National Endowment for the Humanities Public Scholar Program (Programa de Becas Públicas de la Fundación Nacional para las Humanidades) en 2017. Otras instituciones que han apoyado mi investigación sobre la Revolución francesa a lo largo de los años son la Biblioteca Newberry, la Fundación John Simon Guggenheim, la Fundación Fulbright, el Institute of Advanced Studies, la Biblioteca John Carter Brown de la Universidad Brown, el American Council of Learned Societies, la American Philosophical Society, el Social Science Research Council, el Consejo de Estudios Europeos y la Universidad de Kentucky. Como todos los historiadores de la Revolución francesa, estoy en deuda con

innumerables bibliotecarios y archiveros, en particular con el personal de la Biblioteca Nacional de Francia, los Archivos Nacionales, la Biblioteca Histórica de la Ciudad de París, la Biblioteca Newberry, la Biblioteca John Carter Brown, la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, las Bibliotecas de la Universidad de California y la Biblioteca W. T. Young de la Universidad de Kentucky. Trabajar en este proyecto me ha dejado asombrado por la riqueza de los recursos digitalizados a los que hay acceso ahora para estudiar esta época; por eso me parece apropiado agradecer también al personal invisible del proyecto Gallica de la Bibliothèque Nationale, el Archivo de Internet, Google Books y el Hathi Trust, entre otros.

En 2005, cuando murió mi padre Richard H. Popkin, historiador de la filosofía, heredé las cartas que escribió a mi abuela durante mi infancia. En una que escribió durante mi primera estancia en Francia en 1953, cuando yo tenía cuatro años, cuenta cómo intentó satisfacer mi curiosidad sobre lo que le ocurre a la gente después de morir, llevándome a ver la tumba de Napoleón en la iglesia de los Inválidos de París. Tanto si esa experiencia despertó inconscientemente mi interés por la época de la Revolución francesa como si no, lo cierto es que le debo gran parte de mi pasión por la historia y la erudición. Mi madre, Juliet Popkin, no era una autora publicada, pero amaba los libros y siempre me animó a perfeccionar mi escritura. Durante dos décadas, dirigió una pequeña agencia literaria independiente y nada le habría gustado más que ayudarme con la promoción de este proyecto. La pasión de mis padres por los libros se debe en gran medida al ejemplo de la madre de mi padre, Zelda Popkin, autora de trece novelas y una autobiografía. Su apartamento de Manhattan, lleno de libros, era un verdadero santuario de la literatura. No he imitado su rutina de escritura, que consistía en sentarse delante de su máquina de escribir a las nueve de la mañana, trabajar sin parar hasta la una de la tarde, y luego servirse un doble de whisky, encender uno más de sus innumerables cigarrillos y relajarse el resto del día, pero no he dejado de pensar en ella y

en mis padres, mientras trabajaba en esta obra, que está dedicada a mis tres antepasados amantes de los libros.

Notas

PREFACIO

1. *The Kentucky Almanac, for the Year of the Lord 1794* (Lexington, 1793).

2. Carta, 31 de marzo de 1776, archivo familiar de la familia Adams (versión electrónica), Massachusetts Historical Society.

3. *Annales patriotiques et littéraires de la France*, 8 de junio de 1792 (*Annales patriotiques* de ahora en adelante).

4. Paul Butel, *Histoire des Antilles françaises* (París: Perrin, 2007), 150-151; Pierre Bardin, «La population noire dans le Paris du XVIIIe siècle», http://www.ghccaraibe.org/articles/2015-art20.pdf.

5. Saint-Just, discurso del 8 ventoso, II, en Charles Vellay, ed., *Oeuvres complètes de Saint-Just*, 2 vols. (París: Charpentier et Fasquelle, 1908), 2:238. Diversas páginas web ofrecen herramientas para convertir las fechas del calendario revolucionario francés al calendario gregoriano estándar. Véanse, por ejemplo, Napoléon & Empire, www.napoleon-empire.com, y French Revolutionary Calendar, www.windhorst.com/calendar.

CAPÍTULO 1: DOS VIDAS FRANCESAS EN EL ANTIGUO RÉGIMEN

1. Jacques-Louis Ménétra, *Journal of My Life*, ed. Daniel Roche, trad. Arthur Goldhammer (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 124-125.

2. Luis XIV, *Mémoires de Louis XIV pour l'instruction du Dauphin* (París, 1860), 250 [*Memorias del Rey Sol*, Sevilla, Renacimiento, 2018. Trad. Pedro López Ferret].

3. Ménétra, *Journal*, 18.

4. Ibid., 24.

5. Ibid., 22.

6. Ibid., 21-22.

7. Jean-Louis Soulavie, *Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI*, 6 vols. (París: Treuttel et Würtz, 1801), 2:46-47.

8. Madame Campan, *Mémoires secrets sur la vie privée de Marie-Antoinette*, 3 vols. (París: Baudouin frères, 1823), 1:53 [*Memorias sobre la vida de María Antonieta*, Barcelona, Surco, 1943.

Trad. María Luz Morales]; Ménétra, *Journal*, 176.

9. Citas en Derek Beales, *Joseph II*, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), 1:374; Alfred d'Arneth, ed., *Correspondance secrète entre Marie Thérèse et le Cte de Mercy d'Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et Marie-Antoinette*, 3 vols. (París: Firmin Didot, 1874-1875), 2:88, 2:10, 1:189.

10. Pierrette Girault de Coursac, *L'éducation d'un roi: Louis XVI* (París: Gallimard, 1972), 172; *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours* (Londres: John Adamson, 1777-1789), 28:166 (8 de marzo de 1785).

11. Ménétra, *Journal*, 26, 276.

12. Madame Roland [Manon Phlipon], *Mémoires de Madame Roland*, ed. Paul de Roux (París: Mercure de France, 1966), 218 [*Memorias privadas*, Madrid, Siruela, 2008. Trad. Ángeles Caso].

13. Cita en John Lough, *France on the Eve of Revolution: British Travellers' Observations, 1763-1788* (Chicago: Dorsey Press, 1987), 62; Ménétra, *Journal*, 45.

14. Ménétra, *Journal*, 92-93, 73.

15. Philippe Girard, *Toussaint Louverture: A Revolutionary Life* (Nueva York: Basic Books, 2016), 53-54.

16. Citas en Steven Laurence Kaplan, *Provisioning Paris: Merchants and Millers in the Grain and Flour Trade During the Eighteenth Century* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1984), 2.

17. Louis-Sébastien Mercier, *Panorama of Paris*, ed. Jeremy D. Popkin (University Park: Penn State University Press, 1999), 31.

18. Ménétra, *Journal*, 167, 173.

19. Ibid., 177, 174.

20. Ibid., 182, 180.

21. Campan, *Mémoires*, 1:201-202.

22. Basado en documentos desconocidos hasta ahora, Evelyn Farr, *I Love You Madly: Marie Antoinette and Count Fersen* (Londres: Peter Owen, 2016); argumenta, de forma muy convincente, que el lío amoroso del que otros estudiosos dudaban puede ser real.

CAPÍTULO 2: LA MONARQUÍA, LOS *PHILOSOPHES* Y EL PÚBLICO

1. Luis XVI, *Réflexions sur mes entretiens avec M. le comte de Vauguyon* (París: J. P. Aillaud, 1851), 86, 88; Luis XV, declaración al Parlamento de París, 3 de marzo de 1766 (traducido al inglés por Popkin).

2. Luis XVI, *Réflexions*, 89.

3. Ibid., 212.

4. Arthur Young, citado en John Lough, *France on the Eve of Revolution* (Chicago: Dorsey Press, 1987), 10.

5. Denis Diderot, 26 de septiembre de 1762, en Peter France, ed., *Diderot's Letters to Sophie Volland* (Londres: Oxford University Press, 1972), 125.

6. Voltaire, *Candide*, trad. Lowell Bair (Nueva York: Bantam Books, 1959), 118, 120 [*Cándido. Micromegas. Zadig*, Madrid, Cátedra, 2016. Trad. Elena Diego].

7. Jean-Jacques Rousseau, «Carta a Voltaire Regarding the Poem on the Lisbon Earthquake», 18 de agosto de 1756, en T. Besterman, ed., *Voltaire's Correspondence* (Ginebra: Institut et musée Voltaire, 1958), 30:115.

8. Denis Diderot, «Prospectus», en Stephen J. Gendzier, ed., *The Encyclopedia: Selections* (Nueva York: Harper Torchbooks, 1960), 38-39.

9. Denis Diderot, «Political Authority», en Gendzier, *Encyclopedia*, 185; Paul Thiry d'Holbach, «Representatives», en Gendzier, *Encyclopedia*, 219.

10. François Quesnay, «Grains», en Gendzier, *Encyclopedia*, 126, 132; Louis de Jaucourt, «Peuple», en *The ARTFL Encyclopédie*, encyclopédie.uchicago.edu.

11. Jaucourt, «Egalité», en *ARTFL Encyclopédie*; Louis de Jaucourt, «Woman», trad. Naomi J. Andrews, en «The Encyclopedia of Diderot and D'Alembert: Collaborative Translation Project», University of Michigan Library Digital Collections, https://www.lib.umich.edu/database/link/8785.

12. Artículos sobre «Woman» por Antoine-Gaspard Boucher d'Argis y Joseph-François-Louis Desmahis, trad. Naomi J. Andrews, en «Encyclopedia of Diderot and D'Alembert»; Diderot, «Enjoyment», en Gendzier, *Encyclopedia*, 96.

13. Artículos «Nègre», por Samuel Formey, y «Nègres, commerce», anónimo, en *ARTFL Encyclopédie*.

14. Rousseau, «Political Economy», en Gendzier, *Encyclopedia*, 190, 191, 193, 197.

15. Artículo «Belloi, Pierre-Laurent Burette de», en *Encyclopédie méthodique: Histoire* (1784), 1:587; Denis Diderot, *Entretiens sur le fils naturel*, en Diderot, *Oeuvres*, ed. M. Tourneux (París: Garnier, 1875), 7:150-151.

16. Cita de Mably en Johnson Kent Wright, *A Classical Republican in Eighteenth-Century France: The Political Thought of Mably* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1997), 88.

17. Citas en Antoine de Baecque, *Les éclats du rire: La culture des rieurs au XVIII siècle* (París: Calmann-Lévy, 2000), 66.

18. Citas en Matthew Levinger, «La rhétorique protestaire du Parlement de Rouen (1753-1763)», *Annales ESC* 47, n.º 3 (1990): 602.

19. Memorando citado en Julian Swann, *Politics and the Parlement of Paris Under Louis XV, 1754-1774* (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 268; Louis XVI, *Réflexions*, 103, 104.

20. Citas en Swann, *Parlement of Paris*, 328.

21. *Journal historique de la Révolution opérée dans la Constitution de la Monarchie française, par M. de Maupeou, Chancelier de France* [nueva ed., revisada, corregida y aumentada], 7 vols. (Londres, 1776), 1:1-2, 2:339-340, 1:69.

CAPÍTULO 3: LA MONARQUÍA A LA DERIVA

1. *Journal historique de la Révolution opérée dans la Constitution de la Monarchie française* [nueva ed., revisada, corregida y aumentada], 7 vols. (Londres, 1776), 6:17 (22 de mayo de 1774).

2. Citas en Durand Echeverria, *The Maupeou Revolution: A Study in the History of Libertarianism* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1985), 32.

3. *Journal historique*, 7:330-331.

4. Cynthia A. Bouton, *The Flour War: Gender, Class, and Community in Late Ancien Régime French Society* (University Park: Penn State University Press, 1993), 90.

5. «Remonstrance of the *Cour des Aides*», trad. en James Harvey Robinson, ed., *Translations and Reprints from the Original Sources of European History* (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 1912), reimpreso en The College History Staff, *History of Western Civilization* (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 76, 64.

6. *Espion anglois* [nueva ed.] (Londres: John Adamson, 1779), 1:314 (6 de junio de 1775).

7. Citas en Jean-Pierre Poirier, *Turgot: Laissez-faire et progrès social* (París: Perrin, 1999), 183.

8. «Remonstrances of the Parlement of Paris», trad. Keith Baker y Ellen Ross, en The College History Staff, *History of Western Civilization*, 87, 90.

9. *Gazette de Leyde*, 16 de septiembre de 1774; citas en Joël Félix, *Louis XVI et Marie Antoinette: Un couple en politique* (París: Payot, 2006), 184.

10. Citas en Félix, *Louis XVI*, 266.

11. Louis-Sébastien Mercier, *Panorama of Paris*, ed. Jeremy D. Popkin (University Park: Penn State University Press, 1999), 196.

12. Carta de Pierre Céleron de Blainville, 8 de mayo de 1785, citada en Gabriel Debien, *Les esclaves aux Antilles françaises (XVIIe-XVIIe siècles)* (Basse-Terre y Fort-de-France: Sociétés d'histoire de la Guadeloupe et de la Martinique, 1974), 486.

13. Citas en Charles Walton, «The Fall from Eden: The Free-Trade Origins of the French Revolution», en Suzanne Desan, Lynn Hunt, y William Max Nelson, eds., *The French Revolution in Global Perspective* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013), 51.

CAPÍTULO 4: «TODO DEBE CAMBIAR»

1. Jean Egret, *The French Pre-Revolution, 1787-1788*, trad. Wesley D. Camp (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 2; Morellet, carta del 13 de marzo de 1787, en *Lettres de l'abbé Morellet à Lord Shelburne* (París: Plon, 1898), 222.

2. Charles-Alexandre Calonne, «Objections et réponses», en Hans Glagau, *Reformversuche und Sturz des Absolutismus in Frankreich* (Múnich, 1908), 352, 365.

3. *Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la république des lettres en France, depuis MDCCLXII jusqu'à nos jours* (Londres: John Adamson, 1777-1789), 34:63.

4. Minutes of the Société Gallo-Américaine, John Carter Brown Library, Brown University, Codex Fr. 15.

5. Pierre-François Tissot, «Vie de Goujon», en Françoise Brunel y Sylvain Goujon, eds., *Les martyrs de prairial: Textes et documents inédits* (Ginebra: Georg, 1992), 101-102.

6. Honoré Gabriel de Riquetti, conde de Mirabeau, *Des lettres de cachet et des prisons d'état* (Hamburgo, 1782), 96.

7. Citas en Guy Chaussinand-Nogaret, *Mirabeau* (París: Seuil, 1982), 103.

8. Vivian R. Gruder, *The Notables and the Nation: The Political Schooling of the French, 1787-1788* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), 21.

9. Alfred d'Arneth, ed., *Correspondance secrète entre Marie Thérèse et le Cte de Mercy d'Argenteau, avec les lettres de Marie-Thérèse et Marie-Antoinette*, 3 vols. (París: Firmin Didot, 1874-1875), 2:108, citado en John Hardman, *Overture to Revolution: The 1787 Assembly of Notables and the Crisis of France's Old Regime* (Nueva York: Oxford University Press, 2010), 92.

10. Le Blanc de Castillon, citado en Egret, *Pre-Revolution*, 13.

11. Citas en Hardman, *Assembly of Notables*, 136.

12. Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau, *Dénonciation de l'agiotage* (París, 1787), 8, 65.

13. Vivian Gruder, «Les notables à la fin de l'ancien régime», *Dix-huitième siècle*, n.º 14 (1982): 45, 48; Pierre Casselle, *L'anti-Robespierre: Jérôme Pétion ou la Révolution pacifiqique* (París: Vendémiaire, 2016), 70.

14. Citas en Gruder, *The Notables and the Nation*, 46; *Correspondance secrète*, 20 de mayo de 1787, citado en Egret, *Pre-Revolution*, 34.

15. Florimond Claude, conde de Mercy-Argenteau, *Correspondance secrète avec l'Empereur Joseph II et le Prince de Kaunitz*, ed. A. Ritter von Arneth y Jules Flammermont, 2 vols. (París: Imprimerie nationale, 1889), 112; Alexis de Tocqueville, *The Old Regime and the Revolution* (Garden City, NY: Doubleday Anchor, 1956), 214 [*El Antiguo Régimen y la Revolución*, Alianza, Madrid, 2004. Trad. Dolores Sánchez de Aleu].

16. Citas en Egret, *Pre-Revolution*, 92.

17. Jules Flammermont, *Les remonstrances du Parlement de Paris au XVIIIe siècle*, 3 vols. (París, 1898), 3:674.

18. Citas en Louis Gottschalk, *Lafayette Between the American and the French Revolution* (Chicago: University of Chicago Press, 1950), 375.

19. Amigos de los Negros, sesión del 18 de marzo de 1788, en Marcel Dorigny y Bernard Gainot, eds., *La Société des amis des noirs, 1788-1799: Contribution à l'histoire de l'abolition de l'esclavage* (París: Éditions UNESCO, 1998), 109.

20. Carta del 6 de enero de 1788, en Oscar Browning, ed., *Despatches from Paris, 1784-1790*, 2 vols. (Londres: Camden Society, 1909-1910), 2:4.

21. Flammermont, *Remontrances*, 3:745-746.

22. Guy-Marie Sallier-Chaumont, *Annales françaises* (París: Leriche, 1813), 153; Brunel y Goujon, *Les martyrs de prairial* (Ginebra: Georg, 1992), 227; citas en Egret, *Pre-Revolution*, 149.

CAPÍTULO 5: UNA NACIÓN EN ARMAS

1. Jean Sgard, *Les trente récits de la Journée des Tuiles* (Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble, 1988), 36.

2. Ibid., 34.

3. *Délibération de la ville de Grenoble, du samedi 14 juin 1788* (Grenoble, 1788), 2, 3.

4. *Assemblée des trois-ordres de la province de Dauphiné* (Delfinado, 1788), 16, 9.

5. *Lettre écrite par plusieurs citoyens du clergé, de la noblesse & des communes de Dauphiné, à Mm. les syndics-généraux des États de Béarn* (Grenoble, 1788), 6.

6. Jean Egret, *The French Pre-Revolution, 1787-1788*, trad. Wesley D. Camp (Chicago: University of Chicago Press, 1977), 171; C. A. Dauban, ed., *Lettres en partie inédites de Madame Roland*, 2 vols. (París: Plon, 1867), 2:557, carta de 2 de junio de 1788.

7. Citas en Egret, *Pre-Revolution*, 179, 162.

8. Citas en Joël Félix, *Louis XVI et Marie Antoinette: Un couple en politique* (París: Payot, 2006), 396.

9. Egret, *Pre-Revolution*, 180, 181.

10. A. Sayous, ed., *Mémoires et correspondance de Mallet du Pan*, 2 vols. (París: Amyot, 1851), 1:152-153.

11. Joseph Charon, *Lettre ou mémoire historique sur les troubles populaires de Paris en août et septembre 1788* (Londres, 1788), 19.

12. *Journal de Paris*, 31 de julio de 1788.

13. Citas en Lynn Avery Hunt, *Revolution and Urban Politics in Provincial France: Troyes and Reims, 1786-1790* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1978), 41.

14. Sayous, *Mémoires et correspondance de Mallet du Pan*, 163; Dauban, *Lettres de Madame Roland*, 2:572.

15. Vivian R. Gruder, *The Notables and the Nation: The Political Schooling of the French, 1787-1788* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2007), 337-338.

16. Citas en Robert D. Harris, *Necker and the Revolution of 1789* (Lanham, MD: University Press of America, 1986), 328.

17. Citas de «¿Qué es el Tercer Estado?», en John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 42-56 [Joseph Emmanuel Sieyès, *¿Qué es el Tercer Estado?*, Barcelona, Edicomunicación, 2003. Trad. Mariano Martínez].

18. Citas en Lucas de Montigny, *Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau*, 8 vols. (Bruselas, 1834), 7:205; Marc Bombelles, *Journal*, eds. Jean Grassion y Frans Durif, 2 vols. (Ginebra: Droz, 1982), 2:260.

19. *Détail de ce qui s'est passé à Rennes le 26 janvier 1789* (Rennes, 1789); *Mémoire des députés de l'ordre des avocats au Parlement de Bretagne, concernant la malheureuse affaire, arrivée en cette ville les 26 et 27 janvier 1789* (Rennes, 1789), 23.

20. Henri Fréville, *L'intendance de Bretagne*, 3 vols. (Rennes: Plihon, 1953), 3:265.

21. Gilbert Shapiro y John Markoff, *Revolutionary Demands: A Content Analysis of the Cahiers de Doléances of 1789* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1998); John Markoff, *The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords, and Legislators in the French Revolution* (University Park: Penn State University Press, 1995); citas en J. M. Roberts, ed., *French Revolution Documents*, 2 vols. (Oxford: Blackwell, 1966), 1:75; Jacques Bernet, ed., *Journal d'un maître d'école* (Villeneuve-d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2000), 183.

22. Markoff, *Abolition of Feudalism*, 31.

23. Citas en Roberts, *French Revolution Documents*, 1:55-57; Jérôme Mavidal y Emile Laurent, eds., *Archives parlementaires: Première série* (París, 1867-1913) (AP, de ahora en adelante), 3:736.

24. Timothy Tackett, *Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790)* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 19-47.

25. Citas en ibid., 46.

26. «Journal historique du Comité Colonial de St. Domingue», Library of Congress ms. MMC 2671, 26 de septiembre de 1788; citas en Guy Chaussinand-Nogaret, *Mirabeau* (París: Seuil, 1982), 133.

27. Hervé Leuwers, *Robespierre* (París: Pluriel, 2016), 111-119; citas en Charles-Élie, marqués de Ferrières, *Correspondance inédite (1789, 1790, 1791)*, ed. Henri Carré (París: Armand Colin, 1932), 13; Elisabeth Badinter, ed., *Correspondance inédite de Condorcet et Mme. Suard, M. Suard et Garat (1771-1791)* (París: Fayard, 1988), 249-250.

28. Ferrières, *Correspondance*, 37-38.

29. *Gazette de Leyde*, 19 de abril de 1789 (París, 9 de abril); citas en Michèle Grenot, *Le souci des plus pauvres: Dufourny, la Révolution française et la démocratie* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2014), 116; [Antoine-François Lemaire], *Les vitres cassés par le véritable Père Duchêne, député aux États-Généraux* (París, 1789).

30. *Remontrances, plaintes et doléances des dames françoises* (París, marzo de 1789), en Albert Soboul, ed., *Les femmes dans la Révolution française*, 2 vols. (París: EDHIS, 1982), vol. 1, n.º 5.

CAPÍTULO 6: LA REVOLUCIÓN EN LA SALA DEL JUEGO DE PELOTA...

1. François Mège, ed., *Gaultier de Biauzat: Sa vie et sa correspondance*, 2 vols. (París: Lechevalier, 1890), 2:26.

2. Citas en Georges Lefebvre, ed., *Recueil des documents relatifs aux séances des États Généraux*, 2 vols. (París: CNRS, 1953), 1:66-67, 76, 69.

3. Citas en Antoine de Baecque, *1789: L'Assemblée Nationale* (París: Assemblée Nationale, 1989), 56; Guy Chaussinand-Nogaret, *Mirabeau* (París: Seuil, 1982), 151.

4. Charles-Élie, marqués de Ferrières, *Correspondance inédite (1789, 1790, 1791)*, ed. Henri Carré (París: Armand Colin, 1932), 45-46; *Supplément au Journal de Paris*, 14 de mayo de 1789.

5. Adrien Duquesnoy, *Journal d'Adrien Duquesnoy*, ed. Robert de Crèvecoeur (París: Picard, 1894), 29, 19, 9; Ferrières, *Correspondance*, 56.

6. Jacques-Pierre Brissot, *Sur la nécessité de rendre dès ce moment la presse libre, et surtout pour les journaux politiques* (París, 1789), 10; Duquesnoy, *Journal*, 28.

7. *Journal des États Généraux*, n.º 1 (28 de mayo de 1789), n.º 2 (6 de junio de 1789); Arthur Young, *Travels in France During the Years 1787, 1788 and 1789*, ed. Constantia Maxwell (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), 134.

8. Young, *Travels in France*, 134, 142-144.

9. AP, 8:85, sesión del Tercer Estado de 10 de junio de 1789.

10. Ferrières, *Correspondance*, 68; J. J. Brethe, ed., *Journal inédit de Jallet* (Fontenay-le-Comte: Robuchon, 1871), 87; *Journal des États Généraux*, 13 de junio de 1789.

11. Citas en Timothy Tackett, *Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790)* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 146, y AP, 8:110.

12. AP, 8:128-129.

13. Citas en Munro Price, «The "Ministry of the Hundred Hours": A Reappraisal», *French History* 4 (1990): 325; Montmorin, carta de 22 de junio de 1789, en Lefebvre, *Recueil*, 2:200.

14. Citas en John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 90-98.

15. Citas en Chaussinand-Nogaret, *Mirabeau*, 176.

16. Young, *Travels in France*, 154; Ferrières, *Correspondance*, 76.

17. *Point du jour*, 28 de junio de 1789; Young, *Travels in France*, 159.

18. Citas en Tackett, *Becoming a Revolutionary*, 158; Stewart, *Documentary Survey*, 44; Jeremy D. Popkin, «Saint-Domingue, Slavery, and the Origins of the French Revolution», en Thomas E. Kaiser y Dale Van Kley, eds., *From Deficit to Deluge: The Origins of the French Revolution* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011), 242-245.

19. AP, 8:217.

20. AP, 8:212; *Lettre des dames de Paris, à Messieurs les officiers du camp* (París, 1789), en Albert Soboul, ed., *Les femmes et la Révolution dans la Révolution française*, 2 vols. (París: EDHIS, 1982), vol. 1, n.º 9.

21. Duquesnoy, *Journal*, 144.

22. Marc Bombelles, *Journal*, ed. Jean Grassion y Frans Durif, 2 vols. (Ginebra: Droz, 1978, 1982), 2:341.

23. Citas en Price, «Ministry», 335; Claudine Pailhès, ed., *Écrire la Révolution, 1784-1795: «Lettres à Pauline»* (Cahors: La Louve, 2011), 150-151.

CAPÍTULO 7: UNA REVOLUCIÓN DEL PUEBLO

1. AP, 8:110.

2. *Point du jour*, 21 de junio de 1789, discurso del 19 de junio.

3. Camille Desmoulins, carta a su padre, 16 de julio de 1789, en Jules Clarétie, *Oeuvres de Camille Desmoulins* (París, 1874), 2:330.

4. Carta de un comerciante de París, 15 de julio de 1789, publicado en *Affiches américaines*, 19 de septiembre de 1789.

5. «Procès-verbal de l'assemblée générale des électeurs de Paris», en L. G. Wickham Legg, *Select Documents Illustrative of the History of the French Revolution* (Oxford: Clarendon Press, 1905), 1:55.

6. AP, 8:228.

7. Louis-Abel Beffroy de Reigny, *Supplément nécessaire au Précis exact de la prise de la Bastille, avec des anecdotes curieuses sur le même sujet* (París: Baudouin, 1789), 6.

8. Citas en Jacques Godechot, *La Prise de la Bastille* (París: Gallimard, 1965), 371 [*Los orígenes de la Revolución francesa: La toma de la Bastilla*, Barcelona, Península, 1947. Trad. María L. y Rosa M. Feliu].

9. Jean-Sylvain Bailly, *Mémoires de Bailly*, 3 vols. (París: Baudouin, 1821-1822) 1:364; Godechot, *Prise de la Bastille*, 290.

10. Carta de un comerciante de París, 15 de julio de 1789.

11. Godechot, *Prise de la Bastille*, 298.

12. Hans-Jürgen Lüsebrink y Rolf Reichardt, *The Bastille: A History of a Symbol of Despotism and Freedom*, trad. Norbert Schürer (Durham, NC: Duke University Press, 1997), 120.

13. Bailly, *Mémoires*, 1:390.

14. AP, 8:227-229.

15. AP, 8:233.

16. Citas en Godechot, *Prise de la Bastille*, 309; AP, 8:236.

17. Adrien Duquesnoy, *Journal d'Adrien Duquesnoy*, ed. Robert de Crèvecoeur (París: Picard, 1894), 210; Charles-Élie, marqués de Ferrières, *Correspondance inédite (1789, 1790, 1791)*, ed. Henri Carré (París: Armand Colin, 1932), 90; citas en Godechot, *Prise de la Bastille*, 17-18.

18. Citas en Godechot, *Prise de la Bastille*, 319, 318; citas de Jefferson en Julian Boyd et al., eds., *Papers of Thomas Jefferson*, 43 vols. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1950-2017), 15:291.

19. Carta de Jean Antoine Huguet, 18 de julio de 1789, citado en François Mège, ed., *Gaultier de Biauzat: Sa vie et sa correspondance*, 2 vols. (París: Lechevalier, 1890), 2:185.

20. *Gazette de Leyde*, 24 de julio de 1789 (París, 17 de julio).

CAPÍTULO 8: DEL «GRAN MIEDO» A LA DECLARACIÓN DE DERECHOS

1. John Markoff, *The Abolition of Feudalism: Peasants, Lords, and Legislators in the French Revolution* (University Park: Penn State University Press, 1995), 271, 300-301.

2. *Nouvelles de Bretagne, de ce qui s'est passé le 17 & 18 juillet 1789* (París, 1789), 4, 8-9; *Suite des Nouvelles de Bretagne* (París, 1789), 1, 7.

3. Lynn Avery Hunt, *Revolution and Urban Politics in Provincial France: Troyes and Reims, 1786-1790* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1978), 73-91; Arthur Young, *Travels in France During the Years 1787, 1788 and 1789*, ed. Constantia Maxwell (Cambridge: Cambridge University Press, 1950), 183.

4. Young, *Travels in France*, 186, 188.

5. Citas en J. M. Roberts, ed., *French Revolution Documents*, 2 vols. (Oxford: Blackwell, 1966), 1:135; Maurice Wahl, *Les premières années de la Révolution à Lyon, 1788-1792*, (París: A. Colin, 1894), 106; Jacques Bernet, ed., *Journal d'un maître d'école* (Villeneuve-d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2000), 196.

6. Citas en Roberts, *French Revolution Documents*, 1:143-144.

7. Victor Advielle, ed., *Histoire de Gracchus Babeuf et du Babouvisme*, 2 vols. (París: Éditions du CTHS, 1990 [1884]), 55; Claude Perroud, ed., *Lettres de Madame Roland*, 2 vols. (París: Imprimerie nationale, 1902), 2:53.

8. Citas en Michel Biard, *La Révolution hantée* (París: Vendémiaire, 2017), 78.

9. AP, 8:344.

10. Adrien Duquesnoy, *Journal d'Adrien Duquesnoy*, ed. Robert de Crèvecoeur (París: Picard, 1894), 267.

11. Decretos del 4 de agosto en John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 107-110.

12. *Courier de Provence*, n.º 23 (agosto 3-5, 1789).

13. Young, *Travels in France*, 207, 226.

14. Stewart, *Documentary Survey*, 110, 112.

15. Adrien-Joseph Colson, *Lettres d'un bourgeois de Paris à un ami de province, 1788-1793* (Saint-Cyr-sur-Loire: Christian Pirot, 1993), 64.

16. Advielle, *Histoire de Gracchus Babeuf*, 1:57.

17. Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau, *Aux Bataves*, en Stéphane Rials, *La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen* (París: Hachette, 1988), 519; Sieyès, *Délibérations*, en Rials, *Déclaration*, 538; Condorcet, en Rials, *Déclaration*, 546-550.

18. [Dupont de Nemours], *cahier* (cuaderno) del Tercer Estado de Nemours, en Rials, *Déclaration*, 552, 554; Rials, *Déclaration*, 567-568 (documentos de Jefferson, 15:230ff).

19. Citas en Timothy Tackett, *Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790)* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 182; *Journal de Paris*, 22 de abril de 1789.

20. Antoine de Baecque, *L'An I* (París: CNRS Éditions, 1988), 60, 62.

21. Rials, *Déclaration*, 591, 600.

22. Ibid., 606-608.

23. De Baecque, *L'An I*, 104, 106, 123.

24. Ibid., 124.

25. François Mège, ed., *Gaultier de Biauzat: Sa vie et sa correspondance*, 2 vols. (París: Lechevalier, 1890), 2:247.

26. De Baecque, *L'An I*, 150.

27. Ibid., 158.

28. Ibid., 164, 165, 166; Duquesnoy, *Journal*, 309-310.

29. De Baecque, *L'An I*, 173, 175, 176-177; Duquesnoy, *Journal*, 310-311.

30. De Baecque, *L'An I*, 185, 186.

31. Ibid., 187.

32. Ibid., 195-196.

33. AP, 29:264, 266-267.

34. Antoine-François Delandine, *Mémorial historique des États Généraux* (París, 1789), 190; «Déclaration des droits des citoyennes du Palais-Royal», en Rials, *Déclaration*, 691; «Dom Bougre aux États Généraux», citado en Jeffrey Merrick y Bryant T. Ragan, eds., *Homosexuality in Early Modern France* (Nueva York: Oxford University Press, 2001), 177.

CAPÍTULO 9: REDACCIÓN DE UNA CONSTITUCIÓN Y CONFLICTO

1. Adrien Duquesnoy, *Journal d'Adrien Duquesnoy*, ed. Robert de Crèvecoeur (París: Picard, 1894), 311-312.

2. Vernier, carta de 30 de agosto de 1789, citada en Timothy Tackett, *Becoming a Revolutionary: The Deputies of the French National Assembly and the Emergence of a Revolutionary Culture (1789-1790)* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996), 189; AP, 8:513.

3. Citas en Keith Michael Baker, *Inventing the French Revolution* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990), 281, 296.

4. AP, 8:604-605.

5. Guy Chaussinand-Nogaret, *Mirabeau* (París: Seuil, 1982), 213.

6. Annie Duprat, ed., *«Les affaires d'état sont mes affaires de coeur»* (París: Belin, 2016), 51; Maillard, citado en Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite y Mary Durham Johnson, eds., *Women in Revolutionary Paris, 1789-1795* (Urbana: University of Illinois Press, 1979), 37.

7. Testimonio de Maillard, en Levy et al., *Women in Revolutionary Paris*, 38-39; citas en Louis Gottschalk y Margaret Maddox, *Lafayette in the French Revolution: Through the October Days* (Chicago: University of Chicago Press, 1969), 330, 340.

8. Duquesnoy, *Journal*, 402; citas en Levy et al., *Women in Revolutionary Paris*, 48, 50.

9. Marie-Antoinette, carta a Mercy d'Argenteau, 10 de octubre de 1789, en Évelyne Lever, *Correspondance de Marie-Antoinette (1770-1793)* (París: Taillandier, 2005), 497.

10. *Etrennes nationales des dames*, en Albert Soboul, ed., *Les femmes dans la Révolution*, 2 vols. (París: EDHIS, 1982), vol. 1, n.º 18; *Requête des dames, à l'Assemblée nationale*, en ibid., vol. 1, n.º 19; *Patriote françois*, 10 de octubre de 1789.

11. Citas en Bronislaw Baczko, *Politiques de la Révolution française* (París: Gallimard, 2008), 364; Archivo Histórico Nacional, Madrid, Papeles de Estado, 3942, legajo 2, citado en Albert Mousset, *Histoire d'Espagne* (Madrid: Société d'éditions françaises et internationales, 1947), 322.

12. Ad. de Bacourt, ed., *Correspondance entre le Comte de Mirabeau et le Comte de la Marck, pendant les années 1789, 1790 et 1791*, 2 vols. (Bruselas: Pagny, 1841), 1:250.

13. *Révolutions de Paris*, n.º 1 (12-19 de julio de 1789).

14. *Ami du peuple*, 18 de septiembre de 1789; carta de Keralio, s. f. [otoño 1789], en AP, 12:446.

15. Johann Heinrich Campe, *Briefe aus Paris zur Zeit der Revolution geschrieben* (Hildesheim: Grstenberg, 1977 [1790]), 51.

16. Marie-Joseph Chénier, «Discours prononcé devant MM. les représentans de la Commune», en Chénier, *Charles IX, ou l'École des rois* (París: Bossange, 1790), 165.

17. Patrick Kessel, *La nuit du 4 août 1789* (París: Arthaud, 1969), 272; Duquesnoy, *Journal*, 462.

18. Citas en Kessel, *Nuit du 4 août*, 275; George Rudé, *Robespierre* (Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1967), 14.

19. *Ami du peuple*, 19 de noviembre de 1789.

20. Adrien-Joseph Colson, *Lettres d'un bourgeois de Paris à un ami de province, 1788-1793* (Saint-Cyr-sur-Loire: Christian Pirot, 1993), 93.

21. Lucas de Montigny, *Mémoires biographiques, littéraires et politiques de Mirabeau* (Bruselas, 1841), 8 vs., 6:390; Caroline Chopelin-Blanc, *De l'apologétique à l'Église constitutionnel: Adrien Lamourette (1742-1794)* (París: Honoré Champion, 2009), 330.

22. Citas en Nigel Aston, *Religion and Revolution in France, 1780-1804* (Washington, DC: Catholic University Press, 2000), 133; AP, 9:424.

23. Abbé d'Eymar, 13 de octubre de 1789, en AP, 9:420.

24. Citas en Ted W. Margadant, *Urban Rivalries in the French Revolution* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992), 94.

25. *Journal de Lyon*, 31 de diciembre de 1789; citas en Kessel, *Nuit du 4 août*, 281.

26. Citas en Lynn Hunt, *The French Revolution and Human Rights*, 2.ª ed. (Boston: Bedford / St. Martin's Press, 2016), 83-84.

27. Ibid., 84-86; Frances Malino, *A Jew in the French Revolution: The Life of Zalkind Hourwitz* (Cambridge, MA: Blackwell, 1996), 81.

28. Alexandre Lameth, *Histoire de l'Assemblée constituante*, 2 vols. (París, 1828-1829), 1:399.

CAPÍTULO 10: UN MUNDO NUEVO DIVIDIDO

1. Alexandre Lameth, *Histoire de l'Assemblée constituante*, 2 vols. (París, 1828-1829), 2:452.

2. Charles-Élie, marqués de Ferrières, *Correspondance inédite* (1798, 1790, 1791), ed. Henri Carré (París: Armand Colin, 1932), 241.

3. Carta del 15 de julio de 1790, en Françoise Brunel y Sylvain Goujon, eds., *Les martyrs de prairial* (Ginebra: Georg, 1992), 256-257.

4. *Bulletin de la Société départementale d'archéologie et de statistique de la Drôme* 42 (1908): 391; *Confédération de Lyon, le 30 mai 1790* (Lyon: Aimé de la Roche, 1790), 26.

5. AP, 16:95; *Annales de l'éducation du sexe, ou Journal des demoiselles*, n.º 8, 7; *Ami du peuple*, 7 de julio de 1789.

6. Citas en J. M. Roberts, ed., *French Revolution Documents*, 2 vols. (Oxford: Blackwell, 1966), 1:196.

7. Citas en ibid., 1:209.

8. Citas en Nigel Aston, *Religion and Revolution in France, 1780-1804* (Washington, DC: Catholic University Press, 2000), 135; Gwénaël Murphy, *Les réligieuses dans la Révolution française* (París: Bayard, 2005), 50; Jean-François de Vauvilliers, *Le témoignage de la raison et de la foi contre la Constitution civile du clergé* [nueva ed.] (París: Desaint, 1791), iii.

9. AP, 15:742; C. Bloch y A. Tuetey, *Procès-verbaux et rapport du Comité de mendicité de la Constituante, 1790-1791* (París: Imprimerie nationale, 1911), 41.

10. AP, 12:715, 717-718.

11. Baron de Menou, en AP, 12:715.

12. Citas en Timothy Tackett, *Religion, Revolution, and Regional Culture in Eighteenth-Century France: The Ecclesiastical Oath of 1791* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986), 218; *Moniteur universel*, 21 de febrero de 1791.

13. Citas en Aston, *Religion and Revolution*, 141, y Dale Van Kley, *The Religious Origins of the French Revolution* (New Haven, CT: Yale University Press, 1996), 357.

14. Citas en Aston, *Religion and Revolution*, 149.

15. Citas en Laurent Dubois y John Garrigus, *Slave Revolution in the Caribbean, 1789-1804* (Boston: Bedford / St. Martin's Press, 2006), 64-65; carta del gobernador Peinier, 10 de octubre de 1789, en los Archivos Nacionales (AN, de ahora en adelante), C 9 A 162.

16. Citas en Marcel Dorigny, ed., *Les bières flottantes des négriers: Un discours non prononcé sur l'abolition de la traite des Noirs (novembre 1789-mars 1790)* (Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 1999), 16-17.

17. *Annales patriotiques*, 26 de febrero de 1790.

18. Pierre Bernadeu, «Tablettes manuscrites», Biblioteca Municipal de Burdeos, Microfilm 1698/5, p. 60.

19. AP, 15:643, 644.

20. Claudine Pailhès, ed., *Écrire la Révolution, 1784-1795: «Lettres à Pauline»* (Cahors: La Louve, 2011), 262; AP, 15:651.

21. AP, 16:373.

22. AP, 16:375; Charles-Élie, marqués de Ferrières, *Correspondance inédite (1789, 1790, 1791)*, ed. Henri Carré (París: Armand Colin, 1932), 211-212.

23. Alexandre Lameth, en AP, 17:506.

24. *Révolutions de Paris*, n.º 56 (1790), citado en Aline Cordani, «Metz et l'affaire de Nancy», *Les Cahiers lorrains*, n.º 2-3-4 (1989): 141-171.

25. F. C. de la Coudraye, *Opinion sur le nouveau projet d'organisation (de la marine militaire)* (París: Imprimerie nationale, 1791), 11.

26. Arthur Chuquet, ed., *Paris en 1790: Voyage de Halem* (París: Chailley, 1890), 222, 215.

27. Ibid., 226, 229.

28. Charles Popham Miles, ed., *The Correspondence of William Augustus Miles on the French Revolution*, 2 vols. (Londres: Longmans, Green, 1890), 1:203, 205.

29. Chuquet, *Voyage de Halem*, 213; *Révolutions de Paris*, n.º 69 (1790): 175, citado en *Voyage*, 214.

30. Etta Palm d'Aelders, en Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite, y Mary Durham Johnson, eds., *Women in Revolutionary Paris, 1789-1795* (Urbana: University of Illinois Press, 1979), 69.

31. Alfred Bougeart, *Les Cordeliers: Documents pour servir à l'histoire de la Révolution française* (París, 1891), 157, 133; cita de R. B. Rose, *The Making of the Sans-Culottes* (Mánchester: Manchester University Press, 1983), 97.

32. *Courrier politique et littéraire du Cap Français*, 24 de junio de 1790.

33. *Gazette de Paris*, 4 de abril de 1791.

34. Edmund Burke, *Reflections on the Revolution in France* (Nueva York: Anchor Books, 1973), 48, 100, 74 [*Reflexiones sobre la revolución en Francia*, Madrid, Alianza, 2016. Trad. Carlos Mellizo].

35. Ibid., 73, 89, 90.

36. William Godwin, *Memoirs of the Author of A Vindication of the Rights of Women*, eds. Pamela Clemit y Gina Luria Walker (Peterborough, Ontario: Broadview, 2001), 73; *Patriote français*, 2 de enero de 1791.

37. Citas en Aston, *Religion and Revolution*, 154.

38. AP, 21:7-8; Tackett, *Religion, Revolution, and Regional Culture*, 20, 25.

39. Diario de Marillet, citado en Richard Ballard, *The Unseen Terror: The French Revolution in the Provinces* (Londres: I. B. Tauris, 2010), 48.

40. Adrien-Joseph Colson, *Lettres d'un bourgeois de Paris à un ami de province, 1788-1793* (Saint-Cyr-sur-Loire: Christian Pirot, 1993), 189; Pailhès, *Écrire la Révolution*, 315-316, 279; *Discours d'un curé de campagne à ses paroissiens, relativement au serment* (1791), 1.

41. *Révolutions de Paris*, 17-24 de abril de 1791; cita de María Antonieta en Munro Price, *The Road from Versailles: Louis XVI, Marie-Antoinette and the Fall of the French Monarchy* (Nueva York: St. Martin's Press, 2003), 153.

42. *Révolutions de Paris*, 17-24 de abril de 1791; AP, 25:646, 651.

43. Citas en Carmela Ferrandes, «Le *Journal de la maladie et de la mort de Mirabeau* de Pierre-Jean-Georges Cabanis», *Dix-huitième siècle*, n.º 39 (2007): 201-209; Jean-François Thénard y Raimond Guyot, *La conventionnel Goujon (1766-1795)* (París: Félix Alcan, 1908), 22; P. Fromageot, *Pierre-François Tissot (1768-1854)* (Versalles: L. Bernad, 1902).

44. *Journal des décrets de l'Assemblée nationale*, 16 de febrero de 1791, citado en Michael P. Fitzsimmons, *From Artisan to Worker: Guilds, the French State, and the Organization of Labor, 1776-1821* (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), 46.

45. AP, 27:210.

46. AP, 27:212; Pierre Nicolas Berryer, citado en Michael P. Fitzsimmons, *The Parisian Order of Barristers and the French Revolution* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1987), 65.

47. AP, 25:680, 685, 683.

48. *Patriote français*, 1 de diciembre de 1790.

49. Ibid., 5 de enero de 1791.

50. Ibid., 30 de abril de 1791.

51. *Gazette universelle*, 12 y 13 de mayo de 1791.

52. Citas en Hervé Leuwers, *Robespierre* (París: Pluriel, 2016), 179-180.

53. Guillaume Raynal, «Adresse à l'assemblée nationale», 31 de mayo de 1791.

CAPÍTULO 11: UN REY A LA FUGA Y UNA CRISIS CONSTITUCIONAL

1. Citas en Timothy Tackett, *When the King Took Flight* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003), 49.

2. Evelyn Farr, *I Love You Madly: Marie Antoinette and Count Fersen* (Londres: Peter Owen, 2016), 135, 138; *Mémoires de madame la duchesse de Tourzel* (París: Plon, 1883), 312.

3. Citas en Munro Price, *The Road from Versailles: Louis XVI, Marie-Antoinette and the Fall of the French Monarchy* (Nueva York: St. Martin's Press, 2003), 181.

4. Citas en Tackett, *When the King Took Flight*, 8, 22, 23; Victor Fournel, *L'Evénement de Varennes* (París, 1890), 311.

5. Citas en Tackett, *When the King Took Flight*, 79.

6. *Mémoires de madame la duchesse de Tourzel*, 339.

7. *Moniteur universel*, 22 de junio de 1791; *Geschichte der gegenwärtigen Zeit* (Estrasburgo), 26 de junio de 1791; J. M. Roberts, ed., *French Revolution Documents*, 2 vols. (Oxford: Blackwell, 1966), 1:298.

8. *Patriote françois*, 22 de junio de 1791; carta de la hija de William Miles, París, 27 de junio de 1791, en Charles Popham Miles, ed., *The Correspondence of William Augustus Miles on the French Revolution*, 2 vols. (Londres: Longmans, Green, 1890), 1:304; citas en Sian Reynolds, *Marriage and Revolution: Monsieur and Madame Roland* (Oxford: Oxford University Press, 2012), 146.

9. Thomas Paine, cita en Moncure Daniel Conway, *The Life of Thomas Paine* (Nueva York: B. Blom, 1970 [1908]), 307; Sigismond Lacroix, ed., *Actes de la Commune de Paris pendant la Révolution*, ser. 2, 5:112; *Annales patriotiques*, 22 de junio de 1791; *Journal de la cour et de la ville*, 27 de junio de 1791; *Gazette de Paris*, 23 de junio de 1791.

10. Lacroix, *Actes de la Commune*, ser. 2, 5:113; informe policial en David Andress, *Massacre of the Champ de Mars: Popular Dissent and Political Culture in the French Revolution* (Woodbridge, Suffolk: Boydell Press, 2000), 150.

11. Citas en Serge Bianchi y Roger Dupuy, eds., *La Garde nationale entre nation et peuple en armes: Mythes et réalités, 1789-1871* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2006), 395;

Thomas Lindet, citado en Georges Michon, *Essai sur l'histoire du parti feuillant: Adrien Duport* (París: Payot, 1924), 240.

12. *Argus patriote*, 26 de junio de 1791, citad en Michon, *Essai*, 235.

13. *Gazette universelle*, 10 de julio de 1791; citas en Farr, *I Love You*, 216, y Michon, *Essai*, 246.

14. Citas en Michon, *Essai*, 254, 256-257.

15. Citas en Albert Mathiez, *Le Club des Cordeliers* (París: H. Champion, 1910), 122.

16. Citas en Andress, *Massacre*, 198.

17. Nicolas Ruault, *Gazette d'un Parisien sous la Révolution, 1783-1796* (París: Perrin, 1976), 257.

18. Barnave a María Antonieta, 25 de julio de 1791, en Évelyne Lever, *Correspondance de Marie-Antoinette (1770-1793)* (París: Taillandier, 2005), 562; María Antonieta a Barnave, 7 de agosto de 1791, en ibid., 575; María Antonieta a Mercy d'Argenteau, 26 de agosto de 1791, en ibid., 585.

19. *Gazette de Leyde*, 20 de mayo de 1791.

20. Citas en Farr, *I Love You*, 192; declaración de Pillnitz en John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 223-224; declaración de los condes de Provence y D'Artois, en L. G. Wickham Legg, *Select Documents Illustrative of the History of the French Revolution* (Oxford: Clarendon Press, 1905), 2:134; Jean Philippe Guy le Gentil Paroy, *Mémoires du comte de Paroy*, ed. Étienne Charavay (París: Plon, 1895), 292-293.

21. Citas en Michon, *Essai*, 309, 327; Adrien-Joseph Colson, *Lettres d'un bourgeois de Paris à un ami de province, 1788-1793* (Saint-Cyr-sur-Loire: Christian Pirot, 1993), 202.

22. Pierre-François Tissot, «Vie de Goujon», en Françoise Burnel y Sylvain Goujon, *Les martyrs de prairial* (Ginebra: Georg, 1992), 119, 128-129.

23. *Gazette universelle*, 12 y 25 de septiembre de1791.

24. Citas en Michael D. Sibalis, «The Regulation of Male Homosexuality in Revolutionary and Napoleonic France», en Jeffrey Merrick y Bryant T. Ragan, eds., *Homosexuality in Modern France* (Nueva York: Oxford University Press, 1996), 82.

25. AP, 31:674.

26. *Révolutions de Paris*, 24-30 de septiembre de 1791; Sylvain Maréchal, *Dame Nature à la barre de l'Assemblée nationale* (París, 1791), 3.

27. Olympe de Gouges, «Declaration of the Rights of Woman», en Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite, y Mary Durham Johnson, eds., *Women in Revolutionary Paris, 1789-1795* (Urbana: University of Illinois Press, 1979), 87-96.

28. Charles-Élie, marqués de Ferrières, *Correspondance inédite (1789, 1790, 1791)*, ed. Henri Carré (París: Armand Colin, 1932), 430.

CAPÍTULO 12: UNA SEGUNDA REVOLUCIÓN

1. Claude Perroud, ed., *Lettres de Madame Roland*, 2 vols. (París: Picard, 1911), 386; citado en F.-A. Aulard, ed., *La Société des Jacobins: Recueil des documents pour l'histoire du club des*

Jacobins à Paris, 6 vols. (París: Jouaust, 1889-1897), 3:203.

2. Evelyn Farr, *I Love You Madly: Marie Antoinette and Count Fersen* (Londres: Peter Owen, 2016), 160, carta de 26 de septiembre de 1791; Évelyne Lever, *Correspondance de Marie-Antoinette (1770-1793)* (París: Taillandier, 2005), 658, carta de 31 de octubre de 1791.

3. Walter Markov y Albert Soboul, *Die Sansculotten von Paris: Dokumente zur Geschichte des Volksbewegung, 1793-1794* (Berlín: Akademie-Verlag, 1957), 2.

4. *Feuille villageoise*, 29 de septiembre de 1791.

5. Citas en Peter McPhee, *Revolution and Environment in Southern France, 1780-1830* (Nueva York: Oxford University Press, 1998), 60.

6. Serge Bianchi y Roger Dupuy, eds., *La Garde nationale entre nation et peuple en armes: Mythes et réalités, 1789-1871* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2002), 172.

7. *Feuille villageoise*, 29 de septiembre de 1791; citas en Peter McPhee, *Living the French Revolution* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006), 96-97.

8. Claudine Pailhès, ed., *Écrire la Révolution, 1784-1795: «Lettres à Pauline»* (Cahors: La Louve, 2011), 279.

9. Olympe de Gouges, *L'Esclavage des noirs, ou l'heureux naufrage* (París: Veuve Duchesne, 1792), 4; Jacques-Pierre Brissot, *Discours de J. P. Brissot, député, sur les causes des troubles de Saint-Domingue, prononcé à la séance du premier décembre 1791* (París: Imprimerie nationale, 1791).

10. Carta de 23 de noviembre de 1791, en Lever, *Correspondance*, 682; Jacques Godechot, «Fragments des Mémoires de Charles-Alexis Alexandre sur les Journées Révolutionnaires de 1791 et 1792», *Annales historiques de la Révolution française*, n.º 126 (abril de 1952): 153.

11. Citas en C. J. Mitchell, *The French Legislative Assembly of 1791* (Leiden: Brill, 1988), 44.

12. Brissot [primer discurso, 16 de diciembre de 1791], 3, 5, 6, 15.

13. Brissot, *Deuxième discours*, 30 de diciembre de 1791, 15, 27, 26.

14. Carta de 16 de diciembre de 1791, en Lever, *Correspondance*, 735.

15. Robespierre, discurso de 2 de enero de 1792, en Jacobinos, en *Discours de Maximilien Robespierre sur la guerre* (París, 1972), 18; Perroud, *Lettres de Madame Roland*, 2:419; Gabriel Noël, ed., *Au temps des volontaires 1792: Lettres d'un volontaire de 1792*, 2.ª ed. (París: Plon, 1912), 27.

16. Lever, *Correspondance*, 771.

17. Citas en Patricia C. Howe, «Charles-François Dumouriez and the Revolutionizing of French Foreign Affairs in 1792», *French Historical Studies* 14 (1986): 386; Becquey, citado en Mitchell, *Legislative Assembly*, 79.

18. *Créole patriote*, 28 de julio de 1792.

19. Citas en Mona Ozouf, *Festivals and the French Revolution*, trad. Alan Sheridan (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988), 69.

20. Citas en Étienne Joliclerc, ed., *Joliclerc Volontaire aux armées de la Révolution* (París: Perrin, 1905), 56-57.

21. Annie Duprat, ed., *«Les affaires d'état sont mes affaires de coeur»* (París: Belin, 2016), 82; Jean-Marie Roland de la Platière, *Lettre de M. Roland, ministre de l'intérieur, au roi* (París, 1792), 3,

6, 8.

22. Godechot, «Fragments des Mémoires», 180.

23. *Créole patriote*, 3 de julio de 1792; Godechot, «Fragments des Mémoires», 183-184.

24. Brissot, discurso de 9 de julio de 1792, en AP, 46:264, 272.

25. F.-A. Aulard, ed., *Mémoires secrets de Fournier l'Américain* (París: Société de l'histoire de la Révolution française, 1890), 71; *Trompette du Père Duchêne*, 8 de julio de 1792.

26. Nicolas Ruault, *Gazette d'un Parisien sous la Révolution, 1783-1796* (París: Perrin, 1976), 450.

27. Aulard, *Mémoires secrets de Fournier l'Américain*, 71.

28. Citas en Mitchell, *Legislative Assembly*, 245n.

29. Ruault, *Gazette*, 452, 454.

30. Rosalie Jullien, citada en Lindsay Porter, *Popular Rumour in Revolutionary Paris, 1792-1794* (Cham, Suiza: Palgrave Macmillan, 2017), 86; *Révolutions de Paris*, n.º 162 (11-18 de agosto de 1792).

31. Ruault, *Gazette*, 458.

32. Citas en Philip Dwyer, *Napoleon: The Path to Power* (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 99 [*Napoleón: El camino hacia el poder*, Madrid, Esfera de los Libros, 2000. Trad. Isabel Murillo].

33. André Fribourg, *Discours de Danton* (París: Société de l'histoire de la Révolution française, 1910), 155.

34. Citas en Henri Wallon, *Le Tribunal Révolutionnaire de Paris* (París: Hachette, 1880-1882), 17; Adrien-Joseph Colson, *Lettres d'un bourgeois de Paris à un ami de province, 1788-1793* (Saint-Cyr-sur-Loire: Christian Pirot, 1993), 221.

35. Fribourg, *Discours de Danton*, 156, 165.

36. Noël, *Au temps des volontaires*, 238-239.

37. *Créole patriote*, 24 de agosto de 1792 (edición vespertina); *Mémoires, corrrespondance et manuscrits du général Lafayette*, 4 vols. (Bruselas: Société Belge de Librairie, 1837-1838), 4:215, carta de 3 de septiembre de 1792.

38. Fribourg, *Discours de Danton*, 173.

39. *Révolutions de Paris*, n.º 165, 1-8 de septiembre de 1792.

40. François Jourgniac Saint-Méard, *Mon agonie de trente-huit heures* (París: Desenne, 1792), 24, 25.

41. *Révolutions de Paris*, n.º 165, 1-8 de septiembre de 1792; citas en P. J. B. Buchez y P. C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, 40 vols. (París: Paulin, 1834-1838), 17:433.

42. Citas en Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 17:385.

43. Citas en John Hardman, *French Revolution Documents* (Oxford: Blackwell, 1973), 2:9.

44. *Feuille du Matin*, noviembre 27, 1792; *Révolutions de Paris*, n.º 165, 1-8 de septiembre de 1792.

45. *Créole patriote*, 2 de septiembre de 1792 (edición vespertina).

46. Danton, discurso de 10 de marzo de 1793, en AP, 60:63.

CAPÍTULO 13: UNA REPÚBLICA QUE NACIÓ EN UNA CRISIS

1. Citas en Gérard Noiriel, «L'identification des citoyens: Naissance de l'état civil républicain», *Genèses* 13 (1993): 4.

2. Citas en ibid., 13.

3. AP, 49:611.

4. Jean-François Thénard y Raimond Guyot, *La conventionnel Goujon (1766-1795)* (París: Félix Alcan, 1908), 56; Françoise Brunel y Sylvain Goujon, eds., *Martyrs de prairial: Textes et documents inédits* (Ginebra: Georg, 1992), 311, 313.

5. Citas en Hervé Leuwers, *Robespierre* (París: Pluriel, 2016), 235.

6. René Levasseur, *Mémoires de R. Levasseur, de la Sarthe, ex-Conventionnel*, 4 vols. (París: Rapilly, 1829-1831), 1:48.

7. Citas en Norman Hampson, *Danton* (Londres: Duckworth, 1978), 88.

8. André Fribourg, ed., *Discours de Danton* (París: Société de l'histoire de la Révolution française, 1910), 177.

9. Grégoire, discurso de septiembre 21, 1792, en *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 22 de septiembre de 1792.

10. *Revolutions de Paris*, n.º 168, 22-29 de septiembre de 1792.

11. Gabriel Noël, ed., *Au temps des volontaires: Lettres d'un volontaire de 1792*, 2.ª ed. (París: Plon, 1912), 267, carta de 17 de septiembre de 1792.

12. Jean-Paul Bertaud, *Valmy: La démocratie en armes* (París: Juilliard, 1970), 30; Goethe, *Campagne de 1792*, cita en *Die Französische Revolution im Spiegel der deutschen Literatur* (Leipzig: Reclam, 1975), 249-250.

13. General Galbaud, en AN, D XXV 49, d. 473; Jean Vidalenc, *Les Émigrés français, 1789-1825* (Caen: Ozanne, 1963), 156; Frédéric-C. Lankhard, *Au temps des volontaires* (París, 1915), 72.

14. Daunou, citado en John Hardman, *French Revolutionary Documents* (Oxford: Blackwell, 1973), 2:23.

15. Citas en David P. Jordan, *The King's Trial: Louis XVI vs. the French Revolution* (Berkeley: University of California Press, 1979), 54.

16. Citas en Albert Soboul, *Le procès de Louis XVI* (París: Julliard, 1966), 74, 582.

17. Chalier, carta de 3 de febrero de 1793, en Walter Markov, *Revolution im Zeugenstand: Frankreich, 1789-1799*, 2 vols. (Fráncfort: Fischer, 1987), 2:352.

18. Citas en Soboul, *Procès de Louis XVI*, 89, y Brunel y Goujon, *Martyrs de prairial*, 30, 32.

19. Citas en Jordan, *King's Trial*, 108-109, 112.

20. Citas en ibid., 136.

21. Citas en Soboul, *Procès de Louis XVI*, 166, 179, 186; Michael Walzer, *Regicide and Revolution* (Nueva York: Columbia University Press, 1992), 212.

22. Nicolas Ruault, *Gazette d'un Parisien sous la Révolution, 1783-1796* (París: Perrin, 1976), 320.

23. Charles Lacretelle, *Dix années d'épreuves pendant la Révolution* (París: Allouard, 1842), 133-134; citas en Soboul, *Procès de Louis XVI*, 233.

24. Citas en Soboul, *Procès de Louis XVI*, 250; *Révolution de 92*, enero 23, 1793; *Père Duchêne*, n.º 212 (enero de 1793); Michael L. Kennedy, *The Jacobin Clubs in the French Revolution: The Middle Years* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), 332.

25. Citas en Janet L. Polasky, *Revolution in Brussels, 1787-1793* (Hanover, NH: University Press of New England, 1987), 229; decreto de la propaganda en John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 381-382; Olympe de Gouges, *L'entrée de Dumouriez à Bruxelles* (París: Regnaud, 1793), 74.

26. Decretos de la propaganda en Stewart, *Documentary Survey*, 381-383.

27. Citas en Polasky, *Revolution in Brussels*, 257.

28. AP, 56:116.

29. Citas en Albert Sorel, *L'Europe et la Révolution française*, 8 vols. (París: Plon, 1908), 4:278-279, 280.

30. Condorcet, discurso de 15 de febrero de 1793, en AP, 58:595.

31. *Journal de Perlet*, 19 de febrero de 1793.

32. Marat, *Journal de la République française*, 26 de febrero de 1793; citas en Stewart, *Documentary Survey*, 398.

33. Citas en Judith A. Miller, *Mastering the Market: The State and the Grain Trade in Northern France, 1700-1860* (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), 147.

34. *Robespierre*, discurso de 25 de febrero de 1793, en Marc Bouloiseau et al., eds., *Oeuvres de Maximilien Robespierre*, 11 vs. (París: Société des Études Robespierristes, 1910-2007), 9:275; citas en Markov, *Revolution im Zeugenstand*, 359.

35. Citas en Jean-Paul Bertaud, *The Armies of the French Revolution: From Citizen-Soldiers to Instrument of Power*, trad. R. R. Palmer (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988), 93.

36. Citas en Félix Deniau, *Histoire de la Vendée*, 6 vols. (Angers, 1876), 1:277n.

37. Citas en ibid., 299.

38. Citas en ibid., 1:365.

39. Citas en ibid., 1:367, 370, 372.

40. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 11 de marzo de 1793 (sesión de la Convención, 9 de marzo).

41. Citas en Levasseur, *Mémoires*, 134; Lucien Duchet, ed., *Deux volontaires de 1791: Les frères Favier de Montluçon* (Montluçon: A. Herbin, 1909), 93, 97.

42. *Journal de la République française*, 20 de marzo de 1793; Levasseur, *Mémoires*, 1:139; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 3 de abril de 1793 (Convención, 1 de abril).

43. Stewart, *Documentary Survey*, 415, 583

44. Isnard, 3 de abril de 1793, en AP, 61:278; Barère, *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 8 de abril de 1793.

45. Citas en Olivier Coquard, *Marat* (París: Fayard, 1993), 394.

46. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 9 de abril de 1793; AP, 61:532.

47. *Robespierre*, discurso de 24 de abril de 1793, en Bouloiseau et al., eds., *Oeuvres de Maximilien Robespierre*, 9:459-463.

48. Ibid.

49. Ibid.

50. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 4 de mayo de 1793 (Convención, 1 de mayo).

51. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 4 de mayo de 1793 (Convención, 3 de mayo).

52. Jacques-Louis Ménétra, *Journal of My Life*, ed. Daniel Roche, trad. Arthur Goldhammer (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 226; *Bulletin de la Convention*, 5 de mayo de 1793; P. J. B. Buchez y P. C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, 40 vols. (París: Paulin, 1834-1838), 26:357-358; Isidore Langois, petición al Comité de Seguridad General, AN, F 7 4764.

53. Citas en Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite, y Mary Durham Johnson, eds., *Women in Revolutionary Paris, 1789-1795* (Urbana: University of Illinois Press, 1979), 152-153.

54. Citas en Morris Slavin, *The Making of an Insurrection: Parisian Sections and the Gironde* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), 18; Hardman, *French Revolution Documents*, 2:62, 64, 67.

55. Aulard, *Société des Jacobins*, 5:213.

CAPÍTULO 14: LA REVOLUCIÓN AL BORDE DEL ABISMO

1. René Levasseur, *Mémoires de R. Levasseur, de la Sarthe, ex-Conventionnel*, 4 vols. (París: Rapilly, 1829-1831), 1:247; citas en Alan Forrest, *Society and Politics in Revolutionary Bordeaux* (Oxford: Oxford University Press, 1975), 99.

2. Citas en Morris Slavin, *The Making of an Insurrection: Parisian Sections and the Gironde* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986), 96.

3. Citas en ibid., 113.

4. Citas en ibid., 114; *Journal de Lyon*, 27 de junio de 1793, citado en Pierre Rétat, *1793: L'esprit des journaux* (Saint-Étienne: Publications de l'Université de Saint-Étienne, 1993), 162.

5. *Bulletin des amis de la vérité*, 2 de marzo de 1793.

6. Citas en Paul R. Hanson, *The Jacobin Republic Under Fire: The Federalist Revolt in the French Revolution* (University Park: Penn State University Press, 2003), 246-247.

7. *Echo des Pyrénées*, 22 de junio de 1793.

8. AP, 66:252, 254, 257; Jean-François Barailon, *Projet de Constitution*, en AP, 67:188-189; Billaud-Varennes, *Les éléments du républicanisme*, en AP, 67:240, 244.

9. Citas en P. J. B. Buchez y P. C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, 40 vols. (París: Paulin, 1834-1838), 28:209, Convención, 28 de junio de 1793.

10. Pierre Toussaint Durand-Maillane, citado en John Hardman, ed., *French Revolutionary Documents* (Oxford: Blackwell, 1973), 135 (*Mémoires*, 141-145).

11. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 28 de junio de 1793 (Convención, 25 de junio), citado en Jeremy D. Popkin, *A Short History of the French Revolution*, 6.ª ed. (Boston: Pearson, 2014), 68-69.

12. Citas en Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 28:212; Hardman, *French Revolutionary Documents*, 103.

13. Citas en Olivier Coquard, *Marat* (París: Fayard, 1993), 410; Rétat, *Esprit des journaux*, julio 29, 1793, 195; y *Quotidienne*, 18 de julio de 1793, 192.

14. Citas en Pierre Casselle, *L'anti-Robespierre: Jérôme Pétion ou la Révolution pacifiqique* (París: Vendémiaire, 2016), 535; Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 28:395, 341; Rétat, *Esprit des journaux*, 189.

15. Citas en R. R. Palmer, *Twelve Who Ruled: The Year of the Terror in the French Revolution* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1969 [1943]), 36-37; F.-A. Aulard, ed., *La Société des Jacobins: Recueil des documents pour l'histoire du club des Jacobins à Paris*, 6 vols. (París: Jouaust, 1889-1897), 5:350 (discurso de 14 de agosto de 1793).

16. John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 469.

17. Nicolas Ruault, *Gazette d'un Parisien sous la Révolution, 1783-1796* (París: Perrin, 1976), 342; Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 28:361 (discurso de 26 de julio de 1793).

18. Citas en Françoise Waquet, «La Bastille académique», en *La Carmagnole des muses* (París: Armand Colin, 1988), 24; Jean-Luc Chappey, «"Repenser la Terreur" par les sciences?», en Michel Biard, ed., *Les politiques de la Terreur, 1793-1794* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008), 401.

19. Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 28:440, 443.

20. Ibid., 28:445, 446.

21. Stewart, *Documentary Survey*, 469, 473; Léonor Dupille, *Un maître d'école à silly-en-Multien, 1771 à 1803* (Dammartin en Goële, s. f.), 41.

22. *Nouvelles politiques*, 4 de septiembre de 1793.

23. *Révolutions de Paris*, 18-25 de septiembre de 1790, citado en Robert Louis Stein, *Léger-Félicité Sonthonax: The Lost Sentinel of the Republic* (Rutherford, NJ: Fairleigh Dickinson University Press, 1985), 21.

24. Richebourg a Sonthonax, 26 de agosto de 1793, en Jeremy D. Popkin, *You Are All Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery* (Nueva York: Cambridge University Press, 2010), 270, 275-276.

25. Citas en Popkin, *You Are All Free*, 276.

26. Palmer, *Twelve Who Ruled*, 46-48.

27. *Ami du peuple*, 13 de junio de 1790, citado en Gerd van den Heuvel, «Terreur, Terroriste, Terrorisme», en Rolf Reichardt y Eberhard Schmitt, eds., *Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in Frankreich, 1680-1820* (Múnich: R. Oldenbourg, 1985), 3:99.

28. *Révolutions de Paris*, n.º 212 (agosto 3-octubre 28, 1793), citado en Van den Heuvel, «Terreur», 3:110.

29. Robespierre, «On Political Morality», citado en Richard Bienvenu, ed., *The Ninth of Thermidor: The Fall of Robespierre* (Nueva York: Oxford University Press, 1968), 32-49; Madame

Roland, *Mémoires de Madame Roland* (París: Mercure de France, 1966), 236 [*Memorias privadas*, Madrid, Siruela, 2008. Trad. Ángeles Caso].

30. Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 28:459.

31. Stewart, *Documentary Survey*, 478; Walter Markov y Albert Soboul, *Die Sansculotten von Paris: Dokumente zur Geschichte des Volksbewegung, 1793-1794* (Berlín: Akademie-Verlag, 1957), 214; Pierre Paganel, *Essai historique et critique sur la Révolution française*, 2 vols. (París: Panckoucke, 1815), 2:259.

32. «Mémoire d'un prisonnier, première partie: Mon séjour à la Mairie et à la Force», *Paris pendant l'année 1795*, junio 27, 1795; Gabrielle Gauchat, *Journal d'une Visitandine pendant la Terreur* (París: Poussielgue-Rusand, 1855), 107.

33. Thuriot, citado en Levasseur, *Mémoires*, 2:121; Stewart, *Documentary Survey*, 499-500.

34. Citas en Gérard Gayot y Jean-Pierre Jessenne, «Institutions et politiques économiques, politiques sociales», en Biard, *Politiques de la Terreur*, 220; Pierre Caron, *Paris pendant la Terreur*, 6 vols. (París: Picard, 1910-1978), 1:249.

35. Citas en Jean-François Belhoste, «Le financement de la guerre de 1792 à l'an IV», en *État, finances et économie pendant la Révolution française* (París: Imprimerie nationale, 1991), 342.

36. Citas en Hardman, *French Revolutionary Documents*, 2:157; Stewart, *Documentary Survey*, 482.

37. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 2 de agosto de 1793 (Convención, 1 de agosto).

38. Petición a la Convención, en Markov y Soboul, *Sansculotten*, 188; citas en Rétat, *Esprit des journaux*, 272.

39. AP, 74:550-551.

40. Dupille, *Un maître d'école*, 42-43; Richard Cobb, *The People's Armies: The Armées révolutionnaires, instrument of the Terror in the Departments, April 1793 to floréal Year II* (New Haven, CT: Yale University Press, 1987), 468; Michel Vovelle, *The Revolution Against the Church: From Reason to the Supreme Being*, trad. Alan José (Columbus: Ohio State University Press, 1991), 63-65, 84.

41. Citas en Joseph F. Byrnes, *Priests of the French Revolution: Saints and Renegades in a New Political Era* (University Park: Penn State University Press, 2014), 102.

42. *Père Duchêne*, n.º 309 (noviembre 1793); Helen Maria Williams, *Letters Containing a Sketch of the Politics of France* (Londres: G. G. and J. Robinson, 1795), 2:185.

43. Citas en Vovelle, *Revolution Against the Church*, 106, 158, y Caron, *Paris pendant la Terreur*, 1:256.

44. Citas en Cobb, *People's Armies*, 472, y Palmer, *Twelve Who Ruled*, 118.

45. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 16, 18, y 19 de octubre de 1793; Madame de Staël, *Réflexions sur le procès de la Reine*, en *Oeuvres complètes de Mme la baronne de Staël*, 2 vols. (París: Treuttel et Würtz, 1820), 2:32.

46. Citas en Rétat, *Esprit des journaux*, 251.

47. *Créole patriote*, 7 de brumario del año II (27 de octubre de 1793); *Réimpression de l'ancien Moniteur*, vol. 18, sesión del juicio del 9 de brumario del año II (30 de octubre de 1793).

48. Claude Perroud, ed., Jacques-Pierre Brissot, *Mémoires de Brissot*, 2 vols. (París: Picard, 1912), 1:1-2; Madame Roland [Manon Philpon], *Mémoires de Madame Roland*, ed. Paul de Roux (París: Mercure de France, 1966), 201, 238 [*Memorias privadas*, Madrid, Siruela, 2008. Trad. Ángeles Caso]; Condorcet, *Esquisse d'un tableau des progrès de l'esprit humain*, ed. Alain Pons (París: Flammarion, 1988), 271 [*Bosquejo de un cuadro histórico de los progresos del espíritu humano*, Madrid, Editora Nacional, 1980. Ed. de Antonio Torres del Moral, trad. Marcial Suárez].

49. Citas en Lindsay A. H. Parker, *Writing the Revolution: A French Woman's History in Letters* (Nueva York: Oxford University Press, 2013), 116; Hervé Leuwers, *Robespierre* (París: Pluriel, 2016), 293.

50. Citas en Olivier Blanc, *La dernière lettre* (París: Pluriel, 1984), 168.

51. Citas en W. D. Edmonds, *Jacobinism and the Revolt of Lyon, 1789-1793* (Oxford: Clarendon Press, 1990), 280.

52. Citas en Jean-Clément Martin, *La guerre de Vendée, 1793-1800* [nueva ed.] (París: Éditions Seuil, 2014), 219-220.

53. Étienne Jolicler, ed., *Joliclerc Volontaire aux armées de la Révolution* (París: Perrin, 1905), 155.

54. Darline Gay Levy, Harriet Branson Applewhite, y Mary Durham Johnson, eds., *Women in Revolutionary Paris, 1789-1795* (Urbana: University of Illinois Press, 1979), 200.

55. Citas en ibid., 215, 217, 219.

CAPÍTULO 15: EL PUNTO ÁLGIDO DEL TERROR

1. Citas en David P. Jordan, *The Revolutionary Career of Maximilien Robespierre* (Chicago: University of Chicago Press, 1985), 186.

2. Citas en Philip Dwyer, *Napoleon: The Path to Power* (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 147 [*Napoleón: El camino hacia el poder*, Madrid, Esfera de los Libros, 2000. Trad. Isabel Murillo].

3. Citas de George Rudé, ed., *Robespierre* (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1967), 59.

4. F.-A. Aulard, ed., *La Société des Jacobins: Recueil des documents pour l'histoire du club des Jacobins à Paris*, 6 vols. (París: Jouaust, 1889-1897), 5:528 (1 de frimario del año II [21 de noviembre de 1793]).

5. Camille Desmoulins, *Le Vieux Cordelier*, ed. Matton Aîné (París: Ebrard, 1834), n.º 2, 13 (20 de frimario del año II).

6. Desmoulins, *Vieux Cordelier*, n.º 3, 36; n.º 4, 62, 61.

7. Aulard, *Société des Jacobins*, 5:569 (1 de nivoso del año II [21 de diciembre de 1793]).

8. Citas en Morris Slavin, *The Hébertistes to the Guillotine: Anatomy of a «Conspiracy» in the French Revolution* (Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1994), 72.

9. Aulard, *Société des Jacobins*, 5:574 (23 de diciembre de 1793); citas en Slavin, *Hébertistes*, 79.

10. Citas en Marisa Linton, *Choosing Terror: Virtue, Friendship, and Authenticity in the French Revolution* (Oxford: Oxford University Press, 2013), 212.

11. Citas en Jeremy D. Popkin, *You Are All Free: The Haitian Revolution and the Abolition of Slavery* (Nueva York: Cambridge University Press, 2010), 352.

12. Citas en ibid., 354, 360.

13. Ibid., 362.

14. Henri Grégoire, *Mémoires*, ed. Hippolyte Carnot (París: Éditions de Santé, 1989), 81; Popkin, *You Are All Free*, 362.

15. Albert Mathiez, *Études sur Robespierre (1758-1794)*, ed. Georges Lefebvre (París: Éditions sociales, 1958), 146.

16. Chaumette, citado en Popkin, *You Are All Free*, 369; Jean-Claude Halpern, «Les fêtes révolutionnaires et l'abolition de l'esclavage en l'An II», en Marcel Dorigny, ed., *Les abolitions de l'esclavage de L. F. Sonthonax à V. Schoelcher, 1793-1794-1848* (París: Éditions UNESCO, 1995), 194.

17. René Levasseur, *Mémoires de R. Levasseur, de la Sarthe, ex-Conventionnel*, 4 vols. (París: Rapilly, 1829-1831), 2:42; citas en Jean-Paul Bertaud, *The Armies of the French Revolution: From Citizen-Soldiers to Instrument of Power*, trad. R. R. Palmer (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988).

18. Marcel Reinhard, *Le Grand Carnot*, 2 vols. (París: Hachette, 1952), 2:106.

19. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 4 ger. II (marzo 24, 1794).

20. Bertrand Barère, *Rapport du Comité de salut public sur les idiomes*, 8 de pluvioso del año II (27 de enero de 1794) (París: Imprimerie nationale, 1794).

21. Louis-Antoine de Saint-Just, *Oeuvres choisies* (París: Gallimard, 1968), 201, 206.

22. Ibid., 337, 341-342, 344.

23. Citas en Slavin, *Hébertistes*, 97.

24. *Almanach des prisons* (París, año III), 85.

25. Adolphe Schmidt, *Tableaux de la Révolution française*, 3 vols. (París, 1869), 2:157.

26. Citas en Slavin, *Hébertistes*, 225; Schmidt, *Tableaux de la Révolution*, 2:182.

27. *Journal de la Montagne*, 18 de pluvioso del año II.

28. Reinhard, *Grand Carnot*, 2:137-138.

29. Ernest Hamel, *Histoire de Robespierre*, 3 vols. (París, 1865-1867), 3:468-469.

30. Citas en Linton, *Choosing Terror*, 221, 222-223.

31. Citas en Hamel, *Histoire de Robespierre*, 3:474; Pierre Caron, *Paris pendant la Terreur*, 6 vols. (París: Picard, 1910-1978), 6:226; P. Fromageot, *Pierre-François Tissot (1768-1854)* (Versalles: Bernard, 1902), 11; Linton, *Choosing Terror*, 225.

32. *Almanach des prisons*, 93; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 15 ger. II (4 de abril de 1794); citas en Norman Hampson, *Danton* (Londres: Duckworth, 1978), 167; *Bulletin du Tribunal criminel révolutionnaire*, n.º 4:21 (año II).

33. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 16 de germinal del año II (5 de abril de 1794); *Bulletin du Tribunal criminel révolutionnaire*, n.º 4:26; citas en Hampson, *Danton*, 174.

34. *Almanach des prisons*, 176.

35. Citas en Reinhard, *Grand Carnot*, 2:151.

36. Caron, *Paris pendant la Terreur*, 6:95, 224.

37. Lynn Hunt, *Politics, Culture and Class in the French Revolution* (Berkeley: University of California Press, 1984), 163-164.

38. Jacques-Louis Ménétra, *Journal of My Life*, ed. Daniel Roche, trad. Arthur Goldhammer (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 223-228.

39. Robespierre, «On the Cult of the Supreme Being», en Rudé, ed., *Robespierre*, 69.

40. Rudé, *Robespierre*, 71.

41. Citas en Jonathan Smyth, *Robespierre and the Festival of the Supreme Being* (Mánchester: Manchester University Press, 2016), 138, 137.

42. John Hall Stewart, ed., *A Documentary Survey of the French Revolution* (Nueva York: Macmillan, 1951), 529; Anne Simonin, «Les acquittés de la Grande Terreur: Réflexions sur l'amitié dans la République», en Michel Biard, ed., *Les politiques de la Terreur, 1793-1794* (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2008), 183-184.

43. Citas en Linton, *Choosing Terror*, 250.

44. Citas en Richard Bienvenu, ed., *The Ninth of Thermidor: The Fall of Robespierre* (Nueva York: Oxford University Press, 1968), 104.

45. Citas en Olivier Blanc, *La dernière lettre* (París: Pluriel, 1984), 62; Nicolas Ruault, *Gazette d'un Parisien sous la Révolution, 1783-1796* (París: Perrin, 1976), 352, 357.

46. Jean-François Noël, *L'ombre et la lumière*, ed. Denis Jeanson (Tours: Denis Jeanson, 1988), 111.

47. Citas en T. C. W. Blanning, *The French Revolutionary Wars, 1787-1802* (Londres: Arnold, 1996), 116-117.

48. Annie Duprat, ed., *«Les affaires d'état sont mes affaires du coeur»* (París: Belin, 2016), 306; citas en Bienvenu, *Thermidor*, 126.

49. Cita en Gérard Walter, *Robespierre* (París: Gallimard, 1946), 418.

50. Citas en Bienvenu, *Thermidor*, 112 (de las memorias de Fouché, 1:17-22).

51. Citas en Bienvenu, *Thermidor*, 143, 155, 154, 182-183.

52. Bienvenu, *Thermidor*, 189-191; Peter McPhee, *Robespierre: A Revolutionary Life* (New Haven, CT: Yale University Press, 2013), 218 [*Robespierre: Una vida revolucionaria*, Barcelona, Península, 2016. Trad. Ricardo García Pérez]; Bienvenu, *Thermidor*, 199-200.

53. Bienvenu, *Thermidor*, 211.

54. Paul Sainte-Claire Deville, *La Commune de l'An II* (París: Plon, 1946), 287.

55. Ruault, *Gazette*, 361; Jullien, *«Les affaires d'état»*, 318-319.

CAPÍTULO 16: EL NUEVO COMIENZO DE LA REPÚBLICA

1. Citas en Richard Bienvenu, ed., *The Ninth of Thermidor: The Fall of Robespierre* (Nueva York: Oxford University Press, 1968), 235, 247.

2. Bronislaw Baczko, *Comment sortir de la Terreur* (París: Gallimard, 1989).

3. Citas en ibid., 28, y Bienvenu, *Thermidor*, 317.

4. Citas en Baczko, *Comment sortir*, 62, 63.

5. Charles Lacretelle, *Dix années d'épreuves pendant la Révolution* (París: Allouard, 1842), 181; citas en Baczko, *Comment sortir*, 101, 119.

6. Citas en Bienvenu, *Thermidor*, 304-305; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 13 de fructidor del año II (Convención, 11 fructidor).

7. Citas en Bienvenu, *Thermidor*, 312; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 13 y 14 de fructidor del año II.

8. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 16 de fructidor del año II, 1 de vendimiario del año III.

9. F.-A. Aulard, ed., *Paris pendant la réaction thermidorienne et le Directoire*, 5 vols. (París, 1898), 1:104; *Procès-criminel des members du comité révolutionnaire de Nantes, et du ci-devant représentant du peuple Carrier* (París: Toubon, año III), 1:35, 244.

10. Lacretelle, *Dix années d'épreuves*, 196.

11. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 8 de nivoso del año III (procedimientos del juicio, 21 de frimario del año II).

12. Citas en Suzanne Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* (Berkeley: University of California Press, 2004), 255, 259; *Adresse des citoyennes de la ci-devant Normandie, département du Calvados, sur la loi du 17 nivôse* (año III), 4.

13. Joseph Lakanal, *Rapport et projet de loi sur l'organisation des écoles primaires* (París: Imprimerie nationale, 1794), 2, 3; *Décade philosophique*, 2:393, 464.

14. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 8 de vendimiario del año III; *Décade philosophique*, 29 de abril de 1794.

15. Charles-François Dupuis, *Origine de tous les cultes, ou religion universelle*, 6 vols. (París: H. Agasse, 1795), 1:xiv [*Compendio del origen de todos los cultos*, Isla de Leon: Impr. de Lozano, 1821. Trad. D. Josef Marchena].

16. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 4 de nivoso del año III (Convención, 1 de nivoso).

17. *Abréviateur universel*, 24 de ventoso del año III, citado en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:559.

18. *Annales de la religion*, 2 y 9 de mayo de 1795; Gabrielle Gauchat, *Journal d'une Visitandine pendant la Terreur* (París: Poussielgue-Rusand, 1855), 240.

19. Ernest Picard, *Au service de la nation: Lettres de volontaires, 1792-1798* (París: Félix Alcan, 1914), 63; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 22 de pluvioso del año III.

20. Citas en Simon Schama, *Patriots and Liberators* (Nueva York: Knopf, 1977), 201.

21. Citas en Albert Sorel, *L'Europe et la Révolution française*, 8 vols. (París: Plon, 1908), 4:312.

22. Citas en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:147.

23. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 20 de frimario del año III (Convención, 17 de frimario).

24. Citas en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:556.

25. Citas en Dominique Godineau, *The Women of Paris and Their French Revolution*, trad. Katherine Streip (Berkeley: University of California Press, 1998), 296; Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:446.

26. *Gazette française*, 3 de ventoso del año III, en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:502; *Courrier universel de Husson*, 2 de germinal del año III; Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:513.

27. *Gazette française*, 5 de nivoso del año III, en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:327; citas en Jeremy D. Popkin, *The Right-Wing Press in France, 1792-1800* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1980), 109; *Messager du soir*, 2 de germinal del año III, en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 1:587.

28. *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 13 de germinal del año III.

29. Citas en Renée Fuoc, *La réaction thermidorienne à Lyon (1795)* (Lyon: Éditions de Lyon, 1957), 127n.

30. Citas en Kåre Tønnesson, *La défaite des sans-culottes* (Oslo: Presses Universitaires d'Oslo, 1959), 235.

31. Citas en ibid., 248; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 4 de pradial del año III.

32. Godineau, *Women of Paris*, 335-336.

33. Romme, en Françoise Brunel y Sylvain Goujon, *Les martyrs de prairial: Textes et documents inédits* (Ginebra: Georg, 1992), 395.

34. Brunel y Goujon, *Martyrs de prairial*, 188.

35. Citas en Tønnesson, *Défaite des sans-culottes*, 301.

36. Dominque Godineau, *Citoyens tricoteuses: Les femmes du people à Paris pendant la Révolution française* (París: Perrin, 2004 [1988]), 330-331; Walter Markov y Albert Soboul, *Die Sansculotten von Paris: Dokumente zur Geschichte des Volksbewegung, 1793-1794* (Berlín: Akademie-Verlag, 1957), 494.

37. *Annales patriotiques*, 30 de pradial del año III; y *Courrier français*, 30 de pradial del año III, en Aulard, *Réaction thermidorienne*, 2:21.

38. Louis XVIII, «Declaration of Verona», en Paul H. Beik, ed., *The French Revolution* (Nueva York: Harper and Row, 1970), 325-329.

39. Claudine Pailhès, ed., *Écrire la Révolution, 1784-1795: «Lettres à Pauline»* (Cahors: La Louve, 2011), 524.

40. *Postillon des armées*, 1 de mesidor del año III; Adrien Lezay-Marnésia, *Les ruines, ou voyage en France, pour servir de suite à celui de la Grèce* (París: Migneret, año III), 32-33; *Journal des hommes libres*, 4 y 5 de mesidor del año III.

41. Boissy d'Anglas, discurso del 5 de mesidor del año III, en Beik, *French Revolution*, 318, 319.

42. Ibid., 320, 321.

43. *Journal des hommes libres*, 17 de mesidor del año III (Convención, 15 de mesidor del año III).

44. Citas en John Hardman, ed., *French Revolutionary Documents* (Oxford: Blackwell, 1973), 2:341-342.

45. Defermon, discurso del 5 de termidor del año III, en *Réimpression de l’ancien Moniteur*, vol. 25 (10 de termidor del año III); Boissy d’Anglas, discurso del 22 de termidor del año III, en *Réimpression de l’ancien Moniteur*, vol. 25 (23 de termidor del año III).

46. Citas en Sorel, *Europe et la Révolution française*, 4:399.

47. Citas en Henri Zivy, *Le treize vendémiaire An IV* (París: Alcan, 1898), 18, 28, 17.

48. Cifras de las elecciones en ibid., 35; carta del teniente Enée en ibid., 124.

49. Citas en Philip Dwyer, *Napoleon: The Path to Power* (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 176 [*Napoleón: El camino hacia el poder*, Madrid, Esfera de los Libros, 2000. Trad. Isabel Murillo]; informe policial, citado en Zivy, *Vendémiaire*, 98n.

50. *Réimpression de l’ancien Moniteur*, 23 de vendimiario del año IV (Convención, 18 de vendimiario); citas en Dwyer, *Path to Power*, 188.

51. *Réimpression de l’ancien Moniteur*, 1 de brumario del año IV (Convención, 26 de vendimiario), 9 de brumario del año IV (Convención, 2 de brumario), 4 de brumario del año IV (Convención, 29 de vendimiario), 7 de brumario del año IV (Convención, 1 de brumario).

52. *Réimpression de l’ancien Moniteur*, 3 de brumario del año IV (Convención, 27 de vendimiario), 9 de brumario del año IV (Convención, 2 de brumario), 12 de brumario del año IV (Convención, 3 de brumario), 14 de brumario del año IV (Convención, 4 de brumario).

CAPÍTULO 17: LA REPÚBLICA CUESTIONADA

1. Anne-Louis Germaine de Staël, *Réflexions sur la paix intérieure*, en de Staël, *Oeuvres complètes de Mme. la baronne de Staël*, 2 vols. (París: Treuttel et Würtz, 1820), 2:110, 104.

2. F.-A. Aulard, ed., *Paris pendant la réaction thermidorienne et le Directoire*, 5 vols. (París, 1898), 3:2.

3. Jacques-Louis Ménétra, *Journal of My Life*, ed. Daniel Roche, trad. Arthur Goldhammer (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 236; Aulard, *Réaction thermidorienne*, 3:175 (18 de floreal del año IV); Victorin Laval, ed., *Lettres inédites de J.-S. Rovère à son frère Simon-Stylite* (París: H. Champion, 1908), 152-153.

4. Benjamin Constant, *De la force d’un gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier* (París, 1796); cita final de K. Steven Vincent, *Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism* (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011), 55.

5. Adrien Lezay-Marnésia, *De la faiblesse d’un gouvernement qui commence, et de la nécessité où il est de se rallier à la majorité nationale* (París: Mathey, 1796), 32.

6. *Tribun du peuple*, n.º 35 (9 de frimario del año IV).

7. *Tribun du peuple*, n.º 36 (20 de frimario del año IV), n.º 35, 105-106; «Réponse à une lettre signée M. V.», en Filippo Buonarroti, *Conspiration pour l’égalité dite de Babeuf* (París: Éditions sociales, 1957), 2:151.

8. «Manifeste des égaux», en Buonarroti, *Conspiration pour l’égalité*, 2:95.

9. Citas en R. B. Rose, *Gracchus Babeuf: The First Revolutionary Communist* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1978), 219.

10. «Acte d'insurrection», en Buonarroti, *Conspiration pour l'égalité*, 2:166; Buonarroti, *Conspiration pour l'égalité*, 1:123.

11. *Nouvelles politiques*, 23 de floreal del año IV.

12. Carta de noviembre 28, 1795, en André Michel, ed., *Correspondance inédite de Mallet du Pan avec la Cour de Vienne (1794-1798)*, 2 vols. (París: Plon, 1884), 372-373.

13. Augustin Barruel, *Histoire du clergé pendant la Révolution française* [nueva ed.] (Bruselas, 1801), 2 [*Historia del clero en tiempos de la Revolución francesa*, Málaga, Iglesias y Martínez, 1799].

14. Joseph de Maistre, *Considérations sur la Révolution française* (Lyon: J. B. Pelagaud, 1880), 8, 56, 46-47.

15. Louis de Bonald, *Théorie du pouvoir politique et religieuse* (edición electrónica), Les classiques des sciences sociales, University of Quebec and Chicoutimi, classiques. uqac.ca, 9.

16. Citas en Jean-Paul Bertaud, *The Armies of the French Revolution: From Citizen-Soldiers to Instrument of Power*, trad. R. R. Palmer (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1988).

17. Jean-François Noël, *L'ombre et la lumière*, ed. Denis Jeanson (Tours: Denis Jeanson, 1988), 125.

18. Citas en Philip Dwyer, *Napoleon: The Path to Power* (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 198 [*Napoleón: El camino hacia el poder*, Madrid, Esfera de los Libros, 2000. Trad. Isabel Murillo].

19. Dwyer, *The Path to Power*, 200, 591.

20. Citas en Andrew Roberts, *Napoleon: A Life* (Nueva York: Penguin, 2015), 91 [*Napoleón: Una vida*, Madrid, Palabra, 2016. Trad. Diego Pereda Sancho].

21. Citas en T. C. W. Blanning, *The French Revolutionary Wars, 1787-1802* (Londres: Arnold, 1996), 162.

22. Citas en Blanning, *French Revolutionary Wars*, 173.

23. Citas en Giorgio Candeloro, *Storia dell'Italia moderna*, 11 vols. (Milán: Feltrinelli, 1977 [1957]), 1:219.

24. Citas en Owen Chadwick, *The Popes and European Revolution* (Oxford: Clarendon Press, 1981), 453.

25. Citas en Albert Sorel, *L'Europe et la Révolution française*, 8 vols. (París: Plon, 1908), 5:148.

26. Cita en Jeremy D. Popkin, *A Concise History of the Haitian Revolution* (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2012), 73.

27. Cita en Popkin, *Haitian Revolution,* 72-73.

28. Rochambeau, «Mémorial», en Newberry Library, Ms. Ruggles 410.

29. Citas en Marcel Reinhard, *Le Grand Carnot*, 2 vols. (París: Hachette, 1952), 2:187.

30. Aulard, *Réaction thermidorienne*, 3:448.

31. William Wickham, *The Correspondence of the Right Honourable William Wickham*, 2 vols. (Londres: Bentley, 1870), 1:357.

32. Citas en Jean-Louis Halperin, *L'impossible Code Civil* (París: Presses Universitaires de France, 1992), 245-246.

33. *Nouvelles politiques*, 19 de mesidor del año IV.

34. [Jean-Baptiste Laplace], *Réflexions sur la colonie de Saint-Domingue*, 2 vols. (París: Garnéry, año IV), 1:190.

35. *Nouvelles politiques*, 18 de pluvioso del año V.

36. [André Dumont], *Manuel des assemblées primaires et électorales de France* (Hamburgo, 1797), v, vi.

37. Carta a Wickham, octubre de 1797, en Charles Ballot, *Le coup d'état du 18 fructidor An V* (París: Société de l'histoire de la Révolution française, 1906), 166-167.

38. Citas en Isser Woloch, *Jacobin Legacy: The Democratic Movement Under the Directory* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), 66.

39. Vincent-Marie Viénot de Vaublanc, *Discours sur l'état de Saint-Domingue* (París: Imprimerie nationale, año V), 15; *Réimpression de l'ancien Moniteur*, 21 de pradial del año V (Consejo de 500, 15 de pradial).

40. Camille Jordan, *Rapport sur la police des cultes* (París: Imprimerie nationale, 29 de pradial del año V), 5, 24.

41. *Sentinelle*, 26 de pradial del año V.

42. *Invariable*, 12 de mesidor del año V.

43. *Europe politique*, 4 de pradial del año V.

44. *Correspondance de Napoléon Ier*, 60 vols. (París: Imprimerie impériale, 1858-1869), 3:180-181.

45. Toussaint Louverture, citado en Laurent Dubois y John Garrigus, *Slave Revolution in the Caribbean, 1789-1804* (Boston: Bedford / St. Martin's Press, 2006), 148-153.

46. *Tableau de la France*, 1 de termidor del año V.

47. Ballot, *Coup d'état de 18 fructidor*, 158-167.

48. Charles Lacretelle, *Précis historique de la Révolution française*, 5 vols. (París: Treuttel et Würtz, 1820), 5:27.

CAPÍTULO 18: DE FRUCTIDOR A BRUMARIO

1. Marie-Joseph Chénier, «Le Vieillard d'Ancenis: Elégie sur la mort du général Hoche», en *Victoires, conquêtes des Français de 1792 à 1815: Couronne poétique* (París: Panckoucke, 1821), 27:133.

2. *Décade philosophique*, 30 de fructidor del año V.

3. Citas en Pierre Serna, *La République des girouettes* (París: Champ Vallon, 2005), 444.

4. *Conservateur*, 15 de vendimiario del año VI.

5. *Sentinelle*, 26 de vendimiario del año VI.

6. Citas en Isser Woloch, *Jacobin Legacy: The Democratic Movement Under the Directory* (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), 88.

7. *Bulletin de Paris*, 21 de brumario del año VI.

8. *Courrier de la Gironde*, citado en Anne de Mathan y Gilles Feyel, «Le Courrier de la Gironde, 1797-1799», en Gilles Feyel, ed., *Dictionnaire de la presse française pendant la Révolution*, 5 vols. (Ferney-Voltaire: Centre International d'Étude du XVIII Siècle, 2005-2012), 4:203.

9. *Journal des hommes libres*, 13 de brumario del año VI.

10. Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, *Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d'état, sur Napoléon* (París: Garnier, 1899), 2:24, 27; Patrice Gueniffey, *Le dix-huit brumaire: L'épilogue de la Révolution française* (París: Gallimard, 2008), 133-134.

11. Bourrienne, *Mémoires*, 2:33.

12. *Journal de Paris*, 1 de pluvioso del año VI, citado en Serna, *Girouettes*, 452; citas en Patrice Gueniffey, *Le dix-huit brumaire*, 149-150; Bourrienne, *Mémoires*, 2:32.

13. Citas en Laurent Dubois y John Garrigus, *Slave Revolution in the Caribbean, 1789-1804* (Boston: Bedford / St. Martin's Press, 2006), 154-155; Léger-Félicité Sonthonax, *Discours prononcé par Sonthonax, sur la situation actuelle de Saint-Domingue* (París: Imprimerie nationale, año VI), 18; Beaubrun Ardouin, *Études sur l'histoire de Haïti*, 11 vols. (Port-au-Prince: Dalencour, 1958), 3:86.

14. Citas en Marc H. Lerner, «The Helvetic Republic: An Ambivalent Reception of French Revolutionary Liberty», *French History* 18, n.º 1 (2004): 60.

15. Citas en Woloch, *Jacobin Legacy*, 280.

16. Citas en Mathan y Feyel, «Courrier de la Gironde», 4:203.

17. *Décade philosophique*, 19 de mayo de 1798, citado en Serna, *Girouettes*, 448.

18. Ibid.; «L'An centième de la République», en *Ami des lois*, 13 de pradial del año VI, 26 de pradial del año VI, 16 de mesidor del año VI.

19. François de Neufchâteau, *Recueil des lettres circulaires, instructions, programmes, discours*, 2 vols. (París: Imprimerie de la République, año VII), 1:160-173, 1:240; *Première exposition des produits de l'industrie française* (París: Imprimerie de la République, año VII), 24.

20. François de Neufchâteau, *Recueil*, 1:168.

21. *Clef du Cabinet*, 23 de termidor del año VI; citas en T. C. W. Blanning, *The French Revolutionary Wars, 1787-1802* (Londres: Arnold, 1996), 239.

22. Citas en Andrew Jainchill, *Reimagining Politics After the Terror: The Republican Origins of French Liberalism* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008), 134-135; Madame de Staël, *Des circonstances actuelles qui peuvent terminer la Révolution, et des principes qui doivent fonder la République en France*, ed. J. Vienot (París: Fischbacher, 1906), 35.

23. Citas en Alyssa Sepinwall, *The Abbé Grégoire and the French Revolution* (Berkeley: University of California Press, 2005), 152.

24. Citas en Robert Solé, *Bonaparte à la conquête de l'Egypte* (París: Seuil, 2006), 12.

25. L. B., «Considérations sur l'Egypte et le Syrie», *Décade philosophique*, 20 ger. VI (9 de abril de 1798).

26. L. B., «Suite des considérations sur l'Egypte et la Syrie», *Décade philosophique*, 30 de germinal del año VI (19 de abril de 1798); *Ami des lois*, 20 de pradial del año VI (7 de junio de

1798).

27. Citas en Solé, *Bonaparte*, 46; Stéphane Yerasimos, ed., *Deux Ottomans à Paris sous le Directoire et l'Empire* (París: Actes Sud, 1998), 115.

28. Napoleón I, *Campagnes d'Egypte et de Syrie*, 450, 453; François Pairault, *Gaspard Monge, le fondateur de Polytechnique* (París: Taillandier, 2000), 373; Solé, *Bonaparte*, 90.

29. Citas en Solé, *Bonaparte*, 113.

30. Shmuel Moreh, ed. y trad., *Napoleon in Egypt: Al-Jabarti's Chronicle of the French Occupation, 1798* (Princeton, NJ: Markus Weiner, 1975), 93; citas en Juan Cole, *Napoleon's Egypt: Invading the Middle East* (Nueva York: St. Martin's Press, 2007), 204.

31. Citas en Patrice Gueniffey, *Bonaparte, 1769-1802* (París: Gallimard, 2003), 313, 315.

32. Citas en Marianne Elliott, *Partners in Revolution: The United Irishmen and France* (New Haven, CT: Yale University Press), 216.

33. Citas en R. R. Palmer, *The Age of the Democratic Revolution*, 2 vols. (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1959-1964), 2:385n, 386.

34. *Clef du cabinet*, 15 de floreal del año VII; F.-A. Aulard, ed., *Paris pendant la réaction thermidorienne et le Directoire*, 5 vols. (París, 1898), 5:522.

35. Citas en Bernard Gainot, *1799: Un nouveau Jacobinisme?* (París: Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 2001), 34, 56.

36. Pierre-François Tissot, *Histoire complète de la Révolution française*, 6 vols. (París: Baudouin, 1837), 6:362.

37. P. J. B. Buchez y P. C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, 40 vols. (París: Paulin, 1834-1838), 38:49, 51.

38. Tissot, *Histoire complète*, 6:368.

39. Ibid., 6:371.

40. Citas en Gainot, *1799*, 478; P. Fromageot, *Pierre-François Tissot (1768-1854)* (Versailles: L. Bernard, 1902), 15; *Feuille du jour*, 6 de termidor del año VII.

41. André Morellet, *Observations sur la loi des otages* (París, año VII), 11.

42. Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 38:89.

43. Citas en Andrew Roberts, *Napoleon: A Life* (Nueva York: Penguin, 2015), 201.

44. Citas en Gueniffey, *Dix-huit brumaire*, 224.

45. Citas en ibid., 251.

46. Citas en Luca Scuccimarra, *La Sciabola di Sieyès: Le giornati di brumaio e la genesi del regime bonapartista* (Bolonia: Il Mulino, 2002), 130.

47. Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 38:175-176.

48. Citas en Gueniffey, *Dix-huit brumaire*, 275.

49. Bourrienne, *Mémoires*, 3:82.

50. Buchez y Roux, *Histoire parlementaire*, 38:185.

51. Ibid., 38:187-193; Gueniffey, *Dix-huit brumaire*, 287.

52. Bourrienne, *Mémoires*, 3:85; *Mémoires historiques sur le dix-huit brumaire* (París: Gauthier, 1799), 60.

53. Citas en Philip Dwyer, *Napoleon: The Path to Power* (New Haven, CT: Yale University Press, 2008), 502 [*Napoleón: El camino hacia el poder*, Madrid, Esfera de los Libros, 2000. Trad. Isabel Murillo], y Gueniffey, *Dix-huit brumaire*, 306.

CAPÍTULO 19: LA MUERTE LENTA DE LA REPÚBLICA

1. *Tableau historique des causes qui ont amené la Révolution du dix-huit brumaire*, 1.

2. Werner Giesselmann, *Die brumairianische Elite* (Stuttgart: Klett, 1977), 408.

3. *Tableau historique*, 4; citado en Pierre-Louis Roederer, *Oeuvres du comte P. L. Roederer*, 8 vols. (París: Firmin-Didot, 1866), 3:302.

4. Félix Rocquain, *L'état de la France au 18 brumaire* (París, 1874), 135, 186, 33.

5. F.-A. Aulard, ed., *Paris sous le Consulat: Recueil des documents pour l'histoire de l'esprit public à Paris*, 4 vols. (París: Cerf, 1903-1909), 1:3; Christine Reinhard. *Une femme de diplomate: Lettres de Madame Reinhard à sa mère, 1798-1815*, (París, 1900), 95; citas en Roederer, *Oeuvres*, 3:310.

6. Aulard, *Paris sous le Consulat*, 1:30.

7. Jean-Jacques Régis Cambacérès, *Mémoires inédits*, 2 vols. (París: Perrin, 1999), 1:443-444; François Aulard, ed., *L'état de la France en l'an VIII et l'an IX* (París: Cerf, 1897), 74; Pierre-Jean-Georges Cabanis, *Quelques considérations sur l'organisation sociale en général et particulièrement sur la nouvelle constitution* (París: Imprimerie nationale, 1799), 36.

8. Antoine Boulay de la Meurthe, *Théorie constitutionnelle de Sieyès* (París: Paul Renouard, 1836), 3, 10.

9. Cambacérès, *Mémoires inédits*, 1:464n; Boulay de la Meurthe, *Théorie constitutionnelle*, 48.

10. Boulay de la Meurthe, *Théorie constitutionnelle*, 71.

11. Reinhard, *Femme de diplomate*, 102-103.

12. *Diplomate*, 23 de frimario del año VIII, en Aulard, *Paris sous le Consulat*, 1:50.

13. P. J. B. Buchez y P. C. Roux, *Histoire parlementaire de la Révolution française*, 40 vols. (París: Paulin, 1834-1838), 38:301; A.-C. Thibaudeau, *Mémoires sur le Consulat* (París: Ponthieu, 1827), 109; Jacques Godechot, ed., *Les constitutions de la France depuis 1789* (París: Garnier-Flammarion, 1970), 161; *Journal des hommes libres*, 27 de frimario del año VIII, en Aulard, *Paris sous le Consulat*, 1:58; *Gazette de France*, 30 de diciembre de 1799.

14. Isser Woloch, *The New Regime* (Nueva York: W. W. Norton, 1994), 109.

15. Citas en Philip Dwyer, *Citizen Emperor: Napoleon in Power* (New Haven, CT: Yale University Press, 2013), 15; Reinhard, *Femme de diplomate*, 114.

16. *Publiciste*, 20 de pluvioso del año VIII, en Aulard, *Paris sous le Consulat*, 1:143.

17. Citas en Jean Vidalenc, *Les Émigrés français, 1789-1825* (Caen: Ozanne, 1963), 133; Dwyer, *Citizen Emperor*, 79; Thierry Lentz, *Le Grand Consulat, 1799-1804* (París: Fayard, 1999), 220, 247.

18. Thibaudeau, *Mémoires sur le Consulat*, 2:29.

19. Citas en Andrew Jainchill, *Reimagining Politics After the Terror: The Republican Origins of French Liberalism* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008), 256, 281; K. Steven Vincent, *Benjamin Constant and the Birth of French Liberalism* (Nueva York: Palgrave Macmillan, 2011), 117.

20. Citas en Lentz, *Grand Consulat*, 295.

21. Citas en Jeremy D. Popkin, *A Concise History of the Haitian Revolution* (Malden MA: Wiley-Blackwell, 2012), 105.

22. Thibaudeau, *Mémoires sur la Consulat*, 119.

23. Citas en David Geggus, ed., *The Haitian Revolution: A Documentary History* (Indianápolis: Hackett, 2014), 160-162, y Frédéric Régent, *Esclavage, métissage, liberté: La Révolution française en Guadeloupe, 1789-1802* (París: Grasset, 2004), 394.

24. Citas en *Lettres du Général Leclerc*, ed. Paul Roussier (París: Société de l'histoire des colonies françaises, 1937), 263-274; *De l'affranchissement des noirs, ou Observations sur la loi du 16 pluviôse* (París, s. f.).

25. Claude Wanquet, *La France et la première abolition de l'esclavage, 1794-1802* (París: Karthala, 1998), 646; Yves Bénot y Marcel Dorigny, eds., *Rétablissement de l'esclavage dans les colonies françaises* (París: Maisonneuve et Rose, 2004), 564; Norbert Thoret, *La Vie aventeureuse de Norbert Thoret, dit «L'Américain»* (París: Éditions du Port-au-Prince, 2007), 26.

26. Laurent Dubois, *A Colony of Citizens: Revolution and Slave Emancipation in the French Caribbean, 1787-1804* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2004), 400.

27. Christian Sorrel, ed., *Les carnets «retrouvés» du Curé Molin: Un prêtre dans la tourmente* (Montmélian: La Fontaine de Siloë, 2008), 285-286; Rocquain, *État de la France*, 148, 150.

28. Citas en Nigel Aston, *Religion and Revolution in France, 1780-1804* (Washington, DC: Catholic University Press, 2000), 320.

29. Citas en Rafe Blaufard, *Napoleon: Symbol for an Age* (Nueva York: Bedford / St. Martin's Press, 2008), 62; Thibaudeau, *Mémoires sur le Consulat*, 2:152-153.

30. Sorrel, ed., *Carnets*, 320; Report of Lacuée, en Rocquain, *État de la France*, 253-254.

31. François-Yves Besnard, *Souvenirs d'un nonagénaire: Mémoires de François-Yves Besnard*, 2 vols. (París: H. Champion, 1880), 1:197-198; Jacques-Louis Ménétra, *Journal of My Life*, ed. Daniel Roche, trad. Arthur Goldhammer (Nueva York: Columbia University Press, 1986), 217; Henry Redhead Yorke, *Letters from France, in 1802* (Londres: H. D. Symonds, 1804), 269.

32. Rodney Dean, *L'église constitutionnelle, Napoléon et le concordat de 1801* (París: A. y J. Picard, 2004), 496; citas en Dwyer, *Citizen Emperor*, 83; Pigault-Lebrun, *Le citateur* (París: Biblioteca Nacional, 1888 [1803]), 1; citas en Martin S. Staum, *Minerva's Message: Stabilizing the French Revolution* (Montreal: McGill-Queen's University Press, 1996), 226.

33. Citas en Lentz, *Grand Consulat*, 321; Cambacérès, *Mémoires*, 1:619.

34. Citas en Lentz, *Grand Consulat*, 338-339.

35. Citas en ibid., 396.

36. Jean-Baptiste Say, *Traité d'économie politique*, 2 vols. (París: Crapelet, 1803), 1:xviii.

37. Citas en Suzanne Desan, *The Family on Trial in Revolutionary France* (Berkeley: University of California Press, 2004), 299.

38. Citas en Maria Fairweather, *Madame de Staël* (Londres: Constable, 2005), 275; Fanny Raoul, «Opinion d'une femme sur les femmes», en Geneviève Fraisse, ed., *Opinions des femmes, de la veille au lendemain de la Révolution française* (París: Côté-femmes, 1989), 155.

39. Citas en Henri Fauville, *La France de Bonaparte vue par les visiteurs anglais* (Aix-en-Provence: Édisud, 1989), 166.

40. Citas en Lentz, *Grand Consulat*, 427.

41. Citas en Fauville, *La France de Bonaparte*, 192, 196.

42. Citas en Lentz, *Grand Consulat*, 534.

43. Lentz, *Grand Consulat*, 537, 550.

44. Staël, *Considérations sur la Révolution française*, 396; citado en Lentz, *Grand Consulat,* 551.

45. *Moniteur*, 16 de floreal del año XIII (6 de mayo de 1804), citado en Lentz, *Grand Consulat*, 562.

46. Citas en Lentz, *Grand Consulat*, 581; Dwyer, *Citizen Emperor*, 163.

47. Citas en Dwyer, *Citizen Emperor*, 166.

48. Ménétra, *Journal*, 237.

49. Citas en Godechot, *Constitutions de la France*, 227.